

Universidad Católica de Santa María

Escuela de Postgrado

Maestría en Derecho de Familia



**“TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL MARCO DE
LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS 2006-2015”**

Tesis presentada por la Bachiller:

Ponce Aguilar, Andrea Carola

Para optar el Grado Académico de

Maestro en Derecho de Familia

Asesora:

Dra. Aquize Cáceres, Rocío del Milagro

Arequipa – Perú

2019

Lev. observación

INFORME SOBRE BORRADOR DE TESIS PRESENTADO POR LA BACHILLER
ANDREA CAROLA PONCE AGUILAR


A: Señor Dr. José Antonio Villanueva Salas

De: Dra. Rocío del Milagro Aquize Cáceres

Fecha: 28 de agosto del 2019

Materia: Aprobación de borrador de tesis

Señor Dr., luego de revisado el borrador de tesis de la Bachiller ANDREA CAROLA PONCE AGUILAR, titulado: "TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL MARCO DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 2006-2015", cconsideramos que las observaciones que se han realizado han sido subsanadas, por tanto, se aprueba el borrador presentado, pudiendo proceder a su sustentación.



Dra. Rocío del Milagro Aquize Cáceres

D.N.I. 29593836



DICTÁMEN

(Borrador de Tesis)

Al : **Doctor Hugo Tejada Pradell**
Director de la Escuela de Postgrado

Del : Dr. Eliseo Chávez Chávez

Asunto : Dictamen del Proyecto de Tesis: "TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL MARCO DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 2006-2015".

Presentado : Por la Bachiller, **Andrea Carola, Ponce Aguilar**, para optar el Grado Académico de **MAESTRO EN DERECHO HUMANOS**

Expediente : N° 20170000033903

Fecha : 07 de Setiembre del 2017

.....

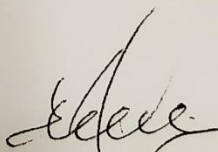
Es grato dirigirme a su persona, para saludarlo y en referencia al Borrador de Tesis presentada por la Srta. Bachiller Andrea Carola, Ponce Aguilar, el cual ha sido revisado, y que presenta algunas observaciones, siendo las más importantes las siguientes:

- Tener cuidado en la formalidad del contenido de la carátula. (por ej. maestro en lugar de Magíster) Tanto en la carátula del proyecto como de la Tesis
- Lo diferentes ítems, del índice deben estar compaginados. Se sugiere que hayan dos Capítulos: uno del marco conceptual y el otro de los resultados, en este último contenga Las sentencias emitidas de la Corte Interamericana y el análisis se de los mismas
- La anotación de cuadros debe remplazarse por Tablas
- En algunos cuadros, caso del N° 02 y 08 entre otros deberían anotarse los países involucrados, para darle más consistencia a la interpretación de resultados.
- Al final de la presentación de los resultados, serían conveniente agregar sobre: Apreciación y discusión de los resultados en una o dos páginas.
- Tanto las conclusiones como las sugerencias deben enumerarse en forma cualitativa como por ejemplo: PRIMERA, SEGUNDA, ETC.
- En la mayoría de las tablas no se hacen las interpretaciones, dado que las que se han presentado son descripciones.
- Revisar las sugerencias, las mismas que deben guardar coherencia con las conclusiones.
- En el Proyecto, faltan el Cronograma de elaboración del trabajo, así como el cuadro relacionado a los gastos en recursos para la tesis.

Una vez subsanadas las observaciones, puede pasar a la fase de sustentación del trabajo, no necesitando de un nuevo dictamen, salvo mejor parecer.

Es todo cuanto informo a Usted.

Atentamente.



Dr. Eliseo Chávez Chávez

Arequipa, 22 de agosto de 2019

Señor Doctor Ph.D.

JOSÉ ANTONIO VILLANUEVA SALAS

Director de la Escuela de Post Grado de la

Universidad Católica de Santa María de Arequipa

CIUDAD.

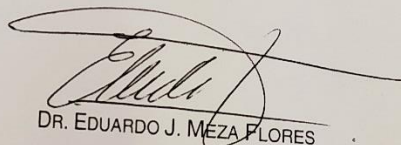
Referencia: Dictamen borrador de tesis

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con la finalidad de hacer de vuestro conocimiento el Dictamen recaído en borrador de tesis para optar el grado de maestra en Derecho de Familia, titulado: "Tratamiento de la violencia contra la mujer en el marco de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 2006-2015", presentado por la bachiller Andrea Carola Ponce Aguilar.

Habiéndose subsanado las observaciones formuladas, se aprueba el borrador presentado pudiendo proceder a su sustentación oral.


Es cuanto, tengo a bien informar a Ud.

Atentamente;



DR. EDUARDO J. MÉZA FLORES





*A mi hijo quien llegó a mi vida mientras desarrollaba esta tesis
para darme una felicidad que no conocía.*

*A mi familia que siempre está para darme la mano, especialmente
cuando necesitaba de tiempo.*

“No se puede naturalizar la violencia hacia las mujeres, sosteniendo una cultura machista que no asume el rol protagónico de la mujer dentro de nuestras comunidades”.

“No nos es lícito mirar para otro lado y dejar que tantas mujeres, especialmente adolescentes sean pisoteadas en su dignidad”

Papa Francisco

“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres.”

Rosa Luxemburgo

INDICE GENERAL

	PÁGINA
RESUMEN	
ABSTRACT	
INTRODUCCIÓN	1
CAPITULO PRIMERO: MARCO TEÓRICO	
1. SUBCAPITULO PRIMERO: VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	3
1.1.Violencia	3
1.2.La violencia contra la mujer como fenómeno social	5
1.3.Violencia contra la mujer por razones de genero	7
1.4.Violencia contra la mujer como concepto	8
1.5.Tipos de violencia o manifestaciones de la violencia	10
1.5.1. Violencia física	10
1.5.2. Violencia psicológica	11
1.5.3. Violencia sexual	13
1.5.4. Violencia económica	15
1.5.5. Violencia patrimonial	18
1.5.6. Violencia simbólica	19
1.6.Circunstancias en las que se desarrolla la violencia contra la mujer	20
1.6.1. Masacre	20
1.6.2. Detención arbitraria.-	21
1.6.3. Desaparición forzada	22
1.6.4. Tortura	24
	27

2. SUB CAPITULO SEGUNDO: CONVENCIÓN PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER – CONVENCIÓN DE BELEM DO PARÁ

2.1. Convención de Belem Do Pará: Antecedentes	27
2.2. La convención en si misma	28
2.3. Ratificación de la Convención por los países parte de la organización de estados americanos	31
2.4. Otros instrumentos internacionales de prevención, sanción y erradicación de violencia contra la mujer	32
2.4.1. Convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer	32
2.4.2. El convenio del consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica	33
2.4.3. Protocolo para el capítulo africano sobre derechos humanos para las mujeres africanas	34
2.5. Legislación internacional de relevancia relacionada con la violencia contra la mujer	35
2.5.1. Convención americana de derechos humanos	35
2.5.2. Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura	38
2.5.3. Convención interamericana sobre desaparición forzada de personas	38
2.5.4. Convención por los derechos del niño, niña y adolescente	39
2.6. Procedimiento ante la corte interamericana de derechos humanos	41

3. SUBCAPITULO TERCERO: SENTENCIA EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS SOBRE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER ENTRE LOS AÑOS 2006 AL 2015

3.1. Ríos Vs. Venezuela	42
3.1.1. Fecha	42
3.1.2. Presentación del caso por la Comisión Interamericana De Derechos Humanos A La Corte	42

3.1.3. Víctimas	43
3.1.4. Hechos	43
3.1.5. Afectación de derechos	48
3.1.6. Puntos resolutivos	50
3.1.7. Comentario	50
3.2. Perozo Vs. Venezuela	53
3.2.1. Fecha	53
3.2.2. Presentación del caso por la Comisión Interamericana De Derechos Humanos	53
3.2.3. Víctimas	54
3.2.4. Hechos	54
3.2.5. Afectaciones de derechos	63
3.2.6. Puntos resolutivos	66
3.2.7. Comentario	66
3.3. Penal Castro Castro Vs. Perú	67
3.3.1. Fecha	67
3.3.2. Presentación del caso por la Comisión Interamericana De Derechos Humanos	67
3.3.3. Víctimas	68
3.3.4. Hechos	68
3.3.5. Afectaciones de derechos	81
3.3.6. Puntos resolutivos	91
3.3.7. Comentario	91
3.4. Caso J. Vs. Perú	95
3.4.1. Fecha	95
3.4.2. Presentación del caso por la Comisión Interamericana De Derechos Humanos a la corte	95
3.4.3. Víctimas	96
3.4.4. Hechos	96
3.4.5. Afectaciones de derechos	106
3.4.6. Puntos resolutivos	117

3.4.7. Comentario	118
3.5. Espinoza Gonzales Vs. Perú	120
3.5.1. Fecha	120
3.5.2. Presentación del caso por la Comisión Interamericana De Derechos Humanos a la corte	120
3.5.3. Víctimas	121
3.5.4. Hechos	121
3.5.5. Afectaciones de derechos	129
3.5.6. Puntos resolutivos	154
3.5.7. Comentario	155
3.6. Gelman Vs. Uruguay	158
3.6.1. Fecha:	158
3.6.2. Presentación del caso ante la corte por la Comisión Interamericana De Derechos Humanos	158
3.6.3. Víctimas	160
3.6.4. Hechos	161
3.6.5. Afectación de derechos	168
3.6.6. Puntos resolutivos	169
3.6.7. Comentario	169
3.7. Masacres De El Mozote Y Lugares Aledaños Vs. El Salvador	172
3.7.1. Fecha	172
3.7.2. Presentación del caso de parte de la Comisión Interamericana De Derechos Humanos	172
3.7.3. Víctimas	174
3.7.4. Hechos	174
3.7.5. Afectaciones de derechos	184
3.7.6. Puntos resolutivos	199
3.7.7. Comentario	199
3.8. González y otras (“campo algodoner”) vs. México	201
3.8.1. Fecha	201
3.8.2. Presentación del caso ante la corte por la Comisión Interamericana De Derechos Humanos	201
3.8.3. Hechos	202

3.8.4. Afectación de derechos	207
3.8.5. Puntos resolutivos	222
3.8.6. Comentario	223
3.9. Fernández Ortega Y Otros Vs. México	225
3.9.1. Fecha	225
3.9.2. Presentación del caso ante la corte por la Comisión Interamericana De Derechos Humanos	225
3.9.3. Hechos	226
3.9.4. Afectación de derechos	230
3.9.5. Puntos resolutivos	245
3.9.6. Comentario	246
3.10. Rosendo Cantú Y Otra Vs. México	249
3.10.1. Fecha	249
3.10.2. Presentación del caso ante la corte por la Comisión Interamericana De Derechos Humanos	249
3.10.3. Hechos	250
3.10.4. Afectación de derechos	254
3.10.5. Puntos resolutivos	267
3.10.6. Comentario	267
3.11. La Masacre De Las Dos Erres Vs. Guatemala	270
3.11.1. Fecha	270
3.11.2. Presentación del caso ante la corte por la Comisión Interamericana De Derechos Humanos	270
3.11.3. Víctimas	271
3.11.4. Hechos	271
3.11.5. Afectaciones de derechos	277
3.11.6. Puntos resolutivos	283
3.11.7. Comentario	284
3.12. Masacres de río negro vs. Guatemala	286
3.12.1. Fecha	286
3.12.2. Presentación del caso ante la corte por la comisión interamericana de derechos humanos	286
3.12.3. Víctimas.	287

3.12.4. Hechos	288
3.12.5. Afectación de derechos	298
3.12.6. Puntos resolutivos	309
3.12.7. Comentario	310
3.13. Veliz Franco Y Otros Vs. Guatemala	312
3.13.1. Fecha	312
3.13.2. Presentación del caso por la Comisión Interamericana De Derechos Humanos	312
3.13.3. Víctimas	313
3.13.4. Hechos	313
3.13.5. Afectaciones de derechos	319
3.13.6. Puntos resolutivos	338
3.13.7. Comentario	338
3.14. Velásquez Paiz Y Otros Vs. Guatemala	341
3.14.1. Fecha:	341
3.14.2. Presentación del caso de parte de la Comisión Interamericana De Derechos Humanos ante la corte	341
3.14.3. Hechos	343
3.14.4. Afectación de derechos	347
3.14.5. Puntos resolutivos	364
3.14.6. Comentario	365

CAPITULO SEGUNDO: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. Introducción	367
1.2. Sobre los países demandados en las sentencias bajo análisis pertenecientes a la organización de estados americanos que ratificaron la Convención De Belem Do Para	368
Tabla N° 01: Países demandados	368
Grafico N°01: Países demandados	368
Tabla N°02: Relación entre países demandados y no demandados que conforman la organización de estados americanos	370
Grafico N° 02: Relación entre países demandados y no demandados	370

que conforman la organización de estados americanos	
Tabla N° 03: Relación entre países demandados y no demandados que ratificaron la convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer	371
Grafico N° 03: Relación entre países demandados y no demandados que ratificaron la convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer	371
1.3. Sobre la relación entre la fecha de ratificación por los países demandados de la Convención De Belem Do Para, la fecha que ocurrieron los hechos y la fecha de emisión de la sentencia por la corte interamericana de derechos humanos	373
Tabla N° 04: Fecha que los países demandados ratificaron la Convención De Belem Do Pará	373
Grafico N°04: Línea de tiempo sobre ratificación de la Convención Belem Do Para por países demandados	373
Tabla N° 05: Fechas de las sentencias en análisis	376
Grafico N° 05: Línea de tiempo conforme a la fecha de emisión de las sentencias	377
Tabla N° 06: Fecha de los hechos de origen	378
Grafico N° 06: Línea de tiempo sobre los hechos materia de las sentencias	379
Tabla N° 07: ¿El país demandado había ratificado la convención a la fecha de ocurridos los hechos?	381
Grafico N° 07: ¿El país demandado había ratificado la convención a la fecha de los hechos?	382
1.4. Sobre las afectaciones denunciadas en las sentencias materia de análisis	385
Tabla N° 08: Tipo de afectación denunciada en cada sentencia	385
Grafico N° 08: Tipo de afectación denunciada en cada sentencia	387
Tabla N° 09: Cantidad de afectaciones denunciadas en cada sentencia	388
Grafico N° 09: Cantidad de afectaciones denunciadas por sentencia	388
Tabla N° 10: Tipos de afectaciones denunciadas en las sentencias	390
Grafico N° 10: Tipos de afectaciones encontradas en las sentencias	391
1.5. Sobre la relación entre víctimas y víctimas mujeres en las sentencias	391

materia de investigación	
Tabla N° 11: Cantidad de víctimas por sentencias	393
Grafico N° 11: Relación entre cantidad de víctimas y víctimas mujeres en las sentencias	394
1.6. Sobre las afectaciones que se resolvieron en las sentencias	396
Tabla N° 12: Tipos de afectación contra la mujer encontrados en las sentencias	396
Grafico N° 12: Tipo de afectaciones sentenciadas	397
Tabla N° 13: Cantidad de afectaciones contra la mujer encontrados en cada sentencia	399
Grafico N° 13: Cantidad de afectaciones contra la mujer por sentencia	399
Tabla N° 14: Tipos de afectaciones por las que fueron sentenciados	401
Grafico N° 14: Tipos de afectaciones por las que se sentenciaron	401
1.7. Sobre el uso de las normas de rango internacional	403
Tabla N° 15: Artículos de la Convención De Belem Do Pará que fueron utilizados en las sentencias	403
Grafico N° 15: Uso de los artículos señalados en las diferentes sentencias	403
1.8. Sobre las convenciones internacionales relacionadas en el análisis de las sentencias	405
Tabla N° 16: Convenciones internacionales analizadas en las sentencias en concordancia con la Convención De Belem Do Para	405
Grafico N° 16: Convenciones internacionales analizadas en las sentencias en concordancia con la Convención De Belém Do Pará	406
Tabla N° 17: Análisis adicional de las convenciones en cada sentencia	408
Grafico N° 17: Uso de convenciones adicionales a la Convención Belem Do Para en las sentencias	408
Tabla N° 18: Cantidad de sentencias donde se utilizó cada una de las convenciones adicionales	411
Grafico N° 18: Cantidad de sentencias donde se usó cada una de las convenciones adicionales	411
1.9. Sobre la responsabilidad a los que hace referencia las sentencias	413
Tabla N° 19: ¿La corte encontró responsable al estado acusado en	413

todos los procesos?	
Grafico N° 19: ¿La corte encontró responsable al estado acusado en todos los procesos?	413
1.10. Sobre el hecho que se haya sentenciado a los responsables por los hechos en sus países de origen	415
Tabla N° 20: ¿Alguno de los estados sentenciados ha sentenciado a los responsables de los hechos?	415
Grafico N° 20: ¿Alguno de los estados sentenciados ha sentenciado a los responsables de los hechos?	416
1.11. Apreciación y discusión de los resultados	418
CONCLUSIONES	420
SUGERENCIAS	423
PROPUESTA DE INTERVENCION:	424
BIBLIOGRAFIA	430
ANEXOS::	438
PLAN DE TESIS	

RESUMEN

La violencia contra la mujer es un problema de derechos humanos, tiene relación con la violencia de género, pero esta especie de violencia busca identificar específicamente la violencia dirigida al sexo femenino y la que sufren las mujeres por su condición de tales; es por ello que de un tiempo a esta parte se ha vuelto un tópico recurrente por la intención de erradicar las diferentes manifestaciones de este mal.

La Organización de Estados Americanos aprobó la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) que muchos países del Continente Americano han suscrito y ratificado, por lo que su aplicación debe darse dentro de sus jurisdicciones, sin embargo algunos países suscriptores fueron demandados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por presunta contravención a la Convención, de los cuales proceden las sentencias materia de investigación de la presente tesis.

Dentro de esta investigación se evalúa catorce sentencias emitidas en un rango de diez años por la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se denunciaron actos de violencia contra la mujer y estos se interrelacionan con otros actos que también transgreden derechos humanos, por lo que se aprecia el análisis de otras Convenciones internacionales que de igual manera se tienen en cuenta para lograr la protección de las mujeres americanas.

PALABRAS CLAVE

- Violencia contra la Mujer
- Estereotipo
- Debida diligencia
- Convención Belém do Pará
- Corte Interamericana de
Derechos Humanos

ABSTRACT

Violence against women is a human rights problem, has relation with violence of gender but this kind of violence seeks to identify specifically the violence directed to the female sex and the one that women suffer for their condition of such; that's why for some time now this is a recurrent topic due to the intention to eradicate the different manifestations of this misfortune.

The Organization of American States approved the Convention to prevent, sanction and eradicate Violence against women (Convention of Belém do Pará) that many American countries have signed and ratified, for which its use has to be done within their jurisdictions, however many subscribing countries were sued before the Inter-American Court of Human Rights for a supposedly breach to the Convention, from which the sentences matter of the research of this thesis proceed.

Within this research fourteen sentences are evaluated, emitted in a rank of ten years by the Inter-American Court of Human Rights where acts of violence against women were reported and are related with other acts that also transgress human rights, for what the analysis of other International Conventions is appreciated and likewise are been applied to achieve the protection of American women

KEY WORDS

- Violence against women
- Estereotipe
- Due Diligence
- Belém do Pará Convention
- Inter-American Court of Human Rights

INTRODUCCIÓN

Pongo a consideración de la Escuela de Post-grado la presente tesis denominada “TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL MARCO DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 2006-2015”, a fin de poder ser considerada para el grado de Maestra en Derecho de Familia.

Esta tesis se realiza por los cuestionamientos de la bachiller respecto a cómo se trata la violencia contra la mujer en ámbitos internacionales dado que esta viene desarrollando su profesión proyectando resoluciones que tienen que ver sobre violencia contra la mujer en ámbitos domésticos. Es así que esta investigación permite entender que la violencia contra la mujer se puede dar en muchas circunstancias siendo que cada una de las sentencias nos trae aspectos nuevos a tener en cuenta, de tal forma que se toma en cuenta jurisprudencia internacional a ser aplicada en procesos nacionales.

Al efecto se ha planteado en la tesis como hipótesis la probabilidad que para evitar la impunidad la Corte Interamericana de Derechos Humanos se haya basado no solo en la Convención de Belem do Pará sino en otros instrumentos internacionales al tratar la violencia contra la mujer en las sentencias emitidas entre el 2006 y 2015, ello porque existen pronunciamientos de la Corte nombrada sobre hechos ocurridos antes de la Ratificación de la Convención por algunos de los Estados Denunciados en las sentencias que compete a ellos.

En ese sentido el objetivo general propuesto consiste en: “Establecer como es tratada la violencia contra la mujer en el marco de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre los años 2006 y 2015”. En tanto que los objetivos específicos son: “a) Estudiar la violencia contra la mujer a nivel internacional; b) Analizar los tipos de violencia contra la mujer que existen y los diversos contextos en las que puede desarrollarse; c) Establecer el uso de la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer como marco legal en las sentencias que refieren a hechos de violencia contra la mujer en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los aspectos jurídicos que se desprenden de tales sentencias; d) Conocer cuáles son las diferencias entre

las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre los años 2006 al 2015, respecto de violencia contra la mujer y cómo se resolvieron; e) Conocer cuáles son las coincidencias o semejanzas entre las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre los años 2006 al 2015, respecto de violencia contra la mujer y cómo se resolvieron; f) Identificar las circunstancias en las que se desarrolla la violencia contra la mujer en cada sentencia y los actores que la generaron; g) Determinar si entre las sentencias emitidas se ha logrado distinguir entre lo que es violencia por razón de género y la violencia por razones diferentes a ello; h) Estudiar la forma de subsunción de los hechos de violencia contra la mujer al marco legal internacional que maneja la corte interamericana de derechos humanos”

La tesis se divide en dos capítulos, el primero comprende todo el marco teórico y segundo los resultados de la investigación, es así que dentro del primer capítulo existen tres subcapítulos el primero de ellos se denomina “violencia contra la mujer” donde se hace un desarrollo del concepto de violencia contra la mujer y las diferentes manifestaciones que tiene. En el segundo subcapítulo se hace el desarrollo de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, y otras Convenciones Internacionales que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene en cuenta para emitir las sentencias en análisis. En el tercer subcapítulo se hace el desarrollo de las sentencias materia de análisis en esta tesis las cuales fueron escogidas en diez años de sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han sido elegidas en base a los procesos sentenciados sobre la Convención de Belem do Pará, siendo que se revisan en cada una lo resaltante respecto de la violencia contra la mujer.

En el segundo capítulo que tiene que ver con los resultados, se hace la comparación de las sentencias emitidas por la Corte a fin de revisar las semejanzas y diferencias entre estas, siendo que este capítulo consta de veinte tablas y veinte gráficos para poder llegar a desplegar la información obtenida de las sentencias estudiadas.

Por último, no falta en esta tesis la obtención de conclusiones y sugerencias así como una propuesta de intervención para difundir los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos donde se ha tratado la Violencia contra la Mujer a la luz de la Convención de Belém do Pará.

Andrea Ponce Aguilar

CAPITULO PRIMERO

MARCO TEÓRICO

1. SUBCAPITULO PRIMERO

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

1.1. VIOLENCIA

La violencia es algo que percibimos todos los días, se encuentra en las cosas tanto cercanas como alejadas de nosotros, pero igual las distinguimos, está en nuestros hogares, en las escuelas, en nuestros centros laborales, en los lugares de recreación, en las calles, en los medios de comunicación, la observamos a toda hora, porque es parte de la condición humana, es un elemento inevitable. Sin embargo a pesar de ser algo tan innato en la sociedad con causas y consecuencias en continuo estudio son múltiples los conceptos y definiciones que se tienen respecto de la violencia.

La violencia conforme a la Real Academia de la Lengua Española indica que algo tiene la “calidad de violento” y que es la “acción y efecto de violentar”, y violentar viene a ser “Aplicar medios violentos a cosas o personas para vencer su resistencia”¹.

Asimismo conforme a Vidal Fernández dice que:

*“la violación de la integridad de la persona, que suele ejercerse cuando interviene la fuerza física o la amenaza de su uso, pero también cuando se actúa en una secuencia que causa indefensión en el otro”*²

Es decir, considera que es parte de un proceso donde pueden actuar muchas personas en diferentes momentos, o puede generarse por una única acción que le permite a la persona

¹ Real Academia Española: definición de violencia y violentar: <http://dle.rae.es/?id=brhWhJl> 05 de diciembre del 2016 15.00

² VIDAL FERNÁNDEZ, Fernando, 2008, Capítulo I: LOS NUEVOS ACELERADORES DE LA VIOLENCIA REMODERNIZADA, I Edición, en NUEVOS ESCENARIOS DE VIOLENCIA, coordinadora García – Mina Freire, Ana, Universidad Pontificia de Madrid, Madrid, p. 17.

que lo genera dominio o control, o permite a través de esta violencia un medio para lograr algo accionando sobre la persona violentada.

Con un mejor acercamiento se dice que:

“conceptualmente la violencia se presenta como un estadio más avanzado de la agresividad. No hay violencia en sentido técnico, por una agresión aislada, esporádica, sino que esa agresión debe producirse en un contexto de sometimiento de la víctima. El agresor -sujeto dominante- se mueve en un ambiente en el cual la víctima se encuentra subordinada. Ello se produce paulatinamente en un contexto de continua agresión y correlativo deterioro de la personalidad de la víctima. En este sentido puede hablarse de relaciones de dominación”³

De otro lado la Organización Mundial de la Salud también da una definición de violencia que es más cercano al que tiene que ver con el tema de esta tesis:

“La violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte.”⁴

Es así que conforme al Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud emitido por la Organización Mundial de la Salud refiere que existen niveles de la violencia:

- Individual:

“Se examinan los factores biológicos y de la historia personal que aumentan la probabilidad de que una persona se convierta en víctima o perpetradora de actos violentos. Entre los factores que es posible medir se encuentran las características demográficas (edad, educación, ingresos), los trastornos psíquicos o de personalidad, las toxicomanías y los antecedentes de comportamientos agresivos o de haber sufrido maltrato.”⁵

- Relacional:

³ GORJÓN BARRANCO, María Concepción 2010, LA RESPUESTA PENAL FRENTE AL GÉNERO. UNA REVISIÓN CRÍTICA DE LA VIOLENCIA HABITUAL Y DE GÉNERO, Tesis doctoral, Universidad de Salamanca, Salamanca, p. 31 - 32

⁴ Organización Mundial de la Salud: <http://www.who.int/topics/violence/es/> 05 de diciembre del 2016 15.10

⁵ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2002, INFORME MUNDIAL SOBRE LA VIOLENCIA Y LA SALUD, I Edición, Organización Panamericana de la Salud, Washington, 2015, p. 4

“Se investiga el modo en que las relaciones con la familia, los amigos, la pareja y los compañeros influyen en el comportamiento violento, teniendo en cuenta a tal efecto factores como el hecho de haber sufrido castigos físicos severos durante la infancia, la falta de afecto y de vínculos emocionales, la pertenencia a una familia disfuncional, el tener amigos delincuentes o los conflictos conyugales o parentales.”⁶

- **Comunitario:**

“En este nivel se exploran los contextos comunitarios en los que se desarrollan las relaciones sociales, como las escuelas, los lugares de trabajo y el vecindario, y se intenta identificar las características de estos ámbitos que aumentan el riesgo de actos violentos (por ejemplo, la pobreza, la densidad de población, altos niveles de movilidad de residencia, la carencia de capital social o la existencia de tráfico de drogas en la zona).”⁷

- **Social:**

“Se centra en los factores de carácter general relativos a la estructura de la sociedad, como las normas sociales que contribuyen a crear un clima en el que se alienta o se inhibe la violencia, aunque también tiene en cuenta las políticas sanitarias, económicas, educativas y sociales que contribuyen a mantener las desigualdades económicas o sociales entre los grupos de la sociedad.”⁸

1.2.LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER COMO FENÓMENO SOCIAL

La violencia contra las mujeres aqueja a las mujeres en cualquier lugar, genera complicaciones en la salud de las féminas y produce inconvenientes para que ellas puedan actuar activamente en la sociedad, afecta que puedan disfrutar completamente de la salud sexual y reproductiva, además de sus derechos sexuales y reproductivos, siendo por ello uno de los orígenes de su sufrimiento físico y psicológico, tanto para ellas como para su entorno familiar.

⁶ Idem.

⁷ Idem.

⁸ Idem.

La violencia contra las mujeres no se constriñe a una cultura específica, ni siquiera a una región del mundo o país, tampoco a grupos exclusivos de mujeres. La raíz de la violencia contra la mujer se encuentra en la discriminación persistente contra estas.

“Las mujeres sufren de violencia desde que nacen hasta que mueren, tanto en tiempo de paz como en la guerra, las mujeres se enfrentan a la discriminación y la violencia del Estado, la comunidad y la familia. Cada año, millones de niñas y mujeres sufren violaciones y abusos sexuales a manos de familiares, hombres ajenos a la familia, agentes de seguridad o combatientes armados. Algunas formas de violencia, como los embarazos y los abortos forzados, la “quema de novias” y los abusos relacionados con la dote, son específicas de las mujeres. Otras, como la violencia en el ámbito familiar —conocida también como violencia doméstica—, tienen entre sus víctimas a un número desproporcionado de mujeres. Durante los conflictos armados, la violencia contra las mujeres suele usarse como arma de guerra para deshumanizarlas o para perseguir a la comunidad a la que pertenecen.”⁹

Estudios académicos nos otorgan importantes resultados para aproximarnos a las reales dimensiones de la violencia, es así que la violencia de pareja es actualmente uno de los problemas más serios que afecta nuestra sociedad, según las últimas investigaciones la tendencia de este fenómeno es mundial y las cifras vienen incrementándose rápidamente.

“Según el Estudio Multipaís sobre la Salud de la Mujer y la Violencia Doméstica que abarcó a más de 24,000 mujeres de 10 países de diversos entornos socioculturales, el porcentaje de mujeres que manifestó haber sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja a lo largo de su relación «oscilaba entre el 15% y el 71%, aunque en la mayoría de los entornos se registraron índices comprendidos entre el 24% y el 53%» (OMS, 2005, p. 18). El Perú —que fue uno de los países seleccionados en la muestra— registró una de las frecuencias más elevadas de violencia, el 69% de mujeres en el área rural y 51% en áreas urbanas indicaron haber sido víctimas de violencia física y/o sexual por parte de su pareja. Y según el reporte del Centro de Información de las Naciones Unidas (2007-2012) con respecto a las mujeres latinoamericanas, señala que «más de la mitad han sido objeto de agresiones en sus hogares» (Miljanovich et al., 2010, p.193). Las

⁹ Amnistía Internacional, “Esta en nuestras manos. No más violencia contra las mujeres”, Editorial Amnistía Internacional – EDAI, 2004, pp. 18 y 19.

estadísticas ofrecidas por diversas fuentes estarían mostrando el alto grado de incidencia de este fenómeno, y al parecer el Perú sería uno de los países con mayor nivel de actos de violencia intrafamiliar. El informe citado por la OMS lo ubicaría como el país con mayor prevalencia de mujeres entre 15 y 49 años que sufren violencia sexual en América Latina, con una tasa de 22.4 por cada 100,000 habitantes, ubicándose a nivel mundial solo por debajo de Etiopía y Bangladesh.”¹⁰

1.3. VIOLENCIA CONTRA LA MUJER POR RAZONES DE GENERO

“El género es una construcción cultural e histórica, que nos da cuenta de la simbolización cultural de la diferenciación anatómica que se va reproduciendo a través de las prácticas, ideas, discursos y representaciones sociales que condicionan la conducta objetiva y subjetiva de las personas en función a su sexo. Por lo tanto, se descarta que los hombres y mujeres sean producto de una realidad natural; por el contrario, somos producto de una interpretación histórica y cultural.”¹¹

En este orden de ideas el término violencia de género hace referencia a aquella violencia que hunde sus raíces en las definiciones y relaciones de género dominantes en una sociedad.

*“Desde este enfoque se pueden analizar diferentes formas de violencia, incluidas algunas que no tienen como víctima directa a una mujer pero que pueden explicarse, más adecuadamente, desde consideraciones de género.”*¹² *“Parte de la estructura patriarcal y está basada en las tradiciones, creencias y costumbres que favorecen y mantienen la desigualdad entre los sexos.”*¹³

Ambos sexos sufren de violaciones de derechos humanos, su impacto y su carácter varían de acuerdo con el sexo de la víctima. A lo que se añade que del conjunto de lesiones de los

¹⁰ CASTRO, Rodolfo J. y RIVERA, Renzo, Mapa de la violencia contra la mujer: La importancia de la familia, Universidad Católica San Pablo, Arequipa, Perú, Rev. Investig. (Arequipa. En línea) ISSN versión electrónica 2309-6691 Año 2015, Volumen 6, 101-125. p. 105

¹¹ FLORA TRISTAN, LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER: FEMINICIDIO EN EL PERÚ, 2005, I Edición, Amnistía Internacional – sección peruana, Lima, p. 10

¹² ESPINAR RUIZ, EVA, TESIS DOCTORAL: VIOLENCIA DE GENERO Y PROCESOS DE EMPOBRECIMIENTO, 2003, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Alicante, Alicante, p. 38

¹³ http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Violencia_Genero_Documentacion_Red_Ciudadana_folleto.pdf, 16/05/2017 23.16, p. 8

derechos que sufren las mujeres, así como las discriminaciones y abusos de los que son objeto se deben específicamente a su condición de tales, de mujeres.

“A pesar que existen factores como la etnia, la clase social, la preferencia sexual, las discapacidades y las afiliaciones políticas y religiosas, que inciden en la victimización de la población femenina, en general toda agresión perpetrada contra una mujer tiene alguna característica que permite identificarla como violencia de género.”¹⁴

Por ello en la violencia de género se refleja la asimetría existente en las relaciones de poder entre varones y mujeres, y que perpetúa la subordinación y desvalorización de lo femenino frente a lo masculino. Ésta se caracteriza por responder al patriarcado como sistema simbólico que determina un conjunto de prácticas cotidianas concretas, que niegan los derechos de las mujeres y reproducen el desequilibrio y la inequidad existentes entre los sexos. La diferencia entre este tipo de violencia y otras formas de agresión y coerción estriba en que en este caso el factor de riesgo o de vulnerabilidad es el solo hecho de ser mujer.

En este sentido:

“la violencia contra la mujer por razones de género obedece a una lógica jerarquizada entre los sexos, la cual es instaurada dentro de la cultura y la sociedad y es transmitida mediante discursos y representaciones; la constituyen todos aquellos comportamientos y acciones que violenten, dañen o perjudiquen la integridad de las mujeres, obedeciendo estas acciones a una racionalidad que discrimina a la mujer.”¹⁵

1.4. VIOLENCIA CONTRA LA MUJER COMO CONCEPTO

Como lo señala la Convención de Belém do Pará, la violencia contra la mujer no sólo constituye una violación de los derechos humanos, sino que es

“una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”, que “trasciende todos los

¹⁴ <http://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/3/27403/violenciadegennero.pdf>, CEPAL, VIOLENCIA DE GENERO: UN PROBLEMA DE DERECHOS HUMANOS, artículo virtual, p. 9

¹⁵ FLORA TRISTAN, Op. Cit., p. 10

sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases”¹⁶

La violencia contra las mujeres hace referencia a las formas de violencia cuyas víctimas son mujeres.

“Su estudio se centra en la determinación del grado de extensión en la sociedad, sus causas, explicaciones y efectos. No todos los estudios que se realizan en este ámbito aplican un enfoque de género (es decir, no todos tienen en cuenta las definiciones, identidades y relaciones de género).”¹⁷

Y es que

“la violencia específica contra las mujeres, utilizada como instrumento para mantener la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Comprende la violencia física, sexual y psicológica incluidas las amenazas, la coacción, o la privación arbitraria de libertad, que ocurre en la vida pública o privada y cuyo principal factor de riesgo lo constituye el hecho de ser mujer”¹⁸

Es por eso que la violencia es un problema de salud pública dado que

“la violencia ejercida en contra de la mujer, constituye un grave problema de salud pública y de violación sistemática de sus derechos humanos, que muestra en forma dramática los efectos de la discriminación y subordinación de la mujer por razones de sexo en la sociedad”¹⁹

¹⁶ Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Preámbulo.

¹⁷¹⁷ ESPINOZA RUIZ, EVA, Idem

¹⁸ Fernández- Alonso, Mª C. (Ed) (2003) Violencia Doméstica. Grupo de Salud Mental del PAPPS de la semiFYC. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo.[versión electrónica] http://www.msc.es/ciudadanos/violencia/docs/VIOLENCIA_DOMESTICA.pdf, 2003, p. 11-12

¹⁹ COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, ESTANDARES JURIDICOS VINCULADOS A LA IGUALDAD DE GENERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS: DESARROLLO Y APLICACIÓN, 2011, I Edición, OAS Cataloging-in-Publication Data, Canadá, p. 75

1.5. TIPOS DE VIOLENCIA O MANIFESTACIONES DE LA VIOLENCIA

1.5.1. VIOLENCIA FÍSICA

Es aquella que deja huella en el cuerpo, significando cualquier acto que genera daño no accidental, utilizando la fuerza física o cualquier tipo de objeto o arma que traiga como consecuencia lesiones internas, externas o ambas;

“comprenden desde bofetadas, puñetazos, estrangulación y patadas hasta golpes con bastones, porras o látigos, uso del fuego o de ácidos para causar dolor y daños de larga duración e incluso el homicidio”²⁰. Es “el ataque o acometimiento sobre el cuerpo, lo que supone una pérdida o inutilización de la sustancia corporal –v.gr. herir, golpear, amputar un miembro u órgano.”²¹

En tal sentido el Tribunal Constitucional hace referencia al derecho a la integridad física, por eso la define como aquella que

“presupone el derecho a conservar la estructura orgánica del ser humano; y, por ende, a preservar la forma, disposición y funcionamiento de los órganos del cuerpo humano y, en general, la salud del cuerpo. La afectación de la integridad física se produce cuando se generan incapacidades, deformaciones, mutilaciones, perturbaciones o alteraciones funcionales, enfermedades corpóreas, etc.”²²

En realidad es la principal causa de lesiones en las mujeres, que van desde pequeños cortes o contusiones hasta incapacidad severa y muerte. Las lesiones se dan en diferentes partes del cuerpo, aunque las más comunes son la cara, cuello, pechos y abdomen. Pero lamentablemente muchas mujeres no acuden para hacerse atender a instituciones de salud por vergüenza o por amenazas del agresor; no

²⁰ FLORA TRISTAN, Op. Cit., p. 11

²¹ La violencia doméstica, Análisis Sociológico, Dogmático y de Derecho Comparado. ESPINOZA CEBALLOS, Elena B. Marín. Editorial Comares S.L. Buenos Aires. p 202

²² Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Número 2333-2004-TC/HC, Fundamento Jurídico Número 2. La Constitución en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Sentencias Vinculadas con los artículos de la Constitución. Diálogo con la Jurisprudencia. Editorial Gaceta Jurídica. Primera Edición. Agosto, 2006, página 43

obstante, cuando deciden hacerlo, al regresan por mas atenciones de salud suelen ser con lesiones más graves.

1.5.2. VIOLENCIA PSICOLÓGICA

“La violencia psicológica consiste en toda acción u omisión cuyo propósito sea degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de la persona, por medio de la intimidación, manipulación, amenaza directa o indirecta, humillación, aislamiento, encierro o cualquier otra conducta u omisión que implique un perjuicio de la salud psicológica, el desarrollo integral o la autodeterminación del ser humano...”²³;

En consecuencia toda acción u omisión que dañe la autoestima, el desarrollo de la persona, que incluye los insultos constantes, la negligencia, la humillación, el aislamiento de los familiares y amigos, la destrucción de objetos apreciados, así como el amenazar y comparar es considerada como violencia familiar.

Generalmente la violencia psicológica se da a través de conductas verbales intencionales lo que lleva a consecuencias en la esfera emocional, es por ello que tiende a ser complicado de identificar porque su severidad se estima conforme al impacto sobre la víctima, en muchas oportunidades también este tipo de violencia va de la mano de violencia física, o la afectación no solo de la propia víctima sino de la amenaza de maltrato a seres queridos de la víctima, incluyendo la atribución de responsabilidad absoluta a la víctima en los episodios de maltrato. Puede indicarse que es un tipo de violencia más sutil, difícil de desnaturalizar porque no deja marca en el cuerpo y en la mayoría de casos ni los propios actores la identifican.

“Parte de las razones por las que este tipo de violencia es tomada como natural y por tanto invisible es que en situaciones de desigualdad, se considera normal que las personas de nivel “inferior” sean perjudicadas, no tomadas en cuenta, despreciadas, por no decir humilladas o agraviadas, con lo que una buena parte de los sentimientos que esta conducta genera en la víctima: agravio, enojo, humillación, quedan incluso para la misma persona

²³ Ayvar Roldán, Carolina. Violencia Familiar. Editorial Adrus. Arequipa, 2007, página 47, citando a Radda Barner.

que las sufre, fuera de su registro consciente. Como ejemplo, baste decir que en las entrevistas clínicas de mujeres que sufren violencia psicológica, cuando en una primera instancia se les pregunta si hay maltrato en su relación, es común que contesten “no, mi marido no me pega”²⁴.

En otro aspecto, la violencia psicológica o emocional contra la mujer ha recibido menos atención en las investigaciones sobre la violencia dentro de la pareja, porque la medición de este tipo de violencia es más difícil, pues los comportamientos concretos varían significativamente según los distintos escenarios, además no existe una noción común acerca de qué actos o combinación de actos, y con qué frecuencia, constituyen violencia emocional.

“En el estudio multipaís de la OMS sobre la violencia doméstica se comprobó que entre el 20% y el 75% de las mujeres habían experimentado uno o más actos de abuso emocional. En un estudio transversal multipaís basado en la población realizado en Chile, Egipto, Filipinas y la India se comprobó que la tasa de prevalencia durante toda la vida de la violencia psicológica grave oscilaba entre el 10,5% en Egipto y el 50,7% en Chile. En la primera encuesta nacional sobre la violencia contra la mujer realizada en Francia se comprobó que el 35% de las mujeres habían sido sometidas a presión psicológica por su pareja en un período de 12 meses. La definición de dicha presión comprendía los siguientes actos: intentos de controlar las actividades de la otra persona, imposición de autoridad o actitudes de denigración o desprecio. En el mismo período, el 4% habían experimentado chantaje emocional o injurias verbales, en particular insultos y amenazas. En una encuesta realizada en Alemania, el 42% de las entrevistadas declaró que había experimentado actos como intimidación y gritos agresivos, injurias, amenazas, humillación y “psicoterror”.²⁵

“La violencia psicológica se adentra en el terreno de lo subjetivo, de la vivencia interior; como observador externo es difícil de codificar, evaluar y establecer un umbral a partir del cual se considere que hace daño. No

²⁴ Fernández, C. (1990). El concepto de agresión en una sociedad sexista. En B. Maqueira y C. Sánchez (Eds.), *Violencia y sociedad patriarcal* (p.p.55-68). Madrid: Pablo Iglesias.

²⁵ NACIONES UNIDAS, PONER FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER: DE LAS PALABRAS A LOS HECHOS, 2006, I Edición, Publicación de las Naciones Unidas, Washington, p. 44-45

obstante, vale la pena reflexionar al respecto; un ejercicio valioso es planteado por Nogueiras en el que analiza algunas de las formas en que se da este tipo de violencia (tácticas) y sus efectos”²⁶:

TÁCTICAS Y EFECTOS DE LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA CONTRA LAS MUJERES²⁷

TÁCTICAS	EFECTOS
Amenazas	Miedo, terror, sumisión
Gritos, romper cosas	Intimidación
Desvaloración personal	Baja autoestima, inseguridad
Desvaloración de familia y amistades	Aislamiento
Demandas triviales	Polarización de la atención
Pequeñas concesiones	Confusión, dependencia emocional
Hacerse la víctima, culpar a la mujer	Impedir que haga algo para cambiar

1.5.3. VIOLENCIA SEXUAL

“La violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen en una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno”²⁸.

“La violación sexual no implica necesariamente una relación sexual sin consentimiento, por vía vaginal, como se consideró tradicionalmente. Por violación sexual también debe entenderse actos de penetración vaginales o anales, sin consentimiento de la víctima, mediante la utilización de otras

²⁶ Nogueiras, B. (2004). La violencia en la pareja. En C. Ruíz-Jarabo y P. Blanco (Eds.), *La violencia contra las mujeres: prevención y detección* (pp. 39-56). Díaz de Santos. Madrid.

²⁷ Idem.

²⁸ *Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 306*

*partes del cuerpo del agresor u objetos, así como la penetración bucal mediante el miembro viril”.*²⁹

*“La penetración vaginal se refiere a la penetración, con cualquier parte del cuerpo del agresor u objetos, de cualquier orificio genital, incluyendo los labios mayores y menores, así como el orificio vaginal. Esta interpretación es acorde a la concepción de que cualquier tipo de penetración, por insignificante que sea, es suficiente para que un acto sea considerado violación sexual”.*³⁰

A ello se agrega que

*“la violación sexual de una detenida por un agente del Estado es un acto especialmente grave y reprobable, tomando en cuenta la vulnerabilidad de la víctima y el abuso de poder que despliega el agente. Asimismo, la violación sexual es una experiencia sumamente traumática que puede tener severas consecuencias y causa gran daño físico y psicológico que deja a la víctima “humillada física y emocionalmente”, situación difícilmente superable por el paso del tiempo, a diferencia de lo que acontece en otras experiencias traumáticas”*³¹.

*“La violación sexual es un tipo particular de agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores. Dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho”.*³²

Es por eso que ciertos instrumentos internacionales resultan útiles para precisar y dar contenido a la obligación estatal reforzada de investigarlos con la debida diligencia. Entre otros,

²⁹ Ibid., p. 310

³⁰ Caso *J Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C No. 160, párr. 359

³¹ Ibid, p. 311

³² Caso *Fernández Ortega y otros. Vs. México, supra. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215, párr. 100

*“en una investigación penal por violencia sexual es necesario que: i) la declaración de la víctima se realice en un ambiente cómodo y seguro, que le brinde privacidad y confianza; ii) la declaración de la víctima se registre de forma tal que se evite o limite la necesidad de su repetición; iii) se brinde atención médica, sanitaria y psicológica a la víctima, tanto de emergencia como de forma continuada si así se requiere, mediante un protocolo de atención cuyo objetivo sea reducir las consecuencias de la violación; iv) se realice inmediatamente un examen médico y psicológico completo y detallado por personal idóneo y capacitado, en lo posible del sexo que la víctima indique, ofreciéndole que sea acompañada por alguien de su confianza si así lo desea; v) se documenten y coordinen los actos investigativos y se maneje diligentemente la prueba, tomando muestras suficientes, realizando estudios para determinar la posible autoría del hecho, asegurando otras pruebas como la ropa de la víctima, investigando de forma inmediata el lugar de los hechos y garantizando la correcta cadena de custodia, y vi) se brinde acceso a asistencia jurídica gratuita a la víctima durante todas las etapas del proceso”.*³³

Por último la Relatora Especial de la ONU para la Violencia contra las Mujeres ha establecido, refiriéndose a la violencia contra las mujeres en el contexto de un conflicto armado, que *“la agresión sexual a menudo se considera y practica como medio para humillar al adversario (...), las violaciones sexuales son usadas por ambas partes como un acto simbólico”*³⁴. Por ello se reconoce que la violencia sexual contra la mujer tiene consecuencias físicas, emocionales y

1.5.4. VIOLENCIA ECONÓMICA

“La violencia económica consiste en la inequidad del acceso a los recursos económicos que deberían ser compartidos entre hombre y mujer, en ese entendido contiene a todas las conductas que puedan ser de control de los

³³ Caso *J Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C No. 160, párr. 344

³⁴ O.N.U., Comisión de Derechos Humanos, 54º período de sesiones. *Informe presentado por la Sra. Radhika Coomaraswamy, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, de conformidad con la resolución 1997/44 de la Comisión*. Doc. E/CN.4/1998/54 del 26 de enero de 1998, párr. 12 - 14.

recursos económicos de los ingresos familiares, así como de información sobre tales recursos”³⁵.

Implica que el agresor genera el menoscabo en la libertad que tiene la víctima sobre los gastos para cubrir necesidades, y tenga que dar justificaciones constantes respecto a lo que hace o en lo que gasta; es decir no tiene disponibilidad de presupuesto de manera libre, incluso las mujeres trabajadoras que sufren este tipo de maltrato llegan a extremos como entregar cuentas de su sueldo o permitir la gestión completa del dinero por parte del agresor.

De otro lado también se aprecia falta de valoración del agresor sobre la labor doméstica que realiza la mujer entendiendo que es su obligación como mujer realizarla, minimizando el rol que tiene como ama de casa en las tareas que permiten el desarrollo de los miembros de la familia, porque con tal labor se alcanza el mantenimiento del hogar. Por ello estas mujeres no logran proyectarse profesionalmente por la opresión que sufren al no considerarse su bienestar, no otorgando apoyo para que consiga desarrollo profesional y personal.

El abuso económico no es inofensivo, porque quita a la mujer el derecho de subsistir que tiene, apoyado en la cultura que las educa para que piensen que es obligación masculina proveer y deber femenino, depender.

Del otro lado de esta figura está la

“del varón que no trabaja y que vive de lo que percibe la mujer, entonces la mujer trabaja dentro y fuera del hogar a pesar que es ella quien aporta la mayor cantidad de ingresos para sostener a la familia, ante ello el hombre utiliza diferentes métodos para que la mujer le entregue sus ingresos, como que no puede conseguir trabajo, o que le robaron o que tiene un proyecto prometededor, etc., cualquier motivo para que sea él quien controle y administre el dinero. O en el caso que el hombre si trabaja, no refiere cuanto es su ingreso, al punto que puede tener cuentas y bienes a nombre de terceras

³⁵ PONCE AGUILAR, Andrea Carola, LA VIOLENCIA ECONOMICA Y PATRIMONIAL, en la revista Justitia Familiae, Revista de las comisiones nacionales PpR Familia y de Implementación de la ley N° 30364 de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Año 1, N° 1, 2016, Lima, p. 273

personas para que pueda controlar sus ingresos y la víctima no tenga la posibilidad de cuestionar sus bienes, probablemente logrados dentro de matrimonio, y por ende de la sociedad conyugal”³⁶.

Añadido a lo explicado esta la falta de cumplimiento de las obligaciones alimentarias de los agresores con las víctimas o sus hijos, y lleva a que la mujer se exponga a ir donde el agresor para solicitar los alimentos y ante la negativa se genera la ansiedad de la mujer por no poder tener para subsistir junto a sus hijos momento que es aprovechado para maltratarla física o psicológicamente, incluyendo en muchos casos a los hijos como víctimas indirectas al presenciar tales actos. O si víctima y agresor viven juntos, este último intencionalmente desatiende necesidades como salud o educación de sus hijos, o deja de pagar los servicios básicos.

Entre las consecuencias por este tipo de violencia se encuentra la desvaloración que conlleva a baja autoestima, y afecta su desarrollo personal; es por eso que las mujeres que sufren este tipo de violencia se empobrecen aumentando su vulnerabilidad y la de sus hijos, que se incrementa cuando la mujer se separa del varón, por la creencia que lo hacen es para quitarles dinero, cuando la realidad es otra, tanto más que la mayoría paga el precio de haber realizado trabajo de ama de casa y no destacarse profesionalmente lo que no les da las armas para poder sobrevivir después de tal separación.

Por tanto conforme lo establece la Guía para la aplicación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer, es prioritaria la eliminación de la violencia contra las mujeres para su desarrollo igualitario porque

“La violencia impide que las mujeres contribuyan al desarrollo, y se benefician de él, al restringir sus opciones y limitar su capacidad para actuar. Más mujeres que hombres viven en la pobreza absoluta y el desequilibrio sigue aumentando con graves consecuencias para la mujer y sus hijos. Recae sobre la mujer una parte desproporcionada de los problemas

³⁶ Ibid, p. 274

que entraña hacer frente a la pobreza, la desintegración social, el desempleo, la degradación del medio ambiente y los efectos de la guerra”³⁷.

1.5.5. VIOLENCIA PATRIMONIAL

Previamente a detallar la definición de violencia patrimonial se debe entender el término patrimonio, que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es

“la hacienda que alguien ha heredado de sus ascendientes. Conjunto de los bienes y derechos propios adquiridos por cualquier título. Conjunto de bienes pertenecientes a una persona natural o jurídica, o a efectos a un fin, susceptibles de estimación económica”³⁸

“Es así que la violencia patrimonial consiste en la acción u omisión que con intención manifiesta busca la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de bienes, así como el daño, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de la víctima. En este tipo de violencia la afectación se da sobre cosas ciertas, es decir sobre bienes comunes o pertenencias”³⁹.

Se da cuando la pareja daña los bienes y pertenencias de la víctima, por ejemplo arruinando su ropa o escondiendo sus documentos personales, disponiendo sin permiso ni acuerdo de los enseres domésticos o bienes, siendo que este tipo de violencia se da en el seno de un matrimonio o convivencia.

También este tipo de violencia se evidencia cuando el agresor ingresa al domicilio de la víctima sin su consentimiento, o teniendo esta posesión de un inmueble es retirada del lugar indebidamente, inclusive a pesar que tiene una orden que el agresor no se acerque a esta, e incluye que el agresor destruya puertas, cerrojos o

³⁷ ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS, 2014 GUIA PARA LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, Documentos Oficiales de la OEA, Washington, p. 17

³⁸ www.rae.es. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, página web revisada el 15 de octubre del 2016 a las 20.00 horas

³⁹ PONCE AGUILAR, Andrea Carola, LA VIOLENCIA ECONOMICA Y PATRIMONIAL, Op. Cit. 276.

ventanas del inmueble, imponiendo su posesión sobre la que ya tiene la víctima, perturbando la posesión de esta sobre su inmueble. Igualmente se produce cuando estando ambas partes viviendo en un mismo inmueble el agresor ingresa sin permiso a la parte que le corresponde a la víctima, o desconecta la llave de agua o de luz afectando el devenir de la vida de la agraviada que pueden darse sin siquiera discusiones de por medio, sino solo con el apagar una palanca que interrumpa el uso de los servicios básicos.

Es solo necesario que la acción u omisión sea manifiestamente ilegítima y dolosa por parte del agresor, sin la necesidad de un resultado cierto, porque se busca coactar la autodeterminación de la víctima para que acepte el acto de violencia, como puede ser la pérdida de parte o toda la posesión después de múltiples veces que el agresor perturbo su propiedad, o quito ambiente por ambiente a la víctima, o fracturo cada uno de los candados de las puertas de la vivienda, o destruyo en varias oportunidades ventanas y puertas para ingresar y posteriormente salir del inmueble, todo para lograr la invasión del inmueble.

Lo que demuestra que estamos ante una violencia ejercida contra bienes o pertenencias con la intención de generar un menoscabo en el patrimonio de la víctima que la llevará a la pobreza, porque pierde bienes que ha logrado con su esfuerzo, lo que se hace evidente cuando en los casos de convivencia los bienes están inscritos solo a nombre de una de las partes, normalmente el varón cuando fue un esfuerzo conjunto su obtención.

1.5.6. VIOLENCIA SIMBÓLICA

Es un tipo de agresión complicada de distinguir debido a que esta inmersa en lo cotidiano y entre sus mensajes hay situaciones consideradas naturales cuando no lo son y no deben serlo.

Este concepto fue acuñado por el Sociólogo Pierre Bourdieu en la década de los setenta y es utilizado para

“describir una relación social donde el “dominador” ejerce un modo de violencia indirecta y no físicamente directa en contra de los “dominados”, los cuales no la evidencian y/o son inconscientes de dichas prácticas en su

contra, por lo cual son “cómplices de la dominación a la que están sometidos”⁴⁰.

En los medios de comunicación, es violencia simbólica todo lo que refuerza los estereotipos, pues están poniendo a cada uno “en su sitio”. Todo el que es capaz de estigmatizar es responsable del pensamiento segregacionista, todos los segregados son “distintos a mí” y vistos como menos personas en el inconsciente. Cuanto menos persona se es, menos derechos y más susceptible se vuelve uno a los abusos en todas las esferas.

“La forma paradigmática de la violencia simbólica es, el fenómeno de la dominación masculina, que, lejos de ser sólo una violencia ejercida por hombres sobre mujeres, es un complejo proceso de dominación que afecta a los agentes sin distinción de géneros. Pero pueden encontrarse formas y fenómenos de violencia y dominación simbólicas en los más diversos acontecimientos sociales y culturales: en la esfera del lenguaje, en el ámbito educativo, en las múltiples clasificaciones sociales, etc”⁴¹.

1.6. CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE SE DESARROLLA LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

La violencia contra la mujer en los casos de las sentencias que se revisaron perteneciente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos se desarrolla en circunstancias especiales como las siguientes:

1.6.1. MASACRE

Conforme a la Real Academia de la Lengua Española consiste en la *“matanza de personas, por lo general indefensas, producida por ataque armado o causa parecida”⁴²*

⁴⁰ <https://afrofeminas.com/2016/08/26/5-ejemplos-de-violencia-simbolica>, 20/05/2017, 21.00 horas

⁴¹ CALDERONE, Monica, Sobre Violencia Simbólica en Pierre Bourdieu, 2004, Artículo publicado en La Trama de la Comunicación” Vol. 9, Anuario del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario. Rosario. Argentina. UNR Editora, 2004, p. 1

⁴² <http://dle.rae.es/srv/fetch?id=OWHSjcM>

Al respecto de la investigación realizada la Corte revisó la existencia de violencia contra la mujer en diversas masacres ocurridas en Centroamérica siendo estas las denominadas: Masacre de Rio Negro, Masacre de las Dos Erres y Masacre de El Mozote en las cuales se da cuenta del homicidio de los integrantes de tales comunidades a manos de integrantes de las fuerzas armadas del Gobierno, siendo que todas las personas fueron asesinadas en un mismo momento, incluso en un mismo día, siendo que no se diferenció entre hombres, mujeres y niños al momento de cometer tales actos.

1.6.2. DETENCIÓN ARBITRARIA

Conforme a la Declaración universal de Derechos Humanos en su artículo 9 determina: "Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado", en este mismo orden de ideas El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece: "Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta".

Es así que se considera una detención arbitraria cuando se contraviene las disposiciones sobre derechos humanos, es decir cuando se violan, niegan, suprimen o impiden los derechos de una persona al momento de una detención. De tal forma que si se ha incurrido en una falta o delito, la detención es legal, pero debe ser llevada a cabo según los procedimientos, requisitos y condiciones formalmente establecidas por la ley, en un contexto de pleno reconocimiento y respeto de los derechos humanos del intervenido.

Existen tres categorías a partir de las cuales se puede determinar cuando la privación de libertad es arbitraria, siendo ellas⁴³:

- *“Cuando es evidentemente imposible invocar base legal alguna que justifique la privación de la libertad (como el mantenimiento de una persona en*

⁴³ O.N.U., Folleto Informativo No.26, El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria,

detención tras haber cumplido la pena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable);

- *Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de derechos o libertades proclamados en los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y además, respecto de los Estados Partes, en los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es decir, cuando detienen a la persona por haber ejercido los derechos y libertades que la ley garantiza;*
- *Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados afectados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario, en pocas palabras cuando se ha tenido un juicio que no ha cumplido jurídico para su celebración”.*

1.6.3. DESAPARICIÓN FORZADA

*“La desaparición forzada de personas es una violación de derechos humanos, que tiene características especiales. Uno de los elementos que caracteriza este tipo de violación es que se trata de una violación múltiple y compleja de derechos. Además, la desaparición es un ejemplo de violación continua de derechos humanos”.*⁴⁴

Conforme a la declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas se producen desapariciones forzadas siempre que:

“se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar

⁴⁴ CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DESAPARICION FORZADA: Cuadernillo de Jurisprudencia N°6, San Jose de Costa Rica, p. 4

la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley.”⁴⁵

“Es así que históricamente, la desaparición forzada de personas ha sido utilizada como un procedimiento de represión e intimidación de la población por parte de regímenes políticos autoritarios o dictatoriales. Recurrir a ella provoca situaciones de gran angustia e incertidumbre, puesto que uno de sus objetivos es eliminar a los opositores de un determinado régimen borrando todo rastro de las personas que son víctimas de esta práctica. En América Latina, la desaparición forzada de personas se extendió durante las décadas de los sesenta, setenta y ochenta, especialmente en países con gobiernos dictatoriales, autoritarios, o que experimentaron conflictos armados internos”.⁴⁶

“La desaparición es una forma de sufrimiento doblemente paralizante: para las víctimas, muchas veces torturadas y siempre temerosas de perder la vida, y para los miembros de la familia, que no saben la suerte corrida por sus seres queridos y cuyas emociones oscilan entre la esperanza y la desesperación, cavilando y esperando, a veces durante años, noticias que acaso nunca lleguen. Las víctimas saben bien que sus familias desconocen su paradero y que son escasas las posibilidades de que alguien venga a ayudarlas. Al habérselas separado del ámbito protector de la ley y al haber "desaparecido" de la sociedad, se encuentran, de hecho, privadas de todos sus derechos y a merced de sus aprehensores. Incluso si la muerte no es el desenlace final y tarde o temprano, terminada la pesadilla, quedan libres, las víctimas pueden sufrir durante largo tiempo las cicatrices físicas y psicológicas de esa forma de deshumanización y de la brutalidad y la tortura que con frecuencia la acompañan”.⁴⁷

⁴⁵ Declaración sobre la protección de las personas contra las desapariciones forzadas

⁴⁶ COMISIÓN DE LA VERDAD Y LA RECONCILIACIÓN, INFORME FINAL: 1.2.

DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS POR AGENTES DEL ESTADO, 2003, p.57

⁴⁷ OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, DESAPARICIONES FORZADAS O INVOLUNTARIAS, Folleto informativo N° 6 – revista 3, Nueva York, p. 1

En una desaparición pueden violarse también los siguientes derechos civiles o políticos⁴⁸:

- *“El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica;*
- *El derecho a la libertad y seguridad de la persona;*
- *El derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;*
- *El derecho a la vida, en caso de muerte de la persona desaparecida;*
- *El derecho a una identidad;*
- *El derecho a un juicio imparcial y a las debidas garantías judiciales;*
- *El derecho a un recurso efectivo, con reparación e indemnización;*
- *El derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición.”*

1.6.4. TORTURA

Para la Real Academia de la Lengua Española es el *“grave dolor físico o psicológico infligido a alguien, con métodos y utensilios diversos, con el fin de obtener de él una confesión, o como medio de castigo”*⁴⁹.

Tal como lo establece la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura, esta se define como:

*“Todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas, siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere el presente artículo”*⁵⁰.

⁴⁸ Ibid, p. 3

⁴⁹ <http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=tortura>

⁵⁰ Artículo 2 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura

La tortura es una de las violaciones más horrendas de los derechos humanos de la persona. Se trata de un ataque a la mismísima esencia de la dignidad de la persona. Y a pesar de ello, aunque la tortura está absolutamente prohibida en el derecho internacional, continúa siendo una práctica ampliamente extendida por todo el mundo. La práctica de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes durante la investigación de los delitos, no es un fenómeno nuevo en la historia nacional.

Tiene tres elementos constitutivos: Se busca infligir intencionalmente dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, se realiza por un funcionario público, implicado de forma directa o indirecta y se comete con una intención deliberada.

“El elemento sustancial es la generación intencional de penas o sufrimientos o de métodos diseñados para anular la personalidad o la víctima o disminuir sus capacidades. Para determinar qué actos constituyen tortura, la Comisión y la Corte han tomado en cuenta tanto elementos objetivos, tales como el período de tiempo durante el cual se infligió la pena o el sufrimiento, el método utilizado para producir dolor, el fin, las circunstancias socio-políticas generales y la arbitrariedad, o algo similar, de la privación de la libertad, así como también elementos subjetivos como, por ejemplo, la edad, el sexo y la vulnerabilidad particular de la víctima.”⁵¹

“La tortura suele tener lugar en las sombras. De hecho, muchos gobiernos dedican más esfuerzo a negar o encubrir las torturas que a investigar exhaustivamente las denuncias. A menudo, los torturadores actúan sin miedo a ser detenidos, perseguidos o castigados. Eso se debe a varios motivos, entre ellos: la falta de voluntad política, especialmente cuando el propio gobierno es quien está detrás de las torturas; la confianza en que no habrá investigaciones eficaces, independientes e imparciales. Por ello la impunidad da como resultado que la práctica de la tortura se perpetúe y las personas que la sufren quedan desamparadas.”⁵²

⁵¹ Caso *Ximenes Lopes c. Brasil*, Corte IDH (Serie C) N° 149, sentencia del 4 de julio de 2006, párrafo 127.

⁵² <https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/tortura/> 20/05/2017 22.34

*“Casi cualquier persona que se encuentre bajo custodia corre peligro de ser torturada, sin que importe su edad, género, origen étnico o filiación política. Sin embargo, algunas personas corren más riesgos que otras. La **violencia sexual** es una forma de tortura utilizada como arma de guerra por todas las partes en los conflictos, como ocurrió en Ruanda, en los Balcanes, Colombia o la República Democrática del Congo. El extremismo violento, en países como Irak, también somete a las mujeres a malos tratos, violencia y esclavitud sexual. La vulneración de los **derechos sexuales y reproductivos** puede constituir tortura, como la **esterilización forzada o la negación del acceso al aborto legal y seguro en determinados casos**. El Comité contra la Tortura de la ONU también se ha posicionado contra la **mutilación genital femenina** y ha exigido a los Estados que tomen las medidas necesarias para erradicarla”.*⁵³

⁵³ Idem.

2. SUB CAPITULO SEGUNDO

CONVENCIÓN PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER – CONVENCIÓN DE BELEM DO PARÁ

2.1. CONVENCIÓN DE BELEM DO PARÁ: ANTECEDENTES

En 1990, la Comisión Interamericana de Mujeres comenzó un proceso de consulta que tuvo como objetivo iniciar los trabajos de investigación y de propuestas para la regulación del fenómeno de la violencia contra la mujer en la región. Mientras esto sucedía,

*“la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos adoptó, en lo que serían los primeros avances y compromisos regionales en la materia, la Declaración sobre la Erradicación de la Violencia contra la Mujer en 1990 y la primera resolución en la materia a la que se llamó Protección de la mujer contra la Violencia en 1991”.*⁵⁴

“En 1992, las conclusiones y recomendaciones de la Consulta son plasmadas en un anteproyecto de Convención Interamericana para luchar contra el problema de la violencia de género, que fue aprobado en la Sexta Asamblea Extraordinaria de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres celebrada en abril de 1994. El 7 de junio del mismo año la Comisión referida turnó el proyecto a la Primera Comisión de la Asamblea General de la OEA, es decir, a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, la que lo aprobó bajo el nombre de Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Finalmente, el 9 de junio de 1994, la Asamblea General de la Organización de los

⁵⁴ ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, Resolución AG/RES 1128, “Protección de la Mujer contra la Violencia”, 1991

*Estados Americanos aprobó durante su vigésimo cuarto periodo ordinario de sesiones la Convención de Belém do Pará en Brasil”.*⁵⁵

2.2. LA CONVENCIÓN EN SI MISMA

En la OEA la llaman “la joya de la corona” debido a que fue la primera Convención que existía en el mundo sobre violencia contra la mujer. Ha significado por tanto un avance sustancial en relación a la protección de los derechos humanos de las mujeres ya que reconoce la violencia contra la mujer como un delito y una violación a los derechos humanos de las mujeres. Establece una serie de medidas jurídicas y pedagógicas dirigidas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. La Convención define como un derecho humano el “derecho a una vida libre de violencia tanto en el ámbito público como en el privado”.

*“La Convención representa un avance sustancial en el reconocimiento de la violencia contra las mujeres como tal, es decir con la particularidad de estar basada en el género. La convención es el documento internacional más completo sobre el tema de la violencia contra las mujeres, que incluye medidas de prevención, legislativas tanto de contenido como procesales de asistencia a víctimas y de seguimiento. Lo más importante es que subraya que las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia y que el Estado debe garantizar ese derecho en todos los espacios”.*⁵⁶

Su estructura es la siguiente: definiciones y marco general, listado de derechos (se reafirman derechos reconocidos en otros tratados y se incorporan otros), mecanismos de seguimiento (Informes periódicos y comunicaciones individuales a la CIDH).

“Su aprobación fue fruto del esfuerzo sostenido del movimiento de mujeres a nivel mundial y regional que logró colocar en la agenda pública la temática de la

⁵⁵ PEREZ CONTRERAS, Monserrat, COMENTARIOS A LA CONVENCIÓN DE BELEM DO PARA, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 1999, p. 667

⁵⁶ GRAHAM GORDON, Deykell, MECANISMOS INSTITUCIONALES APLICADOS POR EL ESTADO EN POLITICAS PUBLICAS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, DESDE LA OPTICA DEL NUEVO PARADIGMA DE LA SEGURIDAD HUMANA, Universidad para la Cooperación Internacional, San José de Costa Rica, 2008, p. 90 - 91

violencia basada en género (VBG). Fue luego la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) quien impulsó su debate y aprobación en la OEA”.⁵⁷

“La Convención de Belém do Pará ha contribuido a crear conciencia sobre la gravedad del problema de la violencia contra la mujer y de la responsabilidad del Estado de adoptar medidas concretas para prevenirla y erradicarla. Crea un sistema de derechos para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres y un sistema de obligaciones para los Estados de respetar y garantizar esos derechos y de actuar con la debida diligencia para proteger a la mujer contra toda forma de violencia por razones de género. Si bien antes de su aprobación existía una preocupación regional por la grave situación de violencia de que eran víctimas las mujeres, esta preocupación no tenía un reflejo legal en la mayoría de los Estados. Gracias a este instrumento se inició en el continente una mayor aceptación del hecho de que la violencia contra la mujer, ya sea en el ámbito público o privado, es una violación de derechos humanos”.⁵⁸

La Convención de Belém do Pará rompe con un importante paradigma de derechos humanos, que ya había sido puesto en cuestión en el ámbito de la ONU por la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), y que reposaba en el criterio según el cual la garantía y respeto de los derechos humanos recaía principalmente en el Estado y en razón de ello, sólo el Estado hegemónica, se estaba frente a una violación de derechos humanos si y sólo si el Estado, sus agentes o particulares bajo su aquiescencia, eran los responsables directos de esta violación. En efecto, la Corte IDH había sostenido que: “de acuerdo con el artículo 1.1 de la Convención, los Estados están obligados a respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos en ella. La responsabilidad internacional del Estado se funda en actos u omisiones de cualquier poder u órgano de éste, independientemente de su jerarquía, que violen la Convención Americana”. En cuanto al deber de respeto, la Corte sostuvo de manera reiterada que: “la primera obligación asumida por los Estados Partes, en los términos del citado artículo, es la

⁵⁷ INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES DE URUGUAY, Articulado de la Convención de Belem do Para, http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/21718/1/1_articulado_belem_do_para.pdf

⁵⁸ COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES, GUIA PARA LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, Documentos oficiales OEA, Washington, 2014, p. 5

de ‘respetar los derechos y libertades’ reconocidos en la Convención. Así, en la protección de los derechos humanos, está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal”.

Como parte de estas estrategias, la Convención desarrolla un nuevo marco teórico de protección de las mujeres en la Región. Por ello, la Convención de Belén do Pará recoge el criterio sostenido por el Comité contra Todas las Formas de Discriminación de la Mujer (CEDAW), el cual desde 1992 estableció que:

“los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas”. En efecto, parte del diagnóstico del que surge la Convención de Belém do Pará evidenciaba que era en la vida privada donde la gran parte de las mujeres sufría los mayores ataques a su dignidad, a través de distintas manifestaciones de violencia. De esta manera, gracias a la Convención, se trasciende el viejo concepto según el cual sólo el Estado o sus agentes violan derechos humanos y se cataloga la violencia contra las mujeres como una clara violación de derechos humanos. acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”⁵⁹.

Igualmente reconoce la relación que existe entre violencia de género y discriminación, indicando que tal violencia es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, y que el derecho de la mujer a una vida libre de violencia incluye el derecho a ser libre de toda forma de discriminación y a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados.

⁵⁹ MEJIA GUERRERO, Luz, La Comisión Interamericana de Mujeres y la Convención de Belém do Pará. Impacto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, artículo virtual, <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r30352.pdf>

2.3. RATIFICACIÓN DE LA CONVENCIÓN POR LOS PAÍSES PARTE DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS

PAIS	FECHA DE RATIFICACION
Argentina	05/07/1996
Barbados	16/05/1995
Bolivia	05/12/1994
Brasil	27/11/1995
Chile	15/11/1996
Costa Rica	12/07/1995
Dominica	06/06/1995
Ecuador	15/09/1995
El Salvador	26/01/1996
Granada	15/02/2001
Guatemala	04/04/1995
Guyana	28/02/1996
Honduras	12/07/1995
Jamaica	14/12/1995
México	12/11/1998
Nicaragua	12/12/1995
Panamá	12/07/1995
Paraguay	18/10/1995
Perú	04/06/1996
República Dominicana	07/03/1996
San Vicente y las Granadinas	31/05/1996
Santa Lucía	04/04/1995
St. Kitts y Nevis	12/06/1995
Suriname	08/03/2002
Trinidad y Tobago	08/05/1996
Uruguay	02/04/1996
Venezuela	03/02/1995

2.4. OTROS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE PREVENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

2.4.1. CONVENCIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER

Esta convención es un tratado internacional de las Naciones Unidas firmado en el año 1979, es fruto del trabajo de años realizado por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, existente desde 1946 por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Ya 185 países la han ratificado, incluyendo a todos los Estados latinoamericanos.

Está conformada por tres principios básicos: Igualdad de resultados, No discriminación, y Responsabilidad estatal. En el preámbulo describe por qué es necesaria la convención; y en sus 30 artículos, organizados en seis partes, se definen cuáles son los actos que constituyen discriminación contra la mujer; la naturaleza de la obligación estatal mediante leyes, políticas públicas y programas que el Estado debe desarrollar para eliminar la discriminación; especifican las diferentes áreas en las que los gobiernos están obligados a eliminar la discriminación; describen el establecimiento y las funciones del Comité de la CEDAW (por sus siglas en inglés); y tratan principalmente sobre la administración y otros aspectos de procedimientos para la firma, ratificación, adhesión y funcionamiento de la Convención.

La Convención obliga a los Estados firmantes a adoptar medidas de manera muy concreta para eliminar la discriminación contra las mujeres; permite medidas transitorias de “acción afirmativa” a las que se les llama también “medidas especiales de carácter temporal”, por ejemplo las leyes de cuota en materia electoral.

Reconoce el papel de la cultura y las tradiciones en el mantenimiento de la discriminación contra las mujeres, y obliga a los Estados a eliminar los estereotipos en los roles de hombres y mujeres. Define la discriminación y establece un concepto de igualdad sustantiva. Y fortalece el concepto de indivisibilidad de los derechos humanos.

2.4.2. EL CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

La Convención de Estambul, es una convención del Consejo de Europa que busca combatir la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, iniciada para su firma el 11 de mayo de 2011, en Estambul - Turquía.

Los objetivos de la convención son la prevención de la violencia, la protección de las víctimas y acabar con la impunidad de los perpetradores, es así que ya cuarenta y siete son los países que ya han firmado esta Convención, por lo que entró en vigencia el 1 de agosto de 2014.

*“La importancia del Convenio estriba en que supone el primer instrumento de carácter vinculante en el ámbito europeo en materia de violencia contra la mujer y la violencia doméstica, y es el tratado internacional de mayor alcance para hacer frente a esta grave violación de los derechos humanos, estableciendo una tolerancia cero con respecto a la violencia hacia la mujer”.*⁶⁰

Los fundamentos del Convenio son⁶¹:

1. “Prevenir la violencia, proteger a las víctimas y entablar acciones judiciales contra los agresores.
2. Sensibilizar y hacer un llamamiento a toda la sociedad, especialmente a los hombres y niños, para que cambien de actitud y rompan con una cultura de tolerancia y negación que perpetúa la desigualdad de género y la violencia que la causa.
3. Destacar la importancia de una actuación coordinada de todos los organismos y servicios oficiales pertinentes y la sociedad civil.
4. La recogida de datos estadísticos y de investigación sobre todas las formas de violencia contra la mujer”.

⁶⁰ <http://igualdade.xunta.gal/es/actualidad/el-convenio-de-estambul-sobre-violencia-contra-la-mujer-entrara-en-vigor-el-1-de-agosto-22/05/2017-22.00>

⁶¹ Idem.

“Es el primer tratado europeo que establece un amplio conjunto de obligaciones jurídicamente vinculantes para abordar todas las formas de violencia contra la mujer, incluida la violencia doméstica: penaliza delitos como la violencia psicológica, el acoso, la violencia física, la violencia sexual, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado y la esterilización forzada”.⁶²

2.4.3. PROTOCOLO PARA EL CAPÍTULO AFRICANO SOBRE DERECHOS HUMANOS PARA LAS MUJERES AFRICANAS

*“El Protocolo de Maputo es el nombre por el que se conoce al anexo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (1981) en el que se habla de los Derechos de las Mujeres. Este Protocolo, que data de 1995 (aunque no se firmó hasta 2003), es significativamente más reciente que la CEDAW – la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer, aprobada por Naciones Unidas en 1979), por lo que en muchos aspectos va más allá que la propia Convención”*⁶³.

Entró en vigor el 25 de noviembre de 2005 después de haber sido ratificado, como se requería, por 15 Estados miembros de la UA. De los 53 países miembros de UA, 49 lo han firmado y 31 de éstos ya lo ratificaron; sólo cuatro naciones[1] aún no lo ha firmado.

“Así, el Protocolo de Maputo garantiza no sólo derechos genéricos y específicos para las mujeres, (especialmente en lo relativo a igualdad social y política), sino también aspectos concretos referidos a derechos sexuales y reproductivos, derecho a la tierra, al agua, es un instrumento legal sin precedentes para los derechos de las mujeres africanas, extiende y refuerza los derechos consagrados en otros instrumentos de derechos humanos. El Protocolo otorga a las mujeres una amplia gama de derechos económicos y de bienestar social. Este instrumento resalta asuntos que no fueron cubiertos efectivamente en otros instrumentos pero que son de particular relevancia para las mujeres africanas, incluyendo el VIH y sida, la trata, la herencia de las viudas y la usurpación de propiedades. El Protocolo consagra el

⁶² <https://www.equaltimes.org/convenio-de-estambul-herramienta-y?lang=es> 22/05/2017 22.10

⁶³ <http://www.africafundacion.org/spip.php?article24195> 22/05/2017 23.32

*derecho reproductivo de las mujeres al aborto médico si el embarazo fue producto de violación o incesto, o cuando continuar la gestación pone en peligro la salud mental y física de la mujer o su vida. Estipula que los Estados Parte deben tomar medidas para prohibir legalmente toda forma de mutilación genital femenina (MGF) y prevenir explotación y abusos contra las mujeres en la publicidad y la pornografía”.*⁶⁴

Además, cabe destacar la existencia de un amplio capítulo dedicado a las prácticas dañinas, como la mutilación genital femenina; y la incorporación de un enfoque interseccional: ya no habla de ‘la mujer’ como “un todo, único y uniformado”, sino que recoge la heterogeneidad de culturas y mujeres. Sin embargo, también hay que señalar que “*el propio texto deja entrever determinadas tensiones entre la salvaguarda de las señas de identidad, el colonialismo, el feminismo impuesto desde fuera, las tradiciones que son o pueden ser discriminatorias...*”⁶⁵

*“En líneas generales, el Protocolo de Maputo establece para las mujeres igualdad en los derechos civiles y políticos (participación y representación política, derecho a la igualdad en las relaciones familiares, derecho a una vida libre de violencia...) pero también en torno a los llamados “derechos de tercera generación”: económicos, sociales y medioambientales (desde el acceso a la propiedad de la tierra hasta la igualdad en los asuntos de familia, como la custodia de los hijos o el proceso de divorcio.)”*⁶⁶



2.5. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL DE RELEVANCIA RELACIONADA CON LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

2.5.1. CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.- O EL TAMBIÉN LLAMADO PACTO DE SAN JOSÉ

⁶⁴ <https://www.awid.org/es/noticias-y-an%C3%A1lisis/organizacion-de-las-mujeres-africanas-para-la-ratificacion-e-implementacion-del-22/05/2017> 23.35

⁶⁵ <http://porfinenafrica.com/2016/05/derechos-humanos-mujeres-en-africa/> 22/05/2017 23.35

⁶⁶ Idem.

Esta fue adoptada por la Conferencia Interamericana Especializada sobre Derechos humanos en San José de Costa Rica del 7 al 22 de noviembre de 1969, y entró en vigor el 18 de julio de 1978. Hasta el momento de la proclamación de la Convención la estructura institucional del sistema de protección internacional de los derechos humanos en América solo era meramente declarativa, pero desde que entró en vigencia en el año referido la naturaleza jurídica de los instrumentos se transforma para fundarse en instrumentos internacionales que tendrán base Convencional y obligatoria para todos los firmantes.

Han ratificado la Convención los siguientes 25 Estados: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Trinidad y Tobago denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por comunicación dirigida al Secretario General de la OEA, el 26 de mayo de 1998.

“El texto de la Convención se redactó en base a la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950, y estableció un sistema de protección internacional de derechos humanos con fundamento en los derechos esenciales del hombre, no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado sino de los atributos de la persona humana, sistema además de naturaleza coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados Americanos. Es decir, la obligación de proteger los derechos humanos recae, en primer lugar, en el Estado y solo subsidiariamente en los órganos de protección establecidos en la Convención: La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.⁶⁷

“El Pacto de San José de Costa Rica protege fundamentalmente 23 derechos civiles y políticos y en cuanto a los derechos económicos y sociales establece la obligación de los Estados partes de lograr el desarrollo progresivo de éstos en la medida de los recursos disponible. La Convención establece como medios de protección dos órganos competentes: La comisión de derechos humanos y la corte interamericana de derechos humanos”.⁶⁸

⁶⁷ VENTURA ROBLES, Manuel E, CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, texto digital, p. 170 - 171

⁶⁸ Ibid 172

Es así que la Convención consta de 82 artículos divididos en tres partes y estas a su vez en once capítulos, distribuidos de la siguiente manera:

- Primera Parte: Deberes de los Estados y derechos protegidos
 - El Capítulo I (artículos 1 y 2) aparte de comprometer a los estados a respetar lo estipulado en la Convención les insta a crear leyes acorde a lo establecido.
 - El Capítulo II (artículos 3 al 25) enumera los derechos civiles y políticos.
 - El Capítulo III (artículos 26) este artículo cita el compromiso de los estados a crear legislaciones “que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos”.
 - El Capítulo IV (artículos 27 al 31) explica la suspensión de garantías, la interpretación y la aplicación de todo lo establecido en la Convención.
 - El Capítulo V (artículo 32) establece los deberes de las personas.
- Segunda Parte: Medios de protección
 - El Capítulo VI (artículo 33) crea los órganos responsables por velar por la protección y promoción de los Derechos Humanos: la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
 - El Capítulo VII (artículos 34 al 51) dicta la organización, funciones, competencia y procedimiento de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
 - El Capítulo VIII (artículos 52 al 69) dicta la organización, funciones, competencia y procedimiento de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
 - El Capítulo IX (artículos 70 al 73) menciona las disposiciones generales de ambas instituciones, como dar la inmunidad diplomática, según el derecho internacional, a los miembros de ambos organismos.

- Tercera Parte: Disposiciones transitorias
 - El Capítulo X (artículos 74 al 78) sobre la firma, ratificación, reserva, enmienda, protocolo y denuncia.
 - El Capítulo XI (artículos 79 al 82) Disposiciones Transitorias

2.5.2. CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA

Esta convención entró en vigor el 28 de febrero de 1987 y a partir del 2010, 18 países son parte del mismo, es así que se convierte en un instrumento internacional relacionado a derechos humanos, creado dentro de la Organización de Estados Americanos para prevenir y sancionar casos de tortura o sus similares.

Es así que conforme al preámbulo de la propia Convención refiere que todo acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes constituyen una ofensa a la dignidad humana y una negación de los principios consagrados en la Carta de la OEA y en la Carta de las Naciones Unidas y son violatorios de los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Es una Convención de veinticuatro artículos donde se reiteran los principios que han sido establecidos en otros órganos internacionales que recogen esta prohibición: el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

2.5.3. CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS

Fue adoptada por la OEA el 09 de junio de 1994 en la ciudad de Belem do Pará, y entró en vigor el 28 de marzo de 1996.

Esta norma internacional es nacida para juzgar crímenes de lesa humanidad, por lo que en 1980 se formó el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias que era parte de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por lo que en 1983 la OEA emitió su resolución 666 XIII-0/83 que toda desaparición forzada debería calificarse de crimen contra la humanidad. Es por ello que en base a tal calificación en 1988 y 1989 se emiten las primeras sentencias condenatorias por casos de desapariciones forzadas en contra de Honduras.

Es por ello que esta convención fue el primer instrumento jurídico en establecer mecanismos que permitieran dictar sentencias definitivas y obligatorias en casos interestatales y particulares expresamente reconocidas por los Estados Partes interesados.

Es así que desde su preámbulo la Convención determina que la desaparición forzada es delito de lesa humanidad imprescriptible y define a la desaparición forzada en el artículo II como: “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.

Asimismo ordena a los Estados Partes la adaptación de sus respectivos códigos penales para la tipificación del delito de desaparición forzada.

2.5.4. CONVENCION POR LOS DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE

Es un instrumento internacional de las Naciones Unidas y fue adoptada por este ente internacional el veinte de noviembre de 1989, su raíz nace en la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del niño emitida en 1924, posterior a lo cual cuando las Naciones Unidas en 1948 aprobaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos implícitamente incluyeron derechos de la infancia, pero ulteriormente los Estados se convencieron que las necesidades de los niños y niñas debían estar especialmente

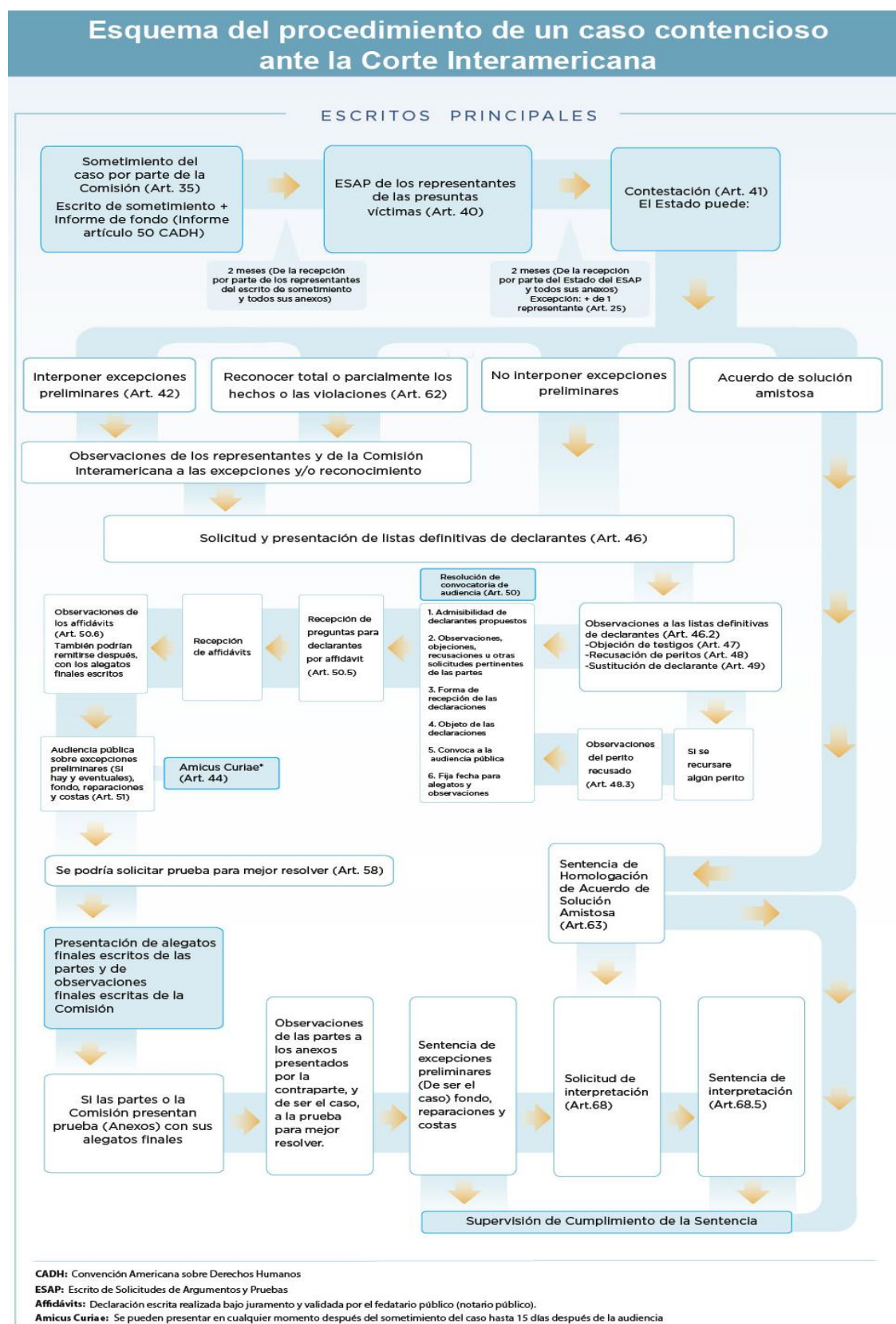
enunciadas y protegidas en un documento especial, por lo que tiempo después en 1959 se emite la Declaración de los Derechos del Niño que cuenta con 10 artículos.

Mediante este instrumento internacional se ratifica que los niños tienen los mismos derechos que los adultos, y se subrayan los derechos por la condición especial que tienen de niños, y esta situación existe porque todavía no han alcanzado el desarrollo integral por lo que necesitan de protección especial. Es por ello que en la convención convergen sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, así como un conjunto de normas para la protección de la infancia y los derechos del niño.

La convención está compuesta por 54 artículos que como se dijo profundiza en los derechos del niño, niña y adolescente recalando que por su vulnerabilidad necesitan de cuidado y asistencia especial, además se hace referencia a la responsabilidad de la familia sobre ellos, la necesidad de protección jurídica y no jurídica del niño antes y después de su nacimiento; se da relevancia al respeto de los valores culturales de la comunidad y se agrega el rol fundamental de la cooperación internacional para que los derechos establecidos en la convención se hagan efectivos.

De tal forma que los cuatro principios específicos de la Convención son: el interés superior del niño, el derecho a la no discriminación, el derecho a la vida, la sobrevivencia y el desarrollo y finalmente el derecho a la libertad de expresión y de ser escuchado.

2.6. PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS⁶⁹



⁶⁹ <http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/acerca-de/como-acceder-al-sistema-interamericano/procedimiento> Página

3. SUBCAPITULO TERCERO

SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS SOBRE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER ENTRE LOS AÑOS 2006 AL 2015

3.1. RIOS VS. VENEZUELA

3.1.1. FECHA: 28 de enero de. 2009

3.1.2. PRESENTACIÓN DEL CASO POR LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS A LA CORTE

PAIS DENUNCIADO	República Bolivariana de Venezuela
DERECHOS AFECTADOS PARA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS	La comisión solicitó que se considere la violación de los derechos reconocidos en los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 13 (Libertad de Pensamiento y Expresión), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana.
DERECHOS AFECTADOS PARA LOS REPRESENTANTES DE LOS DENUNCIANTES	Los representantes además solicitaron a la Corte que declare al Estado responsable por la violación de los artículos 5, 13, 8 y 25 de la Convención Americana “en conexión con” los artículos 1, 2 y 7.b) de la <u>Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer</u> (“Convención de Belem do Pará”), en perjuicio de las presuntas <u>víctimas mujeres</u>

“Los hechos presentados por la Comisión se refieren a actos y omisiones, cometidos por funcionarios públicos y particulares, que constituyeron restricciones a la labor de buscar, recibir y difundir información de 20 personas, todas ellas periodistas o trabajadores de la comunicación social que están o han estado vinculados a RCTV. En particular, la

Comisión alegó que dichas personas fueron sujetas a diversas amenazas, actos de hostigamiento y agresiones verbales y físicas, incluidos lesiones por disparos de armas de fuego, y que hubo atentados a las instalaciones del canal de televisión RCTV, entre los años 2001 y 2004. Además, la Comisión señaló falta de diligencia en la investigación de tales incidentes y omisión de acciones de prevención por parte del Estado”.⁷⁰

3.1.3. VÍCTIMAS

Las presuntas víctimas reconocidas por la Comisión son únicamente a las 20 personas identificadas en esa condición, todas ellas periodistas o trabajadores de la comunicación social que están o han estado vinculados a RCTV.

3.1.4. HECHOS

En la época en la cual se iniciaron los hechos materia del presente caso, Venezuela “se encontraba en un período de conflicto institucional y político que causó una extrema polarización de la sociedad”.⁷¹

“La Comisión presentó aproximadamente 40 hechos ocurridos entre diciembre de 2001 y junio de 2004, consistentes en declaraciones de funcionarios públicos y en agresiones, amenazas y hostigamientos cometidos en perjuicio de las presuntas víctimas. Hizo referencia a quince investigaciones y procedimientos en la jurisdicción penal en relación con esos hechos”.⁷²

“Los representantes alegaron que la totalidad de los hechos contenidos en la demanda fueron consecuencia directa de las declaraciones de funcionarios públicos dirigidas contra periodistas y directivos de RCTV y, por ende, atribuibles al Estado y constitutivos de violaciones del deber estatal de respetar, garantizar y prevenir las violaciones al derecho a la integridad personal de las presuntas víctimas. Solicitaron a la Corte que declare que el Estado violó ese derecho, “en su dimensión psíquica”, en perjuicio de “todas las víctimas en el presente caso”. Por último, sostuvieron que el Estado había

⁷⁰ Caso Ríos vs. Venezuela, sentencia emitida el 28 de enero del 2009: excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, párrafo 2

⁷¹ Ibid. Párrafo 46

⁷² Ibid. Párrafo 48

violado los artículos 5, 13, 8 y 25 de la Convención Americana “en conexión” con los artículos 1, 2 y 7.b) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante “Convención de Belem do Pará”).⁷³

“ En sus informes anuales e informes sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, emitidos entre 2003 y 2006, la Comisión constató la existencia de un clima de agresión y amenaza contra la libertad de expresión y, en particular, contra la integridad personal de periodistas, camarógrafos, fotógrafos y demás trabajadores de la comunicación social. Al identificar las áreas de especial atención en la materia, la Comisión observó la existencia de actos de “amenazas, ataques y actos de hostigamiento, contra comunicadores sociales, especialmente aquellos que trabajan en la calle, así como también la falta de investigación en relación a dichas amenazas y ataques”. También se refirió a la falta de investigación de tales actos e hizo notar que en varias oportunidades solicitó al Estado la adopción de medidas cautelares con el fin de proteger la vida, integridad personal y libertad de expresión de periodistas, camarógrafos y fotógrafos atacados. La Comisión también recibió información sobre agresiones a medios y comunicadores fuera del contexto del conflicto político y social, un aumento de procesos penales en contra de comunicadores sociales y de actos que podrían configurar formas de restricción indirecta en el ejercicio de la libertad de expresión”.⁷⁴

“RCTV fue caracterizado en la demanda de la Comisión como “un canal privado de televisión inscrito legalmente” y como “un medio de comunicación con una línea editorial crítica al gobierno y uno de los cuatro canales privados de televisión de Venezuela señalados como partícipes políticos activos en hechos de convulsión tales como el golpe de Estado de abril de 2002 y el paro de diciembre del mismo año”.⁷⁵

“La Corte observa que fueron cometidos por particulares y la mayoría ocurrieron durante el ejercicio de labores periodísticas de las presuntas víctimas, quienes relataron cómo habían sido afectadas en su vida profesional y personal. En general, coincidieron en el temor que les provocaba realizar sus labores periodísticas en las calles, en ciertas zonas y en la cobertura de determinados eventos; se refirieron a medidas de seguridad que

⁷³ Ibid. Párrafo 70

⁷⁴ Ibid. Párrafo 122

⁷⁵ Ibid. Párrafo 128

*tuvieron que emplear en sus labores, a las afectaciones a su salud y las consecuencias en sus vidas familiares y sociales; además algunas de personas debieron mudarse a otro municipio o estado o se retiraron temporal o definitivamente de sus labores”.*⁷⁶

*“Las agresiones físicas de las que han sido objeto los periodistas y demás trabajadores de RCTV “son la consecuencia natural del discurso agresivo y violento del Presidente de la República y otras altas autoridades”, pues “[no] es casual que luego de producirse un ataque verbal violento del Presidente de la República contra los medios o en concreto contra RCTV, a los pocos días, en la cobertura periodística del próximo evento público, ocurran episodios violentos contra los periodistas de RCTV o sus bienes.” Señalaron que otro aspecto del patrón de agresión consiste “en la internalización de estas ideas en los venezolanos seguidores y partidarios del Presidente”, quienes se habrían sentido directa o indirectamente apoyados por el Estado y, por tanto, con derecho a agredir física y moralmente al canal, a sus periodistas, trabajadores y directivos”.*⁷⁷

*“Si bien es cierto que existe un riesgo intrínseco a la actividad periodística, las personas que trabajan para determinado medio de comunicación social pueden ver exacerbadas las situaciones de riesgo a las que normalmente se verían enfrentados, si ese medio es objeto de discursos oficiales que puedan provocar, sugerir acciones o ser interpretados por funcionarios públicos o por sectores de la sociedad como instrucciones, instigaciones, o de cualquier forma autorizaciones o apoyos, para la comisión de actos que pongan en riesgo o vulneren la vida, seguridad personal u otros derechos de personas que ejercen labores periodísticas o de quienes ejercen esa libertad de expresión”.*⁷⁸

“La Corte considera que, en la situación de vulnerabilidad real en que se encontraron las presuntas víctimas para realizar su labor periodística, conocida por las autoridades estatales, algunos contenidos de los referidos pronunciamientos son incompatibles con la obligación estatal de garantizar los derechos de esas personas a la integridad personal y a la libertad de buscar, recibir y difundir información de esas personas, al haber podido resultar intimidatorios para quienes se hallaban vinculados con ese medio de

⁷⁶ Ibid. Párrafo 129

⁷⁷ Ibid. Párrafo 132

⁷⁸ Ibid. Párrafo 143

*comunicación y constituir faltas al deber de prevenir situaciones violatorias o de riesgo para los derechos de las personas”.*⁷⁹

3.1.4.1. Respeto de los Hechos Específicos en agravio de Mujeres

- *“17 de diciembre de 2001 la señora Luisiana Ríos fue agredida por particulares “partidarios del oficialismo” en un evento en el Panteón Nacional, por lo que debió abandonar el lugar custodiada por la Policía Militar. El Estado se refirió a las actuaciones realizadas por la Fiscalía respecto de este hecho e informó que el 24 de enero de 2007 fue acordado el sobreseimiento de la causa”.*⁸⁰
- *“20 de enero de 2002 la periodista Luisiana Ríos, el camarógrafo Luis Augusto Contreras y el asistente de cámara Armando Amaya fueron obstaculizados en sus labores por particulares “simpatizantes del oficialismo” en el Observatorio Cajigal, por lo que no pudieron cubrir el programa presidencial al tener que retirarse del lugar asistidos por funcionarios de la Casa Militar de Miraflores. Los representantes alegaron este hecho como uno de los que “impidieron o imposibilitaron el acceso a la información u opinión por parte de los periodistas””.*⁸¹
- *“10 de abril de 2002 la corresponsal Isabel Mavarez fue agredida por una persona no identificada mientras cubría una noticia en la sede de Petróleos de Venezuela (PDVSA), en Chuao. Se le arrojó un objeto que golpeó su rostro, por lo que debió recibir atención médica inmediata. Los representantes indicaron que este incidente ocurrió un día antes y que fue una piedra lo que hirió a la señora Mavarez en la frente, lo cual ameritó 12 puntos de sutura. El Estado alegó que este hecho fue investigado y se acordó el sobreseimiento de la causa el 24 de mayo de 2007”.*
- *“La Comisión alegó que el 18 de abril de 2002 la periodista Luisiana Ríos fue objeto de una agresión verbal en la sede del Palacio de Miraflores por parte de un capitán del ejército venezolano y que había informado de esto a un superior militar inmediato en la Guardia de Honor, de lo cual también se dejó constancia en un acta. Los representantes señalaron que al denunciar el hecho con el superior en la Guardia de Honor, éste había dicho a la señora Ríos que eran*

⁷⁹ Ibid. Párrafo 149

⁸⁰ Ibid. Párrafo 156

⁸¹ Ibid párrafo 160

*cosas de un personal “fuera de control”. En sus alegatos finales el Estado señaló que en enero de 2007 fue acordada la desestimación de la denuncia”.*⁸²

- *“2 de mayo de 2002 la periodista Luisiana Ríos fue amenazada por “miembros y simpatizantes del oficialismo” mientras cubría una interpelación del señor Pedro Carmona en el Parlamento venezolano; que las personas que la amenazaron permanecieron alrededor del Palacio Legislativo; en razón del temor por su integridad, la señora Ríos no pudo salir del edificio por más de tres horas, pues a pesar de haber solicitado ayuda a los Guardias Nacionales, estos se negaron a intervenir, aunque finalmente fue auxiliada por la Policía Metropolitana. Los representantes precisaron que la señora Ríos fue agredida verbalmente y amenazada por “miembros de Círculos Bolivarianos y otros partidarios del oficialismo”.”.*⁸³
- *“28 de mayo de 2002 la periodista Luisiana Ríos denunció ante la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas que, en razón del ejercicio de su profesión, sufrió amenazas en las inmediaciones de su domicilio, instándola a mudarse de allí porque de lo contrario se avisaría de su presencia a un “Círculo Bolivariano” local; además denunció reiterados daños a su vehículo”.*⁸⁴
- *“13 de agosto de 2002 la reportera Laura Castellanos fue agredida verbalmente mientras cubría una sesión parlamentaria en la Asamblea Nacional”.*⁸⁵
- *“4 de diciembre de 2002 la reportera Erika Paz y el camarógrafo Samuel Sotomayor sufrieron amenazas de muerte, insultos, agresiones físicas y destrucción de equipos por “particulares adeptos al gobierno”. Los representantes señalaron que la policía regional organizó un cordón de seguridad entre las personas enfrentadas, pero nada hizo para detener los ataques contra los periodistas y sus equipos reporteriles. Los representantes alegaron que en dichas circunstancias el Estado violó el derecho a la integridad personal de la señora Erika Paz”.*⁸⁶
- *“27 de enero de 2003 la señora Anahís Cruz sufrió una agresión verbal en una rueda de prensa por parte de un General de División del Ejército en la sede del Cuartel Paramaconi en Maracay, Estado de Aragua, quien dio la orden de sacar*

⁸² Ibid. Párrafo 177

⁸³ Ibid. Párrafo 185

⁸⁴ Ibid. Párrafo 193

⁸⁵ Ibid. Párrafo 201

⁸⁶ Ibid. Párrafo 222

a la referida periodista de la rueda de prensa e impedir su entrada en razón de que “él no daba declaraciones a golpistas”. El Estado, por su parte, alegó que en ningún momento la periodista Anahís Cruz fue sacada de la rueda de prensa ni le fue impedida la entrada; que la declaración de la señora Cruz adolece de contradicciones, imprecisiones, relatos referenciales y juicios de opinión, que impiden otorgar credibilidad a sus dichos”.⁸⁷

- *“3 de marzo de 2004 un policía que conducía motocicleta pasó la rueda delantera sobre un pie de la señora Anahís Cruz, mientras se encontraba cubriendo una protesta de la oposición en la ciudad de Maracay, cuando un grupo de particulares “seguidores del oficialismo” comenzó a atacar con piedras y otros objetos contundentes a los manifestantes de la oposición. Los representantes señalaron que quien la atropelló fue un policía de Aragua”.⁸⁸*

“Del análisis de los hechos alegados, la Corte concluye que no fue demostrada la alegada violación del derecho a la integridad física de las presuntas víctimas por acciones de sus agentes. Por otro lado, en cinco de los hechos probados ha sido constatado que personas o grupos de particulares indeterminados causaron daños a la integridad física y obstaculizaron el ejercicio de la labor periodística de Antonio José Monroy, Armando Amaya, Carlos Colmenares e Isabel Cristina Mavarez Marin. Además, en 10 de los hechos probados ha sido constatado que personas o grupos de particulares indeterminados obstaculizaron el ejercicio de la labor periodística de David José Pérez Hansen, Erika Paz, Isnardo José Bravo, Javier García Flores, Luis Augusto Contreras Alvarado, Luisiana Ríos Paiva, Noé Pernía, Pedro Antonio Nikken García, Samuel Sotomayor, Wilmer Marcano y Winston Francisco Gutiérrez Bastardo”.⁸⁹

3.1.5. AFECTACION DE DERECHOS

“En el presente caso hay varias mujeres periodistas que fueron y son víctimas de las agresiones y ataques, además de casos como la herida causada en la cara [a Isabel Mavarez[, e]l caso de Laura Castellanos, quien estando embarazada fue agredida dentro

⁸⁷ Ibid. Párrafo 230

⁸⁸ Ibid. Párrafo 250

⁸⁹ Ibid. Párrafo 265

de la Asamblea Nacional por grupos organizados de oficialistas, sufriendo gravísimas consecuencias en la gestación que tenía, con alto riesgo de calcificación de útero y pérdida de líquido amniótico”. Asimismo afirmaron que el Estado ha violado los derechos contenidos en los artículos 5, 13, 24, 8 y 25 de la Convención Americana “en conexión” con los artículos 1, 2 y 7.b) de la Convención de Belem do Pará, en relación con su obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos de las mujeres periodistas identificadas. Estos planteamientos fueron reiterados y complementados por los representantes en sus alegatos finales escritos. Las periodistas agredidas fueron Luisiana Ríos, Isabel Mavarez, Erika Paz, Anahís Cruz y Laura Castellanos, que representan el 25% de las personas agredidas. Alegaron que las agresiones por particulares y agentes del Estado en contra de las presuntas víctimas mujeres, configuran “una característica y un agravante [para] los hechos descritos en la demanda”, dado que los ataques se perpetraron también “tomando en consideración el sexo” de aquéllas, determinándose entonces como un ataque especialmente dirigido contra las mujeres, reiterado y tolerado por el Estado”.⁹⁰

“La Corte observa que los representantes se basan principalmente en un criterio cuantitativo para alegar que los hechos de agresión se produjeron “en razón del sexo” de las presuntas víctimas. Así, los representantes alegaron que la Corte debe tomar en cuenta que ellas se vieron afectadas por los actos de violencia de manera diferente y en mayor proporción a las presuntas víctimas hombres”.⁹¹

“No toda violación de derecho humano implica violación a la Convención de Belem do Pará”

“Este Tribunal considera necesario aclarar que no toda violación de un derecho humano cometida en perjuicio de una mujer conlleva necesariamente una violación de las disposiciones de la Convención de Belem do Pará. Aunque las periodistas mujeres hayan sido agredidas en los hechos de este caso, en todas las situaciones lo fueron junto a sus compañeros hombres. Los representantes no demostraron en qué sentido las agresiones fueron “especialmente dirigid[as] contra las mujeres”, ni explicaron las razones por las cuales las mujeres se convirtieron en un mayor blanco de ataque “por su condición [de

⁹⁰ Ibid. Párrafo 272 y 273

⁹¹ Ibid. Párrafo 278

mujer]”. Lo que ha sido establecido en este caso es que las presuntas víctimas se vieron enfrentadas a situaciones de riesgo, y en varios casos fueron agredidas física y verbalmente por particulares, en el ejercicio de sus labores periodísticas y no por otra condición personal. De esta manera, no ha sido demostrado que los hechos se basaran en el género o sexo de las presuntas víctimas”.⁹²

“Asimismo, la Corte considera que los representantes no especificaron las razones y el modo en que el Estado incurrió en una conducta “dirigida o planificada” hacia las presuntas víctimas mujeres, ni explicaron en qué medida los hechos probados en que aquéllas fueron afectadas “resultaron agravados por su condición de mujer”. Los representantes tampoco especificaron cuales hechos y en qué forma representan agresiones que “afectaron a las mujeres de manera diferente [o] en mayor proporción”. Tampoco han fundamentado sus alegatos en la existencia de actos que, bajo los artículos 1 y 2 de la Convención de Belém do Pará, puedan ser conceptualizados como “violencia contra la mujer”, ni cuales serían “las medidas apropiadas” que, bajo el artículo 7.b) de la misma, el Estado habría dejado de adoptar en este caso “para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer”. En definitiva, la Corte considera que no corresponde analizar los hechos del presente caso bajo las referidas disposiciones de la Convención de Belém do Pará”.⁹³

3.1.6. PUNTOS RESOLUTIVOS

DECLARA:

Por seis votos contra uno, que:

“6. No corresponde analizar los hechos del presente caso bajo los artículos 1, 2 y 7.b) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belem do Pará”), por las razones señaladas en los párrafos 274 a 280 de la presente Sentencia”.

3.1.7. COMENTARIO

⁹² Ibid. Párrafo 279

⁹³ Ibid. Párrafo 280

En este caso encontramos involucradas a 5 mujeres de las 20 víctimas consideradas por la Comisión, siendo que de todos los hechos denunciados solo en diez de ellos se vieron afectadas directamente estas mujeres que ejercían la labor de periodistas en tales circunstancias entre el diecisiete de diciembre del 2001 y el tres de marzo del 2014.

Sin embargo en este caso la Corte ha detallado que de los hechos materia de denuncia cometidos por funcionarios públicos y particulares en contra de las víctimas que eran periodistas vinculados a RCTV fueron cometidos porque cubrían noticias en la calle y estaban relacionados con la casa televisora, dado que esta era abiertamente contraria con la postura del Presidente de la Republica al mando de Venezuela, es decir que los actos de violencia que sufrieron las 5 mujeres consideradas víctimas no fue por su calidad de mujeres sino por esta relación que las hacía periodistas de la televisora que generaba las agresiones que soportaron.

Es así que en ningún momento se llegó a determinar por los representantes de los denunciantes, que las mujeres agraviadas tuvieron que sobrellevar los hechos narrados porque eran mujeres venezolanas protegidas por la Convención de Belém do Pará ratificada en el año de 1995 en este país, sino fue por su profesión que hizo que recibieran tales impropedios físicos y psicológicos.

En este orden de ideas se aprecia que no se llegó a determinar que según los artículos 1 y 2 de la Convención de Belem do Pará se han violentado los derechos de las mujeres periodistas víctimas de los actos de violencia porque estos hechos no fueron basados en su género sino solo por la profesión que realizaban al momento que se encontraban en las calles de Venezuela cubriendo noticias para RCTV, además la violencia física, sexual y psicológica aludida ha ocurrido tanto en el caso de los periodistas varones como mujeres, y no por ser una mujer atacada por esa calidad dentro de la comunidad siendo estas circunstancias toleradas por el Estado.

Por ultimo también se hace referencia al artículo 7b) de la Convención, sin embargo de la misma manera no se ha llegado a demostrar que no se ha actuado con la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en estos actos porque de por sí han sido investigados como agresiones a periodistas, por ende no podría enmarcarse las pesquisas solo en el caso de las mujeres o diferenciarse ellas de las que sufrieron sus

compañeros en el mismo momento, dado que en muchos de ellos se dieron cuando las mujeres víctimas se encontraban acompañadas de todo el personal que implicaba la cobertura de un reportaje, no siendo hechos aislados los de las féminas sino parte de un todo donde los periodistas vieron mellados otros derechos, pero que en este caso no tienen que ver con aquellos que son específicos para el caso de las mujeres conforme a la Convención de Belém do Pará.

Es importante denotar que iniciamos el análisis de las sentencias con una donde no se acredita los hechos de violencia contra la mujer para demostrar algo que de por sí la idiosincrasia nacional juzga: “que solo porque son mujeres ya les hacen caso”, “la ley beneficia a las mujeres y no se escucha a los hombres”, siendo este hecho desmentido con esta sentencia donde a pesar que se da en medio de actos de violencia cometidos por un Estado que abiertamente censura a todos los contrarios a él no podría agrandarse los hechos para también ser considerados como Violencia contra la Mujer, cuando tales ocurrieron por las circunstancias y actuaciones de las víctimas y no por el género de estas, dado que en el caso que todos los periodistas hubieran sido varones también hubieran sufrido los mismos agravios.

3.2. PEROZO VS. VENEZUELA

3.2.1. FECHA: 28 de enero del 2009

3.2.2. PRESENTACIÓN DEL CASO POR LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

PAIS DENUNCIADO	República Bolivariana de Venezuela
DERECHOS AFECTADOS PARA LA COMISIÓN	La Comisión solicitó a la Corte que declare que el Estado es responsable por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 13 (Libertad de Pensamiento y Expresión) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio de esas 44 presuntas víctimas.
DERECHOS AFECTADOS PARA LOS REPRESENTANTES DE LOS DENUNCIANTES	Los representantes a su vez, en sus alegatos finales solicitaron a la Corte que declare al Estado responsable por la violación de los artículos 5, 13, 8 y 25 de la Convención Americana “en conexión con” los artículos 1, 2 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belem do Pará”). Por último, solicitaron al Tribunal que ordene al Estado que adopte una serie de medidas de reparación.

*“La Comisión alegó que por haber buscado, recibido y difundido información, las presuntas víctimas fueron sujetas a diversos ataques y que el Estado no adoptó las medidas necesarias para prevenir los actos de hostigamiento, ni investigó y sancionó a los responsables con la debida diligencia”.*⁹⁴

⁹⁴ Caso Perozo vs. Venezuela sentencia de fecha 28 de enero del 2009, Ibid. Párrafo 3

3.2.3. VÍCTIMAS

La Corte considera como presuntas víctimas del presente caso únicamente a las 44 personas identificadas por la Comisión en esa calidad.⁹⁵

3.2.4. HECHOS

“La Comisión presentó aproximadamente 54 hechos ocurridos entre octubre de 2001 y octubre de 2005, consistentes en declaraciones de funcionarios públicos y en alegados hechos de agresiones, amenazas y hostigamientos cometidos en perjuicio de las presuntas víctimas. Hizo referencia a la existencia de cinco investigaciones y procedimientos abiertos o realizados en la jurisdicción penal en relación con esos hechos. Lo anterior es la base de sus alegatos de derecho”.⁹⁶

“A su vez, los representantes se refirieron a una serie de hechos, situaciones y valoraciones, que pretenden incluir como parte del contexto del presente caso y que consideran relevantes para demostrar un “cuadro de hostilidad, amenaza y agresión contra periodistas y medios de comunicación” y una “política de Estado o al menos un patrón de conducta del Estado, frente al ejercicio de la libertad de expresión”. Esos hechos consisten en una serie de normas de derecho interno y decisiones judiciales, a saber, inter alia: procedimientos administrativos sancionatorios contra canales de televisión, en particular Globovisión, dirigidos a suspender parcialmente las transmisiones o incluso a suspender o revocar la concesión de la televisora; múltiples acciones judiciales tendientes a sancionar a los medios de comunicación, incluso con la suspensión de su señal. Los representantes afirmaron que en el caso particular de Globovisión se han intentado acciones penales contra directivos y periodistas que trabajan en esa empresa, llevadas a cabo a través del Ministerio Público, y mencionaron una supuesta existencia de una campaña de desprestigio contra el canal protagonizada por medios de comunicación del Estado. Además mencionaron la existencia de una presión indirecta por parte del Estado al no otorgar las concesiones y permisos que ha

⁹⁵ Ibid. Párrafo 48

⁹⁶ Ibid, párrafo 59

solicitado Globovisión para ampliar su cobertura y la destitución irregular de jueces que han sentenciado casos a favor de la emisora de televisión ”.⁹⁷

“Al observar que la mayoría de los hechos indicados en la demanda fueron cometidos por particulares, la Comisión alegó que es posible atribuir responsabilidad internacional al Estado por esos actos de terceros, pues éste tenía conocimiento de una situación de riesgo real y no adoptó medidas razonables para evitarlo. Además, la Comisión alegó que la recurrencia de este tipo de eventos dirigidos contra trabajadores identificados con el canal Globovisión, por el solo hecho de pertenecer a ese medio percibido por un sector de la sociedad como opositor y golpista, “implica una extensión de los efectos en cuanto a la libertad en el ejercicio de una labor frente a las demás personas que se encuentran en igual situación”, pues la actuación de los particulares iba dirigida a perjudicar sus actividades de obtención y difusión de información y no constituyeron actos de violencia por cuestiones personales o algún elemento diferente a su vínculo laboral con el canal. A su vez, la Comisión consideró que el Estado no ha actuado de manera diligente y pronta en cuanto a su deber de investigar los hechos ”.⁹⁸

“Si bien el discurso de las autoridades públicas, aun el de contenido crítico o insultante está cubierto en principio por la libertad de expresión, no lo está cuando de manera cierta, inminente y verificable incita a actos de violencia entre la población. En estos casos, el Estado resulta responsable no sólo por el discurso oficial de violencia en que se agredió de manera reiterada, pública y abierta al canal, a sus periodistas y directivos, sino por las agresiones provocadas a la población civil por grupos de particulares en ejecución y seguimiento de dichos mensajes ”.⁹⁹

“En sus Informes anuales e Informes sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, emitidos entre 2003 y 2006, la Comisión constató la existencia de un clima de agresión y amenaza contra la libertad de expresión y, en particular, contra la integridad personal de periodistas, camarógrafos, fotógrafos y demás trabajadores de la comunicación social. Al identificar las áreas de especial atención en la materia, la Comisión observó la existencia de actos de “amenazas, ataques y actos de hostigamiento,

⁹⁷ Ibid. Párrafo 61

⁹⁸ Ibid. Párrafo 78

⁹⁹ Ibid. Párrafo 79

contra comunicadores sociales, especialmente aquellos que trabajan en la calle, así como también la falta de investigación en relación a dichas amenazas y ataques”. También se refirió a la falta de investigación de tales actos e hizo notar que en varias oportunidades solicitó al Estado la adopción de medidas cautelares con el fin de proteger la vida, integridad personal y libertad de expresión de periodistas, camarógrafos y fotógrafos atacados. Entre las recomendaciones hechas por la Comisión en sus informes, destacó “[m]antener desde las más altas instancias del Gobierno la condena pública a los ataques contra los comunicadores sociales, con el fin de prevenir acciones que fomenten” la privación de la vida, ataques, amenazas e intimidaciones a aquéllos. La Comisión también recibió información sobre agresiones a medios y comunicadores fuera del contexto del conflicto político y social, un aumento de procesos penales en contra de comunicadores sociales y de actos que podrían configurar formas de restricción indirecta en el ejercicio de la libertad de expresión. La Comisión manifestó su preocupación porque esos hechos podían obstaculizar el libre ejercicio del periodismo, tanto de los medios que se perciben como opositores, como los pertenecientes a los medios oficiales”.¹⁰⁰

“En ese contexto fueron emitidas las declaraciones de altos funcionarios públicos referidas en la demanda de la Comisión, en un programa de televisión y en intervenciones públicas en diferentes fechas y eventos ocurridos durante los años 2001 a 2005, que fueron transmitidas a través de medios de comunicación y tuvieron lugar en períodos de mayor inestabilidad política y conflictividad social. El Estado no ha controvertido que estos funcionarios públicos emitieran tales declaraciones”.¹⁰¹

“Los discursos y pronunciamientos señalados, de naturaleza esencialmente política, se refieren a los medios privados de comunicación social en Venezuela, en general, y a Globovisión, sus dueños y directivos, en particular, aunque no se hacen señalamientos a periodistas específicos. La prueba aportada permite comprobar que esas declaraciones contienen las expresiones que han sido enfatizadas por la Comisión y los representantes en sus alegatos. Así, el medio de comunicación social Globovisión, y en algunos casos sus dueños o directivos, son señalados como “enemigos de la revolución” o “enemigos del pueblo de Venezuela”. Además, se identifica a tal medio o a sus dueños, expresa o implícitamente, como partícipes en el golpe de Estado de 2002 y se hacen llamados a

¹⁰⁰ Ibid. Párrafo 133

¹⁰¹ Ibid. Párrafo 138

*identificarlos como tales y a “defender la salud mental [del] pueblo [venezolano]”; se incluye a Globovisión como uno de cuatro medios de comunicación privados aludidos como “los cuatro jinetes del Apocalipsis”; y se acusa a dicho medio de “conspira[r] contra la revolución”, de “perversión golpista y fascista” y de responder a un “plan terrorista””.*¹⁰²

*“Del análisis de los hechos alegados, la Corte observa que fueron cometidos por particulares y la mayoría ocurrieron durante el ejercicio de labores periodísticas de las presuntas víctimas, quienes relataron cómo habían sido afectadas en su vida profesional y personal. En general, coincidieron en el temor que les provocaba realizar sus labores periodísticas en las calles, en ciertas zonas y en la cobertura de determinados eventos; se refirieron a medidas de seguridad que tuvieron que emplear en sus labores, a las afectaciones a su salud y las consecuencias en sus relaciones interpersonales”.*¹⁰³

*“Además, otros actos fueron dirigidos contra Globovisión. Por ejemplo, fue probado que en dos ocasiones, los días 9 de julio y 18 de noviembre de 2002, personas indeterminadas arrojaron granadas fragmentarias a la sede del canal Globovisión y que en otra ocasión, el 17 de julio de 2002, fue arrojada una bomba de gas lacrimógeno a las instalaciones. Asimismo, en varios de los hechos se constató que la sede, vehículos y equipos de transmisión del canal resultaron dañados por particulares no identificados, y que hubo manifestaciones en las afueras de su sede”.*¹⁰⁴

*“En este caso, los referidos funcionarios públicos hicieron uso, en ejercicio de su investidura, de los medios que el Estado les proporcionaba para emitir sus declaraciones y discursos, y es por ello que tienen carácter oficial. Lo relevante es, para efectos del presente caso y en los contextos en que ocurrieron los hechos, que el contenido de tales pronunciamientos fue reiterado en varias oportunidades durante ese período. Sin embargo, no está acreditado que tales discursos demuestren o revelen, por sí mismos, la existencia de una política de Estado”.*¹⁰⁵

¹⁰² Ibid. Párrafo 139

¹⁰³ Ibid. Párrafo 141

¹⁰⁴ Ibid. Párrafo 142

¹⁰⁵ Ibid. Párrafo 150

*“En tanto funcionarios públicos tienen una posición de garante de los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, sus declaraciones no pueden desconocer éstos ni constituirse en formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento. Este deber de especial cuidado se ve particularmente acentuado en situaciones de mayor conflictividad social, alteraciones del orden público o polarización social o política, precisamente por el conjunto de riesgos que pueden implicar para determinadas personas o grupos en un momento dado”.*¹⁰⁶

“La Corte considera que no se desprende del contenido de los referidos discursos o declaraciones que se haya autorizado, instigado, instruido u ordenado, o de algún modo promovido, actos de agresión o violencia contra las presuntas víctimas, por parte de órganos estatales, funcionarios públicos o grupos de personas o individuos específicos.”¹⁰⁷

*La auto-identificación de todas las presuntas víctimas con la línea editorial de Globovisión no es una conditio sine qua non para considerar que un grupo de personas, conformado por personas vinculadas con ese medio de comunicación social, se vieran enfrentadas, en mayor o menor grado según el cargo que desempeñaban, a una misma situación de vulnerabilidad”.*¹⁰⁸

“La Corte considera que en la situación de vulnerabilidad real en que se encontraron las presuntas víctimas para realizar su labor periodística, conocida por las autoridades estatales, algunos contenidos de los referidos pronunciamientos son incompatibles con la obligación estatal de garantizar los derechos de esas personas a la integridad personal y a la libertad de buscar, recibir y difundir información, al haber podido intimidar a quienes se hallaban vinculados con ese medio de comunicación y constituir falta al deber de prevenir situaciones violatorias o de riesgo para los derechos de las personas”.

3.2.4.1. Los hechos en agravio de mujeres:

- *“22 de noviembre de 2001 la periodista Gabriela Perozo, el productor Aloys Marín, el camarógrafo Efraín Henríquez y el asistente de cámara Oscar Dávila se encontraban cubriendo una noticia cuando un grupo de personas golpearon el*

¹⁰⁶ Ibid. Párrafo 151

¹⁰⁷ Ibid. Párrafo 156

¹⁰⁸ Ibid. Párrafo 158

vehículo y el equipo con el que transmitían, por lo que debieron cubrir el evento desde una azotea. El Estado mencionó que Aloys Marín, señalado en la demanda como víctima de este hecho, no se encontraba presente y señaló que de las declaraciones testimoniales se desprende que no existió participación alguna de agentes estatales en las presuntas agresiones”.¹⁰⁹

- “La Comisión indicó que el 10 de diciembre de 2001 la periodista Yesenia Balza, el camarógrafo Carlos Quintero y el asistente de cámara Felipe Lugo se disponían a iniciar la cobertura de una manifestación, cuando fueron rodeados aproximadamente por 20 personas quienes los insultaron y amenazaron, algunos intentaron tapar las cámaras con sus manos y con pañuelos blancos, los acorralaron para que salieran del lugar y rodearon el automóvil en el cual intentaban salir, lo que impidió al equipo periodístico cubrir la manifestación. Los representantes mencionaron que los agresores quitaron la cámara al señor Carlos Quintero, lo tumbaron al piso, lo patearon y, “cuando [...] logró levantarse los agresores comenzaron a empujarlos a los tres, sin [...] siquiera considerar el estado de embarazo visible en que se encontraba la periodista Yesenia Balza”. El Estado señaló que la denuncia fue realizada un mes y 21 días después de ocurridos los hechos; que dicha denuncia se realizó por presuntas agresiones físicas en contra de Carlos Javier Quintero, mientras que Yesenia Balza y Felipe Lugo únicamente fueron señalados como testigos presenciales de los hechos”.
- “La Comisión alegó que el 20 de enero de 2002 la señora Mayela León, el señor Jorge Paz y un ayudante habrían sido rodeados, amenazados y agredidos verbalmente en el Observatorio Cajigal cuando intentaban cubrir la transmisión del programa “Aló Presidente”. Los representantes señalaron que los agresores “arremetieron agresivamente a golpearlos y darles de patadas y a gritarles ofensas y groserías”.¹¹⁰
- “La Comisión indicó que el 13 de junio de 2002, Beatriz Adrián, Jorge Paz y Alfredo Peña fueron rodeados, amenazados e insultados por un grupo de aproximadamente 40 personas en el Palacio Legislativo Federal y que el vehículo en el cual se transportaban fue dañado. La Comisión señaló que los miembros de la Policía Metropolitana que se encontraban en el lugar facilitaron la salida de las presuntas víctimas. La denuncia fue interpuesta casi nueve meses después de los

¹⁰⁹ Ibid. Párrafo 169

¹¹⁰ Ibid. Párrafo 185

*hechos y el Estado informó que se adelantaron ciertas diligencias para investigar los hechos. Al respecto, este Tribunal nota que el Ministerio Público tardó más de 4 años y medio en llevar a cabo la primera diligencia, demora que no fue justificada”.*¹¹¹

- *“La Comisión señaló que el 4 de septiembre de 2002 la señora Aymara Lorenzo y los señores Carlos Arroyo y Félix Padilla fueron agredidos verbalmente, que se les arrebató equipo de trabajo mientras cubrían una manifestación y que la policía presente en el lugar de los hechos no intervino en su auxilio”.*¹¹²
- *“La Comisión alegó en su escrito de demanda que el 11 de septiembre de 2002 la periodista Ana Karina Villalba, el camarógrafo Alí Vargas y el asistente Anthony Infantino fueron impedidos de cubrir una nota cuando una mujer los amenazó y golpeó fuertemente el micrófono de la señora Villalba, aunque un policía que se encontraba allí contuvo a la mujer¹⁸⁴. El Estado señaló que la denuncia respecto de este hecho fue realizada seis meses después de ocurrido, en la cual se denunciaron agresiones físicas y verbales en contra de Ana Karina Villalba; que existen contradicciones entre los hechos establecidos en la demanda, los hechos narrados por la señora Villalba y los hechos comprobados por el Ministerio Público”.*¹¹³
- *“La Comisión señaló que el 21 de septiembre de 2002 la periodista Rossana Rodríguez Gudiño, el camarógrafo Felipe Lugo Durán y su asistente Wilmer Escalona Arnal, fueron abordados por un grupo de individuos, quienes los amenazaron y dañaron su vehículo obligándolos a salir del mismo. El vehículo fue robado y posteriormente devuelto. Respecto a este hecho, los representantes señalaron que el equipo sustraído habría consistido en una cámara, micrófonos, un trípode y un aparato de radio comunicaciones y que no se presentó en el sitio ninguna autoridad policial que impidiera lo que estaba ocurriendo. El Estado señaló que la denuncia respecto a este hecho fue presentada cinco meses y dieciséis días después de ocurrir el mismo, pero que la investigación se inició de oficio por presuntos daños ocasionados al vehículo de Globovisión”.*¹¹⁴
- *“La Comisión señaló que el 3 de diciembre de 2002 la Guardia Nacional disparó balas de goma en contra de la periodista Aymara Lorenzo, el camarógrafo Richard*

¹¹¹ Ibid. Párrafo 196

¹¹² Ibid. Párrafo 203

¹¹³ Ibid. Párrafo 206

¹¹⁴ Ibid. Párrafo 211

López y el asistente de cámara Félix Padilla, mientras se encontraban cubriendo una pequeña manifestación, cuando ya se había logrado dispersar a los manifestantes¹⁹¹. Los representantes mencionaron que si bien se encontraba un muy reducido número de manifestantes, un contingente de la Guardia Nacional procedió a desalojar la zona con un nivel de violencia completamente desproporcionado, lanzando bombas lacrimógenas y perdigones y que, cuando sólo quedaban periodistas de Globovisión y otros canales, continuaron lanzándolos, creando una situación de evidente ataque y hostigamiento e incluso hiriendo a algunos trabajadores de medios”.¹¹⁵

- “La Comisión alegó que el 3 de enero de 2003 la periodista Carla María Angola y su equipo periodístico fueron insultados por particulares y que a la señora Angola le fue arrojado un líquido que ella identificó como orina²⁰⁰. El Estado mencionó que la denuncia respecto a este hecho fue realizada tres meses después de ocurrido, por presuntas agresiones verbales en contra de Carla María Angola Rodríguez”.¹¹⁶
- “La Comisión alegó que el 3 de diciembre de 2003 un grupo de particulares arrojaron botellas a un equipo periodístico de Globovisión, integrado por Ademar Dona, José Umbría y la periodista Martha Palma Troconis, quienes cubrían una manifestación de empleados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales; que intentaron golpear al camarógrafo y su asistente, quienes recibieron insultos, y que se retiraron sin terminar de cubrir la noticia. El Estado señaló que la denuncia por estos hechos fue realizada diez meses y veintitrés días luego de ocurridas las presuntas agresiones verbales”.¹¹⁷
- “La Comisión manifestó que el 1 de marzo de 2004 la periodista Janeth Carrasquilla recibió un impacto en su cabeza, mientras cubría una manifestación, producido por una bomba lacrimógena que la lesionó y alegó que esta acción implicó un exceso en cuanto al uso permisible de la fuerza en situaciones de alteración del orden público²²⁸. Los representantes, por su parte, señalaron que en dicho incidente mientras un grupo de manifestantes se desplazaba hacia la sede del partido Movimiento Quinta República de la zona, un contingente de la Guardia Nacional se presentó en el lugar para proteger la sede del partido de Gobierno y

¹¹⁵ Ibid párrafo 217

¹¹⁶ Ibid párrafo 223

¹¹⁷ Ibid. Párrafo 234

lanzó una gran número de bombas lacrimógenas, las que se dirigieron tanto a los manifestantes como hacia el lugar donde se encontraban los periodistas, quienes fueron perseguidos y atacados por esos agentes. El Estado, por su parte, señaló la existencia de discrepancias entre las distintas declaraciones de Janeth Carrasquilla y los testimonios de testigos presenciales de los hechos”.

- “La Comisión alegó que el 1 de marzo de 2004 un grupo periodístico integrado por Carla Angola, junto con su camarógrafo y asistente de cámara, se encontraban cubriendo una manifestación cuando el camarógrafo fue acorralado por un grupo de personas que pretendían impedir su labor. Al tornarse violenta la situación, el asistente de cámara lo ayudó a escapar y los tres corrieron hacia el vehículo mientras les lanzaban objetos, resultando el vehículo con abolladuras²⁴¹. El Estado mencionó que la denuncia respecto a estos hechos fue presentada nueve meses y veinticinco días después de ocurrido, si bien desde el mismo día del hecho el Ministerio Público inició de oficio la investigación correspondiente, por presuntas agresiones”.¹¹⁸
- “La Comisión señaló que el 29 de mayo de 2004 la periodista Martha Palma Troconis, el camarógrafo Joshua Torres y su asistente Víctor Henríquez fueron agredidos y amenazados en el barrio La Lucha, en Caracas, mientras cubrían el proceso de reparo de las firmas del referendo revocatorio. Además, el señor Torres fue golpeado en su cabeza con un tubo y la cámara le fue arrebatada y la periodista fue igualmente golpeada por los manifestantes, quienes la lanzaron al suelo. El Estado mencionó que la denuncia respecto de este hecho fue realizada casi cinco meses con posterioridad a los hechos y que de las declaraciones rendidas por los testigos se desprende que no existió participación alguna de agentes del Estado en los hechos narrados”.¹¹⁹
- “La Comisión mencionó que el 29 de mayo de 2004 en El Valle, en Caracas, durante el proceso de reparo de las firmas del referendo revocatorio, un testigo de mesa representante del gobierno pretendió impedir la entrada de un equipo periodístico de Globovisión encabezado por la periodista Carla Angola a uno de los centros de votación, pero uno de los efectivos militares que se encontraba en labores de resguardo permitió su entrada y fue posible grabar las imágenes y las entrevistas correspondientes. Al salir el equipo periodístico a la calle, sus

¹¹⁸ Ibid. Párrafo 254

¹¹⁹ Ibid. Párrafo 258

*integrantes habrían sido insultados y amenazados por cuatro personas indeterminadas, quienes trataron de golpear la cámara. Finalmente, los agresores habrían golpeado el vehículo de Globovisión causando abolladuras en la carrocería”.*¹²⁰

- *“La Comisión alegó que el 11 de abril de 2005, en las inmediaciones de Puente Llaguno, un equipo periodístico de Globovisión encabezado por Mayela León tuvo dificultades para cubrir el evento por los gritos que proferían algunas personas en su contra. Los trabajadores de Globovisión tuvieron que retirarse del lugar sin dar cobertura a la noticia. El Estado no menciona este hecho en sus alegatos ni hace mención alguna a diligencias de investigación que se habrían llevado a cabo”.*¹²¹

“Del análisis de los hechos alegados, la Corte concluye que no fue demostrada la alegada violación del derecho a la integridad física de las presuntas víctimas por acciones de agentes estatales, en los siete hechos específicamente señalados al respecto. Por otro lado, en cinco de los hechos probados ha sido constatado que personas o grupos de particulares indeterminados causaron daños a la integridad física y obstaculizaron el ejercicio de la labor periodística de Alfredo José Peña Isaya, Carlos Quintero, Felipe Antonio Lugo Durán, Janeth del Rosario Carrasquilla Villasmil, Jhonny Donato Ficarella Martín, Joshua Oscar Torres Ramos, Martha Isabel Herminia Palma Troconis y Yesenia Thais Balza Bolívar. Además, en 15 de los hechos probados ha sido constatado que personas o grupos de particulares indeterminados obstaculizaron el ejercicio de la labor periodística de Aloys Emmanuel Marín Díaz, Ana Karina Villalba, Aymara Anahí Lorenzo Ferrigni, Beatriz Alicia Adrián García, Carla María Angola Rodríguez, Carlos Arroyo, Ramón Darío Pacheco Villegas, Edgar Hernández, Efraín Antonio Henríquez Contreras, Félix José Padilla Geromes, Gabriela Margarita Perozo Cabrices, John Power, Jorge Manuel Paz Paz, José Vicente Antonetti Moreno, Mayela León Rodríguez, Richard Alexis López Valle y Zullivan René Peña Hernández”.

3.2.5. AFECTACIONES DE DERECHOS

“Los representantes alegaron que, de “los hechos objeto del presente caso contenidos en la demanda, [...] el 80% fueron perpetrados contra mujeres periodistas de Globovisión”,

¹²⁰ Ibid. Párrafo 263

¹²¹ Ibid. Párrafo 268

entre quienes señalaron a las señoras Ana Karina Villalba, Aymara Lorenzo, Beatriz Adrián, Carla Angola, Claudia Rojas, Gladys Rodríguez, Jeannette Carrasquilla, María Arenas, María Fernanda Flores, Marta Palma Trocones, Mayela León y Yesenia Balsa. Agregaron que de las 12 mujeres, algunas fueron agredidas de manera repetida en dos, tres y hasta cuatro oportunidades. Alegaron que por lo anterior el Estado es además responsable de violar el derecho a la integridad personal de estas personas, “en conexión con el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, ratificada por el Estado venezolano el 16 de enero de 1995”. Además solicitaron a la Corte que declare la violación de los artículos 5, 13, 8 y 25 de la Convención, “en conexión con los artículos 1, 2 [y] 7.b) de la Convención Interamericana” referida. Señalaron que 13 de las 44 presuntas víctimas periodistas, que representan el 30% de las personas agredidas, está constituida por mujeres y alegan que las agresiones físicas y morales que sufrieron los periodistas “atendieron principalmente a la condición del sexo”. Alegaron que las agresiones por particulares y agentes del Estado, en contra de las presuntas víctimas mujeres, configuran “una característica y un agravante [...] de los hechos descritos en la demanda”, dado que los ataques se perpetraron también tomando en consideración el sexo de aquéllas, determinándose entonces como un ataque especialmente dirigido contra las mujeres, reiterado y tolerado por el Estado”.¹²²

“La Corte observa que los representantes se basan principalmente en un criterio cuantitativo para alegar que los hechos de agresión se produjeron “en razón del sexo” de las presuntas víctimas. Mientras en sus alegatos finales orales alegaron que “de los hechos objeto del presente caso contenido en la demanda, 29 agresiones y ataques, ello es el 80%, fueron perpetrados contra mujeres periodistas de Globovisión”, en sus alegatos finales escritos alegaron que de las 44 víctimas, 13 son mujeres, representando un 30%. En sus alegatos finales escritos los representantes resaltaron dos hechos en particular”.¹²³

“Este Tribunal observa que hacen referencia a un hecho ocurrido el “10 de diciembre de 2008” a la señora Yesenia Balza. Asumiendo que la fecha es un error material y que el hecho referido es el ocurrido el 10 de diciembre de 2001, fue alegado y no controvertido que la señora Balza tenía tres meses de embarazo en ese momento. Sin embargo, los

¹²² Ibid. párrafo 288 - 289

¹²³ Ibid. Párrafo 292

*representantes no han fundamentado la forma en que el hecho descrito revele que la agresión que la señora Balza habría sufrido tuviera como motivo o finalidad, o al menos alguna connotación o efecto, basado en el sexo o género de la víctima o en su condición de embarazo”.*¹²⁴

“No toda violación de derecho humano implica violación a la Convención de Belem do Pará”

*“La Corte considera necesario aclarar que no toda violación de un derecho humano cometida en perjuicio de una mujer conlleva necesariamente una violación de las disposiciones de la Convención de Belem do Pará. Aunque las periodistas mujeres hayan sido agredidas en los hechos de este caso, en todas las situaciones lo fueron junto a sus compañeros hombres. Los representantes no demostraron en qué sentido las agresiones fueron “especialmente dirigid[as] contra las mujeres”, ni explicaron las razones por las cuales las mujeres se convirtieron en un mayor blanco de ataque “[por su] sexo”. Lo que ha sido establecido en este caso es que las presuntas víctimas se vieron enfrentadas a situaciones de riesgo, y en varios casos fueron agredidas física y verbalmente por particulares, en razón de laborar para el canal de televisión Globovisión y no por otra condición personal. De esta manera, no ha sido demostrado que los hechos se basaran en el género o sexo de las presuntas víctimas”.*¹²⁵

“Asimismo, la Corte considera que los representantes no especificaron las razones y el modo en que el Estado incurrió en una conducta “dirigida o planificada” hacia las presuntas víctimas mujeres, ni explicaron en qué medida los hechos probados en que aquéllas fueron afectadas “resultaron agravados por su condición de mujer”. Los representantes tampoco especificaron cuáles hechos y en qué forma representan agresiones que “afectaron a las mujeres de manera desproporcional”. Tampoco han fundamentado sus alegatos en la existencia de actos que, bajo los artículos 1 y 2 de la Convención de Belém do Pará, puedan ser conceptualizados como “violencia contra la mujer”, ni cuales serían “las medidas apropiadas” que, bajo el artículo 7.b) de la misma, el Estado habría dejado de adoptar en este caso “para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que

¹²⁴ Ibid. Párrafo 293

¹²⁵ Ibid. Párrafo 295

respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer”. En definitiva, la Corte considera que no corresponde analizar los hechos del presente caso bajo las referidas disposiciones de la Convención de Belém do Pará”.¹²⁶

3.2.6. PUNTOS RESOLUTIVOS

“9. No corresponde analizar los hechos del presente caso bajo los artículos 1, 2 y 7.b) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belem do Pará”), por las razones señaladas en los párrafos 388 a 396 de la presente Sentencia”.

3.2.7. COMENTARIO

En este caso al igual que el anterior contamos con una denuncia realizada por periodistas venezolanos quienes veían coactado el ejercicio de ejercer su profesión dentro del canal Globovisión que era considerado de oposición al gobierno imperante en Venezuela, siendo revisados 54 hechos de los cuales 14 incluían a mujeres, ocurridos entre octubre del dos mil uno y octubre del dos mil cinco.

Así también de las 44 víctimas 18 de ellas son mujeres, pero todas ellas sufrieron los actos de violencia no por su condición de tal sino porque además eran periodistas de la casa televisora nombrada, por lo que de la misma manera su actuación en este contexto se denota por la profesión que ejercían y no por el género que tienen, dado que cuando fueron agredidas fue en compañía de sus compañeros periodistas varones cuando cubrían un evento estatal, de tal forma que su sexo no fue una condición, sino más bien al momento de agredirlas no hicieron diferencia entre todos los periodistas y en su conjunto fueron lesionados.

Del mismo modo que en la anterior sentencia se hizo referencia a los artículos 1, 2 y 7b de la Convención Belém do Pará, sin embargo bajo los mismos argumentos que en la sentencia Rios vs Venezuela no se llegó a demostrar que el Estado Venezolano haya violentado a las periodistas mujeres por su sexo sino porque pertenecían a un canal que era opositor al del presidente de ese país y por ende eran agredidas por ello.

¹²⁶ Ibid. Párrafo 296

3.3. PENAL CASTRO CASTRO VS. PERÚ

3.3.1. FECHA: 25 de noviembre del 2006

3.3.2. PRESENTACION DEL CASO POR LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

PAIS DENUNCIADO	Estado del Perú
DERECHOS AFECTADOS PARA LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS	La Comisión presentó la demanda con el fin de que la Corte declare que el Estado es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4 (Derecho a la Vida) y 5 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención Americana, en relación con la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de “al menos 42” reclusos que fallecieron; la violación del artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención, en relación con la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la Convención, en perjuicio de “al menos 175” reclusos que resultaron heridos y de 322 reclusos “que habiendo resultado ilesos [supuestamente] fueron sometidos a trato cruel, inhumano y degradante”; y por la violación de los artículos 8.1 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención, en relación con la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de “las [presuntas] víctimas y sus familiares”.
DERECHOS AFECTADOS PARA LOS REPRESENTANTES DE LOS DENUNCIANTES	Los representantes además solicitaron a la Corte que declare al Estado responsable por la violación de los artículos 5, 13, 8 y 25 de la Convención Americana “en conexión con” los artículos 1, 2 y 7.b) de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belem do Pará”), en perjuicio de las presuntas

	víctimas mujeres
--	------------------

*“Los hechos expuestos por la Comisión en la demanda habrían ocurrido a partir del 6 de mayo de 1992 y se refieren a la ejecución del “Operativo Mudanza 1” dentro del Penal Miguel Castro Castro, durante el cual el Estado, supuestamente, produjo la muerte de al menos 42 internos, hirió a 175 internos, y sometió a trato cruel, inhumano y degradante a otros 322 internos. Los hechos también se refieren al supuesto trato cruel, inhumano y degradante experimentado por las presuntas víctimas con posterioridad al “Operativo Mudanza 1””.*¹²⁷

3.3.3. VÍCTIMAS

*“La Corte se pronunciará respecto de esas 31 personas que fueron incluidas en la demanda tomando en cuenta la prueba aportada, las observaciones de la Comisión, así como el hecho de que el Estado no se opuso a su inclusión como presuntas víctimas ni realizó ninguna observación al respecto, a pesar de que tuvo la oportunidad procesal para hacerlo. Por otra parte, en cuanto a los familiares de las presuntas víctimas en el procedimiento ante la Corte, tanto por medio de la interviniente común como a través de prueba para mejor resolver, se han consignado los nombres de otros familiares y se ha alegado a la Corte prueba al respecto”.*¹²⁸

3.3.4. HECHOS

*“Desde comienzos de la década de los ochenta hasta finales del año 2000, se vivió en el Perú un conflicto entre grupos armados y agentes de las fuerzas policial y militar. Se agudizó en medio de una práctica sistemática de violaciones a los derechos humanos, entre ellas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas sospechosas de pertenecer a grupos armados al margen de la ley, como Sendero Luminoso (en adelante SL) y el Movimiento Revolucionario Tupac Amarú (en adelante MRTA), prácticas realizadas por agentes estatales siguiendo órdenes de jefes militares y policiales”*¹²⁹.

¹²⁷ Caso Penal Miguel Castro Castro vs. Perú, sentencia emitida el 25 de noviembre del 2006, Ibid. Párrafo 1333

¹²⁸ Ibid. Párrafo 175 - 176

¹²⁹ Ibid. Párrafo 197.1

“Por ello el Estado, mediante el Decreto Supremo No. 065-2001-PCM de 4 de julio de 2001, modificado por el Decreto Supremo No. 101-2001-PCM, emitidos ambos por el Presidente de la República, creó una Comisión de la Verdad y Reconciliación (en adelante CVR) con la finalidad de esclarecer el proceso, los hechos y responsabilidades de la violencia terrorista y de la violación de los derechos humanos producidos desde mayo de 1980 hasta noviembre de 2000, imputables tanto a las organizaciones terroristas como a los agentes del Estado, así como proponer iniciativas destinadas a afirmar la paz y la concordia entre los peruanos. Dicha Comisión emitió su Informe Final el 27 de agosto de 2003.¹³⁰ La CVR en su informe final, dentro del capítulo denominado “Los casos investigados por la CVR”, dedicó un apartado a los hechos sucedidos en el Penal Miguel Castro Castro titulado “Las ejecuciones extrajudiciales en el penal Canto Grande”¹³¹

“El penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro es un reclusorio para varones y está ubicado en San Juan de Lurigancho, al este de la ciudad de Lima, capital del Perú. Está constituido por 12 pabellones de 4 pisos, identificados como 1-A y 1-B hasta 6-A y 6-B. Cada uno de estos pabellones cuenta con un patio independiente. El acceso a los pabellones se efectúa a través de un patio central de forma octogonal, conocido como “Rotonda”. A la entrada de cada pabellón existe un espacio enrejado denominado “Gallinero”. El conjunto de pabellones se encuentra rodeado por un patio de arena conocido como “Tierra de nadie”. La entrada al establecimiento está constituida por un patio y oficinas administrativas, conocidos como “Admisión”.¹³²

“En la época en que ocurrieron los hechos, el pabellón 1A del Penal Miguel Castro Castro estaba ocupado por alrededor de 135 internas mujeres y 50 varones, y el pabellón 4B lo estaba por aproximadamente 400 internos varones. Los internos de los pabellones 1A y 4B se encontraban acusados o sentenciados por los delitos de terrorismo o traición a la patria, y eran presuntamente miembros del Sendero Luminoso. Muchos eran procesados sin sentencia condenatoria y en algunos casos se dispuso el sobreseimiento de las causas”.¹³³

¹³⁰ Ibid. Párrafo 197.3

¹³¹ Ibid. Párrafo 197.6

¹³² Ibid. Párrafo 197.12

¹³³ Ibid. Párrafo 197.13

*“El 14 de abril de 1992 se realizó una inspección en el interior del pabellón 1A del penal Miguel Castro Castro. En el acta de inspección se hizo constar que no se hallaron armas de fuego, explosivos ni excavación de túneles.”¹³⁴ El Decreto Ley No. 25421 de 6 de abril de 1992 ordenó la reorganización del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y encargó a la Policía Nacional del Perú el control de la seguridad en los establecimientos penitenciarios. Fue en el marco de esta disposición que se planificó y ejecutó el “Operativo Mudanza 1”. La versión oficial fue que dicho “operativo” consistía en el traslado de las mujeres que se hallaban reclusas en el pabellón 1A del Penal Miguel Castro Castro, a la cárcel de máxima seguridad de mujeres en Chorrillos.”¹³⁵ El objetivo real del “operativo” no fue el referido traslado de las internas, sino que se trató de un ataque premeditado, un operativo diseñado para atentarse contra la vida y la integridad de los prisioneros que se encontraban en los pabellones 1A y 4B del Penal Miguel Castro Castro. Los actos de violencia fueron dirigidos contra dichos pabellones, ocupados en el momento de los hechos por internos acusados o sentenciados por delitos de terrorismo y traición a la patria”.*¹³⁶

“El “operativo” comenzó el miércoles 6 de mayo de 1992, día de visita femenina en el penal, afuera se encontraban gran número de familiares, madres, hermanas, esposas e hijos, quienes se percataron, desde el exterior, de lo que ocurrió. Además, el domingo 10 de mayo de 1992 se celebraba el día de las madres en el Perú. Los familiares que se encontraban afuera del penal trataron de que se les informara sobre lo que estaba sucediendo en el interior del mismo, y cuál era el estado de salud de sus familiares. Sin embargo, no obtuvieron respuesta. Algunos de ellos fueron insultados y golpeados, les arrojaron agua y bombas lacrimógenas para obligarlos a alejarse del penal; y si trataban de escalar un cerro, para poder ver mejor lo que sucedía en el interior del penal, eran ahuyentados con disparos”.

“Aproximadamente a las 4:00 horas del miércoles 6 de mayo de 1992, efectivos de las fuerzas de seguridad peruanas iniciaron el “operativo”. Al efecto, la Policía Nacional derribó parte de la pared externa del patio del pabellón 1A utilizando explosivos. Se produjeron tres detonaciones sucesivas. Simultáneamente los efectivos policiales tomaron

¹³⁴ Ibid. Párrafo 197.14

¹³⁵ Ibid. Párrafo 197.15

¹³⁶ Ibid. Párrafo 197.16

el control de los techos del penal abriendo boquetes en los mismos, desde los cuales realizaron disparos con armas de fuego. Los agentes estatales, policía y ejército utilizaron armas de guerra, explosivos, bombas lacrimógenas, vomitivas y paralizantes en contra de los internos, desde el inicio de la operación. Las balas y granadas utilizadas se fragmentaban al impactar contra las paredes, hiriendo a muchos internos con esquirlas. En los techos y ventanas de los otros pabellones se encontraban ubicados francotiradores. Durante el desarrollo del “operativo” participaron personal policial, efectivos de las unidades especializadas UDEX, SUAT, USE, DINOES y efectivos del Ejército peruano”.

137

“Entre las 9:00 y las 9:30 horas del 6 de mayo la Policía Nacional introdujo granadas, bombas de gas de fósforo blanco y gases lacrimógenos en el pabellón 1A, lo que produjo en los internos cuadros de asfixia, sensación de ardor en el sistema respiratorio, en los ojos y en la piel. Si bien al principio los internos utilizaron pedazos de tela empapados en vinagre para resistir los gases disparados en el espacio cerrado de los pabellones atacados, cuando el vinagre se agotó tuvieron que usar su propia orina para este propósito. A las 10:00 horas los reclusos del pabellón 4B iniciaron una protesta por el ataque a sus compañeras; la policía reaccionó disparándoles. Existía comunicación subterránea entre los pabellones 4B y 1A, a través de ductos o túneles mediante los cuales los internos se trasladaron del pabellón 4B al 1A y viceversa. A la salida de dichos túneles se enfrentaron con grupos de policías, resultando varios muertos y heridos. Para poder trasladarse hacia el pabellón 4B y evitar ser alcanzadas por las balas de los francotiradores, las internas tuvieron que arrastrarse pegadas al piso, y pasar por encima de cuerpos de otros internos recién fallecidos”.¹³⁸

“Por la tarde del 6 de mayo de 1992 los agentes de seguridad ingresaron al cuarto piso del pabellón 1A, deteniendo a un grupo de internas que se encontraban heridas a causa de los disparos y las explosiones”.¹³⁹

¹³⁷ Ibid. Párrafo 197.18-197.21

¹³⁸ Ibid. Párrafo 197.22 – 197.24

¹³⁹ Ibid. Párrafo 197.26

“Los presos que tenían algún conocimiento médico o de enfermería instalaron en el pabellón 4B un dispensario improvisado para atender a alrededor de 70 personas heridas. Los ataques continuaron el resto del día”.¹⁴⁰

“Se prohibió la presencia en las cercanías del penal de los organismos de derechos humanos, se dispuso el corte de luz, agua y alimentos para los internos, así como el incremento de los ataques con armas de fuego y explosivos. Por la tarde, efectivos policiales y miembros de las Fuerzas Armadas intensificaron los ataques contra el pabellón 4B, utilizando granadas, ametralladoras y bombas lacrimógenas”.¹⁴¹

“El 8 de mayo de 1992, tercer día del “operativo”, los efectivos policiales, conjuntamente con el Ejército, continuaron el ataque con cohetes disparados desde helicópteros, fuego de mortero y granadas”.¹⁴²

“Una delegación de internas salió de los pabellones a conversar con la Fiscal Mirtha Campos, retornando sólo una de las internas a comunicar los acuerdos. Como parte de las negociaciones aproximadamente 30 internos heridos salieron a la zona del “gallinero” del pabellón 4B para ser llevados al hospital, pero ello no se cumplió, sino fueron mantenidos a la intemperie e inmóviles. Hubo varios intentos de negociación entre delegados de los internos y autoridades del Estado, pero no lograron alcanzar un acuerdo, pues los internos exigían la presencia de la Cruz Roja, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de sus abogados y familiares para el traslado a otros penales, así como la atención médica inmediata a los heridos, quienes hasta ese momento habían sido auxiliados por los mismos presos que lanzaban medicinas desde otros pabellones. Por su parte, el Estado exigía la rendición de los internos sin condiciones y su salida del pabellón 4B, dejando en el interior a los heridos y los muertos para que aquellos fueran atendidos más tarde”.¹⁴³

“El 9 de mayo de 1992 fue el último día del “operativo”, y desde las 6:00 horas se reanudó con mayor intensidad el ataque contra el pabellón 4B, con más granadas, disparos, explosiones e incendios que provocaron varios muertos y heridos.

¹⁴⁰ Ibid. Párrafo 197.27

¹⁴¹ Ibid. Párrafo 197.30 – 197.31

¹⁴² Ibid. Párrafo 197.32

¹⁴³ Ibid. Párrafo 197.33-197.34

Aproximadamente a las 18:00 horas de ese mismo día los reclusos anunciaron a los agentes estatales que iban a salir y les pidieron que dejaran de disparar. Grupos de internos desarmados, compuestos principalmente por personas señaladas como miembros de la directiva de Sendero Luminoso, salieron al exterior del pabellón, momento en el que fueron alcanzados por ráfagas de balas disparadas por agentes estatales. Falleció la mayoría de esos internos. Posteriormente un gran número de internos salieron del pabellón 4B, a paso ligero. Los agentes de seguridad del Estado les dispararon indiscriminadamente y en diferentes partes del cuerpo, inclusive cuando se encontraban heridos en el suelo. Seguidamente, entre gritos, insultos y forcejeos la policía separó a los hombres de las mujeres y los obligaron a acostarse boca abajo en las zonas conocidas como “tierra de nadie” y “admisión”.”¹⁴⁴

*“Cuando los internos se encontraban bajo el control de las autoridades estatales, algunos fueron separados del grupo y ejecutados por agentes estatales. Uno de los cadáveres presentaba mutilaciones y signos de tortura. La mayoría de los internos víctimas mortales presentaban entre 3 y 12 impactos de bala en la cabeza y el tórax”.*¹⁴⁵

*“Una vez que salieron de los pabellones la mayoría de los internos sobrevivientes fueron obligados a permanecer en las zonas del penal denominadas “tierra de nadie” y “admisión”, tendidos boca abajo sobre la tierra, en posición de cúbito ventral, sin abrigo, a la intemperie, permitiéndoseles levantarse únicamente para ir a orinar, y fueron objeto de constantes golpes y agresiones. Quienes estuvieron en estas condiciones durante varios días, recibieron como único alimento pan y agua de manera irregular por las mañanas y una sopa aguada, y fueron vigilados por agentes de seguridad armados y con perros, y si alguien se movía o se quejaba dichos agentes se paraban sobre el cuerpo del sobreviviente y lo insultaban. Dentro de este grupo de personas se encontraban heridos y mujeres en estado de gestación, quienes también fueron forzadas a yacer boca abajo, al igual que los demás detenidos. Muchos permanecieron en estas condiciones hasta el 22 de mayo de 1992”.*¹⁴⁶

¹⁴⁴ Ibid. Párrafo 197.36-197.37

¹⁴⁵ Ibid. Párrafo 197.39

¹⁴⁶ Ibid. Párrafo 197.42

“El 10 de mayo de 1992 el Presidente Alberto Fujimori Fujimori estuvo presente en el penal y caminó entre los prisioneros tendidos boca abajo en el suelo de los patios del presidio”.¹⁴⁷

“Algunas internas mujeres fueron trasladadas al penal “Santa Mónica de Chorrillos” y otras al penal “Cristo Rey de Cachiche”. Los internos varones fueron mantenidos en el patio del penal hasta el 22 de mayo de 1992, fecha en que algunos quedaron reubicados dentro del mismo Penal Miguel Castro Castro y otros fueron trasladados a otros penales como “Lurigancho” y “Yanamayo”. Algunos de los internos heridos, tanto hombres como mujeres, fueron llevados al Hospital de la Sanidad de la Policía, para luego ser reubicados en los penales antes mencionados”¹⁴⁸.

“El 22 de mayo de 1992 agentes del Estado trasladaron a los prisioneros que se encontraban en “tierra de nadie” y en “admisión” al patio del pabellón 1A. Durante ese traslado, los agentes se colocaron en filas paralelas formando un callejón por el cual debían pasar los internos, quienes habían sido obligados a desnudarse, y fueron golpeados con objetos contundentes, en la cabeza, los riñones y otras partes del cuerpo”.¹⁴⁹

“Muchos de los heridos fueron mantenidos sin atención médica por varios días y los heridos que fueron trasladados al hospital no recibieron los medicamentos ni la atención médica que requerían. Estas omisiones causaron complicaciones en la salud de algunos internos y en otros provocó su muerte. Los traslados tanto al hospital como a los centros penales se realizaron en camiones, donde los internos, incluso los heridos, iban hacinados uno encima de otro. Durante dichos traslados recibieron golpes e insultos. Algunas internas e internos heridos fueron trasladados al Hospital de la Sanidad de la Policía. Allí fueron desnudados y obligados a permanecer sin ropa durante casi todo el tiempo que estuvieron en el hospital, que en algunos casos se prolongó durante varios días y en otros durante semanas. En algunos casos les dieron una bata luego de quince días, al momento de trasladarlas a los penales donde fueron reubicadas. En el Hospital se encontraban rodeados de individuos armados, quienes aparentemente eran miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. A las internas no se les permitió asearse, estaban cubiertas con tan

¹⁴⁷ Ibid. Párrafo 197.43

¹⁴⁸ Ibid. párrafo 197.44

¹⁴⁹ Ibid. Párrafo 197.46

solo una sábana, y en algunos casos para utilizar los servicios sanitarios debían hacerlo acompañadas de un guardia armado, quien no les permitía cerrar la puerta y las apuntaba con el arma mientras hacían sus necesidades fisiológicas. Cuando llegó al Hospital de la Sanidad de la Policía una de las internas fue objeto de una “inspección” vaginal dactilar, realizada por varias personas encapuchadas a la vez, con suma brusquedad, bajo el pretexto de revisarla”.¹⁵⁰

“Las internas trasladadas a las cárceles de “Santa Mónica de Chorrillos” y de “Cristo Rey de Cachiche” fueron objeto de constantes maltratos físicos y psicológicos. Fueron mantenidas sin contacto con el mundo exterior, ni acceso a libros, televisión, radios o periódicos. No se les permitía dialogar entre sí, leer o estudiar, ni realizar trabajos manuales de ningún tipo, ni siquiera aquellos que trataban de realizar con hilos tomados de sus propias ropas, con migas de pan o con restos de “valvas de choro” que venían en la sopa. La violación de cualquiera de estas prohibiciones era motivo de golpizas. Tampoco tenían acceso a materiales de aseo personal, tales como jabón, papel higiénico, toallas sanitarias, ni ropa íntima para cambiarse, así como ropa de abrigo. Permanecían encerradas 23 horas y media o 24 horas del día en una celda de dos metros por dos metros, la cual compartían al menos dos personas. Dichas celdas no tenían acceso a luz de ningún tipo, natural o artificial, por lo que permanecían en una oscuridad constante. Los alimentos eran escasos. Eran objeto de constantes requisas, durante las cuales recibían golpes, puntapiés, choques eléctricos, golpes en la planta de los pies con varillas, les arrojaban agua y las amenazaban con matarlas. Asimismo, si se negaban a cantar el himno nacional eran castigadas”.¹⁵¹

“Una vez concluido el “operativo”, e incluso después de que fueron trasladados a hospitales u otros establecimientos penitenciarios, se impidió a los internos comunicarse con sus familiares y abogados durante varios días y en algunos casos durante semanas o meses. Los familiares de los internos recorrieron durante varios días hospitales y morgues en busca de sus seres queridos. Trataron, sin éxito, de obtener información acerca de lo ocurrido en el interior del penal, quiénes estaban vivos y quiénes muertos, a dónde los habían trasladado y el estado de salud de sus familiares. No se les proporcionó ninguna ayuda para buscar e identificar los restos de sus familiares. Luego de levantada

¹⁵⁰ Ibid. Párrafo 197. 47 – 197.50

¹⁵¹ Ibid. Párrafo 197.51

*la incomunicación absoluta aplicada a las internas e internos durante semanas, el régimen de visitas impuesto a aquéllas sólo les permitía comunicarse con sus familiares, incluyendo sus hijos, una vez al mes, cosa que hacían a través de una malla”.*¹⁵²

*“Se acreditó ante la Corte que las internas Eva Challco, Vicenta Genua López y Sabina Quispe Rojas al momento de los hechos en Castro Castro se encontraban embarazadas. Tenían, respectivamente, 7, 5 y 8 meses de embarazo. Las internas Eva Challco y Sabina Quispe dieron a luz cuando se encontraban, respectivamente, en las cárceles de Cachiche y Chorrillos, y no recibieron atención médica sino hasta que las llevaron al hospital para el parto. La interna Sabina Quispe no recibió atención médica post parto”.*¹⁵³

*“Los internos presuntas víctimas de este caso han sido calificados como terroristas, incluso por los medios de prensa, aun cuando muchos de ellos se encontraban detenidos sin sentencia condenatoria y en varios casos fueron sobreseídos los procesos correspondientes. Asimismo, se estigmatizó a sus familias y, en algunos casos, éstas han sido rechazadas, excluidas y apartadas por la sociedad e incluso por su círculo más íntimo”.*¹⁵⁴

*“El 11 de mayo de 1992 peritos del Laboratorio Central de Criminalística efectuaron un examen físico químico en los pabellones 4B y 1A. Se removieron escombros y enseres y se retiraron los cadáveres para su traslado a la Morgue Central de Lima, en presencia del Juez Instructor de Turno. Asimismo, se realizaron pericias médicas forenses, toxicológicas y de dosaje etílico, balísticas, y de absorción atómica. No se hicieron actas de levantamiento de cadáveres. Los certificados de necropsia e informes médicos forenses se limitan a describir las heridas sufridas por las víctimas mortales y las lesiones encontradas en algunos de los heridos. En dichos informes no se da cuenta de los proyectiles recuperados de los cuerpos de las víctimas”.*¹⁵⁵

“El 17 de abril de 2002 se creó la Fiscalía Especializada para Desapariciones Forzadas, Ejecuciones Extrajudiciales y Exhumación de Fosas Clandestinas. La Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú llevó a cabo una investigación, que

¹⁵² Ibid. Párrafo 197.54-197.56

¹⁵³ Ibid. Párrafo 197.57

¹⁵⁴ Ibid. Párrafo 197.58

¹⁵⁵ Ibid. Párrafo 197.60

*consta en el Atestado No. 121 de 26 de mayo de 2004, ampliado mediante Parte No. 468 de 28 de noviembre de 2004, “con relación al presunto Delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud (Homicidio Calificado por PAF y Tentativa Punible de Homicidio con subsecuentes lesiones por PAF) y presuntas Ejecuciones Extrajudiciales, ocurrido el 9 de mayo de 1992 entre las 17:30 y las 18:30 horas aproximadamente en agravio de los internos por terrorismo reclusos en el Establecimiento Penal de Máxima Seguridad Miguel Castro Castro”. En dichas investigaciones no se logró individualizar a los responsables directos de los citados delitos”.*¹⁵⁶

“En el año 1992 la investigación fiscal relacionada con los hechos del presente caso estuvo encaminada a determinar exclusivamente la responsabilidad de los internos. Mediante sentencia de 20 de abril de 1996, emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, los acusados fueron condenados a cadena perpetua. Dicha sentencia fue anulada y se dio inicio a un nuevo juzgamiento, es así que el 3 de febrero de 2004 la Sala Nacional para Terrorismo de la Corte Suprema de Justicia del Perú emitió una sentencia en la que, luego de meses de investigaciones, audiencias y tomas de declaraciones, absolvió a los internos que habían sido acusados. En dicha sentencia, la Sala de Terrorismo estableció, que “el 6 de mayo de 1992 los internos de los pabellones Uno A y cuatro B no se encontraban amotinados, ni llevando a cabo acto de fuerza o despliegue de violencia alguna, que hubiere justificado una intervención de la fuerza pública de las características [...] del operativo ‘Mudanza I’”. Asimismo estableció que “el mantenimiento por parte de los internos [...] de una resistencia armada al desarrollo del operativo durante los cuatro días referidos, resultaba materialmente imposible, debido al volumen del fuego (de armas largas) y de las cargas de demolición a que eran sometidos los pabellones que ocupaban”. Además, señaló que “[l]o antes establecido no enerva el hecho que frente a las primeras acciones del operativo, se produjera una inicial resistencia armada por parte de un sector de los internos, la misma que el Colegiado Juzgador [...] ha llegado a establecer que se produjo luego de compulsar no solo las versiones de los efectivos policiales que testificaron, sino también el hecho que se diera el fallecimiento del efectivo policial José Idroho Olano[, ...] como consecuencia de haber recibido el impacto de proyectiles de armas de fuego en la cabeza, y heridas en [varios]

¹⁵⁶ Ibid. Párrafo 197.63 – 197.65

efectivos policiales [...] por esquivas de explosivos algunos y proyectil de armas de fuego otros”¹⁵⁷

“El 31 de mayo de 2005 la Fiscalía Especializada para Desapariciones Forzadas, Ejecuciones Extrajudiciales y Exhumación de Fosas Clandestinas presentó la denuncia penal No. 35-02, por el Delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, Homicidio Calificado, en agravio de presuntas víctimas fallecidas de este caso, basada en los hechos acontecidos en el Penal Miguel Castro Castro entre los días 6 y 10 de mayo de 1992 por Delitos contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, Homicidio Calificado- Asesinato, y por el delito de Omisión Impropia de Homicidio Calificado- Asesinato, en agravio de presuntas víctimas fallecidas de este caso. Contra cada uno de los encausados se dictó mandato de comparecencia restringida¹⁵⁸ El 29 de agosto de 2006 el Segundo Juzgado Penal Supraprovincial ordenó “abrir instrucción en la vía ordinaria contra Alberto Fujimori Fujimori, como presunto autor del delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en la modalidad de Homicidio Calificado, en agravio de [40 presuntas víctimas fallecidas en este caso]”. Asimismo se decretó en su contra “la medida de coerción personal de DETENCIÓN, ordenándose la inmediata ubicación y captura a nivel nacional e internacional” y se ordenó practicar el embargo preventivo de bienes muebles e inmuebles y de las cuentas bancarias”.¹⁵⁹

Sobre las mujeres

“En el informe mencionado se analizó que, durante el conflicto interno, las mujeres se vieron afectadas por la violencia de manera diferente a los hombres. La CVR incluyó en su informe un capítulo específico sobre la violencia sexual contra las mujeres y también se refirió a la situación que experimentaron las madres reclusas en centros penitenciarios. Asimismo, en dicho informe se concluyó que durante el conflicto interno y con motivo de éste los agentes estatales fueron responsables de aproximadamente un 83% de los casos de violación sexual contra las mujeres”.¹⁶⁰

“No escapa a la consideración de la Corte la magnitud de la fuerza utilizada en ese primer acto del “operativo” realizado en la madrugada del 6 de mayo de 1992 “las

¹⁵⁷ Ibid. Párrafo 197.66

¹⁵⁸ Ibid. Párrafo 197.67

¹⁵⁹ Ibid. Párrafo 197.75

¹⁶⁰ Ibid. Párrafo 206

fuerzas de seguridad del Estado emplearon, desde el inicio del ‘operativo’, fuerza excesiva e inclusive material bélico que ocasionó la destrucción parcial de los pabellones”. Según las explicaciones del Estado, en la época de los hechos se utilizó la fuerza porque los internos se encontraban amotinados. Sin embargo no existía un motín que justificara el uso de fuerza por parte del Estado, y que “[n]ada en la prueba actuada durante el proceso ante la Comisión probó que en efecto el operativo ‘Mudanza I’ fue un operativo legal con fines de un traslado de prisioneros”. “[l]a Comisión [...] se asienta en la versión de los hechos reflejad[a] en un reporte emanado de un organismo Estatal peruano (la CVR)”, “[s]i el objeto hubiera sido un ‘necesario’ traslado de mujeres prisioneras a otra prisión ‘porque ya no existía capacidad en dicho penal’ ¿por qué se continuó llevando prisioneras hasta la última semana a precisamente dicho lugar?”. No ha sido probado ante esta Corte que existiera un motín cuando se realizó ese primer acto del “operativo”, ni otra situación que ameritara el uso legítimo de la fuerza por los agentes del Estado. Por el contrario, el comportamiento observado por los agentes de seguridad, altas autoridades del Estado y otros funcionarios estatales durante los cuatro días que duró el “operativo”, así como con posterioridad a éste, demuestran que se trató de un ataque ejecutado para atentar contra la vida e integridad de las internas e internos que se encontraban en los pabellones 1A y 4B del Penal Miguel Castro Castro”.¹⁶¹

“Para llegar a la conclusión de que no existía una causa que ameritara el uso legítimo de la fuerza y que se trató de un ataque ejecutado para atentar contra la vida e integridad de las internas e internos que se encontraban en los pabellones 1A y 4B, la Corte ha tomado en consideración, entre otras, las siguientes actuaciones y omisiones en que incurrieron las autoridades estatales en la época de los hechos:

- las autoridades estatales no notificaron que el día 6 de mayo de 1992 realizarían un traslado de las internas;*
- el primer acto del “operativo” fue sumamente violento y no hay prueba de que los agentes estatales hubieren recurrido a las medidas que es indispensable adoptar previamente al uso de la fuerza; es decir, el primero y único recurso fue el ataque contra las internas;*
- desde el primer acto se utilizaron explosivos para derribar la pared externa del pabellón 1A;*

¹⁶¹ Ibid. Párrafo 210 - 215

- desde el primer día del “operativo” y durante los tres siguientes se empleó armamento que los peritos han calificado como de guerra o propio de una “incursión militar”
- la magnitud de la fuerza empleada también se desprende de que en el “operativo” participaron agentes de la policía, del ejército y de fuerzas especiales tales como DINOES, UDEX, SUAT y USE, quienes incluso se ubicaron como francotiradores en los techos del penal y dispararon contra los internos;
- el tipo de heridas sufridas por los internos confirman que los prisioneros esquivaron descargas de armas de fuego dirigidas hacia ellos; y algunos prisioneros murieron a causa de explosiones y quemaduras. Asimismo, los prisioneros presentaban heridas en la espalda y en las extremidades. Además, la mayoría de los internos que fallecieron presentaban entre 3 y 12 impactos de bala en zonas de la cabeza y el tórax;
- a pesar de que durante el desarrollo del “operativo” varios órganos internacionales y otras organizaciones ofrecieron su intervención, el Estado no utilizó medios que no fueran la fuerza letal;
- en el último día del “operativo” los agentes estatales dispararon contra los internos que salieron del pabellón 4B, después de haber pedido que no les dispararan;
- algunos internos que se encontraban bajo el control de las autoridades estatales fueron separados del grupo y ejecutados por agentes estatales;
- durante los días del “operativo” se publicó que, en al menos dos ocasiones , el entonces Presidente de la República, Alberto Fujimori, se reunió en las instalaciones de la Comandancia General del Ejército, con el Consejo de Ministros y autoridades policiales y militares, para evaluar la situación. Asimismo, el día 10 de mayo Fujimori se presentó en el penal y caminó entre los prisioneros tendidos boca abajo en el suelo de los patios del presidio;
- una vez terminado el “operativo” y encontrándose los internos bajo el control de las autoridades estatales, el Estado no brindó a algunos de ellos la necesaria asistencia médica, durante horas, y a otros durante días, como consecuencia de lo cual algunos murieron y otros resultaron con secuelas físicas permanentes;
- después de concluido el “operativo” algunos de los internos heridos que permanecieron durante horas sin asistencia médica fueron llevados a hospitales, en los que varios de ellos no recibieron los medicamentos que requerían; y

- las autoridades estatales incurrieron en graves omisiones en la recolección, preservación y análisis de la prueba”.¹⁶²

*“Es importante observar las diferencias que hubo en el número de bajas: 41 internos identificados y un policía, así como el número de internos heridos (aproximadamente 190) en contraste con aproximadamente 9 agentes policiales heridos. El Estado no ha establecido la causa de la muerte del policía ni de las heridas de los referidos agentes”.*¹⁶³

Sobre las mujeres internas

*“Los referidos actos de violencia extrema del llamado “Operativo Mudanza 1” se encontraron dirigidos, en primer término, contra las internas recluidas en el pabellón 1A del Penal Miguel Castro Castro. Posteriormente se dirigió la fuerza contra el pabellón 4B del penal, una vez que las internas empezaron a pasar a este pabellón para protegerse, y que los internos del 4B comenzaron a ayudarlas. En la época de los hechos, las altas autoridades estatales consideraban que esas mujeres ubicadas en el pabellón 1A eran miembros de organizaciones subversivas y ello determinaba, en gran medida, la actuación estatal. Las mujeres se vieron afectadas por los actos de violencia de manera diferente a los hombres, que algunos actos de violencia se encontraron dirigidos específicamente a ellas y otros les afectaron en mayor proporción que a los hombres. Ha sido reconocido por diversos órganos peruanos e internacionales que durante los conflictos armados las mujeres enfrentan situaciones específicas de afectación a sus derechos humanos, como lo son los actos de violencia sexual, la cual en muchas ocasiones es utilizada como “un medio simbólico para humillar a la parte contraria”.*¹⁶⁴

3.3.5. AFECTACIONES DE DERECHOS

“Debido al patrón de obstrucción a la justicia en el presente caso y ante el incumplimiento del Estado de su obligación de actuar con la debida diligencia para esclarecer la “masacre” cometida en el Penal Castro Castro, el Perú es responsable por la violación del derecho a la vida y del incumplimiento de la obligación general de respeto y garantía

¹⁶² Ibid. Párrafo 216

¹⁶³ Ibid. Párrafo 217

¹⁶⁴ Ibid. Párrafo 222-223

*contemplada en el artículo 1.1 de la Convención, en perjuicio de las personas individualizadas en la demanda”.*¹⁶⁵

*“Casi un centenar de las víctimas del presente caso son mujeres, para quienes las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos analizadas resultaron particularmente gravosas. Los deberes de prevención, investigación y sanción a cargo del Estado han sido recogidos por la Convención de Belém do Pará, que si bien no estaba vigente para el Perú en la época de los hechos, puede ser utilizada a efectos de analizar la responsabilidad estatal por las violaciones a los artículos 4, 5, 8 y 25 de la Convención Americana, en virtud de lo dispuesto por el artículo 29 de la misma; y el derecho a estar exento de violencia en la esfera pública y en la esfera privada, estipulado en el artículo 3 de la Convención de Belém do Pará, incluye el derecho a la protección de otros derechos básicos, entre ellos la vida. En consecuencia, existe una conexión integral entre las garantías establecidas en la Convención de Belém do Pará y los derechos y libertades básicos estipulados en la Convención Americana, que se aplica al tratar la violencia contra la mujer como violación de los derechos humanos”*¹⁶⁶.

OBLIGACION DE INVESTIGAR

*“La Corte ha establecido que para garantizar efectivamente los derechos a la vida y a la integridad es preciso cumplir la obligación de investigar las afectaciones a los mismos, que deriva del artículo 1.1 de la Convención. El deber de investigar es una obligación de medios, no de resultados. Ésta debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. Esto último no se contrapone con el derecho que tienen las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares, a ser escuchados durante el proceso de investigación y el trámite judicial, así como a participar ampliamente de los mismos. A la luz de ese deber, una vez que las autoridades estatales tengan conocimiento del hecho, deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva”.*¹⁶⁷

¹⁶⁵ Ibid. Párrafo 228 o)

¹⁶⁶ Ibid. Párrafo 228 p) - r)

¹⁶⁷ Ibid. Párrafo 253 - 256

VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 5 (DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DE LA MISMA, Y EN CONEXIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1, 6 Y 8 DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA

Afectaciones hacia las mujeres de manera específica

*“Aproximadamente 175 reclusos resultaron heridos durante el operativo denominado "Mudanza 1", a causa de los disparos y explosiones efectuados por las fuerzas de seguridad del Estado, y de la caída de escombros durante el enfrentamiento, así como de las golpizas y maltratos inflingidos por los agentes estatales a los prisioneros rendidos una vez concluido el asalto. Los internos heridos que fueron trasladados a centros de salud recibieron nuevos maltratos en el trayecto hasta dichos establecimientos, así como nuevos intentos de ejecución extrajudicial. Muchos de los heridos, aún cuando no habían logrado recuperarse, fueron dados de alta con el único propósito de llevarlos nuevamente a prisión; las internas fueron tratadas por los agentes estatales con particular desprecio y ensañamiento desde el inicio del ataque. Las “situaciones [violatorias] tuvieron consecuencias particularmente graves para las víctimas mujeres, varias de las cuales se encontraban embarazadas”. El asalto se inició en el único pabellón de la prisión ocupado por mujeres, y tras la conclusión del operativo estuvieron sometidas a condiciones atentatorias contra su dignidad como mujeres. Las internas reubicadas en cárceles de mujeres fueron víctimas de maltratos físicos y psicológicos durante el traslado y dentro de los establecimientos penitenciarios. De la misma manera las heridas trasladadas a los hospitales fueron desnudadas y obligadas a permanecer así por semanas, rodeadas de individuos armados, sin permitírseles asearse o utilizar los servicios sanitarios, salvo acompañadas de un guardia armado que no les permitía cerrar la puerta; tras la rendición de los internos, entre los días 10 y 22 de mayo de 1992, alrededor de 160 reclusos que resultaron heridos durante la ejecución del operativo "Mudanza 1" y que habían sido sometidos por las fuerzas de seguridad peruana, no recibieron asistencia médica adecuada y oportuna, lo que ocasionó el agravamiento de sus lesiones, y en algunos casos dio lugar a secuelas físicas permanentes”.*¹⁶⁸

¹⁶⁸ Ibid. Párrafo 259 a) – l)

“La Defensoría del Pueblo del Perú concluyó que el involucramiento de las mujeres en el conflicto armado cambió la percepción de la mujer y provocó “un trato más cruel y violento sobre aquellas mujeres consideradas ‘sospechosas’”. En este caso ya ha quedado probado que el ataque inició específicamente en el pabellón del penal ocupado por las internas acusadas o sentenciadas por delitos de terrorismo y traición a la patria”¹⁶⁹.

“La Corte ha establecido que el Estado es responsable, en su condición de garante de los derechos consagrados en la Convención, de la observancia del derecho a la integridad personal de todo individuo que se halla bajo su custodia. Es posible considerar responsable al Estado por las torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes que sufre una persona que ha estado bajo la custodia de agentes estatales, si las autoridades no han realizado una investigación seria de los hechos seguida del procesamiento de quienes aparezcan como responsables de ellos. Recae en el Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados”¹⁷⁰.

“Asimismo, en cuanto a los referidos aspectos específicos de violencia contra la mujer, esta Corte aplicará el artículo 5 de la Convención Americana y fijará sus alcances, tomando en consideración como referencia de interpretación las disposiciones pertinentes de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, ratificada por el Perú el 4 de junio de 1996, y la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por Perú el 13 de septiembre de 1982, vigente en la época de los hechos, ya que estos instrumentos complementan el corpus juris internacional en materia de protección de la integridad personal de las mujeres, del cual forma parte la Convención Americana”¹⁷¹.

Respecto de las internas embarazadas

“El ataque inició contra el pabellón de mujeres 1A del Penal Miguel Castro Castro. Las internas que se encontraban en ese pabellón, incluidas las embarazadas, se vieron obligadas a huir del ataque en dirección al pabellón 4B. Este traslado fue especialmente

¹⁶⁹ Ibid. Párrafo 270

¹⁷⁰ Ibid. Párrafo 273

¹⁷¹ Ibid. Párrafo 276

*peligroso por las condiciones del ataque antes descritas; las internas sufrieron diversas heridas. Un dato que muestra las condiciones extremas en que se desarrolló el ataque fue que las prisioneras tuvieron que arrastrarse pegadas al piso, y pasar por encima de cuerpos de personas fallecidas, para evitar ser alcanzadas por las balas. Esta circunstancia resultó particularmente grave en el caso de las mujeres embarazadas quienes se arrastraron sobre su vientre. Es así que las internas embarazadas también fueron víctimas del ataque al penal. Las mujeres embarazadas que vivieron el ataque experimentaron un sufrimiento psicológico adicional, ya que además de haber visto lesionada su propia integridad física, padecieron sentimientos de angustia, desesperación y miedo por el peligro que corría la vida de sus hijos. Al respecto, además de la protección que otorga el artículo 5 de la Convención Americana, es preciso señalar que el artículo 7 de la Convención de Belem do Pará señala expresamente que los Estados deben velar porque las autoridades y agentes estatales se abstengan de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer”.*¹⁷²

*“El Estado puso deliberadamente a los internos (los que fallecieron y los que sobrevivieron) durante los días del ataque, que causaron en todos ellos un grave sufrimiento psicológico y emocional, constituyó una tortura psicológica inferida en agravio de todos los miembros del grupo, con violación de los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, y 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Además, esta Corte estima que la violación del derecho a la integridad personal de las señoras Eva Challco, Sabina Quispe Rojas y Vicenta Genua López se vio agravada por el factor de que se encontraban embarazadas, de forma tal que los actos de violencia les afectaron en mayor medida”.*¹⁷³

Sobre discriminación en contra de las mujeres detenidas

“Con respecto al tratamiento que deben recibir las mujeres detenidas o arrestadas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que “no deben sufrir discriminación, y deben ser protegidas de todas las formas de violencia o explotación”. Asimismo, ha indicado que las detenidas deben ser supervisadas y revisadas por oficiales femeninas y las mujeres embarazadas y en lactancia deben ser proveídas con

¹⁷² Ibid. Párrafo 290, 292

¹⁷³ Ibid. Párrafo 293

condiciones especiales durante su detención. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha señalado que dicha discriminación incluye la violencia basada en el sexo, “es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada”, y que abarca “actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad”¹⁷⁴.

Sobre la violencia sexual

“Se probó que en el Hospital de la Policía los internos heridos, quienes se encontraban en deplorables condiciones, fueron además desnudados y obligados a permanecer sin ropa durante casi todo el tiempo que estuvieron en el hospital, que en algunos casos se prolongó durante varios días y en otros durante semanas, y se encontraron vigilados por agentes armados, por lo que fueron víctimas de un trato violatorio de su dignidad personal. Dicha desnudez forzada tuvo características especialmente graves para las seis mujeres internas que se ha acreditado que fueron sometidas a ese trato. Asimismo, durante todo el tiempo que permanecieron en este lugar a las internas no se les permitió asearse y, en algunos casos, para utilizar los servicios sanitarios debían hacerlo acompañadas de un guardia armado quien no les permitía cerrar la puerta y las apuntaba con el arma mientras hacían sus necesidades fisiológicas. El Tribunal estima que esas mujeres, además de recibir un trato violatorio de su dignidad personal, también fueron víctimas de violencia sexual, ya que estuvieron desnudas y cubiertas con tan solo una sábana, estando rodeadas de hombres armados, quienes aparentemente eran miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Lo que califica este tratamiento de violencia sexual es que las mujeres fueron constantemente observadas por hombres. Todo lo cual les ocasionó grave sufrimiento psicológico y moral, que se añade al sufrimiento físico que ya estaban padeciendo a causa de sus heridas. Dichos actos de violencia sexual atentaron directamente contra la dignidad de esas mujeres. El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.2 de la Convención Americana, en perjuicio de las seis internas que sufrieron esos tratos crueles. Por otra parte, en el presente caso se ha probado que una interna que fue trasladada al Hospital de la Sanidad de la Policía fue objeto de una “inspección” vaginal dactilar,

¹⁷⁴ Ibid. Párrafo 303

*realizada por varias personas encapuchadas a la vez, con suma brusquedad, bajo el pretexto de revisarla”.*¹⁷⁵

*“El “aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva son, por sí mismos, tratamientos crueles e inhumanos, lesivos de la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho al respeto de la dignidad inherente al ser humano”. En el presente caso La incomunicación severa tuvo efectos particulares en las internas madres. Diversos órganos internacionales han enfatizado la obligación de los Estados de tomar en consideración la atención especial que deben recibir las mujeres por razones de maternidad, lo cual implica, entre otras medidas, asegurar que se lleven a cabo visitas apropiadas entre madre e hijo. La imposibilidad de comunicarse con sus hijos ocasionó un sufrimiento psicológico adicional a las internas madres”.*¹⁷⁶

*“También afectó a las mujeres la desatención de sus necesidades fisiológicas se deben realizar arreglos especiales para las detenidas en período menstrual, embarazadas, o acompañadas por sus hijos. La comisión de esos excesos causó sufrimiento especial y adicional a las mujeres detenidas. En el caso de las internas embarazadas el Estado desatendió sus necesidades básicas de salud pre natal, y que con respecto a la última tampoco le brindó atención médica post natal, lo cual implicó una violación adicional a la integridad personal de éstas”.*¹⁷⁷

*“Este Tribunal considera que el conjunto de condiciones de detención y de tratamiento a las que fueron sometidos los internos en los centros penales donde se les trasladó o reubicó con posterioridad al llamado “Operativo Mudanza 1”, constituyó tortura física y psicológica infligida a todos ellos, con violación de los artículos 5.2 de la Convención Americana, y 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”.*¹⁷⁸

VIOACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 8 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA (GARANTÍAS JUDICIALES Y PROTECCIÓN JUDICIAL) EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DE LA MISMA, Y EN CONEXIÓN CON LOS ARTÍCULOS 7 DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR,

¹⁷⁵ Ibid. Párrafo 304 - 308

¹⁷⁶ Ibid. Párrafo 323, 324 y 330

¹⁷⁷ Ibid. Párrafo 331-332

¹⁷⁸ Ibid. Párrafo 333

SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, Y 1, 6 Y 8 DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA

“El Perú es responsable por la falta de una adecuada investigación sobre los hechos que originan el presente caso. No se han integrado las más elementales medidas de indagación. Entre las serias deficiencias de la investigación llevada adelante por el Estado están la destrucción del expediente policial y la falta de recolección oportuna de testimonios de los reclusos sobrevivientes. Esta deficiente actuación de la policía y del Ministerio Público ha conducido a que, luego de más de 14 años desde la “masacre” en el penal “Castro Castro”, no se haya identificado y sancionado a los responsables y, por ende, las presuntas víctimas y sus familiares no hayan podido promover un recurso con el objeto de obtener una compensación por los daños sufridos. Por lo tanto, se trata de “un caso de encubrimiento absoluto de los hechos y responsabilidades de todos los autores [...] por esta grave violación de derechos humanos”.¹⁷⁹

“Casi un centenar de las víctimas del presente caso son mujeres, para quienes las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos resultaron particularmente gravosas. Si bien la Convención de Belém do Pará no estaba vigente en Perú en la época de los hechos, en virtud de lo dispuesto por el artículo 29 de la Convención Americana este tratado puede ser utilizado a efectos de analizar la responsabilidad estatal por las violaciones a los artículos 4, 5, 8 y 25 de la Convención Americana. La Convención de Belém do Pará establece obligaciones del Estado de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”.¹⁸⁰

“En virtud de que el Perú ratificó el 4 de junio de 1996 la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, debe observar lo dispuesto en el artículo 7.b de dicho tratado, que le obliga a actuar con la debida diligencia para investigar y sancionar dicha violencia”.¹⁸¹

“Asimismo, esta Corte ha señalado que la facultad de acceso a la justicia debe asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga

¹⁷⁹ Ibid. Párrafo 369 b)

¹⁸⁰ Ibid. Párrafo 369 f)

¹⁸¹ Ibid. Párrafo 378

todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y se sancione a los eventuales responsables¹⁸². El tiempo transcurrido entre el momento de los hechos y el inicio del proceso penal por la investigación de éstos sobrepasa por mucho un plazo razonable para que el Estado realice las primeras diligencias probatorias e investigativas para contar con los elementos necesarios para formular una acusación penal, máxime que a ese tiempo habrá que sumar el que tome la realización del proceso penal, con sus distintas etapas, hasta la sentencia firme. Esta falta de investigación durante tan largo período configura una violación al derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares, por cuanto el Estado ha incumplido su obligación de adoptar todas las medidas necesarias para investigar las violaciones, sancionar a los eventuales responsables y reparar a las víctimas y sus familiares”.¹⁸³

“En el presente caso, el Estado no ha brindado una explicación a la Corte de las razones por las cuales no se ha iniciado un proceso penal por todos los acontecimientos violatorios, a pesar de que reconoció su responsabilidad internacional por los hechos sucedidos del 6 al 10 de mayo de 1992 y expresó que “los hechos [...] no se pueden ocultar, no se puede ocultar el dolor, [...] no se pueden ocultar los heridos, no se pueden ocultar el dolor de los familiares de las víctimas”.¹⁸⁴

“La falta de justicia en el orden penal ha impedido que las víctimas obtengan una compensación por los hechos perpetrados, afectando así su derecho a recibir una reparación adecuada”.¹⁸⁵

“En cuanto a la ocurrencia de los hechos bajo un ataque sistemático o generalizado contra una población civil, ya ha sido establecido que los hechos del presente caso ocurrieron dentro de un contexto de conflicto interno y de graves violaciones a los derechos humanos en el Perú, que el ataque a los internos que se encontraban en los pabellones 1A y 4B del Penal Miguel Castro Castro constituyó una masacre, y que dicho “operativo” y el trato posterior otorgado a los internos tenían el fin de atentar contra la vida e integridad de dichos internos, quienes eran personas acusadas o sentenciadas por los delitos de terrorismo y traición a la patria. Asimismo, el Tribunal hace notar que

¹⁸² Ibid. Párrafo 382

¹⁸³ Ibid. Párrafo 387

¹⁸⁴ Ibid. Párrafo 391

¹⁸⁵ Ibid. Párrafo 395

*dichas personas se encontraban reclusas en un centro penal bajo el control del Estado, siendo este de forma directa el garante de sus derechos”.*¹⁸⁶

*“Por lo tanto, la Corte encuentra que hay evidencia para sostener que las muertes y torturas cometidas contra las víctimas de este caso por agentes estatales, constituyen crímenes de lesa humanidad. La prohibición de cometer estos crímenes es una norma de ius cogens, y, por tanto, el Estado tiene el deber de no dejar impunes estos delitos y para ello debe utilizar los medios, instrumentos y mecanismos nacionales e internacionales para la persecución efectiva de tales conductas y la sanción de sus autores, con el fin de prevenirlas y evitar que queden en la impunidad”*¹⁸⁷.

*“Este Tribunal ha señalado invariablemente que el Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, caracterizada como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”. Se debe combatir la impunidad por todos los medios legales disponibles, tomando en cuenta la necesidad de hacer justicia en el caso concreto y que aquélla propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas. Este Tribunal ha destacado también que la naturaleza y gravedad de los hechos en contextos de violaciones sistemáticas de derechos humanos genera una mayor necesidad de erradicar la impunidad de los hechos”.*¹⁸⁸

“Por todo lo anterior, este Tribunal estima que los procedimientos internos abiertos en el presente caso no han constituido recursos efectivos para garantizar un verdadero acceso a la justicia por parte de las víctimas, dentro de un plazo razonable, que abarque el esclarecimiento de los hechos, la investigación y, en su caso, la sanción de los responsables y la reparación de las violaciones a la vida e integridad. Por ello, el Estado es responsable por la violación de los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con la obligación contenida en el artículo 1.1 de la misma, en conexión con los artículos 7.b de Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y

¹⁸⁶ Ibid. Párrafo 403

¹⁸⁷ Ibid. Párrafo 404

¹⁸⁸ Ibid. Párrafo 405

Sancionar la Tortura, en perjuicio de los familiares inmediatos de los 41 internos fallecidos, de los internos sobrevivientes y de los familiares de los internos ”¹⁸⁹.

3.3.6. PUNTOS RESOLUTIVOS

“6. El Estado violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en conexión con los artículos 7.b) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de los familiares inmediatos de los 41 internos fallecidos identificados, de los internos sobrevivientes y de los familiares de los internos determinados en los párrafos 336, 337, 340 y 341 e identificados en el Anexo 3 de víctimas de la presente Sentencia que para estos efectos forma parte de ésta, en los términos de los párrafos 372 a 408 de la misma”.

3.3.7. COMENTARIO

Es importante destacar esta sentencia porque es la primera en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace uso de la Convención de Belém do Pará para emitir pronunciamiento subsumiendo el caso concreto a la normativa, ello a pesar que los hechos son anteriores a la Convención, es así que la Corte la equipara a lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención para Eliminar cualquier tipo de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de tal forma que introduce la Convención de Belén do Pará a la jurisprudencia internacional.

Una vez dicho esto, no podemos dejar de lado que esta es una sentencia que vincula directamente a nuestro país con hechos de violencia acaecidos en la época del terrorismo en el Perú; tiempo histórico por demás complicado por lo que no se puede dejar de lado como transcurrían las cosas en esa época, y que los grupos terroristas que se encontraban activos en esa época en la patria trajeron mucha desgracia a la población. Por este motivo debe estudiarse la sentencia desde el punto de vista jurídico y no político a la luz de lo que

¹⁸⁹ Ibid. Párrafo 408

se investiga en esta tesis, que es la visión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la violencia contra la mujer.

Entonces encontramos que en los hechos narrados en esta sentencia se hace ver dos momentos: el primero que tiene que ver con el desarrollo del operativo “Mudanza 1” en sí mismo, y el segundo lo acontecido a las detenidas en este lugar después que resultaron heridas y fueron trasladadas a centros de salud como el hospital de la Sanidad de la Policía.

En ambos momentos se hace un distingo especial respecto al trato que recibieron las mujeres en todo el desarrollo de lo ocurrido, se resalta que al momento del inicio del operativo las fuerzas especiales que hacen su ingreso escogieron el pabellón que era ocupado por mujeres, donde era de conocimiento que había mujeres embarazadas, por ende, donde había personas más vulnerables y podían generar más daño a las internas con relación a los varones que se encontraban en un pabellón contiguo, es decir, de una u otra forma los agentes del Estado buscaron generar más perjuicio a los presuntos terroristas que se encontraban internados en el penal dado que escogieron el pabellón donde de por sí se podía esperar menos defensa del lugar por sus habitantes, tanto más que las fuerzas del Estado solo empezaron a atacar el pabellón de los varones cuando estos comenzaron a apoyar a las mujeres que buscaban escapar del asedio de su pabellón de detención.

De otro lado, es el segundo momento el que resalta más, porque en este la Corte genera una nueva concepción sobre lo que implica violencia sexual ante el tipo de trato que recibieron las detenidas que fueron heridas en el operativo y luego llevadas al hospital de la Sanidad de la Policía, donde la Corte denota que recibieron un trato violatorio de su dignidad personal ya que *“estuvieron desnudas y cubiertas con tan solo una sábana, estando rodeadas de hombres armados, quienes aparentemente eran miembros de seguridad del estado. Lo que califica este tratamiento de violencia sexual es que las mujeres fueron constantemente observadas por hombres...considera que la violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen en una persona sin su consentimiento , que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno”*¹⁹⁰, a ello se agrega que las mujeres se encontraban bajo completo control de los agentes del

¹⁹⁰ Ibid p. 306

Estado, absolutamente indefensas dado que habían sido heridas precisamente por otros agentes estatales de seguridad, lo que implicó un estado de trauma psicológico mantenido.

En esta nueva concepción agregada de violencia sexual la Corte deja de lado el concepto tradicional de violación por vía vaginal, sino que considera además la penetración mediante el uso de otros medios, como los que sufrió una de las detenidas quien sufrió una revisión vaginal de manera violenta. Y va más allá incluyendo actitudes que no necesariamente tienen que ver con que una persona sea tocada sino basta con recibir tratos que tengan connotación sexual y sean sin el consentimiento de la víctima, como es el caso que las mujeres sean mantenidas desnudas, o que solo se les permitiera cubrirse con una sábana ante los agentes de seguridad del Estado.

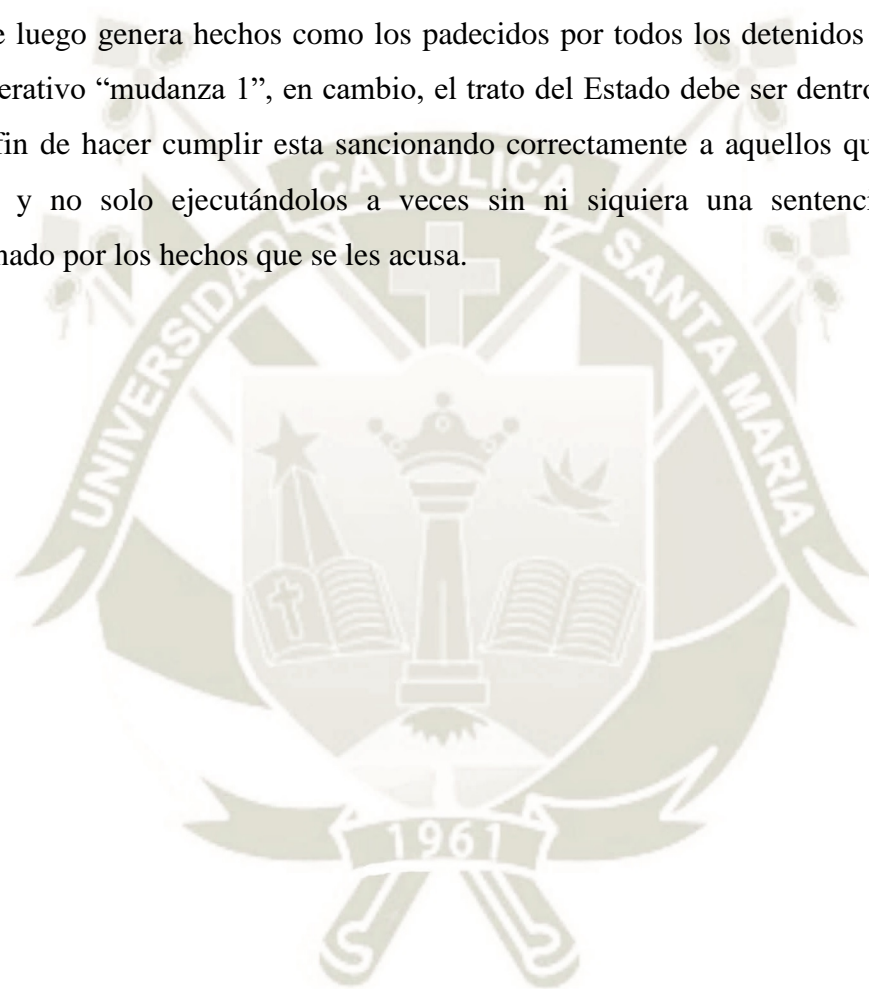
A ello se agrega que cuando las mujeres se encontraban en el hospital también sufrieron de agresiones por su sexo, como es que no se consideró a las mujeres que se encontraban embarazadas, o que acababan de ser madres, tampoco se consideró los procesos menstruales de estas, lo que se prueba porque ellas declaran que en ningún momento se les otorgó los insumos necesarios para poder cubrir sus necesidades como mujeres, todo lo cual representó una afrenta a la dignidad personal de las mujeres que se encontraban como detenidas dentro de las instalaciones hospitalarias.

La sentencia no deja de lado que todos estos hechos no fueron debidamente investigados, no se recabó las pruebas en el lugar de los hechos, no se levantaron los cadáveres correctamente, no se realizaron las necropsias correctamente, no se tomaron las declaraciones respectivas, se permitió que la investigación caminara de manera lenta, incluso se llegó a investigaciones en contra de las víctimas, todo lo cual dio como resultado que hasta la fecha de la sentencia más de diez años después no exista un autor sentenciado por los hechos ocurridos en el operativo “mudanza 1”. Y es que la Corte recalca no solo en esta sino en muchas de sus sentencias que *“El deber de investigar es una obligación de medios, no de resultados. Ésta debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios”*¹⁹¹,

¹⁹¹ Caso Goiburú y otros, párrafo 117, caso de las Masacres de Ituango, párrafo 296, y Caso Baldeón García, párrafo 93.

sólo que en este caso, y en especial en el que tiene que ver con la violencia contra la mujer esta concepción es equiparable a la falta de atención del Estado al derecho de las mujeres al acceso a la justicia el cual se ve mellado por la indebida investigación de lo ocurrido, hecho que por demás resalta en esta sentencia.

A todo esto se debe concluir que a pesar que estos hechos se dieron en un momento histórico de crisis en el Perú la actuación estatal en ningún momento debe ser revanchista, porque luego genera hechos como los padecidos por todos los detenidos que fueron parte del operativo “mudanza 1”, en cambio, el trato del Estado debe ser dentro del marco de la ley a fin de hacer cumplir esta sancionando correctamente a aquellos que cometieron un delito, y no solo ejecutándolos a veces sin ni siquiera una sentencia que los haya condenado por los hechos que se les acusa.



3.4. CASO J. VS. PERÚ

3.4.1. FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DE 2013

3.4.2. PRESENTACIÓN DEL CASO POR LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS A LA CORTE:

PAIS DENUNCIADO	Estado del Perú
DENUNCIA DE DERECHOS VIOLADOS	La Comisión Interamericana solicitó a este Tribunal que declarara la responsabilidad internacional del Perú por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, legalidad y no retroactividad, protección a la honra y dignidad, a la vida privada y familiar, así como a la protección judicial, reconocidos en los artículos 5, 7, 8, 9, 11 y 25 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones generales establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado, en perjuicio de la señora J. Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que declare que el Perú es responsable por la violación de las obligaciones establecidas en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura y el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, en perjuicio de la señora J. Adicionalmente, la Comisión Interamericana solicitó a la Corte que se ordenara al Estado determinadas medidas de reparación, las cuales se detallan y analizan en el capítulo correspondiente

“El presente caso se refiere a la alegada “detención ilegal y arbitraria de J. y los registros domiciliarios realizados el 13 de abril de 1992 por parte de agentes estatales, quienes [presuntamente] incurrieron en actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluida la [alegada] violación sexual de la [presunta] víctima”. De acuerdo a la Comisión, “[e]stos hechos fueron seguidos del traslado de la señora J. a la Dirección Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE) y su [alegada] privación de libertad en dicho lugar sin control judicial y en condiciones inhumanas de detención durante 17 días”, así como “con una serie de [alegadas] violaciones al debido proceso y al principio de legalidad e irretroactividad, en el marco del proceso penal seguido contra la [presunta] víctima por supuestos delitos de

terrorismo bajo la vigencia del Decreto Ley 25475. La señora J. fue absuelta en el mes de junio de 1993, tras lo cual salió de Perú”. Según la Comisión, “[e]l 27 de diciembre de 1993 la Corte Suprema de Justicia sin rostro y sin motivación declaró nula la absolución disponiendo un nuevo juicio. Actualmente persiste en Perú un proceso abierto contra la señora J. con una orden de captura internacional””¹⁹²

3.4.3. VÍCTIMAS

“La Corte declara que solamente considerará como presunta víctima, y eventual beneficiaria de las reparaciones que correspondan, a la señora J., quien fue la única persona identificada como tal en el Informe de Fondo de la Comisión”¹⁹³

3.4.4. HECHOS

“Durante la década de los ochenta hasta finales del año 2000, se vivió en el Perú un conflicto entre grupos armados y agentes de las fuerzas policiales y militares. En 1991 el Estado creó la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (en adelante “DINCOTE”) como un organismo especializado de la Policía Nacional encargado de prevenir, denunciar y combatir las actividades de terrorismo, así como las de traición a la patria. Asimismo, dentro de la DINCOTE se organizó el Grupo Especial de Inteligencia (en adelante “GEIN”), que, a pesar de pertenecer formalmente a la DINCOTE, “empezó a trabajar independientemente de las labores cotidianas de dicha dirección”¹⁹⁴. Por otra parte, esta Corte también ha reconocido que resulta amplia y públicamente conocido el sufrimiento causado a la sociedad peruana por Sendero Luminoso, “fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones de los derechos humanos tomando como medida de ello la cantidad de personas muertas y desaparecidas”, en este sentido fue responsable del 54% de víctimas fatales reportadas a la CVR”, lo cual “asciende a 31,331 personas”¹⁹⁵.

“Se decretó estado de emergencia en el Departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao por medio de un decreto supremo el 5 de septiembre de 1990, el cual fue prorrogado en varias oportunidades, incluyendo el 26 de marzo de 1992. En

¹⁹² Caso J. vs. Perú sentencia del 27 de noviembre del 2013 párrafo 1

¹⁹³ Ibid. Párrafo 25

¹⁹⁴ Ibid. Párrafo 57 - 58

¹⁹⁵ Ibid. Párrafo 60

consecuencia, se suspendieron las garantías constitucionales relativas a la inviolabilidad de domicilio, al derecho a la circulación, al derecho de reunión y a la libertad y seguridad personal, y “[l]as Fuerzas Armadas asumi[eron] el control del orden interno”¹⁹⁶.

“Dentro de las acciones estatales existía un patrón de detenciones que “consistía en un primer momento en la aprehensión violenta de la víctima [... ,] acompañada por el registro del domicilio del afectado empleando los mismos métodos violentos”. La persona detenida “era privad[a] de visión o procedían a cubrirle el rostro totalmente”. La CVR resaltó que muchos de los testigos escuchados afirmaron que no pudieron leer las actas que se realizaban en los registros y que “la víctima o sus familiares eran conminados a firma[las]”. Asimismo, señaló que “[c]uando se trataba de detenciones domiciliarias o en puestos de control, había una labor previa de seguimiento o ubicación del sospechoso”. Posteriormente, la persona era trasladada a alguna dependencia policial o militar donde se decidía “la suerte de la persona, ya sea que fuera puesta en libertad o fuera ejecutada arbitrariamente”¹⁹⁷.

“La CVR concluyó que “los fiscales llamados por ley a determinar la existencia de abusos y denunciarlos al poder judicial ignoraban las quejas de los detenidos e incluso firmaban las declaraciones sin haber estado presentes en ellas, por lo que eran incapaces de garantizar la integridad física y psíquica del detenido””.–La CVR señaló que en aplicación de la legislación antiterrorista, se afectaron los derechos de los procesados, por medio de “detenciones indiscriminadas, el procesamiento por delitos no cometidos, la fabricación de pruebas, la morosidad en los procesos, la indefensión de los detenidos y la emisión de sentencias sin auténtico sustento”¹⁹⁸.

Sobre J

“La señora J. era bachiller en Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y tenía 25 años de edad. En marzo de 1992 fue contratada como asistente de producción por el periodista colombiano Marc de Beaufort, quien se encontraba filmando un programa de televisión para WGBH, un canal de televisión pública de Boston, sobre la situación política en Perú, haciendo énfasis en el movimiento guerrillero de Sendero Luminoso. J. era la

¹⁹⁶ Ibid. Párrafo 61

¹⁹⁷ Ibid. Párrafo 65

¹⁹⁸ Ibid. Párrafo 61- 73

encargada de obtener los permisos oficiales y las autorizaciones para visitar las diferentes locaciones en Lima y sus alrededores. Las autoridades peruanas fueron informadas y autorizaron los viajes realizados por la señora J. y por el equipo de periodistas correspondientes”¹⁹⁹.

“La señora J. no contaba con antecedentes penales o judiciales, pero si un antecedente policial y requisitoria de junio 1990 por el delito de terrorismo, sin que conste en el expediente la razón de dicho antecedente. La señora J. ha negado su pertenencia a la organización Sendero Luminoso en todas sus declaraciones ante autoridades estatales, así como haber trabajado para El Diario. No obstante, señaló que en 1987 fue detenida “por pegar un afiche [del] semanario ‘Cambio’”²⁰⁰.

“En 1992 la DICONTE “dispuso un seguimiento [a la publicación] ‘El Diario’ [,] al determinarse que forma[ba] parte de Sendero Luminoso”, El Diario era considerado “el órgano difusor o instigador de los actos de barbarie que comete la agrupación subversiva Sendero Luminoso”. El 13 de abril de 1992 “en horas de la noche, personal [de la Policía Nacional del Perú] DIVICOTE I-DICONTE, puso en ejecución el [‘Operativo] Moyano’, interviniendo simultáneamente en la capital diferentes inmuebles”, para continuar “con las pesquisas en torno al semanario ‘El Diario’”. Dentro del Operativo se realizó la intervención de un “inmueble ubicado en la calle Las Esmeraldas-La Victoria [, propiedad de los padres de la señora J.,] por cuanto se tenía conocimiento que en dicho inmueble se encontraban reunidos elementos terroristas de [...] ‘Sendero Luminoso’, coordinando acciones para atentar en la ciudad de Lima”. A las 20:55 horas del 13 de abril de 1992 funcionarios policiales intervinieron el inmueble ubicado en la calle Las Esmeraldas. Existen dos versiones con respecto a la intervención. Según el atestado policial, al llegar al inmueble “los ocupantes pretendieron darse a la fuga por una puerta posterior, siendo posteriormente reducidos”. En la intervención al inmueble de la calle Las Esmeraldas fueron detenidos la señora J., otra mujer y un hombre. Además, en dichos documentos se señala que “al practicar el registro domiciliario se incautó propaganda terrorista, manuscritos y documentos mecanografiados [del] Partido Comunista – Sendero Luminoso”,

¹⁹⁹ Ibid. Párrafo 76

²⁰⁰ Ibid. Párrafo 77

entre otros. Según el acta de registro, la señora J. y las otras dos personas detenidas se negaron a firmar la misma”²⁰¹.

“De forma contraria, la presunta víctima declaró ante autoridades nacionales que en el inmueble de la calle Las Esmeraldas “nunca ha funcionado ninguna imprenta”, sino que el mismo era utilizado como un local comercial, y que había sido remodelado para ofrecerlo en alquiler por lo que al momento de los hechos se encontraba vacío. De acuerdo a la señora J., en la noche del 13 de abril se encontraba en el inmueble solamente con una mujer, quien era una posible inquilina y a quien J. no conocía de antes. Asimismo, declaró que cuando iban saliendo del inmueble:

[Sintió] que alguien intentaba abrir la puerta falsa que daba a la calle Las Esmeraldas, inmediatamente pregunt[ó] que pasaba y de afuera han respondido ‘Soy el dueño abran’, y abr[ió] la ventana para ver que sucedía, y respond[ió] que [ella] era la dueña y que era una equivocación, no termin[ó] de decir lo que expresaba en ese momento cuando un brazo ha roto las lunas de la ventana, [la] ha tomado de los cabellos, con un revólver [le] ha apuntado y entraron como quince personas ves[tidos] de civil, todos armados y como estaba herida por los vidrios que [le] habían caído en la espalda, [la] han tirado al piso e inmediatamente [le] han amarrado las manos a la espalda, y [le] han vendado los ojos, [la] han golpeado y [la] llevaron al fondo del local, amenazando y gritando una serie de groserías[. C]uando [la] venda[ron] uno de los hombres que era moreno, con un gorro amarillo [la] ha golpeado en las piernas, [la] ha manoseado por completo[, según él revisándo[la,] y [le] ha robado una esclava de oro [y] un anillo de oro”²⁰².

“Además, según la presunta víctima, la representante del Ministerio Público “no estuvo en el momento de la intervención policial, [sino que llegó] después”, por lo que “no había fiscal que pudiera dar f[e] de las cosas que supuestamente se encontró en las oficinas”. Asimismo, J. declaró que “en todo momento [le] cubrieron los ojos por tanto [...] no [ha] visto todo lo que se ha podido meter en ese lugar para implicar[la] en la subversión”. Según lo señalado por la señora J. al llegar, la fiscal señaló que no había nada en el local. Respecto a los objetos incautados, la señora J. indicó que “no recono[cía] la gran parte de

²⁰¹ Ibid. Párrafo 78-81

²⁰² Ibid. Párrafo 82

las especies, salvo [sus] documentos personales y la tarjeta de presentación de Marc de Beaufort y de Yezid Campos”²⁰³. La señora J. declaró que, al finalizar la intervención, la “han sacado [a ella y a la otra mujer, las] han llevado a un carro[y] ha estado toda la noche dando vueltas hasta las seis de la mañana[...], todo ese tiempo [ha] estado vendada y amarrada, solo podía escuchar”²⁰⁴. Por su parte la madre de J. indicó que al llegar le informaron que “[s]u hija se ha[bía] resistido y la [habían] matado”²⁰⁵.

“A las 21:20 horas del 13 de abril, fue intervenido el domicilio donde habitaba la señora J. con su familia en la calle Casimiro Negrón. En el registro del cuarto de la señora J. se encontraron dos revólveres, uno con cuatro cartuchos de bala y el otro con tres cartuchos de bala, 10 cartuchos de bala para fusil [automático ligero] FAL y 6 cartuchos de bala calibre 38, además de documentación calificada como “de carácter subversivo”²⁰⁶. La señora J. reconoció “los revólveres y municiones pertenecientes a [su] padre”, lo cual fue corroborado por su madre. Sin embargo, señaló que no reconocía el resto de las muestras, incluyendo dos cartas que estarían dirigidas a ella. Asimismo, señaló que “la única explicación es que [se] lo han puesto los policiales para implicar[la] en todo esto”. En la declaración instructiva la señora J. indicó que “no reconoce ninguna de las especies que se detalla, salvo las de uso personal”. Además, señaló que ella no podía estar en ninguna foto porque no había ido a los lugares donde habían sido tomadas, ni conocía a las personas que salían en las fotos. Asimismo, sobre “diez rollos [de fotografías]” donde aparecería J. “conduciendo a dos equipos de prensa extranjera”, la señora J. indicó que sólo ha tenido relación con los periodistas extranjeros que trabajan con ella”²⁰⁷.

“El 14 de abril de 1992 la señora J. fue notificaba que se encontraba detenida en la unidad policial de la DINCOTE, de acuerdo al Registro de Detenidos de la DINCOTE, aportado por el Estado, la señora J. ingresó a dicho centro el 15 de abril de 1992 a las 11:55 horas. No consta en el expediente ante esta Corte información oficial sobre dónde se encontraba la señora J. entre el 13 y el 14. El 18 de abril de 1992 se realizó un Registro Médico Legal a la señora J. “[p]ara determinar: Integración Física, lesiones antiguas o recientes” por dos médicos legistas de sexo masculino señalando que no requiere incapacidad. El Registro de

²⁰³ Ibid. Párrafo 83

²⁰⁴ Ibid. Párrafo 86

²⁰⁵ Ibid. Párrafo 87

²⁰⁶ Ibid. Párrafo 88

²⁰⁷ Ibid. Párrafo 90

Detenidos de la DINCOTE señala que la señora J. salió del centro de la DINCOTE el 28 de abril de 1992 a las 15:00 horas. El 30 de abril de 1992 la señora J. ingresó al Instituto Nacional Penitenciario Miguel Castro Castro. Asimismo, la hermana menor de J. fue liberada el 28 de abril de 1992 y considerada como “citada” y notificada “para que se presente[...] ante la Autoridad Judicial competente las veces que sea[...] solicitud[a]”²⁰⁸.

“El 21 de abril de 1992 la señora J. rindió su manifestación en las oficinas de la DINCOTE en presencia de su abogado defensor. La información recopilada por medio de dichas solicitudes, lo declarado por la señora J., así como lo recaudado durante los diferentes allanamientos sirvieron de base para realizar el atestado policial sobre la señora J. y demás detenidos en el Operativo Moyano. El 23 de abril de 1992 la señora J. fue presentada ante los medios de comunicación en una conferencia de prensa realizada por el entonces Ministro del Interior, junto con otras personas detenidas durante el Operativo Moyano, incluyendo su hermana menor”²⁰⁹.

“El 28 de abril de 1992 la DINCOTE remitió el atestado policial N° 084 a la fiscalía y puso a su disposición a la señora J. en calidad de detenida por el delito de terrorismo. En dicho atestado policial se da por probado la implicancia de la señora J. en el delito de terrorismo, y se señala que J. era “responsable del proceso de redacción, edición y coordina[ción] con periodistas extranjeros [...] del periódico clandestino ‘El Diario’”. Asimismo, se indica que la señora J. había sido detenida el 28 de abril de 1987 “por participar en actividades subversivas”, y que en noviembre de 1989 había sido “referenciada como integrante del ‘Movimiento revolucionario de defensa del pueblo’ (MRDP), organismo generado de ‘[S]endero [L]uminoso’”. Señala además que la participación de la presunta víctima en Sendero Luminoso “se corrobora con las incautaciones realizadas en el domicilio en la calle Las Esmeraldas”, así como lo encontrado en la habitación de la señora J. Según el atestado, la señora J. “pretend[ió] distorsionar la realidad de los hechos”, al no precisar los lugares donde habría viajado con los periodistas extranjeros. Adicionalmente, el atestado establece que la señora J. habría mentido al declarar que no conocía de antes a la mujer con quien fue detenida en el inmueble de la calle Las Esmeraldas, ya que se incautó una foto de la presunta víctima con dicha persona tomada en otro momento.”²¹⁰ El mismo día

²⁰⁸ Ibid. Párrafo 92 - 94

²⁰⁹ Ibid. Párrafo 95 - 96

²¹⁰ Ibid. Párrafo 97

que recibió el atestado policial, el fiscal formuló la denuncia penal ante el Juez de Instrucción contra la señora J. y otros detenidos en el Operativo Moyano como “presuntos autores del Delito contra la Tranquilidad Pública – Terrorismo. En respuesta a dicha denuncia, el mismo 28 de abril el Décimo Juzgado de Instrucción de Lima abrió instrucción en vía ordinaria contra la señora J. y demás detenidos por el delito de terrorismo. En consecuencia, se ordenó recibir “las declaraciones instructivas de los inculpados”. Asimismo, se dictó mandato de detención contra la señora J., en “aplicación [del] artículo [135] del Código Procesal Penal”, y se notificó del mismo a la presunta víctima”²¹¹.

“El mismo 28 de abril se intentó iniciar la declaración instructiva de la señora J., sin embargo la misma fue suspendida “a solicitud de la inculpada quién desea[ba] ser asistida por su abogado”. El 26 de mayo de 1992 se intentó continuar con la declaración instructiva, no obstante fue nuevamente suspendida “debido a las recargadas laborales del Juzgado [y] el estado avanzado de la hora”. Los días 10, 15 y 19 de junio y 3 de agosto de 1992 se recibió la declaración instructiva de la señora J. por partes”²¹².

“El 8 de enero de 1993 el fiscal formuló acusación sustancial contra la señora J. y otras 93 personas “como autores del delito de terrorismo y asociación ilícita terrorista en agravio del Estado”. El fiscal especificó las acciones que se le atribuirían a algunos de los procesados en relación con El Diario. Sin embargo, no precisó los hechos atribuidos a la señora J. de forma específica, sino que de manera general señaló que “los otros procesados [...] tenían las tareas de impresión, edición, distribución y circulación del vocero ‘El Diario’; encargándolos a otros de los inculpados la tarea de redactar algunos de los artículos insertados en el referido diario con el fin de difundir la ideología y demás planes de [Sendero Luminoso]”. El 1 de febrero de 1993 la Corte Superior de Lima declaró que “hab[ía] merito para pasar a juicio oral contra [la señora J.] por [los] delito[s] de terrorismo y asociación ilícita terrorista”. Entre el 19 de mayo y el 9 de junio de 1993 se realizó la audiencia privada en dicho proceso. El 18 de junio de 1993 la Corte Superior de Justicia de Lima “sin rostro”, en una sentencia sobre varios acusados, decidió absolver a la señora J. “por deficiencia probatoria [...] de los cargos formulados en su contra por el delito de Terrorismo y Asociación Ilícita en agravio del Estado”, indicando que debía “ser puesta en inmediata libertad”. En dicha sentencia, se condenó a once de los acusados,

²¹¹ Ibid. Párrafo 98

²¹² Ibid. Párrafo 99

*absolvió a diecisiete de los acusados y reservó el proceso contra sesenta y cinco personas*²¹³*Ese mismo 18 de junio de 1993 se comunicó al Consejo Nacional Penitenciario la libertad de la presunta víctima. Tras dicha decisión, la señora J. salió del Perú en agosto de 1993”.*²¹⁴

*“El 27 de diciembre de 1993 la Corte Suprema de Justicia “sin rostro” declaró nula la sentencia del 18 de junio de 1993 y mandó a que “se reali[zara] nuevo juicio oral por otra Sala Penal Especializada”*²¹⁵*. El 9 de febrero de 1994 la Sala Nacional de Terrorismo “sin rostro” se avocó al conocimiento del caso, se pautó un acto oral para el 18 de febrero de 1994 y se ordenó la recaptura de la señora J. El 5 de abril de 1994 se reservó el proceso de la señora J. Dicha decisión fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia el 24 de septiembre de 1997. El 9 de diciembre de 1997 y el 1 de marzo de 2001 en sentencias relativas a otros acusados dentro del mismo proceso se reservó el proceso contra la señora J”.*²¹⁶

*“En seguimiento a lo dispuesto en el Decreto Legislativo No. 926, el 20 de mayo de 2003 la Sala Nacional de Terrorismo declaró “nulo todo lo actuado respecto a [la señora J.]”, ya que le era aplicable la nulidad prevista por el mencionado decreto legislativo. La Sala declaró “insubsistente la acusación fiscal” de 8 de enero de 1993 y nulo todo lo actuado desde la decisión de 1 de febrero de 1993 donde se declaró haber mérito para pasar a juicio oral contra la señora J., incluyendo esta última. La Sala advirtió que en el proceso contra la señora J, el fiscal aún no había elaborado el dictamen acusatorio requerido por el Decreto Ley 25.475. Por tanto, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 922 y “a fin de evitar nulidades posteriores”, la Sala señaló que se debía seguir el proceso según “los trámites del procedimiento ordinario previsto en el Código de Procedimientos Penales”*²¹⁷.

“El 7 de enero de 2004 la Sala Nacional de Terrorismo acumuló el expediente de la causa contra la señora J. junto con otros donde también se incriminaba al líder de Sendero Luminoso. El 21 de septiembre de 2004 la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ordenó que se emitieran órdenes de captura contra la señora J., señalando que “contra la

²¹³ Ibid. Párrafo 101

²¹⁴ Ibid. Párrafo 104

²¹⁵ Ibid. Párrafo 105

²¹⁶ Ibid. Párrafo 106

²¹⁷ Ibid. Párrafo 107

[misma] se ha[bía] dispuesto su detención preventiva con fines de ulterior extradición al haber sido ubicada en la ciudad de Londres”²¹⁸

“El 29 de noviembre de 2004 la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial emitió un dictamen, mediante el cual solicitó la ampliación de la denuncia de 28 de abril de 1992 indicando que a la señora J. “se le imputa ser integrante de la organización terrorista, Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso[...], habiéndose desempeñado como responsable del proceso de redacción, edición y coordinación con periodistas extranjeros del periódico clandestino ‘El Diario’, medio escrito dedicado a la difusión de las actividades terroristas de la referida organización subversiva”. El fundamento jurídico de la imputación son los artículos 316 (Apología del delito de terrorismo) y 322 (Asociación a agrupación terrorista) del Código Penal de 1991”²¹⁹.

“El 30 de diciembre de 2004 el Segundo Juzgado Penal Supraprovincial acogió el dictamen de la fiscalía y amplió “el auto apertorio de instrucción de [28 de abril de 1992], ampliado mediante resolución de [28 de octubre de 1992]”. El 29 de septiembre de 2005 el Fiscal Superior emitió un dictamen, mediante el cual señaló que había mérito para pasar a juicio oral y formuló acusación contra la señora J. por el delito de terrorismo, y solicitó pena privativa de libertad de 20 años y una reparación civil de treinta mil millones de nuevos soles que debía abonar de forma solidaria con los demás procesados, más otros 130.000 nuevos soles “en cuanto respecta al delito [de apología]”. Adicionalmente, solicitó que se reiteraran las órdenes de ubicación y captura de la señora J. y estableció que se “deberá declarar Reo Contuma[z]”²²⁰.

“El 24 de enero de 2006 la Sala Penal Nacional declaró que había mérito para pasar a juicio oral contra la señora J. La Sala señaló fecha de inicio del juicio oral y designó una defensora de oficio [a la señora J. conjuntamente con los demás acusados ausentes]. Asimismo, ordenó que se reiteraran “las órdenes para la ubicación y captura de [la señora J.]”. El 25 de mayo de 2006 la Sala Penal Nacional emitió sentencia condenatoria contra diversos acusados y reservó el “juzgamiento contra la [señora J.] hasta que sea[...] habid[a] y puest[a] a disposición de autoridad judicial competente”. Dicha sentencia

²¹⁸ Ibid. Párrafo 108

²¹⁹ Ibid. Párrafo 109

²²⁰ Ibid. Párrafo 110 y 111

*contenía entre las decisiones reservar el proceso contra la señora J. y se declaro reo contumaz, y el 5 de noviembre de 2007 se solicitó la ubicación y captura a nivel internacional de la señora J. El proceso contra la señora J. estaría pendiente la realización del juicio oral para que posteriormente la Sala Penal Nacional emita la sentencia de primera instancia respectiva”.*²²¹

“El 9 de agosto de 1993, luego de su liberación, la señora J. denunció ante el Ministerio Público que, tras la decisión absolutoria a su favor, ella y su familia habrían sido víctimas de amenazas y seguimientos por parte de personas desconocidas, así como de presuntos agentes policiales, a raíz de dichos “incidentes de persecución”, J. salió de viaje fuera del Perú el 30 de septiembre de 1993 la señora J. llegó al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el 13 de octubre de 1993 solicitó asilo. Al llegar tenía tuberculosis, la cual probablemente contrajo cuando estuvo en prisión. Asimismo, según un informe psicológico sufre de estrés postraumático crónico de naturaleza compleja²²² El 23 de enero de 1997 el Reino Unido reconoció la condición de refugiada a la señora J. y el 26 de mayo de 2000 le otorgó permiso indefinido para permanecer en el Reino Unido como refugiada. El 24 de febrero de 2003 la señora J. se naturalizó como ciudadana británica. En diciembre de 2007, la señora J. viajó junto a su pareja a Alemania para visitar a su hermana menor. El 28 de diciembre de ese año, cuando J. se disponía a regresar a Londres, fue detenida provisionalmente por la Policía del Aeropuerto de Colonia/Bonn, Alemania, con base en la solicitud de su búsqueda y captura enviada por parte de las autoridades peruanas mediante la INTERPOL. El 4 de enero de 2008 el Tribunal Regional Superior de Colonia decretó una orden de prisión preventiva contra la señora J. con vistas a su extradición. El 9 de enero se le eximió del cumplimiento de la prisión preventiva a cambio del cumplimiento de ciertas obligaciones, [incluyendo] el pago de una caución”. El 4 de enero de 2008 la Sala Penal Nacional dispuso “solicitar a las autoridades judiciales de la República de Alemania [que] proced[ieran] a la extradición de la [señora J.], el 21 de enero de 2008 la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia señaló que el delito de apología, se ha extinguido la acción penal por prescripción. El 24 de enero de 2008 el Poder Ejecutivo, resolvió “[a]cceder al pedido de extradición activa de la [señora J.], formulado por la Sala Penal Nacional” y solicitar la extradición de la señora J. a Alemania²²³. El 22 de agosto de

²²¹ Ibid. Párrafo 111-113

²²² Ibid. Párrafo 114

²²³ Ibid. Párrafo 116-118

2008 el Tribunal Regional Superior de Colonia decidió “[d]eclarar inadmisibile la extradición la decisión se fundamentó en que “la extradición violaría la prohibición de enjuiciar a alguien dos veces por lo mismo”²²⁴. En noviembre de 2009 la INTERPOL decidió borrar de sus expedientes la información comunicada por Perú sobre la señora J.²²⁵.

3.4.5. AFECTACIONES DE DERECHOS

DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL, A LA PROTECCIÓN DEL DOMICILIO, A LAS GARANTÍAS JUDICIALES Y PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS Y EL DEBER DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO

*Al momento de la detención de la señora J. se encontraba vigente en Lima y la provincia constitucional del Callao un decreto que suspendía los derechos a la inviolabilidad del domicilio, a la circulación, de reunión, a ser detenidos solamente por orden judicial o en flagrante delito, y a ser presentado ante un Juez en un plazo máximo establecido.*²²⁶ *La detención de J. y los allanamientos a los inmuebles de su familia se realizaron por la presunta comisión del delito de terrorismo, durante la vigencia y ámbito geográfico del estado de excepción decretado, por lo que estarían dentro del alcance del mismo”.*²²⁷

“La Corte ha señalado que el control judicial inmediato es una medida tendiente a evitar la arbitrariedad o ilegalidad de las detenciones, tomando en cuenta que en un Estado de Derecho corresponde al juzgador garantizar los derechos del detenido, autorizar la adopción de medidas cautelares o de coerción cuando sea estrictamente necesario y procurar, en general, que se trate al inculpado de manera consecuente con la presunción de inocencia. La inmediata revisión judicial de la detención tiene particular relevancia cuando se aplica a capturas realizadas sin orden judicial. En el presente caso está demostrado que la señora J. no fue presentada ante un Juez por al menos 15 días, sin que consten en el expediente razones fundadas para demorar ese tiempo en someter la detención de la señora J. ante un juez. Por tanto, la Corte estima que las medidas tomadas en el presente caso no fueron las “estrictamente necesarias”. En consecuencia, este Tribunal considera que la falta de presentación “sin demora” de la señora J. ante un juez no se justifica por la suspensión

²²⁴ Ibid. Párrafo 119

²²⁵ Ibid. Párrafo 120

²²⁶ Ibid. Párrafo 132

²²⁷ Ibid. Párrafo 137-141

*de garantías existente en el presente caso, por lo que fue arbitraria y por tanto el Estado violó el artículo 7, incisos 1, 3 y 5 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la Convención”.*²²⁸

*“Este Tribunal advierte que no existe claridad sobre dónde se encontraba J. entre el 28 y el 30 de abril, así como entre el 13 y el 15 de abril de 1992. Al respecto, la Corte ha considerado que toda detención, independientemente del motivo o duración de la misma, tiene que ser debidamente registrada en el documento pertinente, señalando las causas de la detención, quién la realizó, la hora de detención y la hora de su puesta en libertad, así como la constancia de que se dio aviso al juez competente, como mínimo, a fin de proteger contra toda interferencia ilegal o arbitraria de la libertad física. La falta de registro de la detención de la señora J. en los períodos mencionados constituye una violación de los derechos consagrados en el artículo 7, incisos 1 y 2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de este instrumento”.*²²⁹

*“la detención preventiva de la señora J. fue arbitraria al carecer de motivación individualizada sobre los fines procesales que perseguía”. La regla general debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal, ya que éste goza de un estado jurídico de inocencia que impone que reciba del Estado un trato acorde con su condición de persona no condenada. El Estado podrá recurrir a una medida de privación preventiva de la libertad a fin de evitar situaciones que pongan en peligro la consecución de los fines del proceso. En el presente caso, el 28 de abril de 1992 el Décimo Juzgado de Instrucción de Lima dictó mandato de detención contra la señora J. La Resolución se refirió a 96 personas, incluyendo a la señora J., a quienes se les abrió instrucción “por delito contra la Tranquilidad Pública (Terrorismo) en agravio del Estado Peruano” “la Corte advierte que la evaluación de la necesidad de la detención centrada única y exclusivamente sobre la base del criterio de la gravedad del delito, expresado en la pena en abstracto contemplada en la legislación, desnaturaliza la finalidad eminentemente procesal del instituto de la prisión preventiva y la convierte en una pena anticipada. Al respecto, la Corte recuerda que la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva”.*²³⁰

²²⁸ Ibid. Párrafo 143 - 144

²²⁹ Ibid. Párrafo 152

²³⁰ Ibid. Párrafo 157

*“La Corte concluye que debido a la ausencia de una motivación adecuada de la orden de prisión preventiva y las limitaciones legales establecidas en el Decreto Ley 25.475 que impedían evaluar la pertinencia de continuar con dicha prisión preventiva, el Estado violó el artículo 7, incisos 1 y 3 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma. Adicionalmente una orden de prisión preventiva arbitraria, puede generar una violación a la presunción de inocencia”.*²³¹

*“La Corte constata que, si bien el 14 de abril de 1992 la señora J. fue notificaba que se encontraba detenida “para esclarecimiento de[l] Delito de Terrorismo”, no consta en el expediente que haya sido notificada de los hechos, causas y razones que llevaban al Estado a formular dicha imputación. La primera declaración que dio la señora J. ante una autoridad estatal fue su manifestación policial realizada el 21 de abril de 1992 y no consta que, previo a esta declaración, la señora J. haya sido informada por escrito de los motivos de su detención, los primeros documentos por los cuales la señora J. o su abogado habrían podido conocer por escrito las razones de su detención, son el atestado policial y la denuncia penal, ambos de 28 de abril de 1992²³². El Estado debe informar al interesado no solamente las acciones u omisiones que se le imputan, sino también las razones, esta información debe ser expresa, clara, integral y suficientemente detallada para permitir al imputado ejercer plenamente su derecho a la defensa y mostrar al juez su versión de los hechos.²³³ Al no notificar formalmente a la señora J. de las razones de su detención y de los hechos que se le imputaban hasta el 28 de abril de 1992, cuando se formuló la denuncia penal en su contra, el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 7.4 y 8.2.b de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de la señora J”.*²³⁴

“La señora J. señaló que no tuvo posibilidad de reunirse con su abogado, más de tres veces entre 15 y 25 minutos, durante el año y dos meses que permaneció sujeta a prisión preventiva y siempre bajo estricta supervisión estatal”.

²³¹ Ibid. Párrafo 165

²³² Ibid. Párrafo 198

²³³ Ibid. Párrafo 199

²³⁴ Ibid. Párrafo 201

*“El Estado no ha alegado que las restricciones al derecho a la defensa de la señora J. en la primera etapa del proceso en su contra se encontraran previstas legalmente. Además, esta Corte debe resaltar que el hecho de que la señora J., sólo hubiera tenido acceso a tres reuniones supervisadas de entre 15 y 25 minutos durante un año y dos meses de detención preventiva, lo cual no ha sido negado por el Estado, resulta claramente desproporcionado frente al derecho a la defensa de la señora J. Por tanto, el Estado violó el artículo 8.2, incisos c y d de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de la señora J”.*²³⁵

“Se alegó que en el presente caso “no se dio publicidad en ninguna etapa del proceso”, ni se realizó una audiencia pública, en el presente caso, como se desprende del texto de la ley y de las actas de las audiencias que cursan en el expediente, las audiencias llevadas a cabo en la primera etapa del proceso contra la señora J. fueron de carácter privado. Asimismo, “el acceso al expediente era restringido aún para los abogados. Había una secretaría especial para este tipo de casos y la única forma como se podía ganar acceso era a través de coimas a los responsables de la custodia de estos documentos”²³⁶. Este Tribunal concluye que la aplicación, como regla general, del carácter privado del proceso seguido a la señora J. hasta la reforma legislativa en 2003, violó en perjuicio de la señora J. el artículo 8.5 de la Convención, en relación con el 1.1 y 2 del mismo instrumento, en tanto la violación se derivó de una norma jurídica vigente al momento de los hechos”.

La ausencia de motivación y la presunción de inocencia en la decisión de la Corte Suprema de Justicia de 27 de diciembre de 1993

“La Corte ha mencionado que la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión. En el presente caso, luego de que la señora J. fue absuelta por la Corte Superior de Justicia de Lima el 18 de junio de 1993, la Corte Suprema de Justicia “sin rostro” declaró nula la sentencia de absolución el 27 de diciembre de 1993 y mandó a que “se reali[zara] nuevo juicio oral por otra Sala Penal Especializada”. La Corte constata que la referida sentencia de diciembre de 1993 no contiene más elementos fácticos o normativos que informen de la motivación del fallo. Al respecto, la Corte hace notar que la señora J. se encontraba acusada en un proceso donde

²³⁵ Ibid. Párrafo 207

²³⁶ Ibid. Párrafo 219

se acusó conjuntamente a otras 93 personas. El fallo mediante el cual se absolvió a la señora J., condenó a once de los acusados, absolvió a diecisiete y reservó el proceso contra otras sesenta y cinco personas. No obstante, el fallo que declaró su nulidad en diciembre de ese año no especifica respecto de quiénes se compulsó inadecuadamente la prueba o se realizó una indebida apreciación de los hechos materia de la inculpación, no establece la base normativa con base en la cual se declaró la nulidad o la causal por la cual resultaba procedente. Dicha ausencia de motivación y fundamentación en la sentencia de la Corte Suprema generó que fuera imposible para la señora J. defenderse adecuadamente de forma que pudiera controvertirlo o recurrirlo para hacer valer la absolución dictada a su favor.²³⁷ La Corte resalta que, si bien la decisión de la Corte Suprema “sin rostro” no constituye una condena, sí afectó los derechos de la señora J. en la medida en que afectó la firmeza de su absolución. De no haberse declarado la nulidad de la absolución dictada a favor de la señora J., actualmente no existiera un proceso penal abierto en contra de la señora J. Además, la Corte considera que la exigencia de una motivación adecuada en dicha decisión era aún mayor, en tanto anuló una absolución dictada debido a una insuficiencia probatoria con base en una supuesta compulsión inadecuada de la prueba”²³⁸.

“En relación a las conductas que se le imputan a la señora J., esta Corte resalta que ni la acusación ni el atestado policial u otro documento que conste en el expediente ante la Corte atribuyen a la señora J. un acto terrorista específico, de manera individualizada, con circunstancias de tiempo y lugar (distintas a las referidas a su detención) tal como requería la descripción típica del delito por el cual se le estaba juzgando en ese momento”²³⁹. Adicionalmente, advierte que no se desprende de dicha acusación cuál sería el acto de terrorismo o delito del cual la señora J. habría hecho apología, conforme exige la norma penal por la cual está siendo acusada”²⁴⁰.

“Para garantizar el derecho a la defensa es necesario que en la formulación de una acusación criminal se expongan todos los fundamentos probatorios de ésta. La Corte concluye que la indeterminación y vaguedad en la descripción de las conductas supuestamente atribuibles a la señora J., así como la ausencia de conductas que encuadren

²³⁷ Ibid. Párrafo 225-226

²³⁸ Ibid. Párrafo 227

²³⁹ Ibid. Párrafo 290

²⁴⁰ Ibid. Párrafo 292

dentro de todos los delitos por los cuales es procesada, han afectado la capacidad de la señora J. de ejercer adecuadamente su derecho a la defensa”²⁴¹.

Sobre la violencia sexual

“La presunta víctima declaró en la manifestación ante la policía el 21 de abril de 1992, así como en su declaración instructiva, rendida los días 10, 15 y 19 de junio de 1992 sobre maltratos presuntamente sufridos durante la detención inicial. Del análisis de dichas declaraciones, en términos generales, consta que la señora J. señaló en al menos dos oportunidades que al momento de la detención inicial: i) fue golpeada y tomada de los cabellos; ii) un hombre habría golpeado sus piernas y la habrían manoseado sexualmente, y iii) le habrían vendado los ojos.”²⁴² Adicionalmente, este Tribunal considera que las variaciones entre las calificaciones jurídicas de violencia o violación sexual que la representación de la presunta víctima le ha dado a los hechos a lo largo del proceso ante el sistema interamericano no desacredita los testimonios rendidos internamente por la señora J. en cuanto a los hechos ocurridos”²⁴³

“Asimismo, es necesario considerar que en ninguna oportunidad la presunta víctima negó los maltratos alegados y, cuando mencionó los mismos, lo hizo sin que fuera en respuesta a alguna pregunta específica realizada durante sus declaraciones. Además, tras relatar sobre los alegados malos tratos los interrogadores continuaron tomando las declaraciones sin realizar ninguna pregunta como consecuencia de lo afirmado. En suma, la Corte considera que, dentro de las distintas declaraciones rendidas por la señora J. ante las autoridades nacionales, las circunstancias principales coinciden”²⁴⁴

“El 18 de abril de 1992, cinco días después de la detención inicial de la señora J., se le realizó un examen médico. El Estado alegó que las lesiones encontradas en el mismo fueron producidas cuando ella intentó huir del inmueble en la calle Las Esmeraldas. Por su parte, la representante señaló que las lesiones que muestra el examen son consecuentes con los

²⁴¹ Ibid. Párrafo 293 - 294

²⁴² Ibid. Párrafo 322

²⁴³ Ibid. Párrafo 324

²⁴⁴ Ibid. Párrafo 326

*maltratos que la señora J. alegó haber sufrido²⁴⁵. Las lesiones encontradas en las piernas y en el tórax posterior de J. son consistentes con lo relatado por ésta, en el sentido que fue lastimada por vidrios en la espalda, empujada al piso donde, así como que un hombre habría pisado sus piernas. Respecto a la posibilidad que dichas lesiones hubiesen sido causadas cuando la señora J. presuntamente intentaba huir del inmueble en la calle Las Esmeraldas, la Corte advierte que el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad debe atenderse a criterios de legitimidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad”.*²⁴⁶.

“A ello se añade que, la Corte nota que el examen médico fue realizado antes de que la señora J. declarara y relatará por primera vez los hechos presuntamente ocurridos durante su detención inicial. Tras dichos relatos las autoridades nacionales no ordenaron la realización de ningún examen médico adicional. Por tanto, en vista que el examen médico de 18 de abril de 1992 no incluyó revisiones relativas a delitos de naturaleza sexual, la alegada agresión sexual nunca fue examinada médicamente.”²⁴⁷ En consecuencia, la Corte considera que la información que se desprende del examen médico no contradice lo relatado por la señora J., sino por el contrario es consecuente con lo alegado. Asimismo, el hecho de que no se hubieran realizado otros exámenes para verificar la ocurrencia de los malos tratos descritos es imputable al Estado y no puede ser utilizado para desvirtuar lo señalado por la presunta víctima”²⁴⁸.

“El deber del Estado de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esta obligación de investigar se ve reforzada por lo dispuesto en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura que obligan al Estado a “toma[r] medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción”, así como a “prevenir y sancionar [...] otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”²⁴⁹.

“Tras la entrada en vigor para el Perú de la Convención Belém do Pará, el Estado está obligado a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. En concordancia con ello, esta Corte ha establecido en su jurisprudencia

²⁴⁵ Ibid. Párrafo 327

²⁴⁶ Ibid. Párrafo 330

²⁴⁷ Ibid. Párrafo 332

²⁴⁸ Ibid. Párrafo 334

²⁴⁹ Ibid. Párrafo 341

*que las disposiciones del artículo 7.b de la Convención de Belém do Pará especifican y complementan las obligaciones que tiene el Estado con respecto al cumplimiento de los derechos consagrados en la Convención Americana, tales como la obligación de garantizar el derecho reconocido en el artículo 5 de la Convención Americana. En estos casos las autoridades estatales deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva una vez que tomen conocimiento de posibles hechos que constituyan violencia contra la mujer, incluyendo la violencia sexual. Esta obligación de investigar debe tomar en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección”.*²⁵⁰

*“En el presente caso, la presunta víctima relató por primera vez los alegados malos tratos el 21 de abril de 1992 en su primera declaración ante las autoridades estatales, que en ese caso se trataba de la misma policía. Posteriormente, volvió a mencionar estos hechos en su declaración instructiva. Este Tribunal destaca que en virtud de las consideraciones anteriores, al tener noticia de los alegados malos tratos sufridos por la señora J., se originó la obligación estatal de iniciar una investigación de los hechos ex officio. No obstante, de acuerdo a lo afirmado por el propio Estado aún no se ha iniciado investigación alguna”.*²⁵¹

“Entre las justificaciones dadas por El Estado es que “ha sido usual que las procesadas por terrorismo aleguen indebidamente haber sido víctimas de violaciones sexuales u otros actos de contenido sexual, a pesar de que dichas aseveraciones no se corroboran con los certificados médicos [l]egales que se les practicaron, teniendo como única finalidad cuestionar la legalidad del proceso penal”. Este Tribunal observa que dicho alegato evidencia una concepción que (i) asume automáticamente que las denuncias de violencia sexual son falsas, contrario al deber de iniciar una investigación de oficio cada vez que se presente una denuncia o existan indicios de su ocurrencia; (ii) es contraria al contexto de violencia sexual existente en la época de los hechos; (iii) desconoce que no todos los casos de violación y/o violación sexual ocasionan lesiones físicas verificables a través de un examen médico, y (iv) muestra un criterio discrecional y discriminatorio con base en la situación procesal de las mujeres para no iniciar una investigación por una alegada violación o violencia sexual. Al respecto, la Corte recuerda que la investigación que debe

²⁵⁰ Ibid. Párrafo 342

²⁵¹ Ibid. Párrafo 345

iniciar el Estado, una vez que las autoridades estatales tengan conocimiento del hecho, debe ser una investigación seria, imparcial y efectiva. Por tanto, el inicio de la investigación no puede estar condicionado por quien realiza la denuncia ni por la creencia de las autoridades, antes de iniciar la investigación, de que las alegaciones realizadas son falsas.”²⁵²

“En suma, este Tribunal considera que el Estado ha debido iniciar una investigación en el presente caso tras la primera denuncia realizada el 21 de abril de 1992 por la señora J. La falta de investigación impide que el Estado presente una explicación satisfactoria y convincente de los maltratos alegados y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados”²⁵³.

“Al momento de la detención inicial a la señora J. le vendaron los ojos, fue golpeada, manoseada sexualmente y que tras salir del inmueble de la calle Las Esmeraldas no fue llevada directamente a la DINCOTE sino que estuvo en un automóvil por un tiempo indeterminado mientras posiblemente se realizaban registros de otros inmuebles. ²⁵⁴ Durante los traslados funcionarios estatales amenazaron a la señora J. varias veces indicando que le iban a “‘dar una vuelta a la playa’, expresión comúnmente conocida en Perú como una amenaza de tortura o asesinato”. No es claro a dónde más fue conducida J., entre su detención y su ingreso a la DINCOTE. Estos hechos otorgan credibilidad a lo declarado por la señora J. en el sentido que tras salir del inmueble de la calle Las Esmeraldas habría estado dando vueltas hasta que fue llevada a la DINCOTE. En suma, no existe prueba en el expediente que desvirtúe la veracidad de estos alegatos y de lo declarado por la señora J. a nivel interno, además de que estos son concordantes con el contexto de la época de los hechos, así como con el resto de los hechos del caso. Por tanto, este Tribunal considera razonable presumir que durante dichos traslados la señora J. continuó siendo amenazada por los funcionarios policiales que la detuvieron”²⁵⁵.

“Por lo que se concluye que la señora J. sufrió diversos malos tratos con ocasión de su detención inicial, llegar a una conclusión distinta, implicaría permitir al Estado ampararse

²⁵² Ibid. Párrafo 352

²⁵³ Ibid. Párrafo 353

²⁵⁴ Ibid. Párrafo 354

²⁵⁵ Ibid. Párrafo 355

en la negligencia e ineffectividad de la investigación y la situación de impunidad en la que permanecen los hechos del caso, para sustraerse de su responsabilidad.”²⁵⁶

Sobre los “manoseos”

“En el presente caso, existen dos controversias en relación con la caracterización de los maltratos constatados previamente. Por un lado, las partes y la Comisión difieren en cuanto a si lo que la presunta víctima calificó como “manoseos” constituyen violencia sexual o violación sexual. Por otro lado, existe controversia en cuanto a la calificación de los hechos como tortura.”²⁵⁷

“Siguiendo la línea de la jurisprudencia internacional y tomando en cuenta lo dispuesto en la Convención de Belém do Pará, la Corte ha considerado que la violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen en una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno”²⁵⁸.

“En el presente caso, la Corte ya estableció que la señora J. fue “manoseada” sexualmente al momento de su detención por un agente estatal de sexo masculino teniendo en cuenta: (1) las declaraciones de la señora J. rendidas ante las autoridades internas; (2) la similitud de lo descrito por la señora J. y el contexto de violencia sexual verificado por la CVR en la época de los hechos; (3) las dificultades probatorias propias de este tipo de hechos; (4) la presunción de veracidad que debe otorgarse a este tipo de denuncias, la cual puede ser desvirtuada a través de una serie de diligencias, investigaciones y garantías que no fueron otorgadas en el presente caso, donde no fue presentada prueba en contrario, ya que (5) existen ciertas inconsistencias en la declaración de la fiscal del Ministerio Público; (6) el examen médico no contradice lo señalado por la señora J., y (7) el Estado no ha iniciado una investigación sobre estos hechos. La Corte considera que este acto implicó la invasión física del cuerpo de la señora J. y al involucrar el área genital de la presunta víctima significó que el mismo fuera de naturaleza sexual. Asimismo, las circunstancias en las que se produjeron los hechos eliminan cualquier posibilidad de que hubiese habido consentimiento.

²⁵⁶ Ibid. Párrafo 356

²⁵⁷ Ibid. Párrafo 357

²⁵⁸ Ibid. Párrafo 358

Por tanto, este Tribunal considera que el “manoseo” del cual fue víctima la señora J. constituyó un acto de violencia sexual. Si bien las víctimas de violencia sexual tienden a utilizar términos poco específicos al momento de realizar sus declaraciones y no explicar gráficamente las particularidades anatómicas de lo sucedido, este Tribunal considera que a partir de las declaraciones de la presunta víctima que constan en el expediente del presente caso no es posible determinar si dicha violencia sexual además constituyó una violación sexual en los términos señalados anteriormente”²⁵⁹.

“La violencia sexual de la cual fue víctima la señora J. por un agente del Estado y mientras estaba siendo detenida es un acto grave y reprobable, tomando en cuenta la vulnerabilidad de la víctima y el abuso de poder que despliega el agente. En relación con el artículo 5 de la Convención, la Corte considera que dicho acto fue denigrante y humillante física y emocionalmente, por lo que pudo haber causado consecuencias psicológicas severas para la presunta víctima”.²⁶⁰

“La Corte recuerda que al momento de la detención inicial a la señora J. le vendaron los ojos, fue golpeada, manoseada sexualmente y que tras salir del inmueble de la calle Las Esmeraldas no fue llevada directamente a la DINCOTE, sino que estuvo en un automóvil por un tiempo indeterminado mientras posiblemente se realizaban registros de otros inmuebles, tiempo durante el cual fue amenazada. Al analizar dichos hechos es necesario tomar en cuenta que, al haber estado vendada, la señora J. debió haber estado desorientada lo cual probablemente aumentó su grado de angustia y terror sobre lo que podría suceder. Estos sentimientos se intensificaron cuando la señora J. fue conducida por algún tiempo sin destino conocido, cuando es presumible que fue amenazada por funcionarios policiales, sin ningún tipo de garantía legal. Dentro de este contexto, al haber sido detenida mediante la fuerza, y tras haber sido víctima de una violencia sexual, para la señora J. existía un riesgo real e inmediato de que dichas amenazas se concretasen.²⁶¹ Es por eso que La Corte considera que la violencia sexual de la cual fue víctima la señora J. supuso una intromisión en los aspectos más personales e íntimos de su vida privada”.²⁶²

²⁵⁹ Ibid. Párrafo 360

²⁶⁰ Ibid. Párrafo 361

²⁶¹ Ibid. Párrafo 365

²⁶² Ibid. Párrafo 367

“Con base en lo anterior, la Corte concluye que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad y a la vida privada, consagrados, respectivamente, en los artículos 5.1, 5.2, 11.1 y 11.2 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 del mismo tratado y 6 de la Convención Interamericana contra la Tortura. Adicionalmente, este Tribunal advierte que el Estado no ha investigado los hechos violatorios de los artículos 5 y 11 de la Convención Americana, lo que implica un incumplimiento del deber de garantizar la integridad personal así como la protección a la vida privada, así como del deber establecido en el artículo 7.b de la Convención de Belém do Pará y los artículos 6 y 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura, en perjuicio de la señora J. En virtud de lo anterior, la Corte no estima necesario hacer un pronunciamiento adicional respecto de alegada violación por estos hechos de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en perjuicio de J.”²⁶³

3.4.6. PUNTOS RESOLUTIVOS

DECLARA,

por unanimidad, que:

4. El Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad y a la vida privada, consagrados, respectivamente, en los artículos 5.1, 5.2, 11.1 y 11.2 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 del mismo tratado y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, por los maltratos sufridos por la señora J. con ocasión de su detención inicial, así como del incumplimiento de su obligación de garantizar, a través de una investigación efectiva de dichos hechos, los derechos consagrados en los artículos 5 y 11 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma y con los artículos 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y el artículo 7.b de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en los términos de los párrafos.

3.4.7. COMENTARIO

Nuevamente en esta sentencia se aprecia que estamos ante hechos donde la víctima fue parte de un proceso donde era acusada de terrorismo, y se dio en el ámbito de crisis en el Perú

²⁶³ Ibid. Párrafo 368

generado por el conflicto interno creado por Sendero Luminoso, por ello se debe hacer la evaluación de esta sentencia desde la visión jurídica, tanto más que la señora J en este caso fue declarada absuelta de las denuncias y acusaciones que fueron vertidas en su contra en primera instancia, y a pesar que dicha sentencia fue declarada nula no se le volvió a procesar debido a que salió del país y ante su captura en el extranjero fueron los tribunales alemanes quienes decidieron que como ya había sido declarada absuelta no debía ser objeto de nuevo enjuiciamiento y se le retiró del listado de personas buscadas internacionalmente.

En esta sentencia se resalta que la señora J era una persona detenida y en múltiples oportunidades puso en conocimiento que fue objeto de actos que la violentaban sexualmente y hecho que al menos debió ser investigado y no dejada de lado solo porque se encontraba en estado de detenida, razonamiento que denota a pesar que una mujer pueda ser procesada o sentenciada por actos delictivos no le quita su estatus de mujer y por ello de poder ser objeto de violencia, de tal forma que no por estar siendo perseguida por la ley pierde los derechos que la protegen, entre ellos el de recibir atención ante la posibilidad de haber sufrido actos de violencia en su contra.

De otro lado no podemos dejar de lado que ya en el comentario de la sentencia anterior se hizo referencia que la violencia sexual se puede dar de diferente manera y no solo por penetración por vía vaginal y sexual, en este caso no solo se refiere a tal aspecto sino que las mujeres pueden expresar que han sido objeto de violencia de muchas maneras, y que debe entenderse los términos que utilizan para comprender que fueron objeto de violencia sexual, en este caso ella expresó que fue “manoseada”, término cultural que hace ver una mujer sufrió de tocamientos indebidos, los cuales tampoco fueron investigados.

En conclusión la falta de investigación es el punto álgido de esta sentencia, dado que se contravino el derecho de la señora J de acceso a la justicia al no haberse investigado los actos de violencia sexual de los que fue víctima, ello porque primó la actitud revanchista del Estado a través de sus autoridades y no se detuvieron a actuar en el marco de la ley cuando se procedió a la detención de la señora J, lo que llevó a que ella sufriera actos que vulneraron su dignidad como mujer y persona, sin dejar de lado que la violencia sexual sufrida fue parte de la tortura que sufrió los días de su cautiverio.

3.5. ESPINOZA GONZALES VS. PERU

3.5.1. FECHA: 20 DE NOVIEMBRE DE 2014

3.5.2. PRESENTACIÓN DEL CASO POR LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS A LA CORTE

PAIS DENUNCIADO	Estado del Perú
DERECHOS AFECTADOS PARA LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS	La Comisión concluyó que el Estado era responsable de: violaciones de los derechos consagrados en los artículos 5.1, 5.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 11.1, 11.2, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1. de dicho instrumento internacional, en perjuicio de Gladys Carol Espinoza, la violación del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, en perjuicio de Gladys Carol Espinoza, la violación de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, perjuicio de Gladys Carol Espinoza, la violación del artículo 5.1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de este instrumento internacional, en perjuicio de Teodora Gonzales Vda. de Espinoza, Marlene, Mirian y Manuel Espinoza Gonzales.”

“El 8 de diciembre de 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) presentó un escrito (en adelante “escrito de sometimiento”) por el cual sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana el caso Gladys Carol Espinoza Gonzáles contra la República del Perú (en adelante “el Estado” o “Perú”). Según la Comisión, el presente caso se relaciona con la supuesta detención ilegal y arbitraria de Gladys Carol Espinoza Gonzáles el 17 de abril de 1993, así como la alegada violación sexual y otros hechos constitutivos de tortura de los que fue víctima, mientras permaneció bajo la custodia de agentes de la entonces División de Investigación de Secuestros (DIVISE) y de la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (DINCOTE), ambas adscritas a la Policía Nacional del Perú. La Comisión sostuvo que además de los alegados hechos de tortura ocurridos a comienzos de 1993, Gladys Espinoza habría sido sometida a condiciones de detención inhumanas durante su reclusión en el Penal de Yanamayo entre

*enero de 1996 y abril de 2001, presuntamente sin acceso a tratamiento médico y alimentación adecuados, y sin la posibilidad de recibir visitas de sus familiares. También señaló que en agosto de 1999 agentes de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú (DINOES) le habrían propinado golpizas en partes sensibles del cuerpo, sin que la presunta víctima tuviera acceso a atención médica oportuna. Finalmente, sostuvo que los hechos del caso no habrían sido investigados y sancionados por las autoridades judiciales competentes, permaneciendo en la impunidad.”*²⁶⁴

3.5.3. VÍCTIMAS

La Corte declara que solamente considerará como presuntas víctimas y eventuales beneficiarias de las reparaciones que correspondan, a Gladys Carol Espinoza Gonzáles, Teodora Gonzáles de Espinoza y Manuel Espinoza Gonzáles.²⁶⁵

3.5.4. HECHOS

“La Corte ha reconocido que, desde comienzos de la década de los ochenta hasta finales del año 2000, se vivió en el Perú un conflicto entre grupos armados y agentes de las fuerzas policiales y militares. El referido conflicto se agudizó en medio de una práctica sistemática de violaciones de los derechos humanos, entre ellas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas sospechosas de pertenecer a grupos armados al margen de la ley. Estas prácticas fueron realizadas por agentes estatales siguiendo órdenes de jefes militares y policiales”²⁶⁶. La Corte ha señalado que resulta amplia y públicamente conocido el sufrimiento causado a la sociedad peruana por Sendero Luminoso. Por su parte, en su accionar, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (en adelante “MRTA”) se caracterizó por la “toma” de radioemisoras, colegios, mercados y barrios populares, además, realizaron secuestros de periodistas y empresarios para obtener por su rescate importantes sumas de dinero. Durante su cautiverio, los secuestrados permanecían ocultos en las llamadas “cárceles del pueblo” (espacios de reducidas dimensiones e insalubres)”²⁶⁷.

“La Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) puso de relieve que, entre los hechos imputables al MRTA, la toma de rehenes y los secuestros con fines políticos y/o económicos

²⁶⁴ Caso Espinoza Gonzales vs. Perú, sentencia de 20 de noviembre del 2014, párrafo 1

²⁶⁵ Ibid. Párrafo 31

²⁶⁶ Ibid. Párrafo 51

²⁶⁷ Ibid. Párrafo 52

tuvieron un impacto particular en la sociedad peruana, dadas la forma y las condiciones en que se llevaron a cabo. Los elementos de prueba obtenidos por la CVR le permitieron concluir que entre 1984 y 1996 el MRTA realizó decenas de secuestros individuales y colectivos con fines de extorsión”²⁶⁸.

“Desde octubre de 1981 “el recurso a los estados de emergencia se generalizó, suspendiendo por períodos renovables de tiempo las garantías constitucionales relativas a la libertad y seguridad individual, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y de tránsito en el territorio”. En este sentido, el 5 de septiembre de 1990 se decretó estado de emergencia en el Departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao por medio de un decreto supremo, el cual fue prorrogado en varias oportunidades. Asimismo, se determinó que las Fuerzas Armadas se encargarían del control del orden interno”²⁶⁹. “La Corte ha reconocido que en 1993 existió en el Perú una práctica generalizada de tratos crueles, inhumanos y degradantes con motivo de investigaciones criminales por los delitos de traición a la patria y terrorismo”²⁷⁰.

“Según el Informe de la CVR, durante el conflicto se produjeron numerosos actos de violencia sexual contra las mujeres en el Perú por agresores provenientes tanto del Estado como de los grupos subversivos, y si bien se dieron casos de violencia sexual contra los varones, las mujeres fueron afectadas mayoritariamente por estos hechos, lo cual “permite hablar de una ‘violencia de género’ durante el conflicto armado vivido en el Perú, dado que la violencia sexual afectó a las mujeres por [el] solo hecho de serlo”.²⁷¹ La violencia sexual contra las mujeres afectó a un número importante de las mujeres detenidas a causa de su real o presunto involucramiento personal en el conflicto. Afectó también a aquéllas cuyas parejas eran miembros reales o supuestos de los grupos subversivos. Incluso, como castigo o represalia, fueron víctimas de formas de violencia sexual mujeres que realizaban una labor de búsqueda y/o denuncia de los casos de violaciones de derechos humanos de sus familiares. A la luz de la información recogida, la CVR concluyó que la violación sexual se trató de una práctica reiterada y persistente que se produjo en el contexto de la violencia sexual antes descrita.”²⁷²

²⁶⁸ Ibid. Párrafo 53

²⁶⁹ Ibid. Párrafo 54

²⁷⁰ Ibid. Párrafo 61

²⁷¹ Ibid. Párrafo 62

²⁷² Ibid. Párrafo 63

De acuerdo con la CVR, la violencia sexual se presentaba desde el momento de la detención de hecho, así como durante el traslado entre las diversas entidades estatales. En este sentido, señaló que las mujeres detenidas “eran objeto de tocamientos impropios por todo el que paseaba por su lado” y eran comunes los “abusos sexuales, manoseos [y] amenazas de violación sexual”²⁷³.

“Los casos en los cuales una mujer [era] sometida a alguna de estas prácticas no son denunciados” y que “la legislación penal interna no facilita[ba] que una mujer víctima de violencia sexual denunci[ara] estos hechos, dado los engorrosos procedimientos que la denuncia implica[ba], así como la humillación y vergüenza que se extiende sobre la víctima”. Por otra parte, la CVR concluyó que la violencia sexual estuvo rodeada de un contexto de impunidad, tanto al momento en que los hechos se produjeron como cuando las víctimas decidían acusar a sus agresores.”²⁷⁴

“Gladys Carol Espinoza Gonzáles nació en la ciudad de Lima, Perú, el 3 de junio de 1953. Es hija de Teodora Gonzáles y Fausto Espinoza León y hermana de Manuel Espinoza Gonzáles. Entre 1977 y 1982 realizó estudios superiores en la Facultad de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional de la Universidad Estatal de Kiev, Ucrania, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y concluyó la especialidad de Derecho Internacional con el grado de Master of Law (LLM)”²⁷⁵.

“Gladys Carol Espinoza Gonzáles fue interceptada junto con su pareja sentimental Rafael Edwin Salgado Castilla el 17 de abril de 1993 en Lima, a la altura de la cuadra 21 de la Avenida Brasil (Ovalo Brasil), por efectivos de la División de Investigación de Secuestros (en adelante “DIVISE”) de la Policía Nacional del Perú (en adelante “PNP”), quienes habían montado el operativo denominado “Oriente” a fin de dar con los autores del secuestro del empresario Antonio Furukawa Obara presuntamente producido el 1 de febrero de 1993. Al momento de ser interceptados, Rafael Salgado se desplazaba a bordo de una motocicleta y llevaba en el asiento posterior a Gladys Espinoza. Ambos fueron introducidos a un vehículo y conducidos hasta las instalaciones de la DIVISE.”²⁷⁶.

²⁷³ Ibid. Párrafo 65

²⁷⁴ Ibid. Párrafo 66

²⁷⁵ Ibid. Párrafo 69

²⁷⁶ Ibid. Párrafo 70

“Es un hecho probado y no controvertido por el Estado que en el marco de la intervención y detención por efectivos de la DIVISE de 17 de abril de 1993, Gladys Espinoza y Rafael Salgado resultaron con lesiones. Sobre la causa de esas lesiones existen dos versiones. Según alegan la Comisión y los representantes, Gladys Espinoza fue detenida con violencia y mediando insultos, golpes y amenazas, sin que el Estado presentara una explicación sobre su estricta necesidad y proporcionalidad a la luz de los estándares que regulan el uso de la fuerza. La propia Gladys Espinoza ha manifestado en diversas declaraciones que al momento de su detención fue víctima de golpes y amenazas. En cambio, los informes de la DIVISE y la DINCOTE indican que durante la intervención policial se produjo una persecución y colisión del vehículo de los efectivos de la PNP con la motocicleta en la que viajaba la presunta víctima, así como una tenaz resistencia, y que como consecuencia, ambas personas resultaron con lesiones en diversas partes del cuerpo” ²⁷⁷

“Ese mismo día y en presencia del instructor, en una de las oficinas de la DIVISE se efectuó el registro personal e incautación de diversos objetos a Gladys Espinoza y Rafael Salgado. Además, se realizó el parte mediante el cual se registraron las circunstancias de la detención. En el marco de la intervención y detención Rafael Salgado resultó con lesiones de gravedad y falleció en instalaciones de la DIVISE ese mismo día. Por su parte, Gladys Espinoza fue trasladada al día siguiente a instalaciones de la DINCOTE” ²⁷⁸.

“Durante su permanencia en la DINCOTE Gladys Espinoza “fue objeto de atención y tratamiento médico”. Específicamente, consta en el expediente que en dicho período de tiempo se emitieron al menos cinco exámenes, informes y certificados médicos realizados a Gladys Espinoza. En dichos informes se certificó la presencia de lesiones y hematomas en diversas partes del cuerpo” ²⁷⁹.

“El 26 de abril de 1993 Teodora Gonzáles, madre de Gladys Espinoza, presentó un escrito ante la 14a Fiscalía Especial de Terrorismo, mediante el cual solicitó “verificar con un médico legista la vida y salud de [ésta]”, debido a que el 23 de abril un efectivo policial le había comunicado “la gravedad de su estado”. A su vez, el 28 de abril de 1993 Francisco

²⁷⁷ Ibid. Párrafo 71

²⁷⁸ Ibid. Párrafo 72

²⁷⁹ Ibid. Párrafo 73

*Soberon Garrido, Coordinador General de APRODEH, denunció ante la Fiscalía Especial de Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos y ante la Fiscalía de la Nación, Ministerio Público, que el 27 de abril de 1993 Gladys Espinoza “habría sido sometida a abuso sexual en la Prefectura por los Policías que tienen a su cargo la investigación, además de haberla sometido [a] maltratos físicos, consistentes en actos contra natura, y con haberle introducido un objeto (palo) contundente en el órgano sexual de la mujer, así como golpes en la cabeza hasta sangrarla; estas vejaciones y maltratos no solo comenzaron el día de ayer, sino que tendrían una secuencia desde el día que dieron muerte a [...] Rafael Salgado Castillo”.*²⁸⁰

*“El 17 de mayo de 1993 el Fiscal Militar del Consejo de Guerra Permanente de la Fuerza Aérea del Perú (en adelante “FAP”) formalizó denuncia ante el Juez Instructor del Consejo de Guerra Permanente de la FAP por el delito de traición a la patria en contra de Gladys Espinoza”*²⁸¹.

*“Los días 28 de abril y 7 y 10 de mayo de 1993 y en presencia del Instructor de una de las Oficinas de la DINCOTE, entre otras personas que estuvieron presentes, se recibieron las manifestaciones de Gladys Espinoza. En dichas declaraciones, sostuvo que fue víctima de actos de violencia, violación sexual y torturas durante su detención y en las instalaciones de la DIVISE. Posteriormente, el 5 de junio de 1993 la señora Espinoza rindió declaración instructiva en las Oficinas de la DINCOTE ante el Juez Militar Especial, mediante la cual reiteró que fue víctima de actos de violencia durante su detención y en las instalaciones de la DIVISE y la DINCOTE”*²⁸².

*“El 25 de junio de 1993 se dio lectura en las instalaciones de la DINCOTE y en presencia de Gladys Espinoza, a la Sentencia que dictó ese día el Juez Instructor Militar Especial, mediante la cual determinó, entre otros, que “pertenece al grupo dirigenal del MRTA como integrante de una ‘Fuerza Especializada’ de realizar secuestros, extorsiones y atentados”, y la condenó como autora del delito de traición a la patria a la pena privativa de libertad de cadena perpetua.”*²⁸³

²⁸⁰ Ibid. Párrafo 75

²⁸¹ Ibid. Párrafo 76

²⁸² Ibid. Párrafo 77

²⁸³ Ibid. Párrafo 78

*“Gladys Espinoza fue transferida el 30 de julio 1993 de la DINCOTE al Establecimiento Penal de Máxima Seguridad de Mujeres de Chorrillos. El 17 de enero de 1996 ingresó al Establecimiento Penal de Yanamayo. El 10 de mayo de 2001 Gladys Espinoza fue trasladada al Establecimiento Penal de Aucallama Huaral, y el 16 de diciembre de 2003 fue trasladada al Establecimiento Penal de Máxima Seguridad de Mujeres de Chorrillos, en donde actualmente se encuentra reclusa.”*²⁸⁴

*“El 17 de febrero de 2003 la Sala Penal Superior de la Corte Suprema declaró nulo todo lo actuado en el proceso penal seguido ante el Fuero Militar por delito de traición a la patria. Por tanto, el Fiscal Provincial formalizó denuncia y abrió instrucción en la vía ordinaria contra Gladys Espinoza como presunta autora del delito contra la Tranquilidad Pública-Terrorismo.”*²⁸⁵ *En el marco del proceso penal seguido por la comisión del delito contra la Tranquilidad Pública- Terrorismo, Gladys Espinoza rindió declaración el 28 de agosto de 2003, relató que fue víctima de actos de violencia durante su detención, así como de actos de violencia, violación sexual y torturas durante el tiempo en que permaneció en las instalaciones de la DIVISE y la DINCOTE. A su vez, el 10 de diciembre de 2003 presentó un escrito ante el Presidente de la Sala Nacional de Terrorismo, mediante el cual solicitó, entre otros, que se le practicara una pericial médico-legal y psicológica a fin de determinar “si h[a] sido víctima de torturas”. Así, se realizó a Gladys Espinoza un “Protocolo de Reconocimiento Médico Legal para la Detección de Lesiones Resultantes de Tortura en Personas Vivas”, en el que únicamente constan un Protocolo de Pericia Psicológica de 13 de febrero de 2004 y dos Certificados Médicos Legales de 22 de enero y 20 de febrero de 2004. El 1 de marzo de 2004 la Sala Nacional de Terrorismo dictó Sentencia, mediante la cual condenó a Gladys Espinoza por el delito contra la Tranquilidad Pública – Terrorismo y le impuso 15 años de pena privativa de libertad a vencer el 17 de abril de 2008”*²⁸⁶. *El 24 de noviembre de 2004 la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad de esta última sentencia en el extremo que impuso a Gladys Espinoza 15 años de pena privativa de libertad, la reformó e impuso 25 años de pena privativa de libertad a vencer el 17 de abril de 2018. Como se indicó, la presunta víctima continúa reclusa en el Establecimiento Penal de Máxima Seguridad de Mujeres de Chorrillos, en cumplimiento de esta última sentencia.”*²⁸⁷

²⁸⁴ Ibid. Párrafo 79

²⁸⁵ Ibid. Párrafo 80

²⁸⁶ Ibid. Párrafo 81

²⁸⁷ Ibid. Párrafo 82

“A pesar de las numerosas denuncias formuladas desde 1993 en adelante, no hubo ninguna investigación sobre los alegados actos de violencia, y en particular de violencia sexual, perpetrados en contra de Gladys Espinoza. Fue recién cuando la Comisión Interamericana notificó su informe final al Estado, el 8 de junio de 2011, que se puso en marcha el proceso que llevó a la investigación a cargo de la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima. En efecto, el 19 de octubre de 2011 el Ministro de Justicia del Perú solicitó al Fiscal de la Nación cumplir con las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana en su Informe de Admisibilidad y Fondo sobre el caso de Gladys Espinoza”²⁸⁸.

“La Fiscal asignada al caso inició la investigación preliminar con No. 08-2012 por los delitos contra la libertad personal, la libertad sexual y tortura contra Gladys Espinoza, por los siguientes hechos: i) los ocurridos entre el 17 de abril y 24 de junio de 1993 (secuestro, detención arbitraria, tortura y violación sexual), y ii) los ocurridos durante su reclusión dentro del Penal de Máxima Seguridad de Yanamayo entre el 17 de enero de 1996 y 17 de abril de 2001 y el hecho ocurrido el 5 de agosto de 1999 (tortura). El 15 de junio de 2012 se asignó el caso a un nuevo Fiscal, que continuó al frente de la Investigación hasta que se formalizó denuncia penal ante el Juez de la causa”²⁸⁹.

“Se abrieron tres líneas de investigación. La primera línea tendiente a identificar a las personas o policías que intervinieron a la señora Gladys Espinoza en abril de 1993. La segunda línea se orientó, por un lado, a identificar a los policías que estuvieron a cargo de la investigación que se le siguió a Gladys Espinoza por el delito de terrorismo en la DINCOTE y, por otro lado, a identificar al personal policial que estuvo a cargo de la oficina de control de detenidos en la DINCOTE. La tercera línea se dirigió a identificar a los policías o personal que intervino a Gladys Espinoza en el Penal de Yanamayo en una requisa.”²⁹⁰

“Entre los años 2012 y 2014 el Fiscal asignado dispuso recibir las declaraciones indagatorias de diversos agentes de la Policía Nacional del Perú y, luego de realizarse las

²⁸⁸ Ibid. Párrafo 88

²⁸⁹ Ibid. Párrafo 85

²⁹⁰ Ibid. Párrafo 86

notificaciones correspondientes, consta que se recibieron las declaraciones de al menos 58 personas y 10 personas no comparecieron a declarar”²⁹¹.

“Consta que, luego de realizadas las diligencias y después de haber sido solicitado en reiteradas oportunidades por el Fiscal asignado, el Instituto de Medicina Legal elaboró el 7 de enero de 2014 un “Protocolo de Investigación de Tortura o Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes” respecto de Gladys Espinoza, con base en las evaluaciones realizadas a ésta el 20 de agosto, 17 de octubre y 2 de diciembre de 2013, así como los certificados médicos elaborados en los años 1993 y 2004. En el mencionado Protocolo se concluyó que: “I. A. Hay una firme relación, las lesi[o]nes (cicatrices) pueden haber sido causadas por los traumatismos descritos [por la presunta víctima], y por muy pocas causas más; B. En región anal y genital, es t[í]pica, este es el cuadro que normalmente se encuentra con este tipo de traumatismo”, refiriéndose a aquellos derivados de tortura.”²⁹²

“De otro lado consta que durante los años 2012 y 2013 se tomaron las declaraciones de dos Fiscales, ocho agentes policiales de la Policía Nacional del Perú y dos reclusas que estuvieron el día 5 de agosto de 1999 en el Establecimiento Penitenciario de Yanamayo”²⁹³.

“Mediante Resolución de 31 de marzo 2014, el Fiscal asignado de la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial emitió un pronunciamiento de fondo en el cual dispuso formalizar denuncia “por el presunto delito de secuestro, por el presunto delito de violación sexual, y tortura en el caso de los hechos ocurridos en 1999, y archivar el delito de tortura ocurrido en el año de 1993 porque no había norma penal en el Perú prevista para esos hechos”²⁹⁴.

“El 30 de abril de 2014 el Fiscal asignado de la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial formalizó denuncia penal ante el Juzgado Penal Nacional de Turno de Lima, Contra diecisiete personas como presuntos coautores del delito “Contra la Libertad – Secuestro” contenido en el primer párrafo del artículo 152° del Código Penal- tipo base, en su texto original. De este total solo a 10 personas se les imputó a su vez la agravante contenida en el inciso 1) del mencionado artículo, con la calificación adicional del tipo penal de Secuestro contenido en el artículo 152° de “crimen contra la Humanidad” según el Derecho Penal

²⁹¹ Ibid. Párrafo 88

²⁹² Ibid. Párrafo 91

²⁹³ Ibid. Párrafo 95

²⁹⁴ Ibid. Párrafo 96

*Internacional. Contra una persona como presunto autor por comisión por omisión del delito de “Violación Sexual” previsto y penado en el artículo 170° del Código Penal, calificándolo además como “crimen contra la Humanidad”, en agravio de Gladys Carol Espinoza Gonzáles. Contra una persona como presunto autor por comisión por omisión del delito “Contra la Humanidad – Tortura” contenido en el primer párrafo del artículo 321° o del Código Penal, en agravio de Gladys Carol Espinoza Gonzáles”.*²⁹⁵ El 20 de mayo de 2014 el Primer Juzgado Penal Nacional emitió el auto de procesamiento

3.5.5. AFECTACIONES DE DERECHOS

DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL, EN RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS

*“La Comisión alegó que la detención de Gladys Espinoza fue arbitraria, ya que se había realizado mediando insultos, golpes y amenazas por parte de las autoridades estatales y sin que el Estado presentara una explicación sobre la estricta necesidad y proporcionalidad a la luz de los estándares que regulan el uso de la fuerza. En respuesta, el Estado argumentó que la resistencia a la detención y, como consecuencia, un forcejeo entre los oficiales y las personas detenidas, no puede llegar a concluir que se haya producido un acto de violencia que implique una detención arbitraria. Habida cuenta de que la Corte ha analizado el uso de la fuerza en contra de personas detenidas en el marco del artículo 5 de la Convención Americana”*²⁹⁶.

“Se desprende que al momento de la detención de Gladys Espinoza se había prorrogado el estado de excepción que suspendía, entre otros, el derecho a ser detenidos solamente por orden judicial o en flagrante delito 119). Asimismo, se encontraban vigentes las normas de procedimiento aplicables a la investigación policial, la instrucción y el juicio de los delitos de terrorismo y traición a la patria decretadas el 5 de mayo y 21 de septiembre de 1992. Sobre este punto, los representantes y la Comisión no argumentaron que al momento los hechos del presente caso no existiera en el Perú una situación que requiriera la suspensión de los derechos señalados. Sin perjuicio de ello, la Corte observa que, si bien se encontraba suspendido el derecho a ser detenido solamente por orden judicial o en flagrante delito, en

²⁹⁵ Ibid. Párrafo 98

²⁹⁶ Ibid. Párrafo 106

*dichas normas de procedimiento se permitió que una persona presuntamente implicada en el delito de terrorismo podía ser mantenida en detención preventiva por un plazo no mayor de 15 días naturales, los cuales podían ser prorrogados por un período igual sin que la persona fuera puesta a disposición de autoridad judicial. A su vez, se dispuso la improcedencia de “las Acciones de Garantía de los detenidos, implicados o procesados por delito de terrorismo, comprendidos en el Decreto Ley N° 25.475”. La Corte considera que las posibles afectaciones a Gladys Espinoza debido la aplicación de las normas mencionadas deben ser analizadas a la luz de las garantías contempladas en los artículos 7.3, 7.5 y 7.6 de la Convención, por lo que procede a su análisis en los sub acápite siguientes”.*²⁹⁷

*“Al margen de si en el presente caso existió o no flagrancia, la Corte nota que la prueba aportada en el presente caso no es consistente respecto al período en que se extendió la detención de Gladys Espinoza sin control judicial, esto es, hasta el 24 de junio de 1993 como alegan la Comisión y los representantes, o bien, hasta el 17 de mayo de 1993 como indica el Estado (supra párrs. 103.c, 104.c y 105.c). En efecto, por un lado, Gladys Espinoza ha manifestado que su primera comparecencia se realizó recién el 24 de junio de 1993 cuando fue puesta a disposición del Juzgado Militar Especial. Por otro lado, en el marco del proceso iniciado en contra de Gladys Espinoza por el delito de traición a la patria no se desprende ciertamente en qué momento el Estado cumplió con el deber del control judicial de la detención”*²⁹⁸.

*“En definitiva, la Corte no tiene claridad suficiente para establecer el período en que se extendió la detención de Gladys Espinoza sin control judicial. Por tanto, la Corte considerará, para los efectos de esta Sentencia, que Gladys Espinoza permaneció al menos 30 días sin ser presentada ante un juez. Por su parte, en el Caso J. Vs. Perú la Corte consideró que incluso bajo suspensión de garantías no es proporcional que la víctima, quien había sido detenida sin orden judicial, permaneciera detenida al menos 15 días sin ninguna forma de control judicial por estar presuntamente implicada en el delito de terrorismo”*²⁹⁹.

²⁹⁷ Ibid. Párrafo 121

²⁹⁸ Ibid. Párrafo 131

²⁹⁹ Ibid. Párrafo 132

“Por otra parte, si bien ninguna de las partes cuestionó si el juez de control contaba con las garantías de competencia, independencia e imparcialidad, la Corte ha señalado que el hecho de que se hubiera puesto a la víctima a disposición de un juez penal militar, no satisface las exigencias del artículo 7.5 de la Convención. En consecuencia, la Corte determina que dicha detención, sin un control judicial que se ajuste a los estándares Convencionales, fue contraria al artículo 7.5 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento, en perjuicio de Gladys Carol Espinoza Gonzáles.”³⁰⁰

“Por todo lo anterior, la Corte determina que el Estado es internacionalmente responsable por la violación, en perjuicio de Gladys Carol Espinoza Gonzáles, de los siguientes artículos, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana: a) los artículos 7.1 y 7.2 de la Convención, por la falta de un registro adecuado de la detención de Gladys Carol Espinoza Gonzáles; b) los artículos 7.1 y 7.4 de la Convención, en razón que no se le informó de las razones de la detención ni se le notificaron los cargos formulados según los estándares Convencionales; c) los artículos 7.1, 7.3 y 7.5 de la Convención, por la falta de control judicial de la detención por al menos 30 días, que hizo que la detención pasase a ser arbitraria, y d) los artículos 7.1 y 7.6 de la Convención, en relación con el artículo 2 de la misma, debido a la imposibilidad de interponer el recurso de hábeas corpus o cualquier otra acción de garantía durante la vigencia del Decreto Ley 25.659.”³⁰¹

Sobre la violencia sexual

DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y PROTECCIÓN DE LA HONRA Y DIGNIDAD, Y OBLIGACIÓN DE PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA

“En lo que respecta casos de alegada violencia sexual, la Corte ha señalado que las agresiones sexuales se caracterizan, en general, por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores. Dada la naturaleza de estas formas de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. Asimismo, al analizar dichas declaraciones se debe tomar en cuenta que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar, por el estigma

³⁰⁰ Ibid. Párrafo 133

³⁰¹ Ibid. Párrafo 137

que dicha denuncia conlleva usualmente. La Corte, igualmente, ha tenido en cuenta que las declaraciones brindadas por las víctimas de violencia sexual se refieren a un momento traumático de ellas, cuyo impacto puede derivar en determinadas imprecisiones al recordarlos. Por ello, la Corte ha advertido que las imprecisiones en declaraciones relacionadas a violencia sexual o la mención de algunos de los hechos alegados solamente en algunas de éstas no significa que sean falsas o que los hechos relatados carezcan de veracidad”³⁰².

“Por otro lado, la Corte recuerda que la evidencia obtenida a través de los exámenes médicos tiene un rol crucial durante las investigaciones realizadas contra los detenidos y en los casos cuando estos alegan maltrato. En este sentido, los alegatos de maltratos ocurridos en custodia policial son extremadamente difíciles de sustanciar para la víctima si ésta estuvo aislada del mundo exterior, sin acceso a médicos, abogados, familia o amigos quienes podrán apoyar y reunir la evidencia necesaria. Por tanto, corresponde a las autoridades judiciales el deber de garantizar los derechos del detenido, lo que implica la obtención y el aseguramiento de toda prueba que pueda acreditar los actos de tortura, incluyendo exámenes médicos”³⁰³.

“Adicionalmente, es importante destacar que en los casos en los que existen alegatos de supuestas torturas o malos tratos, el tiempo transcurrido para la realización de las correspondientes pericias médicas es esencial para determinar fehacientemente la existencia del daño, sobre todo cuando no se cuenta con testigos más allá de los perpetradores y las propias víctimas y, en consecuencia, los elementos de evidencia pueden ser escasos. De ello se desprende que para que una investigación sobre hechos de tortura sea efectiva, la misma deberá ser efectuada con prontitud. Por tanto, la falta de realización de un examen médico de una persona que se encontraba bajo la custodia del Estado, o la realización del mismo sin el cumplimiento de los estándares aplicables, no puede ser usado para cuestionar la veracidad de los alegatos de maltrato de la presunta víctima. Igualmente, la ausencia de señales físicas no implica que no se han producido maltratos, ya que es frecuente que estos actos de violencia contra las personas no dejen marcas ni cicatrices permanentes”³⁰⁴.

³⁰² Ibid. Párrafo 150

³⁰³ Ibid. Párrafo 151

³⁰⁴ Ibid. Párrafo 152

“En el mismo sentido, en casos donde se alegue agresiones sexuales, la falta de evidencia médica no disminuye la veracidad de la declaración de la presunta víctima. En tales casos, no necesariamente se verá reflejada la ocurrencia de violencia o violación sexual en un examen médico, ya que no todos los casos de violencia y/o violación sexual ocasionan lesiones físicas o enfermedades verificables a través de dichos exámenes”³⁰⁵.

“Constan en el expediente al menos diez declaraciones en las que Gladys Espinoza se ha pronunciado respecto de lo sucedido al momento en que fue detenida y llevada a instalaciones de la DIVISE y, con posteridad a ello, de la DINCOTE. ³⁰⁶ La descripción de la forma en que fue detenida junto con Rafael Salgado fue consistente en todas las declaraciones mencionadas. Gladys Espinoza reiteradamente hizo referencia a que, el día 17 de abril de 1993, mientras se encontraba detenida sobre una moto con Rafael Salgado en camino hacia el distrito de Jesús María, escuchó disparos y fue tirada de misma, golpeada reiteradamente por varios hombres desconocidos, especialmente en la cabeza con un fierro, introducida a un vehículo y posteriormente trasladada a la DIVISE junto a Rafael Salgado, quien se encontraba ensangrentado en ese momento. Consta igualmente en todas sus declaraciones que durante el traslado se amenazó a Rafael Salgado, diciéndole que si no hablaba sobre el paradero del señor Furukawa, “los 20 [hombres iban] a pasar por ella”, es decir, por la señora Espinoza. Aunado a ello, en todas sus declaraciones, la señora Espinoza señaló que fue amenazada, indicando en dos de éstas que las amenazas referidas eran de muerte en su contra, en otra declaración que la amenazaron con matar a su familia, y en cuatro declaraciones que la amenazaron con “inyectarle el SIDA [sic]”. En cuatro de sus declaraciones también señaló que gritó su nombre al momento de su detención, porque era una época en que desaparecían a las personas. En su declaración rendida ante la Corte, la señora Espinoza manifestó, igualmente, que dentro del vehículo fue colocada “hacia atrás enmarrocada, pies enmarrocados, doblan mi cuerpo hacia delante, sentada cara al piso del auto. Me ahogo pero no les interesa”³⁰⁷.

La tortura

³⁰⁵ Ibid. Párrafo 153

³⁰⁶ Ibid. Párrafo 157

³⁰⁷ Ibid. Párrafo 158

“Por otro lado, respecto de lo sucedido dentro de las instalaciones de la DIVISE y la DINCOTE entre abril y mayo de 1993 Gladys Espinoza refirió haber sido víctima de actos de tortura y/o de actos de violencia y violación sexual. Así, declaró que: a) inicialmente la llevaron a un garaje de la DIVISE, mientras ella se encontraba vendada, donde los “[...] tiraron al su[el]o, dividiéndose en dos grupos, uno para [Gladys Espinoza] y otro para [Rafael Salgado], desconociendo lo que pasaba ni qu[é] personas eran [...]”; b) oía los gritos de Rafael Salgado durante su detención; c) posteriormente fue cargada sobre el hombro de un hombre hacia una especie de azotea, “mientras muchas manos manoseaban [su] cuerpo y [la] golpeaban”; d) fue desnudada forzosamente en esta etapa; e) fue objeto de “manoseos” y le “jalaban [sus] senos”; f) saltaron en reiteradas ocasiones sobre su cuerpo; g) “[...] boca abajo le jalaron el cabello y con las manos atrás [la] metieron en una tina [de aguas fecales] en varias oportunidades [...]”; h) le “[...] empujaban [su] cabeza hacia un recipient[e] con agua que [consideraba que...] era un cilindro y de allí [la] metieron como 5 o 6 veces, percatando[s]e que [le] golpeaban las plantas de los pies con una especie de soguilla con alambres [...]”; i) fue colgada; j) la “[...] seguían [v]ejando, jalando[le] los vellos púbicos, metiendo[le] las manos en [sus] partes íntimas, ofendi[é]ndo[le] con palabras denigrantes [...]”. Dichas penetraciones ocurrieron en su vagina y en su ano; k) fue interrogada sobre su relación con Rafael Salgado y sobre el paradero del señor Furukawa, un empresario quien aparentemente fue secuestrado por miembros del MRTA; l) estuvo encapuchada o con los ojos vendados; m) le decían que “[...] en ese lugar había 20 hombres y que todos eran unas mierdas y que [todos...] iban a pasar por mí [...]”, todo ello mientras escuchaba los gritos de Rafael Salgado y otros; n) le amenazaban con matarla, desaparecerla, matar a su familia y contagiarla con “el SIDA”; o) fue llevada a un hospital, donde alguien “comienza a meter[le] la mano en la vagina [...] sentía que se masturbaba, [...] era el médico”, y durante su presencia en el hospital le metieron agujas en sus pies. Posteriormente fue devuelta a sus captores; p) desmayó en varias oportunidades, y en particular al escuchar que había muerto Rafael Salgado; q) intentaron meterle un pene en su boca contra su voluntad, y ella “reacción[ó] lanzando a un lado y gritando, él responde con insultos y patadas [...]”; r) le metieron un objeto “como una madera” por el ano; s) sentía que se salía de su cuerpo, y que había traspasado los límites del dolor, y t) pedía que la mataran”³⁰⁸.

³⁰⁸ Ibid. Párrafo 159

*“Dentro de las distintas declaraciones que rindió, las circunstancias principales coinciden. Asimismo, en cuanto a los actos descritos por la presunta víctima, la Corte observa que, en su Informe Final, la CVR estableció que en la época de los hechos la violación sexual de hombres y mujeres fue una forma extendida de tortura”.*³⁰⁹

*“De otro lado La Corte considera que la posible existencia de una colisión del carro de los funcionarios policiales con la moto en la que se encontraba Gladys Espinoza no obsta a que posteriormente haya sido golpeada por dichos funcionarios. En cuanto a los daños sufridos por Gladys Espinoza, los mencionados Informes de la DIVISE y la DINCOTE tan sólo hacen referencia, de forma general, a “lesiones en diversas partes del cuerpo” resultantes de “una aparatosa caída”, sin especificar la naturaleza o gravedad de las mismas. En vista de lo anterior, la Corte considera la información contenida en los mencionados informes de la DIVISE y de la DINCOTE no desvirtúa los hechos alegados por la presunta víctima.”*³¹⁰ *De dichos informes se observa que, en el examen de 18 de mayo de 1993 se concluyó que Gladys Espinoza padecía de “desfloración antigua, signo compatible con acto contranatura reciente”, toda vez que se había constatado que la misma presentaba “himen con desgarros en horas III, VI, IX antiguas” y “ano con desgarrro en horas XII en cicatrización y presencia de hemorroides en horas VI”. Así, se observa de forma clara que los exámenes físicos realizados a Gladys Espinoza mostraban, de forma progresiva durante el transcurso de un mes, numerosas nuevas lesiones a lo largo de su cuerpo con cada examen, incluyendo en los órganos sexuales. Cabe señalar, además, que las lesiones constatadas en dichos informes son consistentes con lo declarado por la señora Gladys Espinoza en cuanto a los golpes que recibió, y en particular, en cuanto a la penetración anal”*³¹¹.

*“Por otra parte, aproximadamente 10 años después, el 22 de enero de 2004 se le realizó un peritaje psicológico a Gladys Espinoza correspondiente al Reconocimiento Médico Legal para la Detección de Lesiones Resultantes de Tortura en Personas Vivas, donde se determinó que padecía un “trastorno disociativo” y “personalidad histriónica”. El 13 de febrero de 2004 se dejó constancia en el Protocolo de Pericia Psicológica “presenta personalidad con rasgos histriónicos y disociales con reacción ansiosa situacional”*³¹². *Con respecto a ello, el 5 de octubre de 2008 la psicóloga Carmen Wurst de Landázuri emitió un*

³⁰⁹ Ibid. Párrafo 161

³¹⁰ Ibid. Párrafo 163

³¹¹ Ibid. Párrafo 167

³¹² Ibid. Párrafo 168

Informe sobre las pericias psicológicas y psiquiátricas realizadas a Gladys Espinoza anteriormente, en el que concluyó que “[l]a evaluación clínica, sustentada en los exámenes médicos que figuran en el expediente, son contundentes que Gladys ha sufrido tortura y violación sexual y que no se trata de simulación como ha sido sugerido en pericias del Ministerio Público”.³¹³ En el mismo sentido, el 7 de enero de 2014 el equipo especializado de la División de Exámenes Clínicos Forenses del Instituto de Medicina Legal realizó un Protocolo de Investigación de Tortura o Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, en el que concluyeron que: “1. a. Hay una firme relación, las lesiones (cicatrices) pueden haber sido causadas por los traumatismos descritos [por la presunta víctima], y por muy pocas causas más; b. En región anal y genital, es típica, este es el cuadro que normalmente se encuentra con este tipo de traumatismo”, refiriéndose a aquellos traumatismos derivados de tortura.”³¹⁴

“La Corte ha señalado que, en casos donde las víctimas alegan haber sido torturados estando bajo la custodia del Estado, éste es responsable, en su condición de garante de los derechos consagrados en la Convención, de la observancia del derecho a la integridad personal de todo individuo que se halla bajo su custodia. Asimismo, la jurisprudencia de la Corte ha señalado que siempre que una persona es privada de la libertad en un estado de salud normal y posteriormente aparece con afectaciones a su salud, corresponde al Estado proveer una explicación satisfactoria y convincente de esa situación. En consecuencia, existe una presunción por la cual el Estado es responsable por las lesiones que exhibe una persona que ha estado bajo la custodia de agentes estatales. En dicho supuesto, recae en el Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados³¹⁵. En el presente caso el Estado no ha realizado una investigación efectiva de los hechos ocurridos a la señora Gladys Espinoza a partir de su detención el 17 de abril de 1993 y durante su estancia en las instalaciones de la DIVISE y DINCOTE”³¹⁶.

“Asimismo, la Corte encuentra suficientemente acreditado que, durante su permanencia en instalaciones de la DIVISE y la DINCOTE en abril y mayo de 1993, Gladys Espinoza fue vendada, interrogada con relación al secuestro de un empresario, desnudada forzosamente,

³¹³ Ibid. Párrafo 169

³¹⁴ Ibid. Párrafo 170

³¹⁵ Ibid. Párrafo 177

³¹⁶ Ibid. Párrafo 178

*amenazada de que la matarían a ella y a su familia, de que la desaparecerían y de ser contagiada con “el SIDA”, y agredida físicamente en reiteradas oportunidades y de distintas formas, entre ellas, mediante golpes en todo su cuerpo, inclusive en las plantas de los pies, la región lumbar y la cabeza. Además fue atada y colgada, y su cabeza fue sumergida en aguas fecales. También escuchó los gritos de su pareja sentimental, Rafael Salgado. En el mismo sentido, la Corte considera probado que la señora Espinoza Gonzáles fue objeto de manoseos, penetración vaginal y anal con manos y, en este último caso, también con un objeto. Asimismo, le jalaron los senos y vellos púbicos y uno de sus agresores intentó meterle el pene en su boca”.*³¹⁷

“La Corte ha indicado que todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por el propio comportamiento de la persona detenida constituye un atentado a la dignidad humana, en violación del artículo 5 de la Convención Americana. En el presente caso, el Estado no ha demostrado que la fuerza utilizada al momento de la detención de la señora Espinoza Gonzáles fue necesaria, por lo que el Tribunal considera que se violó su derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma.”³¹⁸ Se agrega que la Corte recuerda que se ha conformado un régimen jurídico internacional de prohibición absoluta de todas las formas de tortura, tanto física como psicológica, y respecto de esta última, se ha reconocido que las amenazas y el peligro real de someter a una persona a graves lesiones físicas produce, en determinadas circunstancias, una angustia moral de tal grado que puede ser considerada “tortura psicológica”.³¹⁹ Por otro lado en cuanto a los hechos ocurridos en instalaciones de la DIVISE y la DINCOTE, en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se ha establecido que la incomunicación debe ser excepcional y que su uso durante la detención puede constituir un acto contrario a la dignidad humana, dado que puede generar una situación de extremo sufrimiento psicológico y moral para el detenido. En el mismo sentido, desde sus primeras sentencias la Corte Interamericana ha considerado que el aislamiento y la incomunicación prolongados representan, por sí mismos, formas de trato cruel e inhumano, lesivos de la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho de todo detenido al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”³²⁰.

³¹⁷ Ibid. Párrafo 179

³¹⁸ Ibid. Párrafo 184

³¹⁹ Ibid. Párrafo 185

³²⁰ Ibid. Párrafo 186

“La Corte ha señalado que basta con que una detención ilegal haya durado breve tiempo para que se configure, dentro de los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, una conculcación a la integridad psíquica y moral, y que cuando se presentan dichas circunstancias es posible inferir, aun cuando no mediaran otras evidencias al respecto, que el trato que la víctima recibió durante su incomunicación fue inhumano y degradante”³²¹

Sobre la violencia sexual y la Convención Belém do Pará

“Ahora bien, en cuanto a los actos de naturaleza sexual ocasionados a la señora Espinoza durante su permanencia en la DIVISE y la DINCOTE, la Corte recuerda, como lo señala la Convención de Belém do Pará, que la violencia contra la mujer no solo constituye una violación de los derechos humanos, sino que es “una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”, que “trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases”³²².

“Siguiendo la línea de la normativa y la jurisprudencia internacionales y tomando en cuenta lo dispuesto en la Convención de Belém do Pará, la Corte ha considerado que la violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que, además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno. En este sentido, en otro caso ante la Corte se estableció que el someter a mujeres a la desnudez forzosa mientras éstas eran constantemente observadas por hombres armados, quienes aparentemente eran miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, constituyó violencia sexual”³²³.

“La Corte ha considerado que la violación sexual no implica necesariamente una relación sexual por vía vaginal, como se consideró tradicionalmente. Por violación sexual también debe entenderse actos de penetración vaginal o anal mediante la utilización de otras partes del cuerpo del agresor u objetos, así como la penetración bucal mediante el miembro viril.

³²¹ Ibid. Párrafo 187

³²² Ibid. Párrafo 190

³²³ Ibid. Párrafo 191

Al respecto, la Corte aclara que para que un acto sea considerado violación sexual, es suficiente que se produzca una penetración, por insignificante que sea, en los términos antes descritos. Además, se debe entender que la penetración vaginal se refiere a la penetración, con cualquier parte del cuerpo del agresor u objetos, de cualquier orificio genital, incluyendo los labios mayores y menores, así como el orificio vaginal. Esta interpretación es acorde a la concepción de que cualquier tipo de penetración, por insignificante que sea, es suficiente para que un acto sea considerado violación sexual. La Corte entiende que la violación sexual es una forma de violencia sexual”³²⁴.

“Adicionalmente, la Corte ha reconocido que la violación sexual es una experiencia sumamente traumática que tiene severas consecuencias y causa gran daño físico y psicológico que deja a la víctima “humillada física y emocionalmente”, situación difícilmente superable por el paso del tiempo, a diferencia de lo que acontece en otras experiencias traumáticas. De ello se desprende que es inherente a la violación sexual el sufrimiento severo de la víctima, aun cuando no exista evidencia de lesiones o enfermedades físicas. En efecto, no en todos los casos las consecuencias de una violación sexual serán enfermedades o lesiones corporales. Las mujeres víctimas de violación sexual también experimentan severos daños y secuelas psicológicas y aun sociales”³²⁵.

“En el presente caso, la Corte ha establecido que, durante su detención en la DIVISE y la DINCOTE en abril y mayo de 1993, Gladys Espinoza fue objeto de desnudez forzosa y manoseos, le jalaron los senos y los vellos púbicos y uno de sus agresores intentó meterle el pene en su boca. Es evidente que, al involucrar los senos y el área genital de la presunta víctima, dichos actos constituyeron violencia sexual. Con relación a los “manoseos” y el intento de forzarla a tener sexo oral, la Corte considera que estos actos implicaron la invasión física del cuerpo de la señora Gladys Espinoza, tomando en cuenta que las víctimas de violencia sexual tienden a utilizar términos poco específicos al momento de realizar sus declaraciones y no explicar gráficamente las particularidades anatómicas de lo sucedido. Al respecto, la CVR señaló que “[e]s común que las declarantes utilicen términos confusos o ‘propios’ al momento de describir los actos de violencia sexual a que fueron sometidas” y específicamente se refirió a la utilización del término “manoseos” como una de las formas como las víctimas describían actos de violencia sexual. Igualmente, la Corte estableció que,

³²⁴ Ibid. Párrafo 192

³²⁵ Ibid. Párrafo 193

durante el período mencionado, la señora Espinoza sufrió penetración vaginal y anal con manos y, en este último caso, también con un objeto, los cuales constituyeron actos de violación sexual.”³²⁶

“Finalmente, la Corte considera pertinente recordar, como ya fue establecido en el presente caso, que una de las formas que tomó la práctica generalizada de tortura fue mediante la práctica generalizada de la violencia sexual contra las mujeres, en particular, por parte de agentes estatales y en contra de mujeres presuntamente involucradas en el conflicto armado. Asimismo, la Corte recuerda que la DINCOTE fue señalada especialmente como un espacio donde la violación sexual se produjo reiteradamente. Al respecto, la Corte considera que lo sucedido a la señora Espinoza es consistente con dicha práctica generalizada. Al enmarcarse en dicho contexto, la Corte considera que los actos de violencia sexual en contra de Gladys Espinoza también constituyeron actos de tortura cuya prohibición absoluta, se reitera, pertenece hoy día al dominio del jus cogens internacional”³²⁷.

*“La Corte estima que la violación y otras formas de violencia sexual perpetradas en contra de Gladys Espinoza vulneraron valores y aspectos esenciales de su vida privada, supusieron una intromisión en su vida sexual y anularon su derecho a tomar libremente las decisiones respecto con quien tener relaciones sexuales, perdiendo de forma completa el control sobre sus decisiones más personales e íntimas, y sobre las funciones corporales básicas. Por tanto, en vista de la violencia y violación sexual que sufrió la señora Gladys Espinoza, la Corte determina que el Estado también violó los artículos 11.1 y 11.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de aquella”.*³²⁸

VIOLENCIA SEXUAL Y LA OBLIGACIÓN DE NO DISCRIMINAR A LA MUJER, EN RELACIÓN CON LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS

“Sobre el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación, la Corte ha señalado que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca

³²⁶ Ibid. Párrafo 194

³²⁷ Ibid. Párrafo 195

³²⁸ Ibid. Párrafo 197

*a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación”.*³²⁹

*“En este sentido, la Corte ha determinado que una diferencia de trato es discriminatoria cuando la misma no tiene una justificación objetiva y razonable, es decir, cuando no persigue un fin legítimo y no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin perseguido”*³³⁰.

*“Desde una perspectiva general, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (en adelante, “la CEDAW”, por sus siglas en inglés) define la discriminación contra la mujer como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”. En este sentido, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (en adelante, “el Comité de la CEDAW”) ha declarado que la definición de la discriminación contra la mujer “incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer [i] porque es mujer o [ii] que la afecta en forma desproporcionada”. También ha señalado que “[l]a violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre”*³³¹

*“En el ámbito interamericano, la Convención Belém do Pará, en su preámbulo, señala que la violencia contra la mujer es “una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres” y reconoce que el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye el derecho a ser libre de toda forma de discriminación. Asimismo, la Corte ha señalado que, una vez que se demuestra que la aplicación de una regla lleva a un impacto diferenciado entre mujeres y hombres, el Estado debe probar que se debe a factores objetivos no relacionados con la discriminación”*³³².

³²⁹ Ibid. Párrafo 216

³³⁰ Ibid. Párrafo 219

³³¹ Ibid. Párrafo 221

³³² Ibid. Párrafo 222

“La Corte ha establecido que las mujeres detenidas o arrestadas “no deben sufrir discriminación, y deben ser protegidas de todas las formas de violencia o explotación”. Dicha discriminación incluye “la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada”, y abarca “actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad”³³³.

“En este caso, la Corte ya estableció que durante el período del conflicto comprendido entre 1980 y 2000, la violencia sexual fue una práctica generalizada dentro de las fuerzas de seguridad, la cual afectó principalmente a las mujeres. La Corte considera que esta práctica constituyó violencia basada en género pues afectó a las mujeres por el solo hecho de serlo, y que, tal como se desprende de la prueba, fue favorecida por la legislación antiterrorista vigente para la fecha, la cual se caracterizó por la ausencia de garantías mínimas para los detenidos, además de disponer, entre otros, la potestad de incomunicar a los detenidos y el aislamiento celular”³³⁴.

“Al respecto, ha sido reconocido por diversos órganos internacionales que durante los conflictos armados las mujeres y niñas enfrentan situaciones específicas de afectación a sus derechos humanos, como lo son los actos de violencia sexual, la cual en muchas ocasiones es utilizada como un medio simbólico para humillar a la parte contraria o como un medio de castigo y represión. La utilización del poder estatal para violar los derechos de las mujeres en un conflicto interno, además de afectarles a ellas de forma directa, puede tener el objetivo de causar un efecto en la sociedad a través de esas violaciones y dar un mensaje o lección. En particular, la violación sexual constituye una forma paradigmática de violencia contra las mujeres cuyas consecuencias, incluso, trascienden a la persona de la víctima”³³⁵.

“La Corte nota que la violencia sexual contra la mujer en el Perú como un “patr[ón] de criminalidad” dado que, “al mismo tiempo que fue una conducta recurrente tanto de agentes no estatales [...] como de agentes estatales, es decir, [de] miembros de las fuerzas

³³³ Ibid. Párrafo 223

³³⁴ Ibid. Párrafo 225

³³⁵ Ibid. Párrafo 226

armadas y la policía[,...] la conducta violatoria sexualmente tiene una recurrencia, una generalidad y una sistematicidad que hace que en ciertos momentos y en ciertos lugares se tenga que hablar de crímenes de lesa humanidad atribuibles tanto a agentes estatales como a agentes no estatales”. Señaló, además, que dichos actos podían tener una motivación instrumental y no instrumental, en los siguientes términos: “una motivación que se podría denominar instrumental que se asocia con la intención de: castigar a la víctima; destruir moralmente a la víctima; castigar y humillar y destruir moralmente al varón por medio de la utilización del cuerpo de la víctima mujer; extraer confesiones mediante tortura. La otra orientación, no instrumental, es sencillamente el ejercicio del poder absoluto que el varón tiene sobre la mujer, en algunos casos también utilizándose como ‘recompensa’ que el jefe de una unidad armada da a sus subalternos para que se satisfagan con la mujer, que en este caso por lo tanto comienza a ser utilizada como un botín de guerra para la satisfacción sexual de los soldados o subalternos”³³⁶.

“La Corte ya estableció que los actos de violencia y violación sexual perpetrados en contra de Gladys Espinoza durante su detención en la DIVISE y la DINCOTE fueron consistentes con la práctica generalizada de violencia sexual que existía en el Perú en la época de los hechos. La tortura a la que fue sometida Gladys Espinoza, la cual incluyó actos de violación sexual y otras formas de violencia sexual, se dio dentro del marco de una detención y tuvo la finalidad de obtener información sobre el secuestro por parte del MRTA de un empresario. Es decir, el cuerpo de Gladys Espinoza como mujer fue utilizado a fin de obtener información de su compañero sentimental y humillar e intimidar a ambos. Estos actos confirman que los agentes estatales utilizaron la violencia sexual y la amenaza de violencia sexual en contra de Gladys Carol Espinoza Gonzáles como estrategia en la lucha contra el mencionado grupo subversivo. Como consecuencia de ello, la Corte determina que el haber sometido a la señora Espinoza a dicha práctica generalizada constituye discriminación individualizada por su condición de mujer, en violación del artículo 1.1 de la Convención Americana en su perjuicio, en relación con los derechos a la integridad personal y a la honra y la dignidad establecidos en los artículos 5.1, 5.2 y 11 del mismo instrumento, y con las obligaciones establecidas en los artículos 1 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”³³⁷.

³³⁶ Ibid. Párrafo 228

³³⁷ Ibid. Párrafo 229

DERECHO A LAS GARANTÍAS JUDICIALES Y PROTECCIÓN JUDICIAL

“En casos de violencia contra la mujer, las obligaciones generales establecidas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana se complementan y refuerzan para aquellos Estados que son Parte, con las obligaciones derivadas del tratado interamericano específico, la Convención de Belém do Pará. En su artículo 7.b dicha Convención obliga de manera específica a los Estados Partes a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. En estos casos, las autoridades estatales deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva una vez que tomen conocimiento de los hechos que constituyan violencia contra la mujer, incluyendo la violencia sexual. De tal modo, que ante un acto de violencia contra una mujer, resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección”³³⁸.

“La Corte también ha señalado que el deber de investigar efectivamente tiene alcances adicionales cuando se trata de una mujer que sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeres. En casos de violencia contra la mujer, ciertos instrumentos internacionales resultan útiles para precisar y dar contenido a la obligación estatal reforzada de investigarlos con la debida diligencia. Entre otros, en una investigación penal por violencia sexual es necesario que: i) se documenten y coordinen los actos investigativos y se maneje diligentemente la prueba, tomando muestras suficientes, realizando estudios para determinar la posible autoría del hecho, asegurando otras pruebas como la ropa de la víctima, investigando de forma inmediata el lugar de los hechos y garantizando la correcta cadena de custodia; ii) se brinde acceso a asistencia jurídica gratuita a la víctima durante todas las etapas del proceso, y iii) se brinde atención médica, sanitaria y psicológica a la víctima, tanto de emergencia como de forma continuada si así se requiere, mediante un protocolo de atención cuyo objetivo sea reducir las consecuencias de la violación. Asimismo, en casos de supuestos actos de violencia contra la mujer, la investigación penal debe incluir una perspectiva de género y

³³⁸ Ibid. Párrafo 241

realizarse por funcionarios capacitados en casos similares y en atención a víctimas de discriminación y violencia por razón de género. Igualmente, la Corte se ha referido a las características que deben ostentar las declaraciones y los exámenes médicos realizados a la presunta víctima en este tipo de casos”³³⁹.

“Al respecto, la Corte constata que, entre los años 1993 y 2004, no se inició investigación alguna en torno a los hechos señalados. Sobre este punto, dado que para el momento en que se recibieron las declaraciones de Gladys Espinoza y en que se practicaron los exámenes médicos y psicológicos mencionados, el Estado ya había recibido noticia de las torturas, inclusive de violencia y violación sexual, y de los demás tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que ésta había sido sometida, la Corte estima que el Estado debió recopilar dichas declaraciones y practicado dichos exámenes teniendo en cuenta que se trataba de una posible víctima de este tipo de violaciones de derechos humanos”³⁴⁰.

Sobre las declaraciones de la víctima que es sometida a tortura

“Así, en primer lugar, la Corte considera que, en cuanto a las entrevistas que se realicen a una persona que afirma haber sido sometida a actos de tortura: i) se debe permitir que ésta pueda exponer lo que considere relevante con libertad, por lo que los funcionarios deben evitar limitarse a formular preguntas; ii) no debe exigirse a nadie hablar de ninguna forma de tortura si se siente incómodo al hacerlo; iii) se debe documentar durante la entrevista la historia psicosocial y previa al arresto de la presunta víctima, el resumen de los hechos narrados por ésta relacionados al momento de su detención inicial, las circunstancias, el lugar y las condiciones en las que se encontraba durante su permanencia bajo custodia estatal, los malos tratos o actos de tortura presuntamente sufridos, así como los métodos presuntamente utilizados para ello, y iv) se debe grabar y hacer transcribir la declaración detallada. En casos de que la alegada tortura incluya actos de violencia o violación sexual, dicha grabación deberá ser consentida por la presunta víctima”³⁴¹.

“De forma particular, la Corte ha señalado que, en cuanto a la entrevista que se realiza a una presunta víctima de actos de violencia o violación sexual, es necesario que la

³³⁹ Ibid. Párrafo 242

³⁴⁰ Ibid. Párrafo 247

³⁴¹ Ibid. Párrafo 248

declaración de ésta se realice en un ambiente cómodo y seguro, que le brinde privacidad y confianza, y que la declaración se registre de forma tal que se evite o limite la necesidad de su repetición. Dicha declaración deberá contener, con el consentimiento de la presunta víctima: i) la fecha, hora y lugar del acto de violencia sexual perpetrado, incluyendo la descripción del lugar donde ocurrió el acto; ii) el nombre, identidad y número de agresores; iii) la naturaleza de los contactos físicos de los que habría sido víctima; iv) si existió uso de armas o retenedores; v) el uso de medicación, drogas, alcohol u otras sustancias; vi) la forma en la que la ropa fue removida, de ser el caso; vii) los detalles sobre las actividades sexuales perpetradas o intentadas en contra de la presunta víctima; viii) si existió el uso de preservativos o lubricantes; ix) si existieron otras conductas que podrían alterar la evidencia, y x) detalles sobre los síntomas que ha padecido la presunta víctima desde ese momento”³⁴².

“Ahora bien, de las tres declaraciones que se le tomaron a Gladys Espinoza en el año 1993, se observa que: i) ninguna se realizó en un ambiente cómodo y seguro, sino al contrario, fueron rendidas en la misma sede de la DINCOTE, donde ocurrieron los hechos de tortura, y dos de ellas ante funcionarios militares; ii) se limitaron a la realización de preguntas por parte del Instructor, incluyendo preguntas sobre la existencia de maltratos en su contra, sin que conste si tuvo oportunidad de exponer libremente los hechos que ella considerase relevantes, y iii) no se documentó información relevante sobre los antecedentes de Gladys Espinoza, aparte de lo relacionado a su posible participación en actos de terrorismo o de traición a la patria. Además, la Corte observa que, a través de dichas declaraciones, se le requirió a Gladys Espinoza reiterar sus manifestaciones sobre los hechos de tortura y violencia sexual de los cuales fue víctima”.³⁴³

Actuaciones inmediatas ante violencia contra la mujer

“La Corte ha señalado que, en casos de violencia contra la mujer, al tomar conocimiento de los actos alegados, es necesario que se realice inmediatamente un examen médico y psicológico completo y detallado por personal idóneo y capacitado, en lo posible del sexo que la víctima indique, ofreciéndole que sea acompañada por alguien de su confianza si así

³⁴² Ibid. Párrafo 249

³⁴³ Ibid. Párrafo 250

lo desea. Dicho examen deberá ser realizado de conformidad con protocolos dirigidos específicamente a documentar evidencias en casos de violencia de género”³⁴⁴.

“Por otro lado, en casos de violencia sexual, la Corte ha destacado que la investigación debe intentar evitar en lo posible la revictimización o reexperimentación de la profunda experiencia traumática a la presunta víctima. Respecto de exámenes de integridad sexual, la Organización Mundial de Salud ha establecido que, en este tipo de casos, el peritaje ginecológico debe realizarse lo más pronto posible. Por consiguiente, los plazos límite establecidos para la realización de un examen de esta naturaleza deben ser considerados como guía, más no como política estricta. De esa manera, la procedencia de un peritaje ginecológico debe ser considerada sobre la base de un análisis realizado caso por caso, tomando en cuenta el tiempo transcurrido desde el momento en que se alega que ocurrió la violencia sexual. En vista de ello, la Corte considera que la procedencia de un peritaje ginecológico debe ser motivada detalladamente por la autoridad que la solicita y, en caso de no ser procedente o no contar con el consentimiento informado de la presunta víctima, el examen debe ser omitido, lo que en ninguna circunstancia debe servir de excusa para desacreditar a la presunta víctima y/o impedir una investigación”.³⁴⁵

“En tercer lugar, la Corte considera que los médicos y demás miembros del personal de salud están en la obligación de no participar, ni activa ni pasivamente, en actos que constituyan participación o complicidad en torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incitación a ello o intento de cometerlos. En particular, el médico forense está en la obligación de plasmar en sus informes la existencia de prueba de malos tratos, de ser el caso. Así, los médicos forenses deben adoptar medidas a fin de notificar posibles abusos a las autoridades correspondientes o, si ello implica riesgos previsibles para los profesionales de la salud o sus pacientes, a autoridades ajenas a la jurisdicción inmediata”.³⁴⁶

“Al respecto, la Corte nota que, pese al evidente deterioro progresivo de la condición física de Gladys Espinoza, evidenciado por los cuatro exámenes físicos practicados a ésta entre abril y mayo de 1993, los médicos forenses que la examinaron no denunciaron ante autoridad alguna la existencia de indicios de tortura, y en cada una de esas oportunidades,

³⁴⁴ Ibid. Párrafo 252

³⁴⁵ Ibid. Párrafo 256

³⁴⁶ Ibid. Párrafo 258

*Gladys Espinoza fue devuelta a los mismos funcionarios de la DINCOTE que perpetraron dichas torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de ella”.*³⁴⁷

*“Ahora bien, la Corte ha señalado que corresponde a la parte demandante, en principio, la carga de la prueba de los hechos en que se funda su alegato; no obstante, ha destacado que, a diferencia del derecho penal interno, en los procesos sobre violaciones de derechos humanos la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas, cuando es el Estado quien tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos dentro de su territorio. En este sentido, la Corte considera que la carga de la prueba de la falta de independencia de los médicos legistas adscritos a dependencias del Estado en casos de tortura no debe descansar exclusivamente en la parte que la alega, ya que es el Estado quien posee los medios para demostrar que se cumple dicha garantía”.*³⁴⁸

*“La falta de investigación absoluta durante el período de 1993 a 2004 frente a los indicios identificados en este capítulo no debe ser evaluada de forma aislada. A “pesar de las denuncias de algunas víctimas y de organizaciones de derechos humanos internacionales y nacionales así como de organizaciones de la Iglesia Católica, los operadores de justicia no procesaron a ningún miembro de las fuerzas armadas o policiales por tortura [...]. Por ello, esta ilegal práctica continuó desarrollándose con total impunidad, difundiendo la impotencia y el desaliento en la ciudadanía”. Además, como se señaló supra, el Informe Final de la CVR estableció que “[l]a mayoría de las víctimas refieren que los exámenes médicos legales que fueron llevados a cabo por [...] profesionales médicos no fueron rigurosos, es decir, sólo se limitaron a realizar las inspecciones médicas como mera formalidad. [...] Asimismo, los testimonios recibidos por la [CVR] señalan [que en los informes médicos] no se registraban las evidentes muestras de tortura ni los reclamos de los afectados que decían haber sido torturados”. Igualmente, señaló que “[l]a inconducta profesional de los médicos legistas tiene consecuencias particularmente graves en los casos de violencia sexual, pues condenan el crimen a la impunidad”.*³⁴⁹

“Con base en lo anterior, la Corte considera que la deficiente toma de declaraciones por funcionarios estatales sobre los hechos de los cuales fue víctima Gladys Espinoza; la

³⁴⁷ Ibid. Párrafo 259

³⁴⁸ Ibid. Párrafo 261

³⁴⁹ Ibid. Párrafo 263

*consistente negativa de los médicos legistas a identificar los indicios de tortura y violencia sexual presentados por Gladys Espinoza y la ausencia de denuncia por parte de los mismos, así como la falta de independencia de los médicos legistas que evaluaron a Gladys Espinoza, afectaron la posible recolección de evidencias en el presente caso, contribuyendo a la impunidad en la que se encuentra”.*³⁵⁰

Sobre las sentencias emitidas en ámbito nacional y los estereotipos discriminatorios

*“La Corte observa que, en la sentencia emitida el 1 de marzo de 2004 por la Sala Nacional de Terrorismo en el proceso seguido contra Gladys Espinoza por el delito de terrorismo, aquélla hizo referencia a una manifestación policial de Gladys Espinoza, en la cual afirmó que durante su detención “fue víctima de maltratos físicos y psicológicos, así como de abusos sexuales por parte de las personas que se hallaban a cargo de su persona” “Gladys Carol Espinoza Gonz[á]les [...] sost[uvo] que en sede policial fue v[í]ctima de ultraje sexual y sometida a crueles e inhumanas torturas”. Éstas configuraron dos nuevas oportunidades en las que el Estado tuvo conocimiento de la tortura y violencia sexual cometida en contra de Gladys Espinoza en el año de 1993 durante su detención en las instalaciones de la DIVISE y la DINCOTE”*³⁵¹.

*“Asimismo, la obligación de investigar violencia de género se vio reforzada para el Perú con la entrada en vigor, el 4 de junio de 1996, de la Convención de Belém do Pará. La Corte constata que las instancias judiciales mencionadas anteriormente, al igual que el Ministerio Público y la Procuraduría Pública, no promovieron denuncia o investigación alguna para esclarecer los hechos que fueron alegados por Gladys Espinoza, pese a tener conocimiento sobre los actos contra la integridad personal de ésta”.*³⁵²

*“Durante el proceso llevado a cabo en contra de Gladys Espinoza en el año 2004, la Sala Nacional de Terrorismo y la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia que conocieron del mismo aplicaron un estereotipo de género al valorar sus declaraciones de que había sufrido torturas y otros maltratos dentro en la DIVISE y la DINCOTE”*³⁵³. La Corte considera que el estereotipo de género se refiere a una pre-concepción de atributos o

³⁵⁰ Ibid. Párrafo 264

³⁵¹ Ibid. Párrafo 265

³⁵² Ibid. Párrafo 266

³⁵³ Ibid. Párrafo 267

características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente. En este orden de ideas, la Corte ha identificado estereotipos de género que son incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos y respecto de los cuales los Estados deben tomar medidas para erradicarlos”³⁵⁴.

“En primer lugar, del Certificado Médico Legal No. 003821-V se desprende que los médicos legistas que evaluaron a Gladys Espinoza determinaron que su conducta durante su declaración fue una “dramatización de los acontecimientos” y que ésta “presenta un trastorno histri[ó]nico, el cual no le impide estar en contacto con la realidad excepto cuando se disocia”. En dicho certificado también se concluye que Gladys Espinoza padecía de “trastorno disociativo” y de “personalidad histri[ó]nica”. Igualmente, en el Protocolo de Pericia Psicológica No. 003737-2004-PSC, producido por el IML tras la entrevista realizada a Gladys Espinoza los días 9 y 10 de febrero de 2004, se indica que “[l]a examinada es una persona con poca tolerancia a la frustración [...] tiende a exagerar sus emociones [...] según sea su conveniencia, trata de ser convincente con su discurso, cuida su imagen ante los demás, se muestra evasiva, no se compromete, le cuesta asumir sus errores, manipula para obtener ganancias secundarias, [y] es demandante de apoyo”³⁵⁵.

“Las psicólogas que realizaron el Protocolo de Peritica Psicológica al ser preguntadas sobre cómo definirían a una persona con rasgos histriónicos y disociales, afirmaron que “son personas que se caracterizan por ser inmaduras e inseguras, son cambiantes en sus afectos para llamar la atención, en lo referente a los rasgos disociales son personas que tienden a la mentira y minimizan sus faltas y errores, pensando siempre más en la satisfacción de sus necesidades”. Añadieron que “estas características no son algo definitivo en la persona, como se consigna son sólo rasgos de una personalidad [que] en este caso resultó histriónica y disocial” “un rasgo histriónico se refiere a que la persona tiende a manipular a los demás, no sólo a través de la entrevista sino a través de otros medios, cuando se habla de ganancia secundaria se debe a que hay un interés que no se especifica cuál es, pero a través de su historia de vida la persona busca obtener”³⁵⁶.

³⁵⁴ Ibid. Párrafo 268

³⁵⁵ Ibid. Párrafo 270

³⁵⁶ Ibid. Párrafo 271

“Al respecto, la perita Rebeca Cook afirmó ante la Corte que “[l]a caracterización de la mujer sospechosa de actividad criminal como una [‘]chica mala[’] permite negarles su madurez y humanidad y así eximir de responsabilidad [a] las personas responsables de su custodia”, señalando que entre las características que suelen atribuirse a las mujeres sospechosas de haber cometido delitos se incluyen “ser asertivas, manipuladoras, carecer de credibilidad y tendencia a desafiar a la autoridad”. Añade la perita que “[l]os jueces que comparten estereotipos de género similares acerca de las mujeres consideradas sospechosas consecuentemente puede[n] provocar que la decisión de su inocencia o culpabilidad no se fundamente en evidencia apropiada, o incluso se les puede imponer castigos más severos que a las mujeres sospechosas que se someten a la autoridad masculina”. En vista de lo anterior, la Corte reconoce y rechaza el estereotipo de género por el cual se considera a las mujeres sospechosas de haber cometido un delito como intrínsecamente no confiables o manipuladoras, especialmente en el marco de procesos judiciales. Al respecto, la Corte ha aseverado que valoraciones de esta naturaleza muestran “un criterio discrecional y discriminatorio con base en la situación procesal de las mujeres [...]”³⁵⁷.

“Es pertinente tener en cuenta que, [e]n ninguna de las pericias consignadas, se ha tomado en cuenta que se trata de un caso de tortura y violación sexual. No hay alusión en las conclusiones de la relación existente entre el evento traumático y las secuelas encontradas [...]. Las conclusiones emitidas solo corroboran y acredita[n] el daño psicológico producto de la tortura. [Por otra parte, dichos peritajes] han sido utilizados de manera peyorativa, cuando ha significado reacciones esperables [...]. El diagnóstico pretende mostrar que la paciente ha fingido por sus rasgos histriónicos el episodio de tortura, lo cual es absolutamente improbable e incorrecto, pues estas reacciones y cuadros clínicos son NORMALES Y ESPERABLES y contrariamente certifican las secuelas producto de la tortura de acuerdo con el Protocolo de Estambul”³⁵⁸.

“Además, tal como se señaló previamente, para la fecha en que se emitió la sentencia de la Sala Penal, en casos de violencia sexual, los tribunales del Perú sobrevaloraban las pruebas médicas, incurriendo además en valoraciones estereotipadas y limitadas a la verificación de la integridad del himen, la pérdida de la virginidad, y las huellas físicas de la violencia”³⁵⁹.

³⁵⁷ Mutatis mutandi, Caso J. Vs. Perú, supra, párr. 352.

³⁵⁸ Ibid. Párrafo 276

³⁵⁹ Ibid. Párrafo 277

*“En este sentido, la Corte considera pertinente resaltar que una garantía para el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual debe ser la previsión de reglas para la valoración de la prueba que evite afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas. Al respecto, la Corte observa que, en el Acuerdo Plenario N° 1-2011/CJ-116 de 6 de diciembre de 2011 de la Corte Suprema de Justicia, en donde se “establec[ieron] como doctrina legal” los criterios para la apreciación de la prueba de delitos sexuales en el Perú a partir de dicha fecha, se afirma que “algunos sectores de la comunidad asumen que esta apreciación probatoria está gobernada por estereotipos de género en los Policias, Fiscales y Jueces” y se reconoce la necesidad de “que se lleve a cabo una adecuada apreciación y selección de la prueba a fin de neutralizar la posibilidad de que se produzca algún defecto que lesione la dignidad humana y sea fuente de impunidad”. Así, la Corte considera que en el presente caso la ausencia de normas que regularan, en el año 2004, la especial valoración de la prueba requerida en casos de violencia sexual favoreció el uso de estereotipos de género en la valoración de la Sala Penal Permanente de los indicios de que Gladys Espinoza había sido víctima de tortura y violencia sexual”.*³⁶⁰

Estereotipo por razón de género en resolución judicial
--

“En vista de todo lo anterior, la Corte considera que la aseveración de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de que Gladys Espinoza manipulaba la realidad a su conveniencia, en sentido que, en casos de violencia sexual, las autoridades judiciales en el Perú incurrieran en estereotipación por razón de género en la valoración de la prueba, restando valor a las declaraciones de mujeres víctimas de estos hechos. Sumado a ello, la Corte considera que los siguientes elementos demuestran que dicho tribunal eligió selectivamente la prueba en perjuicio de Gladys Espinoza: i) el hecho de que el juez descartó el alegato de la posible existencia de tortura al señalar que ella es una persona que manipulaba la realidad; ii) la existencia de peritajes médicos que no negaban la posibilidad de que Gladys Espinoza hubiese sido víctima de torturas, y iii) la falta de análisis de los demás elementos contenidos en el expediente judicial, tales como los exámenes médicos practicados a ésta, de donde se desprendían elementos que razonablemente configuraban indicios de tortura. Asimismo, la falta de normas sobre la valoración de la prueba en este

³⁶⁰ Ibid. Párrafo 278

*tipo de casos favoreció la elección selectiva de las pruebas para descartar los alegatos de tortura esgrimidos por Gladys Espinoza, con la consecuencia de que no se ordenaran investigaciones al respecto. Esto constituyó un trato discriminatorio en su perjuicio por parte de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Perú, toda vez que ésta se fundamentó en un estereotipo de género sobre la falta de confiabilidad en sus declaraciones, de las mujeres sospechosas de haber cometido un delito”.*³⁶¹

*“La Corte reitera que la ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad de las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia. Dicha ineficacia o indiferencia constituye en sí misma una discriminación de la mujer en el acceso a la justicia. Por ello, cuando existan indicios o sospechas concretas de violencia de género, la falta de investigación por parte de las autoridades de los posibles móviles discriminatorios que tuvo un acto de violencia contra la mujer, puede constituir en sí misma una forma de discriminación basada en el género”*³⁶².

*“Lo anterior permite a esta Corte concluir que en el Perú se tornó invisible el patrón grave de violencia sexual del cual fueron víctimas las mujeres detenidas en razón de su presunta participación en delitos de terrorismo y traición a la patria, lo cual constituyó un obstáculo a la judicialización de dichos hechos, favoreciendo su impunidad hasta la fecha, y configuró discriminación en el acceso a la justicia por razones de género”.*³⁶³

“Con base en todo lo anterior, la Corte considera que el Estado debió iniciar, ex officio y sin dilación, una investigación desde el 18 de abril de 1993 por los hechos de tortura cometidos en contra de Gladys Espinoza durante su detención y posteriormente en las instalaciones de la DIVISE y la DINCOTE. Igualmente, el Estado debió iniciar una investigación por los hechos de violencia sexual que ocurrieron en su contra desde, al menos, el 28 de abril de 1993, fecha en que APRODEH presentó denuncias en este sentido

³⁶¹ Ibid. Párrafo 279

³⁶² Ibid. Párrafo 280

³⁶³ Ibid. Párrafo 282

ante la Fiscalía Especial de Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos. En el mismo sentido, la Corte considera que el Estado debió iniciar sin dilación una investigación desde el 25 de agosto de 1999 por los hechos de tortura y por la posible existencia de violencia sexual en contra de Gladys Espinoza dentro del Penal de Yanamayo el 5 de agosto de 1999. No obstante, no fue sino hasta el 16 de abril de 2012 que la Tercera Fiscalía Penal Supranacional inició una investigación penal por dichos hechos, la cual se encuentra en etapa de juicio”³⁶⁴.

“La Corte nota que el inicio de la investigación en el 2012 implicó un retardo injustificado de aproximadamente 19 años con relación a los hechos ocurridos en instalaciones de la DIVISE y DINCOTE en 1993, y de aproximadamente 13 años con relación a los hechos ocurridos en el Penal Yanamayo en 1999, y que el proceso se encuentra aún en curso. Sobre este punto, la Corte recuerda que la falta de diligencia tiene como consecuencia que conforme el tiempo vaya transcurriendo, se afecte indebidamente la posibilidad de obtener y presentar pruebas pertinentes que permitan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan, con lo cual el Estado contribuye a la impunidad”³⁶⁵.

“El Estado incumplió con el deber de investigar la violencia sexual contenido en el artículo 7.b de la Convención de Belém do Pará con respecto a los hechos ocurridos en el Penal de Yanamayo y, a partir del 4 de junio de 1996, fecha en que fue ratificado dicho tratado por el Perú, con respecto a los hechos ocurridos en 1993 en la DIVISE y la DINCOTE”.³⁶⁶

3.5.6. PUNTOS RESOLUTIVOS

4. El Estado violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial reconocidos en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado. Asimismo, el Estado incumplió las obligaciones establecidas en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como en el artículo 7.b de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). Todo ello en perjuicio de Gladys Carol Espinoza Gonzáles, en los términos de los párrafos 237 a 287 y 290 de la presente Sentencia.

³⁶⁴ Ibid. Párrafo 285

³⁶⁵ Ibid. Párrafo 286

³⁶⁶ Ibid. Párrafo 287

5. El Estado incumplió el deber de no discriminar, contenido en el artículo 1.1 de la Convención Americana, en relación con los derechos reconocidos en los artículos 5.1, 5.2 y 11, así como los artículos 8.1, 25 y 2 de la misma, y con los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y el artículo 7.b de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), en perjuicio de Gladys Carol Espinoza Gonzáles, en los términos de los párrafos 216 a 229, 265 a 282 y 285 a 288 de la presente Sentencia.

3.5.7. COMENTARIO

Al igual que las dos anteriores sentencias donde el Estado Peruano es la parte demandada este proceso también es interpuesto por una persona que fue procesada y , en este caso, sentenciada por actos de terrorismo, de la misma manera no se puede dejar de lado las circunstancias especiales de crisis en las que se encontraba el Perú en la época del terrorismo no solo generado por Sendero Luminoso sino también por el MRTA, sin embargo la sentencia debe ser estudiada no desde el ámbito político sino como un elemento jurídico con múltiples aristas y conceptos que deben apoyar a la jurisprudencia peruana, para combatir la violencia contra la mujer.

Primero se aprecia en esta sentencia el desarrollo que hacen respecto a las pruebas ante un caso de violencia sexual donde se debe considerar de manera primordial la declaración de la víctima dado que un acto de violencia sexual de por si es un acto que se da en ausencia de otras personas, además se debe de tratar de obtener la revisión medico pericial para determinar la existencia del daño, en especial cuando la violencia sexual se da en un ámbito de tortura y malos tratos. Es así que ante la ausencia de tal evaluación esta no debe ser utilizada para cuestionar si el acto de violencia ocurrió, sino debe considerarse que en ciertas oportunidades este tipo de actos vejatorios no generan lesiones físicas, por ello la Corte entiende que la carga de la prueba de la falta de independencia de los médicos legistas adscritos a dependencias del Estado en casos de tortura no debe descansar exclusivamente en la parte que la alega, ya que es el Estado quien posee los medios para demostrar que se cumple dicha garantía.

Tema aparte es que de por si un acto de violencia sexual genera trauma psicológico a la víctima ello porque la violación constituye una afrenta a derechos humanos porque es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”, que “trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases”³⁶⁷.

En segundo lugar en esta sentencia se hace una evaluación de lo que implica la tortura, porque se concluye que la víctima fue objeto de malos tratos al punto de tortura que se encuentra conectado con la violencia sexual, porque como se dijo se utiliza esta como un medio de tortura, no solo para la víctima sino para sus seres queridos, en este caso el compañero sentimental de la Espinoza fue amenazado que iban a violentar a la agraviada si no otorgaba la información que se le requería hecho que fue utilizado como estrategia en la lucha contra los grupos terroristas.

De otro lado se entiende que la amenazas de violación que sufrió Espinoza fueron utilizados como violencia contra la mujer, porque por su género es que se aprovechó tal acto para intimidar a la persona que acompañaba a Espinoza y también fue objeto de detención al momento de los hechos.

Algo que no se puede dejar de lado es que ante una denuncia de violencia sexual donde no existan mas pruebas que la declaración de la víctima , esta denuncia debe ser conocida e investigada como cualquier otro proceso, sin importar quien pueda ser la víctima, que como en este caso era una persona acusada y sentenciada por actos de terrorismo, quien en multiples oportunidades refirió que fue objeto de actos sexuales en contra de su voluntad, los cuales no podían ser cotejados con pericias médicas porque los médicos legistas no tenían independencia para emitir un informe médico que demostrara los actos vejatorios en agravio de Gladys Espinoza, quien a pesar de encontrarse detenida y posteriormente condenada a prisión efectiva, sufrió de la impunidad que supuso que no se considerara su declaración, su sufrimiento como víctima de violencia y el posterior dolor por no ser escuchada y por ende que no se investigara su caso, lo que creó impunidad por muchos años lo que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el

³⁶⁷ Ibid. Párrafo 190

cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad de las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia. Dicha ineficacia o indiferencia constituye en sí misma una discriminación de la mujer en el acceso a la justicia. Por ello, cuando existan indicios o sospechas concretas de violencia de género, la falta de investigación por parte de las autoridades de los posibles móviles discriminatorios que tuvo un acto de violencia contra la mujer, puede constituir en sí misma una forma de discriminación basada en el género”³⁶⁸.

A ello se agrega que cuando se sentenció el proceso de terrorismo aperturado en contra de Gladys Espinoza se aprecia que se aplicaron estereotipos de género al valorar sus declaraciones de que había sufrido torturas y otros maltratos dentro en la DIVISE y la DINCOTE, ello porque existía una preconcepción que las mujeres acusadas de actos terroristas tendían al histrionismo o se suponía que eran poco confiables o manipuladoras, y por ende no se podía creer en lo que decían, lo que provoca que la decisión de culpabilidad no se funde en evidencia apropiada, peor aún genere que se le imponga castigos severos al ser sometidas a autoridad masculina.

Es así que este estereotipo de género trae como consecuencia que Gladys Espinosa sea tratada de manera discriminatoria porque recibió un trato diferenciado en el proceso que se le siguió por los actos de terrorismo que se le imputaban, ello porque se denota la uso de estereotipos por razón de género en la valoración de la prueba, restando valor a las declaraciones de mujeres víctimas de estos hechos. Es así que “la Corte considera que los siguientes elementos demuestran que dicho tribunal eligió selectivamente la prueba en perjuicio de Gladys Espinoza: i) el hecho de que el juez descartó el alegato de la posible existencia de tortura al señalar que ella es una persona que manipulaba la realidad; ii) la existencia de peritajes médicos que no negaban la posibilidad de que Gladys Espinoza hubiese sido víctima de torturas, y iii) la falta de análisis de los demás elementos contenidos en el expediente judicial, tales como los exámenes médicos practicados a ésta, de donde se desprendían elementos que razonablemente configuraban indicios de tortura. Asimismo, la falta de normas sobre la valoración de la prueba en este tipo de casos favoreció la elección selectiva de las pruebas para descartar los alegatos de tortura esgrimidos por Gladys

³⁶⁸ Ibid. Párrafo 280

Espinoza, con la consecuencia de que no se ordenaran investigaciones al respecto. Esto constituyó un trato discriminatorio en su perjuicio por parte de la Corte Peruana, toda vez que ésta se fundamentó en un estereotipo de género sobre la falta de confiabilidad en sus declaraciones, de las mujeres sospechosas de haber cometido un delito.



3.6. GELMAN VS. URUGUAY

3.6.1. FECHA: 24 de febrero de 2011

3.6.2. PRESENTACION DEL CASO ANTE LA CORTE POR LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

PAIS DENUNCIADO	República Oriental del Uruguay
DERECHOS AFECTADOS PARA LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS	Derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial reconocidos en los artículos 8.1 y 25 en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, y en relación con los artículos I.b, III, IV y V de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, así como los artículos 1, 6, 8 y 11 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de Juan Gelman, María Claudia García de Gelman, María Macarena Gelman y sus familiares; del derecho a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal y a la obligación de sancionar estas violaciones en forma seria y efectiva reconocidos en los artículos 3, 4, 5, 7 y 1.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos I.b, III, IV y V de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y con los artículos 6 y 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura, en perjuicio de María Claudia García; de la integridad personal reconocida en el artículo 5.1 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, respecto de Juan Gelman, María Macarena Gelman y sus familiares; del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la protección de la honra y de la dignidad, al nombre, a medidas especiales de protección de los niños y niñas y a la nacionalidad reconocidos en los artículos 3, 11, 18, 19 y 20 en

	<p>relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, respecto de María Macarena Gelman derechos, y del derecho a la protección de la familia reconocido en los artículos 17 de la Convención y XII de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, respecto de Juan Gelman, María Macarena Gelman y sus familiares. Finalmente, la Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado determinadas medidas de reparación”.</p>
<p>DERECHOS AFECTADOS PARA LOS REPRESENTANTES DE LOS DENUNCIANTES</p>	<p>“Los representantes de las presuntas víctimas (en adelante “los representantes”), presentaron ante la Corte su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”), en los términos del artículo 40 del Reglamento de la Corte. En este escrito hicieron alusión a los hechos señalados en la demanda de la Comisión ampliando la información sobre los mismos y, en general, coincidieron con lo alegado jurídicamente por la Comisión. No obstante, solicitaron que se declare, además: a) el incumplimiento del deber estatal de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, contenido en el artículo 7.b de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante “Convención Belém do Pará”), en perjuicio de Maria Claudia García, y b) la violación del derecho a la verdad en perjuicio de los familiares de María Claudia García y “de la sociedad uruguaya” (artículos 1.1, 13, 8 y 25 de la Convención Americana). Por último solicitaron diversas medidas de reparación”.</p>

“El 21 de enero de 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) presentó, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención, una demanda contra la República Oriental del

*Uruguay en relación con el caso Juan Gelman, María Claudia García de Gelman y María Macarena Gelman García (en adelante “el caso Gelman”) Vs. Uruguay”.*³⁶⁹

*“Los hechos alegados por la Comisión se refieren a la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman desde finales del año 1976, quien fue detenida en Buenos Aires, Argentina, mientras se encontraba en avanzado estado de embarazo. Se presume que posteriormente fue trasladada al Uruguay donde habría dado a luz a su hija, quien fuera entregada a una familia uruguaya, actos que la Comisión señala como cometidos por agentes estatales uruguayos y argentinos en el marco de la “Operación Cóndor”, sin que hasta la fecha se conozcan el paradero de María Claudia García y las circunstancias en que su desaparición tuvo lugar. Además, la Comisión alegó la supresión de la identidad y nacionalidad de María Macarena Gelman García Iruretagoyena, hija de María Claudia García y Marcelo Gelman y la denegación de justicia, impunidad y, en general, el sufrimiento causado a Juan Gelman, su familia, María Macarena Gelman y los familiares de María Claudia García, como consecuencia de la falta de investigación de los hechos, juzgamiento y sanción de los responsables, en virtud de la Ley No. 15.848 o Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, promulgada en 1986 por el gobierno democrático del Uruguay”.*³⁷⁰

3.6.3. VÍCTIMAS

Las violaciones de los derechos a la integridad personal, garantías judiciales, protección judicial, y protección de la familia fueron cometidas en perjuicio de Juan Gelman, María Claudia García y María Macarena Gelman, así como de “sus familiares”.³⁷¹

3.6.4. HECHOS

³⁶⁹ Caso Gelman vs. Uruguay, sentencia del 24 de febrero del 2011, párrafo 1

³⁷⁰ Ibid. Párrafo 2

³⁷¹ Ibid. Párrafo 32

“Los hechos comenzaron a perpetrarse en colaboración con autoridades argentinas en un contexto de práctica sistemática de detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas perpetradas por las fuerzas de seguridad e inteligencia de la dictadura uruguaya, en el marco de la doctrina de seguridad nacional y de la Operación Cóndor³⁷². La llamada “Operación Cóndor”, nombre clave que se dio a la alianza que unía a las fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia de las dictaduras del Cono Sur en su lucha y represión contra personas designadas como “elementos subversivos”. Los servicios de inteligencia de varios países del Cono Sur del continente americano conformaron una organización inter-estatal con fines criminales complejamente articulada, cuyos alcances continuaban revelándose hoy en día; es decir, se dio una práctica sistemática de “terrorismo de Estado” a nivel inter-estatal”.³⁷³

“En el caso de Uruguay, el 27 de junio de 1973 el Presidente electo Juan María Bordaberry, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, disolvió las Cámaras y llevó a cabo un golpe de Estado, dando inicio a un período de “dictadura cívico-militar” que se prolongó hasta el 28 de febrero de 1985 y en el que se implementaron “formas cotidianas de vigilancia y control de la sociedad y, más específicamente, de represión a las organizaciones políticas de izquierda”³⁷⁴.

“En la década de los años 1970, se establecieron operaciones transnacionales en la región con el fin de eliminar a los grupos guerrilleros, aunque ya en 1960, se había creado la Conferencia de los Ejércitos Americanos, una organización de seguridad hemisférica inspirada en la “doctrina de la seguridad nacional”, que se reunía en sesiones secretas para discutir posibles estrategias y acuerdos de actividades conjuntas”³⁷⁵.

“Para noviembre de 1975, la cooperación de inteligencia militar se concretó aún más con la formalización de la denominada “Operación Cóndor”, lo que facilitó la creación de estructuras militares paralelas, que actuaban de forma secreta y con gran autonomía. Esa

³⁷² Ibid. Párrafo 44

³⁷³ Idem

³⁷⁴ Ibid. Párrafo 45

³⁷⁵ Ibid. Párrafo 46

*operación fue adoptada como una política de Estado de las “cúpulas de los gobiernos de hecho”, y estaba dirigida, en ese entonces, por cuerpos castrenses principalmente de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil*³⁷⁶.

“El plan Cóndor operaba en tres grandes áreas, a saber, primero, en las actividades de vigilancia política de disidentes exiliados o refugiados; segundo, en la operación de acciones encubiertas de contra-insurgencia, en las cuales el papel de los actores era completamente confidencial y, tercero, en acciones conjuntas de exterminio, dirigidas a grupos, o individuos específicos, para lo cual se conformaban equipos especiales de asesinos que operaban dentro y fuera de las fronteras de sus países, incluso en Estados Unidos y Europa”³⁷⁷.

“Uno de los centros clandestinos de detención fue “Automotores Orletti”. Estaba ubicado en un garaje abandonado de Buenos Aires en Argentina, sirvió como centro de tortura y era operado por escuadrones de la muerte y unidades conjuntas de oficiales policiales y militares de Uruguay y Argentina”³⁷⁸.

“Hacia 1977 se dieron también operaciones de colaboración entre Paraguay, Argentina y Uruguay y, a fines de ese año, se dio inicio a una segunda ola de represión coordinada por elementos militares argentinos y uruguayos, operativos dirigidos esta vez mayormente contra grupos de izquierda que tenían vínculos en ambos países, dándose nuevamente traslados de prisioneros en avionetas militares de ambos países y repetidos intercambios de detenidos, muchos de los cuales permanecen desaparecidos hasta la actualidad”³⁷⁹.

“En ese mismo sentido, las operaciones clandestinas incluyeron en muchos casos la sustracción y apropiación de niños y niñas, varios de ellos recién nacidos o nacidos en cautiverio, donde una vez ejecutados sus padres, los niños eran entregados a familias de militares o policías”³⁸⁰. Las mujeres embarazadas detenidas en el marco de las operaciones

³⁷⁶ Ibid. Párrafo 49

³⁷⁷ Ibid. Párrafo 51

³⁷⁸ Ibid. Párrafo 53

³⁷⁹ Ibid. Párrafo 59

³⁸⁰ Ibid. Párrafo 60

de contrainsurgencia eran mantenidas vivas hasta que dieran a luz para después sustraer sus niños y desaparecerlas, mientras que, en numerosos casos, los niños y niñas eran entregados a familias de militares o policías, luego de que sus padres fueran desaparecidos o ejecutados”³⁸¹.

“En cuanto a los fines perseguidos con las sustracciones y apropiaciones ilícitas, estos podían corresponder: a) a una forma de tráfico para adopción irregular de niños y niñas; b) a un castigo hacia sus padres o a sus abuelos de una ideología percibida como opositora al régimen autoritario, o c) a una motivación ideológica más profunda relacionada con una voluntad de trasladar por la fuerza a los hijos de los integrantes de los grupos opositores, para de esa manera, evitar que los familiares de los desaparecidos se puedan erigir un día en “elemento[s] potencialmente subversivo”³⁸².

LA DESAPARICION FORZADA

“La desaparición forzada constituye una violación múltiple de varios derechos protegidos por la Convención Americana que coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, acarreando otras vulneraciones conexas, siendo particularmente grave cuando forma parte de un patrón sistemático o práctica aplicada o tolerada por el Estado”³⁸³.

La desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman

“María Claudia García Iruretagoyena Casinelli nació el 6 de enero de 1957 en Buenos Aires, Argentina. Trabajaba como operaria en una fábrica de zapatillas y era estudiante de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires”³⁸⁴. Estaba casada con Marcelo

³⁸¹ Ibid. Párrafo 61

³⁸² Ibid. Párrafo 63

³⁸³ Ibid. Párrafo 74

³⁸⁴ Ibid. Párrafo 79

Ariel Gelman Schubaroff y al momento en que fue privada de su libertad tenía 19 años de edad y se encontraba en avanzado estado de embarazo (alrededor de 7 meses) ”³⁸⁵.

“Fue detenida al amanecer del 24 de agosto de 1976 junto con su esposo, Marcelo Ariel Gelman Schubaroff, y su cuñada, Nora Eva Gelman Schubaroff, hijos éstos de Juan Gelman, así como con un amigo de nombre Luis Edgardo Peredo, en su residencia de Buenos Aires, por “comandos militares uruguayos y argentinos”³⁸⁶. María Claudia García y Marcelo Gelman fueron llevados al centro de detención clandestino conocido como “Automotores Orletti”, en Buenos Aires, Argentina, donde permanecieron juntos algunos días y posteriormente fueron separados”³⁸⁷.

“Marcelo Gelman fue torturado desde el comienzo de su cautiverio en el centro de detención clandestino “Automotores Orletti”. En 1989 los restos de Marcelo Ariel fueron descubiertos por el Equipo Argentino de Antropología Forense, el cual determinó que había sido ejecutado en octubre de 1976”³⁸⁸.

“María Claudia García fue trasladada a Montevideo en Uruguay, de forma clandestina por autoridades uruguayas en la segunda semana octubre de 1976, en avanzado estado de embarazo, en el denominado “segundo vuelo”, y alojada en la sede del Servicio de Información de Defensa (en adelante “SID”) del Uruguay,³⁸⁹. María Claudia García permaneció detenida en la sede de la División III - SID, separada de los demás detenidos, en el piso principal del edificio y, a fines de octubre o comienzos de noviembre, habría sido trasladada al Hospital Militar, donde dio a luz a una niña³⁹⁰. Tras el parto, ella fue devuelta al SID, junto con su hija, y ubicada en una habitación en planta baja, separada del resto de los detenidos, a excepción de otros dos niños, los hermanos Julien-Grissonas, con quienes compartían el mencionado espacio³⁹¹. El 22 de diciembre de 1976 los prisioneros del local del SID fueron evacuados, siendo María Claudia García y su hija

³⁸⁵ Ibid. Párrafo 80

³⁸⁶ Ibid. Párrafo 81

³⁸⁷ Ibid. Párrafo 82

³⁸⁸ Ibid. Párrafo 83

³⁸⁹ Ibid. Párrafo 84

³⁹⁰ Ibid. Párrafo 85

³⁹¹ Ibid. Párrafo 86

transportadas a otro lugar de reclusión clandestino, conocido como la Base Valparaíso³⁹². Aproximadamente a finales de diciembre de 1976, a María Claudia García le fue sustraída su hija recién nacida y fue retirada del SID”³⁹³.

“Tras el nacimiento de María Macarena Gelman García, existen dos versiones, la primera sostiene que fue trasladada a una base clandestina militar, donde fue ejecutada y sus restos enterrados, y la segunda afirma que, tras quitarle a su hija, fue entregada a las fuerzas de seguridad argentinas de “Automotores Orletti”, que se trasladaron a Montevideo para transportarla a la Argentina en lancha, desde el puerto de Carmelo, habiéndole dado muerte en el país vecino”³⁹⁴.

“El señor Juan Gelman, padre de Marcelo Gelman, suegro de María Claudia García Iruretagoyena y abuelo de María Macarena Gelman García, y su esposa, Mara Elda Magdalena La Madrid Daltoe, realizaron por su cuenta averiguaciones para conocer lo ocurrido a su hijo, a su nuera y a la hija de ambos, que presumían había nacido durante el cautiverio de sus padres”³⁹⁵.

“Por el modo en que María Claudia García fue privada de su libertad en avanzado estado de embarazo, secuestrada en Buenos Aires por autoridades argentinas y probablemente uruguayas en un contexto de detenciones ilegales en centros clandestinos (“Automotores Orletti” y el SID), y posteriormente trasladada a Montevideo, bajo la Operación Cóndor, su privación de libertad fue manifiestamente ilegal, en violación del artículo 7.1 de la Convención, y sólo puede ser entendida como el inicio de la configuración de la violación compleja de derechos que implica la desaparición forzada. Constituyó además un flagrante incumplimiento de la obligación estatal de mantener a las personas privadas de libertad en centros de detención oficialmente reconocidos y presentarla sin demora ante la autoridad judicial competente”.³⁹⁶

³⁹² Ibid. Párrafo 87

³⁹³ Ibid. Párrafo 88

³⁹⁴ Ibid. Párrafo 89

³⁹⁵ Ibid. Párrafo 90

³⁹⁶ Ibid. Párrafo 91

“En casos de desaparición forzada de personas se viola el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, reconocido en el artículo 3 de la Convención Americana, pues se deja a la víctima en una situación de indeterminación jurídica que imposibilita, obstaculiza o anula la posibilidad de la persona de ser titular o ejercer en forma efectiva sus derechos en general, lo cual constituye una de las más graves formas de incumplimiento de las obligaciones estatales de respetar y garantizar los derechos humanos”³⁹⁷.

“Su traslado desde Argentina a Uruguay pretendió sustraerla de la protección de la ley en ambos Estados, persiguiéndose así anular su personalidad jurídica, negar su existencia y dejarla en una suerte de limbo o situación de indeterminación jurídica ante la sociedad, el Estado e inclusive la comunidad internacional, lo que, por ende, constituye también una violación de su derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica”³⁹⁸

“Una vez detenida, ella estuvo bajo control de cuerpos represivos oficiales que impunemente practicaban la tortura, el asesinato y la desaparición forzada de personas, lo que representa, por sí mismo, una infracción al deber de prevención de violaciones a los derechos a la integridad personal y a la vida, reconocidos en los artículos 5 y 4 de la Convención Americana, aún en el supuesto de que no puedan demostrarse los hechos de torturas o de privación de la vida de la persona en el caso concreto”³⁹⁹.

“El estado de embarazo en que se encontraba María Claudia García cuando fue detenida constituía la condición de particular vulnerabilidad por la cual se dio una afectación diferenciada en su caso. A su vez, en Argentina ya había sido separada de su esposo y luego trasladada al Uruguay sin conocer el destino de aquél, lo que en sí mismo representó un acto cruel e inhumano. Posteriormente, fue retenida en un centro clandestino de detención y torturas, a saber, el SID, donde su tratamiento diferenciado respecto de otras personas detenidas –pues estuvo separada de éstas- no se dio para cumplir una obligación especial de protección a su favor, sino para lograr la finalidad de su retención ilegal, de su traslado al Uruguay y de su eventual desaparición forzada, cual

³⁹⁷ Ibid. Párrafo 92

³⁹⁸ Ibid. Párrafo 93

³⁹⁹ Ibid. Párrafo 95

*era, la instrumentalización de su cuerpo en función del nacimiento y el período de lactancia de su hija, quien fue entregada a otra familia luego de ser sustraída y sustituida su identidad. Los hechos del caso revelan una particular concepción del cuerpo de la mujer que atenta contra su libre maternidad, lo que forma parte esencial del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres. Lo anterior es aún más grave si se considera, según fue señalado, que su caso se dio en un contexto de desapariciones de mujeres embarazadas y apropiaciones ilícitas de niños ocurridos en el marco de la Operación Cóndor”.*⁴⁰⁰

*“Los señalados actos cometidos contra María Claudia García pueden ser calificados como una de las más graves y reprochables formas de violencia contra la mujer, que habrían sido perpetrados por agentes estatales argentinos y uruguayos, que afectaron gravemente su integridad personal y estuvieron claramente basados en su género. Los hechos le causaron daños y sufrimientos físicos y psicológicos que, por los sentimientos de grave angustia, desesperación y miedo que pudo experimentar al permanecer con su hija en un centro clandestino de detención, donde usualmente se escuchaban las torturas infligidas a otros detenidos en el SID, y no saber cuál sería el destino de ella cuando fueron separadas, así como haber podido prever su fatal destino, constituyen una afectación de tal magnitud que debe ser calificada como la más grave forma de vulneración de su integridad psíquica”.*⁴⁰¹

*“En consideración de lo anterior, en virtud de su desaparición forzada, que se mantiene hasta el día de hoy, la Corte concluye que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la libertad personal, la integridad personal, la vida y al reconocimiento a la personalidad jurídica de la señora María Claudia García Iruretagoyena, reconocidos en los artículos 7.1, 5.1 y 5.2, 4.1 y 3, en razón del incumplimiento de sus obligaciones de respetar y garantizar esos derechos, establecidas en el artículo 1.1, todos de la Convención Americana, en relación con los artículos I y XI de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas”*⁴⁰².

⁴⁰⁰ Ibid. Párrafo 97

⁴⁰¹ Ibid. Párrafo 98

⁴⁰² Ibid. Párrafo 101

3.6.5. AFECTACION DE DERECHOS

DERECHOS A LAS GARANTIAS JUDICIALES Y PROTECCION JUDICIAL EN RELACIÓN CON LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS, EL DEBER DE ADOPTAR DISPOSICIONES EN DERECHO INTERNO Y LAS OBLIGACIONES SOBRE INVESTIGACIÓN DERIVADAS DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS

“En definitiva, toda vez que haya motivos razonables para sospechar que una persona ha sido sometida a desaparición forzada debe iniciarse una investigación. Esta obligación es independiente de que se presente una denuncia, pues en casos de desaparición forzada el derecho internacional y el deber general de garantía, imponen la obligación de investigar el caso ex officio, sin dilación, y de una manera seria, imparcial y efectiva. Esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientarse a la determinación de la verdad. Este es un elemento fundamental y condicionante para la protección de los derechos afectados por esas situaciones. En cualquier caso, toda autoridad estatal, funcionario público o particular que haya tenido noticia de actos destinados a la desaparición forzada de personas, deberá denunciarlo inmediatamente”⁴⁰³.

“La obligación de investigar y el correspondiente derecho de la presunta víctima o de los familiares no sólo se desprenden de las normas Convencionales de derecho internacional, imperativas para los Estados Parte, sino que, según el Estado de que se trate, además deriva de la legislación interna que hace referencia al deber de investigar de oficio ciertas conductas ilícitas y a las normas que permiten que las víctimas o sus familiares denuncien o presenten querellas, pruebas, peticiones o cualquier otra diligencia, con la finalidad de participar procesalmente en la investigación penal con la pretensión de establecer la verdad de los hechos”⁴⁰⁴.

“Cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar

⁴⁰³ Ibid. Párrafo 186

⁴⁰⁴ Ibid. Párrafo 188

por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, por lo que los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un “control de Convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. ⁴⁰⁵ *La Justicia, para ser tal, debe ser oportuna y lograr el efecto útil que se desea o se espera con su accionar y, particularmente tratándose de un caso de graves violaciones de derechos humanos, debe primar un principio de efectividad en la investigación de los hechos y determinación y en su caso sanción de los responsables”* ⁴⁰⁶

3.6.6. PUNTOS RESOLUTIVOS

No procede emitir un pronunciamiento sobre las alegadas violaciones del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión y del derecho a la honra y dignidad, reconocidos en los artículos 13 y 11 de la Convención, ni de las normas de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belém do Pará”) cuya violación fue alegada.

3.6.7. COMENTARIO

Este caso en especial hace un desarrollo de un estado propio de la mujer como es el embarazo y el derecho a la maternidad de María Claudia García durante su detención sin la protección de la ley.

Y es que la Corte otorga una definición especial a este estado y lo determina como una “condición de particular vulnerabilidad”, que efectivamente va a empeorar las

⁴⁰⁵ Ibid. Párrafo 193

⁴⁰⁶ Ibid. Párrafo 194

circunstancias que va a pasar la mujer, dado que en ese caso se evalúa lo que le ocurre a Maria Claudia García quien va a ser secuestrada y posteriormente asesinada en el marco de la Operación Condor, sin embargo no se tiene en cuenta su especial estado de gravidez ya que a la fecha de los hechos contaba ya con siete meses de embarazo que la hacía probablemente mas delicada, y débil ante cualquier flagelo que se le pueda infligir, ello sin considerar que por su propio estado su estado de salud es peligroso dado que se encontraba ya en la parte final de su embarazo en que ante cualquier acción riesgosa pudo haber puesto en peligro a la niña que llevaba en el vientre.

Seguramente no opuso resistencia al momento de ser intervenida, menos aun mientras que estuvo en cautiverio, o mientras que esperaba el parto, o hasta cuando dio a luz, momentos de zozobra habrá pasado después que recibió a su hija en brazos y continuó secuestrada solamente con su hija, y como cualquier madre pensando día que le pasaría a su hija sin su presencia, o si le permitirían seguir con vida para poder verla crecer.

Esos días no deben haber sido fáciles para Maria Claudia García, menos aún si se encontraba sola sin una persona conocida cercana a su alrededor y con el conocimiento que otras personas han sufrido lo mismo y por ello saber que no tendría escapatoria.

Debemos entender que todo esto por lo que pasó Maria Claudia García son experiencias que solo podrían ser vividas por una mujer dado que solo una fémina podría sufrir de un aborto forzado o la sustracción de un hijo recién nacido hechos que las afecta de forma diferenciada por su condición.

A ello se agrega que hay una especial actitud de violencia de género dado que se utiliza el cuerpo de Maria Claudia García por su condición de mujer, en especial de mujer embarazada, porque la utilizaron en beneficio de un tercero como portadora de un nuevo ser, no le permitieron ejercer libremente su maternidad, le prohibieron de su ejercicio de autonomía porque se le mantuvo cautiva, no pudo otorgar un nombre o su reconocimiento legal a su hija, se le utilizó para que pueda dar de lactar a la niña y cuando ya no les fue útil fue asesinada y posteriormente entregada su hija a terceras personas, lo que quiebra el libre desarrollo de la personalidad de Maria Claudia como mujer, y en especial como madre, ello porque en todo momento debe haber padecido sentimientos de angustia, desesperación

y miedo por el peligro que corría su vida y la vida de su hija que para ese momento que implican sus primeros días de nacida, dependía enteramente de ella.

Es por todo lo referido que se entiende por qué la Corte aseveró que una afectación de la dimensión en que se describen los hechos ocurridos la califica como “la más grave forma de vulneración de su integridad psíquica.”



3.7. MASACRES DE EL MOZOTE Y LUGARES ALEDAÑOS VS. EL SALVADOR

3.7.1. FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2012

3.7.2. PRESENTACIÓN DEL CASO DE PARTE DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

PAIS DENUNCIADO	República de El Salvador
DERECHOS AFECTADOS PARA LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS	Derecho a la vida, integridad personal y libertad personal, consagrados en los articulas 4, 5, 7 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de las víctimas ejecutadas extrajudicialmente; de las obligaciones especiales respecto de los niños y niñas, establecidas en el artículo 19 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de las niñas y niños ejecutados extrajudicialmente; de los derechos a la integridad personal y vida privada consagrados en los articulas 5 y 11 de la Convención Americana, en perjuicio de las mujeres violadas sexualmente en el caserío El Mozote; del derecho a la propiedad privada consagrado en el artículo 21 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de las víctimas ejecutadas que fueron despojadas de sus bienes, así como de los sobrevivientes cuyas viviendas fueron destruidas o sus medios de subsistencia arrebatados o eliminados; del derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los sobrevivientes y familiares de las víctimas ejecutadas; del derecho a la libertad de circulación y residencia consagrado en el artículo 22 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de las personas desplazadas forzosamente; y de los

	<p>derechos a las garantías judiciales y protección judicial consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento; de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; y del artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o “Convención de Belém do Pará”, en perjuicio de los sobrevivientes y familiares de las víctimas ejecutadas”.</p>
--	---

“El caso se relaciona con las alegadas masacres sucesivas que habrían sido cometidas entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981 en el marco de un operativo militar del Batallón Atlacatl, junto con otras dependencias militares, en siete localidades del norte del Departamento de Morazán, República de El Salvador, en las cuales aproximadamente un millar de personas habrían perdido la vida, “incluyendo un alarmante número de niños y niñas”, así como con la alegada investigación que se habría iniciado por estos hechos y el “sobreseimiento dictado el 27 de septiembre de 1993 con base en la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, que contin[uaría] vigente en El Salvador” y, finalmente, con las alegadas exhumaciones que se habrían realizado en años posteriores, pero sin dar lugar a la reactivación de las investigaciones, “a pesar de reiteradas solicitudes a las autoridades correspondientes”⁴⁰⁷.

“Según la Comisión, las alegadas masacres del presente caso habrían ocurrido en el período más cruento de las operaciones llamadas de “contrainsurgencia”, desplegadas de manera masiva contra civiles por el ejército salvadoreño durante el conflicto armado, siendo el carácter sistemático y generalizado de este tipo de acciones cuya finalidad habría sido sembrar el terror en la población, lo que permitiría concluir que las alegadas masacres del presente caso habrían constituido “una de las manifestaciones más aberrantes de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la época por parte de la institución militar salvadoreña”. No obstante, debido a la alegada vigencia de la Ley de

⁴⁰⁷Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador, sentencia del 25 de octubre del 2012. Párrafo 2

*Amnistía General para la Consolidación de la Paz, así como a reiteradas omisiones por parte del Estado, estos graves hechos permanecerían en la impunidad”.*⁴⁰⁸

3.7.3. VÍCTIMAS

*“El Tribunal constata que es complejo identificar e individualizar a cada una de las presuntas víctimas, en razón de la magnitud del presente caso, que trata sobre masacres perpetradas en siete lugares diferentes, de la naturaleza de los hechos y las circunstancias que rodearon las mismas, y del tiempo transcurrido”.*⁴⁰⁹

*“El Tribunal tendrá como víctimas a aquellas personas identificadas e individualizadas por la Comisión en sus listados anexos al informe de fondo y/o por los representantes en sus listados anexos a su escrito de alegatos finales, que hayan sufrido alguna violación de derechos humanos en el marco de las masacres en el caserío El Mozote, el cantón La Joya, los caseríos Ranchería, Los Toriles y Jocote Amarillo, el cantón Cerro Pando y una cueva del Cerro Ortiz, siempre que el Tribunal cuente con la prueba necesaria para verificar la identidad de cada una de esas personas. En base a estos criterios y a la prueba que ha sido allegada, esta Corte ha podido determinar un número de víctimas que es singularmente menor al de los listados aportados. Sin perjuicio de lo anterior y habida cuenta de que el propio Estado aportó un listado de 936 víctimas individualizadas, la Corte considera imprescindible que, en el marco del Registro Único de Víctimas que se encuentra desarrollando, éste proceda a la determinación cierta de otras personas que también deban ser consideradas víctimas y, en su caso, beneficiarias de las reparaciones que el Tribunal ordene”*⁴¹⁰.

3.7.4. HECHOS

“Aproximadamente desde 1980 hasta 1991 El Salvador se vio sumido en un conflicto armado interno, durante el cual se estima que más de 75.000 personas resultaron víctimas entre la población salvadoreña”⁴¹¹. El año 1980 marcó el comienzo de “varios ataques sin discriminación contra la población civil no combatiente y ejecuciones sumarias colectivas

⁴⁰⁸ Ibid. Párrafo 3

⁴⁰⁹ Ibid. Párrafo 51

⁴¹⁰ Ibid. Párrafo 57

⁴¹¹ Ibid. Párrafo 62

que afecta[ba]n particularmente a la población rural” por parte de las fuerzas de seguridad. La violencia en las zonas rurales, en los primeros años de la década de 1980, “alcanzó una indiscriminación extrema”⁴¹².

“Entre octubre y noviembre de 1980 se conformó el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (en adelante también “FMLN”), el cual conglomeraba a los cinco grupos de oposición política y armada: Fuerzas Populares de Liberación, Ejército Revolucionario del Pueblo, Fuerzas Armadas de Liberación, Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional y el Partido Revolucionario de los Trabajadores de Centroamérica. En 1981 las organizaciones del FMLN decidieron conducir una ofensiva para promover un levantamiento popular y derrocar la Junta de Gobierno. A pesar de que no logró el objetivo esperado, el FMLN acabó controlando varios poblados, aseguró sus áreas de influencia política y logró el reconocimiento internacional como fuerza beligerante”⁴¹³

“El proceso de negociaciones hacia la paz se inició cuando los cinco Presidentes centroamericanos solicitaron la intervención del Secretario General de las Naciones Unidas para que interpusiera sus buenos oficios con el fin de lograr la pacificación en la región de América Central. Entre 1989 y 1992 se firmaron diversos acuerdos entre el Gobierno de El Salvador y el FMLN y, finalmente, tras doce años de conflicto armado, el 16 de enero de 1992 se firmó el Acuerdo de Paz que puso fin a las hostilidades en Chapultepec, México, bajo los buenos oficios del Secretario General de las Naciones Unidas”⁴¹⁴.

“A partir de enero de 1981, se crearon los Batallones de Infantería de Reacción Inmediata en la Fuerza Armada salvadoreña, que eran unidades de elite entrenadas especialmente para la lucha contrainsurgente, las cuales habían concluido su entrenamiento, bajo la asesoría y supervisión de militares estadounidenses⁴¹⁵. La contrainsurgencia, en su forma más extrema, encontraba expresión en un extendido concepto de “quitarle el agua al pez”, es decir, destruir la base de apoyo de la insurgencia. A los habitantes de zonas donde existía una alta presencia del FMLN “se les asimilaba por sospecha [a] la guerrilla,

⁴¹² Ibid. Párrafo 63

⁴¹³ Ibid. Párrafo 64

⁴¹⁴ Ibid. Párrafo 65

⁴¹⁵ Ibid. Párrafo 67

pertenecerían o eran colaboradores de ésta y por tanto corrían riesg[o] de ser eliminados”⁴¹⁶.

“La Fuerza Armada, en el curso de operaciones contrainsurgentes, “ejecutaron a campesinos, hombres, mujeres y niños, que no habían opuesto ninguna resistencia, simplemente por considerarlos colaboradores de los guerrilleros”. Es imposible sostener que este patrón de conducta sea atribuible sólo a los mandos locales, y que haya sido desconocido por los mandos superiores, pues las masacres de población campesina fueron denunciadas reiteradamente, sin que existan evidencias de que se haya hecho ningún esfuerzo por investigarlas⁴¹⁷. La estrategia de tierra arrasada consistió en “el aniquilamiento indiscriminado de uno o varios poblados en el contexto de un mismo operativo”, seguido de la destrucción o quema de siembras, viviendas y bienes de las víctimas que habían sido previamente ejecutadas o de aquellos que habían huido del lugar “el fenómeno de las masacres ocurrió en forma deliberada como parte de una estrategia planificada sistemáticamente por la Fuerza Armada de El Salvador [por lo que] resulta imposible aducir que las innumerables ejecuciones masivas de población civil fueron actos de violencia aislados y desconocidos por las altas autoridades de la Fuerza Armada y el gobierno en turno; por el contrario, se insertaron en y fueron parte central de una concreta política contrainsurgente del Estado”. Por consiguiente, “las masacres [...] no fueron el resultado de abusos eventuales de ciertas unidades del ejército salvadoreño o de oficiales de rango medio que cometieron excesos”⁴¹⁸.

“Hasta esa fecha y durante varios años, la ocurrencia de las masacres de El Mozote y lugares aledaños fue sistemáticamente denegada y encubierta por el Estado. Según la Comisión de la Verdad, “a pesar de las denuncias públicas del hecho y de lo fácil que hubiera sido su comprobación [por la cantidad de cadáveres insepultos], las autoridades salvadoreñas no ordenaron ninguna averiguación y negaron permanentemente la existencia de la masacre”⁴¹⁹. Sin embargo, fue a partir de dos reportajes internacionales publicados el 27 de enero de 1982 en los periódicos The New York Times y The Washington Post, los cuales recogieron en el terreno testimonios de sobrevivientes, que la verdad de lo sucedido comenzó a develarse, a pesar de que, tanto en el plano nacional

⁴¹⁶ Ibid. Párrafo 68

⁴¹⁷ Ibid. Párrafo 69

⁴¹⁸ Ibid. Párrafo 70

⁴¹⁹ Ibid. Párrafo 73

como internacional, se intentó desacreditar y descalificar la información proporcionada por los periodistas Raymond Bonner y Alma Guillermoprieto como “propaganda del FMLN”⁴²⁰. Dichos periodistas proporcionaron la primera evidencia de que el ejército salvadoreño “había incurrido en un brutal asesinato de civiles”, señalando que más de 700 campesinos habrían sido asesinados, principalmente niños, mujeres y adultos mayores”.⁴²¹

“En el año 1981 eran comunes las operaciones de contrainsurgencia, por lo que algunos de los pobladores de la zona norte del Departamento de Morazán, en la República de El Salvador, no habitaban permanentemente en sus viviendas, ocultándose en los montes y las cuevas durante los períodos de mayor peligro”⁴²².

“Los pobladores del norte del Departamento de Morazán se dedicaban principalmente a oficios domésticos y actividades rurales”⁴²³

“Entre el 8 y el 16 de diciembre de 1981 el Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl (en adelante “BIRI Atlacatl”) realizó, junto con unidades de la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel y del Centro de Instrucción de Comandos de San Francisco Gotera, un operativo militar de grandes dimensiones en la zona norte del Departamento de Morazán, conocido como “Operación Rescate” o “Yunque y Martillo”, cuya finalidad aparente era eliminar la presencia guerrillera –un campamento y un centro de entrenamiento- en el sitio denominado La Guacamaya, del cantón del mismo nombre. Dicho operativo tenía como precedente el hecho de que en meses previos el BIRI Atlacatl había participado en un frustrado operativo contrainsurgente en esa misma zona”⁴²⁴.

“El operativo inició con bombardeos aéreos y de artillería dirigidos hacia el caserío El Mozote y el cantón La Joya. Asimismo, helicópteros de la Fuerza Aérea salvadoreña transportaron a miembros del BIRI Atlacatl hasta la población de Perquín, desde donde iniciaron el desplazamiento terrestre. Otras compañías ingresaron a la zona por vía terrestre procedentes de San Francisco Gotera. El operativo abarcó, entre otros, los

⁴²⁰ Ibid. Párrafo 74

⁴²¹ Ibid. Párrafo 75

⁴²² Ibid. Párrafo 80

⁴²³ Ibid. Párrafo 81

⁴²⁴ Ibid. Párrafo 83

*caseríos de El Mozote, Ranchería, Los Toriles y Jocote Amarillo; los cantones de La Joya y Cerro Pando, y el sitio conocido como Cerro Ortiz”.*⁴²⁵

*“El caserío El Mozote se encuentra ubicado en el cantón Guacamaya, de la jurisdicción de Meanguera, Departamento de Morazán. Al momento de los hechos estaba formado por aproximadamente 20 casas situadas en una extensión abierta conocida como “El Llano”, una especie de plaza central. Frente a la plaza se encontraba “La Ermita” o iglesia del caserío y una pequeña construcción adyacente conocida como “El Convento”. Cerca de allí estaba la escuela. El área se encuentra cercada, al poniente, por el cerro “El Chingo” y, al oriente, por el cerro “La Cruz”.*⁴²⁶

*“Entre fines de noviembre y principios de diciembre de 1981, soldados indicaron a un comerciante del caserío El Mozote, de nombre Marcos Díaz, que acumulara víveres y aconsejara a la población que se concentrase en el caserío pues para aquellos que estuvieran reunidos allí no correría peligro su vida, pero a quienes estuvieran dispersos los matarían. Aproximadamente en la primera semana del mes de diciembre de 1981, dicha persona hizo pública la advertencia efectuada por oficiales de la Fuerza Armada en el sentido de que muy pronto se iba a iniciar un fuerte operativo en el área, razón por la cual muchos pobladores de las zonas adyacentes al caserío El Mozote abandonaron sus viviendas y se concentraron en el “Llano” o centro del caserío, especialmente en la casa y tienda del señor Marcos Díaz”.*⁴²⁷

“El 10 de diciembre de 1981 tropas de las diferentes compañías del BIRI Atlacatl convergieron en el caserío El Mozote, tras bombardeos perpetrados por la Fuerza Aérea salvadoreña, alcanzando el control total de la población de la zona. Al llegar los soldados al caserío llevaban consigo capturadas varias personas que encontraron en los alrededores. Los soldados sacaron a la gente de las casas, incluyendo a las personas concentradas en la vivienda y tienda de Marcos Díaz, obligándolos a tenderse en el suelo boca abajo para interrogarlos sobre la presencia de guerrilleros en la zona. Las personas fueron despojadas de sus pertenencias y les ordenaron regresar a sus viviendas bajo la

⁴²⁵ Ibid. Párrafo 85

⁴²⁶ Ibid. Párrafo 87

⁴²⁷ Ibid. Párrafo 88

amenaza de que debían encerrarse en las mismas “sin sacar siquiera la nariz”, pues de lo contrario les dispararían”⁴²⁸.

“Aproximadamente a las 5:00 horas de la mañana del 11 de diciembre de 1981, los soldados sacaron a todas las personas de sus casas, agrupándolas en la plaza del caserío frente a la ermita. En la plaza los soldados les ordenaron formarse en dos filas, una de hombres y otra, de mujeres, niñas y niños, manifestándoles que allí permanecerían mientras tomaban la decisión de qué hacer con ellos. Dos horas más tarde, dividieron a las personas en dos grupos: uno de hombres y niños mayores que enviaron a la ermita, y otro de mujeres y niños y niñas pequeños que ubicaron en la vivienda del señor Alfredo Márquez”⁴²⁹.

“Aproximadamente a las 8:00 horas de la mañana del 11 de diciembre de 1981 se dio inicio a la ejecución masiva de las personas concentradas en El Mozote. Al medio día, tras concluir el asesinato de los hombres agrupados en la ermita, varios soldados ingresaron a la casa del señor Alfredo Márquez –donde se encontraban las mujeres y los niños más pequeños– expresándoles “hoy sí mujeres, a los hombres ya los liberamos sólo quedan ustedes. Vamos a sacarlas por grupos, porque por grupos las vamos a mandar a sus casas, para Gotera, para donde ustedes quieran”. A partir de ese momento, las mujeres fueron sacadas en grupos de aproximadamente veinte personas, desde las más jóvenes hasta las de mayor edad, siendo obligadas a abandonar a sus hijos en dicho lugar, algunos de los cuales eran recién nacidos. Llevaron los grupos de mujeres a diferentes viviendas, entre ellas la del señor Israel Márquez, donde fueron ametralladas. En la casa del señor Israel Márquez, se recuperó 31 concentraciones de fragmentos óseos (12 adultos, 4 subadultos menores de 3 años y el resto imposible de identificar) y cenizas debido a la acción de fuego. En cuanto al sexo, en su gran mayoría se trata de individuos de sexo femenino; no obstante, la identificación es indeterminada así como la causa de muerte, aunque se puede inferir que, dado las evidencias balísticas encontradas, los individuos antes de ser quemados fueron asesinados con armas de fuego de alta velocidad”⁴³⁰.

⁴²⁸ Ibid. Párrafo 89

⁴²⁹ Ibid. Párrafo 90

⁴³⁰ Ibid. Párrafo 92

“Según fue reconocido por el Estado y establecido por Tutela Legal del Arzobispado en sus informes, a las mujeres más jóvenes las llevaron a los alrededores del caserío, especialmente a los cerros “El Chingo” y “La Cruz”, donde miembros del ejército las violaron sexualmente previo a asesinarlas”⁴³¹.

“Luego, los niños y niñas más pequeños, que aún permanecían en la casa de Alfredo Márquez, fueron ejecutados, algunos en esta misma casa y otros en el interior y exterior del convento. La mayoría de los niños fueron asesinados en el interior del convento, cabaña ubicada junto a la ermita, el cual fue luego quemado. Más del 95% de los 143 individuos identificados corresponden a niños, siendo el promedio de edad de 6 años. Las personas encontradas en el convento murieron allí o sus cuerpos fueron depositados en dicho lugar cuando todavía conservaban sus partes blandas. Por ende, se concluye que por lo menos una cierta cantidad de personas fueron asesinadas en el convento, y quemadas en el mismo lugar, dado “los abundantes signos de fuego en todos los niveles de la vivienda”⁴³².

“Los cuerpos de todas las personas asesinadas fueron apilados en varias viviendas, que luego fueron quemadas por los soldados. Del mismo modo, prendieron fuego a la ermita, en donde había personas lesionadas aún con vida, pues se pudieron escuchar los gritos y lamentos”⁴³³.

“Sobrevivientes de las masacres que se habían escondido en el monte y otras personas o familiares indicaron haber acudido a El Mozote después de la masacre en busca de familiares que vivían allí, encontrándose con cadáveres de niños, mujeres y ancianos, muchos de ellos carbonizados, degollados o desmembrados por los animales, y casas quemadas”⁴³⁴.

“De acuerdo a lo establecido en el informe de fondo de la Comisión y reconocido por el Estado, hasta ese momento se había identificado que aproximadamente 498 personas fueron ejecutadas en el caserío El Mozote”⁴³⁵.

⁴³¹ Ibid. Párrafo 93

⁴³² Ibid. Párrafo 94

⁴³³ Ibid. Párrafo 95

⁴³⁴ Ibid. Párrafo 96

⁴³⁵ Ibid. Párrafo 97

*“El cantón La Joya, de la jurisdicción de Meanguera, es un valle con un río llamado “Las Marías”, que se encuentra aproximadamente a tres kilómetros al suroeste del caserío El Mozote, en el Departamento de Morazán. Hacia el oeste se ubica una planicie en altura conocida como “Arada Vieja”, situada en el caserío Los Quebrachos”.*⁴³⁶

*“El 10 diciembre de 1981 gran cantidad de helicópteros de la Fuerza Aérea salvadoreña sobrevolaron el cantón y aterrizaron en la “Arada Vieja” transportando tropas. En horas de la tarde, efectivos militares abrieron fuego con morteros y fusilería contra el cantón. Por tal razón, algunos moradores buscaron esconderse inmediatamente, otros esperaron la madrugada del día 11 de diciembre para salir a esconderse en el monte o el río Las Marías, y un gran número de personas decidió no abandonar el lugar. Los hombres que se fueron a esconder al monte o al río creyeron que a sus mujeres e hijos pequeños, a quienes dejaron en sus viviendas, no les harían daño”.*⁴³⁷

“Aproximadamente a las 8:00 horas de la mañana del 11 de diciembre de 1981 soldados uniformados ingresaron al cantón La Joya procediendo a sacar a las personas de sus viviendas y asesinarlas, para luego quemar las viviendas, bienes y animales de la población. Algunos sobrevivientes pudieron escuchar los gritos y lamentos de las personas que estaban siendo asesinadas⁴³⁸. Sobrevivientes de La Joya se vieron forzados a huir y evadir el operativo militar, arrastrándose en los montes y ocultándose en las cuevas más cercanas por muchos días⁴³⁹. Asimismo, un grupo de aproximadamente 50 personas buscaron refugio en el cerro conocido como “El Perico”, situado a unos 500 metros de las viviendas del cantón. Desde ese lugar pudieron observar las columnas de humo y escuchar los disparos de los soldados⁴⁴⁰. Después de varios días, las personas que se ocultaron en el monte, en el río, en las cuevas y en el cerro “El Perico” bajaron al caserío y enterraron a las personas muertas. Asimismo, encontraron todas sus viviendas quemadas y destruidas, por lo que la mayoría decidió ir a buscar refugio en Honduras⁴⁴¹. Hasta ese

⁴³⁶ Ibid. Párrafo 98

⁴³⁷ Ibid. Párrafo 99

⁴³⁸ Ibid. Párrafo 100

⁴³⁹ Ibid. Párrafo 101

⁴⁴⁰ Ibid. Párrafo 102

⁴⁴¹ Ibid. Párrafo 103

momento se había identificado que aproximadamente 152 personas fueron ejecutadas en el cantón La Joya.”⁴⁴².

“El caserío Ranchería, del cantón Guacamaya, de la jurisdicción de Meanguera, Departamento de Morazán, estaba ubicado a unos mil metros hacia el noreste del caserío El Mozote y estaba compuesto por aproximadamente unas 17 viviendas de familias campesinas”⁴⁴³.

“En las primeras horas de la mañana del 12 de diciembre de 1981, la Tercera Compañía del BIRI Atlacatl se desplazó en esta dirección, rumbo a Ranchería y Los Toriles, donde continuaron los asesinatos masivos de los pobladores. En este caserío los asesinatos se perpetraron al interior de las viviendas, contra grupos familiares. Iniciaron con la casa del señor Vicente Márquez, continuaron con la vivienda del señor Catarino Rodríguez, en la cual vivían tres familias, y siguieron familia por familia durante varias horas. Muchas de las viviendas fueron quemadas después de los asesinatos”⁴⁴⁴.

*“Las personas que lograron escapar y que estaban escondidas en el momento, pudieron escuchar los disparos, los gritos de las personas suplicando que no las mataran y el llanto de los niños. Muchos de estos sobrevivientes volvieron al lugar en búsqueda de sus familiares y encontraron los cadáveres, algunos de ellos degollados y mutilados”.*⁴⁴⁵

*“Hasta ese momento se había identificado que aproximadamente 56 personas fueron ejecutadas en el caserío Ranchería.”*⁴⁴⁶.

“El caserío Los Toriles, del cantón Guacamaya, de la jurisdicción de Meanguera, Departamento de Morazán, estaba ubicado inmediatamente al lado del caserío Ranchería. Aproximadamente a las 7:00 horas de la mañana del 12 de diciembre de 1981, comenzaron los asesinatos por grupos familiares. Posteriormente, los soldados procedieron a quemar y destruir las viviendas, los cultivos, los animales y los bienes. Según surge de las exhumaciones realizadas, las familias fueron concentradas antes de ser

⁴⁴² Ibid. Párrafo 105

⁴⁴³ Ibid. Párrafo 106

⁴⁴⁴ Ibid. Párrafo 107

⁴⁴⁵ Ibid. Párrafo 108

⁴⁴⁶ Ibid. Párrafo 109

ametralladas por los militares, y los esqueletos se encontraban en buenas condiciones dado que las víctimas no fueron quemadas ni apiladas, lo que facilitó la identificación⁴⁴⁷. Hasta ese momento se había identificado que aproximadamente 82 personas fueron ejecutadas en el caserío Los Toriles.”⁴⁴⁸.

“El caserío Jocote Amarillo, del cantón Guacamaya, de la jurisdicción de Meanguera, Departamento de Morazán, se encontraba situado aproximadamente a dos kilómetros al sur del caserío El Mozote. El operativo militar y los asesinatos ocurridos en los otros lugares ya era información conocida por los habitantes de Jocote Amarillo, razón por la cual muchas personas lograron esconderse en el monte antes de la llegada de los militares. Sin embargo, otras personas se refugiaron en este lugar, debido a que, como fue establecido en el informe de fondo y reconocido por el Estado, estaba más lejos y se creía que allí no llegarían los soldados”.⁴⁴⁹

“Según las narraciones de sobrevivientes, quienes escucharon los disparos y observaron columnas de humo, los efectivos militares comenzaron los asesinatos en Jocote Amarillo entre las 7:00 y 9:00 horas de la mañana del 13 de diciembre de 1981. Según fue establecido en el informe de fondo y reconocido por el Estado, fue constante el tiroteo, los gritos de angustia y dolor y “los clamores de la gente que estaba siendo asesinada”. Al volver, aquellos que lograron huir encontraron los cadáveres de sus familiares, algunos carbonizados, y procedieron a enterrarlos. Todas las casas habían sido quemadas.⁴⁵⁰ Hasta ese momento se había identificado que aproximadamente 23 personas fueron ejecutadas en el caserío Jocote Amarillo.”.

“El cantón Cerro Pando, del Municipio de Meanguera, se encontraba ubicado a unos 4 kilómetros al sur del caserío El Mozote, en el Departamento de Morazán.⁴⁵¹ A la llegada de los soldados el 13 de diciembre de 1981, muchas personas ya estaban ocultas en los montes. No obstante, a las 8:00 horas de la mañana se empezó a escuchar el clamor de la gente y los gritos de los niños que permanecían en sus casas, quienes fueron asesinados. Luego las casas fueron quemadas, por lo que muchas de estas personas fueron

⁴⁴⁷ Ibid. Párrafo 112

⁴⁴⁸ Ibid. Párrafo 114

⁴⁴⁹ Ibid. Párrafo 115

⁴⁵⁰ Idem

⁴⁵¹ Ibid. Párrafo 117

encontradas carbonizadas por sus familiares o devoradas por aves de rapiña⁴⁵². Hasta ese momento se había identificado que aproximadamente 141 personas fueron ejecutadas en el cantón Cerro Pando.⁴⁵³ En el contexto de esta masacre, unas 20 personas se refugiaron del operativo en una cueva del Cerro Ortiz, municipio de El Zapotal, pero fueron descubiertas por los soldados a raíz del llanto de un niño, quienes, sin previo aviso, lanzaron una granada dentro de la cueva. Los heridos que podían caminar abandonaron la cueva. Hasta ese momento se había identificado que aproximadamente 15 personas fueron ejecutadas en una cueva del Cerro Ortiz”⁴⁵⁴.

“Debido al temor causado en la población sobreviviente, a la destrucción y quema de viviendas y a la eliminación de sus medios de subsistencia, ocurrieron movimientos masivos de personas a raíz de las masacres del presente caso. Las declaraciones recabadas indican que las personas sobrevivientes se desplazaron internamente y/o partieron a la República de Honduras para refugiarse a los campamentos de Colomancagua.⁴⁵⁵ Los sobrevivientes que salieron a la República de Honduras permanecieron en los campamentos de refugio entre 7 y 9 años. Es así que debido a gestiones de organismos humanitarios, ACNUR y otras instituciones, entre fines de 1989 y febrero de 1990, las personas que se encontraban en Colomancagua fueron repatriadas, asentándose en lo que hoy se conoce como la ciudad Segundo Montes, en el Departamento de Morazán”⁴⁵⁶.

3.7.5. AFECTACIONES DE DERECHOS

“La protección activa del derecho a la vida por parte del Estado no sólo involucra a sus legisladores, sino a toda institución estatal y a quienes deben resguardar la seguridad, sean éstas sus fuerzas de policía o sus fuerzas armadas. En razón de lo anterior, los Estados deben adoptar las medidas necesarias, no sólo a nivel legislativo, administrativo y judicial, mediante la emisión de normas penales y el establecimiento de un sistema de justicia para prevenir, suprimir y castigar la privación de la vida como consecuencia de

⁴⁵² Ibid. Párrafo 118

⁴⁵³ Ibid. Párrafo 120

⁴⁵⁴ Ibid. Párrafo 121

⁴⁵⁵ Ibid. Párrafo 123

⁴⁵⁶ Ibid. Párrafo 126

actos criminales, sino también para prevenir y proteger a los individuos de actos criminales de otros individuos e investigar efectivamente estas situaciones”⁴⁵⁷.

“La jurisprudencia constante de esta Corte reconoce que las personas sometidas a privación de libertad que se encuentren bajo la custodia de cuerpos represivos oficiales, agentes estatales o particulares que actúen con su aquiescencia o tolerancia, que impunemente practiquen la tortura y el asesinato representa, por sí mismo, una infracción al deber de prevención de violaciones al derecho a la integridad personal”⁴⁵⁸.

“En el presente caso ha sido establecido y El Salvador ha reconocido que, entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981, la Fuerza Armada de El Salvador -el Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl junto con unidades de la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel y del Centro de Instrucción de Comandos de San Francisco Gotera-, con el apoyo de la Fuerza Aérea salvadoreña, realizó una serie consecutiva de ejecuciones masivas, colectivas e indiscriminadas de personas indefensas en el caserío El Mozote, el cantón La Joya, los caseríos Ranchería, Los Toriles y Jocote Amarillo, así como en el cantón Cerro Pando y en una cueva del Cerro Ortiz, en el marco de una supuesta operación de contrainsurgencia que formaba parte de una política de “tierra arrasada” planificada y ejecutada por el Estado. En efecto, los hechos demuestran que la Fuerza Armada ejecutó a todas las personas que encontraba a su paso: adultos mayores, hombres, mujeres, niñas y niños, mató a los animales, destruyó y quemó cultivos, viviendas, y devastó “de una manera especial [...] lo comunitario”⁴⁵⁹.

“Más allá de la pretendida finalidad del operativo, lo cierto es que estuvo dirigido deliberadamente contra población civil o no combatiente dado que, si bien la zona afectada por el operativo constituía una zona conflictiva con presencia tanto del Ejército como del FMLN, la prueba es clara en cuanto a que al momento de los hechos no había presencia de miembros de la guerrilla ni de personas armadas en los referidos lugares, más aún, teniendo en cuenta que la gran mayoría de las víctimas ejecutadas eran niños y niñas, mujeres –algunas de ellas embarazadas- y adultos mayores. Los últimos listados de víctimas confeccionados por Tutela Legal del Arzobispado, en base a testimonios de

⁴⁵⁷ Ibid. Párrafo 146

⁴⁵⁸ Ibid. Párrafo 149

⁴⁵⁹ Ibid. Párrafo 151

sobrevivientes y familiares, indican 1061 nombres de presuntas víctimas ejecutadas, de las cuales aproximadamente 54% eran niños y niñas, aproximadamente 18% eran mujeres adultas y aproximadamente 10% eran hombres y mujeres adultos mayores de 60 años. Por su parte, en las exhumaciones realizadas en 28 sitios, indicados en su gran mayoría por sobrevivientes y otros testigos, se recuperaron restos correspondientes a un número mínimo de 281 individuos, de los cuales un aproximado de 74% corresponden a niños y niñas menores de 12 años. En particular, en el Sitio 1, conocido como “El Convento” del caserío El Mozote, de 143 individuos identificados, 136 corresponden a niños, niñas y adolescentes, siendo el promedio de edad de 6 años”⁴⁶⁰.

“La cantidad de evidencias balísticas encontradas en los lugares de las ejecuciones demuestra la forma indiscriminada y masiva en que se llevaron a cabo las ejecuciones de personas. Los testigos sobrevivientes mencionan reiteradamente “las balaceras”, “las ametralladoras”, “los disparos constantes”. Además, muchas víctimas fueron degolladas o quemadas aún con vida. Las evidencias físicas de las exhumaciones en el caserío El Mozote confirman las aseveraciones de un asesinato masivo, esto es, de la ocurrencia de una masacre”⁴⁶¹.

“En el presente caso los agentes estatales actuaron de forma deliberada, al planear y ejecutar a través de las estructuras e instalaciones del Estado, la perpetración de siete masacres sucesivas de adultos mayores, hombres, mujeres, niños y niñas indefensos, en el marco de un plan sistemático de represión a que fueron sometidos determinados sectores de la población considerados como apoyo, colaboración o pertenencia a la guerrilla, o de alguna manera contrarios u opositores al gobierno”⁴⁶².

“Por ende, el Estado de El Salvador es responsable por las ejecuciones perpetradas por la Fuerza Armada salvadoreña en las masacres cometidas del 11 al 13 de diciembre de 1981 en el caserío el Mozote, el cantón la Joya, los caseríos Ranchería, Los Toriles y Jocote Amarillo, así como en el cantón Cerro Pando y en una cueva del Cerro Ortiz, en violación del artículo 4 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento. Además, se ha comprobado que dentro de las víctimas ejecutadas se

⁴⁶⁰ Ibid. Párrafo 153

⁴⁶¹ Ibid. Párrafo 154

⁴⁶² Ibid. Párrafo 155

*encontraba un gran número de niños y niñas, por lo que respecto a ellos las violaciones al derecho a la vida ocurren también en relación con el artículo 19 de la Convención. Esta violación se vio agravada respecto de los niños y niñas, así como de las mujeres que se encontraban embarazadas”.*⁴⁶³

Sobre las violaciones sexuales

*“El Tribunal considera razonable otorgar valor en el presente caso a la serie de indicios que surgen del expediente, los cuales permiten inferir la veracidad de la perpetración de violaciones sexuales por parte de militares en contra de mujeres en el caserío El Mozote. Primeramente, a raíz de sus investigaciones, los informes de Tutela Legal del Arzobispado indican que, durante la conducción del operativo en El Mozote, habrían violado a muchas mujeres jóvenes antes de matarlas, principalmente en los cerros “La Cruz” y “El Chingo”. Por otra parte, la declaración de Rufina Amaya refiere que previo a las masacres los efectivos militares se habían asentado en los cerros “La Cruz” y “El Chingo”, lo cual se ve corroborado por los resultados de las inspecciones judiciales en dichos lugares que demostraron la existencia de trincheras en los mismos. Además, la señora Rufina Amaya declaró que el 12 de diciembre de 1981 escuchó gritos de algunas mujeres desde el cerro “El Chingo” que decían “Hay, hay, no nos maten”. Asimismo, durante su participación en la inspección judicial que se realizó en El Mozote indicó que, una vez que se logró esconder tras unos matorrales, logró ver que en la casa del señor Israel Márquez “los soldados estaban violando y dando muertes a un grupo de mujeres”. Las exhumaciones en dicho sitio indicaron que los restos en su gran mayoría pertenecían a individuos de sexo femenino. Adicionalmente, al denunciar los hechos el señor Pedro Chicas señaló que “los mismos soldados, se llevaron a las jóvenes [a los cerros] El Chingo y La Cruz, del mismo Caserío El Mozote, en donde las violaron, asesinandolas posteriormente”.*⁴⁶⁴

“La Corte considera que es inherente a la violación sexual el sufrimiento severo de la víctima, y en términos generales, la violación sexual, al igual que la tortura, persigue, entre otros, los fines de intimidar, degradar, humillar, castigar o controlar a la persona que la sufre. Para calificar una violación sexual como tortura deberá atenderse a la

⁴⁶³ Ibid. Párrafo 156

⁴⁶⁴ Ibid. Párrafo 163

intencionalidad, a la severidad del sufrimiento y a la finalidad del acto, tomando en consideración las circunstancias específicas de cada caso. En este sentido, ha sido reconocido por diversos órganos internacionales que durante los conflictos armados las mujeres y niñas enfrentan situaciones específicas de afectación a sus derechos humanos, como lo son los actos de violencia sexual, la cual en muchas ocasiones es utilizada como un medio simbólico para humillar a la parte contraria o como un medio de castigo y represión. La utilización del poder estatal para violar los derechos de las mujeres en un conflicto interno, además de afectarles a ellas de forma directa, puede tener el objetivo de causar un efecto en la sociedad a través de esas violaciones y dar un mensaje o lección. En particular, la violación sexual constituye una forma paradigmática de violencia contra las mujeres cuyas consecuencias, incluso, trascienden a la persona de la víctima”⁴⁶⁵.

“En cuanto a la alegada violación del artículo 11 de la Convención Americana, en base a los mismos hechos, el Tribunal ya ha precisado que el contenido de dicha norma incluye, entre otros, la protección de la vida privada. Por su parte, el concepto de vida privada es un término amplio no susceptible de definiciones exhaustivas, pero que comprende, entre otros ámbitos protegidos, la vida sexual y el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos. La Corte estima que las violaciones sexuales perpetradas contra las mujeres jóvenes en el caserío El Mozote vulneraron valores y aspectos esenciales de la vida privada de las mismas, supusieron una intromisión en su vida sexual y anularon su derecho a tomar libremente las decisiones respecto con quien tener relaciones sexuales, perdiendo de forma completa el control sobre sus decisiones más personales e íntimas, y sobre las funciones corporales básicas”⁴⁶⁶.

“La Corte concluye que el Estado de El Salvador es responsable por la violación de los artículos 5.2 y 11.2 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las mujeres que fueron víctimas de violaciones sexuales en el caserío El Mozote.”⁴⁶⁷

DERECHOS A LAS GARANTÍAS JUDICIALES, A LA PROTECCIÓN JUDICIAL Y A LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y DE EXPRESIÓN EN RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES DE RESPETAR Y

⁴⁶⁵ Ibid. Párrafo 165

⁴⁶⁶ Ibid. Párrafo 166

⁴⁶⁷ Ibid. Párrafo 203 - 206

GARANTIZAR LOS DERECHOS Y EL DEBER DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO Y ARTÍCULOS 1, 6 Y 8 DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA Y 7.B) DE LA CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ

“Debido a que el conflicto armado interno se encontraba en curso, al temor y a la desconfianza hacia las instituciones estatales, las víctimas sobrevivientes y los familiares de las víctimas ejecutadas no denunciaron los hechos del presente caso ante las instancias correspondientes hasta el mes de octubre de 1990”⁴⁶⁸.

“La denuncia inicial fue presentada el 26 de octubre de 1990 por el señor Pedro Chicas Romero ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, donde denunció los hechos ocurridos los días diez y once de diciembre en el caserío El Mozote, el día once de diciembre en el cantón de La Joya, el día doce de diciembre en los caseríos Ranchería y Los Toriles, y el día trece de diciembre en el caserío Jocote Amarillo y en los cantones Guacamaya y Cerro Pando, todos del año mil novecientos ochenta y uno. Ese mismo día ratificó su denuncia ante el referido Juzgado”⁴⁶⁹.

“El 3 de noviembre de 1990 el Fiscal Específico acreditado en el proceso solicitó al Juez de la causa una serie de medidas de prueba, entre las cuales, figuraba la práctica de una inspección y exhumación, y que se librara oficio al Presidente de la República y Comandante General de la Fuerza Armada a fin de que se proporcionara los nombres de los Jefes y Oficiales que se encontraban al mando de la operación militar en los lugares en donde se ubicaba la escena del delito”⁴⁷⁰.

“El 9 de noviembre de 1990 se negó al Fiscal comisionado para el caso la solicitud de librar oficio al Poder Ejecutivo con el fin de obtener información sobre los jefes y oficiales al mando de las operaciones bajo el argumento de “no estar establecido en autos que hayan sido miembros del ej[é]rcito Nacional quienes participaron en el hecho delictivo que aqu[í] se investiga y que el uniforme verde lo utilizan tanto miembros del ejército Nacional como los miembros del F.M.L.N., as[i] mismo no es prueba suficiente el hecho de que los testigos y ofendido digan que los soldados les dec[í]an a ellos que eran del

⁴⁶⁸ Ibid. Párrafo 210

⁴⁶⁹ Ibid. Párrafo 211

⁴⁷⁰ Ibid. Párrafo 213

Batallón Atlacatl, pues tal afirmación la pudo haber hecho tambi[é]n miembros de grupos terroristas, haci[é]ndose pasar por soldados del Ej[é]rcito Nacional”. Sin embargo, en la misma resolución y a pesar de declarar sin lugar la solicitud del Fiscal, el Juzgado Segundo ordenó librar “oficio al señor Comandante General de la Fuerza Armada, a efecto de que informe a este Tribunal lo que Unidad Militar del Ejército Nacional, realizó operaciones militares en diciembre del año 1981, en la población de Meanguera y precisamente en el Cantón el Mozote y lugares circunvecinos; caso de que se hubiere realizado operación alguna en dicho lugar”⁴⁷¹

“Por otro lado, ese mismo 9 de noviembre de 1990 el Juzgado Segundo ordenó la práctica de algunas diligencias, entre ellas, la inspección en el lugar de los hechos y la exhumación de los cadáveres. Sin embargo, recién el 19 de junio de 1991 se fijó fecha para dicha diligencia para el 23 de julio de ese año. Al respecto, el Juzgado Segundo envió un oficio al Director del Instituto de Medicina Legal “Dr. Roberto Masferrer” solicitándole colaboración para la práctica de exhumaciones y autopsias. En respuesta, el Director de dicho Instituto informó al Juzgado sobre la imposibilidad de hacerse presentes debido a que el tiempo era muy corto para preparar una exhumación; a que debían contactarse con la Cruz Roja Internacional; y a que la calendarización de exhumaciones se encontraba saturada para esa semana. Por tal motivo, se suspendieron las diligencias mencionadas hasta nueva fecha”⁴⁷².

“Por su parte, el 25 de noviembre de 1991 la Fiscalía sostuvo que “[e]n la zona donde ha de llevarse a cabo la diligencia ordenada [...] se tiene conocimiento de que se encuentra minada, y a su vez, de que es conflictiva por los enfrentamientos armados que allí se dan” y solicitó, entre otros, que se “libr[ara] oficio al Ministerio de Defensa y Seguridad Pública, con el objeto de que proced[iera] a ‘Barrer las Minas’ en la zona”. El 25 de marzo de 1992 el Jefe de Observadores Militares y Comandante de la División Militar de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en el Salvador (ONUSAL) certificó que el 7 de marzo de ese año miembros del Ejército Nacional para la Democracia (END/FMLN), acompañados por dos observadores militares, realizaron una búsqueda de las probables minas depositadas durante el conflicto en el área de El Mozote, y

⁴⁷¹ Ibid. Párrafo 214

⁴⁷² Ibid. Párrafo 215

concluyeron que dichas minas habían sido retiradas en su totalidad y que, consecuentemente, la zona se hallaba totalmente libre de dichos artefactos.”⁴⁷³.

“El 7 de mayo de 1992 el Juzgado Segundo emitió una resolución disponiendo la práctica de la Inspección de Ley en los lugares donde “se dice ocurri[eron los] hechos de sangre que se investiga[n]”, y estableciendo un orden de lugares a ser inspeccionados con el respectivo calendario. Asimismo, se dispuso a invitar a varias autoridades, medios de comunicación y organismos internacionales. Las primeras inspecciones se realizaron el 27 de mayo de 1992 en el caserío El Mozote. Posteriormente, el 3, 10 y 17 de junio de 1992 se realizaron respectivamente las inspecciones en el cerro “El Chingo”, en el cerro “La Cruz” y en el cantón de La Joya. Esta última se suspendió y fue continuada hasta el 1 de julio del mismo año, lo que causó que el resto de las inspecciones ordenadas por el Juez de la causa se atrasaran. Posteriormente, el 8, 15, 22 y 29 de julio, y 12 de agosto de 1992 se realizaron las inspecciones en el cantón Guacamaya, en los caseríos Ranchería, Los Toriles y Jocote Amarillo y en el cantón Cerro Pando, respectivamente. Asimismo, el Juez de la causa recibió tres declaraciones el 2 de junio y dos más el 21 de agosto de 1992”⁴⁷⁴.

“Durante las inspecciones realizadas en El Mozote, La Joya, Ranchería y Cerro Pando se encontraron osamentas las cuales fueron levantadas por los peritos de la Comisión de Hechos Delictivos, y remitidas al Instituto de Medicina Legal”⁴⁷⁵.

“Entre agosto del año 1992 y septiembre del año 1993 –fecha del dictado de la resolución de sobreseimiento en aplicación de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz (infra párr. 276)-, no se realizó ninguna otra diligencia de investigación, a excepción de las exhumaciones”⁴⁷⁶.

“Con posterioridad a la decisión de sobreseimiento, la Asociación Tutela Legal del Arzobispado promovió nuevas diligencias de exhumación de víctimas ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera. En consecuencia, los diferentes Jueces a cargo de la causa autorizaron el desarrollo de las exhumaciones en los años 2000, 2001, 2003 y 2004 sólo a efecto de que una vez recuperados los restos y realizado el

⁴⁷³ Ibid. Párrafo 221

⁴⁷⁴ Ibid. Párrafo 227

⁴⁷⁵ Ibid. Párrafo 228

⁴⁷⁶ Ibid. Párrafo 229

análisis de identificación se autorice la restitución de los mismos a sus familiares para sepultarlos en el lugar que estimen conveniente y, en consecuencia, el Equipo Argentino de Antropología Forense pudo retomar sus trabajos forenses”⁴⁷⁷.

“La obligación de investigar violaciones de derechos humanos es una de las medidas positivas que deben adoptar los Estados para garantizar los derechos reconocidos en la Convención. Desde su primera sentencia esta Corte ha destacado la importancia del deber estatal de investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos. Es así que en casos en que se ha establecido que ocurrieron ejecuciones extrajudiciales es fundamental que los Estados investiguen efectivamente la privación del derecho a la vida reconocido en el artículo 4 de la Convención y determinen las responsabilidades de todos los autores y partícipes, especialmente cuando están involucrados agentes estatales. De igual forma, la obligación de garantizar los derechos reconocidos en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana implica el deber del Estado de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, la cual se ve reforzada por lo dispuesto en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que obligan al Estado a “tomar [...] medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción”. En casos de violencia contra la mujer las obligaciones generales establecidas en la Convención Americana se complementan y refuerzan con aquellas derivadas de la Convención de Belém do Pará, que obliga de manera específica en su artículo 7.b) a los Estados Partes a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.”⁴⁷⁸.

“Ahora bien, la obligación de investigar, como elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos afectados, adquiere una particular y determinante intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados, como en casos de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas como parte de un patrón sistemático o práctica aplicada o tolerada por el Estado o en contextos de ataques masivos y sistemáticos o generalizados hacia algún sector de la población, pues la necesidad imperiosa de prevenir la repetición de tales hechos depende, en buena medida, de que se evite su impunidad y se satisfaga las expectativas de las víctimas y la sociedad en su conjunto de acceder al conocimiento de la

⁴⁷⁷ Ibid. Párrafo 234

⁴⁷⁸ Ibid. Párrafo 243

verdad de lo sucedido. La eliminación de la impunidad, por todos los medios legales disponibles, es un elemento fundamental para la erradicación de las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos”⁴⁷⁹.

“Ha sido probado y reconocido por el Estado que los hechos del presente caso se refieren, entre otros, a ejecuciones extrajudiciales masivas, a actos de tortura y de violencia contra la mujer, así como a desplazamientos forzados, cometidos en el contexto del conflicto armado interno en El Salvador y como parte de una política planificada por el Estado contra la población civil perteneciente a zonas asociadas con la guerrilla”⁴⁸⁰.

“Este Tribunal nota que, de conformidad con la Convención Americana, vigente al momento de las masacres, el Estado tenía la obligación de investigar con la debida diligencia todos esos hechos, obligación que se mantiene vigente en la actualidad. Dicha obligación fue reafirmada por el Estado con motivo del depósito del instrumento de ratificación de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura el 5 de diciembre de 1994 y, posteriormente, con el de la Convención de Belém do Pará el 26 de enero de 1996, por lo que el Estado debía velar por su cumplimiento a partir de esos momentos, aún cuando éstas no habían sido adoptadas por el Estado cuando las masacres ocurrieron”⁴⁸¹.

“Dada su importancia, la obligación de investigar en el presente caso no puede ser ejecutada de cualquier manera, sino que debe realizarse de acuerdo a los estándares establecidos por las normas y la jurisprudencia internacionales que caracterizan a las investigaciones de graves violaciones a los derechos humanos, lo cual supone, en primer término, generar un marco normativo interno adecuado y/u organizar el sistema de administración de justicia de forma tal que su funcionamiento asegure la realización de investigaciones ex officio, sin dilación, serias, imparciales y efectivas”⁴⁸².

“El deber de investigar es una obligación de medios y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses

⁴⁷⁹ Ibid. Párrafo 244

⁴⁸⁰ Ibid. Párrafo 245

⁴⁸¹ Ibid. Párrafo 246

⁴⁸² Ibid. Párrafo 247

particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas, de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios”⁴⁸³.

*“De igual modo, dicho deber impone la remoción de todo obstáculo de jure y de facto que impida la investigación y juzgamiento de los hechos y, en su caso, la sanción de todos los responsables de las violaciones declaradas así como la búsqueda de la verdad. En efecto, si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablece, en cuanto sea posible, a las víctimas en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción”.*⁴⁸⁴

*“En el presente caso fue demostrado que en enero de 1982 se dio a conocer la posible ocurrencia de una masacre, perpetrada por las propia Fuerza Armada, sin que las autoridades correspondientes realizaran investigación alguna. Por el contrario, como fue establecido, las autoridades salvadoreñas negaron y encubrieron en forma sistemática los hechos. Fue recién en el año 1990, cuando volvieron a El Salvador la gran mayoría de sobrevivientes desplazados forzosamente, que uno de los sobrevivientes pudo interponer una denuncia. Es decir, por nueve años el Estado omitió iniciar una investigación que garantizara la pronta obtención y preservación de pruebas que permitieran establecer lo sucedido”.*⁴⁸⁵

*“En virtud de lo anterior, la Corte concluye que, al menos a partir de 1982, el Estado debió iniciar ex officio y sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva de todos los hechos de las masacres relacionados tanto con la vulneración de la vida, así como respecto a otras afectaciones específicas contra la integridad personal, tales como las supuestas torturas y actos de violencia contra la mujer con una perspectiva de género, y de conformidad con los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, y las obligaciones específicas dispuestas en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y 7.b) de la Convención de Belém do Pará”.*⁴⁸⁶

⁴⁸³ Ibid. Párrafo 248

⁴⁸⁴ Ibid. Párrafo 249

⁴⁸⁵ Ibid. Párrafo 251

⁴⁸⁶ Ibid. Párrafo 252

*“La Corte observa que tanto los representantes como la Comisión han indicado que en el curso de la investigación se han producido una serie de actuaciones u omisiones de las autoridades estatales que habrían configurado una falta de debida diligencia y denegación de justicia. La Corte ha constatado que una evaluación del expediente judicial, así como de otros documentos que constan en el acervo probatorio, permiten concluir que efectivamente en los aproximadamente tres años que permaneció la investigación abierta hasta el sobreseimiento de la causa en aplicación de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz se verificaron una serie de obstáculos fácticos que han impedido la investigación efectiva, juzgamiento y, en su caso, sanción de los responsables”.*⁴⁸⁷

*“El Estado no fue diligente en la recaudación de la prueba tendiente a identificar a las personas involucradas. La Corte observa que, de acuerdo con los hechos establecidos, por lo menos entre 1000 a 2000 efectivos militares participaron en la ejecución de las masacres, esto sin contar a otros autores materiales, intelectuales o en general partícipes de ésta. Además, no se realizó medida alguna para inspeccionar material hemerográfico a través del cual pudiera eventualmente obtenerse información sobre las personas que participaron en los operativos militares que se realizaron en el lugar y fecha de los hechos ni se incorporó oportunamente a las investigaciones las secciones correspondientes del Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador en las que se señala los nombres de algunos de los militares que participaron en los operativos. En efecto, tanto en el informe de la Comisión de la Verdad de marzo de 1993 como en las investigaciones desarrolladas por Tutela Legal del Arzobispado que fueron hechas públicas en 1992, cuyas copias fueron aportadas a la causa por Tutela Legal del Arzobispado en el año 2006, se indican las unidades militares que habrían participado en los operativos, así como se habrían identificado los nombres de algunas autoridades a cargo de las mismas, permitiendo establecer una nómina de participantes de las masacres, sobre todo aquellos que tuvieron posiciones de decisión, sin que dicha información haya sido utilizada dentro de alguna línea de investigación ni que se vinculara a proceso y citara a declarar a ningún miembro de la Fuerza Armada”.*⁴⁸⁸

“En casos como el presente, la Corte ha considerado que las autoridades encargadas de la investigación tienen el deber de asegurar que en el curso de las mismas se valoren los

⁴⁸⁷ Ibid. Párrafo 255

⁴⁸⁸ Ibid. Párrafo 256

patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos. En esta línea, la Corte considera que las autoridades estatales están obligadas a colaborar en la recaudación de la prueba para alcanzar los objetivos de la investigación y abstenerse de realizar actos que impliquen obstrucciones para la marcha del proceso investigativo. En efecto, el Estado no puede ampararse en la falta de prueba de la existencia de los documentos solicitados sino que, por el contrario, debe fundamentar la negativa a proveerlos, demostrando que ha adoptado todas las medidas a su alcance para comprobar que, efectivamente, la información solicitada no existía. En este sentido, en caso de violaciones a los derechos humanos, el Tribunal ya ha señalado que “las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación o proceso pendientes”⁴⁸⁹.

“El Estado dilató y obstaculizó el inicio de los trabajos de exhumación, lo cual se vincula tanto con la recaudación de la prueba como con la posibilidad de entregar los restos a los familiares a fin de que éstos puedan cerrar su proceso de duelo. La Corte reitera que el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación –y en algunos casos, la imposibilidad– para obtener las pruebas y/o testimonios, dificultando la práctica de diligencias probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de investigación, identificar a los posibles autores y partícipes, y determinar las eventuales responsabilidades penales”⁴⁹⁰.

“La Corte nota que el sobreseimiento definitivo de la causa “a favor de cualquier persona que haya pertenecido al Batallón Atlacatl en esa época que ocurrió el hecho” se dio sin que se haya individualizado ni vinculado formalmente a proceso a persona alguna y en aplicación de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, frustrando en consecuencia cualquier aspiración de las víctimas a que se haga efectiva la determinación de los hechos que se investigaban y, en su caso, de las correspondientes responsabilidades penales en un plazo razonable”⁴⁹¹.

⁴⁸⁹ Ibid. Párrafo 257

⁴⁹⁰ Ibid. Párrafo 262

⁴⁹¹ Ibid. Párrafo 263

*“El 26 de julio de 1990 las partes firmaron en San José, Costa Rica, el primer Acuerdo en el proceso de negociación relacionado con el respeto irrestricto a los derechos humanos, en el cual convinieron que “[s]e tomar[ían] de inmediato todas las acciones y medidas necesarias para evitar todo tipo de hechos o prácticas que atenten contra la vida, la integridad, la seguridad y la libertad de las personas [así como] para erradicar toda práctica de desapariciones y secuestros. Se dar[ía] toda prioridad a la investigación de los casos de esta naturaleza que pudieran presentarse, así como a la identificación y sanción de quienes resultaren culpables”. Dicho acuerdo también fue la base para la creación de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL), a través de la Resolución 693 de 20 de mayo de 1991 del Consejo de Seguridad, la cual se instaló efectivamente el 26 de julio de 1991, con el fin de verificar los acuerdos políticos a que llegaran las partes en el conflicto interno”.*⁴⁹²

*“El Acuerdo final de paz que puso término al conflicto armado de 12 años fue firmado 16 de enero de 1992, en el Castillo de Chapultepec de la Ciudad de México, D.F. El Acuerdo de Paz de El Salvador reafirmó la necesidad de superar la impunidad”.*⁴⁹³

*“La Comisión de la Verdad describió en su informe hecho público el 15 de marzo de 1993 los patrones de violencia durante el conflicto armado, tanto de agentes del Estado como de integrantes del FMLN, e incluyó aproximadamente 30 casos ilustrativos de los mismos”.*⁴⁹⁴

“El 23 de enero de 1992, tras la suscripción de los Acuerdos de Paz de Chapultepec el 16 de enero de 1992, la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador dictó el Decreto Legislativo N° 147 denominado “Ley de Reconciliación Nacional”. El artículo 1 de dicho Decreto establecía: “[s]e concede amnistía a favor de todas las personas que hayan participado como autores inmediatos, mediatos o cómplices en la comisión de delitos políticos comunes conexos con éstos y en delitos comunes cometidos por un número de personas que no baje de veinte, antes del 1° de enero de 1992, exceptuándose, en todo caso, el delito común de secuestro, contemplado en el Art[ículo] 220 del Código Penal”. Asimismo, en su artículo 6 contenía una cláusula expresa que indicaba que: “[n]o

⁴⁹² Ibid. Párrafo 269

⁴⁹³ Ibid. Párrafo 272

⁴⁹⁴ Ibid. Párrafo 273

gozarán de esta gracia las personas que, según el informe de la Comisión de la Verdad, hubieren participado en graves hechos de violencia ocurridos desde el 1° de enero de 1980, cuya huella sobre la sociedad, reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad, independientemente del sector a que pertenecieren en su caso”⁴⁹⁵.

“En definitiva, en el presente caso se verificó una instrumentalización del poder estatal como medio y recurso para cometer la violación de los derechos que debieron respetar y garantizar, lo que se ha visto favorecido por una situación de impunidad de esas graves violaciones, propiciada y tolerada por las más altas autoridades estatales que han obstaculizado el curso de la investigación. La Corte advierte que hace más de 19 años que el proceso penal se encuentra archivado debido a la decisión de sobreseimiento definitivo, no habiéndose individualizado, procesado y, eventualmente, sancionado a ninguno de los responsables. En razón de lo anterior, la Corte considera que el Estado no ha llevado a cabo una investigación ex officio, seria, diligente y exhaustiva, en un plazo razonable, de todos los hechos concernientes a las masacres de El Mozote y lugares aledaños. Por tal motivo, para la Corte resulta imprescindible que el Estado revierta a la mayor brevedad posible las condiciones de impunidad verificadas en el presente caso a través de la remoción de todos los obstáculos, de facto y de jure, que la propiciaron y mantienen”⁴⁹⁶.

“Por ende, el Estado es responsable por la violación de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, y por la violación de las obligaciones establecidas en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y 7.b) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, en perjuicio de las víctimas sobrevivientes y los familiares de las víctimas ejecutadas del presente caso, en sus respectivas circunstancias”⁴⁹⁷.

⁴⁹⁵ Ibid. Párrafo 274

⁴⁹⁶ Ibid. Párrafo 300

⁴⁹⁷ Ibid. Párrafo 301

3.7.6. PUNTOS RESOLUTIVOS

7. El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, así como por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y 7.b) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, en perjuicio de las víctimas sobrevivientes de las masacres, listadas en el Anexo “B”, así como de los familiares de las víctimas ejecutadas, listadas en el Anexo “C”, de conformidad con lo expuesto en los párrafos 242 a 249, 251 a 252, 255 a 264, 283 a 295, 298 y 299 a 301 de la presente Sentencia.

3.7.7. COMENTARIO

A pesar que en este caso lo que resalta es la matanza de una gran cantidad de personas no podemos dejar de lado que el grupo de personas que ejecutaron la misión de matar previo a ello violaron a muchas mujeres en el interín, o sino fueron violadas y después.

Se debe considerar que el acto de violación no se realiza solo con la intención de agraviar físicamente a la agraviada, sino con la intención de rebajar la autoestima del pueblo al que pertenecen tales mujeres, porque ellas quedan marcadas por lo ocurrido, que inclusive en esa oportunidad se tiene testimonios de personas que refieren como es que mientras se escondían en la selva escuchaban como las mujeres pedían ayuda mientras que eran objeto de violación lo que otorgaba denigración y miedo adicional a las personas que podían escucharlas y sabían que podían tener un futuro, de tal forma que se acredita que la intención de la violación era además la de sojuzgar a los miembros de la población que terminaron matando.

Entonces se entiende el uso de la violación sexual como un acto de tortura no solo para las mujeres sino para aquellos que pueden escuchar como sufren del acto en si mismo las

féminas, más aún si se sabe que ninguna de ellas pudo sobrevivir a los actos de violencia que sufrieron.

De tal forma que más allá de la violación sexual, de la tortura de la que fueron objeto tanto ellas como su familia y la población donde habitaban la última parte de la afectación de derechos de todos los masacrados se da en el momento que no se dio la importancia debida a lo ocurrido, al punto que al inicio el Estado Salvadoreño negó los hechos, demoró para iniciar la investigación, y cuando lo hizo tuvo diversas trabas que ha generado que hasta el día de hoy no se haya sentenciado a una sola persona por la masacre ocurrida, todo lo cual hace ver el punto máximo de violación de derechos que se aprecia respecto de estos hechos , que en especial sufrieron las mujeres quienes no solo esperaron la muerte por el solo hecho de vivir en el pueblo donde se presumía que apoyaban a grupos paramilitares, sino previo a ello fueron violadas sexualmente, lo que denota la cosificación de ellas no solo al ser utilizadas como objeto sexual, sino para amedrentar a los que también formaban parte de su comunidad, lo que hace de los actos ocurridos aún más deleznable.

3.8. GONZÁLEZ Y OTRAS (“CAMPO ALGODONERO”) VS. MÉXICO

3.8.1. FECHA: SENTENCIA DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2009

3.8.2. PRESENTACION DEL CASO ANTE LA CORTE POR LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

PAIS DENUNCIADO	Estados Unidos Mexicanos
DERECHOS AFECTADOS PARA LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS	Derechos consagrados en los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 19 (Derechos del Niño) y 25 (Protección Judicial) de la Convención, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la misma, y el incumplimiento de las obligaciones que derivan del artículo 7 de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante “Convención Belém do Pará”). La demanda fue notificada al Estado el 21 de diciembre de 2007 y a los representantes el 2 de enero de 2008”.

“La demanda se relaciona con la supuesta responsabilidad internacional del Estado por “la desaparición y ulterior muerte” de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez (en adelante “las jóvenes González, Herrera y Ramos”), cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonerero de Ciudad Juárez el día 6 de noviembre de 2001. Se responsabiliza al Estado por “la falta de medidas de protección a las víctimas, dos de las cuales eran menores de edad; la falta de prevención de estos crímenes, pese al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género que había dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas; la falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición [...]; la falta de debida diligencia

en la investigación de los asesinatos [...], así como la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada”.⁴⁹⁸

3.8.3. HECHOS

“Desde 1993 existe un aumento significativo en el número de desapariciones y homicidios de mujeres y niñas en Ciudad Juárez, en especial se aprecia la situación particularmente crítica de la violencia contra las mujeres imperante desde 1993 y la deficiente respuesta del Estado ante estos crímenes”⁴⁹⁹. El aumento en lo referente a las mujeres “es anómalo en varios aspectos”, ya que: i) en 1993 se incrementaron notablemente los asesinatos de mujeres, ii) los coeficientes de homicidios de mujeres se duplicaron en relación con los de los hombres, y iii) el índice de homicidios correspondiente a mujeres en Ciudad Juárez es desproporcionadamente mayor que el de ciudades fronterizas en circunstancias análogas.⁵⁰⁰ Las víctimas eran mujeres jóvenes de 15 a 25 años de edad, estudiantes o trabajadoras de maquilas o de tiendas u otras empresas locales, y que algunas vivían en Ciudad Juárez desde hacía relativamente poco tiempo, predominantemente mujeres jóvenes, incluyendo niñas, trabajadoras –sobretudo de maquilas-, de escasos recursos, estudiantes o migrantes”⁵⁰¹.

“Un número considerable de los homicidios presentaron signos de violencia sexual, diversos informes establecen los siguientes factores en común en varios de los homicidios: las mujeres son secuestradas y mantenidas en cautiverio, sus familiares denuncian su desaparición y luego de días o meses sus cadáveres son encontrados en terrenos baldíos con signos de violencia, incluyendo violación u otros tipos de abusos sexuales, tortura y mutilaciones.”⁵⁰².

“El tema de género es el común denominador de la violencia en Ciudad Juárez, la cual “sucede como culminación de una situación caracterizada por la violación reiterada y

⁴⁹⁸ Sentencia Caso Gonzales y otras (Campo Algodonero) vs. México del 16 de noviembre del 2009, Párrafo 2

⁴⁹⁹ Ibid. Párrafo 114

⁵⁰⁰ Ibid. Párrafo 117

⁵⁰¹ Ibid. Párrafo 122 - 123

⁵⁰² Ibid. Párrafo 125

sistemática de los derechos humanos”. Alegaron que “niñas y mujeres son violentadas con crueldad por el solo hecho de ser mujeres y sólo en algunos casos son asesinadas como culminación de dicha violencia pública y privada”.⁵⁰³ El Estado explicó que desde 1965 empezó en Ciudad Juárez el desarrollo de la industria maquiladora, el cual se intensificó en 1993 con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Señaló que, al dar preferencia a la contratación de mujeres, las maquiladoras causaron cambios en la vida laboral de éstas, lo cual impactó también su vida familiar porque “los roles tradicionales empezaron a modificarse, al ser ahora la mujer la proveedora del hogar”. Esto, según el Estado, llevó a conflictos al interior de las familias porque la mujer empezó a tener la imagen de ser más competitiva e independiente económicamente. Además, “[e]ste cambio social en los papeles de las mujeres no ha sido acompañado de un cambio en las actitudes y las mentalidades tradicionales -el cariz patriarcal- manteniéndose una visión estereotipada de los papeles sociales de hombres y mujeres”⁵⁰⁴.

“La Corte toma nota que a pesar de la negación del Estado en cuanto a la existencia de algún tipo de patrón en los motivos de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, éste señaló ante el CEDAW que “están influenciados por una cultura de discriminación contra la mujer basada en una concepción errónea de su inferioridad”⁵⁰⁵.

“Los motivos y los perpetradores de los homicidios en Ciudad Juárez son diversos, muchos casos tratan de violencia de género que ocurre en un contexto de discriminación sistemática contra la mujer, ello porque el género de la víctima parece haber sido un factor significativo del crimen, influyendo tanto en el motivo y el contexto del crimen como en la forma de la violencia a la que fue sometida y es que “no se trata de casos aislados, esporádicos o episódicos de violencia, sino de una situación estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades” y que estas situaciones de violencia están fundadas “en una cultura de violencia y discriminación basada en el género”⁵⁰⁶.

⁵⁰³ Ibid. Párrafo 128

⁵⁰⁴ Ibid. Párrafo 129

⁵⁰⁵ Ibid. Párrafo 132

⁵⁰⁶ Ibid. Párrafo 133

“Otro factor que caracteriza estos homicidios de mujeres es su falta de esclarecimiento y las irregularidades en las investigaciones respectivas, lo que, según ellos, ha generado un clima de impunidad.”⁵⁰⁷ Las irregularidades en las investigaciones y en los procesos incluyen la demora en la iniciación de las investigaciones, la lentitud de las mismas o inactividad en los expedientes, negligencia e irregularidades en la recolección y realización de pruebas y en la identificación de víctimas, pérdida de información, extravío de piezas de los cuerpos bajo custodia del Ministerio Público, y la falta de contemplación de las agresiones a mujeres como parte de un fenómeno global de violencia de género”⁵⁰⁸.

“A ello se agrega que las actitudes de las autoridades estatales frente a los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez eran notoriamente discriminatorias y dilatorias, situación que la Comisión describió como un “alarmante patrón de respuesta y concepciones estereotipadas de las mujeres desaparecidas”. En particular, el patrón “se manifestaba en la percepción de los funcionarios estatales que la búsqueda y protección de mujeres reportadas como desaparecidas no era importante” e implicaba que en un principio las autoridades se negaban a investigar.”⁵⁰⁹ La respuesta de funcionarios estatales frente a los crímenes fue influenciada por un contexto de discriminación basada en género”⁵¹⁰. “Al principio es indudable que estos hechos no conmovieron mucho a los agentes de la policía y a los procuradores, quienes llegaron incluso a reprochar a las mujeres su presunta falta de moralidad”⁵¹¹.

“Laura Berenice Ramos Monárrez tenía 17 años de edad y era estudiante del quinto semestre de la preparatoria. La última noticia que se conocía de ella era una llamada que hizo a una amiga el sábado 22 de septiembre de 2001 para avisar que estaba lista para ir a una fiesta. La denuncia instaurada señalaba que desapareció el martes 25 de septiembre de 2001, sin que se ofrezcan más detalles”⁵¹².

⁵⁰⁷ Ibid. Párrafo 146

⁵⁰⁸ Ibid. Párrafo 150

⁵⁰⁹ Ibid. Párrafo 151

⁵¹⁰ Ibid. Párrafo 153

⁵¹¹ Ídem

⁵¹² Ibid. Párrafo 165

“Claudia Ivette González tenía 20 años de edad y trabajaba en una empresa maquiladora. Según una amiga cercana, “casi siempre salía con el tiempo limitado ya que le ayudaba a su hermana con el cuidado de su menor hija, motivo por el cual llegaba a veces tarde” al trabajo. El 10 de octubre de 2001 llegó dos minutos tarde a la maquila, por lo que le fue impedida la entrada. Ese mismo día desapareció”⁵¹³.

“Esmeralda Herrera Monreal tenía 15 años de edad y contaba con “grado de instrucción tercero de secundaria”. Desapareció el lunes 29 de octubre del 2001, luego de salir de la casa en la que trabajaba como empleada doméstica”⁵¹⁴.

“La Comisión alegó que “cuando se denunció cada desaparición, los familiares recibieron comentarios por parte de agentes estatales sobre la conducta de sus hijas que consideran influenciaron la inacción estatal posterior”.⁵¹⁵ “[s]e determina[ba] la responsabilidad o no de la víctima, de acuerdo al rol social que a juicio del investigador tenía en la sociedad. Esto quiere decir que si la mujer asesinada le gustaba divertirse, salir a bailar, tenía amigos y una vida social, es considerada en parte, como responsable por lo que sucedió” “[e]n ese entonces la autoridad estigmatizaba a las víctimas de desaparición por el hecho de ser mujeres”, siendo el pretexto que “andaban con el novio” o “andaban de locas”, “[s]e llegó también a culpar a las madres por permitir que sus hijas anduvieran solas o que salieran por la noche”⁵¹⁶. funcionarios y autoridades “minimizaban el problema” y denotaban “ausencia de interés y vocación por atender y remediar una problemática social grave”⁵¹⁷.

“De otra parte, la Corte constata que el formato en el que los familiares denunciaban la desaparición requería información sobre las “preferencias sexuales” de las víctimas.⁵¹⁸ El Tribunal considera que en el presente caso, los comentarios efectuados por funcionarios en el sentido de que las víctimas se habrían ido con su novio o que tendrían una vida reprochable y la utilización de preguntas en torno a la preferencia sexual de las víctimas

⁵¹³ Ibid. Párrafo 166

⁵¹⁴ Ibid. Párrafo 167

⁵¹⁵ Ibid. Párrafo 196

⁵¹⁶ Ibid. Párrafo 202

⁵¹⁷ Ibid. Párrafo 203

⁵¹⁸ Ibid. Párrafo 207

*constituyen estereotipos. De otra parte, tanto las actitudes como las declaraciones de los funcionarios demuestran que existía, por lo menos, indiferencia hacia los familiares de las víctimas y sus denuncias”.*⁵¹⁹

*“El 6 de noviembre de 2001 se encontraron los cuerpos de tres mujeres en un campo algodonero. Estas tres mujeres fueron posteriormente identificadas como las jóvenes Ramos, González y Herrera. El 7 de noviembre de 2001, en un lugar cercano dentro del mismo campo algodonero, fueron encontrados los cuerpos de otras cinco mujeres. Los cuerpos de las jóvenes Herrera, González y Ramos fueron objeto de un particular ensañamiento por parte de los perpetradores de los homicidios. “[l]a forma en que fueron encontrados los cuerpos [de las tres víctimas] sugiere que fueron violadas y abusadas con extrema crueldad”.*⁵²⁰

*“La Corte debe tener en consideración los diversos factores que se dieron respecto a la desaparición de las víctimas. En concreto, que el trato sufrido durante el tiempo que permanecieron secuestradas antes de su muerte con toda probabilidad les causó, al menos, un sufrimiento psicológico agudo, y que muy posiblemente los hechos acaecidos antes de su muerte, al igual que en el caso de la Esmeralda Herrera Monreal, tuvieron un móvil sexual, pues las jóvenes fueron encontradas semi desnudas en la parte inferior del cuerpo y Laura Berenice Ramos Monárrez con la blusa y el brassier levantadas por encima de los senos. Las tres víctimas estuvieron privadas de su libertad antes de su muerte. Por las deficiencias en los certificados de autopsia, el Tribunal no puede determinar con certeza cuanto tiempo duró su secuestro”.*⁵²¹

*“Las tres víctimas de este caso eran mujeres jóvenes, de escasos recursos, trabajadoras o estudiantes, como muchas de las víctimas de los homicidios en Ciudad Juárez. Las mismas fueron hechas desaparecer y sus cuerpos aparecieron en un campo algodonero. Se ha tenido como probado que sufrieron graves agresiones físicas y muy probablemente violencia sexual de algún tipo antes de su muerte.”*⁵²² Las jóvenes González, Ramos y

⁵¹⁹ Ibid. Párrafo 208

⁵²⁰ Ibid. Párrafo 210

⁵²¹ Ibid. Párrafo 220 - 221

⁵²² Ibid. Párrafo 230

Herrera fueron víctimas de violencia contra la mujer según la Convención Americana y la Convención Belém do Pará. Por los mismos motivos, el Tribunal considera que los homicidios de las víctimas fueron por razones de género y están enmarcados dentro de un reconocido contexto de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez. Corresponde ahora analizar si la violencia perpetrada contra las víctimas, que terminó con sus vidas, es atribuible al Estado.”⁵²³

“Como parte de dicha obligación, el Estado está en el deber jurídico de “prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación”. Lo decisivo es dilucidar “si una determinada violación [...] ha tenido lugar con el apoyo o la tolerancia del poder público o si éste ha actuado de manera que la trasgresión se haya cumplido en defecto de toda prevención o impunemente”⁵²⁴.

“La Corte reitera que no basta que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre”⁵²⁵.

3.8.4. AFECTACION DE DERECHOS

DEBER DE PREVENCIÓN DE LOS DERECHOS A LA LIBERTAD PERSONAL, INTEGRIDAD PERSONAL Y VIDA DE LAS VÍCTIMAS

“Desde 1992 el CEDAW estableció que “los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas”. En 1993 la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de la Asamblea General de las Naciones Unidas instó a los Estados a “[p]roceder con la

⁵²³ Ibid. Párrafo 231

⁵²⁴ Ibid. Párrafo 236

⁵²⁵ Ibid. Párrafo 243

debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares”⁵²⁶.

“Los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. En particular, deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias. La estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer. Asimismo, los Estados deben adoptar medidas preventivas en casos específicos en los que es evidente que determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de violencia. Todo esto debe tomar en cuenta que en casos de violencia contra la mujer, los Estados tienen, además de las obligaciones genéricas contenidas en la Convención Americana, una obligación reforzada a partir de la Convención Belém do Pará. La Corte pasará ahora a analizar las medidas adoptadas por el Estado hasta la fecha de los hechos del presente caso para cumplir con su deber de prevención”.⁵²⁷

“Según los hechos del presente caso, las víctimas González, Ramos y Herrera eran mujeres jóvenes de 20, 17 y 15 años respectivamente, todas humildes, una estudiante, las otras dos trabajadoras. Salieron de su casa un día y sus cuerpos fueron encontrados días o semanas más tarde en un campo algodonero con signos de violencia sexual y demás maltratos. En los días entre sus desapariciones y el hallazgo de sus cuerpos, sus madres y familiares acudieron a las autoridades en busca de respuestas, pero se encontraron con juicios de valor respecto al comportamiento de las víctimas y con ninguna acción concreta destinada a encontrarlas con vida aparte de la recepción de declaraciones”.⁵²⁸

“A pesar de que el Estado tenía pleno conocimiento del riesgo que corrían las mujeres de ser objeto de violencia, no demostró haber adoptado medidas efectivas de prevención

⁵²⁶ Ibid. Párrafo 254

⁵²⁷ Ibid. Párrafo 258

⁵²⁸ Ibid. Párrafo 277

*antes de noviembre de 2001 que redujeran los factores de riesgo para las mujeres. Aunque el deber de prevención sea uno de medio y no de resultado, el Estado no ha demostrado que la creación de la FEIHM y algunas adiciones a su marco legislativo, por más que fueran necesarias y demuestren un compromiso estatal, fueran suficientes y efectivas para prevenir las graves manifestaciones de la violencia contra la mujer que se vivía en Ciudad Juárez en la época del presente caso”.*⁵²⁹

*“En el presente caso, existen dos momentos claves en los que el deber de prevención debe ser analizado. El primero es antes de la desaparición de las víctimas y el segundo antes de la localización de sus cuerpos sin vida”.*⁵³⁰

*“Sobre el primer momento –antes de la desaparición de las víctimas- la Corte considera que no puede sino hacer presente que la ausencia de una política general que se hubiera iniciado por lo menos en 1998 –cuando la CNDH advirtió del patrón de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez-, es una falta del Estado en el cumplimiento general de su obligación de prevención.⁵³¹ En cuanto al segundo momento –antes del hallazgo de los cuerpos- el Estado, dado el contexto del caso, tuvo conocimiento de que existía un riesgo real e inmediato de que las víctimas fueran agredidas sexualmente, sometidas a vejámenes y asesinadas. La Corte considera que ante tal contexto surge un deber de debida diligencia estricta frente a denuncias de desaparición de mujeres, respecto a su búsqueda durante las primeras horas y los primeros días. Esta obligación de medio, al ser más estricta, exige la realización exhaustiva de actividades de búsqueda. En particular, es imprescindible la actuación pronta e inmediata de las autoridades policiales, fiscales y judiciales ordenando medidas oportunas y necesarias dirigidas a la determinación del paradero de las víctimas o el lugar donde puedan encontrarse privadas de libertad. Deben existir procedimientos adecuados para las denuncias y que éstas conlleven una investigación efectiva desde las primeras horas. Las autoridades deben presumir que la persona desaparecida está privada de libertad y sigue con vida hasta que se ponga fin a la incertidumbre sobre la suerte que ha corrido”.*⁵³²

⁵²⁹ Ibid. Párrafo 279

⁵³⁰ Ibid. Párrafo 281

⁵³¹ Ibid. Párrafo 282

⁵³² Ibid. Párrafo 283

“México no demostró haber adoptado las medidas razonables, para encontrar a las víctimas con vida. El Estado no actuó con prontitud dentro de las primeras horas y días luego de las denuncias de desaparición, dejando perder horas valiosas. En el período entre las denuncias y el hallazgo de los cuerpos de las víctimas, el Estado se limitó a realizar formalidades y a tomar declaraciones que, aunque importantes, perdieron su valor una vez éstas no repercutieron en acciones de búsqueda específicas. Además, las actitudes y declaraciones de los funcionarios hacia los familiares de las víctimas que daban a entender que las denuncias de desaparición no debían ser tratadas con urgencia e inmediatez llevan al Tribunal razonablemente a concluir que hubo demoras injustificadas luego de las presentaciones de las denuncias de desaparición. Todo esto demuestra que el Estado no actuó con la debida diligencia requerida para prevenir adecuadamente las muertes y agresiones sufridas por las víctimas y que no actuó como razonablemente era de esperarse de acuerdo a las circunstancias del caso para poner fin a su privación de libertad. Este incumplimiento del deber de garantía es particularmente serio debido al contexto conocido por el Estado -el cual ponía a las mujeres en una situación especial de vulnerabilidad- y a las obligaciones reforzadas impuestas en casos de violencia contra la mujer por el artículo 7.b de la Convención Belém do Pará”.⁵³³

“Además, la Corte considera que el Estado no demostró haber adoptado normas o implementado las medidas necesarias, conforme al artículo 2 de la Convención Americana y al artículo 7.c de la Convención Belém do Pará, que permitieran a las autoridades ofrecer una respuesta inmediata y eficaz ante las denuncias de desaparición y prevenir adecuadamente la violencia contra la mujer. Tampoco demostró haber adoptado normas o tomado medidas para que los funcionarios responsables de recibir las denuncias tuvieran la capacidad y la sensibilidad para entender la gravedad del fenómeno de la violencia contra la mujer y la voluntad para actuar de inmediato”.⁵³⁴

“En razón de todo lo expuesto, el Tribunal considera que el Estado violó los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal reconocidos en los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y

⁵³³ Ibid. Párrafo 284

⁵³⁴ Ibid. Párrafo 285

*7.1 de la Convención Americana, en relación con la obligación general de garantía contemplada en el artículo 1.1 y la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contemplada en el artículo 2 de la misma, así como con las obligaciones contempladas en el artículo 7.b y 7.c de la Convención Belém do Pará, en perjuicio de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal”.*⁵³⁵

DEBER DE INVESTIGAR EFECTIVAMENTE LOS HECHOS, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 8.1 Y 25.1 DE LA CONVENCIÓN, DERIVADO DE LA OBLIGACIÓN DE GARANTÍA DE LOS DERECHOS A LA VIDA, INTEGRIDAD PERSONAL Y LIBERTAD PERSONAL

“El deber de investigar es una obligación de medio y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. La obligación del Estado de investigar debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelvan a repetirse. En este sentido, la Corte recuerda que la impunidad fomenta la repetición de las violaciones de derechos humanos”⁵³⁶. Las autoridades estatales que tengan conocimiento del hecho, deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los autores de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales”⁵³⁷.

“De otra parte, la Corte ha advertido que esta obligación se mantiene “cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aún los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado”⁵³⁸.

“La Corte considera que el deber de investigar efectivamente, siguiendo los estándares establecidos por el Tribunal tiene alcances adicionales cuando se trata de una mujer que

⁵³⁵ Ibid. Párrafo 286

⁵³⁶ Ibid. Párrafo 289

⁵³⁷ Ibid. Párrafo 290

⁵³⁸ Ibid. Párrafo 291

*sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeres”.*⁵³⁹

*“La Corte ha especificado los principios rectores que es preciso observar en una investigación cuando se está frente a una muerte violenta. Las autoridades estatales que conducen una investigación de este tipo deben intentar como mínimo, inter alia: i) identificar a la víctima; ii) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte, con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación penal de los responsables; iii) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga; iv) determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte, y v) distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen, se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados”*⁵⁴⁰.

*“Sin embargo, en el presente caso se presentaron irregularidades relacionadas con: i) la falta de precisión de las circunstancias del hallazgo de los cadáveres; ii) la poca rigurosidad en la inspección y salvaguarda de la escena del crimen practicada por las autoridades; iii) el indebido manejo de algunas de las evidencias recolectadas, y iv) los métodos utilizados no fueron acordes para preservar la cadena de custodia.”*⁵⁴¹ Además, la Corte observa que este caso no es el único en el que se han denunciado negligencias en la recolección de evidencias. En efecto, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez indicó que entre 1993 y 2005 frecuentemente “los dictámenes periciales, fundamentalmente los de criminalística de campo, no correspond[ían] en su contenido a las constancias ministeriales practicadas en el lugar de los hechos por el agente del Ministerio Público respectivo”. Además, se cometían muchos errores en la preservación de la escena del crimen, destrucción de evidencias e irregularidades en la preservación y análisis de evidencia”⁵⁴².

⁵³⁹ Ibid. Párrafo 293

⁵⁴⁰ Ibid. Párrafo 300

⁵⁴¹ Ibid. Párrafo 306

⁵⁴² Ibid. Párrafo 307

“La Corte analizará a continuación irregularidades en a) la asignación de los nombres a los cuerpos encontrados, b) la entrega incompleta de los cuerpos sin que existiese una identificación positiva, y c) las controversias relativas a los análisis de ADN”.

“Inicial asignación arbitraria de nombres a los cuerpos: La Comisión y los representantes alegaron que la asignación inicial de los nombres en los cuerpos fue arbitraria. Adicionalmente el testigo Máñez Grijalva declaró que “la identidad de los cuerpos dada por el Procurador se desprendió de la confesión de los detenidos”. Asimismo, el EAAF señaló que se solicitó que “cuatro de las ocho osamentas recuperadas [, incluyendo las tres víctimas, fueran] comparadas [...] sólo con una desaparecida”. “El EAAF agregó que “[l]os oficios en los que se realiza esta solicitud y el expediente consultado no especifican la razón por la que ciertos cuerpos se comparan específicamente [...] sólo con ciertas mujeres desaparecidas a uno y dos días del hallazgo”.⁵⁴³

“Entrega de los cuerpos sin que existiese una identificación positiva: Los estándares internacionales exigen que la entrega de restos ocurra cuando la víctima esté claramente identificada, en el presente caso, a pesar de haberse ordenado la realización de diversos dictámenes periciales, incluyendo unos basados en la superposición cráneo-rostro y la realización de pruebas de ADN, al momento de la entrega de los cuerpos el Estado sólo contaba con las opiniones que algunos familiares emitieron respecto a algunos datos físicos generales y al reconocimiento de vestimenta.⁵⁴⁴ La Corte concluye que el reconocimiento efectuado por parte de familiares no era suficiente para una identificación positiva, así como tampoco lo eran las pruebas cráneo-rostro. Además, la Corte constata que la entrega de cuerpos fue realizada antes de que existiera certeza sobre la identidad de los mismos, lo cual generó mayores dificultades en el proceso posterior de identificación a través de muestras de ADN”.⁵⁴⁵

“Controversias relativas a los análisis de ADN: La Comisión y los representantes

⁵⁴³ Ibid. Párrafo 316

⁵⁴⁴ Ibid. Párrafo 319

⁵⁴⁵ Ibid. Párrafo 324

alegaron que los resultados de las muestras de ADN “fueron entregados dos años después” y que “no se pud[ieron] obtener perfiles genéticos completos”.⁵⁴⁶ La Corte constata que existieron irregularidades en la aplicación de las pruebas genéticas y que éstas sólo tuvieron un resultado parcialmente positivo para el caso de la joven Herrera. Para el caso de la joven González no se tuvo ningún resultado, mientras que para el caso de la joven Ramos los resultados contradijeron la identificación ya realizada por los familiares y el dictamen cráneo-foto. En lo que respecta al alegato referente al excesivo tiempo que tomó la realización de las mencionadas pruebas, no se ofreció argumentación sobre prueba que permita concluir sobre demoras irrazonables”⁵⁴⁷.

“Teniendo en cuenta lo expuesto, así como el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado, el Tribunal concluye que se presentaron irregularidades relacionadas con: i) falta de información en el reporte sobre el hallazgo de los cadáveres, ii) inadecuada preservación de la escena del crimen, iii) falta de rigor en la recolección de evidencias y en la cadena de custodia, iv) contradicciones e insuficiencias de las autopsias, y v) irregularidades e insuficiencias en la identificación de los cuerpos, así como en la entrega irregular de los mismos”.

“La Comisión alegó que se acusó como responsables de los asesinatos a los señores Víctor Javier García Uribe y Gustavo González Meza (en adelante “el señor García” y “el señor González”), a pesar de que no tenían una “relación evidente con los hechos” y que su “detención [...] se realizó de manera arbitraria y sus confesiones de culpabilidad fueron extraídas bajo tortura”.⁵⁴⁸ El 5 de febrero de 2002 el abogado del señor González murió por disparos a manos de la Policía Judicial del Estado de Chihuahua, en circunstancias aún no aclaradas⁵⁴⁹. El 8 de febrero de 2003 el señor González falleció en el centro penitenciario donde se encontraba recluso, horas después de una intervención quirúrgica”⁵⁵⁰.

“El 13 de octubre de 2004 el Juez Tercero Penal del Distrito Judicial Bravos condenó al

⁵⁴⁶ Ibid. Párrafo 326

⁵⁴⁷ Ibid. Párrafo 331

⁵⁴⁸ Ibid. Párrafo 334

⁵⁴⁹ Ibid. Párrafo 338

⁵⁵⁰ Idem.

señor García a cincuenta años de prisión como responsable de los homicidios en el campo algodonoero⁵⁵¹. El 14 de julio de 2005 la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua revocó la decisión de primera instancia por falta de prueba en contra del señor García. Asimismo, dicha Sala señaló que para detener e inculpar al señor García se utilizó una averiguación previa relacionada con “hechos totalmente distintos” ocurridos en 1999, la Sala señaló que “la detención de [los señores García y González] fue arbitraria”. En relación con las confesiones efectuadas, la Sala señaló que “resulta difícil creer que, conociendo sus derechos [a la no autoincriminación,] ambos inculpadore hubieran relatado en forma tan minuciosa [...] su participación en los hechos” y que incluso hubieran aceptado los hechos de 1999 “sin que nadie les preguntara al respecto”⁵⁵².

“La Corte recuerda que los señores García y González no son las víctimas respecto de quienes se está determinando la existencia de presuntas violaciones a la Convención. Sin embargo, la información respecto a las irregularidades en la investigación es fundamental para valorar el acceso a la justicia que tuvieron las madres y demás familiares de las tres mujeres asesinadas. Teniendo en cuenta la prueba analizada, es posible concluir que las investigaciones respecto a los “crímenes del campo algodonoero” se relacionan con un contexto de irregularidades en la determinación de responsables por crímenes similares. Así por ejemplo, la CNDH, en 2003, se refirió a la “obtención indiscriminada de confesiones” por parte de agentes del Ministerio Público y elementos policiales a su cargo”.⁵⁵³

“Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Corte acepta el reconocimiento de responsabilidad estatal respecto a que la investigación dirigida contra los señores García y González implicó que “no se continu[ara] agotando otras líneas de investigación” y que “la determinación de la no responsabilidad penal” de esos dos señores “generó en [los] familiares falta de credibilidad en las autoridades investigadoras, pérdida de indicios y pruebas por el simple transcurso del tiempo”. Además, el Tribunal resalta que la falta de debida investigación y sanción de las irregularidades denunciadas propicia la reiteración

⁵⁵¹ Ibid. Párrafo 339

⁵⁵² Ibid. Párrafo 340

⁵⁵³ Ibid. Párrafo 343

*en el uso de tales métodos por parte de los investigadores. Ello afecta la capacidad del Poder Judicial para identificar y perseguir a los responsables y lograr la sanción que corresponda, lo cual hace inefectivo el acceso a la justicia. En el presente caso, estas irregularidades generaron el reinicio de la investigación cuatro años después de ocurridos los hechos, lo cual generó un impacto grave en la eficacia de la misma, más aún por el tipo de crimen cometido, donde la valoración de evidencias se hace aún más difícil con el transcurso del tiempo”.*⁵⁵⁴

*“El Tribunal resalta que las falencias investigativas que se dieron en la primera etapa de las investigaciones y que han sido aceptadas por el Estado, difícilmente podrían ser subsanadas por las tardías e insuficientes diligencias probatorias que el Estado ha desarrollado a partir del año 2006. Prueba de ello son los ocho años que han transcurrido desde que sucedieron los hechos sin que la investigación pase de su fase preliminar”.*⁵⁵⁵

“El Tribunal observa que la controversia entre las partes sobre la fragmentación de los casos se relaciona con tres temas distintos: a) las alegadas irregularidades en la iniciación de una investigación por tráfico de órganos y la no articulación de ésta con la investigación por desaparición y homicidio, b) alegada necesidad de que el fuero federal conociera del presente caso, y c) alegadas irregularidades derivadas de investigar los tres casos en forma separada”.

“En lo que respecta a la falta de conexión entre esta investigación federal y la investigación en Chihuahua, en el expediente ante la Corte no consta prueba suficiente respecto a que haya existido intercambio de información entre la procuraduría local y federal respecto a los homicidios de las jóvenes Herrera, González y Ramos. Asimismo, la investigación ante la PGR empezó antes de que hubiese concluido el proceso en contra del señor García. No existe explicación que permita comprender por qué dicha investigación alternativa, la cual probablemente contenía información relacionada con el mencionado inculpado, no fue valorada en el proceso adelantado en Chihuahua. Sin argumentación

⁵⁵⁴ Ibid. Párrafo 346

⁵⁵⁵ Ibid. Párrafo 352

sobre prueba, es insuficiente reseñar los hechos descritos para concluir sobre su impacto en la ineficacia de la investigación”.⁵⁵⁶

“La forma en que se cometieron los asesinatos y se abandonaron los cadáveres, con el riesgo inminente para los responsables de ser descubiertos, se deriva que era delincuencia organizada y se infiere que fueron funcionarios del Estado, o particulares que simplemente gozaban de la protección de aquéllos”. “El mantenimiento deliberado de la investigación en el fuero estatal, a pesar de existir fundados indicios que atribuían la competencia al fuero federal, tenía otra consecuencia igualmente determinante de impunidad: impidió la aplicación de la normativa específica y la utilización de los medios legales y materiales de investigación prevenidos para el crimen organizado, que no son sin embargo, aplicables a la delincuencia ordinaria”. Esto generó el caso quedara en manos de “las mismas autoridades estatales que manifestaban tan escasa diligencia ”⁵⁵⁷.

*“Sin embargo, la Corte observa que la prueba testimonial y pericial presentada por los representantes se refiere, en primer lugar, a que dicha atracción tenía que ocurrir por la falta de capacidad técnica de las autoridades de Chihuahua. La Corte no encuentra argumentos respecto al derecho interno que le permitan analizar la atribución de competencia al fuero federal como consecuencia de las irregularidades que han sido constatadas en el presente caso. En segundo lugar, no se argumenta cuáles son esos fundados indicios que atribuían competencia al fuero federal, más allá de presumir que la impunidad del caso implica la participación de agentes estatales o del crimen organizado. Tampoco se elaboran argumentos respecto al funcionamiento de la atracción al fuero federal. En suma, los representantes no adelantan argumentación sobre prueba y derecho interno aplicable que permita analizar en qué sentido la falta de atracción de los delitos y la no aplicación de medios legales correspondientes a la delincuencia organizada contribuyó a la ineficacia de los procesos judiciales impulsados ”.*⁵⁵⁸

“En el presente caso, en las investigaciones por los tres crímenes no se encuentran decisiones del Ministerio Público dirigidas a relacionar estas indagaciones con los

⁵⁵⁶ Ibid. Párrafo 359

⁵⁵⁷ Ibid. Párrafo 361

⁵⁵⁸ Ibid. Párrafo 363

*patrones en los que se enmarcan las desapariciones de otras mujeres. Esto último fue ratificado por el agente del Ministerio Público en la audiencia pública del presente caso. Por todo lo anterior, la Corte considera que no es aceptable el argumento del Estado en el sentido de que lo único en común entre los ocho casos sea que aparecieron en la misma zona, ni es admisible que no exista una mínima valoración judicial de los efectos del contexto respecto a las investigaciones por estos homicidios”.*⁵⁵⁹

*“Lo ocurrido en el presente caso es concordante con lo señalado previamente en el contexto respecto a que en muchas investigaciones se observa la falta de contemplación de las agresiones a mujeres como parte de un fenómeno generalizado de violencia de género”.*⁵⁶⁰

*“El informe final de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez incluye una lista de funcionarios públicos que intervinieron en 139 procesos judiciales relacionados con dichos homicidios, así como del número de aquéllos con posible responsabilidad penal y administrativa para cada caso. Sin embargo, dicha lista no incluye ninguno de las tres ejecuciones de este caso. Adicionalmente, el Estado presentó un informe de funcionarios sancionados, indicando el nombre del funcionario y el expediente sobre el cual se le atribuye posible responsabilidad, así como también el estado procesal del caso. Sin embargo, la Corte observa que en esta segunda lista tampoco se menciona a funcionarios que hayan sido investigados por las irregularidades cometidas en la investigación de lo ocurrido con las jóvenes Herrera, González y Ramos”*⁵⁶¹.

“A partir de la información disponible en el expediente ante la Corte, se concluye que no se ha investigado a ninguno de los funcionarios supuestamente responsables por las negligencias ocurridas en el presente caso. En concreto, no se han esclarecido las graves irregularidades en la persecución de responsables y en el manejo de las evidencias durante la primera etapa de la investigación. Ello hace aún más manifiesta la situación de indefensión de las víctimas, contribuye a la impunidad y propicia la repetición crónica de

⁵⁵⁹ Ibid. Párrafo 369

⁵⁶⁰ Ibid. Párrafo 370

⁵⁶¹ Ibid. Párrafo 375

*las violaciones de los derechos humanos de que se trata”.*⁵⁶²

*“A manera de conclusión, la Corte acepta el reconocimiento de responsabilidad por las irregularidades cometidas en la primera etapa de las investigaciones. Sin embargo, el Tribunal ha constatado que en la segunda etapa de las mismas no se han subsanado totalmente dichas falencias. Las irregularidades en el manejo de evidencias, la alegada fabricación de culpables, el retraso en las investigaciones, la falta de líneas de investigación que tengan en cuenta el contexto de violencia contra la mujer en el que se desarrollaron las ejecuciones de las tres víctimas y la inexistencia de investigaciones contra funcionarios públicos por su supuesta negligencia grave, vulneran el derecho de acceso a la justicia, a una protección judicial eficaz y el derecho de los familiares y de la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido. Además, denota un incumplimiento estatal de garantizar, a través de una investigación seria y adecuada, los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal de las tres víctimas. Todo ello permite concluir que en el presente caso existe impunidad y que las medidas de derecho interno adoptadas han sido insuficientes para enfrentar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas. El Estado no demostró haber adoptado normas o implementado las medidas necesarias, conforme al artículo 2 de la Convención Americana y al artículo 7.c de la Convención Belém do Pará, que permitieran a las autoridades ofrecer una investigación con debida diligencia. Esta ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte del diario vivir”.*⁵⁶³

“Por lo expuesto, el Tribunal concluye que el Estado incumplió con su deber de investigar -y con ello su deber de garantizar- los derechos consagrados en los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y con el artículo 7.b y 7.c de la Convención Belém do Pará, en perjuicio de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal. Por los mismos motivos, el Estado violó los derechos de acceso a la justicia y protección judicial, consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los

⁵⁶² Ibid. Párrafo 378

⁵⁶³ Ibid. Párrafo 388

*artículos 1.1 y 2 de la misma y 7.b y 7.c de la Convención Belém do Para, en perjuicio de los familiares de las tres víctimas”.*⁵⁶⁴

Obligación de no discriminar: La violencia contra la mujer como discriminación
--

*“Los representantes señalaron que “más allá de la violencia por su género, las niñas y las mujeres juarenses sufren una doble discriminación, ya que el origen humilde de Claudia, Laura y Esmeralda, como las niñas y mujeres asesinadas o que son reportadas como desaparecidas, así como de las madres y familias de estas mujeres, también genera una discriminación de clase social”. Añadieron que los daños generados por los hechos del caso “se intensifican porque tienen como causa mantener la desigualdad y la discriminación de las mujeres” y que “entre otras condiciones de vulnerabilidad, los daños se amplían pues la impunidad creada y propiciada desde el Estado [m]exicano sustenta y legitima los patrones de discriminación y violencia contra las mujeres”.*⁵⁶⁵

*“En el presente caso, el Tribunal constata que el Estado señaló ante el CEDAW que la “cultura de discriminación” de la mujer “contribuyó a que [los] homicidios [de mujeres en Ciudad Juárez] no fueran percibidos en sus inicios como un problema de magnitud importante para el cual se requerían acciones inmediatas y contundentes por parte de las autoridades competentes”. Además, el Estado también señaló que esta cultura de discriminación contra la mujer estaba basada “en una concepción errónea de su inferioridad”*⁵⁶⁶.

“El Tribunal considera que el estereotipo de género se refiere a una pre-concepción de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente. Teniendo en cuenta las manifestaciones efectuadas por el Estado, es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes, condiciones que se agravan cuando los estereotipos se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y

⁵⁶⁴ Ibid. Párrafo 389

⁵⁶⁵ Ibid. Párrafo 391

⁵⁶⁶ Ibid. Párrafo 398

*prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades de policía judicial, como ocurrió en el presente caso. La creación y uso de estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer”.*⁵⁶⁷

“Por ello, el Tribunal considera que en el presente caso la violencia contra la mujer constituyó una forma de discriminación y declara que el Estado violó el deber de no discriminación contenido en el artículo 1.1 de la Convención, en relación con el deber de garantía de los derechos consagrados en los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana, en perjuicio de Laura Berenice Ramos Monárrez, Esmeralda Herrera Monreal y Claudia Ivette González; así como en relación con el acceso a la justicia consagrado en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, en perjuicio de los familiares de las víctimas identificados en el párrafo”.

<p>ARTÍCULO 11 (PROTECCIÓN DE LA HONRA Y DE LA DIGNIDAD) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA</p>

*“Los representantes alegaron que “el Estado ha violado el derecho a la dignidad y a la honra, previsto en el artículo 11 de la [Convención], al fomentar una actitud de desprecio por parte de la autoridad hacia las víctimas, mediante preguntas y observaciones prejuiciosas a ciertos familiares al momento de sus denuncias, así como al realizar declaraciones públicas ofensivas”.*⁵⁶⁸

*“El artículo 11 de la Convención reconoce que toda persona tiene derecho al respeto a su honor, prohíbe todo ataque ilegal contra la honra y reputación e impone a los Estados el deber de brindar la protección de la ley contra tales ataques. En términos generales, el derecho a la honra se relaciona con la estima y valía propia, mientras que la reputación se refiere a la opinión que otros tienen de una persona”.*⁵⁶⁹

⁵⁶⁷ Ibid. Párrafo 401

⁵⁶⁸ Ibid. Párrafo 441

⁵⁶⁹ Ibid. Párrafo 444

*“El Tribunal hace constar que los alegatos relacionados con la supuesta violación del artículo 11 de la Convención en perjuicio de las víctimas y sus madres se refieren a hechos concernientes al trato que sufrieron como consecuencia de la búsqueda de las jóvenes desaparecidas y el posterior reclamo de justicia. Las consecuencias jurídicas de dichos hechos ya han sido examinadas en relación con el artículo 5 de la Convención, por lo que el Tribunal estima improcedente declarar una violación al artículo 11 Convencional”.*⁵⁷⁰

3.8.5. PUNTOS RESOLUTIVOS

2. El Estado violó los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal reconocidos en los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana, en relación con la obligación general de garantía contemplada en el artículo 1.1 y la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contemplada en el artículo 2 de la misma, así como con las obligaciones contempladas en el artículo 7.b y 7.c de la Convención Belém do Pará, en perjuicio de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal, en los términos de los párrafos 243 a 286 de la presente Sentencia.

3. El Estado incumplió con su deber de investigar -y con ello su deber de garantizar- los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal, consagrados en los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y con el artículo 7.b y 7.c de la Convención Belém do Pará, en perjuicio de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal. Por los mismos motivos, el Estado violó los derechos de acceso a la justicia y protección judicial, consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y 7.b y 7.c de la Convención Belém do Pará, en perjuicio de: Irma Monreal Jaime, Benigno Herrera Monreal, Adrián Herrera Monreal, Juan Antonio Herrera Monreal, Cecilia Herrera Monreal, Zulema Montijo Monreal, Erick Montijo Monreal, Juana Ballín Castro, Irma Josefina González Rodríguez, Mayela Banda González, Gema Iris González, Karla Arizbeth Hernández Banda, Jacqueline Hernández, Carlos Hernández Llamas, Benita Monárrez Salgado, Claudia Ivonne Ramos Monárrez, Daniel Ramos Monárrez, Ramón Antonio Aragón Monárrez, Claudia Dayana Bermúdez

⁵⁷⁰ Ibid. Párrafo 445

Ramos, Itzel Arely Bermúdez Ramos, Paola Alexandra Bermúdez Ramos y Atziri Geraldine Bermúdez Ramos, de conformidad con los párrafos 287 a 389 de la presente Sentencia.

3.8.6. COMENTARIO

El caso mejor conocido como “Campo Algodonero vs. México” es otro hito en la lucha de la violencia contra la mujer donde no se juzgó al Estado Mexicano porque estas mujeres en particular eran personajes importantes o destacados de la nación, sino porque estas mujeres representan a cada una de las mexicanas que viven en constante peligro porque no existe una debida protección de parte del Estado para con ellas, son mujeres ordinarias, pero solo a través de su muerte pudieron hablar para luchar por los derechos de todas las mujeres latinoamericanas que sufren de los abusos de una sociedad que no las cuida, porque lo ocurrido en México, es muy parecido a lo que ocurre en Perú o en otras partes de Latinoamérica donde la violencia contra la mujer es un estigma, algo que poco a poco se hace visible que siempre existió pero nunca se consideró debidamente.

Este caso es importante porque denota con mucha realidad la falta de investigación y preocupación de los operadores de justicia por primero darle importancia a la desaparición de las tres mujeres, y después que fueron encontradas muertas la falta de interés por encontrar a los perpetradores de sus muertes para que la justicia les pueda imponer la sanción que merecían, al punto que se culpó a una persona aparentemente inocente para cubrir el mal manejo de los casos; hecho que genera el descontento de los familiares de las víctimas quienes cada vez que acudían a los encargados de la investigación eran maltratados aduciendo suposiciones sobre las víctimas, y una vez que fueron encontradas actuando con indiferencia y desdén ante el pesar de quienes habían perdido un ser querido, actuación que solo demostraba el estereotipo de género que debe ser despojado del pensamiento de todas las personas, pero en especial de los operadores de justicia quienes deben actuar conforme a ley sin prejuicios ni suposiciones sino conforme a los hechos y las pruebas que se recaben. Sin embargo de las investigaciones se determinó que no intentaron siquiera llegar al fondo del asunto y hacer las averiguaciones necesarias, hablar con algún testigo o contrastar lo declarado para poder encontrar a aquellos culpables que hasta la fecha permanecen impunes.

Y es que la impunidad es el mayor de los castigos para las víctimas que no solo pierden a una hija o una madre, sino que se ven inertes y desprotegidos ante un aparato estatal que no los protege, no los apoya y no quiere hacer algo por ellos porque sobrentienden que las víctimas desde el inicio tuvieron culpa en sus propias muertes, a pesar que se denota que fueron víctimas de ataque sexual, encontradas semidesnudas y probablemente privadas de su libertad antes de su muerte, habiendo sufrido probablemente psicológicamente antes de perder la vida.

Hoy en día el caso de las tres mujeres que fallecieron en Ciudad Juárez se ha convertido en un símbolo de lo mal que está el sistema de justicia en Latinoamérica para proteger a las mujeres a pesar de los múltiples tratados y leyes que en el papel señalan su protección, pero en la mente de las personas que aplican tales normas no está internalizado lo que genera la vulneración de los derechos de las víctimas y sus familiares dado que sufrieron por el solo hecho de ser mujeres y fueron tomadas como objetos acto que a pesar de ser atribuible a quien sea que fue responsable por ello también es imputable al Estado que no tomo la debida diligencia para hacer algo por evitarlo a través de políticas de prevención identificando factores de riesgo, fortaleciendo las instituciones que puedan proporcionar una respuesta efectiva ante este tipo de casos, y posterior a ello demostrando que con su aparato persecutor consigue sancionar los actos feminicidas acaecidos, todo lo cual no ocurrió, y sigue sin ocurrir.

Todo esto no hace más que seguir llevándonos a la conclusión que en la medida que no haya educación especializada que elimine los estereotipos de género y el machismo, y eduque sobre el respeto y vivir libres de violencia en la sociedad la situación no cambiará, porque el respeto que se deben guardar las personas y la prevención que debe generar el Estado a través de la educación a largo plazo no evitará que dejemos de ver este tipo de muertes, este tipo de escenarios de impunidad y a familias que sienten que el Estado no hace nada por las personas que perdieron en esta lucha fallida ante la violencia contra la mujer.

3.9. FERNÁNDEZ ORTEGA Y OTROS VS. MÉXICO

3.9.1. FECHA: 30 DE AGOSTO DE 2010

3.9.2. PRESENTACIÓN DEL CASO ANTE LA CORTE POR LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

PAIS DENUNCIADO	Estados Unidos Mexicanos
DERECHOS AFECTADOS PARA LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS	<p>“Derechos consagrados en los artículos 5 (Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con la obligación general de respeto y garantía de los derechos humanos establecida en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de la señora Fernández Ortega y de los siguientes familiares: Fortunato Prisciliano Sierra (espos), Noemí, Ana Luz, Colosio, Nélica y Neftalí Prisciliano Fernández (hijos), María Lúcia Ortega (madre), Lorenzo y Ocotlán Fernández Ortega (hermanos). Adicionalmente, señaló que México es responsable por la violación del artículo 11 (Protección de la Honra y de la Dignidad) de la Convención Americana, en relación con la obligación general de respeto y garantía de los derechos humanos establecida en el artículo 1.1 del mismo instrumento, y del artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante también “la Convención de Belém do Pará”), en perjuicio de la señora Fernández Ortega. Finalmente, consideró que el Estado incumplió las obligaciones emanadas de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante también “la Convención contra la Tortura”). Con base en lo anterior, la Comisión Interamericana solicitó al Tribunal que ordene al Estado determinadas medidas de reparación”.</p>

“El 7 de mayo de 2009, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la Corte una demanda en contra de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante “el Estado” o “México”), originada en la petición presentada el 14 de junio de 2004 por Inés Fernández Ortega (en adelante “la señora Fernández Ortega” o “la presunta víctima”), la Organización Indígena de Pueblos Tlapanecos A.C. y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C. (en adelante también “Tlachinollan”)”⁵⁷¹.

“Según indicó la Comisión Interamericana, la demanda se refiere a la supuesta responsabilidad internacional del Estado por la “violación [sexual] y tortura” en perjuicio de la señora Fernández Ortega ocurrida el 22 de marzo de 2002, por la “falta de debida diligencia en la investigación y sanción de los responsables” de esos hechos, por “la falta de reparación adecuada a favor de la [presunta] víctima y sus familiares; [...] la utilización del fuero militar para la investigación y juzgamiento de violaciones a los derechos humanos; y [...] las dificultades que enfrentan las personas indígenas, en particular las mujeres, para acceder a la justicia”.”⁵⁷²

3.9.3. HECHOS

“Los hechos del presente caso se producen en un contexto de importante presencia militar en el estado de Guerrero, dirigida a reprimir actividades ilegales como la delincuencia organizada. Se ha denunciado que en la represión de tales actividades se vulneran derechos fundamentales. En el estado de Guerrero un importante porcentaje de la población pertenece a comunidades indígenas, quienes conservan sus tradiciones e identidad cultural y residen en municipios de gran marginación y pobreza. En general, la población indígena se encuentra en una situación de vulnerabilidad, reflejada en diferentes ámbitos, como la administración de justicia y los servicios de salud, particularmente, por no hablar español y no contar con intérpretes, por la falta de recursos económicos para acceder a un abogado, trasladarse a centros de salud o a los órganos judiciales y también por ser víctimas de prácticas abusivas o violatorias del debido proceso. Lo anterior ha provocado que integrantes de las comunidades indígenas

⁵⁷¹ Caso Fernández Ortega vs. México, sentencia del 30 de agosto del 2010, párrafo 1

⁵⁷² Ibid. Párrafo 2

no acudan a los órganos de justicia o instancias públicas de protección de los derechos humanos por desconfianza o por miedo a represalias, situación que se agrava para las mujeres indígenas puesto que la denuncia de ciertos hechos se ha convertido para ellas en un reto que requiere enfrentar muchas barreras, incluso el rechazo por parte de su comunidad y otras “prácticas dañinas tradicionales”⁵⁷³.

“Entre las formas de violencia que afectan a las mujeres en el estado de Guerrero se encuentra la “violencia institucional castrense”. De acuerdo con la Secretaría de la Mujer del estado de Guerrero “[l]as mujeres indígenas siguen padeciendo las consecuencias de una estructura patriarcal ciega a la equidad de género, especialmente en instancias como fuerzas armadas o policiales, donde se les entrena para la defensa, el combate o el ataque a criminales, pero no se les sensibiliza en los derechos humanos de la comunidad y de las mujeres”. En este contexto, entre 1997 y 2004 se presentaron seis denuncias de violaciones sexuales a mujeres indígenas atribuidas a miembros del Ejército en el estado de Guerrero, las cuales fueron conocidas por la jurisdicción militar”⁵⁷⁴.

“La señora Fernández Ortega es una mujer indígena perteneciente a la comunidad indígena Me’phaa, residente en Barranca Tecoani, estado de Guerrero. Al momento de los hechos tenía casi 25 años, estaba casada con el señor Prisciliano Sierra, con quien tenía cuatro hijos y un año y medio después nació una hija más. La señora Fernández Ortega se dedicaba a las tareas domésticas, al cuidado de los animales que criaban y a la siembra de diferentes cultivos en la parcela familiar. La comunidad de Barranca Tecoani se encuentra en una zona montañosa, aislada y, por lo tanto, de difícil acceso”⁵⁷⁵.

“El 22 de marzo de 2002, alrededor de las tres de la tarde, la señora Fernández Ortega se encontraba en su casa en compañía de sus cuatro hijos, Noemí, Ana Luz, Colosio y Nélide, todos ellos de apellidos Prisciliano Fernández, cuando un grupo de aproximadamente once militares, vestidos con uniformes y portando armas, se acercaron a su casa. Tres de ellos ingresaron en el domicilio”⁵⁷⁶.

⁵⁷³ Ibid. Párrafo 78

⁵⁷⁴ Ibid. Párrafo 79

⁵⁷⁵ Ibid. Párrafo 80

⁵⁷⁶ Ibid. Párrafo 81

“La señora Fernández Ortega declaró que los tres militares que ingresaron a su casa sin su consentimiento y le preguntaron, en varias ocasiones, a “donde [había ido] a robar carne [su] marido”, a lo que no les contestó por no hablar bien español y por miedo. Los militares le apuntaron con sus armas insistiendo con la misma pregunta y, seguidamente, uno de ellos la tomó de las manos y, apuntándole con el arma, le dijo que se tirara al suelo y así lo hizo. Una vez en el suelo, otro militar con una mano tomó las manos de la presunta víctima y con la otra le levantó la falda, le bajó la ropa interior y la violó sexualmente mientras los otros dos militares miraban. Posteriormente, esas tres personas salieron de la casa, junto con los que se habían quedado afuera se retiraron del lugar”⁵⁷⁷.

“Mientras los militares se encontraban en el interior de la casa agrediendo a la señora Fernández Ortega, en los momentos inmediatamente previos a la violación sexual, sus cuatro hijos corrieron al domicilio de sus abuelos, quienes vivían cerca. Una vez que el grupo de militares se retiró de la propiedad, los niños regresaron con su abuelo paterno al domicilio familiar, donde se encontraron a su madre llorando. Más tarde, cuando su esposo regresó a la casa la presunta víctima le contó lo ocurrido”⁵⁷⁸.

“Al día siguiente, el señor Prisciliano Sierra se dirigió a la sede de la Organización del Pueblo Indígena Me’paa en Ayutla de los Libres con el fin de contar lo relatado por su esposa a la señora Eugenio Manuel y al señor Ramírez Rodríguez, miembros de dicha organización. La señora Eugenio Manuel llamó al señor Lugo Cortés, Visitador General de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero (en adelante también “Comisión de Derechos Humanos de Guerrero” o “CODDEHUM”) para presentar una queja y este último acudió a la oficina de la OPIM. Posteriormente, los cuatro se dirigieron al domicilio de la señora Fernández Ortega y la llevaron a un doctor particular en Ayutla, puesto que “[s]e sentía muy mal”. El médico solo le dio analgésicos dado que, “según refirió[,] no había más medicina”⁵⁷⁹.

“El 24 de marzo de 2002 la señora Fernández Ortega, acompañada por el señor Prisciliano Sierra, la señora Eugenio Manuel y el señor Lugo Cortés, se presentó ante el Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Allende, con residencia en el

⁵⁷⁷ Ibid. Párrafo 82

⁵⁷⁸ Ibid. Párrafo 83

⁵⁷⁹ Ibid. Párrafo 84

Municipio de Ayutla los Libres (en adelante también “Ministerio Público de Allende”) para interponer la denuncia de los hechos, dando origen a la averiguación previa ALLE/SC/03/76/2002. Debido a las dificultades de la señora Fernández Ortega para hablar español, ya que su lengua materna es el me’paa, la señora Eugenio Manuel participó como intérprete en su declaración. Ante la indicación hecha por la presunta víctima sobre que los autores de los hechos habían sido militares, el agente del Ministerio Público les indicó “que no tenía tiempo de recibir la denuncia”. Finalmente, tras la intervención del Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, un funcionario del Ministerio Público tomó la declaración a la señora Fernández Ortega, en presencia de otras personas que se encontraban en las instalaciones de ese organismo. El Ministerio Público solicitó al médico legista del Distrito que “realiz[ara] la [au]scultación a la [señora] Fernández Ortega a la brevedad posible [y] remit[iera] el certificado médico legal ginecológico de lesiones”. Tanto la señora Fernández Ortega como el señor Lugo Cortés insistieron en que debía ser revisada por una médica. Debido a la ausencia de una mujer que pudiera realizar la exploración médica, el Ministerio Público refirió a la presunta víctima al Hospital General de Ayutla”⁵⁸⁰.

“El 25 de marzo de 2002 la señora Fernández Ortega acudió de nuevo al Hospital General de Ayutla y una médica general realizó una revisión ginecológica en la cual determinó que la presunta víctima “físicamente no presenta[ba] datos de agresión” y solicitó la realización de exámenes de laboratorio”⁵⁸¹.

“El 4 de abril de 2002 el Director del Hospital General de Ayutla informó al Ministerio Público que “por no contar con reactivos disponibles para [los] estudios [solicitados, éstos] no fueron realizados”. El 18 de abril de 2002 la señora Fernández Ortega amplió su declaración ante el Ministerio Público de Allende y su hija mayor, Noemí Prisciliano Fernández, rindió declaración sobre los hechos ocurridos el 22 de marzo de 2002”⁵⁸².

“El 9 de julio de 2002 un dictamen rendido por una perita química determinó “la presencia de líquido seminal” y la identificación de “células espermáticas” en las muestras remitidas al laboratorio el 5 de julio de 2002”⁵⁸³.

⁵⁸⁰ Ibid. Párrafo 85

⁵⁸¹ Ibid. Párrafo 86

⁵⁸² Ibid. Párrafo 87

⁵⁸³ Ibid. Párrafo 88

“Posteriormente, el 16 de agosto de 2002 el Coordinador de Química Forense de la Procuraduría General de Justicia informó al Ministerio Público Militar, quien se había declarado competente para llevar adelante la investigación, que “las muestras [obtenidas] de la cavidad vaginal de la [señora] Fernández Ortega [...] se consumi[eron] durante su estudio, por tal motivo no se encuentran en [el] archivo biológico”. Luego el mismo servidor público indicó que “las dos laminillas tomadas de la cavidad vaginal de la [señora] Fernández Ortega [...] fueron agotadas en el proceso de análisis”⁵⁸⁴.

3.9.4. AFECTACION DE DERECHOS

Prueba de la violación sexual de la señora Fernández Ortega

*“En primer lugar, a la Corte le resulta evidente que la violación sexual es un tipo particular de agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores. Dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho”.*⁵⁸⁵

*“La presunta víctima relató los hechos en diversas ocasiones, el 14 de agosto de 2009 la señora Fernández Ortega amplió nuevamente su declaración, por escrito y verbalmente, ante la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar del estado de Guerrero. Por último, el 19 de marzo de 2010 rindió declaración jurada mediante fedatario público ante esta Corte”.*⁵⁸⁶

“Como punto de partida, la Corte estima conveniente destacar que a efectos de la responsabilidad internacional del Estado, el hecho de si fue uno o fueron varios los agentes estatales que violaron sexualmente a la señora Fernández Ortega no resulta relevante. Este Tribunal recuerda que no le corresponde determinar responsabilidades individuales, cuya definición compete a los tribunales penales internos, sino conocer los

⁵⁸⁴ Ibid. Párrafo 89

⁵⁸⁵ Ibid. Párrafo 100

⁵⁸⁶ Ibid. Párrafo 101

hechos traídos a su conocimiento y calificarlos en el ejercicio de su competencia contenciosa, según la prueba presentada por las partes”⁵⁸⁷.

“Por otra parte, en relación con el contenido de las declaraciones de la señora Fernández Ortega, la Corte considera que no es inusual que el recuento de hechos de esta naturaleza contenga algunos aspectos que puedan ser considerados, a priori, imprecisiones en el relato. No es la primera vez que un tribunal internacional de derechos humanos debe observar eventuales divergencias en los relatos de personas que se refieren a violaciones sexuales de las cuales habrían sido víctimas”⁵⁸⁸.

“El Tribunal observa que la señora Fernández Ortega habla me’paa y que para ser entendida por el funcionario que recibió su denuncia debió contar con la asistencia de una persona quien, además, no era intérprete de oficio. Otros relatos de los hechos, como la primera ampliación de denuncia, se realizaron mediante la presentación de un escrito y no por el testimonio directo de la presunta víctima. Dado que el idioma de la señora Fernández Ortega no es el español, es evidente que, si bien fueron firmados por ella, dichos documentos fueron redactados por un tercero, quien además tuvo que reproducir en español lo que ella manifestaba en me’paa, o redactar lo que un intérprete al español le indicaba, circunstancia que indudablemente puede derivar también en imprecisiones. En consecuencia, las diferencias de relato, más que un problema de consistencia, pueden deberse a obstáculos en la expresión, a la intervención de terceros, o producto del uso de diferentes idiomas o interpretaciones en las traducciones. Por lo demás, los hechos relatados por la señora Fernández Ortega se refieren a un momento traumático sufrido por ella, cuyo impacto puede causar que se cometan determinadas imprecisiones al recordarlos. Dichos relatos, además, fueron rendidos en diferentes momentos entre los años 2002 y 2010”⁵⁸⁹.

“No obstante, de la lectura de las declaraciones mencionadas, la Corte considera que las diferencias en su relato no resultan sustanciales. En ellas se observa que la señora Fernández Ortega utiliza las expresiones “me violaron”, o denomina a los hechos como

⁵⁸⁷ Ibid. Párrafo 103

⁵⁸⁸ Ibid. Párrafo 104

⁵⁸⁹ Ibid. Párrafo 105

“violación” o “abuso sexual”, indistintamente, para referirse a todo el evento lesivo, sin identificar aquellos términos, exclusivamente, con el hecho de la penetración sexual”.⁵⁹⁰

“Adicionalmente, de las circunstancias propias de la situación de la señora Fernández Ortega, la Corte no encuentra elementos que afecten la credibilidad de sus declaraciones. La presunta víctima es una mujer indígena, que vivía en una zona montañosa aislada, que tuvo que caminar varias horas para interponer una denuncia sobre una violación sexual ante autoridades de salud y ministeriales que no hablaban su idioma y que, probablemente, tendría repercusiones negativas en su medio social y cultural, entre otros, un posible rechazo de su comunidad. Asimismo, denunció y perseveró en su reclamo, sabiendo que en la zona en la que vive continuaba la presencia de militares, algunos de los cuales ella estaba imputando penalmente la comisión de un delito grave”.⁵⁹¹

“La Corte encuentra probada la presencia militar en la zona en la época de los hechos. En el expediente del presente caso constan las declaraciones de soldados de infantería, realizadas en el marco de la averiguación previa 35ZM/06/2002, el 1 de abril de 2002, de las cuales se desprende que la Base de Operaciones “Méndez”, perteneciente al 41 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, se encontraba ubicada en las inmediaciones de Barranca Tecoani, a unos tres kilómetros de distancia. Más aún, el Tribunal encuentra probado que el día 22 de marzo de 2002 un grupo de soldados salió a efectuar reconocimientos en las inmediaciones de Barranca Tecoani, regresando a su Base aproximadamente a las cuatro de la tarde, es decir, una hora después de los hechos”.⁵⁹²

SOBRE LAS DECLARACIONES

“Además de las declaraciones de la presunta víctima, las pruebas periciales oficiales del estudio de espermatobioscopia y de fosfatasa ácida determinaron “la presencia de líquido seminal en los dos hisopos obtenidos [e] identificaron células espermáticas”⁵⁹³.

“Sin embargo, a pesar de haber encontrado la presencia de líquido seminal y células espermáticas, de manera inexplicable los peritos oficiales agotaron y desecharon las

⁵⁹⁰ Ibid. Párrafo 106

⁵⁹¹ Ibid. Párrafo 107

⁵⁹² Ibid. Párrafo 109

⁵⁹³ Ibid. Párrafo 111

muestras impidiendo realizar otras pruebas, algunas de fundamental importancia como, por ejemplo, de ADN. Este hecho ha obstaculizado hasta el presente el esclarecimiento y la determinación judicial de los hechos. A diferencia del derecho penal interno, en los procesos sobre violaciones de derechos humanos la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas, cuando es el Estado quien tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos dentro de su territorio. En el presente caso, la falta de esclarecimiento de los hechos, responde principalmente a la destrucción de esta prueba, de importancia fundamental, mientras se encontraba en custodia del Estado”.⁵⁹⁴

“La Corte considera otros elementos de convicción la existencia de una certificación psiquiátrica, “en la que señala que la agraviada estuvo expuesta a un acontecimiento traumático”. Asimismo, un informe psicológico realizado a la señora Fernández Ortega en el año 2009 concluyó que “existe coherencia entre los hechos narrados [...] de la violación sexual y los síntomas psicológicos padecidos, siendo estas reacciones emocionales típicas de una víctima de violación sexual por parte de alguna autoridad”.⁵⁹⁵

“Adicionalmente, la Corte cuenta con las declaraciones de su hija Noemí Prisciliano Fernández, las cuales son consistentes con lo indicado por la señora Fernández Ortega sobre los momentos inmediatamente anteriores y posteriores a la violación sexual. En igual sentido la Corte cuenta con los testimonios del señor Prisciliano Sierra, la señora Eugenio Manuel y los señores Lugo Cortés y Ramírez Rodríguez quienes si bien, en efecto, no fueron testigos presenciales de los hechos, sí presenciaron los momentos posteriores y se desprende que cuando vieron por primera vez a la señora Fernández Ortega tras los hechos, la encontraron mal, triste, conmovida, con malestares y dolores y al relatar la presunta víctima lo que le había ocurrido indicó que había sido violada sexualmente y que los responsables eran militares”⁵⁹⁶.

“La Corte no cuenta con evidencia que desvirtúe los dichos de la señora Fernández Ortega, el uso de la fuerza no puede considerarse un elemento imprescindible para castigar conductas sexuales no consentidas, así como tampoco debe exigirse prueba de la

⁵⁹⁴ Ibid. Párrafo 112

⁵⁹⁵ Ibid. Párrafo 113

⁵⁹⁶ Ibid. Párrafo 114

existencia de resistencia física a la misma, sino que es suficiente con que haya elementos coercitivos en la conducta. En el presente caso, está acreditado que el hecho se cometió en una situación de extrema coerción, con el agravante de producirse en un contexto de relaciones de autoridad, por parte de tres militares armados”.⁵⁹⁷

“Después de más de ocho años de ocurridos los hechos, el Estado no ha aportado evidencia en el procedimiento del presente caso que permita contradecir la existencia de la violación sexual de la señora Fernández Ortega. Al respecto, este Tribunal considera que el Estado no puede justificarse con base, exclusivamente, en el desconocimiento de si la violación había existido y su autoría, cuando ello es consecuencia de sus propios errores o falencias, al destruir una prueba que estaba bajo su custodia. Concluir lo contrario implicaría permitir al Estado ampararse en la negligencia e ineffectividad de la investigación penal para sustraerse de su responsabilidad por la violación de derechos reconocidos por la Convención Americana. Por todo lo anterior, la Corte encuentra probado que la señora Fernández Ortega fue víctima de una violación sexual cometida por un militar ante la presencia de otros dos militares que observaban su ejecución, cuando ella se encontraba en su casa”.⁵⁹⁸

SOBRE LA VIOLENCIA SEXUAL

“Como lo señala la Convención de Belém do Pará, que la violencia contra la mujer no sólo constituye una violación de los derechos humanos, sino que es “una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”, que “trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases”⁵⁹⁹.

“El Tribunal examinará si los hechos del presente caso se subsumen en la figura de tortura:

i) Intencionalidad: Queda acreditado que el maltrato fue deliberadamente infligido en contra de la víctima. La Corte considera probado que uno de los atacantes tomó

⁵⁹⁷ Ibid. Párrafo 115

⁵⁹⁸ Ibid. Párrafo 116

⁵⁹⁹ Ibid. Párrafo 118

*a la señora Fernández Ortega de las manos, la obligó a acostarse en el suelo, y mientras era apuntada al menos con un arma, un militar la penetró sexualmente mientras los otros dos presenciaban la ejecución de la violación sexual”.*⁶⁰⁰

*ii) Sufrimiento físico o mental severo: Se deben considerar las características del trato, tales como la duración, el método utilizado o el modo en que fueron infligidos los padecimientos, los efectos físicos y mentales que éstos pueden causar, así como las condiciones de la persona que padece dichos sufrimientos, entre ellos, la edad, el sexo, el estado de salud, entre otras circunstancias personales.*⁶⁰¹ *En cuanto al sufrimiento físico, existe un certificado médico, que indica que no hay evidencia de lesiones físicas. Sin embargo, la Corte también cuenta con prueba testimonial al día siguiente de los hechos se encontraba lastimada, con malestares y dolores físicos, e incluso requirió la asistencia de un médico particular”*⁶⁰².

*“Independientemente de lo anterior, la Corte ha establecido que un acto de tortura puede ser perpetrado tanto mediante actos de violencia física como a través de actos que produzcan en la víctima un sufrimiento psíquico o moral agudo. De ello se desprende que es inherente a la violación sexual el sufrimiento severo de la víctima, aun cuando no exista evidencia de lesiones o enfermedades físicas. En efecto, no en todos los casos las consecuencias de una violación sexual serán enfermedades o lesiones corporales. Las mujeres víctimas de violación sexual también experimentan severos daños y secuelas psicológicas y aun sociales”.*⁶⁰³

“En el presente caso, la señora Fernández Ortega estuvo sometida a un acto de violencia sexual y control físico del militar que la penetró sexualmente de manera intencional; su vulnerabilidad y la coerción que el agente estatal ejerció sobre ella se reforzó con la participación de otros dos militares también armados, que agravaron el marco de violencia sexual ejercido contra la víctima, habiendo, incluso, otro grupo de militares que esperaron fuera de la casa. Resulta evidente para la Corte que el sufrimiento padecido por la señora Fernández Ortega, al ser obligada a mantener un acto sexual contra su voluntad, hecho además que fue observado por otras dos personas, es de la mayor

⁶⁰⁰ Ibid. Párrafo 121

⁶⁰¹ Ibid. Párrafo 123

⁶⁰² Ibid. Párrafo 124

⁶⁰³ Ibid. Párrafo 124

*intensidad. El sufrimiento psicológico y moral se agravó dadas las circunstancias en las cuales se produjo la violación sexual, en tanto no podía descartarse que la violencia sufrida se extremara aún más por parte de los agentes estatales que presenciaban el acto de violación, ante la posibilidad de que fuera también violada sexualmente por ellos o por quienes se encontraban afuera de la casa. De igual modo, la presencia de sus hijos en los momentos iniciales del hecho, así como la incertidumbre de si se encontraban en peligro o si habrían podido escapar, intensificaron el sufrimiento de la víctima”.*⁶⁰⁴

*“La violación sexual de la señora Fernández Ortega se produjo en el marco de una situación en la que los agentes militares interrogaron a la víctima y no obtuvieron respuesta sobre la información solicitada. Sin descartar la eventual concurrencia de otras finalidades, la Corte considera probado que el presente caso tuvo la finalidad específica de castigo ante la falta de información solicitada”.*⁶⁰⁵

*“Por otra parte, esta Corte considera que una violación sexual puede constituir tortura aún cuando consista en un solo hecho u ocurra fuera de instalaciones estatales, como puede ser el domicilio de la víctima. Esto es así ya que los elementos objetivos y subjetivos que califican un hecho como tortura no se refieren ni a la acumulación de hechos ni al lugar donde el acto se realiza, sino a la intencionalidad, a la severidad del sufrimiento y a la finalidad del acto, requisitos que en el presente caso se encuentran cumplidos. Con base en lo anterior, la Corte concluye que la violación sexual en el presente caso implicó una violación a la integridad personal de la señora Fernández Ortega, constituyendo un acto de tortura en los términos del artículo 5.2 de la Convención Americana y 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”.*⁶⁰⁶

*“La Corte considera que la violación sexual de la señora Fernández Ortega vulneró valores y aspectos esenciales de su vida privada, supuso una intromisión en su vida sexual y anuló su derecho a tomar libremente las decisiones respecto con quien tener relaciones sexuales, perdiendo de forma completa el control sobre sus decisiones más personales e íntimas y sobre las funciones corporales básicas”.*⁶⁰⁷

⁶⁰⁴ Ibid. Párrafo 125

⁶⁰⁵ Ibid. Párrafo 127

⁶⁰⁶ Ibid. Párrafo 128

⁶⁰⁷ Ibid. Párrafo 129

*“Con base en lo anterior, la Corte concluye que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad y a la vida privada, consagrados, respectivamente, en los artículos 5.2, 11.1 y 11.2 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 del mismo tratado y 1, 2 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como por el incumplimiento del deber establecido en el artículo 7.a de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en perjuicio de la señora Fernández Ortega”.*⁶⁰⁸

Integridad personal de la señora Fernández Ortega

“Asimismo, la Corte observa que del testimonio de la señora Fernández Ortega se desprenden afectaciones a su integridad personal relativas al trato que recibió al interponer su denuncia ante las autoridades, así como sentimientos de profundo temor por la presencia de militares e impotencia relacionados con la falta de justicia en su caso”⁶⁰⁹. Teniendo en cuenta lo anterior y el reconocimiento de responsabilidad del Estado, la Corte declara que México violó el derecho a la integridad personal de la señora Fernández Ortega”⁶¹⁰.

Integridad personal de los familiares de la señora Fernández Ortega

“La Corte ha declarado en otras oportunidades que los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas. El Tribunal ha considerado violado el derecho a la integridad psíquica y moral de familiares de víctimas con motivo del sufrimiento adicional que estos han padecido como producto de las circunstancias particulares de las violaciones perpetradas contra sus seres queridos y a causa de las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales frente a los hechos”⁶¹¹.

“el clima emocional de la familia [...] ha estado permeado por el miedo[. S]e observa la imposibilidad de hablar de la emoción que los afecta, tienen el temor a despertar lo que ha

⁶⁰⁸ Ibid. Párrafo 131

⁶⁰⁹ Ibid. Párrafo 137

⁶¹⁰ Ibid. Párrafo 138

⁶¹¹ Ibid. Párrafo 143

quedado en silencio por tanto tiempo, a no saber qué decir, y a no saber qué hacer. Este sentimiento de estar en permanente riesgo ha hecho que se encuentren en la incertidumbre e inseguridad generando un agotamiento afectivo que les impide mejorar sus relaciones familiares”⁶¹².

ARTÍCULOS 8 (GARANTÍAS JUDICIALES) Y 25 (PROTECCIÓN JUDICIAL), EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1.1 (OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS) Y 2 (DEBER DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, 7 DE LA CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ Y 1, 6 Y 8 DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA

“El 24 de marzo de 2002, como consecuencia de la denuncia interpuesta por la señora Fernández Ortega, dio inicio la averiguación previa ALLE/SC/03/76/2002 por los delitos de violación sexual, allanamiento de morada, abuso de autoridad y los que resultaren. El 5 de abril de 2002, cuando la señora Fernández Ortega no se encontraba en su domicilio, se llevó a cabo la inspección ocular del lugar de los hechos en la que participaron el agente del Ministerio Público de Allende y otros servidores públicos. El 18 de abril de 2002 la señora Fernández Ortega amplió su declaración ante dicho Ministerio Público. Posteriormente, el 17 de mayo de 2002, tras realizar diversas diligencias en relación con la identificación de los posibles autores, el Ministerio Público de Allende se declaró incompetente dado que “la agraviada ha[bía] señalado en su primera declaración que las personas que realizaron el hecho delictuoso pertenecen al [E]jército” y remitió el expediente de la averiguación previa ALLE/SC/03/76/2002 al Ministerio Público Militar adscrito a la 35 Zona Militar”⁶¹³.

“La Comisión Interamericana sostuvo que no hay elementos que justifiquen la intervención de la justicia militar en la investigación de la denuncia de la violación sexual. La justicia militar debe ser utilizada sólo para juzgar militares activos por la presunta comisión de delitos de función en sentido estricto”.⁶¹⁴

⁶¹² Ibid. Párrafo 148

⁶¹³ Ibid. Párrafo 161

⁶¹⁴ Ibid. Párrafo 172

“En primer lugar, en cuanto al alegato del Estado que afirma que no se han configurado violaciones a las garantías judiciales ni a la protección judicial porque las investigaciones se mantienen en la órbita ministerial, la Corte recuerda su jurisprudencia en el sentido de que las garantías del artículo 8.1 de la Convención no se aplican solamente a jueces y tribunales judiciales o procesos judiciales. En particular, en relación con las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público, el Tribunal ha establecido que, dependiendo de las circunstancias del caso, puede tener que analizar los procedimientos que se vinculan y constituyen el presupuesto de un proceso judicial, particularmente, las tareas de investigación de cuyo resultado depende el inicio y el avance del mismo. Por tal motivo, la Corte se pronunciará sobre las investigaciones llevadas a cabo en el presente caso y determinará si han existido violaciones a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial y, en su caso, incumplimientos de otras normas interamericanas en dicho procedimiento interno”.⁶¹⁵

“La violación sexual de una persona por parte de personal militar no guarda, en ningún caso, relación con la disciplina o la misión castrense. Por el contrario, el acto cometido por personal militar contra la señora Fernández Ortega afectó bienes jurídicos tutelados por el derecho penal interno y la Convención Americana como la integridad personal y la dignidad de la víctima. Es claro que tal conducta es abiertamente contraria a los deberes de respeto y protección de los derechos humanos y, por lo tanto, está excluida de la competencia de la jurisdicción militar. Como se desprende de los criterios señalados, la incompatibilidad de la Convención Americana con la intervención del fuero militar en este tipo de casos no se refiere únicamente al acto de juzgar, a cargo de un tribunal, sino fundamentalmente a la propia investigación, dado que su actuación constituye el inicio y el presupuesto necesario para la posterior intervención de un tribunal incompetente. Con base en lo anterior, la Corte concluye que el Estado violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial previstos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de la señora Fernández Ortega”.⁶¹⁶

⁶¹⁵ Ibid. Párrafo 175

⁶¹⁶ Ibid. Párrafo 177

“En lo referente a la alegada inexistencia de un recurso efectivo para impugnar la competencia militar⁶¹⁷, la señora Fernández Ortega interpuso una demanda de amparo contra la decisión del Ministerio Público Militar adscrito a la 35 Zona Militar que confirmó la competencia del fuero militar para conocer el caso. Sin embargo, esta demanda fue sobreseída en primera instancia debido a que los hechos impugnados “no se encuentran comprendidos dentro del artículo 10 [de la Ley de Amparo], ya que no basta que se tenga el carácter de ofendido”⁶¹⁸.

“De las mencionadas decisiones, este Tribunal concluye que la señora Fernández Ortega no contó con la posibilidad de impugnar efectivamente la competencia de la jurisdicción militar para conocer de asuntos que, por su naturaleza, deben corresponder a las autoridades del fuero ordinario”⁶¹⁹.

“La Corte destaca que la participación de la víctima en procesos penales no está limitada a la mera reparación del daño sino, preponderantemente, a hacer efectivos sus derechos a conocer la verdad y a la justicia ante tribunales competentes. Ello implica necesariamente que, a nivel interno, deben existir recursos adecuados y efectivos a través de los cuales la víctima esté en posibilidad de impugnar la competencia de las autoridades que eventualmente ejerzan jurisdicción sobre asuntos respecto de los cuales se considere que no tienen competencia”⁶²⁰.

“Además, las autoridades del Estado integraron y valoraron las pruebas de forma sesgada, aislada y discriminatoria lo cual “determinó en varias ocasiones el archivo de la investigación”. En la jurisdicción civil el Estado no realizó ninguna gestión por iniciativa propia para establecer la verdad de lo ocurrido sino que centró todo el peso de la investigación en la obtención de una nueva declaración de la víctima y cuando la obtuvo, la indagatoria se envió por segunda ocasión a una autoridad incompetente”⁶²¹.

⁶¹⁷ Ibid. Párrafo 180

⁶¹⁸ Ibid. Párrafo 181

⁶¹⁹ Ibid. Párrafo 182

⁶²⁰ Ibid. Párrafo 183

⁶²¹ Ibid. Párrafo 186

“El Estado incumplió con el artículo 7.b de la Convención de Belém do Pará, por no garantizar los derechos de la señora Fernández Ortega al no llevar a cabo una investigación seria y efectiva de los hechos de los que fue víctima, ya que “la investigación de la violación sexual [...] estuvo plagada de irregularidades, que redundaron en la imposibilidad de acceder a la justicia, dejando el caso en total impunidad”. Finalmente, con base en los mismos hechos, concluyeron que el Estado incumplió las obligaciones establecidas en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención contra la Tortura”⁶²².

“Las víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus familiares, deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos, tanto en procura del esclarecimiento de los hechos y del castigo de los responsables, como en busca de una debida reparación. Asimismo, el Tribunal ha señalado que la obligación de investigar y el correspondiente derecho de la presunta víctima o de los familiares no sólo se desprende de las normas Convencionales de derecho internacional imperativas para los Estados Parte, sino que además se deriva de la legislación interna que hace referencia al deber de investigar de oficio ciertas conductas ilícitas y a las normas que permiten que las víctimas o sus familiares denuncien o presenten querellas, pruebas o peticiones o cualquier otra diligencia, con la finalidad de participar procesalmente en la investigación penal con la pretensión de establecer la verdad de los hechos”⁶²³.

“En casos de violencia contra la mujer las obligaciones generales establecidas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana se complementan y refuerzan, para aquellos Estados que son Parte, con las obligaciones derivadas del tratado interamericano específico, la Convención de Belém do Pará. En su artículo 7.b dicha Convención obliga de manera específica a los Estados Partes a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. De tal modo, ante un acto de violencia contra una mujer, resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de

⁶²² Ibid. Párrafo 187

⁶²³ Ibid. Párrafo 192

erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección”⁶²⁴.

“En otras oportunidades esta Corte ha especificado los principios rectores que es preciso observar en investigaciones penales relativas a violaciones de derechos humanos. En casos de violencia contra la mujer, ciertos instrumentos internacionales resultan útiles para precisar y dar contenido a la obligación estatal reforzada de investigarlos con la debida diligencia. Entre otros, en una investigación penal por violencia sexual es necesario que: i) la declaración de la víctima se realice en un ambiente cómodo y seguro, que le brinde privacidad y confianza; ii) la declaración de la víctima se registre de forma tal que se evite o limite la necesidad de su repetición; iii) se brinde atención médica, sanitaria y psicológica a la víctima, tanto de emergencia como de forma continuada si así se requiere, mediante un protocolo de atención cuyo objetivo sea reducir las consecuencias de la violación; iv) se realice inmediatamente un examen médico y psicológico completo y detallado por personal idóneo y capacitado, en lo posible del sexo que la víctima indique, ofreciéndole que sea acompañada por alguien de su confianza si así lo desea; v) se documenten y coordinen los actos investigativos y se maneje diligentemente la prueba, tomando muestras suficientes, realizando estudios para determinar la posible autoría del hecho, asegurando otras pruebas como la ropa de la víctima, investigando de forma inmediata el lugar de los hechos y garantizando la correcta cadena de custodia, y vi) se brinde acceso a asistencia jurídica gratuita a la víctima durante todas las etapas del proceso”⁶²⁵.

*“La Corte considera probado, entre otras, las siguientes omisiones y fallas en la investigación*⁶²⁶:

- i) un funcionario del Ministerio Público civil no quiso recibir inicialmente la denuncia de la señora Fernández Ortega, situación que requirió la intervención de otro servidor público para que el primero cumpliera con su obligación legal;*
- ii) no se proveyó a la señora Fernández Ortega, quien al momento de los hechos no hablaba español, de la asistencia de un intérprete, sino que debió ser asistida*

⁶²⁴ Ibid. Párrafo 193

⁶²⁵ Ibid. Párrafo 194

⁶²⁶ Ibid. Párrafo 195

por una persona conocida por ella, hecho que, a criterio de esta Corte, no resulta adecuado para respetar su diversidad cultural, asegurar la calidad del contenido de la declaración y proteger debidamente la confidencialidad de la denuncia;

iii) no se garantizó que la denuncia de la violación sexual respetara las condiciones de cuidado y privacidad mínimas debidas a una víctima de este tipo de delitos; por el contrario, se llevó a cabo en un lugar con presencia de público, incluso existiendo la posibilidad de que la víctima fuera escuchada por conocidos;

iv) no se realizó la diligencia de investigación sobre la escena del crimen inmediatamente sino que tuvo lugar doce días después de interpuesta la denuncia. Por otra parte, no hay constancia de que las autoridades a cargo de la investigación hayan recabado o adoptado los recaudos inmediatos sobre otros elementos, como por ejemplo, la ropa que llevaba puesta la señora Fernández Ortega el día de los hechos;

v) no se proveyó a la señora Fernández Ortega de atención médica y psicológica adecuada, y

vi) no se protegió la prueba pericial. Por el contrario, como fue admitido por México, hubo un manejo deficiente de la prueba recolectada en el examen médico de la víctima. Llama la atención de la Corte que se haya agotado la misma y que no se previera la necesidad básica de realizar exámenes complementarios, como por ejemplo de ADN, con el fin de avanzar en la determinación de la posible autoría del hecho”.

*“El Tribunal observa con especial preocupación que las autoridades a cargo de la investigación centraron sus esfuerzos en citar a declarar reiteradamente a la señora Fernández Ortega y no en la obtención y aseguramiento de otras pruebas. La Corte destaca que en casos de violencia sexual, la investigación debe intentar evitar en lo posible la revictimización o reexperimentación de la profunda experiencia traumática cada vez que la víctima recuerda o declara sobre lo ocurrido”.*⁶²⁷

“La falta de voluntad, sensibilidad y capacidad en varios de los servidores públicos que intervinieron inicialmente en la denuncia realizada por la señora Fernández Ortega. Asimismo, la carencia de recursos materiales médicos elementales, así como la falta de

⁶²⁷ Ibid. Párrafo 196

utilización de un protocolo de acción por parte del personal de salud estatal y del Ministerio Público que inicialmente atendieron a la señora Fernández Ortega, fue especialmente grave y tuvo consecuencias negativas en la atención debida a la víctima y en la investigación legal de la violación”⁶²⁸.

“Las autoridades estatales no actuaron con la debida diligencia en la investigación de la violación sexual de la señora Fernández Ortega, la cual, además, excedió un plazo razonable. Por ello, el Estado violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial previstos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma e incumplió el deber establecido en el artículo 7.b de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en perjuicio de la señora Fernández Ortega”⁶²⁹.

Discriminación en el acceso a la justicia

“En otras palabras, si se alega que un Estado discrimina en el respeto o garantía de un derecho Convencional, el hecho debe ser analizado bajo el artículo 1.1 y el derecho sustantivo en cuestión. Si por el contrario la alegada discriminación se refiere a una protección desigual de la ley interna, el hecho debe examinarse bajo el artículo 24 de la misma. Por ello, la alegada discriminación en el acceso a la justicia derivada de los artículos 8 y 25, debe ser analizada bajo el deber genérico de respetar y garantizar los derechos Convencionales sin discriminación, reconocidos por el artículo 1.1 de la Convención Americana”⁶³⁰.

“La Corte consideró probado que la señora Fernández Ortega no contó con un intérprete provisto por el Estado a fin de presentar su denuncia y tampoco recibió en su idioma información sobre las actuaciones derivadas de su denuncia. Sin embargo, la imposibilidad de denunciar y recibir información en su idioma en los momentos iniciales implicó, en el presente caso, un trato que no tomó en cuenta la situación de vulnerabilidad de la señora Fernández Ortega, basada en su idioma y etnicidad, implicando un menoscabo de hecho injustificado en su derecho de acceder a la justicia. Con base en lo

⁶²⁸ Ibid. Párrafo 197

⁶²⁹ Ibid. Párrafo 198

⁶³⁰ Ibid. Párrafo 199

anterior, la Corte considera que el Estado incumplió su obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia en los términos de los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación el artículo 1.1 del mismo instrumento”.

“De lo anterior se desprende que se habrían producido determinados actos de amenazas y hostigamientos en contra de la señora Fernández Ortega y de sus familiares, así como de otras personas. Estos hechos, sin embargo, están siendo considerados por el Tribunal a través de las medidas provisionales dispuestas oportunamente y no forman parte del objeto del litigio del presente caso contencioso”.⁶³¹

“Sin perjuicio de lo anterior, la Corte estima que no deben existir obstáculos en la búsqueda de justicia en el presente caso y, por lo tanto, el Estado debe continuar adoptando todas las medidas necesarias para proteger y garantizar la seguridad de las víctimas y demás personas vinculadas con el caso, asegurando que puedan ejercer sus derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial sin restricciones”.⁶³²

3.9.5. PUNTOS RESOLUTIVOS

1. El Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad y a la vida privada, consagrados, respectivamente, en los artículos 5.1 y 5.2, 11.1 y 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 de la misma y 1, 2 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como por el incumplimiento del deber establecido en el artículo 7.a de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en perjuicio de la señora Fernández Ortega, de conformidad con lo expuesto en los párrafos 100 a 131 y 136 a 138 de la presente Sentencia.
2. El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, establecidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de la señora Fernández Ortega: a) en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en los términos de los párrafos 175 a 183 de la presente Sentencia, y b) en relación con el artículo 1.1 de la Convención

⁶³¹ Ibid. Párrafo 213

⁶³² Ibid. Párrafo 214

Americana e incumplió el deber establecido en el artículo 7.b de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en los términos de los párrafos 190 a 198 de la presente Sentencia. Asimismo, México incumplió la obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia, establecido en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1. del mismo instrumento, en perjuicio de la señora Fernández Ortega, en los términos de los párrafos 199 a 201 de la presente Sentencia.

3.9.6. COMENTARIO

Esta sentencia es relevante porque denota la atención que le pone la Corte Interamericana a dos tópicos que tiene que ver con delitos sexuales y la necesidad de proteger a las mujeres indígenas que sufren de violencia contra la mujer.

Los actos de violencia sexual descrito en esta sentencia sirven para determinar cómo el Estado debe actuar ante este tipo de denuncias porque es un mal endémico la necesidad de controlar a la población a través de la violación de las mujeres quienes terminan siendo utilizadas como ejemplo de todo lo que se puede cometer a los pobladores que no cumplen con lo que se pide, o en este caso para asustar a aquellos que están en contra del gobierno.

A ello se agrega que debe considerarse la revictimización a la que se coloca a la víctima cuando se solicita que declare en más de una oportunidad lo ocurrido, lo que genera que deban revivir los actos violentos vividos, incluso al punto de poner en duda sus palabras al comparar sus diferentes declaraciones, cuando —como en este caso— se aprecia que se llega a tomar más de cinco veces la declaración a la agraviada, en diferentes instancias y personas, en espacios abiertos sin ambientes especiales para poder describir hechos que son íntimos porque van a narrar actos que afectan su dignidad, y que como se puede esperar ocurre sin testigos solo entre la víctima y violador, siendo que este último no va a declarar en su contra, por lo que termina siendo la palabra de uno contra otro de tal forma que la declaración de la víctima es fundamental y debe por ello ser considerada como prueba principal y no como una que necesita de la validación por terceros que no van a existir, tanto más que se tratan de hechos que dejan una huella traumática y no cuentan con algún elemento que desvirtúe las múltiples declaraciones de la víctima. Es por esto que la

Corte determina pautas para abordar los casos que tienen que ver con violencia sexual como son:

“i) la declaración de la víctima se realice en un ambiente cómodo y seguro, que le brinde privacidad y confianza; ii) la declaración de la víctima se registre de forma tal que se evite o limite la necesidad de su repetición; iii) se brinde atención médica, sanitaria y psicológica a la víctima, tanto de emergencia como de forma continuada si así se requiere, mediante un protocolo de atención cuyo objetivo sea reducir las consecuencias de la violación; iv) se realice inmediatamente un examen médico y psicológico completo y detallado por personal idóneo y capacitado, en lo posible del sexo que la víctima indique, ofreciéndole que sea acompañada por alguien de su confianza si así lo desea; v) se documenten y coordinen los actos investigativos y se maneje diligentemente la prueba, tomando muestras suficientes, realizando estudios para determinar la posible autoría del hecho, asegurando otras pruebas como la ropa de la víctima, investigando de forma inmediata el lugar de los hechos y garantizando la correcta cadena de custodia, y vi) se brinde acceso a asistencia jurídica gratuita a la víctima durante todas las etapas del proceso”⁶³³

Es por ello importante que se cumpla con una investigación completa sin sesgos , que sea a favor de la mujer como víctima del acto de violencia sexual sin señalar que por algún motivo ella es culpable de la violación, peor aun en esta caso donde hablamos de una persona que ingreso violentamente a la casa de la víctima y en presencia de terceros comete el acto vil, incluso permitió que ocurra en presencia de los hijos de la mujer, mas aún es preocupante que hasta la fecha no se llegó a determinar un culpable de los hechos cuando se intuye que puede identificarse al autor solo revisando los datos de los militares quienes deben tener datos sobre los efectivos militares que estuvieron haciendo las patrullas por la casa de la víctima información que hasta la fecha no fue brindada por los entes militares , lo que no permite otorgar justicia a la señora Fernández Ortega.

Por último es importante denotar el hecho que la víctima en este caso es una mujer indígena que ni siquiera maneja el idioma español reinante en México, quien se siente doblemente desprotegida no solo por su calidad de mujer, sino como mujer indígena que es

⁶³³ Ibid. Párrafo 194

dejada de lado y que para expresar su necesidad de protección de derechos lo debe hacer a través de una tercera persona que debe traducir sus palabras y por ende sus sufrimiento y pensamientos, lo que genera una brecha adicional que crea más violencia porque es tratada de manera marginal por los operadores de justicia que no entienden a la víctima y por ello dejan de lado sus declaraciones o no le toman la importancia debida lo que crea discriminación y falta de justicia ante los actos de violencia sufridos porque los servidores públicos no actúan con voluntad, sensibilidad y capacidad debida para con la víctima, no solo en el ámbito jurídico sino también médico porque no tienen el cuidado los peritos médicos para realizar los exámenes de indemnidad sexual a una persona que ya de por si ha sido objeto de un evento traumático que tiene que pasar por un segundo momento doloroso como es la evaluación para denotar si sufrió o no de un acto violento y que este se vea demostrado en lesiones que coincidan con sus relatos, sin embargo no se considera que en algunas oportunidades no habrán lesiones ante la amenaza mantenida que puede sufrir la víctima que hace que no se defienda ante la posibilidad de perder la vida si lo hace.

Todo lo cual demuestra la dificultad de acceder a la justicia de parte de la señora Fernández Ortega que ha traído como consecuencia que no pueda ver a una persona sancionada por los actos sufridos y que llevó a que su vida y su familia se vea afectada por todo lo ocurrido.

Este caso es un ejemplo de los actos de violencia que fueron comunes en Latinoamérica entre los militares y las mujeres indígenas, en zonas rurales donde la población esta desprotegida porque no tiene vías de comunicación que les permita conseguir ayuda de parte de terceras personas u otras instituciones estatales, que hace más fácil que día a día sigan existiendo estos casos si no cambia la mentalidad de la gente y la falta de sensibilidad de parte del Estado para proteger a la mujer en zonas rurales.

3.10. ROSENDO CANTÚ Y OTRA VS. MÉXICO

3.10.1. FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2010

3.10.2. PRESENTACIÓN DEL CASO ANTE LA CORTE POR LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

PAIS DENUNCIADO	Estados Unidos Mexicanos
DERECHOS AFECTADOS PARA LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS	<p>“expresados en los artículos 5 (Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 25 (Protección Judicial), 11 (Protección de la Honra y de la Dignidad) y 19 (Derechos del Niño) de la Convención Americana, en relación con la obligación general de respeto y garantía de los derechos humanos establecida en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de la señora Rosendo Cantú. También solicitó se declare la responsabilidad del Estado por la violación del artículo 5 (Integridad Personal) de la Convención en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de la niña Yenys Bernardino Rosendo, hija de la señora Rosendo Cantú. Asimismo, señaló que México es responsable por la violación del artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante también “la Convención de Belém do Pará”) y de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante también “la Convención contra la Tortura”), en perjuicio de la señora Rosendo Cantú. Con base en lo anterior, la Comisión solicitó al Tribunal que ordene al Estado determinadas medidas de reparación”.⁶³⁴”.</p>

“El 2 de agosto de 2009, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la Corte una demanda en

⁶³⁴ Ibid. Párrafo 3

*contra de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante “el Estado” o “México”), originada en la petición presentada el 10 de noviembre de 2003 por Valentina Rosendo Cantú (en adelante “la señora Rosendo Cantú” o “la presunta víctima”), la Organización Indígena de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos A.C., el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” A.C. (en adelante también “Tlachinollan”) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.”.*⁶³⁵

*“Según indicó la Comisión Interamericana, la demanda se refiere a la supuesta responsabilidad internacional del Estado por la “violación [sexual] y tortura” en perjuicio de la señora Rosendo Cantú ocurrida el 16 de febrero de 2002, por la “falta de debida diligencia en la investigación y sanción de los responsables” de esos hechos, por “las consecuencias de los hechos del caso en la hija de la [presunta] víctima”, por “la falta de reparación adecuada [en] favor de la [presunta] víctima y sus familiares”, por “la utilización del fuero militar para la investigación y juzgamiento de violaciones a los derechos humanos”, y por “las dificultades que enfrentan las personas indígenas, en particular las mujeres, para acceder a la justicia y a los servicios de salud”.*⁶³⁶

3.10.3. HECHOS

*“Los hechos del presente caso se producen en un contexto de importante presencia militar en el estado de Guerrero, dirigida a reprimir actividades ilegales como la delincuencia organizada. Se ha denunciado que en la represión de tales actividades se vulneran derechos fundamentales. En el estado de Guerrero un importante porcentaje de la población pertenece a comunidades indígenas, quienes conservan sus tradiciones e identidad cultural y residen en los municipios de gran marginación y pobreza. En general, la población indígena se encuentra en una situación de vulnerabilidad, reflejada en diferentes ámbitos, como la administración de justicia y los servicios de salud, particularmente, por no hablar español y no contar con intérpretes, por la falta de recursos económicos para acceder a un abogado, trasladarse a centros de salud o a los órganos judiciales y también por ser víctimas de prácticas abusivas o violatorias del debido proceso”.*⁶³⁷

⁶³⁵ Sentencia Rosendo Cantú vs. México, sentencia 31 de agosto 2010, párrafo 1

⁶³⁶ Ibid. Párrafo 2

⁶³⁷ Ibid. Párrafo 70

“Entre las formas de violencia que afectan a las mujeres en el estado de Guerrero se encuentra la “violencia institucional castrense” “[l]as mujeres indígenas siguen padeciendo las consecuencias de una estructura patriarcal ciega a la equidad de género, especialmente en instancias como fuerzas armadas o policiales, donde se les entrena para la defensa, el combate o el ataque a criminales, pero no se les sensibiliza en los derechos humanos de la comunidad y de las mujeres”. En este contexto, entre 1997 y 2004 se presentaron seis denuncias de violaciones sexuales a mujeres indígenas atribuidas a miembros del Ejército en el estado de Guerrero, las cuales fueron conocidas por la jurisdicción militar sin que conste que en alguno de esos casos se hubiera sancionado a los responsables”⁶³⁸.

“La señora Rosendo Cantú es una mujer indígena perteneciente a la comunidad indígena Me’phaa, originaria de la comunidad de Caxitepec, estado de Guerrero. Al momento de los hechos tenía 17 años, estaba casada con el señor Fidel Bernardino Sierra con quien residía en un lugar que quedaba aproximadamente a una hora caminando de Barranca Bejuco, junto con la hija de ambos, Yenys Bernadino Rosendo, nacida el 23 de noviembre de 2001. La comunidad de Barranca Bejuco se encuentra en una zona montañosa, aislada y, por lo tanto, de difícil acceso”⁶³⁹.

“La señora Rosendo Cantú declaró que el 16 de febrero de 2002, alrededor de las tres de la tarde, se encontraba en un arroyo cercano a su domicilio donde había acudido a lavar ropa. Cuando se disponía a bañarse, ocho militares, acompañados de un civil que llevaban detenido, se acercaron a ella y la rodearon. Dos de ellos la interrogaron sobre “los encapuchados”, le mostraron una foto de una persona y una lista con nombres, mientras uno de ellos le apuntaba con su arma. Indicó que, “por temor a que ellos fueran a hacer[le] algo”, les contestó que no conocía a la gente sobre la cual la interrogaban. El militar que la apuntaba la golpeó en el estómago con el arma, haciéndola caer al suelo y perder el conocimiento por un momento. Relató que cuando recobró el conocimiento se sentó, uno de los militares la tomó del cabello mientras insistió sobre la información requerida, indicándole que si no contestaba iban a matarla así como matarían a todos los de Barranca Bejuco. Manifestó que, a continuación, “con [...] violencia [le] rasguñaron

⁶³⁸ Ibid. Párrafo 71

⁶³⁹ Ibid. Párrafo 72

la cara”, le quitaron la falda y la ropa interior y la tiraron al suelo, y uno de ellos la penetró sexualmente, al término de lo cual el otro que también la interrogaba procedió igualmente a penetrarla sexualmente”⁶⁴⁰.

“Al llegar a su casa la señora Rosendo Cantú contó lo ocurrido a su cuñada, la señora Estela Bernardino Sierra y a su esposo, el señor Fidel Bernardino Sierra, cuando éste regresó al domicilio después de trabajar. Este último se trasladó a Barranca Bejuco para denunciar los hechos a las autoridades comunitarias”⁶⁴¹.

“El 18 de febrero de 2002 la señora Rosendo Cantú, en compañía de su esposo, acudió a una clínica de salud en la comunidad de Caxitepec para que la atendieran por los golpes que recibió, no constando que hubiera indicado al médico que la trató que había sido violada sexualmente. El médico le dio analgésicos y antiinflamatorios para calmar el dolor. El 26 de febrero de 2002 acudieron a Ayutla de los Libres para que fuera atendida en el Hospital, para lo cual tuvieron que caminar aproximadamente ocho horas. Allí fue atendida “por el servicio de consulta general, con el antecedente de traumatismo en abdomen”, donde indicó que “hac[ía] 10 días le [había caído] un trozo de madera en el abdomen, ocasionando dolor, en [dicha área]”, sin indicar que había sido violada sexualmente. En esa consulta se solicitaron “estudios de laboratorio” consistentes únicamente en un examen general de orina”⁶⁴².

“El 27 de febrero de 2002 la señora Rosendo Cantú y el señor Bernardino Sierra interpusieron una queja “en contra de elementos del [E]jército [...] por la violación [de] derechos humanos” ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante “Comisión Nacional” o “CNDH”). El 7 de marzo del mismo año, el Director General de la Comisión Nacional comunicó a la presunta víctima la admisión de la denuncia y, consecuentemente, el inicio de las investigaciones y trámites correspondientes. El 11 de marzo de 2002 la señora Rosendo Cantú y su esposo presentaron una solicitud de intervención al Gobernador Constitucional de Guerrero, en la cual además de solicitar justicia, pidieron “imponer correctivos al servicio de salud al que t[ienen] derecho en la clínica de Caxitepec”⁶⁴³.

⁶⁴⁰ Ibid. Párrafo 73

⁶⁴¹ Ibid. Párrafo 74

⁶⁴² Ibid. Párrafo 75

⁶⁴³ Ibid. Párrafo 76

“El 7 de marzo de 2002 el Presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos presentó una denuncia ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero (en adelante también “Comisión de Derechos Humanos de Guerrero” o “CODDEHUM”), en relación con el caso de la señora Rosendo Cantú, por “presuntas violaciones [...] consistentes en tortura, lesiones y violación sexual por parte de miembros del Ejército”. Ese mismo día la Secretaría de Defensa Nacional emitió un comunicado de prensa manifestando que “los efectivos del Ejército y Fuerza Aérea [m]exicanos, empeñados en la campaña permanente contra el narcotráfico, en el estado de Guerrero, no efectuaron en dicha fecha o próximas, alguna operación en las cercanías de la comunidad Barranca [...] Bejuco”. El 8 de marzo de 2002 el Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero tomó declaración a la señora Rosendo Cantú y a su esposo y comprobó en el registro del Ministerio Público de Allende que no había una denuncia penal por la violación sexual de la señora Rosendo Cantú. Ese mismo día el Ministerio Público de Allende recibió la comunicación de fecha 7 de marzo de 2002 del Visitador General, mediante la cual solicitó iniciar la averiguación previa correspondiente, en la que indicó que “la [señora] Rosendo Cantú [...] fue víctima de actos de tortura y violación sexual el [...] 16 de febrero del año en curso, de conformidad con la queja presentada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”⁶⁴⁴.

“El 8 de marzo de 2002 la señora Rosendo Cantú, en compañía del señor Lugo Cortés y otras personas, interpuso una denuncia por el delito de violación ante el Ministerio Público de Allende. Ese mismo día el Ministerio Público inició la averiguación previa ALLE/SC/02/62/2002 “por el delito de [...] violación”. Inicialmente “no le querían recibir la denuncia argumentando [...], la abogada responsable de la recepción de las quejas relacionadas con violencia sexual, [...] que estaba fuera de su horario de trabajo [...] y que tenía instrucciones [...] de su superior jerárquico de no recibir las quejas”. Por lo anterior, el Visitador General de la CODDEHUM “tuv[o] que insistir en [...] que era necesario recibirle su denuncia”, diligencia que finalmente llevó a cabo “un agente del Ministerio Público ajeno al pueblo Me’paa, [que] no hablaba esta lengua, [sin asistencia de un] perito traductor”, por lo que el esposo de la señora Rosendo Cantú tuvo que ayudarla con la traducción de aquello que no podía comunicar en español. El Visitador

⁶⁴⁴ Ibid. Párrafo 77

General, además, solicitó que “se le practicara un examen médico ginecológico por una doctora”, por ser deseo de la propia víctima. El agente del Ministerio Público, al contar únicamente con un médico legista de sexo masculino, quién además se encontraba fuera del distrito, solicitó al Director de Servicios Periciales de Chilpancingo, Guerrero, “designar [un] perito en materia de [g]inecología, de preferencia que sea del sexo femenino por así solicitarlo la agraviada, para que la examine [y] emita su dictamen correspondiente”⁶⁴⁵.

“El 12 de marzo de 2002 la señora Rosendo Cantú acudió al Hospital de Ayutla acompañada por un agente de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, para una revisión médica ginecológica. La doctora solicitó la realización de varios exámenes de laboratorio. El 15 de marzo de 2002 el Director General de Servicios Periciales informó al Ministerio Público del fuero común, en respuesta a su solicitud de 8 de marzo de 2002, que no contaban con personal especializado en ginecología, sino solamente con “[p]eritos en [m]edicina [l]egal ([m]édico [g]eneral)”. El 19 de marzo de 2002 la señora Rosendo Cantú fue examinada ginecológicamente en las instalaciones del Ministerio Público en Tlapa de Comonfort por un médico legista adscrito a dicha agencia del Ministerio Público local”⁶⁴⁶.

3.10.4. AFECTACION DE DERECHOS

Prueba de la violación sexual de la señora Rosendo Cantú

“La presunta víctima relató y denunció los hechos en varias ocasiones, tanto a nivel interno como en el proceso seguido ante el sistema interamericano”.⁶⁴⁷ “De las diferentes declaraciones de la señora Rosendo Cantú, salvo algunas imprecisiones, se advierte consistencia en lo relatado en cuanto al hecho de la violación sexual. La Corte considera que no es inusual que el recuento de hechos de esta naturaleza contenga algunos aspectos que puedan ser considerados, a priori, inconsistencias en el relato”⁶⁴⁸.

⁶⁴⁵ Ibid. Párrafo 78

⁶⁴⁶ Ibid. Párrafo 79

⁶⁴⁷ Ibid. Párrafo 90

⁶⁴⁸ Ibid. Párrafo 91

“La Corte no encuentra elementos que afecten la credibilidad de sus declaraciones. La presunta víctima es una mujer indígena, en el momento de los hechos menor de edad, que vivía en una zona montañosa aislada, que tuvo que caminar varias horas para recibir asistencia médica por las agresiones físicas sufridas, y para denunciar la violación sexual ante diversas autoridades que hablaban un idioma que ella no dominaba, la cual probablemente tendría repercusiones negativas en su medio social y cultural, entre otros, un posible rechazo de su comunidad. Asimismo, denunció y perseveró en su reclamo, sabiendo que en la zona en la que vive continuaba la presencia de militares, algunos de los cuales ella estaba imputando penalmente la comisión de un delito grave”⁶⁴⁹.

“La Corte considera que el hecho de que no indicara que había sido violada en las dos primeras consultas médicas debe ser contextualizado en las circunstancias propias del caso y de la víctima. En primer lugar, las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar. Ello sucede en las comunidades indígenas, por las particularidades tanto culturales como sociales que la víctima tiene que enfrentar, así como por el miedo en casos como el presente. Asimismo, la señora Rosendo Cantú, al momento de los hechos, era una niña que fue sometida a un evento traumático en el que, además de ser agredida física y sexualmente, recibió por parte de los militares que la atacaron amenazas de muerte contra los miembros de su comunidad. Es en base a esto que, a criterio del Tribunal, el haber respondido que no había sido violada cuando fue preguntada por el primer médico y el no haber indicado la violación sexual por parte de militares en la siguiente visita médica, no desacredita sus declaraciones sobre la existencia de la violación sexual. Por último, dicha omisión puede deberse a no contar con la seguridad o confianza suficiente para poder hablar sobre lo ocurrido”⁶⁵⁰.

“El Tribunal considera que la credibilidad del relato de la señora Rosendo Cantú aparece respaldada por el dictamen médico psiquiátrico que le fue realizado el 11 de marzo de 2002 refirió que la señora Rosendo Cantú sufrió “síndrome por estrés postraumático agudo” y un “episodio depresivo mayor leve” como “consecuencia de experiencias vitales traumáticas”, e indicó que estuvo “expuesta a una experiencia traumática aunque falta la evidencia física de que dicha experiencia fue una violación”. Además, concluyó que “estuvo expuesta a un acontecimiento traumático en el que existió amenaza para su

⁶⁴⁹ Ibid. Párrafo 93

⁶⁵⁰ Ibid. Párrafo 95

integridad física”, el cual “[r]eexperimenta de manera persistente [pues] revive constantemente la sensación de que la están violando”⁶⁵¹.

“Adicionalmente, el Tribunal cuenta con las declaraciones de la señora Estela Bernardino Sierra y del señor Fidel Bernardino Sierra quienes, si bien no fueron testigos directos de los hechos, sí presenciaron los momentos posteriores. Del testimonio de la primera se desprende que cuando vio por primera vez a la presunta víctima luego de los hechos, estaba llorando, semidesnuda y con sangre en la cara e indicó que había sido violada sexualmente y que los responsables eran militares, información a la que se refirió de manera similar el señor Fidel Bernardino Sierra”⁶⁵².

“Además de lo anterior, la Corte cuenta con información de determinadas exploraciones físicas de las que fue objeto la señora Rosendo Cantú con posterioridad a la violación sexual, “presenta[ba] un[a] escoriación aproximadamente a dos centímetros del ojo derecho, justamente en la mejilla, de aproximadamente un centímetro, siendo la única lesión visible a simple vista”. El certificado de lesiones practicado a la presunta víctima por la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero el 8 de marzo de 2002 determinó que tenía “a la altura de la parte inferior del párpado derecho un área amoratada, de forma irregular, de color violáceo, de [cerca de] un centímetro; en relación al golpe que refiere la quejosa que le propinaron en el vientre, no se le apreció huella visible, no obstante manifiesta sentir dolor al caminar”. Asimismo, el certificado médico ginecológico practicado a la señora Rosendo Cantú el 19 de marzo de 2002, esto es, más de un mes después de ocurridos los hechos, indicó, entre otros datos, que “presenta huellas de violencia física[, c]icatriz no reciente de [...] 5mm. de diámetro ubicada en el parpado inferior derecho[; a] la palpación media refiere dolor de mediana intensidad en hipogastrio”⁶⁵³.

“La Corte ha establecido que es legítimo el uso de la prueba circunstancial, los indicios y las presunciones para fundar una sentencia, “siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos”. En los procesos sobre violaciones de derechos humanos la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del

⁶⁵¹ Ibid. Párrafo 99

⁶⁵² Ibid. Párrafo 100

⁶⁵³ Ibid. Párrafo 101

demandante de allegar pruebas, cuando es el Estado quien tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos dentro de su territorio”⁶⁵⁴.

“El Estado no presentó ante este Tribunal avances en la investigación iniciada por las autoridades que permitieran desvirtuar los indicios que apuntan a la existencia de la violación sexual por parte de militares. La Corte advierte que, por el contrario, la defensa del Estado se apoya en el desconocimiento de si la violación había existido y su autoría, lo cual es atribuible a sus propias autoridades. Desde el momento en que el Estado tuvo conocimiento de la existencia de una violación sexual cometida contra quien pertenece a un grupo en situación de especial vulnerabilidad por su condición de indígena y de niña, tiene la obligación de realizar una investigación seria y efectiva que le permita confirmar la veracidad de los hechos y determinar los responsables de los mismos”⁶⁵⁵.

Sobre la violencia sexual

“Este Tribunal recuerda, como lo señala la Convención de Belém do Pará, que la violencia contra la mujer no solo constituye una violación de los derechos humanos, sino que es “una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”, que “trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases”⁶⁵⁶.

“En particular, la violación sexual constituye una forma paradigmática de violencia contra las mujeres cuyas consecuencias, incluso, trascienden a la persona de la víctima”⁶⁵⁷.

“El Tribunal examinará si los hechos del presente caso se subsumen en la figura de tortura, siguiendo la definición establecida en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura:

⁶⁵⁴ Ibid. Párrafo 102

⁶⁵⁵ Ibid. Párrafo 103

⁶⁵⁶ Ibid. Párrafo 108

⁶⁵⁷ Ibid. Párrafo 109

i) *Intencionalidad: El maltrato fue deliberadamente infligido en contra de la víctima. En efecto, la Corte considera probado que uno de los atacantes golpeó en el abdomen a la señora Rosendo Cantú con su arma, cayendo la víctima al suelo, posteriormente la tomaron del cabello y le rasguñaron la cara y, por la fuerza, mientras era apuntada con un arma, fue penetrada sexualmente por dos militares, mientras otros seis presenciaban la ejecución de la violación sexual*⁶⁵⁸.

ii) *Sufrimiento físico o mental severo: Se deben considerar las características del trato, tales como la duración, el método utilizado o el modo en que fueron infligidos los padecimientos, los efectos físicos y mentales que éstos pueden causar, así como las condiciones de la persona que padece dichos sufrimientos, entre ellos, la edad, el sexo y el estado de salud, entre otras circunstancias personales*⁶⁵⁹.

*“La Corte ha establecido que un acto de tortura puede ser perpetrado tanto mediante actos de violencia física como a través de actos que produzcan en la víctima un sufrimiento psíquico o moral agudo”*⁶⁶⁰.

*“La señora Rosendo Cantú estuvo sometida a un acto de violencia y control físico de los militares que la penetraron sexualmente de manera intencional; su vulnerabilidad y la coerción que los agentes estatales ejercieron sobre ella se reforzaron con la participación de otros seis militares también armados, que agravaron el marco de violencia sexual ejercido contra la víctima. Al ser obligada a mantener actos sexuales contra su voluntad, hecho que además fue observado por otras seis personas, es de la mayor intensidad, más aún considerando su condición de niña. El sufrimiento psicológico y moral se agravó dadas las circunstancias en las cuales se produjo la violación sexual, en tanto no podía descartarse que la violencia sufrida se extremara aún más por parte de los agentes estatales que presenciaban el acto de violación, ante la posibilidad de que fuera también violada sexualmente por ellos”*⁶⁶¹.

“La violación sexual de la señora Rosendo Cantú se produjo en el marco de una situación en la que los agentes militares interrogaron a la víctima y no obtuvieron respuesta sobre la

⁶⁵⁸ Ibid. Párrafo 111

⁶⁵⁹ Ibid. Párrafo 112

⁶⁶⁰ Ibid. Párrafo 114

⁶⁶¹ Ibid. Párrafo 115

información solicitada. Sin descartar la eventual concurrencia de otras finalidades, el Tribunal considera probado que el presente caso tuvo la finalidad específica de castigo ante la falta de información solicitada”⁶⁶².

“Por otra parte esta Corte considera que una violación sexual puede constituir tortura aún cuando consista en un solo hecho u ocurra fuera de instalaciones estatales. Esto es así ya que los elementos objetivos y subjetivos que califican un hecho como tortura no se refieren ni a la acumulación de hechos ni al lugar donde el acto se realiza, sino a la intencionalidad, a la severidad del sufrimiento y a la finalidad del acto, requisitos que en el presente caso se encuentran cumplidos”⁶⁶³.

“La Corte considera que la violación sexual de la señora Rosendo Cantú vulneró valores y aspectos esenciales de su vida privada, supuso una intromisión en su vida sexual y anuló su derecho a tomar libremente las decisiones respecto con quien tener relaciones sexuales, perdiendo de forma completa el control sobre sus decisiones más personales e íntimas, y sobre las funciones corporales básicas⁶⁶⁴. “[l]a violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre”⁶⁶⁵.

“Con base en lo anterior, la Corte concluye que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad y a la vida privada, consagrados, respectivamente, en los artículos 5.2, 11.1 y 11.2 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 del mismo tratado y 1, 2 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como por el incumplimiento del deber establecido en el artículo 7.a de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en perjuicio de la señora Rosendo Cantú”⁶⁶⁶.

“La Corte observa que del testimonio de la señora Rosendo Cantú se desprenden afectaciones a su integridad personal relativas al trato que recibió al interponer su

⁶⁶² Ibid. Párrafo 117

⁶⁶³ Ibid. Párrafo 118

⁶⁶⁴ Ibid. Párrafo 119

⁶⁶⁵ Ibid. Párrafo 120

⁶⁶⁶ Ibid. Párrafo 121

denuncia ante las autoridades y a los obstáculos que ha tenido que enfrentar en la búsqueda de justicia y los sentimientos de temor por la presencia de militares”⁶⁶⁷.

“La Comisión señaló que, a raíz de los hechos, la señora Rosendo Cantú fue abandonada por su esposo y tuvo que mudarse a Chilpancingo junto con su hija, como consecuencia del rechazo que sufrió por parte de su comunidad. Este traslado forzoso implicó que “su hija no ha[ya] podido crecer y vivir en su contexto comunitario y [que tenga que] asist[ir] a una escuela [...] donde se utiliza el idioma español y no el [t]lapaneco”. Además su hija “vio afectada su integridad personal tanto como consecuencia de los hechos de la denuncia, como por las actuaciones y omisiones de las autoridades en la investigación de la denuncia de tortura” y que ésta “no ha podido crecer y vivir en su contexto comunitario ni [...] con la tranquilidad que la víctima anhela para sí y para [su hija]”. Por lo anterior, solicitó a la Corte que declare que el Estado mexicano es responsable de la violación del artículo 5.1. de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de la niña Yenys Bernardino Rosendo”⁶⁶⁸.

“La Corte considera, en el caso de la niña Yenys Bernardino Rosendo, quien tenía pocos meses de edad al momento de ocurridos los hechos, que una de las afectaciones que sufrió fueron los destierros que ha debido enfrentar con su madre a raíz de los hechos, el alejamiento de su comunidad y de su cultura indígena, y el desmembramiento de la familia. Estos traslados generaron que su crianza se desarrolle lejos de su familia materna, a la que se encuentra fuertemente vinculada, al punto que ha indicado que “no quiere estar en la ciudad, sino irse con sus [abuelos] a Caxitepec”. Asimismo, la psicóloga González Marín señaló que la niña Yenys Bernardino Sierra “fue creciendo en medio de un escenario violento, lo que ha originado en ella sentimientos de inseguridad y desprotección”. Por otro lado, los cambios de residencia le “han generado confusión [y] constantemente cuestiona a su madre el hecho de estar lejos de la comunidad”. Adicionalmente, los traslados tuvieron como consecuencia también que su educación fuera de la comunidad se desarrolle en escuelas en que sólo se habla español”⁶⁶⁹.

⁶⁶⁷ Ibid. Párrafo 127

⁶⁶⁸ Ibid. Párrafo 133

⁶⁶⁹ Ibid. Párrafo 138

“La Corte concluye que la violación sexual sufrida por la señora Rosendo Cantú, las consecuencias de la misma, y la impunidad en que se mantiene el caso, provocaron una afectación emocional a Yenys Bernardino Rosendo, en contravención del derecho reconocido en el artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento”⁶⁷⁰.

ARTÍCULOS 8 (GARANTÍAS JUDICIALES) Y 25 (PROTECCIÓN JUDICIAL), EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1.1 (OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS) Y 2 (DEBER DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, 7 DE LA CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ Y 1, 6 Y 8 DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA

“En primer lugar, en cuanto al alegato del Estado que afirma que no se han configurado violaciones a las garantías judiciales ni a la protección judicial porque las investigaciones se mantienen en la órbita ministerial, la Corte recuerda su jurisprudencia en el sentido de que las garantías del artículo 8.1 de la Convención no se aplican solamente a jueces y tribunales judiciales o procesos judiciales”.

“La violación sexual de una persona por parte de personal militar no guarda, en ningún caso, relación con la disciplina o la misión castrense. Por el contrario, el acto cometido por personal militar contra la señora Rosendo Cantú afectó bienes jurídicos tutelados por el derecho penal interno y la Convención Americana como la integridad y la dignidad personal de la víctima. La incompatibilidad de la Convención Americana con la intervención del fuero militar en este tipo de casos no se refiere únicamente al acto de juzgar, a cargo de un tribunal, sino fundamentalmente a la propia investigación, dado que su actuación constituye el inicio y el presupuesto necesario para la posterior intervención de un tribunal incompetente. La Corte concluye que el Estado violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial previstos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de la señora Rosendo Cantú. Como lo ha hecho en casos anteriores, ante la conclusión de que la justicia penal militar no resulta competente, el Tribunal considera que no es necesario pronunciarse respecto de otros alegatos sobre independencia o imparcialidad del fuero

⁶⁷⁰ Ibid. Párrafo 139

militar o la eventual violación, con base en los mismos hechos, de otros instrumentos interamericanos”⁶⁷¹.

“La señora Rosendo Cantú no pudo impugnar efectivamente la competencia de la jurisdicción militar para conocer de asuntos que, por su naturaleza, deben corresponder a las autoridades del fuero ordinario. Al respecto, la Corte ha señalado que los Estados tienen la responsabilidad de consagrar normativamente y de asegurar la debida aplicación de los recursos efectivos y de las garantías del debido proceso legal ante las autoridades competentes, que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales o que conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones de éstas. No basta con que los recursos existan formalmente, sino que es preciso que tengan efectividad en los términos del mismo, es decir que den resultados o respuestas a las violaciones de derechos reconocidos, ya sea en la Convención, en la Constitución o por ley. La Corte ha reiterado que dicha obligación implica que el recurso sea idóneo para combatir la violación y que sea efectiva su aplicación por la autoridad competente”⁶⁷².

“En cuanto a la obligación específica de sancionar la violencia contra la mujer, la Comisión señaló que recibió “información sobre los obstáculos que enfrentan las mujeres indígenas para acceder a la justicia, generalmente relacionados con la exclusión social y [l]a discriminación étnica”. Dichos obstáculos pueden ser particularmente críticos, ya que representan formas de “discriminación combinadas”, por ser mujeres, indígenas y pobres”⁶⁷³.

“La Corte recuerda que México reconoció su responsabilidad internacional en relación con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana por los siguientes hechos: la falta de atención médica, oportuna y especializada al momento de la presentación de su denuncia penal, la falta de atención especializada en su calidad de mujer y de menor de edad al momento de la presentación de la denuncia penal, el retardo en la integración de las investigaciones y las afectaciones a la integridad psicológica de la víctima por dicho retraso en la investigación. Por otra parte, sostuvo que no se violaron otros derechos de la

⁶⁷¹ Ibid. Párrafo 161

⁶⁷² Ibid. Párrafo 166

⁶⁷³ Ibid. Párrafo 169

*Convención Americana ni tampoco de ningún otro instrumento jurídico interamericano. De conformidad con lo expuesto, aún subsiste la necesidad de determinar ciertos hechos y resolver la controversia en cuanto a si la investigación penal incumplió aspectos no reconocidos de los derechos derivadas de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, así como el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará y los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”.*⁶⁷⁴

*“La Corte reitera que la obligación de investigar violaciones de derechos humanos se encuentra dentro de las medidas positivas que deben adoptar los Estados para garantizar los derechos reconocidos en la Convención. El deber de investigar es una obligación de medios, y no de resultado. Sin embargo, debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. A la luz de ese deber, una vez que las autoridades estatales tengan conocimiento del hecho, deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva. Esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles, y orientada a la determinación de la verdad”*⁶⁷⁵.

*“En casos de violencia contra la mujer las obligaciones genéricas establecidas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana se complementan y refuerzan, para aquellos Estados que son Parte, con las obligaciones derivadas del tratado interamericano específico, la Convención de Belém do Pará. En su artículo 7.b dicha Convención obliga de manera específica a los Estados Partes a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. De tal modo, ante un acto de violencia contra una mujer, resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección”*⁶⁷⁶.

⁶⁷⁴ Ibid. Párrafo 174

⁶⁷⁵ Ibid. Párrafo 175

⁶⁷⁶ Ibid. Párrafo 177

Necesario para una investigación penal por violencia sexual

“En una investigación penal por violencia sexual es necesario que: i) la declaración de la víctima se realice en un ambiente cómodo y seguro, que le brinde privacidad y confianza; ii) la declaración de la víctima se registre de forma tal que se evite o limite la necesidad de su repetición; iii) se brinde atención médica, sanitaria y psicológica a la víctima, tanto de emergencia como de forma continuada si así se requiere, mediante un protocolo de atención cuyo objetivo sea reducir las consecuencias de la violación; iv) se realice inmediatamente un examen médico y psicológico completo y detallado por personal idóneo y capacitado, en lo posible del sexo que la víctima indique, ofreciéndole que sea acompañada por alguien de su confianza si así lo desea; v) se documenten y coordinen los actos investigativos y se maneje diligentemente la prueba, tomando muestras suficientes, realizando estudios para determinar la posible autoría del hecho, asegurando otras pruebas como la ropa de la víctima, la investigación inmediata del lugar de los hechos y garantizando la correcta cadena de custodia, y vi) se brinde acceso a asistencia jurídica gratuita a la víctima durante todas las etapas del proceso”.⁶⁷⁷

“En el presente caso, además de los hechos reconocidos por el Estado, la Corte considera probado, entre otras, las siguientes omisiones y fallas en la investigación: El Estado tuvo conocimiento de los hechos con anterioridad a la presentación de la denuncia formal el 8 de marzo de 2002 ante el Ministerio Público del fuero civil, pero no inició una investigación inmediata, no proporcionó asistencia médica pronta a la víctima para la realización de las pruebas periciales y no presentó inmediatamente una denuncia penal por el eventual delito contra una niña indígena. Una funcionaria del Ministerio Público del fuero común dificultó la recepción de la denuncia interpuesta por la señora Rosendo Cantú, situación que requirió la intervención de otro servidor público para que aquellos cumplieran con sus obligaciones legales; no se proveyó a la señora Rosendo Cantú, quien al momento de los hechos no hablaba español con fluidez, de la asistencia de un intérprete sino que debió ser asistida por su esposo, hecho que, a criterio de esta Corte no respeta su identidad cultural, y no resulta adecuado para asegurar la calidad del contenido de la declaración ni para proteger debidamente la confidencialidad de la

⁶⁷⁷ Ibid. Párrafo 178

denuncia. El Tribunal considera que resulta particularmente inapropiado que la señora Rosendo Cantú tuviera que recurrir a su marido para relatar los hechos de la violación sexual; no se garantizó que la denuncia de la violación sexual respetara las condiciones de cuidado y privacidad mínimas debidas a una víctima de este tipo de delitos, por el contrario, se llevó a cabo en un lugar con presencia de público, incluso existiendo la posibilidad de que la víctima fuera escuchada por conocidos; no hay constancias de que las autoridades a cargo de la investigación hayan recabado o adoptado los recaudos inmediatos sobre otros elementos, como por ejemplo, la ropa que llevaba puesta la señora Rosendo Cantú el día de los hechos; no se proveyó a la señora Rosendo Cantú de atención médica y psicológica adecuada durante las investigaciones del caso, y las investigaciones del caso estuvieron archivadas durante tres años y diez meses”⁶⁷⁸. “Las autoridades a cargo de la investigación centraron sus esfuerzos en citar a declarar diversas veces a la señora Rosendo Cantú, y no en la obtención y aseguramiento de otras pruebas. La Corte destaca que, en casos de violencia sexual, la investigación debe intentar evitar en lo posible la revictimización o reexperimentación de la profunda experiencia traumática cada vez que la víctima recuerda o declara sobre lo ocurrido”⁶⁷⁹.

“Asimismo, el Tribunal observa que en el presente caso ha concurrido la falta de voluntad, sensibilidad y capacidad de varios de los servidores públicos que intervinieron inicialmente en la denuncia realizada por la señora Rosendo Cantú. Asimismo, la falta de utilización de un protocolo de acción por parte del personal de salud estatal y del Ministerio Público que inicialmente atendieron a la señora Rosendo Cantú, fue especialmente grave y tuvo consecuencias negativas en la atención debida a la víctima y en la investigación legal de la violación”⁶⁸⁰.

“Con base en las anteriores consideraciones y en el reconocimiento parcial de responsabilidad del Estado, la Corte Interamericana concluye que las autoridades estatales no actuaron con la debida diligencia en la investigación de la violación sexual de la señora Rosendo Cantú, la cual, además, excedió un plazo razonable. Por ello, el Estado violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial previstos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la

⁶⁷⁸ Ibid. Párrafo 179

⁶⁷⁹ Ibid. Párrafo 180

⁶⁸⁰ Ibid. Párrafo 181

*misma e incumplió el deber establecido en el artículo 7.b de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en perjuicio de la señora Rosendo Cantú”.*⁶⁸¹

Sin interprete

“La Corte consideró probado que la señora Rosendo Cantú no contó con un intérprete provisto por el Estado cuando requirió atención médica, ni cuando presentó su denuncia inicial, ni tampoco recibió en su idioma información sobre las actuaciones derivadas de su denuncia. Para poder poner en conocimiento de las autoridades el delito que la había afectado y acceder a información debió recurrir a su esposo que hablaba español. La imposibilidad de denunciar y recibir información en su idioma en los momentos iniciales implicó, en el presente caso, un trato que no tomó en cuenta la situación de vulnerabilidad de la señora Rosendo Cantú, basada en su idioma y etnicidad, implicando un menoscabo de hecho injustificado en su derecho de acceder a la justicia. Con base en lo anterior, la Corte considera que el Estado incumplió su obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia en los términos de los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación el artículo 1.1 del mismo instrumento.”

*“Por último, la Corte encontró probado que funcionarios del Estado de diversas competencias tuvieron conocimiento de los hechos del caso con anterioridad a las fechas reconocidas por el Estado, específicamente el 27 y 28 de febrero de 2002. Asimismo, en cuanto a la atención médica inicial de los días 18 y 26 de febrero de 2002, en especial, respecto de si los médicos fueron informados sobre la violación sexual, el Tribunal ya se pronunció anteriormente en esta Sentencia. No obstante, la Corte observa que, si bien el médico que atendió a la víctima el 18 de febrero de 2002 habría dispensado la atención primaria solicitada, recibió información sobre una agresión física a una niña, cometida por militares, por lo cual, de conformidad con el ordenamiento jurídico interno, debió haber informado a las autoridades competentes”*⁶⁸².

⁶⁸¹ Ibid. Párrafo 182

⁶⁸² Ibid. Párrafo 192

3.10.5. PUNTOS RESOLUTIVOS

2. El Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad y a la vida privada, consagrados, respectivamente, en los artículos 5.1 y 5.2, 11.1 y 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 de la misma y 1, 2 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como por el incumplimiento del deber establecido en el artículo 7.a de la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en perjuicio de la señora Rosendo Cantú, de conformidad con lo expuesto en los párrafos 89 a 121 y 127 a 131 de la presente Sentencia.

5. El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, establecidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de la señora Rosendo Cantú: a) en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en los términos de los párrafos 159 a 167 de la presente Sentencia, y b) en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana e incumplió el deber establecido en el artículo 7.b de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en los términos de los párrafos 174 a 182 de la presente Sentencia. Asimismo, México incumplió la obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia, establecido en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1. del mismo instrumento, en perjuicio de la señora Rosendo Cantú, en los términos de los párrafos 183 a 185 de la presente Sentencia.

3.10.6. COMENTARIO

Cada hecho de violencia sexual es diferente, a pesar que podamos pensar que los hechos detallados en esta sentencia son parecidos a los esgrimidos en el proceso de Fernández Ortega , previamente revisado no son iguales.

Y es que los actos de violencia sexual generan sufrimiento en cada mujer que los sufre y en la comunidad de la que son parte, al punto de resquebrajar familias y aldeas, dado que de

por si el acto de violencia es una afrenta hacia cada uno de los integrantes del lugar, porque ante la educación machista en la que todavía nos encontramos significa para muchos la no protección de los hombres sobre sus mujeres y la prevalencia del usurpador sobre lo que consideran mas débil o frágil de su pueblo, sin dejar de lado que debido a tales las mujeres son consideradas mancilladas y por ello a veces proscritas de su propia familia, cuando no fue algo que ellas quisieron sino que se les fue impuesto y fueron obligadas, sufrimiento que no solo genera el propio acto, sino las consecuencias posteriores a ello.

En este caso es incluso peor, el acto de violencia fue cometido por un grupo de militares cuya misión es defender a la población, quienes aprovechando de tal superioridad es que impusieron su presencia en el domicilio de la señora Rosendo Cantú, e inclusive en presencia de sus hijos es que fue vejada sexualmente. A lo que se agrega que significa una forma de discriminación porque le impide escoger con quien tener relaciones sexuales, que es una decisión muy personal e íntima menguando sus derechos y libertades a comparación del hombre.

Una de las diferencias principales con el caso de Fernández Ortega es que la señora Rosendo era menor de edad a la fecha de cometidos los hechos materia del proceso, lo que agrava las circunstancias; y por más que a la fecha ya tenía una hija no deja de estar protegida por los derechos que la asisten, hecho que no se dio en este caso, porque ni siquiera porque era menor de edad se le trató como tal al momento de interponer la denuncia o cuando se investigó la misma.

Peor aún debido a los actos de violencia, su esposo la dejó y tuvo que salir de su comunidad que le dio la espalda y tuvo que irse con su hija a vivir a otro espacio que genera la separación de la señora Rosendo y su hija de su cultura, es así que la niña Yenys tuvo que crecer fuera de su comunidad sin la posibilidad de conocer su cultura lejos de su familia materna a quienes expresa que extraña, todo ello por estar con su madre quien sufrió de actos en contra de su voluntad.

No podemos dejar de observar que en este caso al igual que muchos el problema que atañe es la falta de investigación concienzuda de parte del Estado, así como la falta de cuidado que recibió la señora Rosendo ante los hechos , porque ni siquiera tuvo un establecimiento de salud cercano donde poder tratarse y también ser observado el caso, peor aún que los

hechos fueron cometidos por integrantes de la milicia de quienes se puede esperar que fueron enviados para proteger y no para intimidar, menos aún con un vejamen sexual.

Regresa a nuestra investigación dos frases que se mantienen constantes a través de todas las sentencias, que la investigación en lo que tiene que ver con hechos de violencia contra la mujer es una obligación de medios y no de resultado y debe ser realizada por el Estado de oficio, y no solo por una formalidad sino porque hay un interés serio en proteger a las víctimas. Y todo ello porque el Estado debe exteriorizar en estas acciones su rechazo total a la violencia contra la mujer y su propósito cierto por erradicar tal mal social. Mas aún cuando se tratan de personas que viven en zonas rurales y tienen ascendencia indígena donde por la lejanía se ven aisladas de una correcta administración de justicia lo que demuestra la falta de cuidado del Estado por esta población a quienes también se debe.

Asimismo en este caso se muestra la revictimización de la que fue objeto la señora Rosendo Cantú a quien se le citó en múltiples oportunidades para relatar los hechos, incluso sin un traductor especializado, sino que quien tuvo que hacer de interprete fue su propio esposo, además no hubo la demostración de asegurar otras pruebas fundamentales para la investigación, sin dejar de lado el menosprecio de parte de los servidores públicos ante los actos sufridos demostrado en la falta de cuidado y delicadeza al momento de tomar una declaración o la falta de utilización de un protocolo de acción lo que tiene consecuencias negativas a la investigación legal de la violación, lo que se acredita porque hasta la fecha no se tiene conocimiento que se haya llegado a determinar un autor del hecho punible.

3.11. LA MASACRE DE LAS DOS ERRES VS. GUATEMALA

3.11.1. FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2009

3.11.2. PRESENTACION DEL CASO ANTE LA CORTE POR LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

PAIS DENUNCIADO	República de Guatemala
DERECHOS AFECTADOS PARA LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS	Por la violación de los artículos 25 (Protección Judicial) y 8 (Garantías Judiciales) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) del mismo instrumento, en perjuicio de dos sobrevivientes de la masacre y 153 familiares de las personas que fallecieron durante la misma.

“El 30 de julio de 2008, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte una demanda contra la República de Guatemala (en adelante “el Estado” o “Guatemala”). La petición inicial fue presentada por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante “CEJIL”) ante la Comisión el 13 de septiembre de 1996. El 1 de abril de 2000 el Estado y los representantes de las presuntas víctimas (en adelante “los representantes”) pactaron un acuerdo en el marco de una solución amistosa, mediante la cual el Estado reconoció su responsabilidad internacional y se comprometió a reparar a las presuntas víctimas. Sin embargo, el 20 de febrero de 2006 los representantes manifestaron su voluntad de apartarse del acuerdo de solución amistosa, por lo que se prosiguió con el trámite ante la Comisión”⁶⁸³.

“La demanda se relaciona con la supuesta falta de debida diligencia en la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de la masacre de 251 habitantes del

⁶⁸³ Caso La Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala, sentencia del 24 de noviembre del 2009, párrafo 1

Parcelamiento de Las Dos Erres, la Libertad, Departamento de Petén, ocurrida entre los días 6 a 8 de diciembre de 1982. Dicha masacre fue ejecutada por miembros del grupo especializado de las fuerzas armadas de Guatemala denominados kaibiles. Entre los habitantes del Parcelamiento se encontraban niños, mujeres y hombres. Las personas ejecutadas, habrían sufrido previamente golpes y maltratos, así como muchas mujeres habrían sido violadas y golpeadas hasta el punto de sufrir abortos. Adicionalmente, en el contexto de la masacre uno de los Kaibiles que participó en ella, sustrajo a un niño sobreviviente, se lo llevó a su casa, y lo registró con sus apellidos. Recién en 1994 se iniciaron las investigaciones sobre dicha masacre, en el marco de las cuales se realizaron algunas diligencias de exhumación. Sin embargo, el supuesto uso indiscriminado y permisivo de recursos judiciales, el retardo injustificado por parte de las autoridades judiciales y la falta de una investigación exhaustiva, juzgamiento, y sanción de los responsables está pendiente hasta el día de hoy”⁶⁸⁴.

3.11.3. VÍCTIMAS

“La Corte considera que las presuntas víctimas en el presente caso son aquellas que la Comisión individualizó e identificó en el párrafo siete de la demanda, a saber: a) dos sobrevivientes de la masacre, y b) 153 personas que son familiares de quienes murieron en ésta”⁶⁸⁵.

3.11.4. HECHOS

“Entre los años 1962 y 1996 en Guatemala hubo un conflicto armado interno que provocó grandes costos humanos, materiales, institucionales y morales. La CEH estima que “el saldo en muertos y desaparecidos del enfrentamiento armado interno llegó a más de doscientas mil personas”⁶⁸⁶. Durante el conflicto armado interno el Estado aplicó la denominada “Doctrina de Seguridad Nacional”. En el marco de esa doctrina se fue acrecentando la intervención del poder militar para enfrentar a la subversión, concepto que incluía a toda persona u organización que representara cualquier forma de oposición al Estado, con lo cual dicha noción se equiparaba a la de “enemigo interno”, bajo las dictaduras de los generales Romeo Lucas García (1978-1982) y Efraín Ríos Montt (1982-

⁶⁸⁴ Ibid. Párrafo 2

⁶⁸⁵ Ibid. Párrafo 21

⁶⁸⁶ Ibid. Párrafo 70

1983)”⁶⁸⁷.

“Estas acciones militares, ejecutadas “con conocimiento o por orden de las más altas autoridades del Estado”, consistieron principalmente en matanzas de población, conocidas como masacres y “operaciones de tierra arrasada”.”⁶⁸⁸

“Entre las acciones perpetradas por agentes del Estado se encuentra la Masacre del Parcelamiento de Las Dos Erres, acaecida entre los días 6 a 8 de diciembre de 1982. El Parcelamiento de Las Dos Erres, en la Libertad, Petén, fue fundado en 1978 en el marco de una fuerte migración de campesinos motivados por la búsqueda de tierras y por efecto de la colonización promovida por la agencia gubernamental Fomento y Desarrollo de Petén (FYDEP). Para diciembre de 1982 el Parcelamiento tenía alrededor de 300 a 350 habitantes”⁶⁸⁹.

*“Durante 1982 se incrementó la presencia de las Fuerzas Armadas Rebeldes (en adelante “FAR”) en las cercanías al Parcelamiento de Las Dos Erres, tal como de la aldea cercana de Las Cruces. En septiembre del mismo año se registró un enfrentamiento entre miembros de las FAR y agentes estatales en Las Cruces. A raíz de este suceso, el comisionado militar del lugar organizó una Patrulla de Autodefensa Civil (en adelante “PAC”) en Las Dos Erres, con el objetivo de que patrullara la zona de Las Cruces conjuntamente con la PAC de esa zona. Los habitantes de Las Dos Erres señalaron que sólo accederían a formar una PAC para que patrullara en su propia comunidad y no en Las Cruces. Como consecuencia de esta negativa se acusó a los pobladores de Las Dos Erres de ser miembros de la guerrilla”.*⁶⁹⁰

“El comisionado de Las Cruces difundió el rumor de que los habitantes de Las Dos Erres pertenecían a la guerrilla y entre las pruebas presentadas al ejército, había un saco para recolección de cosecha de uno de los fundadores del Parcelamiento, Federico Aquino Ruano, donde figuraban las siglas FAR. Estas iniciales correspondían a su nombre y coincidían con las de las Fuerzas Armadas Rebeldes. Cuando ya corría el rumor en la zona de que el ejército bombardearía pronto el Parcelamiento de Las Dos Erres, un

⁶⁸⁷ Ibid. Párrafo 71

⁶⁸⁸ Ibid. Párrafo 73

⁶⁸⁹ Ibid. Párrafo 74

⁶⁹⁰ Ibid. Párrafo 75

convoy militar sufrió una emboscada de las FAR a pocos kilómetros de Las Cruces y las FAR se llevaron 19 fusiles del Ejército. Como reacción, la zona militar 23 de Poptún solicitó el envío del pelotón especial de Kaibiles con el fin de recuperar los fusiles. El 4 de diciembre de 1982 un pelotón de 17 Kaibiles llegó por avión a la base aérea de Santa Elena, Petén”.⁶⁹¹

“El 6 de diciembre de 1982 se preparó una acción militar del grupo especializado de las Fuerzas Armadas, durante la cual los superiores del pelotón reunieron a los Kaibiles y les indicaron que tenían que vestirse como guerrilleros para confundir a la población y destruir la aldea, todo lo que se mirara mover se tenía que matar”.⁶⁹²

“El día 7 de diciembre de 1982 en la madrugada, soldados guatemaltecos pertenecientes al mencionado grupo especial denominado Kaibiles llegaron a Las Dos Erres y sacaron a las personas de sus casas. A los hombres los encerraron en la escuela del Parcelamiento y a las mujeres y niños en la iglesia evangélica. Mientras los mantuvieron encerrados los golpearon e incluso algunos murieron como consecuencia de los golpes”.⁶⁹³

“Alrededor de las 4:30 p.m. los Kaibiles sacaron a los hombres de la escuela y los llevaron vendados y maniatados a un pozo de agua inconcluso donde los fusilaron. Después sacaron a las mujeres y los niños para llevarlos al mismo lugar. En el camino muchas niñas fueron violadas por los Kaibiles, particularmente por los subinstructores. Al llegar al Pozo, los Kaibiles hincaban de rodillas a las personas y les preguntaban si pertenecían a la guerrilla, luego los golpeaban con un mazo de hierro en el cráneo o les disparaban, para luego lanzar los cadáveres al interior del pozo. En los hechos de la masacre perdieron la vida por lo menos 216 personas⁶⁹⁴. Cerca de las 6:00 p.m. llegaron al Parcelamiento dos niñas, las cuales fueron violadas por dos instructores militares. Al día siguiente, cuando los Kaibiles se marcharon se llevaron a las dos niñas y las violaron nuevamente para luego degollarlas. Antes de marcharse llegaron al Parcelamiento otras seis familias, las cuales fueron fusiladas”.⁶⁹⁵

⁶⁹¹ Ibid. Párrafo 76

⁶⁹² Ibid. Párrafo 77

⁶⁹³ Ibid. Párrafo 78

⁶⁹⁴ Ibid. Párrafo 79

⁶⁹⁵ Ibid. Párrafo 80

“El día 9 de diciembre de 1982, vecinos de la aldea Las Cruces se acercaron a Las Dos Erres y descubrieron trastos tirados por todas partes, los animales sueltos, también vieron sangre, cordones umbilicales y placentas en el suelo, ya que la crueldad desplegada por los soldados alcanzó tal punto que a las mujeres embarazadas les causaron abortos producto de los golpes que les propinaban, incluso saltando sobre el vientre de dichas mujeres hasta que salía el feto malogrado. Según declararon testigos en el proceso interno, el Teniente Carías, comandante del destacamento militar de Las Cruces, informó a la población que lo que había sucedido en Las Dos Erres era que la guerrilla se había llevado a las personas para México, y luego ordenó a sus soldados que sacaran todo lo que pudieran del Parcelamiento: enseres domésticos, animales y granos, entre otros: y que quemaran las casas de Las Dos Erres”⁶⁹⁶.

“Posteriormente, en el año 1990 se inició un proceso de paz en Guatemala que culminó en el año 1996. Dentro de este período fueron firmados doce acuerdos, entre ellos el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, la cual inició su labor en el año 1997”⁶⁹⁷.

“En el período comprendido entre el 9 de marzo de 1987, cuando el Estado reconoció la competencia contenciosa de la Corte, y el 13 de junio de 1994, no consta que el Estado hubiese adoptado medidas dirigidas a esclarecer, investigar, juzgar y eventualmente sancionar a los presuntos responsables de los hechos de la Masacre de Las Dos Erres”⁶⁹⁸.

“El 14 de junio de 1994 FAMDEGUA presentó una denuncia penal por el delito de asesinato en perjuicio de diversas personas que se encontraban inhumadas en el Parcelamiento de Las Dos Erres. Asimismo, solicitó al juez que se realizara la exhumación de los cadáveres que se encontraban en el referido lugar⁶⁹⁹. Los trabajos de exhumación iniciaron el 4 de julio de 1994. El 29 de julio de 1995 se realizó una diligencia judicial donde se expusieron 162 osamentas, de las cuáles se procedió a inscribir la defunción en el Registro Civil de la Municipalidad de la Libertad, Petén el 14 de abril de 2000. Sin embargo, el 19 de mayo de 2000 el Fiscal Especial para el caso de

⁶⁹⁶ Ibid. Párrafo 81

⁶⁹⁷ Ibid. Párrafo 83

⁶⁹⁸ Ibid. Párrafo 84

⁶⁹⁹ Ibid. Párrafo 85

la Masacre de Las Dos Erres (en adelante “el Fiscal”) solicitó la inscripción de la defunción de otras 71 personas fallecidas en la masacre que fueron identificadas, pero el Juzgado de Primera Instancia Penal de Petén resolvió no dar lugar a la solicitud”⁷⁰⁰.

“De otra parte, 26 de junio de 1996 el Ministerio Público requirió información al Ministro de Defensa. El 21 de enero de 1997 el citado ministro informó que no podían proporcionarse nombres de encargados o miembros del destacamento de la aldea Las Cruces, en virtud de que no hubo un destacamento permanente, por lo que sólo remitió una lista de las armas usadas en la época. El 12 de junio de 1997 el Ministro de Defensa señaló que respecto de la solicitud de nombre, apellido, cargo, base militar o destacamento en donde se encontraba el oficial (llamado Carlos, Manuel o Carlos Manuel) Carías, habían varios oficiales cuyo primer apellido era Carías. Asimismo informó que quienes ocuparon el puesto de Ministro de la Defensa Nacional durante los años 1982 y 1983 fueron los Generales de División Luis René Mendoza Palomo y Oscar Humberto Mejía Victores, respectivamente. Finalmente, el 29 de agosto de 1997 el Ministro de Defensa informó el último domicilio registrado de algunos de los sospechosos y los cargos ocupados por algunos miembros del ejército vinculados con los hechos de la masacre”⁷⁰¹.

“Entre los meses de agosto de 1996 y julio de 1999, la Fiscalía recibió declaraciones de algunos familiares de las personas fallecidas durante la masacre y testigos, así como de la señora Lidia García Pérez, quien relató que su hijo “Fernando Ramiro López García” era “adoptado” y que su marido, Santos López Alonso, le contó que lo había sacado de Las Dos Erres. Asimismo, rindieron declaraciones, en calidad de prueba anticipada un sobreviviente y dos integrantes de la patrulla de Kaibiles, los días 11 de febrero de 1999 y 17 de marzo de 2000, respectivamente”.⁷⁰²

“Los días 7 de octubre de 1999 y 4 de abril de 2000 el Juzgado de Primera Instancia Penal de Petén ordenó la aprehensión de uno de los kaibiles y de 16 implicados, respectivamente, por el delito de asesinato cometido en perjuicio de las personas fallecidas en el Parcelamiento de Las Dos Erres”⁷⁰³.

⁷⁰⁰ Ibid. Párrafo 86

⁷⁰¹ Ibid. Párrafo 87

⁷⁰² Ibid. Párrafo 88

⁷⁰³ Ibid. Párrafo 89

“Contra dichas órdenes de aprehensión fueron interpuestos tres recursos de amparo por nueve de los sindicatos, con fundamento en que “[la] Ley de Reconciliación Nacional, en su artículo 11, párrafo tercero, establece que cuando [se] conociere de alguno de los delitos referidos en los artículos 4 y 5 de dicha Ley, [se] trasladará inmediatamente el asunto a la Sala de la Corte de Apelaciones [...] a efectos de que se determine [...] la procedencia o no de la extinción de la responsabilidad penal a que se refiere dicha [l]ey”. La Corte de Constitucionalidad otorgó provisionalmente los amparos, por lo que el Juzgado de Primera Instancia Penal de Petén decidió dejar sin efecto las órdenes de aprehensión. Asimismo, uno de los sindicatos fue dejado en libertad luego de haber sido aprehendido. Finalmente los días 3 y 4 de abril de 2001 la Corte de Constitucionalidad suspendió las órdenes de aprehensión y consideró que el expediente penal debía remitirse inmediatamente a la Corte de Apelaciones para decidir sobre la aplicación de la LRN, por referirse a hechos ocurridos durante el conflicto armado”⁷⁰⁴.

“El 7 de marzo de 2002 el referido Juzgado reiteró las órdenes de captura vigentes contra siete imputados. Además, el 21 de junio de 2002 resolvió enviar a la Sala Duodécima de la Corte de Apelaciones el expediente del proceso No.1316-94, a fin de que se resolviera respecto de la aplicación de la LRN”⁷⁰⁵.

“El 3 de julio de 2002 se desarrolló una diligencia mediante la cual se rindieron las declaraciones testimoniales de los abuelos biológicos del sobreviviente Ramiro Osorio Cristales y se llevó a cabo su extracción de sangre así como la señora de Lidia García Pérez, “madre adoptiva” de Ramiro Osorio Cristales, para el análisis de ADN”⁷⁰⁶.

“El 5 de febrero de 2003 el Fiscal presentó ante la Sala Décima de la Corte de Apelaciones su planteamiento sobre la aplicación de la LRN. Manifestó que la Ley en mención resulta aplicable exclusivamente a hechos delictivos producidos en el enfrentamiento armado interno, por personas involucradas en dicho enfrentamiento y con el fin de “prevenir, impedir, perseguir o reprimir los delitos reconocidos en los artículos 2 y 4 de la citada ley como políticos y comunes conexos”, y expresó: “¿de qué forma

⁷⁰⁴ Ibid. Párrafo 90

⁷⁰⁵ Ibid. Párrafo 92

⁷⁰⁶ Ibid. Párrafo 93

pretendían los sindicatos prevenir, impedir, perseguir o reprimir los delitos a que se refieren los artículos 2 y 4 de la [LRN], con la violación de las niñas y mujeres o con el asesinato de niños recién nacidos o niños pequeños y ancianos, o con la tortura y posterior asesinato de toda una población civil desarmada y en estado de indefensión? Dentro de este contexto es evidente que los hechos ocurridos [...] en el Parcelamiento de ‘Las Dos Erres’, en ningún momento fueron cometidos por el ejército de Guatemala, con los fines enunciados en el artículo 5 de la citada Ley”. Como conclusión, el Fiscal solicitó el rechazo de la pretensión de aplicación de la LRN y solicitó que se prosiguiera con el trámite del proceso penal”⁷⁰⁷.

“Entre los meses de marzo de 2003 y de 2009 fueron interpuestos tres recursos de amparo, de los cuales uno fue otorgado ordenando que se anulara todo lo actuado a partir del 28 de diciembre de 1996, otro rechazado, y el último se encuentra pendiente de resolución”⁷⁰⁸.

“En definitiva, a raíz de la tramitación del proceso penal, entre los meses de abril de 2000 y marzo de 2009 los sindicatos han interpuesto alrededor de 33 recursos de amparo, 19 recursos de reposición, 19 reclamos de subsanación, dos solicitudes de enmienda y una acción de inconstitucionalidad”⁷⁰⁹.

3.11.5. AFECTACIONES DE DERECHOS

ARTÍCULOS 8 Y 25 DE LA CONVENCION AMERICANA, EN RELACION CON LOS ARTÍCULOS 1 Y 2 DE ESE TRATADO; ARTÍCULOS 1, 6 Y 8 DE LA CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA LA TORTURA, Y ARTÍCULO 7.B) DE LA CONVENCION DE BELEM DO PARÁ.

De la celeridad del proceso y el plazo razonable

“En cuanto a la celeridad del proceso en general, este Tribunal ha señalado que el “plazo razonable” al que se refiere el artículo 8.1 de la Convención se debe apreciar en relación con la duración total del procedimiento que se desarrolla hasta que se dicta

⁷⁰⁷ Ibid. Párrafo 97

⁷⁰⁸ Ibid. Párrafo 99

⁷⁰⁹ Ibid. Párrafo 100

sentencia definitiva. El derecho de acceso a la justicia implica que la solución de la controversia se produzca en tiempo razonable, ya que una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales. En este sentido, la falta de respuesta estatal es un elemento determinante al valorar si se han violado los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana”⁷¹⁰.

“La Corte observa que, luego de transcurridos 15 años desde la interposición de la demanda por FAMDEGUA, el proceso penal sigue en su etapa inicial, lo cual constituye una demora excesiva en la administración de justicia”.⁷¹¹

“En el caso concreto la Corte ha constatado que, efectivamente el retardo injustificado en el proceso penal por más de 15 años es atribuible no solo al uso indiscriminado de recursos por parte de los imputados, sino a la falta de voluntad e interés de las autoridades judiciales del Estado que han conocido de los mismos, ya que no han tramitado debidamente numerosos recursos, y han sometido el caso al procedimiento establecido en la LRN, el cual se encuentra pendiente de decisión; todo lo cual ha provocado la paralización del proceso penal. Dicha situación ha constituido un retardo excesivo en la investigación, lo cual viola el plazo razonable y es atribuible al Estado”⁷¹².

“La investigación que se sigue en la jurisdicción interna no ha sido completa y exhaustiva, ya que sólo se refiere a afectaciones a la vida, y no a aquellas otras relacionadas con hechos de presuntas torturas contra miembros del Parcelamiento y otros actos alegados de violencia contra la población infantil y las mujeres. Al respecto, la Comisión refirió que se debería “tener presente lo establecido en la [...] Convención de Belém Do Pará, [...] que obliga a actuar con la debida diligencia al momento de investigar y sancionar los hechos de violencia contra las mujeres”. Por su parte, los representantes solicitaron a la Corte que declarara al Estado responsable por el incumplimiento de los derechos contenidos en los artículos 1, 6 y 8 de la CIPST y 7.b) de la Convención de Belém do Pará”⁷¹³.

⁷¹⁰ Ibid. Párrafo 132

⁷¹¹ Ibid. Párrafo 133

⁷¹² Ibid. Párrafo 135

⁷¹³ Ibid. Párrafo 136

“El Estado tenía la obligación de investigar con la debida diligencia todos esos hechos, obligación que se encontraba pendiente al momento del reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte el 9 de marzo de 1987. Dicha obligación fue reafirmada por el Estado con motivo de la ratificación de la CIPST el 29 de enero de 1987 y posteriormente con la Convención de Belém do Pará el 4 de abril de 1995, por lo que el Estado debía velar por su cumplimiento a partir de ese momento⁷¹⁴, aún cuando éstas no habían sido adoptadas por el Estado al momento de la masacre. Así, este Tribunal ha establecido que “[el Estado] tiene el deber de garantizar el derecho de acceso a la justicia [...] conforme a las obligaciones específicas que le imponen las Convenciones especializadas [...] en materia de prevención y sanción de la tortura y de la violencia contra la mujer”.

“Si bien la denuncia interpuesta por FAMDEGUA el 14 de junio de 1994 se presentó por el delito de asesinato en perjuicio de las personas inhumadas en el Parcelamiento de Las Dos Erres, las declaraciones de los ex kaibiles en el procedimiento penal el 27 de mayo de 1997 relataron que “mientras los tenían reunidos [...] empezaron a torturar a los hombres para que les dijeran donde estaban las armas y quiénes eran guerrilleros en la comunidad [y que] también violaron a algunas niñas en presencia de sus padres”. Asimismo, señalaron que “el Instructor Manuel Pop Sun [...] violó [a una niña] drásticamente” y que “así [...] estuvieron masacrando [y a las mujeres] no [fue] solo [...] violarlas, [sino también] matarlas en el momento[...] las violaron salvajemente”. También el sobreviviente Salomé Armando Gómez Hernández declaró el día 1 de diciembre de 1995 que “[había visto] que golpeaban a los hombres con las armas y a patadas los botaban al suelo [...] y a las mujeres las jalaban [d]el pelo y las pateaban”. Además, en la misma fecha, el testigo César Franco Ibáñez declaró que “comenzaron también [...] a violar niñas[,] se oían los gritos y los lamentos de las pobres niñas [...] que estaban violando”. El Estado tuvo conocimiento oficial de supuestos hechos de torturas contra la población adulta y la niñez del Parcelamiento, así como abortos y otras formas de violencia sexual contra niñas y mujeres, perpetuados durante tres días. Sin embargo, el Estado no inició una investigación tendiente a esclarecer lo ocurrido e imputar las responsabilidades correspondientes”⁷¹⁵.

Sobre la violencia sexual

⁷¹⁴ Ibid. Párrafo 137

⁷¹⁵ Ibid. Párrafo 138

“La Corte observa, a manera de contexto, que tal como lo señala la CEH, durante el conflicto armado las mujeres fueron particularmente seleccionadas como víctimas de violencia sexual. Asimismo, en otro caso ocurrido en el mismo contexto en el cual se sitúa esta masacre, esta Corte estableció como hecho probado que “[l]a violación sexual de las mujeres fue una práctica del Estado, ejecutada en el contexto de las masacres, dirigida a destruir la dignidad de la mujer a nivel cultural, social, familiar e individual”. En el caso de Las Dos Erres, las mujeres embarazadas fueron víctimas de abortos inducidos y otros actos de barbarie. Asimismo, en el peritaje de la psicóloga Nieves Gómez Dupuis, efectuado en agosto de 2005, se señaló que “las torturas ejemplificantes, las violaciones sexuales y los actos de crueldad extrema, produjeron en las víctimas [...] un daño grave a la integridad mental”⁷¹⁶.

“El Tribunal estima que la falta de investigación de hechos graves contra la integridad personal como torturas y violencia sexual en conflictos armados y/o dentro de patrones sistemáticos, constituyen un incumplimiento de las obligaciones del Estado frente a graves violaciones a derechos humanos, las cuales contravienen normas inderogables (jus cogens) y generan obligaciones para los Estados como la de investigar y sancionar dichas prácticas, de conformidad con la Convención Americana y en este caso a la luz de la CIPST y de la Convención de Belém do Pará”⁷¹⁷.

“El Estado debió iniciar ex officio y sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva de todos los hechos de la masacre relacionados con la vulneración de la vida, así como respecto a otras afectaciones específicas contra la integridad personal, tales como las supuestas torturas y actos de violencia contra la mujer con una perspectiva de género, y de conformidad con los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, y las obligaciones específicas dispuestas en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura y 7.b) de la Convención Belém do Pará”⁷¹⁸.

“En cuanto a la falta de investigación, captura y eventual sanción de los responsables, tanto los representantes como la Comisión han indicado que en el curso de la

⁷¹⁶ Ibid. Párrafo 139

⁷¹⁷ Ibid. Párrafo 140

⁷¹⁸ Ibid. Párrafo 141

investigación se han producido una serie de actuaciones u omisiones de las autoridades estatales que han configurado una falta de debida diligencia y denegación de justicia”.

719

*“Por lo menos 60 soldados participaron en la ejecución de la masacre, esto sin contar a otros autores materiales, intelectuales o en general partícipes de ésta. Sin embargo, sólo se han individualizado a 20 personas, por lo que las investigaciones no han abarcado a la totalidad de los presuntos responsables. Asimismo, diversas autoridades judiciales han ordenado y reiterado la aprehensión de por lo menos 17 sindicados en oportunidades distintas. No obstante, sólo se aprehendió a uno de ellos, quien posteriormente fue puesto en libertad. En consecuencia, la Corte nota que en general dichas órdenes no han sido ejecutadas y que el mismo Estado así lo ha reconocido”.*⁷²⁰

*“Además, la Corte considera que las autoridades estatales están obligadas a colaborar en la recaudación de la prueba para alcanzar los objetivos de una investigación y abstenerse de realizar actos que impliquen obstrucciones para la marcha del proceso investigativo. En el presente caso, el Ministro de Defensa se rehusó a aportar cierta documentación requerida por los tribunales”*⁷²¹.

*“Aunado a lo anterior, la Corte considera que las amenazas e intimidaciones sufridas por algunos de los testigos que han rendido sus declaraciones en el proceso interno no pueden verse aisladamente, sino que se deben considerar en el marco de obstaculizaciones de la investigación del caso. Por ende, tales hechos se convierten en otro medio para perpetuar la impunidad en el presente caso e impedir que se conozca la verdad de lo ocurrido”*⁷²².

“Las exhumaciones realizadas, el Tribunal observa que si bien hasta el año 1995 el Estado inició una serie de diligencias para exhumar e identificar algunas de las personas que fueron ejecutadas en la masacre, no continuó realizando labores de búsqueda y ubicación de las demás personas que fallecieron en ésta. De la misma manera, el Estado no ha efectuado diligencias para identificar las osamentas ya ubicadas, con el fin de que

⁷¹⁹ Ibid. Párrafo 142

⁷²⁰ Ibid. Párrafo 143

⁷²¹ Ibid. Párrafo 144

⁷²² Ibid. Párrafo 145

*las presuntas víctimas del presente caso terminen con el sufrimiento y daño ocasionado por estos hechos*⁷²³. A este respecto, la Corte recuerda que dentro del deber de investigar subsiste el derecho de los familiares de la víctima a conocer cuál fue el destino de ésta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos ”⁷²⁴.

*“La Corte considera que la investigación de los hechos de la masacre no ha sido asumida como un deber propio del Estado, y ésta no ha estado dirigida eficazmente a la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y eventual sanción de todos los responsables, de modo que se examinen de forma completa y exhaustiva la multiplicidad de afectaciones ocasionadas a los pobladores del Parcelamiento de Las Dos Erres. Asimismo, la investigación tampoco ha estado encaminada hacia la identificación y entrega de los restos de las personas que murieron en la masacre. Finalmente, el Estado no ha realizado con debida diligencia las acciones necesarias para ejecutar las órdenes de aprehensión que se encuentran vigentes, ni ha brindado la colaboración requerida por los tribunales, a fin de esclarecer los hechos. Todo ello en detrimento del derecho a conocer la verdad de lo sucedido ”*⁷²⁵.

*“La Corte ha considerado que en el marco de los artículos 1.1, 8 y 25 de la Convención las víctimas o sus familiares tienen el derecho, y los Estados la obligación, de que los hechos sean efectivamente investigados por las autoridades del Estado, y a conocer los resultados de la investigación. El Tribunal recuerda que el derecho a conocer la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o de sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención ”*⁷²⁶.

“La Corte constata que la Masacre de Las Dos Erres se enmarcó en un contexto sistemático de violaciones masivas a los derechos humanos en Guatemala, en el cual ocurrieron múltiples masacres. Dada la magnitud de la masacre, así como el contexto generalizado de violencia ejercida por el Estado, resulta evidente que éste debe investigar seriamente a todos los presuntos responsables, incluyendo la participación

⁷²³ Ibid. Párrafo 146

⁷²⁴ Ibid. Párrafo 147

⁷²⁵ Ibid. Párrafo 148

⁷²⁶ Ibid. Párrafo 151

intelectual de altos oficiales y funcionarios estatales, así como la ubicación e identidad de las personas fallecidas. El actuar de la judicatura del Estado y la falta de voluntad y desinterés de las autoridades han impedido el acceso a la justicia de las víctimas, y convertido el aparato judicial en un sistema indiferente ante la impunidad”⁷²⁷.

“El uso indiscriminado y permisivo de recursos judiciales como lo es el recurso de amparo, el cual ha sido utilizado como pilar de la impunidad, aunado al retardo injustificado y deliberado por parte de las autoridades judiciales, así como la falta de una investigación completa y exhaustiva de todos los hechos de la masacre, han impedido la investigación, juzgamiento y eventual sanción de todos los presuntos responsables. Por lo tanto, el Estado no ha garantizado el acceso a la justicia y reparación integral de las presuntas víctimas del caso. Con base en las precedentes consideraciones y en el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado, la Corte encuentra a éste responsable por la violación de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, y por la violación de las obligaciones establecidas en los artículos 1, 6 y 8 de la CIPST y 7.b) de la Convención de Belém do Pará, en perjuicio de las 155 víctimas del presente caso, en sus respectivas circunstancias”⁷²⁸.

“Asimismo, este Tribunal considera que el Estado es responsable por el incumplimiento de los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, por la falta de adopción de medidas tanto de carácter normativo como de carácter práctico conducente a garantizar la efectividad del recurso de amparo”⁷²⁹.

3.11.6. PUNTOS RESOLUTIVOS

2. El Estado violó los derechos a las garantías y protección judicial consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, y violó las obligaciones establecidas en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y en el artículo 7.b) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia

⁷²⁷ Ibid. Párrafo 152

⁷²⁸ Ibid. Párrafo 153

⁷²⁹ Ibid. Párrafo 154

contra la Mujer, en perjuicio de las 155 víctimas del presente caso, en sus respectivas circunstancias, en los términos de los párrafos 69 a 154 de este Fallo.

3.11.7. COMENTARIO

Este caso nos lleva a recordar el uso abusivo y violento de los estamentos militares durante las acciones en contra de diferentes pueblos y aldeas con el fin de reprimir a agentes paramilitares. En casos como estos donde no se midió la fuerza y donde la población rural estuvo en el medio entre la guerra interna del Estado y las fuerzas Rebeldes murieron muchos inocentes y de maneras muy cruentas.

En esta tesis resaltamos los actos de violencia contra la mujer, que no escapan en los hechos relatados en esta sentencia donde se hace alusión a que las mujeres fueron violadas salvajemente y luego indiscriminadamente asesinadas, al punto que fueron golpeadas con tal salvajismo que generó que sufrieran abortos lo que se prueba porque en los caminos se encontró sangre, cordones umbilicales y placentas lo que denota la crueldad con que fueron tratadas, hechos que hacen ver los actos de tortura que sufrieron tanto ellas como aquellos que presenciaron estos actos y eran utilizados para que estos que eran observadores declararan sobre cosas que no sabían.

Muchos sufrieron, muchas fueron violadas entre mujeres y niñas, varias mujeres embarazadas perdieron a sus hijos por los golpes que recibieron, muchos murieron, y nadie hizo nada.

En este caso como en otros se hace referencia a que los actos investigatorios han sido demorados, y el Estado no ha hecho lo necesario por esclarecer, investigar y juzgar a los responsables. Sin embargo, se nota la diferencia en que una vez que se ha llegado a identificar varios investigados muchos de estos interpusieron acciones de amparo que han demorado la investigación, al punto que hasta la fecha no se tiene conocimiento que alguna persona ha llegado a ser juzgada y sancionada por lo ocurrido.

De tal manera que se aprecia que de nuevo es el Estado el encargado de investigar y no lo ha hecho, no lo hizo cuando reconoció la competencia de la Corte Interamericana en el año de 1987, tampoco cuando ratificó la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar

la Tortura en el mismo año 1987 y menos aún cuando ratifico la Convención de Belem do Pará en el año 1995, y es que recién en el año de 1997 inició actuaciones preliminares para ubicar los cuerpos y por ende las investigaciones por los hechos ocurridos en el Parcelamiento de Dos Erres que hasta la fecha continúan, lo que prueba que no se garantizó el derecho de acceso a la justicia de los sobrevivientes y familiares, lo que lleva a la impunidad reinante por lo ocurrido.

Algo a denotar es que nuevamente la Corte hace alusión a la intención de destruir la dignidad de la mujer a nivel cultural, social, familiar e individual en el momento que se cometían las violaciones sexuales, la cual era una practica del Estado en el contexto de las masacres cometidas hecho que no solo tiene que ver con la violencia contra la mujer misma sino con la tortura de la que fueron objeto tanto ellas como sus familiares que eran obligados a observar tales actos, manifestando la intención de los militares de demostrar su superioridad ante la falta de posibilidad de la población de proteger a sus mujeres y niñas.

Todo lo cual nos lleva a un escenario de impunidad que continúa no solo por la falta de operancia del Estado, sino por el uso inadecuado de acciones de amparo de parte de los investigados que no ha permitido avanzar en investigaciones que de por si iniciaron tardíamente.

3.12. MASACRES DE RÍO NEGRO VS. GUATEMALA

3.12.1. FECHA: SENTENCIA DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 2012

3.12.2. PRESENTACIÓN DEL CASO ANTE LA CORTE POR LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

PAIS DENUNCIADO	República de Guatemala
DERECHOS AFECTADOS PARA LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS	Violación de los derechos reconocidos en los siguientes artículos de la Convención Americana: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica), 4 (Derecho a la Vida), 5 (Integridad Personal), 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre), 7 (Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 11 (Protección de la Honra y de la Dignidad), 12 (Libertad de Conciencia y de Religión), 16 (Libertad de Asociación), 17 (Protección a la Familia), 19 (Derechos del Niño), 21 (Derecho a la Propiedad Privada), 22 (Derecho de Circulación y de Residencia), 24 (Igualdad ante la Ley) y 25 (Protección Judicial), en relación con la obligación general de respeto y garantía de los derechos humanos establecida en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los miembros de la comunidad de Río Negro. Asimismo, solicitó que se declare el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos I de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (en adelante “Convención sobre Desaparición Forzada”); 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante “Convención contra la Tortura”), y 7.b de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Pará.

“El 30 de noviembre de 2010, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana y el artículo 35 del Reglamento de la Corte, la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la jurisdicción de la Corte el caso Masacres de Río Negro en contra de la República de Guatemala (en adelante “el Estado” o “Guatemala”)⁷³⁰.

“El presente caso versa sobre “la destrucción de la comunidad maya de Río Negro, mediante una serie de masacres ejecutadas por el Ejército de Guatemala y miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil en los años 1980 y 1982, así como [sobre] la persecución y eliminación de sus miembros, y las posteriores violaciones en contra de los sobrevivientes, incluida la falta de investigación de los mencionados hechos. En especial, la Comisión presentó este caso debido a la denegación de justicia desde la comisión de los hechos y la consecuente impunidad que persiste hasta la fecha [...]”. Asimismo, la Comisión indicó que “dentro de los hechos [que se ponen] en conocimiento de la Corte [se incluyen], entre otros, los relativos a las desapariciones forzadas, el desplazamiento forzado, la integridad personal de los familiares y sobrevivientes, la destrucción del tejido social de la comunidad, la falta de identificación de las personas ejecutadas y desaparecidas [...], la consecuente falta de entierro de las mismas con base en las tradiciones mayas, la imposibilidad de los sobrevivientes de regresar a sus tierras, la falta de protección a los niños y niñas, el señalamiento como “guerrilleros, base social de la guerrilla, enemigos internos y subversivos”, la discriminación [y] la [supuesta] falta de investigación imparcial y efectiva de la multiplicidad de violaciones ocurridas durante y después de las masacres”. La Comisión también alegó que los hechos del presente caso “[...] se enmarcan en un contexto más general de masacres en Guatemala, las cuales fueron planificadas por agentes estatales dentro de una política de “tierra arrasada” dirigida por el Estado guatemalteco contra el pueblo maya, calificado como “enemigo interno”, en un contexto de discriminación y racismo [...]”.⁷³¹

3.12.3. VÍCTIMAS.

“Por tratarse de cinco masacres, tomando en cuenta la magnitud del caso, la naturaleza de los hechos y el tiempo transcurrido, el Tribunal estima razonable que sea complejo identificar e individualizar a cada una de las presuntas víctimas. El Tribunal tendrá como presuntas víctimas a aquellas personas identificadas e individualizadas por los

⁷³⁰ Caso masacre Río Negro vs. Guatemala, sentencia del 04 de setiembre del 2012, p. 1

⁷³¹ Ibid. Párrafo 2

representantes que hayan sufrido alguna violación de derechos humanos que se encuentre dentro del ámbito de competencia temporal de la Corte y del reconocimiento parcial de responsabilidad del Estado, de acuerdo con lo resuelto en los Capítulos IV y V de esta Sentencia, en virtud de que el Tribunal cuenta con la prueba necesaria para verificar la identidad de cada una de esas personas”⁷³².

3.12.4. HECHOS

“Entre los años 1962 y 1996 hubo un conflicto armado interno en Guatemala que provocó grandes costos humanos, materiales, institucionales y morales⁷³³. El Estado aplicó lo que denominó “Doctrina de Seguridad Nacional”, acrecentando la intervención del poder militar para enfrentar a la “subversión”, concepto que incluía a toda persona u organización que representara cualquier forma de oposición al Estado, con lo cual dicha noción se equiparaba a la de “enemigo interno”. La CEH concluyó que en aplicación de esta Doctrina, el 91% de las violaciones registradas se produjo entre los años 1978 y 1983, bajo las dictaduras de los generales Romeo Lucas García (1978-1982) y José Efraín Ríos Montt (1982-1983). Durante estos años, operativos militares consistentes principalmente en matanzas de población, conocidas como masacres u “operaciones de tierra arrasada”, se concentraron en las regiones del Quiché, Huehuetenango, Chimaltenango, Alta y Baja Verapaz, la costa sur y Ciudad de Guatemala. De acuerdo con el Informe de la CEH, alrededor de 626 masacres fueron ejecutadas mediante actos de extrema crueldad destinados a eliminar a las personas o grupos de personas “definidos como enemigo”, y a “aterrorizar a la población”⁷³⁴.

“El ejército de Guatemala identificó a los miembros del pueblo indígena maya dentro de la categoría de “enemigo interno”, por considerar que estos constituían o podían constituir la base social de la guerrilla. Según la CEH, el pueblo maya fue el grupo étnico más afectado por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el enfrentamiento armado, sufriendo el desplazamiento forzado y la destrucción de sus comunidades, viviendas, ganado, cosechas y otros elementos de supervivencia”⁷³⁵.

⁷³² Ibid. Párrafo 51

⁷³³ Ibid. Párrafo 56

⁷³⁴ Ibid. Párrafo 57

⁷³⁵ Ibid. Párrafo 58

“Durante el conflicto armado las mujeres fueron particularmente seleccionadas como víctimas de violencia sexual. Así, durante y de modo previo a las mencionadas masacres u “operaciones de tierra arrasada”, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado perpetraron violaciones sexuales masivas o indiscriminadas y públicas, acompañadas en ocasiones de la muerte de mujeres embarazadas y de la inducción de abortos. Esta práctica estaba dirigida a destruir la dignidad de la mujer a nivel cultural, social, familiar e individual. Además, cabe señalar que según la CEH, cuando eran perpetradas en contra de comunidades mayas, “las violaciones masivas tenían un efecto simbólico, ya que las mujeres mayas tienen a su cargo la reproducción social del grupo[... y] personifican los valores que deben ser reproducidos en la comunidad”⁷³⁶.

“las familias que sufrieron las acciones de la política de tierra arrasada y que tuvieron que desplazarse, al empobrecimiento inmediato habrían de sumar las grandes dificultades de recuperación debido a la pérdida completa del patrimonio, a veces acumulado a lo largo de años e incluso de generaciones”.⁷³⁷ Posteriormente, en el año 1990 se inició un proceso de paz en Guatemala que culminó en 1996. Dentro de este período fueron firmados doce acuerdos, entre ellos, uno para el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, la cual inició su labor en el año 1997. Dicha Comisión conoció de numerosas masacres, incluidas las del Municipio de Rabinal, Departamento de Baja Verapaz, Guatemala, lugar en el cual tuvieron lugar los hechos del presente caso”.⁷³⁸

“La cuenca del Río Chixoy o Río Negro ha sido habitada por comunidades mayas desde el período preclásico maya, y el pueblo Achí se asentó en dicho lugar en los primeros años del siglo XIX. Durante la década de los setenta del siglo XX d. C., la comunidad maya Achí de Río Negro, asentada a las orillas del mismo en el municipio de Rabinal, contaba con una población de aproximadamente 800 personas organizadas de forma comunal, que transmitía su cosmovisión e historia de generación en generación mediante una tradición oral y escrita. Vivía de la agricultura, la pesca y el intercambio de productos con la comunidad vecina de Xococ, entre otras”⁷³⁹.

⁷³⁶ Ibid. Párrafo 59

⁷³⁷ Ibid. Párrafo 62

⁷³⁸ Ibid. Párrafo 64

⁷³⁹ Ibid. Párrafo 65

“En el año 1975 el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) de Guatemala presentó el proyecto de construcción de la represa hidroeléctrica “Pueblo Viejo-Quixal” en la cuenca del Río Chixoy. Según la CEH, “[e]l plan contempló la inundación de más de 50 kilómetros a lo largo del río y algunos afluentes, lo cual afectaría a cerca de 3445 personas [...]”, quienes debían desplazarse y reasentarse en otro lugar. En el año 1977 comenzaron los trabajos sobre la desviación del río, muro y el túnel, y en junio de 1978 el gobierno declaró el área en emergencia nacional por lo que el “INDE se comprometió a buscar y a entregar a los desplazados iguales o mejores tierras que las que iban a ser inundadas”. Sin embargo “[l]as autoridades pretendieron asentar a los pobladores de Río Negro en Pacux, un lugar árido, y en casas que rompían su esquema cultural de vida”. Como consecuencia, la comunidad rechazó las propuestas del Estado y se resistió a dejar sus tierras. Por su parte, el ejército guatemalteco declaró que el rechazo de la comunidad se debió a influencias subversivas. Para el mes de enero de 1983 “las compuertas de la represa se cerraron y comenzó a llenarse el embalse”. Como consecuencia, la mayor parte del territorio que ocupaba la comunidad de Río Negro quedó inundada. Otro de los lugares inundados fue Los Encuentros, sitio arqueológico y lugar sagrado para los mayas de la zona”⁷⁴⁰.

“De acuerdo a la CEH, “las matanzas que revistieron la forma de masacres fueron acompañadas de la destrucción y quema de bienes. En el norte de Rabinal, la región próxima al embalse del Chixoy fue completamente arrasada”. En esta área se encontraba la comunidad de Río Negro, entre otras”⁷⁴¹.

“El 4 de marzo de 1980 dos miembros del ejército guatemalteco y un agente de la Policía Militar Ambulante (en adelante “PMA”) llegaron a la aldea de Río Negro en búsqueda de algunas personas que acusaban de haber robado víveres de los trabajadores del INDE que construían la represa en el Río Chixoy. Los miembros de la comunidad de Río Negro se reunieron frente a la capilla de la aldea, tras lo cual surgió una discusión y aparentemente fue golpeado el agente de la PMA. La prueba que consta en el expediente discrepa en cuanto a si fue dicho agente o sus compañeros quienes seguidamente dispararon en contra de las personas ahí reunidas, resultando en la muerte de seis de éstas, mientras que otra persona fue herida y trasladada al hospital de Cobán, Alta Verapaz, donde falleció

⁷⁴⁰ Ibid. Párrafo 66

⁷⁴¹ Ibid. Párrafo 67

posteriormente. Las siete personas ejecutadas eran líderes y representantes de la comunidad”⁷⁴².

“Luego de esta masacre, Valeriano Osorio Chen y Evaristo Osorio, dos líderes del comité de la comunidad de Río Negro que negociaba con el INDE el reasentamiento, fueron convocados a una reunión que se realizaría el 8 de julio de 1980 en las oficinas de dicha entidad estatal en “Chinatzul, [...] entre Santa Cruz y San Cristóbal Verapaz”, con la instrucción de que llevaran consigo los libros que contenían los acuerdos suscritos y compromisos adquiridos por la misma. Los dos líderes comunitarios partieron ese día con el propósito de acudir a la reunión con el INDE, sin embargo, no regresaron de esa cita y sus cuerpos desnudos fueron encontrados varios días después en Purulha, Baja Verapaz, con heridas producidas por armas de fuego”⁷⁴³.

“A principios de febrero de 1982, un grupo de hombres armados incendiaron el mercado de la aldea de Xococ y mataron a cinco personas. El ejército guatemalteco identificó estos hechos con la guerrilla y con la comunidad de Río Negro, por lo que la comunidad de Xococ se declaró enemiga de esta última y rompió los vínculos comerciales que tenía con la misma. El ejército armó, adiestró y organizó a los pobladores de Xococ en patrullas de autodefensa civil, quienes se enfrentaron con la comunidad de Río Negro”⁷⁴⁴.

“El 6 o 7 de febrero de 1982 los patrulleros de Xococ citaron a su aldea a varios miembros de la comunidad de Río Negro en nombre del ejército guatemalteco. Al llegar a Xococ, las personas citadas fueron objeto de castigos y recriminaciones por parte de los patrulleros de Xococ, quienes les acusaron de ser guerrilleros y de haber quemado el mercado. Los patrulleros retuvieron las cédulas de identificación de las personas de Río Negro presentes y les ordenaron volver el sábado siguiente para recuperarlas”⁷⁴⁵.

“El 13 de febrero de 1982 varios miembros de la comunidad de Río Negro regresaron a Xococ a recoger sus cédulas. Ahí los esperaban los “[p]atrulleros de [a]utodefensa [c]ivil de Xococ [y] militares”, armados con “garrotes, palos, lazos y machetes [...]”. Estos rodearon a los pobladores de Río Negro que se encontraban presentes, recogieron dinero

⁷⁴² Ibid. Párrafo 68

⁷⁴³ Ibid. Párrafo 69

⁷⁴⁴ Ibid. Párrafo 70

⁷⁴⁵ Ibid. Párrafo 71

(limosnas) de ellos y luego les dejaron hacer sus compras en el mercado. Hacia el medio día, los patrulleros de Xococ formaron a las personas de Río Negro en filas y separaron a los hombres de las mujeres y los niños. De conformidad con el testimonio de la señora Teodora Chen, miembro de la comunidad de Río Negro que sobrevivió a estos hechos, los hombres fueron llevados por “una bajada” y, luego de escuchar “un tonel [r]edoblant[e]”, entendió que los habían matado”⁷⁴⁶.

“Posteriormente, los patrulleros de Xococ congregaron a los pobladores de Río Negro restantes frente a una iglesia, amarraron a algunos y/o los atacaron “con garrotes [y] machetes”. Luego encerraron a las personas en un edificio sin agua ni comida, y algunas permanecieron así durante dos días”⁷⁴⁷.

“Finalmente, durante la tarde del domingo 14 de febrero de 1982, la señora Teodora Chen escapó de sus captores y caminó toda la noche hacia Río Negro, llegando en horas de la mañana siguiente a contar lo que había ocurrido en Xococ. Ella sugirió a los miembros de su comunidad esconderse, por lo que varias personas dejaron sus casas y se fueron a vivir a los cerros aledaños. Ese día llegaron soldados y patrulleros de Xococ a Río Negro preguntando en cada casa por los hombres, a quienes acusaban de haberse unido a la guerrilla. De conformidad con el testimonio de Francisco Chen Osorio que consta en el expediente, “los patrulleros y soldados dejaron dicho a las mujeres [que] si no aparec[ían] los hombres, entre un mes se [iban ellas]”⁷⁴⁸.

“Un mes después, alrededor de las seis de la mañana del 13 de marzo de 1982, llegaron a la comunidad de Río Negro miembros del ejército guatemalteco y patrulleros de la aldea de Xococ cargando armas, palas, piochas, lazos, alambres y machetes. Pasaron casa por casa preguntando por los hombres, pero la mayoría no se encontraba debido a que pernoctaban en el monte por motivos de seguridad. Mediante acusaciones de que la ausencia de los hombres era muestra de que se encontraban con la guerrilla, les exigieron a las mujeres, incluso a las embarazadas, a los ancianos y a los niños salir de sus casas, supuestamente para participar en una reunión, y saquearon la aldea”⁷⁴⁹.

⁷⁴⁶ Ibid. Párrafo 72

⁷⁴⁷ Ibid. Párrafo 73

⁷⁴⁸ Ibid. Párrafo 74

⁷⁴⁹ Ibid. Párrafo 75

*“Posteriormente, los patrulleros y soldados obligaron a las personas, principalmente mujeres, algunas de ellas amarradas del cuello o de las manos, a caminar por aproximadamente 3 kilómetros montaña arriba, sin agua ni comida, hasta un cerro conocido como “Pacoxom”. Camino a dicho cerro, los soldados y patrulleros insultaron, empujaron, golpearon y azotaron con ramas y garrotes a las personas, incluso a mujeres embarazadas, y mataron a algunas que no podían continuar. También obligaron a las mujeres a bailar, según ellos, como lo hacían con los guerrilleros. Algunas de las niñas y mujeres fueron apartadas del grupo y violadas sexualmente, y consta en el expediente que al menos una de ellas se encontraba en estado de embarazo”.*⁷⁵⁰

“Al llegar al cerro de Pacoxom, los patrulleros y soldados escarbaron una fosa y procedieron a matar a las personas de Río Negro que se encontraban presentes. Ahorcaron a varias personas usando palos o lazos, y a otras las mataron con machetes o disparándoles. Mataron a los bebés y a los niños con machetes, agarrándolos de los pies o del pelo para lanzarlos contra las piedras o los árboles hasta que perdieran la vida, o también amontonándolos en pequeños grupos para dispararles a todos juntos. Los cadáveres de las personas masacradas fueron tirados a una quebrada cercana o a una fosa que los patrulleros y soldados habían cavado, la cual posteriormente cubrieron con piedras y ramas”⁷⁵¹. Asimismo, durante la masacre, los patrulleros y militares escogieron a 17 niños de la comunidad de Río Negro para llevárselos consigo a la aldea de Xococ⁷⁵². Algunos de estos niños se ofrecieron ellos mismos o las madres para que se los llevaran los patrulleros para así evitar que los mataran. Luego de las masacres, los niños fueron obligados a caminar, con hambre y sed, hasta Xococ, donde a algunos se los llevaron los soldados o los patrulleros, mientras que otros fueron conducidos a la iglesia de la aldea para ser entregados a los miembros de la comunidad de Xococ. Los niños de Río Negro fueron obligados a vivir con tales personas, algunos por períodos de dos a cuatro años, aproximadamente, y fueron forzados a trabajar. Consta en el expediente que algunos de estos niños fueron amenazados y maltratados, y se les prohibió el contacto con familiares sobrevivientes de las masacres. A algunos niños se les impuso una nueva identidad, hasta que fueron recuperados por familiares gracias a gestiones realizadas ante la autoridad municipal. Además de los 17 niños mencionados, pocas personas sobrevivieron a la

⁷⁵⁰ Ibid. Párrafo 76

⁷⁵¹ Ibid. Párrafo 77

⁷⁵² Ibid. Párrafo 78

masacre. Consta en el expediente que fueron asesinados al menos 70 mujeres y 107 niños”⁷⁵³.

“Algunos de los sobrevivientes de la masacre ocurrida en Pacoxom se refugiaron en un sitio sagrado conocido como “Los Encuentros”. En dicho lugar, el 14 de mayo de 1982, aproximadamente a las 13 horas, un grupo de soldados y patrulleros atacaron a la comunidad, disparando y lanzando granadas. Violaron sexualmente a varias mujeres, incendiaron casas, y colgaron y amarraron a varias personas de los árboles, obligándolos a pararse en una plancha que ardía sobre fuego hasta que fallecieran. De este modo, los patrulleros y soldados mataron a por lo menos 79 personas. Asimismo, en al menos tres ocasiones, llegó a la comunidad un helicóptero del ejército al cual hicieron abordar a por lo menos a 15 personas de las que no se volvió a tener noticia. Varios de los sobrevivientes huyeron a las montañas, donde se refugiaron del asedio por parte del ejército y los patrulleros”⁷⁵⁴.

“Un grupo de sobrevivientes de las masacres de Pacoxom y Los Encuentros huyeron a un caserío conocido como “Agua Fría” en el departamento de Quiché, Guatemala. El 14 de septiembre de 1982 llegó a dicho lugar un grupo de soldados y patrulleros, quienes agruparon a las personas en un inmueble. Les dispararon desde afuera y luego le prendieron fuego al inmueble, matando a aproximadamente a 92 personas. Consta en el expediente que por lo menos una persona, la señora Timotea Lajuj López, sobrevivió a la masacre debido a la intervención de su hermano, quien prestaba servicio militar”⁷⁵⁵.

“Aquellas personas que lograron escapar de las distintas masacres perpetradas en contra de la comunidad de Río Negro se refugiaron en las montañas, algunos por años, despojados de todas sus pertenencias, durmiendo a la intemperie y moviéndose continuamente a fin de huir de los soldados y patrulleros que los perseguían aún después de las masacres. Algunas personas fueron muertas mediante disparo durante dichas persecuciones. Además, los integrantes de la comunidad de Río Negro experimentaron severas dificultades para encontrar comida, a la vez que varios niños y adultos murieron de hambre pues el ejército y los patrulleros destruían los sembradíos que lograban tener.

⁷⁵³ Ibid. Párrafo 79

⁷⁵⁴ Ibid. Párrafo 80

⁷⁵⁵ Ibid. Párrafo 81

Algunas mujeres dieron a luz en la montaña, y sólo pudieron registrar a sus hijos tiempo después, con fechas y lugares de nacimiento falsos, para protegerlos”.⁷⁵⁶

“Al entrar en vigor una ley de amnistía en el año 1983, algunos sobrevivientes de las masacres bajaron de las montañas y fueron reasentados por el gobierno en la colonia Pacux, ubicada detrás del destacamento militar de Rabinal. Sin embargo, la violencia contra los miembros de la comunidad de Río Negro continuó en dicho lugar. Al respecto, consta en el expediente que algunas de las personas que pretendieron vivir ahí fueron interrogadas, detenidas por días sin comer, amenazadas, obligadas a trabajar forzosamente, torturadas, desaparecidas y asesinadas, y que algunas mujeres fueron violadas sexualmente⁷⁵⁷. “[e]n Pacux las condiciones de vida son precarias y las tierras no son adecuadas para su agricultura de subsistencia”⁷⁵⁸. “se redefini[eron] forzosamente las relaciones con otras personas, situación que afectó principalmente a los niños de ese entonces, influyendo en las formas de traspaso transgeneracional de la cultura”.⁷⁵⁹

“Sobre las masacres en la capilla de Río Negro y Los Encuentros no hay investigación alguna”.⁷⁶⁰

“La investigación sobre la masacre cometida en Xococ se inició a partir de la declaración rendida por la señora Denese Joy Burck, cuyo nombre guatemalteco es Dominga Sic Ruiz.⁷⁶¹ Del 4 al 17 de septiembre la Fundación de Antropología Forense de Guatemala llevó a cabo la exhumación de unos restos encontrados en la aldea de Xococ. La fase de procesamiento, análisis de la información y elaboración de un informe pericial se realizó del 1 al 8 de marzo del 2002. En dicho informe se indica que se recuperaron 44 osamentas de personas”.⁷⁶²

“Sobre las masacres del Río Negro (Pacoxom) y Agua Fría el 11 de agosto de 1993 Jesús Tecú Osorio y Francisco Chen Osorio presentaron una solicitud ante el Juzgado de

⁷⁵⁶ Ibid. Párrafo 82

⁷⁵⁷ Ibid. Párrafo 83

⁷⁵⁸ Ibid. Párrafo 85

⁷⁵⁹ Ibid. Párrafo 87

⁷⁶⁰ Ibid. Párrafo 88

⁷⁶¹ Ibid. Párrafo 89

⁷⁶² Ibid. Párrafo 90

Primera Instancia de Salamá, Baja Verapaz, (en adelante “Juzgado de Primera Instancia”) para la realización de una diligencia de exhumación en la Aldea Río Negro (Pacoxom)⁷⁶³. El 25 de mayo de 1994 la Auxiliatura Departamental del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala (en adelante “Auxiliatura Departamental”) presentó ante el Juez de Primera Instancia una “denuncia de cementerio clandestino” en Agua Fría y solicitó, entre otras cosas, que se diera intervención al ministerio público, que se ordenara la exhumación de los restos mortales que se encontraran, la investigación de los hechos y que se librara orden de captura contra los responsables”⁷⁶⁴.

“El 14 de junio de 1994 el Juzgado de Primera Instancia ordenó la detención de Carlos Chen Gómez, Tomás Gómez González, Pedro González Gómez y Fermín Lajuj Xitumul por el delito de asesinato por los hechos sucedidos durante la masacre de Pacoxom. Dichas personas, excepto Tomás Gómez González, se presentaron voluntariamente ante dicho Juzgado el 25 de julio de 1994, luego de lo cual fueron formalmente detenidos”⁷⁶⁵.

“Dentro del proceso penal relativo a la masacre de Agua Fría, el 19 de octubre de 1994 el Auxiliar Departamental solicitó al Fiscal Especial del Ministerio Público del Departamento de Baja Verapaz que se indagara a los ex patrulleros Pedro González Gómez, Carlos Chen y Fermín Lajuj Xitumul, sindicados dentro del expediente de la masacre de Pacoxom como presuntos responsables también de la masacre de Agua Fría”.

766

“El 30 de noviembre de 1998 el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Baja Verapaz (en adelante “Tribunal de Sentencia Penal de Baja Verapaz”) dictó sentencia condenatoria a Fermín Lajuj Xitumul, Carlos Chen y Pedro González Gómez, y los declaró responsables del delito de asesinato cometido en contra de Martha Julia Chen Osorio, Margarita Chen Uscap y Demetria Osorio Lajuj, víctimas de la masacre del cerro Pacoxom. Sin embargo, los absolvió de responsabilidad por los hechos de la masacre de Agua Fría, al no haber sido posible identificar restos de personas presuntamente pertenecientes a miembros de la comunidad de Río Negro que fallecieron

⁷⁶³ Ibid. Párrafo 92

⁷⁶⁴ Ibid. Párrafo 93

⁷⁶⁵ Ibid. Párrafo 94

⁷⁶⁶ Ibid. Párrafo 95

durante dicha masacre. El 7 de diciembre de 1998 esta sentencia fue ampliada⁷⁶⁷. El 25 de febrero de 1999 la Sala Décimo Cuarta de la Corte de Apelaciones Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Alta Verapaz declaró la nulidad de dicha sentencia y ordenó que “un tribunal integrado por jueces distintos a los que pronunciaron el fallo anulado” dictara una nueva sentencia. El 1 de febrero de 2000 la Sala Décimo Cuarta de la Corte de Apelaciones de Cobán, Alta Verapaz, resolvió que los procesados eran responsables en grado de autores del delito de asesinato por la muerte de Marta Julia Chen Osorio y Demetria Osorio Lajuj, y les impuso la pena de 50 años de prisión, inconmutables. Posteriormente, Carlos Chen interpuso un recurso de casación en contra de esta sentencia, el cual fue rechazado por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia el 15 de marzo de 2000 por no encontrarse debidamente fundamentado. A pesar de ello, Carlos Chen interpuso un recurso de reposición que fue declarado improcedente por dicha Cámara Penal el 25 de abril de 2000”⁷⁶⁸.

“El 24 de octubre de 2002 el ministerio público solicitó al Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Baja Verapaz que emitiera orden de aprehensión contra Miguel Alvarado Sic, Tomás Vino Alvarado, Francisco Alvarado Lajuj, Serapio Lajuj Cuxum, Pablo Ruíz Alvarado, Bonifacio Cuxum López, Macario Alvarado Toj, Lucas Lajuj Alvarado y Víctor González López por el delito de asesinato de Marta Julia Chen Osorio y Demetria Osorio Lajuj”⁷⁶⁹.

“El 28 de octubre de 2004 se realizó la audiencia de debate oral y público. Finalmente, el 28 de mayo de 2008 el Tribunal de Sentencia Penal de Baja Verapaz condenó a 30 años de prisión a Macario Alvarado Toj, Francisco Alvarado Lajuj, Tomás Vino Alvarado, Pablo Ruíz Alvarado y Lucas Lajuj Alvarado por el delito de asesinato en contra de 26 personas durante la masacre de Pacoxom incluyendo a Marta Julia Chen Osorio y Demetria Osorio Lajuj. Asimismo, ordenó la certificación de la decisión al ministerio público para que iniciara “las investigaciones pertinentes a fin de determinar la responsabilidad de los mandos generales, superiores y subalternos del ejército nacional, en los hechos que originaron el [...] proceso” y “a efecto de determinar la responsabilidad de José Antonio Solares González en los hechos objeto del [...] proceso”⁷⁷⁰.

⁷⁶⁷ Ibid. Párrafo 97

⁷⁶⁸ Ibid. Párrafo 98

⁷⁶⁹ Ibid. Párrafo 100

⁷⁷⁰ Ibid. Párrafo 101

“El 7 de octubre de 1993 se llevó a cabo una diligencia de exhumación en la aldea de Río Negro (Pacoxom). Según el informe, el cementerio clandestino estaba dividido en 3 fosas en las cuales estaban inhumadas 143 personas, entre niños, mujeres y ancianos. Se logró establecer la identificación de 3 osamentas, a saber, Marta Julia Chen Osorio, Demetrio Osorio Lajuj y Margarita Chen Uscap”⁷⁷¹.

“El 8 de noviembre de 1993 el Juzgado de Primera Instancia Penal de Baja Verapaz solicitó al Comandante de Reservas Militares Departamental información sobre los señores Carlos Chen Gómez, Tomás Gómez Gonzáles y Pedro Gonzáles Gómez, con el fin de determinar si dichas personas integraban las PAC para el 13 de marzo de 1982⁷⁷² De acuerdo a la información y documentación presentada por las partes y la Comisión Interamericana, diez años después, el 15 de abril de 2003 se libró orden de aprehensión en contra del ex coronel José Antonio Solares González como “autor intelectual del delito de asesinato”.⁷⁷³ Hasta la fecha no se ha capturado a José Antonio Solares González”⁷⁷⁴.

3.12.5. AFECTACION DE DERECHOS

Desaparición forzada

“Los actos constitutivos de desaparición forzada tienen carácter permanente mientras no se conozca el paradero de la víctima o se hallen sus restos. Sin embargo, particularmente en relación con este último aspecto, no se trata meramente del acto de encontrar los restos de una determinada persona sino que ello, lógicamente, debe ir acompañado de la realización de las pruebas o análisis que permitan comprobar que, efectivamente, esos restos corresponden a esa persona. Por lo tanto, en casos de presunta desaparición forzada en que existan indicios de que la alegada víctima ha fallecido, la determinación de si se ha configurado dicho fenómeno y la cesación del mismo, en caso de que los restos hayan sido localizados, necesariamente, establecer de la manera más fehaciente la identidad del individuo a quien pertenecen dichos restos. En tal sentido, la autoridad correspondiente debe proceder a la pronta exhumación de éstos para que sean

⁷⁷¹ Ibid. Párrafo 102

⁷⁷² Ibid. Párrafo 106

⁷⁷³ Ibid. Párrafo 107

⁷⁷⁴ Ibid. Párrafo 108

*examinados por un profesional competente. Mientras los restos no sean identificados, la desaparición forzada sigue ejecutándose”.*⁷⁷⁵

*“La jurisprudencia de este Tribunal ha señalado como elementos concurrentes y constitutivos de la desaparición forzada: a) la privación de la libertad; b) la intervención directa de agentes estatales o la aquiescencia de éstos, y c) la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o el paradero de la persona interesada”.*⁷⁷⁶

*“En el presente caso, la Corte consideró demostrado que en Guatemala existía una práctica de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tratos crueles o torturas por parte de organismos de seguridad en la época de los hechos”.*⁷⁷⁷

*“La Corte ha considerado que el contenido propio del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica es que, precisamente, se reconozca a la persona, en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones, y que pueda ésta gozar de los derechos civiles fundamentales, lo cual implica la capacidad de ser titular de derechos (capacidad y goce) y de deberes; la violación de aquel reconocimiento supone desconocer en términos absolutos la posibilidad de ser titular de los derechos y deberes civiles y fundamentales. Más allá de que la persona desaparecida no pueda continuar gozando y ejerciendo otros, y eventualmente todos, los derechos de los cuales también es titular, su desaparición busca no sólo una de las más graves formas de sustracción de una persona de todo ámbito del ordenamiento jurídico, sino también negar su existencia misma y dejarla en una suerte de limbo o situación de indeterminación jurídica ante la sociedad y el Estado”.*⁷⁷⁸

“El 14 de mayo de 1982 en Los Encuentros, el Tribunal observa, en primer lugar, que el Estado reconoció la desaparición forzada de la señora Ramona Lajuj y del niño Manuel Chen Sánchez, quienes, según consta en el expediente, formaron parte del referido grupo de personas obligadas a subir a un helicóptero en Los Encuentros. Al respecto, Manuel Chen Sánchez tenía aproximadamente dos años en el momento en que fue desaparecido, y habría cumplido siete años al momento en que el Estado aceptó la competencia

⁷⁷⁵ Ibid. Párrafo 113

⁷⁷⁶ Ibid. Párrafo 115

⁷⁷⁷ Ibid. Párrafo 117

⁷⁷⁸ Ibid. Párrafo 119

contenciosa del Tribunal⁷⁷⁹. Por otro lado, si bien la Comisión no identificó e individualizó a otras personas presuntamente desaparecidas durante la masacre de Los Encuentros, a pesar de que este hecho se encuentra referido en el Informe de fondo del presente caso, los representantes remitieron una lista al Tribunal en la que constan los nombres de otras quince personas supuestamente subidas a un helicóptero ese día, de las cuales todavía no se sabe su paradero’’⁷⁸⁰.

“Tomando en cuenta el contexto y las circunstancias del presente caso, según las cuales la desaparición forzada de personas fue una práctica realizada en Guatemala durante el conflicto armado interno, y el hecho de que hasta el momento, luego de ser obligados a subir a un helicóptero, no se tiene noticia de su paradero, la Corte estima que las 17 personas señaladas por los representantes son víctimas de desaparición forzada hasta la fecha’’⁷⁸¹.

DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL, EN RELACIÓN CON EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA HONRA Y DE LA DIGNIDAD, LA PROHIBICIÓN DE LA ESCLAVITUD Y SERVIDUMBRE, LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS DEL NIÑO, LA PROTECCIÓN A LA FAMILIA, LA LIBERTAD DE CONCIENCIA Y RELIGIÓN, Y LA OBLIGACIÓN GENERAL DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS

Violencia sexual

“La Corte ha considerado que la violación sexual es una experiencia sumamente traumática que tiene severas consecuencias y causa gran daño físico y psicológico que deja a la víctima “humillada física y emocionalmente”, situación difícilmente superable por el paso del tiempo, a diferencia de lo que acontece en otras experiencias traumáticas. De ello se desprende que es inherente a la violación sexual el sufrimiento severo de la víctima, aun cuando no exista evidencia de lesiones o enfermedades físicas. En efecto, no en todos los casos las consecuencias de una violación sexual serán enfermedades o lesiones corporales. Las mujeres víctimas de violación sexual también experimentan severos daños y secuelas psicológicas, e inclusive, sociales. La Corte también ha

⁷⁷⁹ Ibid. Párrafo 122

⁷⁸⁰ Ibid. Párrafo 123

⁷⁸¹ Ibid. Párrafo 126

establecido que, en determinadas situaciones, la violación sexual también puede constituir una forma de tortura de la víctima”⁷⁸².

“Al respecto, la señora Uscap Ivoy indicó en dicha ocasión, que había sido violada sexualmente durante la masacre ocurrida en Pacoxom. En ese sentido, de los hechos del presente caso se desprende que la señora Uscap Ivoy en varias ocasiones fue víctima de violaciones sexuales por parte de patrulleros y militares, siendo aún menor de edad, la Corte observa que la perita Rosalina Tuyuc señaló durante la audiencia pública que “la violación sexual signific[a, para la mujer maya,...] la deshonra, las críticas, los señalamientos y la vergüenza que de alguna manera ocasiona dentro de la familia [y...] la vecindad”⁷⁸³.

GARANTÍAS JUDICIALES Y PROTECCIÓN JUDICIAL DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DE LA MISMA Y CON LOS ARTÍCULOS I DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, 1, 6 Y 8 DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA, Y 7.B DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

“El Estado ha manifestado su reconocimiento de responsabilidad por la falta de investigación de los hechos. Sin embargo, el Tribunal toma en cuenta que el presente caso versa sobre una pluralidad de violaciones graves, masivas y sistemáticas de derechos humanos sucedidas en el marco del conflicto armado interno en Guatemala”⁷⁸⁴.

“Si bien la Corte ha establecido que el deber de investigar es uno de medio, no de resultado, ello no significa, sin embargo, que la investigación pueda ser emprendida como “una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa”. Al respecto, el Tribunal ha establecido que “cada acto estatal que conforma el proceso investigativo, así como la investigación en su totalidad, debe estar orientado hacia una finalidad específica, la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y, en su caso, la sanción de los responsables de los hechos”. La investigación debe ser

⁷⁸² Ibid. Párrafo 132

⁷⁸³ Ibid. Párrafo 134

⁷⁸⁴ Ibid. Párrafo 189

realizada con todos los medios legales disponibles y debe comprender la responsabilidad tanto de los autores intelectuales como materiales, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales”⁷⁸⁵.

“Por lo tanto, luego de casi 30 años, estos hechos se encuentran en total impunidad, la cual ha sido definida por la Corte como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”. En estos términos, es claro que el Estado ha incumplido su deber de investigar ex officio lo sucedido durante las masacres de la capilla de Río Negro y Los Encuentros. Por lo tanto, Guatemala es responsable por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma”⁷⁸⁶.

“La investigación llevada a cabo por los hechos sucedidos el 13 de marzo de 1982 en el cerro Pacoxom y el 14 de septiembre de 1982 en Agua Fría se inició a partir de denuncias en 1993 y 1994, respectivamente, realizadas por víctimas de las masacres, fue hecha a pesar de las amenazas recibidas”.⁷⁸⁷

“Por lo tanto, la investigación de las masacres referidas en este apartado inició aproximadamente diez años después de sucedidos los hechos pero a partir de las denuncias que las propias víctimas interpusieron, y no a iniciativa del Estado. En relación a ello, el señor Jesús Tecú Osorio durante la audiencia pública expresó que “[los] han revictimizado porque [ellos,] los sobrevivientes[, han] tomado la iniciativa, [han] llevado las pruebas al ministerio público para que casti[guen] a los responsables [...]”. En tal sentido, la Corte considera que aunque el Estado ha realizado ciertos esfuerzos para la investigación de los hechos, la mayoría de las pruebas han sido aportadas por las víctimas, ciertas actuaciones han sido promovidas por éstas, tales como las exhumaciones realizadas, a las cuales la Corte se referirá más adelante, así como la identificación e individualización de los presuntos responsables. En gran medida, el impulso de la investigación se ha dejado a las propias víctimas. En razón de lo anterior, el Estado es

⁷⁸⁵ Ibid. Párrafo 192

⁷⁸⁶ Ibid. Párrafo 196

⁷⁸⁷ Ibid. Párrafo 197

responsable por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma”⁷⁸⁸.

“Por otro lado, a pesar de que se encontraron aproximadamente 143 restos pertenecientes a miembros de la comunidad de Río Negro que supuestamente fueron ejecutados durante la masacre de Pacoxom, en la sentencia de 7 de octubre de 1999 solamente se condenó por el “asesinato” de dos víctimas, ya que fueron las únicas identificadas y respecto de las cuales se pudo acreditar su “muerte violenta”. Conforme a dicha sentencia, no era posible atribuir el resto de hechos a los imputados debido a que no se había logrado la identificación de los otros restos. Por lo tanto, el Estado se basó en su propia falta a la obligación de identificación de los restos para justificar su decisión. Al respecto, el perito Michael Paul Hermann Mörth durante la audiencia pública expresó que conforme a dicha decisión “para sentenciar por un asesinato tiene que ser debidamente identifica[da] e individualiza[da] la víctima[, pero que, sin embargo, en] la masacre de Agua Fría [este] paradigma lleg[ó] a una consecuencia más absurda todavía [porque] se abs[olvió a los responsables] porque no [se pudo] identificar [a las] víctimas, [por lo cual,] según [su opinión,] se ha sacrificado [...] la crítica razonada y sus criterios en altar de un formalismo totalmente exagerado”. También mencionó que, sin embargo, no se tomó en cuenta que los cuerpos “fueron tirados en el suelo, fueron expuestos a animales [...], que estos restos de seres humanos fueron escondidos en un cementerio clandestino que se ocultó años [...] dejando de esta manera las osamentas en la intemperie sujetas a animales y cualquier otra cosa, frente a esta situación que obviamente tenía su influencia en el estado de la situación de los cadáveres, de los restos, de los huesos, de las osamentas frente a esta situación”⁷⁸⁹.

“Además, solamente tres de las personas identificadas como responsables fueron juzgadas y sancionadas. Sin embargo, durante el proceso en varias ocasiones las víctimas señalaron los nombres de otras personas, particularmente, de miembros de las patrullas de autodefensa civil, que también presuntamente son responsables. Tales personas no fueron localizadas por el Estado en ese momento, pero tampoco se advierte que se hayan adoptado de forma inmediata las medidas necesarias con ese fin. No fue sino tres años después, es decir, el 24 de octubre de 2002 que el ministerio público solicitó al juez

⁷⁸⁸ Ibid. Párrafo 198

⁷⁸⁹ Ibid. Párrafo 200

encargado de la causa que emitiera la orden de aprehensión en contra de siete personas más”⁷⁹⁰.

“Otros presuntos responsables continuaban sin ser localizados hasta el día de hoy, incluyendo al coronel del ejército que desde 1993 había sido señalado como uno de los responsables. Debe resaltarse que el 28 de enero de 2003 Jesús Tecú Osorio, víctima en el presente caso, dentro del proceso penal señaló que aproximadamente 10 militares del destacamento militar de Rabinal, Baja Verapaz, son responsables de los hechos de estas masacres, al igual que aproximadamente 45 patrulleros de la autodefensa civil de la Aldea Xococ. El señor Tecú Osorio, inclusive, proporcionó los nombres de casi todos ellos. No obstante, ni en la investigación ni en la sentencia se refleja que se haya indagado al resto de personas señaladas como responsables más allá de las ya condenadas”.⁷⁹¹

“La Corte debe señalar que la calificación penal de los hechos corresponde a las autoridades internas con competencia para ello. Sin embargo, en el presente caso, la Corte observa que el delito de “asesinato” por el cual se condenó a ocho personas mediante las sentencias de 8 de noviembre de 1998 y 28 de mayo de 2009 no refleja la gravedad, la multiplicidad ni la magnitud de los hechos sucedidos durante las masacres de Pacoxom y Agua Fría. Como se desprende de las declaraciones rendidas por varias víctimas a nivel interno así como de esta Sentencia, en el presente caso han sucedido hechos que no se limitan al “asesinato” de miembros de la comunidad de Río Negro. Sin embargo, tales hechos no han sido investigados”.⁷⁹².

“La Comisión Interamericana señaló que en el presente caso existe una presunta falta de cooperación de autoridades militares para proporcionar información sobre los destacamentos militares y patrullas de autodefensa civil de la zona, así como sobre el ex coronel acusado de haber dado la orden de perpetrar las masacres. Al respecto, en el expediente consta que en el marco de las investigaciones sobre las masacres ocurridas, el ministerio público ha solicitado a diversas autoridades militares información tanto sobre el ex coronel mencionado, así como acerca de la composición del destacamento militar y las patrullas de autodefensa civil que operaban en la zona”.⁷⁹³.

⁷⁹⁰ Ibid. Párrafo 201

⁷⁹¹ Ibid. Párrafo 202

⁷⁹² Ibid. Párrafo 203

⁷⁹³ Ibid. Párrafo 207

*“En el presente caso el Estado aceptó su responsabilidad por considerar que “no ha garantizado en su totalidad la efectividad de [los] derechos [establecidos en los artículos 8.1 y 25 de la Convención] en cuanto a investigar los hechos y sancionar a los responsables” de las masacres “a partir de que aceptó la competencia” del Tribunal. Aunado a lo anterior, durante la audiencia pública el perito Hermann Mörth expresó que “lo que vemos hoy [es] un patrón permanente [...] de no cooperar, en otros momentos de ocultar, o de no cooperar y dar información, es un patrón que existe desde estos años [...]”.*⁷⁹⁴

*“En el presente caso, las autoridades militares no han aportado de forma debida y oportuna información pertinente tendiente a esclarecer los hechos. En este punto, cabe reiterar que la obligación de investigar, juzgar y sancionar, en su caso, a los responsables es una obligación que corresponde al Estado como un todo. Ello implica que toda autoridad estatal deba cooperar, apoyar o coadyuvar, en el ámbito de su competencia, a la debida investigación de los hechos. Por lo tanto, el Estado es responsable por la violación de los derechos humanos reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma”*⁷⁹⁵.

*“La investigación por los hechos de la masacre cometida en Xococ en febrero de 1982 se inició a partir de la declaración rendida el 19 de marzo de 2001 por una víctima sobreviviente, la señora Denese Joy Burck. Por orden del Juez de Primera Instancia Departamental de Baja Verapaz, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala realizó una exhumación en la aldea de Xococ del 4 al 17 de septiembre de 2001”*⁷⁹⁶.

“En el presente caso, el Estado no aportó información relevante que le permita conocer el estado actual de la investigación, es decir, el Tribunal no cuenta con información sobre si la investigación está abierta, si se ha continuado con la búsqueda de las víctimas y con la exhumación e identificación de sus restos, en su caso, y si se ha logrado determinar las responsabilidades individuales correspondientes. El Tribunal da por establecido, como lo alegaron la Comisión y los representantes, que luego de las exhumaciones realizadas en el

⁷⁹⁴ Ibid. Párrafo 209

⁷⁹⁵ Ibid. Párrafo 210

⁷⁹⁶ Ibid. Párrafo 211

2001, es decir, hace once años, no ha habido mayor actividad dentro de la investigación. Por lo tanto, en razón de que los hechos de la masacre de Xococ se encuentran en impunidad, la Corte considera que Guatemala es responsable por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento”⁷⁹⁷.

“En casos de graves violaciones de derechos humanos, como las de este caso, la exhumación e identificación de las víctimas fallecidas forma parte de la obligación de investigar a cargo del Estado”.⁷⁹⁸

“Las exhumaciones realizadas se han llevado a cabo a partir de solicitudes y denuncias hechas por víctimas sobrevivientes de las masacres del presente caso, y que la iniciativa del Estado para la búsqueda e identificación de víctimas ha sido mínima, a pesar de que se trata de hechos ampliamente conocidos y documentados en Guatemala⁷⁹⁹. El Estado no ha continuado con dichas exhumaciones ni con las investigaciones que permitan la identificación de todos los restos. En opinión del Tribunal, ello continúa acrecentando la incertidumbre de los familiares sobre el paradero de las víctimas, lo que cual afecta su derecho a conocer lo sucedido a éstas. En este sentido, el Estado es responsable por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma”⁸⁰⁰.

FALTA DE INVESTIGACIÓN DE OTROS HECHOS

“La obligación de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de hechos violatorios de los derechos humanos no se deriva solamente de la Convención Americana. En determinadas circunstancias y dependiendo de la naturaleza de los hechos, esta obligación también se desprende de otros instrumentos interamericanos en la materia que establecen la obligación a cargo de los Estados Partes de investigar las conductas prohibidas por tales tratados. Por ejemplo, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”. Así, este

⁷⁹⁷ Ibid. Párrafo 216

⁷⁹⁸ Ibid. Párrafo 217

⁷⁹⁹ Ibid. Párrafo 219

⁸⁰⁰ Ibid. Párrafo 220

Tribunal ha establecido que los Estados tienen “el deber de garantizar el derecho de acceso a la justicia [...] conforme a las obligaciones específicas que le imponen las Convenciones especializadas [...] en materia de prevención y sanción de la tortura y de la violencia contra la mujer. [D]ichas disposiciones [...] especifican y complementan las obligaciones que tiene el Estado con respecto al cumplimiento de los derechos consagrados en la Convención Americana”, así como “el corpus juris internacional en materia de protección de la integridad personal”⁸⁰¹.

“En cualquier caso, toda autoridad estatal, funcionario público o particular que haya tenido noticia de actos destinados a la desaparición forzada de personas, deberá denunciarlo inmediatamente”. Por ende, la investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la persecución, captura, enjuiciamiento y, eventual, castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales⁸⁰². Asimismo, la investigación debe incluir la realización de todas las acciones necesarias con el objeto de determinar la suerte o destino de la víctima y la localización de su paradero. El Tribunal ya ha aclarado que el deber de investigar hechos de esta naturaleza subsiste mientras se mantenga la incertidumbre sobre la suerte final de la persona desaparecida, pues el derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos, representa una justa expectativa que el Estado debe satisfacer con todos los medios a su alcance”⁸⁰³.

“La falta de investigación de los alegados hechos de tortura, desaparición forzada, violación sexual, y esclavitud y servidumbre, en el marco del conflicto armado interno en Guatemala, constituyen un incumplimiento de las obligaciones del Estado frente a graves violaciones de derechos humanos, y contraviene normas inderogables (jus cogens) conforme a las cuales Guatemala tiene el deber investigar y sancionar dichas prácticas, de conformidad con la Convención Americana y, además, en este caso, a la luz de la Convención contra la Tortura, la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre Desaparición Forzada”⁸⁰⁴.

⁸⁰¹ Ibid. Párrafo 221

⁸⁰² Ibid. Párrafo 223

⁸⁰³ Ibid. Párrafo 224

⁸⁰⁴ Ibid. Párrafo 227

“El Estado debió iniciar ex officio y sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva de todos los hechos de la masacre, y no sólo los relacionados con la vulneración del derecho a la vida. Por lo tanto, la Corte considera que el Estado violó los derechos reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, y que incumplió las obligación de investigar dispuesta en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención contra la Tortura, 7.b) de la Convención Belém do Pará, y I.b) de la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas”⁸⁰⁵.

“El “plazo razonable” al que se refiere el artículo 8.1 de la Convención se debe apreciar en relación con la duración total del procedimiento que se desarrolla hasta que se dicta la sentencia definitiva. El derecho de acceso a la justicia implica que la solución de la controversia se produzca en tiempo razonable, ya que una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales. La falta de respuesta estatal es un elemento determinante al valorar si se han violado los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana”⁸⁰⁶.

“Si bien en el presente caso ya se ha condenado a algunos de los responsables de al menos una de las masacres, los hechos aún se encuentran en impunidad a más de 30 años de sucedidos. En consecuencia, para la Corte no es necesario realizar el análisis de los criterios mencionados dado que es evidente que las investigaciones relativas a las cinco masacres han sobrepasado cualquier parámetro de razonabilidad de duración. Por lo tanto, la Corte concluye que en virtud de que la investigación no se ha llevado a cabo dentro de un plazo razonable, el Estado es responsable por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento”⁸⁰⁷.

“El Estado tenía la obligación de investigar con la debida diligencia todos los hechos, obligación que se encontraba pendiente al momento del reconocimiento de competencia contenciosa de la Corte el 9 de marzo de 1987. Dicha obligación fue reafirmada por el Estado con motivo de la ratificación de la Convención contra la Tortura, la Convención de

⁸⁰⁵ Ibid. Párrafo 228

⁸⁰⁶ Ibid. Párrafo 229

⁸⁰⁷ Ibid. Párrafo 230

Belém do Pará y la Convención sobre Desaparición Forzada, por lo que el Estado debía velar por su cumplimiento a partir del momento de su ratificación”⁸⁰⁸.

“Este Tribunal estima que la investigación de los hechos de las masacres cometidas en contra de la Comunidad de Río Negro no ha sido asumida como un deber propio del Estado, y no ha estado dirigida eficazmente a la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y eventual sanción de todos los responsables, incluyendo autores materiales e intelectuales, de modo que se examinen de forma completa y exhaustiva la multiplicidad de afectaciones ocasionadas a los miembros de la comunidad de Río Negro dentro del particular contexto en el cual sucedieron los hechos del presente caso. Asimismo, la investigación tampoco ha estado encaminada hacia la localización de todas las víctimas desaparecidas, ni a la ubicación ni debida identificación de los restos que han sido encontrados en las diversas exhumaciones realizadas. En suma, los hechos del presente caso se encuentran en impunidad. Al respecto, este Tribunal ya ha señalado que su jurisprudencia respecto al fondo de los casos como a la supervisión del cumplimiento de las Sentencias emitidas “demuestra que Guatemala tiene un problema grave con respecto a la impunidad que impera en el país, específicamente con relación a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado”⁸⁰⁹.

“La Corte estima que Guatemala es responsable de la violación de los derechos reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, así como por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención contra la Tortura, el artículo I.b) de la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas, y el artículo 7.b de la Convención de Belém do Pará, en perjuicio de las víctimas del presente caso, en sus respectivas circunstancias”⁸¹⁰.

3.12.6. PUNTOS RESOLUTIVOS

DECLARA,

⁸⁰⁸ Ibid. Párrafo 235

⁸⁰⁹ Ibid. Párrafo 236

⁸¹⁰ Ibid. Párrafo 237

por unanimidad que,

6. El Estado es responsable de la violación de los derechos reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, así como por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, el artículo I.b) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y el artículo 7.b de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en perjuicio de las víctimas del presente caso, en sus respectivas circunstancias, de conformidad con lo establecido en los párrafos 189 a 237 de esta Sentencia.

3.12.7. COMENTARIO

Este caso a comparación de la de la Masacre de Dos Erres vs. Guatemala vemos que se ha conseguido llegar a inculpar y sentenciar a alguien, lamentablemente no por la totalidad de las muertes ahí acaecidas sino solo por la muerte de dos de las personas que se ha llegado a verificar su muerte en el lugar de los hechos. Asimismo en este caso también a diferencia de la Masacre de Dos Erres, se ha llegado a identificar al autor intelectual de la masacre en un General, que hasta la fecha no ha sido ubicado.

Aunque esto puede ser considerado un avance, no deja de lado que la investigación no se inició por acción del Estado sino por la denuncia de uno de los sobrevivientes a los hechos, que fue muchos años posterior a lo ocurrido, y que hasta la fecha de la sentencia ni siquiera se ha culminado las exhumaciones y la identificación de los fallecidos por estos hechos, lo que demuestra que las investigaciones son lentas y no hay una demostración de la intención del Estado en otorgar justicia a los sobrevivientes y los familiares de los fallecidos en la masacre de Rio Negro.

Un hecho que se mantiene como una constante en este caso es la utilización de la violencia sexual de las mujeres como un instrumento para subyugar a la población dado que hace que las mujeres al ser vejadas no solo sufren por el sufrimiento que implica la violación en sí misma, sino también porque dentro de la comunidad maya tiene un efecto simbólico

porque las mujeres mayas tienen a su cargo la reproducción social del grupo y personifican los valores que deben ser reproducidos en su comunidad, hecho que se quebranta por la violación, tanto más que para la mujer maya significa “la deshonra, las críticas, los señalamientos y la vergüenza que se ocasiona dentro de la familia y la vecindad”. A ello se agrega el uso de la violación como un acto de tortura, lo que se aprecia con la descripción de los vejámenes que sufrieron las mujeres y niñas que eran separadas del grupo mientras caminaban el cerro para ser violadas, o las que eran asesinadas en el camino porque ya no podían andar lo que incluye a algunas mujeres que estaban embarazadas.

Es por ello interesante denotar que en esta sentencia se hace referencia de manera soslayada al enfoque de transculturalidad que debe existir en las sentencias que tienen que ver con violencia contra la mujer, dado que se considera no solo el hecho que hablamos de un grupo de mujeres muertas y vejadas sexualmente, sino que en este caso una de ellas que sobrevivió pudo manifestar como es que los actos de violencia sexual la afectan como mujer que pertenece a una comunidad donde la violación sexual tiene connotaciones que la pueden llegar a hacer que sea unan paria dentro de su familia o vecindad porque esa es la idiosincrasia del lugar, lo que la hace doblemente víctima tanto por el sufrimiento psicológico causado por el acto de violencia, como el posterior juzgamiento prejuicioso de los que viven cerca de ella que la ven de mala manera por un acto que voluntariamente no quiso. En este caso el testimonio de la sobreviviente es fundamental, porque como en el caso de Rosendo Cantú vs. México ella también se ve afectada socialmente por lo acaecido.

3.13. VELIZ FRANCO Y OTROS VS. GUATEMALA

3.13.1. FECHA: 19 DE MAYO DE 2014

3.13.2. PRESENTACIÓN DEL CASO POR LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

PAIS DENUNCIADO	República de Guatemala
DERECHOS AFECTADOS PARA LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS	Por la violación al derecho a la vida, integridad personal y los derechos del niño, consagrados en los artículos 4, 5, y 19 de la Convención Americana, todos ellos en conexión con el artículo 1.1 de dicho tratado. Igualmente concluy[ó] que el Estado menoscabó los derechos de María Isabel Veliz Franco bajo el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará[,] en relación con el artículo 24 de la Convención Americana[,] en concordancia con la obligación general de respetar y garantizar los derechos prevista en el artículo 1.1. También se violó el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 de la Convención, en conexión con la obligación que le impone al Estado el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio de Rosa Elvira Franco Sandoval de Veliz (madre), Leonel Enrique Veliz (hermano), José Roberto Franco (hermano) y Cruz Elvira Sandoval Polanco de Franco (abuela, fallecida) y Roberto Franco Pérez (abuelo, fallecido), así como el derecho a las garantías y protección judicial consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana[,] en relación con el artículo 24 del mismo instrumento y en relación con la obligación que impone al Estado el artículo 1.1.

“El presente caso se relaciona con la falta de respuesta eficaz del Estado a la denuncia presentada el 17 de diciembre de 2001 por Rosa Elvira Franco Sandoval ante el Ministerio Público para denunciar la desaparición de su hija, María Isabel Veliz Franco

de 15 años de edad, así como las posteriores falencias en la investigación de los hechos. En dicha denuncia la señora Franco Sandoval manifestó que el 16 de diciembre de 2001 su hija salió de su casa a las ocho de la mañana hacia su trabajo y no regresó. La Comisión indicó que no hay constancias en cuanto a esfuerzos realizados para buscar a la víctima desde que se presentó la denuncia, hasta que se encontró el cadáver a las 14:00 horas del 18 de diciembre de 2001. Asimismo, señaló que existieron una serie de irregularidades durante la investigación de la desaparición y posterior muerte de María Isabel Veliz Franco, entre las que destacan la falta de realización de diligencias cuando fue reportada desaparecida y fallas en la preservación de la escena del crimen, así como deficiencias en el manejo y análisis de la evidencia recolectada”⁸¹¹.

3.13.3. VÍCTIMAS

“Tiene como presuntas víctimas del caso a María Isabel Veliz Franco, Rosa Elvira Franco Sandoval, Leonel Enrique Veliz Franco, José Roberto Franco, Cruz Elvira Sandoval Polanco de Franco y Roberto Franco Pérez”.⁸¹²

3.13.4. HECHOS

“La Corte advierte que para diciembre de 2001 Guatemala atravesaba una escalada de violencia homicida, y que la misma presentaba índices altos en comparación con otros países. En ese marco, hubo, al menos a partir del año 2000 o del año 2001, un crecimiento numérico de homicidios en general, y con ello, un aumento proporcionalmente significativo de los homicidios de mujeres. Asimismo, hay datos indicativos de que cierta parte de los atentados sufridos por mujeres, inclusive en 2001, serían homicidios por razones de género. Las aseveraciones antedichas tienen por base la información que se refiere seguidamente”.⁸¹³

“Más allá del aumento numérico de homicidios de mujeres, se ha allegado al Tribunal información distinta en cuanto a la proporción de homicidios de mujeres en comparación con la de hombres, y sobre el crecimiento de esa proporción. Por una parte, se ha

⁸¹¹ Caso Veliz Franco vs. Guatemala Sentencia de fecha 19 de mayo del 2014, párrafo 1

⁸¹² Ibid. Párrafo 31

⁸¹³ Ibid. Párrafo 73

informado que entre 2001 y 2006 cerca de un 10% de homicidios fueron cometidos contra mujeres. Esta proporción es similar si se consideran el período entre 1986 y 2008, o entre 2002 y 2012. Superó el 10% al menos entre 2003 y 2004, años en que habría sido mayor al 11% y el 12%, respectivamente. Por otra parte, también hay información en el sentido de que entre 1995 y 2004 el aumento de la tasa de crecimiento de homicidios de mujeres fue casi el doble que el aumento de la de hombres, y que en ese último año “la cantidad de muertes violentas de mujeres se había incrementado en 20[%] más que la de hombres”.⁸¹⁴

“Debe resaltarse que el Estado, antes y después de los hechos del presente caso, ha adoptado diversas medidas tendientes a afrontar la discriminación y violencia contra las mujeres, que este Tribunal tiene presente. Así, cabe destacar la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, de 28 de noviembre de 1996, así como la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer (en adelante también “Ley contra el Femicidio”), adoptada en 2008”.⁸¹⁵

“Datos de años posteriores denotan una situación similar. De hecho, en septiembre de 2007, “[p]or el nivel de impunidad extremadamente alto, el Estado [...] realizó una solicitud de apoyo a la comunidad internacional para enfrentar este problema, concretamente, mediante el establecimiento de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)”. “[s]egún cifras oficiales, Guatemala t[e]n[ía] una tasa promedio de 5,000 homicidios al año y el sistema penal no e[ra] capaz de esclarecer y juzgar ni siquiera el 5% de estas muertes”. Posteriormente se registra, de acuerdo a datos de la CICIG, en el esclarecimiento de procesos judiciales por delitos contra la vida, un índice de impunidad de 95% en el 2009, que disminuyó al 72% en el 2012”⁸¹⁶.

“María Isabel Veliz Franco nació en la Ciudad de Guatemala, Guatemala, el 13 de enero de 1986. Al momento de su muerte tenía 15 años de edad, era estudiante y acababa de finalizar el tercer año básico; estaba en período de vacaciones y trabajando como dependiente temporal del “Almacén Taxi”, ubicado en la zona 1 de la capital de Guatemala. María Isabel vivía con su madre, Rosa Elvira Franco Sandoval, sus hermanos

⁸¹⁴ Ibid. Párrafo 77

⁸¹⁵ Ibid. Párrafo 82

⁸¹⁶ Ibid. Párrafo 86

*Leonel Enrique Veliz Franco y José Roberto Franco y sus abuelos maternos, Cruz Elvira Sandoval y Roberto Franco Pérez”.*⁸¹⁷

*“El 17 de diciembre de 2001, a las 16:00 horas, compareció Rosa Elvira Franco Sandoval ante el Servicio de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil de Guatemala, con el fin de denunciar la desaparición de su hija, María Isabel Veliz Franco que el 16 de diciembre de 2001 su hija de 15 años de edad salió de su casa a las ocho de la mañana hacia su trabajo en el “Almacén Taxi” y, no regresó a las ocho de la noche del mismo día; el 17 de diciembre de 2001 acudió a dicho almacén a las 10:00 horas a buscarla y fue informada por una compañera de su hija que el 16 de diciembre de 2001, a eso de las 19:00 horas, se presentó un muchacho de mal aspecto que preguntó por María Isabel y que la estuvo esperando, y que presumiblemente ambos se fueron juntos, y refirió que conocía el nombre del sospechoso, ya que las compañeras de su hija le dijeron que ella mencionaba mucho este nombre”.*⁸¹⁸

*“El 19 de diciembre de 2001, cuando fue entrevistada por los investigadores asignados al caso, a las 10:30 horas, en Funerales Mancilla S.A., lugar donde se encontraba velando el cuerpo de su hija, Rosa Elvira manifestó”*⁸¹⁹:

“Su hija no llegó a almorzar a su casa como usualmente lo hacía por lo que a eso de las 14:00 horas fue a dejarle comida y cuando llegó le preguntó por qué no había llegado almorzar contestándome que no había tenido tiempo y le indicó que a la hora de su salida iba a pasar a recogerla un amigo, le preguntó quién era pero no supo dar razón. Con relación de sus agresores sospech[a] de una persona a quien únicamente cono[ce] [por su] nombre, [y sabe que tiene] 38 años de edad, aproximadamente[,] en virtud de que esta persona hace como un año acosaba a su hija, se dio cuenta de esta persona porque casi a diario llegaba a buscarla”.

“El 14 de enero de 2002, la madre de María Isabel agregó que esta habría tenido una relación de noviazgo con un joven, quien pertenecía a una mara y con quien su hija pensaba terminar la relación. La señora Franco relató que no sabía con cuál de los dos

⁸¹⁷ Ibid. Párrafo 92

⁸¹⁸ Ibid. Párrafo 93

⁸¹⁹ Ibid. Párrafo 94 a)

hombres de quienes ella sospechaba se habría ido su hija el día que desapareció. Además, refirió que sospechaba de una amiga de su hija, puesto que compañeras de trabajo de María Isabel le habían dicho que la había llamado el día que desapareció”⁸²⁰.

“En la audiencia pública ante la Corte, celebrada el 15 de mayo de 2013, la señora Rosa Elvira mencionó por primera vez que la última persona que vio con vida a su hija fue “un compañero [de trabajo de] ella [en el almacén], que vio cuando se la llevaron, la metieron a la fuerza en un carro”. También manifestó que al mediodía del 17 de diciembre de 2001 fue a la sección de desaparecidos de la PNC, con la intención de denunciar la desaparición de su hija. No obstante, según expresó, los funcionarios estatales no le permitieron formalizar su denuncia, le dijeron que regresara horas después, y luego manifestaron que no podían atenderla, porque debía de esperar de veinticuatro a setenta y dos horas para poner la denuncia”.⁸²¹

“No hay constancias en los expedientes aportados por las partes que dependencias o funcionarios estatales hayan desplegado esfuerzos para buscar a María Isabel Veliz Franco el 17 de diciembre de 2001. En particular, no consta que ello se efectuara luego del momento en que la señora Franco formalizó la denuncia. Tampoco surge del acervo probatorio que al día siguiente se realizaran acciones distintas de las efectuadas con motivo de la noticia sobre el hallazgo de un cadáver”.⁸²²

“El 18 de diciembre de 2001 la operadora de turno recibió una llamada anónima, en la cual se indicó que había un cadáver en la 21 avenida frente 4-48, zona 8 de Mixco, San Cristóbal II, y efectuó aviso mediante la Planta Central de Transmisiones de la Comisaría Dieciséis para que acudieran las autoridades correspondientes al lugar. A las 14:00 horas los agentes policiales se presentaron en tal dirección, y a las 14:15 horas encontraron entre la maleza de un predio baldío, ubicado en la dirección anteriormente citada, el cuerpo de una mujer; por lo que procedieron a llamar a las autoridades del Ministerio Público. Dichas autoridades se constituyeron en el lugar a las 14:30 horas, y posteriormente a las 15:20 horas la Unidad I-005 de Inspecciones Oculares se apersonó al lugar para hacer los procedimientos correspondientes, finalizando dicha diligencia con

⁸²⁰ Ibid. Párrafo 94 b)

⁸²¹ Ibid. Párrafo 94 c)

⁸²² Ibid. Párrafo 95

el traslado del cadáver a la morgue a bordo de la unidad policial No. 16-045 a las 15:45 horas, de conformidad con lo manifestado por los agentes estatales ”⁸²³.

“A las 14:30 horas del mismo 18 de diciembre de 2001 llegó al lugar la Auxiliar Fiscal, quien realizó el levantamiento del cadáver, y a las 14:45 horas se procedió a la identificación del cadáver, el cual presentaba signos de violencia constatados por las autoridades intervinientes. El cuerpo no fue inmediatamente identificado, sino nominado como “XX”, porque no se encontró documento de identidad. En el acta de levantamiento de cadáver realizada por la Auxiliar Fiscal, se señaló que el cuerpo fue trasladado por una unidad de la PNC, y la orden de necropsia fue entregada a un agente de dicha institución, terminando dicha diligencia a las 15:45 horas, mientras que en la Inspección Ocular de 18 de diciembre de 2001, se indica la finalización de la misma a las 16:15 horas ”⁸²⁴.

“El 18 de diciembre de 2001 la madre de María Isabel, al ver las noticias en la televisión sobre el hallazgo de un cuerpo, acudió a la morgue, donde verificó que se trataba del cuerpo de su hija.”⁸²⁵ Con posterioridad se han continuado realizando diligencias tendientes a la averiguación de los hechos, pero no han producido resultados positivos. En consecuencia, a la fecha de la presente Sentencia las actuaciones respectivas aún se encuentran en la etapa preparatoria o de investigación ”⁸²⁶.

“El 29 de diciembre de 2001 la Técnica en Investigaciones Criminalísticas informó que los indicios embalados el 19 de diciembre del 2001 en los Funerales Mancilla S.A. fueron, posteriormente, enviados al Laboratorio del Departamento Técnico Científico del Ministerio Público para que se les realizaran diversos análisis ”. ⁸²⁷

“El Protocolo de necropsia fue emitido por el Organismo Judicial del Servicio Médico Forense el 13 de febrero de 2002 se determinó que la causa de la muerte de María Isabel habría sido “un hematoma epidural secundario a trauma craneo de cuarto grado”, asimismo, se llegó a la conclusión de que había presencia de “edema cerebral, fractura de

⁸²³ Ibid. Párrafo 96

⁸²⁴ Ibid. Párrafo 97

⁸²⁵ Ibid. Párrafo 98

⁸²⁶ Ibid. Párrafo 106

⁸²⁷ Ibid. Párrafo 110

cráneo, síndrome asfíctico, entre otros hallazgos y lesiones”, y señaló que los órganos genitales se encontraban “normales”. No consta en el expediente que se haya realizado ninguna otra prueba para determinar si María Isabel había sido víctima de violencia sexual”.⁸²⁸

Sobre los estereotipos discriminatorios

“Se han formulado alegaciones de que en el caso existiría un sesgo discriminatorio que impediría el avance de las investigaciones. el 20 de febrero de 2002 los técnicos en investigaciones criminalísticas encargados del caso rindieron su informe acerca del resultado de las diligencias preliminares del homicidio de María Isabel. Entre otras cosas los técnicos expresaron que el alias de María Isabel era “LA LOCA” y se refirieron a aspectos de su comportamiento, como su forma de vestir, su vida social y nocturna o sus creencias religiosas, así como a la falta de vigilancia por parte de su familia. El 21 de febrero de 2002 el investigador del Servicio de Investigación Criminal de la PNC, de la Sección contra Homicidios, presentó un informe de las diligencias practicadas hasta ese momento concluyó que el móvil del homicidio de María Isabel había sido la “posible infidelidad con algún novio”; el 18 de marzo de 2003 el investigador encargado emitió un informe para la Auxiliar Fiscal de la Agencia No. 5 de Mixco en el que recomendó que se citara a la mamá de María Isabel para interrogarla sobre la vida de su hija en especial sobre “sus actividades nocturnas, la relación con mareros, adicción a alguna droga y relación con su padrastro”; el 30 de agosto de 2004 la señora Franco Sandoval remitió un escrito al Fiscal General y Jefe del Ministerio Público para informarle que la Auxiliar Fiscal de la Agencia No. 5 de Mixco le había dicho que María Isabel “era una cualquiera”, por lo que solicitó que no se continuara hablando mal de su hija. En el Informe de Fondo, la Comisión se refirió a las declaraciones de Rosa Elvira Franco durante la audiencia ante la Comisión, donde manifestó que aproximadamente la semana anterior del 28 de agosto de 2004, cuando fue a preguntar sobre el avance de las investigaciones, la Auxiliar Fiscal “sacó de lo último de una de sus gavetas de su archivo, el expediente de [su] hija, y enfrente del que era su jefe, [l]e dijo ‘a su hija la mataron porque era una cualquiera, una prostituta’, incluso hizo ademanes con sus hombros y

⁸²⁸ Ibid. Párrafo 111

*cabeza riéndose de mi hija y de mi dolor. El jefe agachó la cabeza no [l]e dijo disculpe, solo la observó, y [la Auxiliar Fiscal] comenzó a reírse a carcajadas”.*⁸²⁹

3.13.5. AFECTACIONES DE DERECHOS

DERECHOS A LA VIDA, A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y A LA LIBERTAD PERSONAL, EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS DEL NIÑO, Y LAS OBLIGACIONES DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS SIN DISCRIMINACIÓN, Y PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

“La Corte ha “reitera[do] que revisten especial gravedad los casos en los cuales las víctimas de violaciones a derechos humanos son niñas y niños”, quienes, “[e]n razón de su nivel de desarrollo y vulnerabilidad, requieren protección que garantice el ejercicio de sus derechos dentro de la familia, de la sociedad y con respecto al Estado”. En ese sentido, “han de ceñirse [al criterio del interés superior del niño] las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechos”. Por otra parte, el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, sobre el que el Tribunal es competente (supra párr. 32), instituye deberes estatales para “prevenir, sancionar y erradicar [la] violencia [contra la mujer]” que especifican y complementan las obligaciones que tiene el Estado respecto al cumplimiento de los derechos consagrados en la Convención Americana, tales como los establecidos en los artículos 4, 5 y 7”⁸³⁰.

“De lo anterior se colige que, conforme el marco normativo expuesto, en relación con la violencia contra la mujer, el deber de garantía adquiere especial intensidad en relación con niñas. Esto es así debido a que la vulnerabilidad consustancial a la niñez puede verse enmarcada y potenciada debido a la condición de ser mujer. En ese sentido, debe advertirse que las niñas son, como se ha aseverado, “particularmente vulnerables a la violencia”. La especial intensidad mencionada se traduce en el deber estatal de actuar con la mayor y más estricta diligencia para proteger y asegurar el ejercicio y goce de los derechos de las niñas frente al hecho o mera posibilidad de su vulneración por actos que,

⁸²⁹ Ibid. Párrafo 118

⁸³⁰ Ibid. Párrafo 133

en forma actual o potencial implicaren violencia por razones de género o pudieren derivar en tal violencia ”.⁸³¹

“El deber de prevención ha sido específicamente señalado respecto a mujeres, inclusive niñas, desde antes de 2001 y mediante instrumentos distintos a la Convención de Belém do Pará, tratado que expresamente lo contempla en el citado artículo 7.b). Por otra parte, las niñas, entre ellas, las adolescentes, requieren medidas especiales de protección ”.⁸³²

Sobre la investigación del caso

“En el presente caso, existen dos momentos claves en los que el deber de prevención debe ser analizado. El primero es antes de la desaparición de la presunta víctima y el segundo antes de la localización de su cuerpo sin vida⁸³³. Sobre el primer momento la Corte considera que la eventual falta de prevención de la desaparición no conlleva per se la responsabilidad internacional del Estado porque, a pesar de que éste conocía o debía conocer una situación de incremento de actos violentos que involucraba actos cometidos contra mujeres, inclusive niñas, no ha sido establecido que tenía conocimiento de un riesgo real e inmediato para la víctima de este caso. Aunque el contexto en este caso y las “obligaciones internacionales le imponen al Estado una responsabilidad reforzada con respecto a la protección de mujeres”, en especial las niñas, que incluye el deber de prevención, no le imponen una responsabilidad ilimitada frente a cualquier hecho ilícito en contra de ellas. Además, en relación con este primer momento, el Tribunal nota que con anterioridad a diciembre de 2001, se efectuaron acciones estatales vinculadas a la problemática de la violencia contra mujeres ”⁸³⁴.

“En cuanto a este momento –antes del hallazgo del cuerpo- corresponde dilucidar si, dadas las circunstancias particulares del caso y el contexto en que se inserta el Estado tuvo conocimiento de que existía un riesgo real e inmediato de que María Isabel fuera agredida y si, dado lo anterior, surgió un deber de debida diligencia que al ser más estricta, exige la realización exhaustiva de actividades de búsqueda. En particular, es imprescindible la actuación pronta e inmediata de las autoridades policiales, fiscales y

⁸³¹ Ibid. Párrafo 134

⁸³² Ibid. Párrafo 136

⁸³³ Ibid. Párrafo 138

⁸³⁴ Ibid. Párrafo 139

judiciales ordenando medidas oportunas y necesarias dirigidas a la determinación del paradero de la víctima. Deben existir procedimientos adecuados para las denuncias y que éstas conlleven una investigación efectiva desde las primeras horas. Las autoridades deben presumir que la persona desaparecida sigue con vida hasta que se ponga fin a la incertidumbre sobre la suerte que ha corrido. Por lo expuesto, es necesario evaluar si: a) el Estado tuvo oportunamente, o debió tener, conocimiento de la situación de riesgo real e inmediato en que se encontraba a María Isabel Veliz Franco; b) si, en su caso, tuvo posibilidades razonables de prevenir o evitar la consumación y, de ser así, c) si concretó la diligencia debida con medidas o acciones para evitar la lesión de los derechos de la niña nombrada”⁸³⁵.

“Corresponde asumir como una posibilidad cierta que cuándo el Estado tomó conocimiento de la desaparición de María Isabel Veliz Franco, ella se encontraba viva y en una situación de grave peligro. En tal sentido, no surge del acervo probatorio que en el curso de la investigación se determinara el momento de la muerte de la niña, y los únicos señalamientos que constan al respecto indican que no habría muerto antes de las 16:00 horas del 17 de diciembre de 2001, cuando el Servicio de Investigación de la PNC formalizó la recepción de la denuncia presentada por la madre de la niña. Por el contrario, de modo no conclusivo, los indicios existentes denotan que habría muerto en momentos cercanos a las primeras horas del día 18 de diciembre de 2001⁸³⁶. Por otra parte, puede asumirse, dadas las características de los hechos y las circunstancias en que se encontró el cadáver, que María Isabel Veliz Franco padeció vejámenes antes de sufrir una muerte violenta. Por el contrario, no existen indicios concluyentes de que permaneciera privada de la libertad con antelación al momento en que sufrió los hechos que derivaron en su muerte”⁸³⁷.

“En cuanto al conocimiento estatal de dicha situación de riesgo, cabe atender las circunstancias particulares del caso en cuanto al modo en que el Estado tuvo noticia de los hechos relevantes. De los hechos probados surge que las autoridades, mediante la denuncia efectuada por la señora Rosa Elvira Franco el 17 de diciembre de 2001, conocieron que María Isabel se encontraba desaparecida y que habían pasado cerca de

⁸³⁵ Ibid. Párrafo 142

⁸³⁶ Ibid. Párrafo 144

⁸³⁷ Ibid. Párrafo 145

20 horas, incluyendo toda una noche, desde que debió regresar a su hogar. También supieron, en el mismo acto, que la madre de la niña ya la había buscado y que ésta búsqueda había resultado infructuosa. Asimismo, la señora Franco Sandoval expresó que, de acuerdo a la información que ella había podido recabar, era probable que su hija se hubiera encontrado, en las últimas horas de la tarde del día anterior al de la denuncia, con un hombre a quien ella (Rosa Elvira Franco) no conocía, sino que sólo tenía algunas referencias sobre su posible nombre”.

“Teniendo en cuenta lo narrado en la denuncia presentada por la señora Franco Sandoval, considerando también que María Isabel era una niña y que, como fue señalado, el momento de los hechos se insertaba en un lapso en que la evolución de la violencia homicida por año crecía en Guatemala en forma superior al crecimiento poblacional, la Corte colige que las autoridades estatales debieron tener lo denunciado por Rosa Elvira Franco como una indicación de la probable vulneración de los derechos de la niña. Si bien la citada denuncia no indicó explícitamente que María Isabel había sido víctima de un acto ilícito, resultaba razonable desprender que se encontraba en riesgo. Este Tribunal entiende que, en el marco de la debida diligencia estricta que debe observar el Estado en la garantía de los derechos a la vida e integridad personal de las niñas, en las circunstancias del caso, los señalamientos efectuados por Rosa Elvira Franco debían tomarse en cuenta, a efectos de la realización de acciones de prevención, como una noticia de la posibilidad cierta de que María Isabel sufriera atentados en su contra”.

“De la prueba surgen datos relevantes tanto de bases estatales como de entidades estatales, así como del pronunciamiento de un organismo internacional, vinculado a la cuestión que el Estado había adoptado, antes de 2001, medidas relativas a la situación y discriminación contra la mujer, siendo especialmente atinente la problemática de la violencia contra la mujer la creación de la CONAPREVI en noviembre de 2000. Además, sin perjuicio de lo afirmado por la CONAPREVI, Guatemala ha reportado contar con organismos, creados antes de diciembre de 2001, entre cuyas funciones se encuentran el “seguimiento de la implementación” de la Convención de Belém do Pará”⁸³⁸.

⁸³⁸ Ibid. Párrafo 150

“El Estado tiene, desde antes de diciembre de 2001, un deber de adoptar las medidas necesarias para contar con información suficiente sobre la situación de los derechos de las niñas en Guatemala, al menos en el nivel mínimo necesario para poder cumplir de manera adecuada sus obligaciones inmediatamente exigibles. También corresponde a las “medidas de protección” que el artículo 19 manda adoptar respecto a niños y niñas. En relación con los deberes estatales respecto al tratamiento de la violencia contra la mujer, el deber referido es también evidente en el ámbito de la aplicación de la Convención de Belém do Pará. En ese sentido, resulta necesario para la implementación de las medidas y “políticas” a que se refiere el artículo 7 de ese tratado. Por otra parte, el deber mencionado también surge de las estipulaciones existentes en los tratados respectivos sobre los sistemas internacionales de monitoreo de la situación de los derechos. De este modo, la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará, en forma independiente al sistema de peticiones individuales, prevén, en sus artículos 41 a 43 y 10, respectivamente, la presentación de informes por parte de los Estados a organismos internacionales. Lo mismo hacen otros tratados internacionales en vigor de los que Guatemala es parte, como la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 44; la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, en el artículo 18, o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 40”⁸³⁹.

“En lo que compete al Tribunal y es pertinente para el análisis del caso sub examine, basta constatar que el Estado tiene el deber de recabar la información básica que sea necesaria para cumplir sus obligaciones Convencionales en relación con los derechos de las niñas, respecto de cuya garantía tiene un deber de actuar con la mayor y más estricta diligencia. Por ello, frente a indicaciones claras sobre la existencia del contexto referido y su conocimiento por parte del Estado, la eventual insuficiencia de la información estatal no podría obrar en detrimento de la exigibilidad de la observancia debida del aludido deber de garantía. En ese sentido, de lo reseñado antes surge la existencia de un contexto, en diciembre de 2001, de incremento de la criminalidad violenta en Guatemala, inclusive de homicidios de mujeres, e indicaciones de que el mismo era conocido por el Estado⁸⁴⁰. El contexto señalado, no puede desvincularse, de la impunidad generalizada existente en

⁸³⁹ Ibid. Párrafo 151

⁸⁴⁰ Ibid. Párrafo 152

*el país. Por ende, la existencia de tal situación obra como un factor adicional que coadyuva al conocimiento estatal sobre una situación de riesgo”.*⁸⁴¹

*“Por todo lo expuesto, la Corte colige que a partir de la denuncia formalizada por Rosa Elvira Franco Sandoval, el Estado estuvo en conocimiento de la situación de riesgo en que se encontraba su hija, María Isabel Veliz Franco. El Estado además conocía, o debió conocer, que era posible que lo narrado en tal denuncia se insertara en un contexto que potenciaba la posibilidad de una lesión a los derechos de esa niña”.*⁸⁴²

*“Aunado a lo expuesto, ha quedado establecida la posibilidad cierta de que María Isabel Veliz Franco estuviera viva cuando su madre denunció su desaparición a las autoridades. La falta de certeza al respecto, además, es atribuible a la falta de determinación por el Estado, en el marco de la investigación, del momento preciso del deceso. Luego de recibida tal denuncia, y hasta el hallazgo del cuerpo, el Estado no siguió ninguna acción sustantiva tendiente a investigar lo sucedido o evitar eventuales vulneraciones de derechos de la niña. Dada la incertidumbre existente en ese momento sobre la situación en que se encontraba María Isabel Veliz Franco, y dado el riesgo que corría la niña, resultaba imperioso obrar diligente para garantizar sus derechos”*⁸⁴³.

*“Por lo expuesto, la Corte Interamericana concluye que Guatemala violó su deber de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos a la vida e integridad personal, reconocidos en los artículos 4.1 y 5.1 de la Convención Americana, en relación con los derechos del niño consagrados en el artículo 19 de la Convención y con la obligación general de garantizar los derechos sin discriminación, contemplada en el artículo 1.1 del mismo tratado, así como con las obligaciones contempladas en el artículo 7.b) de la Convención de Belém do Pará, en perjuicio de María Isabel Veliz Franco”*⁸⁴⁴.

⁸⁴¹ Ibid. Párrafo 153

⁸⁴² Ibid. Párrafo 154

⁸⁴³ Ibid. Párrafo 155

⁸⁴⁴ Ibid. Párrafo 158

GARANTÍAS JUDICIALES, IGUALDAD ANTE LA LEY Y PROTECCIÓN JUDICIAL, EN RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES GENERALES DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS Y ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO Y CON EL DEBER DE PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

“Este Tribunal ya ha determinado que si bien no puede aseverarse que todos los homicidios de mujeres sucedidos en la época de los hechos fueran por razones de género, resulta verosímil que el de María Isabel si lo fuera, de acuerdo a cómo se encontró el cuerpo de la niña. En efecto, se ha indicado que las mujeres víctimas de homicidios por razones de género con frecuencia presentaban signos de brutalidad en la violencia ejercida contra ellas, así como signos de violencia sexual o la mutilación de los cuerpos. De forma acorde a tales características, el cadáver de María Isabel fue encontrado con evidentes signos de violencia, inclusive señales de ahorcamiento, una herida en el cráneo, una cortadura en la oreja y mordiscos en las extremidades superiores; su cabeza estaba envuelta por toallas y una bolsa, y tenía alimentos en su boca y su nariz, además, la blusa y el bloomer que llevaba estaban rotos en la parte inferior. Ello resulta relevante y suficiente a los efectos de la aplicación al caso del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará. Interesa aclarar que la falta de certeza absoluta sobre lo expresado se vincula a la falta de conclusión de la investigación interna, así como al modo en que ésta hasta ahora se ha desarrollado. Así, por ejemplo, elementos trascendentes como la presencia de violencia sexual en los hechos no han sido determinados en una forma certera”⁸⁴⁵.

“El Estado no puede excusar el incumplimiento de su obligación de investigar con la debida diligencia porque al momento de los hechos no existía normativa, procedimientos o medidas para realizar las diligencias investigativas iniciales adecuadamente de acuerdo a los estándares de derecho internacional que se desprenden de tratados aplicables y en vigor al momento de los hechos”⁸⁴⁶.

“La Corte recuerda que Guatemala aceptó en el trámite ante la Comisión la falta a la debida diligencia en el proceso de investigación llevada a cabo por la muerte de María Isabel Veliz Franco por los siguientes hechos: la omisión en practicar algunas pruebas forenses sobre el cadáver relativas al levantamiento del cadáver, el atraso en la

⁸⁴⁵ Ibid. Párrafo 178

⁸⁴⁶ Ibid. Párrafo 180

investigación por causa de un conflicto de competencia, y por no haber establecido una medida cautelar efectiva para asegurar la presencia de un sospechoso del homicidio de María Isabel”⁸⁴⁷.

“La Corte reitera que el deber de investigar es una obligación de medios y no de resultado. Sin embargo, debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. A la luz de ese deber, una vez que las autoridades estatales tengan conocimiento del hecho, deben iniciar ex officio y sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva. Esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles, y ser orientada a la determinación de la verdad. La obligación del Estado de investigar debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelvan a repetirse. En este sentido, la Corte recuerda que la impunidad fomenta la repetición de las violaciones de derechos humanos. De otra parte, este Tribunal ha advertido que esta obligación se mantiene “cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aún los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado”⁸⁴⁸.

“La Corte también ha señalado que del artículo 8 de la Convención se desprende que las víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus familiares, deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos, tanto en procura del esclarecimiento de los hechos y del castigo de los responsables, como en busca de una debida reparación. Asimismo, el Tribunal ha establecido que la obligación de investigar y el correspondiente derecho de la presunta víctima o de los familiares no sólo se desprende de las normas Convencionales de derecho internacional imperativas para los Estados Parte, sino que además se deriva de la legislación interna que hace referencia al deber de investigar de oficio ciertas conductas ilícitas y a las normas que permiten que las víctimas o sus familiares denuncien o presenten querellas, pruebas o peticiones o cualquier otra

⁸⁴⁷ Ibid. Párrafo 181

⁸⁴⁸ Ibid. Párrafo 183

diligencia, con la finalidad de participar procesalmente en la investigación penal con la pretensión de establecer la verdad de los hechos”⁸⁴⁹.

“La Corte recuerda que en casos de violencia contra la mujer las obligaciones generales establecidas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana se complementan y refuerzan para aquellos Estados que son Parte, con las obligaciones derivadas del tratado interamericano específico, la Convención de Belém do Pará. En su artículo 7.b dicha Convención obliga de manera específica a los Estados Partes a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. En su artículo 7.c la Convención de Belém do Pará obliga a los Estados Partes a adoptar la normativa necesaria para investigar y sancionar la violencia contra la mujer. En estos casos, las autoridades estatales deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva una vez que tomen conocimiento de los hechos que constituyan violencia contra la mujer, incluyendo la violencia sexual. De tal modo, que ante un acto de violencia contra una mujer, resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección”⁸⁵⁰.

“A menudo es difícil probar en la práctica que un homicidio o acto de agresión violenta contra una mujer ha sido perpetrado por razón de género. Dicha imposibilidad a veces deriva de la ausencia de una investigación profunda y efectiva por parte de las autoridades sobre el incidente violento y sus causas. Es por ello que las autoridades estatales tienen la obligación de investigar ex officio las posibles connotaciones discriminatorias por razón de género en un acto de violencia perpetrado contra una mujer, especialmente cuando existen indicios concretos de violencia sexual de algún tipo o evidencias de ensañamiento contra el cuerpo de la mujer (por ejemplo, mutilaciones), o bien cuando dicho acto se enmarca dentro de un contexto de violencia contra la mujer que se da en un país o región determinada”⁸⁵¹.

⁸⁴⁹ Ibid. Párrafo 184

⁸⁵⁰ Ibid. Párrafo 185

⁸⁵¹ Ibid. Párrafo 187

“Asimismo, la Corte ha establecido que en casos de sospecha de homicidio por razón de género, la obligación estatal de investigar con la debida diligencia incluye el deber de ordenar de oficio los exámenes y pericias correspondientes tendientes a verificar si el homicidio tuvo un móvil sexual o si se produjo algún tipo de violencia sexual. En este sentido, la investigación sobre un supuesto homicidio por razón de género no debe limitarse a la muerte de la víctima, sino que debe abarcar otras afectaciones específicas contra la integridad personal, tales como torturas y actos de violencia sexual. En una investigación penal por violencia sexual es necesario que se documenten y coordinen los actos investigativos y se maneje diligentemente la prueba, tomando muestras suficientes, realizando estudios para determinar la posible autoría del hecho, asegurando otras pruebas como la ropa de la víctima, la investigación inmediata del lugar de los hechos y garantizando la correcta cadena de custodia. En ese tenor, las primeras fases de la investigación pueden ser especialmente cruciales en casos de homicidio contra la mujer por razón de género, ya que las fallas que se puedan producir en diligencias tales como las autopsias y en la recolección y conservación de evidencias físicas pueden llegar a impedir u obstaculizar la prueba de aspectos relevantes, como por ejemplo, la violencia sexual. En cuanto a la realización de autopsias en un contexto de homicidio por razón de género, la Corte ha especificado que se debe examinar cuidadosamente las áreas genital y para-genital en búsqueda de señales de abuso sexual, así como preservar líquido oral, vaginal y rectal, y vello externo y púbico de la víctima. Asimismo, en casos de supuestos actos de violencia contra la mujer, la investigación penal debe incluir una perspectiva de género y realizarse por funcionarios capacitados en casos similares y en atención a víctimas de discriminación y violencia por razón de género”⁸⁵².

“Las autoridades estatales que conducen una investigación de este tipo deben intentar, como mínimo, inter alia: i) identificar a la víctima; ii) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte, con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación penal de los responsables; iii) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga; iv) determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte, y v) distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen, se

⁸⁵² Ibid. Párrafo 188

deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados”⁸⁵³..

“Además, los estándares internacionales señalan que, en relación con la escena del crimen, los investigadores deben, como mínimo, fotografiar dicha escena, cualquier otra evidencia física y el cuerpo como se encontró y después de moverlo; todas las muestras de sangre, cabello, fibras, hilos u otras pistas deben ser recogidas y conservadas; examinar el área en busca de huellas de zapatos o cualquier otra que tenga naturaleza de evidencia, y hacer un informe detallando cualquier observación de la escena, las acciones de los investigadores y la disposición de toda la evidencia coleccionada. Una de las acciones en el sitio del hallazgo de mayor riesgo es la manipulación del cadáver, el cual no debe ser manipulado sin la presencia de profesionales, quienes deben examinarlo y movilizarlo adecuadamente según la condición del cuerpo. Mientras ello no suceda debe evitarse cualquier contaminación de la misma y mantenerla bajo custodia permanente”⁸⁵⁴.

“En cuanto a las autopsias, estas deben respetar ciertas formalidades básicas, como indicar la fecha y hora de inicio y finalización, así como el lugar donde se realiza y el nombre del funcionario que la ejecuta. Asimismo, se debe, inter alia, fotografiar adecuadamente el cuerpo; tomar radiografías del cadáver, de su bolsa o envoltorio y después de desvestirlo, documentar toda lesión. Se debe documentar la ausencia, soltura o daño de los dientes, así como cualquier trabajo dental, y examinar cuidadosamente las áreas genital y para-genital en búsqueda de señales de abuso sexual”⁸⁵⁵.

“El Estado no realizó las diligencias indispensables a partir del hallazgo, el 18 de diciembre de 2001, del cuerpo de María Isabel. En esta primera etapa se presentaron diversas irregularidades que han repercutido en la investigación y que difícilmente podrían ser subsanadas por tardías diligencias, a saber: a) falta de aseguramiento del lugar del hallazgo del cadáver; b) falta de rigurosidad en la inspección ocular; c) deficiencias en la elaboración del acta de levantamiento del cadáver; d) traslado inadecuado del cadáver; e) recolección inadecuada de las evidencias y su manejo indebido; f) no se aseguró la cadena de custodia de las evidencias, y g) necropsia

⁸⁵³ Ibid. Párrafo 191

⁸⁵⁴ Ibid. Párrafo 192

⁸⁵⁵ Ibid. Párrafo 194

incompleta”⁸⁵⁶.

“En cuanto al seguimiento de la llamada telefónica realizada por un informante anónimo el 18 de diciembre de 2001 en la que aportó datos sobre la muerte de María Isabel, el Estado señaló que se realizó el “allanamiento” en la dirección suministrada por aquél. No obstante, se cumplió en forma efectiva el 8 de julio de 2003, es decir, transcurrido más de un año y medio desde la llamada referida. Ni esta diligencia ni la inspección ocular tuvieron resultados positivos”⁸⁵⁷.

“En lo que se refiere al despliegue de las llamadas del celular que portaba María Isabel el día de los hechos, del expediente se desprende que el 26 de marzo de 2002 se autorizó requerir el despliegue de llamadas a diversas empresas de telecomunicaciones con el propósito de establecer a quien pertenecían determinados números de teléfono, la dirección dónde puede ser localizada la persona propietaria y las llamadas entrantes y salientes entre el 15 y 24 de diciembre de 2001. Sin embargo, fue recién el 8 de junio de 2005 que el Técnico en Investigaciones Criminalísticas remitió al auxiliar fiscal el informe sobre el desplegado de llamadas telefónicas con un análisis y esquemas de las mismas”⁸⁵⁸.

“Es decir, el Estado no actuó con la debida prontitud para procurar la efectividad de determinadas diligencias dirigidas a esclarecer los hechos, pues el allanamiento se efectuó más de un año y seis meses después de haberse recibido la llamada anónima de 18 de diciembre de 2001, y el análisis de las llamadas telefónicas fue considerado después más de tres años de contar con la información”⁸⁵⁹.

*“Este Tribunal ha constatado que de un informe rendido el 20 de febrero de 2002 contiene un análisis de la relación entre María Isabel y uno de los sospechosos y los indicios que podrían hacer pensar que él sería responsable del homicidio de María Isabel, por lo que los investigadores sugieren capturar al sospechoso ante “el peligro de su fuga”. Posteriormente, el 21 de junio de 2006 la Dirección de Investigaciones Criminalísticas señaló en su informe que no había sido posible ubicarlo.*⁸⁶⁰ *No fue aplicada al sospechoso*

⁸⁵⁶ Ibid. Párrafo 198

⁸⁵⁷ Ibid. Párrafo 199

⁸⁵⁸ Ibid. Párrafo 200

⁸⁵⁹ Ibid. Párrafo 201

⁸⁶⁰ Ibid. Párrafo 202

medida cautelar alguna y cuando se pretendió ubicar de nuevo su paradero, cuatro años después, no fue posible localizarlo. Dicha circunstancia impidió una debida investigación del sospechoso, afectando la investigación”⁸⁶¹.

Sobre la discriminación

“El Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que el artículo 1.1 de la Convención es una norma de carácter general, cuyo contenido se extiende a todas las disposiciones del tratado, ya que dispone la obligación de los Estados Partes de respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades allí reconocidos “sin discriminación alguna”. Es decir, cualquiera sea el origen o la forma que asuma, todo tratamiento que pueda ser considerado discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos garantizados en la Convención es per se incompatible con la misma. El incumplimiento por el Estado, mediante cualquier tratamiento discriminatorio, de la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos, le genera responsabilidad internacional. Es por ello que existe un vínculo indisoluble entre la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos y el principio de igualdad y no discriminación”⁸⁶².

“La Corte estima que la violencia basada en el género, es decir la violencia dirigida contra una mujer por ser mujer o la violencia que afecta a la mujer de manera desproporcionada, es una forma de discriminación en contra de la mujer, tal como han señalado otros organismos internacionales de protección de derechos humanos, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el CEDAW. Tanto la Convención de Belém do Pará (preámbulo y artículo 6) como el CEDAW (preámbulo) han reconocido el vínculo existente entre la violencia contra las mujeres y la discriminación. En el mismo sentido, el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Estambul, 2011) afirma que “la violencia contra las mujeres es una manifestación de desequilibrio histórico entre la mujer y el hombre que ha llevado a la dominación y a la discriminación de la mujer por el hombre, privando así a la mujer de su plena emancipación”, así como que “la naturaleza estructural de la violencia

⁸⁶¹ Ibid. Párrafo 203

⁸⁶² Ibid. Párrafo 204

contra las mujeres está basada en el género”⁸⁶³.

“La Corte reitera que la ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad de las mujeres, así como una persistente desconfianza de estas en el sistema de administración de justicia. Dicha ineficacia o indiferencia constituye en sí misma una discriminación [de la mujer] en el acceso a la justicia. Por ello, cuando existan indicios o sospechas concretas de violencia de género, la falta de investigación por parte de las autoridades de los posibles móviles discriminatorios que tuvo un acto de violencia contra la mujer, puede constituir en sí misma una forma de discriminación basada en el género”⁸⁶⁴.

“Según determinadas pautas internacionales en materia de violencia contra la mujer y violencia sexual, las pruebas relativas a los antecedentes sexuales de la víctima son en principio inadmisibles, por lo que la apertura de líneas de investigación sobre el comportamiento social o sexual previo de las víctimas en casos de violencia de género no es más que la manifestación de políticas o actitudes basadas en estereotipos de género”⁸⁶⁵.

“La Corte considera que la falta de debida diligencia en la investigación del homicidio de la víctima está estrechamente vinculada a la ausencia de normas o protocolos específicos para la investigación de casos de homicidios de mujeres por razón de género y de violencia contra la mujer en general. Lo anterior podría, en parte, explicar la negligencia estatal, pero no justificarla o fungir como eximente de la responsabilidad internacional del Estado. Ello, en tanto las normas en que se sustentan los derechos y obligaciones aquí examinados mandan la plena observancia de éstas y aquéllos en forma inmediatamente exigible al Estado a partir de la entrada en vigor de los tratados respectivos. Por ello, el Tribunal no puede admitir el argumento del Estado según el cual se eximiría de responsabilidad con base en que las autoridades estatales tomaron todas las medidas pertinentes de conformidad con la legislación vigente en ese momento y dentro de sus

⁸⁶³ Ibid. Párrafo 207

⁸⁶⁴ Ibid. Párrafo 208

⁸⁶⁵ Ibid. Párrafo 209

posibilidades”⁸⁶⁶.

“Adicionalmente, las dificultades para establecer si María Isabel Veliz Franco fue víctima de violencia contra la mujer según la Convención de Belém do Pará deriva en parte de la ausencia de una investigación profunda y efectiva por parte de las autoridades estatales sobre el incidente violento que causó la muerte de la víctima, así como de sus posibles causas y motivaciones. La Corte ya ha señalado que en el momento de los hechos ocurridos en el 2001, existía en Guatemala un contexto de incremento de homicidios que involucraba actos contra mujeres, a lo que se une que en el presente caso había indicios suficientes para sospechar que el homicidio de la víctima pudo tener un móvil discriminatorio, por el odio o desprecio por su condición de mujer, o que fue perpetrado con algún tipo de violencia sexual. Además, según se desprende del expediente judicial, la señora Rosa Elvira Franco Sandoval comunicó mediante escrito al Fiscal General y Jefe del Ministerio Público que cuando tuvo que ir a la morgue a reconocer a su hija, el forense “le indicó que su hija había sido violada”⁸⁶⁷.

“Este incumplimiento del deber de no discriminación se vio agravado en el presente caso por el hecho de que algunos funcionarios a cargo de la investigación del caso efectuaron declaraciones que denotan la existencia de prejuicios y estereotipos sobre el rol social de las mujeres. Del acervo probatorio se desprende que en algunos informes de la investigación se hizo referencia explícita a la forma de vestir de María Isabel, a su vida social y nocturna, a sus creencias religiosas, así como a la falta de preocupación o vigilancia por parte de su familia. Según un escrito de la madre de la víctima de 27 de abril de 2007, la Auxiliar Fiscal de la Agencia No. 5 de Mixco le habría dicho que María Isabel “era una cualquiera, una prostituta”. Asimismo, con base en información suministrada en un peritaje psicológico practicado a una amiga de María Isabel, el perito, sin fundamento, en su informe, concluyó que la víctima habría sufrido de “inestabilidad emocional al andar con varios novios y amigos”. Si bien es cierto, como alegó el Estado, que algunas de estas afirmaciones provenían de las declaraciones rendidas por testigos o entrevistados (conocidos y amigos de la víctima) en el marco de la investigación, el hecho de que se diera relevancia en los interrogatorios y en los informes a ciertos aspectos de la vida privada y del comportamiento previo de María Isabel demuestra la existencia de

⁸⁶⁶ Ibid. Párrafo 210

⁸⁶⁷ Ibid. Párrafo 211

estereotipos de género. Esta conclusión coincide con el contexto al que hacen referencia ciertos estudios y testimonios de mujeres sobrevivientes y sus familiares, así como la perita Solís García, sobre la “tendencia de los investigadores a desacreditar a las víctimas y culpabilizarlas por su estilo de vida, o ropa” y la indagación de aspectos relativos a las relaciones personales y sexualidad de las víctimas”⁸⁶⁸.

“En el presente caso, los estereotipos de género tuvieron una influencia negativa en la investigación del caso, en la medida en que trasladaron la culpa de lo acontecido a la víctima y a sus familiares, cerrando otras líneas posibles de investigación sobre las circunstancias del caso e identificación de los autores. Al respecto, la Corte ya ha tenido ocasión de señalar que la creación y uso de estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer”⁸⁶⁹.

“En consecuencia, la Corte estima que la investigación del homicidio de María Isabel no ha sido conducida con una perspectiva de género de acuerdo a las obligaciones especiales impuestas por la Convención de Belém do Pará. Por ello, en el marco de la investigación, en el presente caso el Estado violó el derecho a la igual protección de la ley contenido en el artículo 24 de la Convención Americana, en relación con el deber de no discriminación contenido en el artículo 1.1 del tratado”⁸⁷⁰.

Plazo razonable

“La Corte considera que una demora prolongada, como la que se ha dado en este caso, constituye en principio, por sí misma, una violación a las garantías judiciales”⁸⁷¹. En el presente caso, la Corte resalta que en fase inicial durante el conflicto de competencia sustanciado entre el 11 de marzo y el 21 de noviembre de 2002 hubo un atraso en la investigación, como el mismo Estado lo reconoció, de por lo menos ocho meses”⁸⁷².

“Para la Corte no es necesario realizar el análisis de los criterios mencionados dado que es evidente que el tiempo transcurrido es atribuible a la conducta estatal, y sobrepasa

⁸⁶⁸ Ibid. Párrafo 212

⁸⁶⁹ Ibid. Párrafo 213

⁸⁷⁰ Ibid. Párrafo 216

⁸⁷¹ Ibid. Párrafo 217

⁸⁷² Ibid. Párrafo 218

excesivamente el plazo que pudiera considerarse razonable para que el Estado investigara los hechos del presente caso. Por lo tanto, los más de doce años que ha tomado la investigación excede los límites de la razonabilidad, máxime siendo que en la actualidad el caso se encuentra aún en la etapa preparatoria o de investigación. Esta falta de investigación durante tan largo período configura una flagrante denegación de justicia y una violación al derecho de acceso a la justicia de las víctimas”⁸⁷³.

“Del acervo probatorio se desprende que actualmente en la investigación no se ha identificado a responsable alguno ni se sigue alguna estrategia de investigativa de acuerdo a la prueba e indicios recabados que permitan el esclarecimiento del caso. Si bien esta Corte ha establecido que el deber de investigar es un deber de medios, no de resultados, ello no significa que la investigación pueda ser emprendida como “una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa”. Al respecto, el Tribunal ha establecido que “cada acto estatal que conforma el proceso investigativo, así como la investigación en su totalidad, debe estar orientado hacia una finalidad específica, la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento, y en su caso, la sanción de los responsables de los hechos”⁸⁷⁴.

“Por otro lado, la Corte ha constatado que la señora Rosa Elvira Franco ha tenido acceso a la investigación y ha participado activamente en ésta a través de declaraciones, envío de escritos, presentación de información y consultas a los funcionarios encargados del caso, entre otros. Sin embargo, el Estado ha argumentado que dicha intervención de la señora Franco ha obstaculizado la investigación al aportar diversa información, contradictoria o inconsistente, que a su juicio no ha resultado útil. Al respecto, este Tribunal considera que dicho alegato del Estado es inadmisibles para justificar una demora indebida en los procedimientos, ya que en la jurisdicción interna corresponde a los órganos competentes dirigir la investigación y encauzarla de acuerdo a las estrategias o líneas de investigación determinadas por ellos para el esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, la investigación debe ser impulsada de oficio, sin que sean las víctimas o sus familiares quienes tengan la carga de asumir tal iniciativa, que corresponde al Estado”.⁸⁷⁵

⁸⁷³ Ibid. Párrafo 219

⁸⁷⁴ Ibid. Párrafo 220

⁸⁷⁵ Ibid. Párrafo 221

“La Corte concluye que el lapso de más de doce años que ha demorado la justicia interna sólo en la fase de investigación de los hechos sobrepasa excesivamente un plazo que pueda considerarse razonable para que el Estado realizara las correspondientes diligencias investigativas, y constituye una flagrante denegación de justicia. Por consiguiente, el presente caso se encuentra en un estado de impunidad en el que no han sido identificados ni, en su caso, sancionados los responsables del homicidio de María Isabel y sus familiares no han podido conocer la verdad de los hechos. La obligación del Estado de investigar debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelvan a repetirse”⁸⁷⁶.

“Este Tribunal resalta que la violencia contra la mujer, en razón de su género, es un problema histórico, social y cultural que se encuentra arraigado en la sociedad guatemalteca. Ello en razón de que durante y después del conflicto armado las mujeres sufrieron formas específicas de violencia de género, quedando los perpetradores en total impunidad, por la incapacidad de los tribunales de justicia de investigar, juzgar, y en su caso, sancionar a los responsables. Pese a que Guatemala fue uno de los primeros Estados en ratificar la Convención de Belém do Pará, por esas razones históricas, la violencia contra la mujer ha permanecido invisibilizada, situación que se refleja en la falta de investigar los homicidios desde una perspectiva de género, ya que las muertes de mujeres son investigadas como homicidios simples, manteniéndose dichos hechos en la impunidad. Asimismo, no existen estadísticas oficiales respecto de los delitos por razón de género antes del año 2008, que permitan visibilizar la situación de las mujeres, y que las autoridades estatales tomen consciencia de la problemática y adopten las políticas públicas necesarias para combatir este tipo de hechos”⁸⁷⁷.

“La Corte colige que pese a indicios de que el homicidio de María Isabel podría haberse cometido por razones de género, la investigación no fue conducida con una perspectiva de género y se demostró que hubo faltas a la debida diligencia y actos de sesgo discriminatorio en la misma. La investigación, ha sobrepasado excesivamente el plazo razonable y aún continúa en su fase investigativa inicial. Además, la falta de diligencia en el caso, como reconoció el Estado, se vinculó a la inexistencia de normas y protocolos para la investigación de este tipo de hechos. Por todo lo dicho, esta Corte concluye que la

⁸⁷⁶ Ibid. Párrafo 222

⁸⁷⁷ Ibid. Párrafo 223

investigación abierta a nivel interno no ha garantizado el acceso a la justicia de los familiares de María Isabel Veliz Franco, lo cual constituye una violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, y el derecho a la igualdad ante ley consagrado en el artículo 24 de la Convención, en relación con las obligaciones generales contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, y con los artículos 7.b y 7.c de la Convención de Belém do Pará, en perjuicio la señora Rosa Elvira Franco Sandoval, Leonel Enrique Veliz Franco, José Roberto Franco, y de los abuelos ya fallecidos Cruz Elvira Sandoval Polanco y Roberto Franco Pérez”⁸⁷⁸.

DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL DE LOS FAMILIARES, EN RELACION
CON LAS OBLIGACIONES DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS

“En el caso sub judice la Corte considera oportuno señalar que estableció la responsabilidad internacional del Estado por la falta de prevención en relación con la privación de la vida e integridad personal, así como por la falta a la protección y garantías judiciales, en relación con la falta de debida diligencia en las investigaciones efectuadas. En particular, se demostró que el Estado tuvo conocimiento del riesgo de la niña a partir de la denuncia y no adoptó las diligencias para prevenirlo y evitar su concreción, y las autoridades estatales no realizaron acciones diligentes en forma oportuna para investigar dentro de un plazo razonable el homicidio de María Isabel Veliz Franco”⁸⁷⁹.

“La Corte considera que la falta de prevención en el caso, así como la falta de una actuación diligente de las autoridades estatales en la investigación del homicidio de María Isabel y la impunidad en que permanecen los hechos y la investigación, generó un sufrimiento a la señora Rosa Elvira Franco Sandoval. Además está demostrado que durante la investigación la señora Franco Sandoval fue objeto de tratos despectivos e irrespetuosos por parte de agentes estatales, referidos a ella y respecto a su hija María Isabel, por lo que produjo a la señora Franco una afectación adicional a su integridad personal”⁸⁸⁰.

⁸⁷⁸ Ibid. Párrafo 225

⁸⁷⁹ Ibid. Párrafo 234

⁸⁸⁰ Ibid. Párrafo 239

3.13.6. PUNTOS RESOLUTIVOS

1. El Estado violó su deber de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos a la vida e integridad personal, consagrados en los artículos 4.1 y 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los derechos del niño consagrados en el artículo 19 de la Convención, y con la obligación general de garantizar los derechos sin discriminación, contemplado en el artículo 1.1 del mismo tratado, así como las obligaciones contempladas en el artículo 7.b) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en perjuicio de María Isabel Veliz Franco, en los términos de los párrafos 132 a 158 de la presente Sentencia.

2. El Estado violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 24 de la Convención, en relación con las obligaciones generales contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la misma, y con los artículos 7.b) y 7.c) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en perjuicio de Rosa Elvira Franco Sandoval, Leonel Enrique Veliz Franco, José Roberto Franco, Cruz Elvira Sandoval Polanco y Roberto Pérez, en los términos de los párrafos 178 a 225 de la presente Sentencia.

3.13.7. COMENTARIO

Este es de los pocos casos, dentro de los que estamos analizando, que tienen que ver con hechos posteriores a que el país ratificara el Convenio de Belém do Pará por su país, es decir que a la fecha de los hechos el país demandado debía ya tener establecido estándares por los que pudiera proteger a las mujeres de actos de violencia contra la mujer. Y a pesar de tener esta obligación dentro del país se percibía de manera alarmante que la violencia contra la mujer estaba incrementándose, peor aún no se habían establecido protocolos para investigar aquellos actos cometidos en agravio de mujeres solo por el hecho de serlo.

Es así que nuevamente vemos como constante que no se cumplió con una debida investigación y que hasta la fecha sigue impune la muerte de Veliz Franco, siendo especial en esta sentencia la división que hace de los momentos de investigación, siendo el primero

al momento que se conoció de la desaparición de María Isabel Veliz Franco, y el segundo antes de que se encuentra su cadáver, lo que nos lleva a la sentencia de Campo Algodonero donde se aprecia que se dividieron los momentos de la misma manera para evaluar si existió prevención de parte del Estado y después cómo se llevó las investigaciones respecto a la desaparición de los tres mujeres y si se hizo algo antes de saber de su muerte en la Ciudad de Juárez.

Y es que a pesar que hablamos de dos países demandados diferentes se observa que el criterio de la Corte se mantiene en muchos sentidos, no solo respecto a la forma de evaluar la escasa investigación por parte del Estado ante la desaparición y muerte de Maria Isabel sino también en la evaluación del indebido estereotipo con el que todavía se evalúan los casos por parte de los funcionarios públicos encargados de estos, al punto que llegaron a burlarse de la madre de Maria Isabel Veliz tildándola de loca, incluso imputarle que debido a sus mantenidas actuaciones es que se demoró el caso, lo que la propia Corte desmiente, lo que hace ver la falta de preparación que tienen los funcionarios públicos para tratar este tipo de casos, llevando al irrespeto de parte de los trabajadores del Estado sobre el dolor de la familia agraviada ante la pérdida de Maria Isabel que a través de esta sentencia es sancionado.

De igual manera se aprecia el sesgo discriminatorio , al igual que en el caso de Campo Algodonero, se llegó a denominar a Maria Isabel de “prostituta” hasta en los informes al punto que se cito a la madre de esta para interrogarla sobre la vida de su hija y sus actividades nocturnas sin enfocarse en las pruebas que pudieron ser recuperadas de la escena del crimen o de la necropsia, constatándose de todo lo actuado por la Corte que no se llegó a realizar tales indagaciones, y más bien se condujo la investigación por el lado de la culpabilidad de la víctima ante los hechos que sufrió.

Es así que en esta sentencia además hace una evaluación a las actuaciones preventivas que son imputadas al Estado además de las investigativas, ello porque, como ya se dijo, a la fecha de los hechos Guatemala ya había ratificado la Convención de Belém do Pará , y en especial porque este país era consciente de las estadísticas que implicaban el riesgo que corrían las mujeres dentro de su territorio, y por el cual no cumplía con proteger, lo que implica la contravención a la convención referida, peor aún que en este caso estamos ante no solo una mujer, sino a una adolescente de quince años de edad por la que no se quiso ni

siquiera investigar su desaparición (segundo momento), existiendo la posibilidad que si se hubiera investigado oportunamente su desaparición hubiera habido la oportunidad de encontrarla con vida, algo que nunca se sabrá. A lo que se agrega la posterior exigua investigación para individualizar al responsable de los hechos.

Algo que se debe subrayar es que probablemente a estas alturas no podrá saberse cuál fue la motivación del autor del crimen de Maria Isabel, pero si se puede incluir a que tuvo que ver con su género, lo que se presume por la brutalidad ejercida sobre la víctima, en especial los signos de violencia sexual lo que resulta relevante y suficiente para la aplicación del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará que implica la debida diligencia y acceso a la justicia de parte de las víctimas de violencia contra la mujer que tienen directa concordancia con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana que habla de Garantías Procesales y Protección Judiciales, las cuales son nulas en este caso y traen como consecuencia la impunidad por estos hechos y la certeza de parte de los perpetradores que podrán continuar en este tipo de delitos con la libertad que no serán investigados y menos sancionados, así como la desconfianza de la sociedad en su sistema de justicia.

3.14. VELÁSQUEZ PAIZ Y OTROS VS. GUATEMALA

3.14.1. FECHA: SENTENCIA DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2015

3.14.2. PRESENTACION DEL CASO DE PARTE DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS ANTE LA CORTE

PAIS DENUNCIADO	República de Guatemala
DERECHOS AFECTADOS PARA LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS	Violación de los siguientes derechos: el derecho a la vida y a la integridad personal consagrados en los artículos 4, 5, y 11 [sic] de la Convención Americana, todos ellos en conexión con la obligación que le imponen al Estado el artículo 1.1 de dicho tratado y el artículo 7 de Belém do Pará, los derechos de Claudina Isabel Velásquez Paiz bajo el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará en relación con el artículo 24 de la Convención Americana en concordancia con la obligación general de respetar y garantizar los derechos prevista en el artículo 1.1, y el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 de la Convención Americana en conexión con la obligación que le impone al Estado el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio de Jorge Rolando Velásquez Durán, Elsa Claudina Paiz Vidal de Velásquez y Pablo Andrés Velásquez Paiz, así como el derecho a las garantías y protección judicial consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana del mismo instrumento y en relación con la obligación que le impone al Estado el artículo 1.1. y el artículo 7 de Belém do Pará”.

“El caso sometido a la Corte.– El 5 de marzo de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió el caso ante la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte” o “el Tribunal”) contra la República de Guatemala (en adelante “el Estado” o “Guatemala”). Según la Comisión, el caso se refiere a la presunta

*responsabilidad del Estado por el incumplimiento del deber de protección de la vida e integridad personal de Claudina Isabel Velásquez Paiz. En cuanto a los hechos, la Comisión señaló que, debido a que la presunta víctima no llegó a casa el 12 de agosto de 2005, sus padres, Jorge Rolando Velásquez Durán y Elsa Claudina Paiz Vidal, acudieron a denunciar su desaparición. Ello no fue posible pues se les habría indicado que era necesario esperar 24 horas para denunciar el hecho. A pesar del conocimiento por parte de las autoridades estatales de la existencia de un contexto de violencia contra las mujeres que la ubicaba en una clara situación de riesgo inminente, el Estado no adoptó medidas inmediatas y exhaustivas de búsqueda y protección a su favor durante las primeras horas tras tener conocimiento de la desaparición. El cuerpo sin vida de la presunta víctima fue encontrado al día siguiente con señales de haber sido sometida presuntamente a actos de extrema violencia, incluida violencia sexual”.*⁸⁸¹

*“La Comisión alegó que el Estado incurrió en responsabilidad internacional al no haber realizado una investigación seria de la desaparición, violencia y muerte de Claudina Isabel Velásquez Paiz. Sostuvo que desde el inicio de la investigación hubo múltiples falencias, tales como deficiencias en el manejo y análisis de la evidencia recolectada; fallas en el manejo y preservación de la escena del crimen y toma de pruebas periciales; irregularidades en el informe de necropsia; falta de análisis comprensivos en diversas partes del cuerpo de la víctima para verificar una posible violación sexual; irregularidades en la toma de las huellas dactilares de la víctima, y falta de toma de declaración de testigos relevantes. Además alegó que tuvo lugar una demora en el proceso atribuible al Estado, particularmente por los continuos cambios en los fiscales encargados del caso que interrumpieron la investigación y causaron que no se realizaran diligencias a tiempo o que estas no fueran consideradas por los nuevos fiscales. Por último, halló que en el proceso se registra la presunta presencia de estereotipos discriminatorios que seriamente impactaron la falta de diligencia en la investigación. La Comisión consideró que tanto la falta de protección de la presunta víctima como la falta de investigación de su muerte, constituirían un claro reflejo de la situación subyacente de discriminación contra las mujeres en Guatemala. Finalmente, la Comisión alegó la violación del derecho a la integridad personal de sus padres y de su hermano, Pablo Andrés Velásquez Paiz”.*⁸⁸²

⁸⁸¹ Sentencia Velásquez Páiz vs. Guatemala del 19 de noviembre del 2015, párrafo 1

⁸⁸² Ibid, párrafo 2

3.14.3. HECHOS

“En el ejercicio de su jurisdicción contenciosa, la Corte ha conocido de diversos contextos históricos, sociales y políticos que permitieron situar los hechos alegados como violatorios de la Convención Americana en el marco de las circunstancias específicas en que ocurrieron. En algunos casos el contexto posibilitó la caracterización de los hechos como parte de un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos, como una práctica aplicada o tolerada por el Estado o como parte de ataques masivos y sistemáticos o generalizados hacia algún sector de la población.”⁸⁸³ En este caso, la Comisión y los representantes sustentaron sus consideraciones sobre el alegado contexto de violencia contra la mujer en Guatemala, haciendo referencia al Caso Veliz Franco y otros, así como a documentos de organismos nacionales e internacionales y de organizaciones no gubernamentales”.⁸⁸⁴

“El informe “Guatemala: Memoria del Silencio” de la Comisión para Esclarecimiento Histórico (en adelante “CEH”) señaló que “[l]as mujeres fueron víctimas de todas las formas de violaciones de derechos humanos durante el enfrentamiento armado, pero además sufrieron de formas específicas de violencia de género”. La CEH llegó a la convicción de que la desvalorización de la cual fueron objeto las mujeres resultó absoluta y permitió que elementos del ejército pudieran agredirlas con total impunidad, y concluyó que durante el enfrentamiento armado interno los tribunales de justicia se mostraron incapaces de investigar, procesar, juzgar y sancionar a los responsables. En el Caso Veliz Franco y otros, mediante Sentencia de 19 de mayo de 2014, la Corte señaló que dicha situación ha persistido con posterioridad a la finalización del conflicto armado, y que se ve reflejada en una cultura de violencia que continúa con los años, dentro de la cual hay un sustrato propio de violencia que afecta especialmente a las mujeres. Al respecto, el Tribunal constató que, si bien resulta difícil precisar con plena certeza el momento en el cual tuvo inicio, en todo caso, en diciembre de 2001 surgió la existencia de un contexto de aumento de la violencia homicida contra las mujeres en Guatemala, e indicaciones de que el mismo era conocido por el Estado. A su vez, “dentro del conjunto de muertes violentas de mujeres ocurridas en 2001 en Guatemala, la existencia de homicidios por razones de

⁸⁸³ Ibid, párrafo 43

⁸⁸⁴ Ibid, párrafo 44

género no era excepcional”. Asimismo, el incremento de violencia homicida contra las mujeres presentó un aumento sostenible a nivel nacional en los años 2004 y 2005, y la prueba aportada en el presente caso indica que los niveles de dicha violencia continuaban siendo elevados”⁸⁸⁵.

“Claudina Velásquez nació el 21 de noviembre de 1985 en la Ciudad de Guatemala, hija de Elsa Claudina Paiz Vidal y Jorge Rolando Velásquez Durán, y hermana menor de Pablo Andrés Velásquez Paiz. Al momento de los hechos del presente caso tenía 19 años de edad y se encontraba cursando la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala”⁸⁸⁶.

“El 12 de agosto de 2005 ella salió junto a su hermano temprano a la Universidad. Por la noche la familia tuvo conocimiento que Claudina iba a una fiesta, teniendo una última comunicación con ella a las 11:45 p.m.. Los padres de Claudina Velásquez comenzaron su búsqueda al ser informados, aproximadamente a las 2:00 a.m., que esta podría encontrarse en peligro, según se los manifestó una persona que dijo haber tenido comunicación telefónica con Claudina y que acudió directamente al domicilio de la familia para alertarlos de dicha situación. A las 2:12 a.m. la Policía Nacional Civil (en adelante “PNC”) recibió al número 110 una denuncia por una posible violación sexual en la Colonia Roosevelt, en respuesta una patrulla llegó a la garita principal de la Colonia Panorama aproximadamente a las 3:00 a.m. Una vez que los agentes policiales fueron informados por el padre y la madre de Claudina Velásquez que se encontraban realizando la búsqueda de su hija tras su desaparición, los padres siguieron a la patrulla policial en búsqueda de su hija desde la entrada principal de la Colonia Panorama hasta la entrada de la Colonia Pinares, en donde los agentes de la policía les dijeron que “no se podía hacer nada más y que ellos iban a seguir patrullando”, indicándoles también que tenían “que esperar por lo menos veinticuatro horas” para poder reportar a Claudina Velásquez como desaparecida. Entre las 3:00 y 5:00 a.m. los padres de Claudina Velásquez continuaron su búsqueda con la ayuda de familiares y amigos. Alrededor de las 5:00 a.m. los padres de Claudina Velásquez fueron a la estación de policía para reportar su desaparición. En dicho lugar nuevamente les reiteraron que debían esperar veinticuatro

⁸⁸⁵ Ibid, párrafo 45

⁸⁸⁶ Ibid, párrafo 51

horas. A esa misma hora el Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala recibió una llamada anónima sobre el hallazgo de un cadáver en la Colonia Roosevelt, por lo que acudieron al lugar. También, dos agentes de la PNC acudieron a dicho lugar aproximadamente a las 5:30 a.m. Alrededor de las 6:30 a.m. arribó al lugar personal del Ministerio Público. Finalmente, consta que recién a las 8:30 a.m. del 13 de agosto de 2005 se recibió por escrito la denuncia de la desaparición de Claudina Velásquez en la Sub-Estación San Cristóbal 1651 de la PNC”⁸⁸⁷.

“Por orden del operador de radio de la planta central de transmisiones de turno de la Comisaría 14, dos miembros de la PNC acudieron aproximadamente a las 5:30 a.m. del 13 de agosto de 2005 a la 10ª Avenida frente al domicilio marcado con el numeral 8-87 “A” en la Colonia Roosevelt, Zona 11, para averiguar sobre una mujer que “posiblemente se encontraba fallecida”. Al llegar al lugar, constataron que sobre el pavimento se encontraba “ya sin vida una persona de sexo femenino”. En el lugar también se encontraban dos miembros del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala que acudieron debido a una llamada anónima recibida de un teléfono público aproximadamente a las 5:00 a.m., y quienes constataron que no se identificó a la persona “por carecer de [d]ocumentos personales”. Aproximadamente a las 6:30 a.m. arribaron al lugar la auxiliar fiscal, el médico forense y los Técnicos de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público, así como miembros de la Unidad de Protección de la Escena del Crimen y de la Unidad Contra Homicidios de Mujeres del Servicio de Investigación Criminal de la PNC⁴⁶. De la prueba se desprende que a las 6:30 a.m. ya se había colocado una cinta acordonando la zona”.⁸⁸⁸

“El cuerpo fue identificado “como XX”⁸ y, se encontraba “sobre el asfalto cubierto con una sábana blanca con un casquillo y sangre alrededor” y “se respira[ba] un olor fuerte a alcohol”. Vestía pantalón de lona color azul, blusa negra, suéter rosado, sandalias negras, brasier (blanco/rosado), y calzón (bloomer salmón/rosado pálido), portaba un arete en el ombligo, una cadena tipo gargantilla, y presentaba “una herida de proyectil de arma de fuego con tatuaje en la región de la frente”, así como ropa “manchada de sangre”, “el brasier no lo tenía puesto”, sino colocado entre el pantalón y la cadera, “cincho removido”, “zipper abajo” y “la blusa puesta al revés”. Además, presentaba

⁸⁸⁷ Ibid. Párrafo 52, 53 y 54

⁸⁸⁸ Ibid, párrafo 55

“[e]quimosis rojo violácea a nivel peri orbital y mejilla lado izquierdo” y excoriaciones en la rodilla izquierda y a nivel flanco aparentemente sin reacción vital”.⁸⁸⁹

“En el lugar de los hechos se recolectaron diversos objetos como evidencia, los cuales fueron embalados y quedaron bajo custodia de los especialistas en la escena del crimen del Ministerio Público. Además, según información recopilada por “los agentes informantes”, varias personas que se encontraban en el lugar manifestaron que “un vehículo tipo taxi, de color blanco, llegó al lugar posiblemente a dejarla tirada”. Sin embargo, dichas personas “no proporcionaron su[s] nombre[s] por temor a represalias”. A las 7:30 a.m. aproximadamente, el cuerpo fue trasladado a bordo de una unidad policial hacia la morgue del Organismo Judicial de la Zona 354. Ese día se realizó el informe policial de la PNC y el Formato para Levantamiento y Remisión de Cadáveres del Ministerio Público”.⁸⁹⁰

“Los padres de Claudina Velásquez se enteraron del hallazgo del cuerpo sin vida de su hija a través de una llamada telefónica de un amigo de la prima de Elsa Claudina Paiz Vidal, quien les informó que en la morgue del Servicio Médico Forense del Organismo Judicial de la Zona 3 de la capital, había un cuerpo no identificado con las características de su hija. Ambos se presentaron a la morgue, en donde alrededor del mediodía del 13 de agosto de 2005 les fue entregado el cuerpo sin vida de su hija por el Servicio Médico Forense una vez que lo identificaron. Ese día en el Registro Civil de la Municipalidad de Guatemala se registró y certificó la defunción de Claudina Velásquez”⁸⁹¹

“El 13 de agosto de 2005 y tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Claudina Velásquez, se inició la investigación penal relacionada a su fallecimiento. La investigación ha estado a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Vida e Integridad de las Personas del Ministerio Público y bajo el control jurisdiccional de los Juzgados de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala. En el marco de la misma consta que se ha vinculado al menos a nueve personas, y que durante más de diez años han participado diversos agentes y auxiliares fiscales e investigadores del Ministerio Público y de la Policía Nacional”.⁸⁹²

⁸⁸⁹ Ibid, párrafo 56

⁸⁹⁰ Ibid. Párrafo 57

⁸⁹¹ Ibid, párrafo 58

⁸⁹² Ibid considerando 59

“Debido a que en el lugar en que se encontró el cuerpo sin vida de Claudina Velásquez y en la morgue del Organismo Judicial no se tomaron sus impresiones dactilares, la auxiliar fiscal y los Técnicos de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público arribaron al lugar donde estaba siendo velado el cuerpo el 13 de agosto de 2005 y practicaron la toma de huellas. El 16 de agosto de 2005 el Técnico de Investigaciones Criminalísticas remitió al Departamento Técnico Científico la ficha “decadactilar” con toma de huellas. El señor Jorge Rolando Velásquez Durán inicialmente se opuso a la toma de huellas dactilares, por lo que fue informado que si no lo permitía “se [l]e acusaría de obstrucción a una investigación y a la justicia y que además si el caso de Claudina Isabel llegase a juicio, este podría verse afectado al no constar de parte de ellos la identificación del cadáver”. Bajo estos argumentos y por consejo de un amigo abogado de la familia, accedió a la toma de huellas. A solicitud de su padre, el cuerpo de Claudina Velásquez fue trasladado a un área privada de la funeraria para tal fin”.⁸⁹³

3.14.4. AFECTACION DE DERECHOS

“El artículo 7 de la Convención de Belém do Pará instituye deberes estatales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer que especifican y complementan las obligaciones que tiene el Estado respecto al cumplimiento de los derechos consagrados en la Convención Americana, tales como los establecidos en los artículos 4 y 5. Al respecto, el Tribunal ha establecido que los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. En particular, deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias. La estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer. Asimismo, los Estados deben adoptar medidas preventivas en casos específicos en los que es evidente que determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de violencia. Todo esto debe tomar en cuenta que, en casos de violencia contra la mujer, los Estados

⁸⁹³ Ibid considerando 62

*tienen, además de las obligaciones genéricas contenidas en la Convención Americana, obligaciones específicas a partir de la Convención de Belém do Pará”.*⁸⁹⁴

DERECHOS A LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1.1166 Y 2167 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA Y CON EL ARTÍCULO 7 DE LA CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ, EN PERJUICIO DE CLAUDINA ISABEL VELÁSQUEZ PAIZ

*“En el presente caso, existen dos períodos en los que el deber de prevención debe ser analizado. El primero es antes de la desaparición de Claudina Velásquez y el segundo es antes de la localización de su cuerpo sin vida”*⁸⁹⁵. En el primer caso “para el momento en que acontecieron los hechos de este caso, el Estado implementó acciones dirigidas a abordar la problemática de la violencia contra las mujeres”⁸⁹⁶. Sin embargo, las organizaciones internacionales y nacionales señaladas, coinciden en que dichas medidas fueron insuficientes para solucionar el problema debido a la carencia de recursos asignados y a la falta de coordinación entre las diversas instituciones y de una estrategia integral de protección. En este sentido, la Corte nota que, en su Informe nacional presentado al Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de 7 de agosto de 2012, el Estado reconoció que dentro de los desafíos que enfrentaba, estaba el de “[o]perativizar una estrategia interinstitucional articulada para atender la prevención de la violencia contra la mujer en todos los ámbitos”⁸⁹⁷

“En el segundo momento antes de la localización del cuerpo de Claudina Velásquez: deber específico de prevenir violaciones a los derechos a la integridad y vida de Claudina Velásquez, consta en el expediente que, a partir de las 2:50 o 2:55 a.m. aproximadamente, sus padres, Jorge Velásquez y Elsa Paiz, realizaron una llamada telefónica a la Policía Nacional Civil y, en respuesta, una patrulla llegó a la garita principal de la Colonia Panorama a las 3:00 a.m. aproximadamente. En ese momento, los agentes policiales fueron informados por los padres de Claudina Velásquez que se encontraban realizando la búsqueda de su hija tras su desaparición y que tenían información de que ella podría estar

⁸⁹⁴ Ibid. Párrafo 108

⁸⁹⁵ Ibid. Párrafo 110

⁸⁹⁶ Ibid. Párrafo 113

⁸⁹⁷ Ibid. Párrafo 120

*en peligro. Así, dado el contexto de aumento de la violencia homicida contra las mujeres en Guatemala y agravamiento del grado de violencia y ensañamiento ejercidos contra los cuerpos de muchas de las víctimas, es evidente que a partir de este momento el Estado tuvo conocimiento de que existía un riesgo real e inmediato de que Claudina Velásquez fuera agredida sexualmente, sometida a vejámenes y/o asesinada”.*⁸⁹⁸

*“La Corte ha considerado reiteradamente que ante tal contexto surge un deber de debida diligencia estricta frente a denuncias de desaparición de mujeres, respecto a su búsqueda durante las primeras horas y los primeros días. Esta obligación de medio, al ser más estricta, exige la realización exhaustiva de actividades de búsqueda. En particular, es imprescindible la actuación pronta e inmediata de las autoridades policiales, fiscales y judiciales ordenando medidas oportunas y necesarias dirigidas a la determinación del paradero de la víctima”.*⁸⁹⁹

*“En relación con estos hechos, la Corte nota, en primer lugar, que si bien los funcionarios de la Policía Nacional Civil se apersonaron a la brevedad tras la llamada de los padres de Claudina Velásquez, únicamente acompañaron a estos desde la garita principal de una colonia hasta la entrada de otra, tras lo cual les indicaron que iban a seguir patrullando y que esperaran a presentar la denuncia. Dado el contexto de violencia contra la mujer conocido por el Estado, la respuesta de las autoridades estatales fue claramente insuficiente frente a la posibilidad de que peligraba la integridad personal y vida de Claudina Velásquez. Lo anterior, debido a que no consta siquiera que hayan recolectado los datos y descripciones que permitirían su identificación, ni que hayan emprendido una búsqueda exhaustiva, estratégica y coordinada con otras autoridades estatales, recorriendo los lugares donde razonablemente sería más probable encontrarla, ni se entrevistó a personas que razonablemente podrían tener información sobre su paradero.”*⁹⁰⁰

Por el contrario, consta en este caso que los padres de Claudina Velásquez se vieron obligados a realizar ellos mismos las actividades de búsqueda de su hija que correspondían al Estado, tales como recorrer los lugares donde podría encontrarse; llamar o entrevistar personalmente a las personas que podrían tener información sobre su

⁸⁹⁸ Ibid. Párrafo 121

⁸⁹⁹ Ibid. Párrafo 122

⁹⁰⁰ Ibid. Párrafo 126

paradero, y averiguar en hospitales y morgues si ahí se encontraba alguien con la descripción de su hija, entre otros”.⁹⁰¹

“Por otra parte, en relación al momento en que fue posible interponer una denuncia sobre la desaparición de Claudina Velásquez, la Corte observa que no hay claridad, con base en las declaraciones que constan en el expediente, a partir de qué momento debían transcurrir 24 horas para la interposición de dicha denuncia. Consta en el expediente que la última comunicación que tuvieron los padres de Claudina Velásquez con su hija fue a las 11:45 p.m. aproximadamente. No obstante, la denuncia de la desaparición fue recibida aproximadamente 8 horas y media luego de esta comunicación, pero 24 horas desde el momento que Claudina Velásquez salió de su casa”.⁹⁰²

“En vista de lo expuesto, la Corte considera que las autoridades estatales no adoptaron las medidas necesarias dentro del ámbito de sus atribuciones que, juzgadas razonablemente, podían esperarse para prevenir o evitar la vulneración de los derechos a la vida e integridad personal de Claudina Velásquez Paiz, desde el momento en que el Estado tuvo conocimiento del riesgo en que esta se encontraba”.⁹⁰³

“La Corte considera que el Estado no demostró haber implementado las medidas necesarias, conforme el artículo 2 de la Convención Americana y el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, de forma que los funcionarios responsables de recibir denuncias de desaparición tuvieran la capacidad y la sensibilidad para entender la gravedad de las mismas frente al contexto de violencia contra la mujer, así como la voluntad y entrenamiento para actuar de inmediato y de forma eficaz. Además, la Corte concluye que las autoridades guatemaltecas no actuaron con la debida diligencia requerida para prevenir adecuadamente la muerte y agresiones sufridas por Claudina Velásquez y no actuaron como razonablemente era de esperarse de acuerdo al contexto del caso y a las circunstancias del hecho denunciado. Este incumplimiento del deber de garantía es particularmente serio debido al contexto conocido por el Estado - el cual pone a las mujeres en una situación especial de riesgo - y a las obligaciones específicas

⁹⁰¹ Ibid. Párrafo 127

⁹⁰² Ibid. Párrafo 128

⁹⁰³ Ibid. Párrafo 132

impuestas en casos de violencia contra la mujer por el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará”⁹⁰⁴

“En razón de todo lo expuesto, el Tribunal considera que el Estado violó su deber de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos a la vida e integridad personal reconocidos en los artículos 4.1 y 5.1 de la Convención Americana, en relación con la obligación general de garantía contemplada en el artículo 1.1 y en relación con la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contemplada en el artículo 2 de la misma, así como con las obligaciones establecidas en el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, en perjuicio de Claudina Isabel Velásquez Paiz”.⁹⁰⁵

DERECHOS A LAS GARANTÍAS JUDICIALES, A LA PROTECCIÓN JUDICIAL Y A LA IGUALDAD ANTE LA LEY, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1.1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA Y EL ARTÍCULO 7 DE LA CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ, EN PERJUICIO DE LOS FAMILIARES DE CLAUDINA VELÁSQUEZ PAIZ

“La Corte ha establecido que, de conformidad con la Convención Americana, los Estados Partes están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos (artículo 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello dentro de la obligación general de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1). Asimismo, ha señalado que el derecho de acceso a la justicia debe asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido e investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los eventuales responsables”⁹⁰⁶.

“La Corte también ha señalado que del artículo 8 de la Convención se desprende que las víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus familiares, deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos, tanto en procura del

⁹⁰⁴ Ibid. Párrafo 133

⁹⁰⁵ Ibid. Párrafo 134

⁹⁰⁶ Ibid. Párrafo 142

*esclarecimiento de los hechos y del castigo de los responsables, como en busca de una debida reparación. Asimismo, el Tribunal ha establecido que la obligación de investigar y el correspondiente derecho de la presunta víctima o de los familiares no solo se desprende de las normas Convencionales de derecho internacional imperativas para los Estados Parte, sino que además se deriva de la legislación interna que hace referencia al deber de investigar de oficio ciertas conductas ilícitas y a las normas que permiten que las víctimas o sus familiares denuncien o presenten querellas, pruebas o peticiones o cualquier otra diligencia, con la finalidad de participar procesalmente en la investigación penal con la pretensión de establecer la verdad de los hechos”.*⁹⁰⁷

“Ante un acto de violencia contra una mujer, resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección”⁹⁰⁸. El deber de investigar tiene alcances adicionales cuando se trata de una mujer que sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeres. A menudo es difícil probar en la práctica que un homicidio o acto de agresión violento contra una mujer ha sido perpetrado por razón de género. Dicha dificultad a veces deriva de la ausencia de una investigación profunda y efectiva por parte de las autoridades sobre el incidente violento y sus causas. Es por ello que las autoridades estatales tienen la obligación de investigar ex officio las posibles connotaciones discriminatorias por razón de género en un acto de violencia perpetrado contra una mujer, especialmente cuando existen indicios concretos de violencia sexual de algún tipo o evidencias de enañoamiento contra el cuerpo de la mujer (por ejemplo, mutilaciones), o bien cuando dicho acto se enmarca dentro de un contexto de violencia contra la mujer que se da en un país o región determinada. Asimismo, la investigación penal debe incluir una perspectiva de género y realizarse por funcionarios capacitados en casos similares y en atención a víctimas de discriminación y violencia por razón de género”⁹⁰⁹.

⁹⁰⁷ Ibid. Párrafo 144

⁹⁰⁸ Ibid. Párrafo 145

⁹⁰⁹ Ibid. Párrafo 146

“Las primeras fases de la investigación pueden ser especialmente cruciales en casos de homicidio contra la mujer por razón de género, ya que las fallas que se puedan producir en diligencias tales como las autopsias y en la recolección y conservación de evidencias físicas pueden llegar a impedir u obstaculizar la prueba de aspectos relevantes, como por ejemplo, la violencia sexual. En cuanto a la realización de autopsias en un contexto de homicidio por razón de género, la Corte ha especificado que se debe examinar cuidadosamente las áreas genital y para-genital en búsqueda de señales de abuso sexual, así como preservar líquido oral, vaginal y rectal, y vello externo y púbico de la víctima. Adicionalmente, la Corte ha señalado que los Estados tienen la obligación de adoptar normas o implementar las medidas necesarias, conforme al artículo 2 de la Convención Americana y al artículo 7.c de la Convención de Belém do Pará, que permitan a las autoridades ofrecer una investigación con debida diligencia en casos de presunta violencia contra la mujer”⁹¹⁰

“La Corte ha establecido que la eficiente determinación de la verdad en el marco de la obligación de investigar una muerte, debe mostrarse desde las primeras diligencias con toda acuciosidad. En este punto, en cuanto al manejo de la escena del crimen, el levantamiento y tratamiento del cadáver de la víctima, la necropsia, así como el mantenimiento de la cadena de custodia de todo elemento de prueba forense, en su jurisprudencia y siguiendo el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas (Protocolo de Minnesota), la Corte ha sustentado que deben realizarse algunas diligencias mínimas e indispensables para la conservación de los elementos de prueba y evidencias que puedan contribuir al éxito de la investigación. En este sentido, ha especificado los principios rectores que es preciso observar en una investigación cuando se está frente a una muerte violenta⁹¹¹. La Corte ha especificado que las autoridades estatales que conducen una investigación de este tipo deben intentar como mínimo, inter alia: i) identificar a la víctima; ii) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte, con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación penal de los responsables; iii) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga; iv) determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte, y v) distinguir entre

⁹¹⁰ Ibid. Párrafo 148

⁹¹¹ Ibid. Párrafo 150

muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen, se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados”⁹¹².

“la Corte advierte que no consta que se haya desplegado actividad alguna por parte de los investigadores del Ministerio Público y de la PNC a raíz de las denuncias sobre la desaparición de Claudina Velásquez presentadas por sus padres aproximadamente a las 3:00 a.m., 5:00 a.m. y 8:30 a.m. a diversos agentes de la PNC. Tampoco consta reporte policial alguno realizado al respecto, más allá de la boleta de denuncia de desaparición elaborada a las 8:30 a.m. el día 13 de agosto de 2005. En definitiva, la investigación penal no inició a partir de las denuncias sobre la desaparición de la víctima, sino que el momento específico de su inicio fue a partir del hallazgo del cuerpo sin vida de Claudina Velásquez”.⁹¹³

“Además la Corte concluye que en el presente caso se presentaron las siguientes irregularidades: i) falta de un registro policial sobre el hallazgo del cuerpo; ii) falta de investigación en los indicios de manipulación del cadáver; iii) incorrecto manejo de la escena del crimen; iv) irregularidades en la documentación y preservación de la evidencia; v) falta de recaudación y preservación de evidencia; vi) irregularidades respecto a la práctica de la necropsia y su documentación; vii) irregularidades y falta de determinación de la hora de la muerte; viii) referencia a la víctima como “XX” en informes de investigación elaborados con posterioridad a su identificación, e ix) irregularidades en el reconocimiento médico forense y su informe respectivo. Las falencias de las primeras diligencias de la investigación difícilmente pueden ser subsanadas por las tardías e insuficientes diligencias probatorias que el Estado ha tratado de impulsar. Además, la pérdida de evidencia deviene en irreparable. En razón de todo lo anterior, se afectó la debida diligencia y rigor en la investigación”.⁹¹⁴

“De otro lado la Corte ha establecido que, en aras de garantizar su efectividad, en la investigación de violaciones de los derechos humanos se debe evitar omisiones en la

⁹¹² Ibid. Párrafo 151

⁹¹³ Ibid. Párrafo 156

⁹¹⁴ Ibid. Párrafo 168

recaudación de prueba y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación. Al respecto, la Corte ha precisado que, cuando los hechos se refieren a la muerte violenta de una persona, la investigación iniciada debe ser conducida de tal forma que pudiese garantizar el debido análisis de las hipótesis de autoría surgidas a raíz de la misma. La Corte recuerda que la falta de diligencia tiene como consecuencia que conforme el tiempo vaya transcurriendo, se afecte indebidamente la posibilidad de obtener y presentar pruebas pertinentes que permitan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan, con lo cual el Estado contribuye a la impunidad”⁹¹⁵.

“En el presente caso la Corte ha constatado que, aun cuando se desplegó actividad investigativa por los hechos de la muerte violenta de Claudina Velásquez Paiz, a lo largo de diez años las diligencias se han realizado de manera tardía. En efecto, si bien la investigación inició el 13 de agosto de 2005, consta que los agentes y auxiliares fiscales a cargo de la investigación solicitaron acceder a los videos de seguridad de uno de los lugares en que presuntamente Claudina Velásquez había estado tiempo antes de su muerte, recién el 4 de septiembre de 2005; el 6 de diciembre de 2005 recibieron la declaración de uno de los miembros del cuerpo voluntario de bomberos que adicionó información sobre los hallazgos realizados en la escena del crimen; el 26 de junio de 2006 practicaron la reconstrucción de los hechos en presencia de los especialistas del Ministerio Público; los días 30 de octubre de 2007 y 23 de abril de 2008 solicitaron información acerca de las facturas de sopas instantáneas; el 26 de junio de 2008 solicitaron información sobre hechos reportados al número 110 de la PNC en la madrugada del 13 de agosto de 2005; los días 23 de julio de 2008 y 19 de mayo de 2009 solicitaron realizar los peritajes de trayectoria balística; el 24 de noviembre de 2008 se realizó el Perfil Psiquiátrico de Víctimario, Víctima y Escena del Crimen; el 20 de enero de 2009 recibieron la declaración del médico forense que practicó el reconocimiento y procesamiento médico legal de la escena del crimen que adicionó información sobre los hallazgos realizados en la escena del crimen, y el 11 de agosto de 2011 solicitaron el análisis de laboratorio para determinar a qué animal corresponderían las muestras de sangre animal halladas en las manos de la víctima. La práctica tardía de dichas diligencias tuvo como consecuencia que la información que se hubiera podido obtener a través de estas no se integrara a la investigación desde un inicio. Además, en algunos

⁹¹⁵ Ibid. Párrafo 169

*casos consta que no fue posible obtener la información requerida con los elementos aportados. Asimismo, en algunos casos los registros no fueron conservados a través del tiempo, por lo que la demora ocasionó la pérdida irreparable de la prueba”.*⁹¹⁶

*“La Corte ha constatado que han transcurrido más de 10 años desde los hechos del caso y desde que se inició la investigación, y aún no se ha determinado la verdad de lo ocurrido. Las diligencias de investigación han sido tardías y repetitivas, afectando con ello los resultados de la misma. Además, respecto a algunas otras diligencias, no se tiene claridad sobre las razones por las cuales se han practicado. Finalmente, otras diligencias se han prolongado a través del tiempo sin resultados concretos. La falta de debida diligencia en el presente caso ha afectado el derecho al acceso a la justicia de los familiares de Claudina Velásquez en un plazo razonable, en violación a las garantías judiciales”.*⁹¹⁷

Discriminación por aplicación de estereotipos e investigación sin enfoque de género

*“Sobre el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación, la Corte ha señalado que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación”*⁹¹⁸ El artículo 24 de la Convención Americana prohíbe la discriminación de derecho o de hecho, no solo en cuanto a los derechos consagrados en la misma, sino en lo que respecta a todas las leyes que apruebe el Estado y a su aplicación. Es decir, no se limita a reiterar lo dispuesto en el artículo 1.1 de la Convención, respecto de la obligación de los Estados de respetar y garantizar, sin discriminación, los derechos reconocidos en dicho tratado, sino consagra un derecho que también acarrea obligaciones al Estado de respetar y garantizar el principio de igualdad y no discriminación en la salvaguardia de otros derechos y en toda la legislación interna que apruebe”.⁹¹⁹

⁹¹⁶ Ibid. Párrafo 170

⁹¹⁷ Ibid. Párrafo 172

⁹¹⁸ Ibid. Párrafo 173

⁹¹⁹ Ibid. Párrafo 174

“En el ámbito interamericano, la Convención de Belém do Pará señala en su preámbulo que la violencia contra la mujer es “una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres” y además reconoce que el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye el derecho a ser libre de toda forma de discriminación. Desde una perspectiva general, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (en adelante, “la CEDAW”, por sus siglas en inglés) define la discriminación contra la mujer como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”. En este sentido, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (en adelante, “el Comité de la CEDAW”) ha declarado que la definición de la discriminación contra la mujer “incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer [i] porque es mujer o [ii] que la afecta en forma desproporcionada”. También ha señalado que “[l]a violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre”⁹²⁰.

“La Corte reitera que la ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad de las mujeres, así como una persistente desconfianza de estas en el sistema de administración de justicia. Dicha ineficacia o indiferencia constituye en sí misma una discriminación de la mujer en el acceso a la justicia. Por ello, cuando existan indicios o sospechas concretas de violencia de género, la falta de investigación por parte de las autoridades de los posibles móviles discriminatorios que tuvo un acto de violencia contra la mujer, puede constituir en sí misma una forma de discriminación basada en el género”⁹²¹.

⁹²⁰ Ibid. Párrafo 175

⁹²¹ Ibid. Párrafo 176

“Las declaraciones del señor Jorge Rolando Velásquez Durán y la señora Elsa Claudina Paiz Vidal, padre y madre de Claudina Velásquez, son consistentes en cuanto a que el día que la agente de la PNC Carolina Elizabeth Ruiz se constituyó en su domicilio para entrevistarlos, hizo de su conocimiento que la escena del crimen no fue trabajada profesionalmente debido a que hubo un prejuizgamiento con respecto al origen y condición de la víctima, siendo que se le había clasificado “como una cualquiera”, debido a: i) el lugar en que apareció su cuerpo; ii) porque usaba una gargantilla en el cuello y un arete en el ombligo; y iii) porque calzaba sandalias. Sin embargo, indicó que al observar con más detalle las características de Claudina Velásquez, se dieron cuenta que estaban prejuizgando mal y estudiaron un poco mejor la escena del crimen⁹²². Es claro que sus manifestaciones las hizo en el marco de sus funciones y actividad investigativa como agente estatal, y teniendo como referente importante haber estado presente en el procesamiento de la escena del crimen y haber observado directamente el trabajo de los miembros del personal de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público”.⁹²³

“La Corte reitera que el estereotipo de género se refiere a una pre-concepción de atributos, conductas o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente, y que es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes. En este sentido, su creación y uso se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer, condiciones que se agravan cuando se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades estatales”.⁹²⁴

“En este caso es interesante ver que se mantiene en las investigaciones los estereotipos y se aprecia la falta de investigación en un enfoque de genero, al respecto “Las peritas Christine Mary Chinkin y Paloma Soria Montañez sostuvieron que las actuaciones investigativas de las autoridades sobre la muerte violenta de Claudina Velásquez estuvieron influenciadas por estereotipos de género, pues en efecto, consideraron que “su perfil correspondía al de las pandillas y al de una prostituta”, “cuya muerte no debía

⁹²² Ibid. Párrafo 177

⁹²³ Ibid. Párrafo 178

⁹²⁴ Ibid. Párrafo 179

investigarse”. La perita Christine Mary Chinkin señaló que “los factores que contribuyeron a esta interpretación incluyeron que había desaparecido entrada la noche, había estado en una fiesta, [la] ropa y accesorios [que portaba] [...], el olor a alcohol en la escena del crimen, el lugar en que fue encontrado su cuerpo y el hecho de que era mujer”. Indicó que “[e]sta aplicación de estereotipos que caracteriza a las mujeres por su vestimenta impone restricciones a las mujeres -por ejemplo, su libertad de movimiento, expresión y asociación- al provocarles temor por su seguridad e incertidumbre sobre si las autoridades las protegerán adecuadamente”, y que “[e]l clima de impunidad creado por las investigaciones inadecuadas contribuye a ello”. Por su parte, la perita Paloma Soria Montañez indicó que Claudina Velásquez fue culpabilizada de su muerte “por ser joven, por haberse encontrado su cuerpo en una zona de pocos recursos, por la forma de vestir y por llevar un aro en el ombligo”⁹²⁵ En definitiva, “las autoridades culpaban a Claudina Isabel y a través de sus actuaciones hacían entender que era merecedora de su suerte. Todo esto hace que a[l] día de hoy los actos de violencia ocurridos [...] queden en la impunidad”⁹²⁶

“La Corte considera que en el presente caso, el Estado incumplió su obligación de investigar la muerte violenta de Claudina Velásquez como una posible manifestación de violencia de género y con un enfoque de género. A su vez, la existencia de estereotipos de género y prejuicios por los cuales se consideró a Claudina Isabel Velásquez Paiz como una persona cuya muerte no merecía ser investigada derivó en que el caso no se investigara de manera diligente ni con rigor. Todo lo anterior, constituyó violencia contra la mujer y una forma de discriminación en el acceso a la justicia por razones de género”

“La Corte reconoce, visibiliza y rechaza el estereotipo de género por el cual en los casos de violencia contra la mujer las víctimas son asimiladas al perfil de una pandillera y/o una prostituta y/o una “cualquiera”, y no se consideran lo suficientemente importantes como para ser investigados, haciendo además a la mujer responsable o merecedora de haber sido atacada. En este sentido, rechaza toda práctica estatal mediante la cual se justifica la violencia contra la mujer y se le culpabiliza de esta, toda vez que valoraciones de esta naturaleza muestran un criterio discrecional y discriminatorio con base en el origen, condición y/o comportamiento de la víctima por el solo hecho de ser mujer.

⁹²⁵ Ibid. Párrafo 180

⁹²⁶ Ibid. Párrafo 181

Consecuentemente, la Corte considera que estos estereotipos de género son incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos y se deben tomar medidas para erradicarlos donde se presenten”.⁹²⁷

“La Corte advierte que las actitudes que asumieron las autoridades en la investigación de la muerte de Claudina Velásquez no es un hecho aislado, pues coincide con el contexto sobre la “tendencia de los investigadores a desacreditar a las víctimas y culpabilizarlas por su estilo de vida, o ropa”, y la indagación de aspectos relativos a las relaciones personales y sexualidad de las víctimas, así como la impunidad de los actos violentos que conllevan la muerte de mujeres”.⁹²⁸

“En el presente caso, las diligencias de investigación han sido tardías, repetitivas y se han prolongado a través del tiempo, y algunas otras no se tiene claridad sobre las razones por las cuales se han practicado. Dichas falencias investigativas son una consecuencia directa de una práctica común de las autoridades que investigan de realizar una valoración estereotipada de la víctima, aunado a la ausencia de controles administrativos sobre la actividad de los agentes estatales que intervinieron y actuaron en la investigación con base en estos estereotipos y prejuicios. Todo lo cual derivó en que el caso no se investigara de manera diligente ni con rigor, manteniéndose en la impunidad hasta el día de hoy, lo cual constituyó una forma de discriminación en el acceso a la justicia por razones de género”⁹²⁹.

“Ahora bien, es posible asumir que la muerte violenta de Claudina Velásquez Paiz fue una manifestación de violencia de género a los efectos de la aplicación al caso del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, teniendo en cuenta⁹³⁰:

- a) los indicios de una probable violación sexual. El brasier no lo tenía puesto sino colocado entre el pantalón y la cadera, el zipper del pantalón estaba abajo, el cincho estaba removido, la blusa estaba puesta al revés y se documentó la presencia de semen en la cavidad vaginal de la víctima;*

⁹²⁷ Ibid. Párrafo 183

⁹²⁸ Ibid. Párrafo 190

⁹²⁹ Ibid. Párrafo 191

⁹³⁰ Ibid. Párrafo 192

- b) las lesiones que presentaba el cuerpo. Una lesión a nivel peri orbital y al lado izquierdo de la mejilla causada antes de su muerte, y excoriaciones en la rodilla izquierda y a nivel flanco, aparentemente causadas con posterioridad a la muerte, y
- c) el contexto de aumento de la violencia homicida contra las mujeres en Guatemala, agravamiento del grado de violencia contra aquellas y el ensañamiento ejercidos contra los cuerpos de muchas de las víctimas, lo cual ocurre en un entorno de diversas formas de violencia contra la mujer”.

“En definitiva, la existencia de indicios sobre posible violencia de género en contra de Claudina Velásquez fue de conocimiento de las autoridades encargadas de la investigación a partir de los primeros momentos en que se inició la investigación. Adicionalmente, dichos indicios fueron referidos reiteradamente en el transcurso de la misma. No obstante, a causa de los prejuicios y las manifestaciones discriminatorias basadas en estereotipos de género de los agentes estatales que intervinieron en la investigación, se omitió conducir la investigación desde un enfoque de género y la muerte de Claudina Velásquez fue conducida como un homicidio más”⁹³¹

“Para la Corte tres aspectos son fundamentales en cuanto a las consecuencias derivadas de la falta de un enfoque de género en la investigación penal. Primero, la invisibilización de las circunstancias previas a la muerte, siendo que los indicios indican la existencia de un acto de violencia ocurrido previo a la muerte. Segundo, la invisibilización de la forma en que ocurrió la muerte, a pesar que de los indicios se desprende la presunta comisión de un acto de violencia ocurrido con posterioridad a la muerte. Tercero, la invisibilización de la posible violencia sexual. Estos tres aspectos se presentan como una posible reiteración de la violencia ejercida en contra de la víctima ocurrida durante el tiempo de su desaparición, y adicionales al hecho de darle muerte”⁹³²

“Ello porque la investigación se limitó a la muerte de la víctima y continuó como un caso de homicidio sin tener en cuenta los estándares establecidos para este tipo de casos. Así pues, no se aseguraron las pruebas como la ropa de la víctima ni su correcta cadena de custodia; no se conservaron las evidencias físicas; no se realizaron los exámenes y pericias correspondientes; no se siguieron líneas de investigación adecuadas y se cerraron

⁹³¹ Ibid. Párrafo 196

⁹³² Ibid. Párrafo 197

otras líneas posibles de investigación sobre las circunstancias del caso e identificación de los autores. Por ende, el Estado faltó a su deber de investigar con debida diligencia.⁹³³ En consecuencia, la Corte estima que la investigación de la muerte de Claudina Velásquez no ha sido conducida con una perspectiva de género de acuerdo a las obligaciones especiales impuestas por la Convención de Belém do Pará”.⁹³⁴

“La Corte considera que en el presente caso, el Estado incumplió su obligación de investigar la muerte violenta de Claudina Velásquez como una posible manifestación de violencia de género y con un enfoque de género. A su vez, la existencia de estereotipos de género y prejuicios por los cuales se consideró a Claudina Isabel Velásquez Paiz como una persona cuya muerte no merecía ser investigada derivó en que el caso no se investigara de manera diligente ni con rigor. Todo lo anterior, constituyó violencia contra la mujer y una forma de discriminación en el acceso a la justicia por razones de género”.⁹³⁵

“En el presente caso, la Corte constató que la escena del crimen no fue trabajada como es debido ni con la exhaustividad requerida para lograr resultados positivos en la investigación; hubo una falta en la recaudación, documentación y preservación de evidencia; y hubo irregularidades en el reconocimiento médico forense y en la práctica de la necropsia, así como en su documentación respectiva. La presencia de estas falencias en las primeras diligencias de la investigación difícilmente pueden ser subsanadas, aunado a la pérdida de evidencia que deviene en irreparable. Además, las diligencias de investigación han sido tardías, repetitivas y se han prolongado a través del tiempo, y algunas otras no se tiene claridad sobre las razones por las cuales se han practicado. A su vez, no se siguieron líneas de investigación adecuadas. Dichas falencias investigativas son una consecuencia directa de la valoración estereotipada que las autoridades que investigan hicieron de la víctima y de la falta de un enfoque de género sobre la misma. Es así que, transcurridos más de 10 años de los hechos del caso y desde que se inició la investigación, la muerte de Claudina Velásquez aún se encuentra en la más absoluta impunidad, fuera de todo plazo razonable”.⁹³⁶

⁹³³ Ibid. Párrafo 198

⁹³⁴ Ibid. Párrafo 199

⁹³⁵ Ibid. Párrafo 200

⁹³⁶ Ibid. Párrafo 201

*“Por lo anterior, el Estado violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el derecho a la igualdad ante la ley reconocido en el artículo 24 de la Convención, en relación con las obligaciones generales contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la misma, y con el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en perjuicio de Jorge Rolando Velásquez Durán, Elsa Claudina Paiz Vidal y Pablo Andrés Velásquez Paiz, todos ellos familiares de Claudina Isabel Velásquez Paiz”.*⁹³⁷

DERECHOS A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y PROTECCIÓN DE LA HONRA Y DE LA DIGNIDAD, EN PERJUICIO DE LOS FAMILIARES

*“La Corte ha señalado en otras oportunidades que los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas. El Tribunal ha considerado violado el derecho a la integridad psíquica y moral de algunos familiares con motivo del sufrimiento que estos han padecido a causa de las actuaciones u omisiones de las autoridades estatales, tomando en cuenta, entre otros, las gestiones realizadas para obtener justicia y la existencia de un estrecho vínculo familiar. También se ha declarado la violación de este derecho por el sufrimiento generado a partir de los hechos perpetrados en contra de sus seres queridos”*⁹³⁸.

*“En cuanto a las presuntas afectaciones a la integridad personal de los familiares, durante la audiencia pública el señor Jorge Rolando Velásquez Durán manifestó lo “aterrador” que fue para él presenciar a los agentes del Ministerio Público tomar las huellas dactilares a Claudina Isabel Velásquez durante la vela de su cuerpo. Señaló que este hecho “no tiene nombre, [y] no lo pued[e] calificar”.*⁹³⁹

“En virtud de lo expuesto, la Corte concluye que el Estado violó la integridad personal de los familiares de Claudina Isabel Velásquez Paiz debido a la forma en que se llevó a cabo la investigación del caso, en particular, la manera en la que los agentes del Ministerio Público irrumpieron en la vela del cuerpo de Claudina Velásquez, la calificación de esta

⁹³⁷ Ibid. Párrafo 202

⁹³⁸ Ibid párrafo 209

⁹³⁹ Ibid. Párrafo 211

como una persona cuya muerte no merecía ser investigada, y las irregularidades y deficiencias a lo largo de toda la investigación, en la cual el señor Velásquez Durán ha sido particularmente activo. Todo ello configura una violación del artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1, en perjuicio de Jorge Rolando Velásquez Durán, Elsa Claudina Paiz Vidal y Pablo Andrés Velásquez Paiz”⁹⁴⁰.

“En casos anteriores, la Corte ha establecido que el cuidado de los restos mortales de una persona es una forma de observancia del derecho a la dignidad humana. Asimismo, ha señalado que los restos mortales de una persona merecen ser tratados con respeto ante sus deudos, por la significación que tienen para estos. En este sentido, la Corte considera que los ritos funerarios son actos por medio de los cuales los familiares de una persona fallecida le rinden tributo a su ser querido, de acuerdo a sus creencias, tratando de obtener un mínimo de consuelo en los últimos momentos que tendrán con la presencia física de este. En el presente caso, cuando los funcionarios del Ministerio Público llegaron a la funeraria donde estaba siendo velado el cuerpo de Claudina Velásquez y solicitaron tomar sus huellas dactilares bajo amenazas a sus padres de ser acusados de obstrucción a la justicia, pese a que debieron realizar dicha diligencia antes de entregar el cuerpo a los familiares, irrumpieron en un momento íntimo y doloroso a fin de manipular nuevamente los restos mortales de la hija de Jorge Rolando Velásquez Durán y Elsa Claudina Paiz Vidal, y hermana de Pablo Andrés Velásquez Paiz, afectando el derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. En consecuencia, el Estado también violó el artículo 11 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de dichos familiares de Claudina Velásquez Paiz.”⁹⁴¹

3.14.5. PUNTOS RESOLUTIVOS

3. El Estado violó su deber de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos a la vida e integridad personal reconocidos en los artículos 4.1 y 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación general de garantía contemplada en el artículo 1.1 y en relación con la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contemplada en el artículo 2 de la misma, así como con las obligaciones establecidas en el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y

⁹⁴⁰ Ibid párrafo 218

⁹⁴¹ Ibid considerando 220

Erradicar la Violencia contra la Mujer, en perjuicio de Claudina Isabel Velásquez Paiz, en los términos de los párrafos 105 a 134 de esta Sentencia.

4. El Estado violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el derecho a la igualdad ante la ley reconocido en el artículo 24 de la misma Convención, en relación con las obligaciones generales contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la misma, y con el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en perjuicio de Elsa Claudina Paiz Vidal, Jorge Rolando Velásquez Durán y Pablo Andrés Velásquez Paiz, todos ellos familiares de Claudina Isabel Velásquez Paiz, en los términos de los párrafos 142 a 202 de esta Sentencia.

3.14.6. COMENTARIO

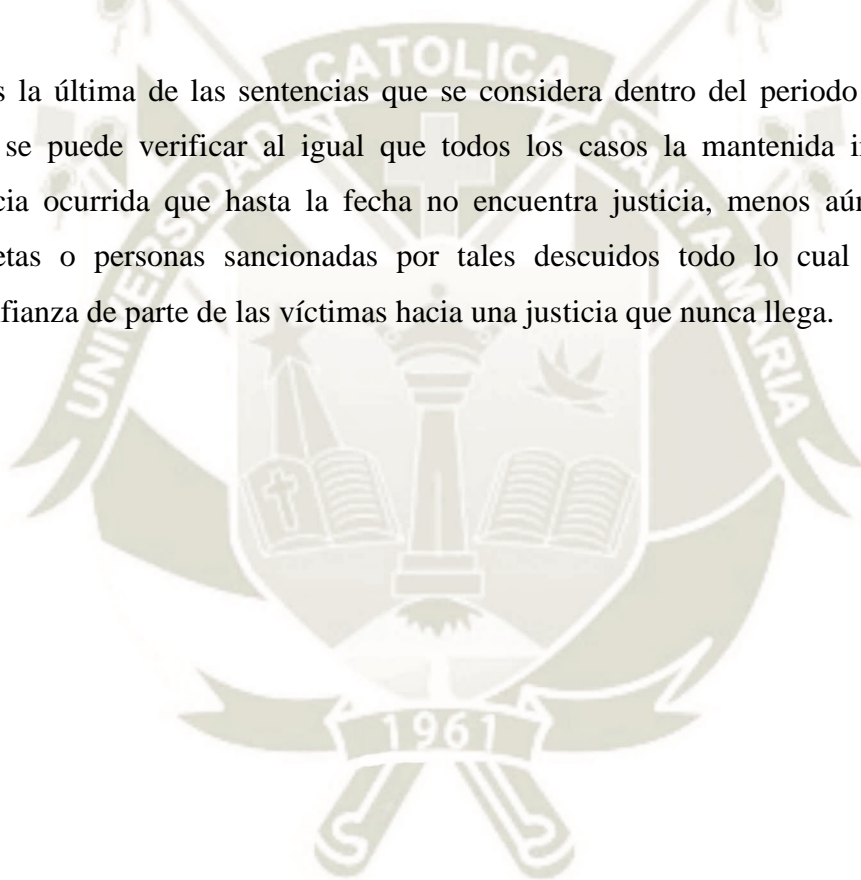
Entre los casos de Veliz Franco y Velásquez Paiz hay mucho en común: se dieron en el mismo país Guatemala, ocurrieron posterior a la ratificación de Guatemala de la Convención de Belem do Pará, las víctimas son mujeres jóvenes que de la misma manera desaparecieron y después aparecieron muertas con señas de haber tenido una muerte violenta con la posibilidad de violencia sexual, cuando fueron encontrados los cadáveres se supuso que eran mujeres que se dedicaban al meretricio y por ello los funcionarios pensaron que no era importante su investigación, las familias fueron maltratadas por los funcionarios públicos, las investigaciones han durado muchos años, hasta la fecha no se ha encontrado responsables por los hechos.

La diferencia es que los hechos de Veliz Franco se ha dado más de cuatro años antes que Velásquez Paiz, y a pesar que la sentencia de Veliz Franco se emitió solo un año antes que la que se viene analizando, no quita que Guatemala ya venia teniendo indicaciones de parte de la Corte para que mejorara sus protocolos de investigación, sin dejar de lado que debía instruir a sus funcionarios para que tuvieran mejores métodos y formas para el trato a los denunciantes y víctimas de violencia contra la mujer, lo que no se demuestra en este caso, tanto más que no solo se considera estos casos en contra de Guatemala, sino también los ocurridos en las masacres de Dos Erres y Rio Negro respecto de los cuales ya se había dado sugerencias de tramite, los que no se han seguido, peor aún cuando el Estado era

consciente que existía alto riesgo entre las mujeres guatemaltecas por sufrir este tipo de vejámenes, sobre los cuales no se ha avanzado mucho.

A ello se añade que incluso se maltrató a los familiares en este caso dado se entrega el cuerpo de Claudina Velásquez a su familia sin tomar sus huellas digitales y al darse cuenta de tal error los investigadores se presentan al velorio a subsanar su error sin considerar el pesar del momento que implicaba tal momento, lo que añadió dolor a la muerte de la víctima, lo que confirmaba la falta de cuidado de los funcionarios por investigar la violencia contra la mujer, porque ni siquiera había el cuidado de salvaguardar pruebas.

Esta es la última de las sentencias que se considera dentro del periodo de investigación donde se puede verificar al igual que todos los casos la mantenida impunidad por la violencia ocurrida que hasta la fecha no encuentra justicia, menos aún investigaciones completas o personas sancionadas por tales descuidos todo lo cual otorga aun mas desconfianza de parte de las víctimas hacia una justicia que nunca llega.



CAPITULO SEGUNDO

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN**1.1. INTRODUCCIÓN**

A continuación presento los resultados de la investigación realizada sobre las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitidas entre los años 2006 y 2015, donde al resolver se ha tenido en consideración la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (también denominada Convención de Belem do Pará).

Es así que de los 35 países que conforman la Organización de Estados Americanos, son 25 los Estados que son parte de la Convención Americana y por ende al Sistema Interamericano de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, de otro lado entre los instrumentos aprobados dentro de la Organización de Estados Americanos se encuentra la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer – Convención de Belém do Pará, siendo que 32 de los Estados han ratificado tal Convención, sobre la cual se basa esta investigación, dado que para ubicar las sentencias a desarrollar se revisó entre las emitidas en diez años de Jurisprudencia de la Corte Interamericana para identificar donde se resolvió teniendo en cuenta tal Convención, ello porque desde que se pone a consideración de la Corte los casos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se revisa en tales denuncias la posible violación de alguno de los artículos de la Convención de Belém do Pará, que posteriormente al momento de la emisión de la sentencia se resolviera utilizando tal instrumento legal.

Asimismo la información ha sido recopilada en tablas de doble entrada y posteriormente se han plasmado en gráficos circulares o cuadros cualitativos para un mejor entendimiento, los cuales obran a continuación, siendo que el total de las sentencias bajo análisis son catorce.

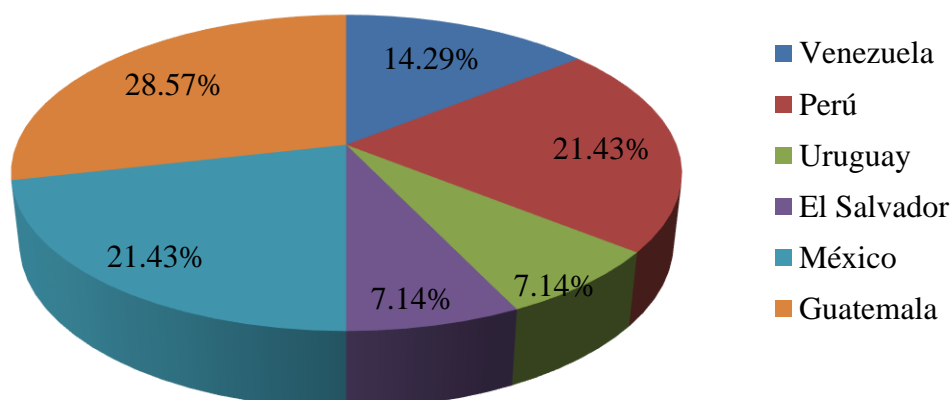
1.2. SOBRE LOS PAISES DEMANDADOS EN LAS SENTENCIAS BAJO ANALISIS PERTENECIENTES A LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS QUE RATIFICARON LA CONVENCIÓN DE BELEM DO PARA

TABLA N° 01
PAÍSES DEMANDADOS

PAISES	F. (Cantidad de Sentencias en su contra en base a la Convención de Belém do Pará)	%
Venezuela	2	14.29
Perú	3	21.43
Uruguay	1	7.14
El Salvador	1	7.14
México	3	21.43
Guatemala	4	28.57
TOTAL	14	100.00

Fuente: Elaboración personal

GRÁFICO N° 01: PAÍSES DEMANDADOS



Fuente: Elaboración personal

Del cuadro se aprecia que de las catorce sentencias materia de análisis versaron sobre denuncias realizadas sobre alguna violación a un derecho que atañe a la Convención de Belem do Pará entre la diversa legislación internacional considerada para emitirlas, siendo que de los diez años de revisión se aprecia que son seis los países que habrían sido demandados por este tipo de actos: El Salvador, Guatemala, México, Perú, Uruguay y Venezuela.

Es así que de las catorce sentencias revisadas que tienen que ver con la Convención de Belem do Pará el país con mayor número de denuncias en su contra es Guatemala con 4, y los dos países con solo una denuncia son Uruguay y El Salvador en los diez años de análisis.

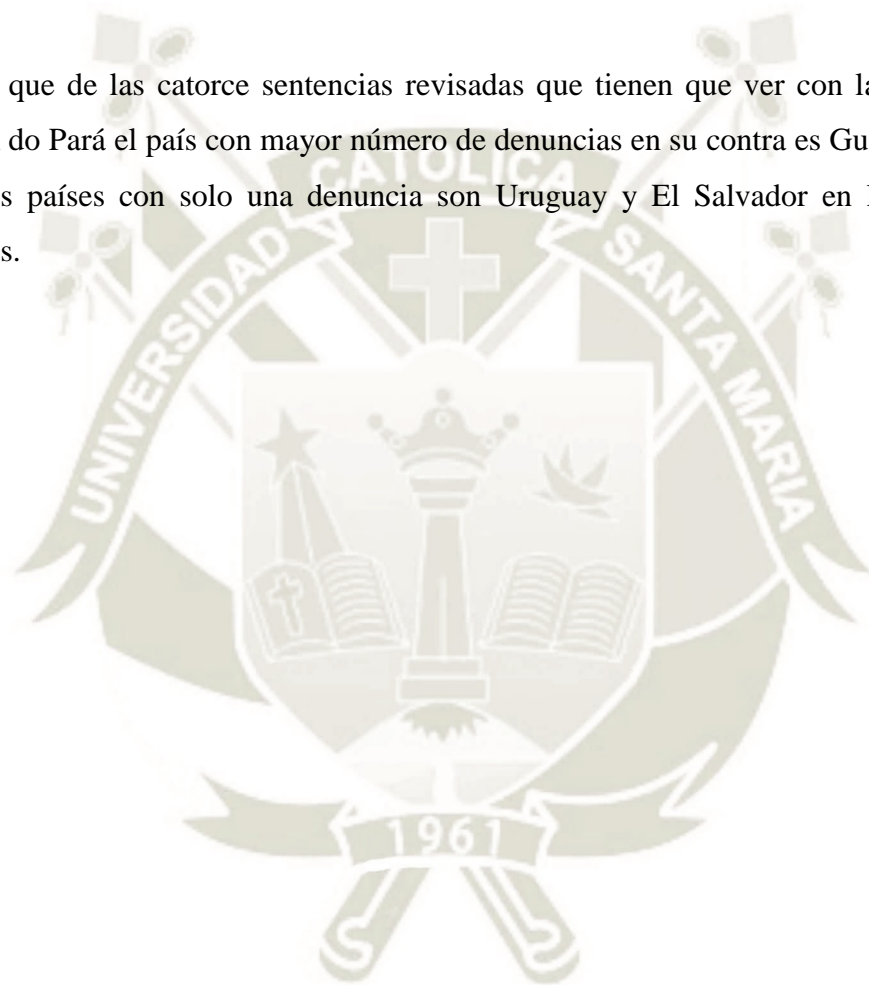


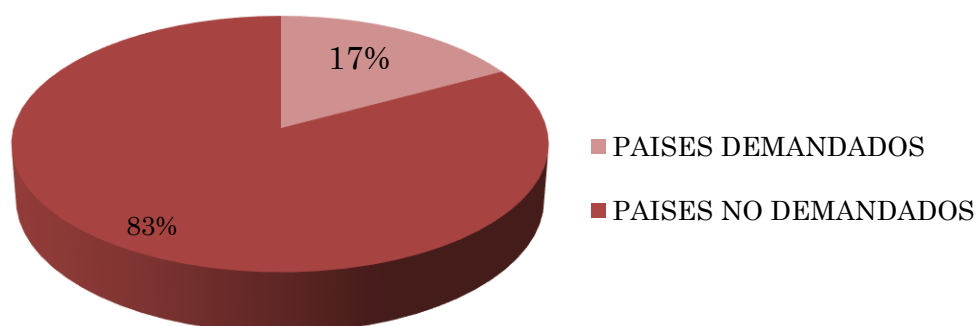
TABLA N° 02

RELACION ENTRE PAISES DEMANDADOS Y NO DEMANDADOS QUE
CONFORMAN LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS

PAISES	F.	%
PAISES DEMANDADOS	6	17%
PAISES NO DEMANDADOS	29	83%
TOTAL	35	100%

Fuente: Elaboración personal

**GRAFICO N° 02: RELACION DE PAISES DEMANDADOS
Y NO DEMANDADOS DENTRO DE LA ORGANIZACION
DE ESTADOS AMERICANOS**



Fuente: Elaboración personal

De los treinta y cinco Estados Parte de la Organización de Estados Americanos solo respecto de seis de tales Estados se ha emitido sentencias donde se ha meritado la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, es decir solo el 17% de los Estados Parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos son parte de esta investigación.

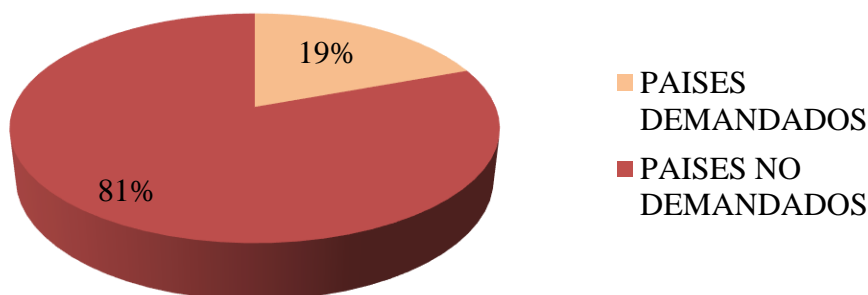
TABLA N° 03

RELACION ENTRE PAISES DEMANDADOS Y NO DEMANDADOS QUE
RATIFICARON LA CONVENCIÓN PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR
LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

PAISES	F.	%
PAISES DEMANDADOS	6	19%
PAISES NO DEMANDADOS	26	81%
TOTAL	32	100%

Fuente: Elaboración personal

GRAFICO N° 03: RELACION ENTRE PAISES DEMANDADOS Y NO DEMANDADOS QUE RATIFICARON LA CONVENCIÓN PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER



Fuente: Elaboración personal

De igual manera se desprende que tales seis países demandados y que son parte de esta investigación pertenecen al grupo de los treinta y dos países que han ratificado la Convención de Belem do Pará, por lo que el 19% de los países parte de esta Convención son demandados por contravenirla, haciendo hincapié que no todos los países que conforman la Organización de Estados Americanos (OEA) ha ratificado la Convención mencionada, por eso la disparidad de porcentajes entre los resultados de esta tabla con relación a la que antecede.

Este es un punto de partida para analizar internacionalmente la violencia contra la mujer porque al saber los porcentajes de países que conforman la Organización de Estados

Americanos, que a partir de estos hay un porcentaje que ha ratificado la Convención de Belém do Pará, es decir que reconoce la necesidad y prioridad de combatir la violencia contra la mujer, y que a pesar de ello dentro de sus países no se ha sabido aplicar correctamente este instrumento legal lo que ha generado que se cometan actos de violencia contra la mujer, peor aún aunque tales actos ocurrieron antes de la ratificación de esta Convención, los hechos agraviantes en contra de las mujeres se mantienen en el tiempo en la medida que nunca fueron investigados, menos sancionados, hecho que si tiene concordancia con la Convención de Belém do Pará que es parte del acervo legal interamericano.



1.3. SOBRE LA RELACIÓN ENTRE LA FECHA DE RATIFICACION POR LOS PAISES DEMANDADOS DE LA CONVENCIÓN DE BELEM DO PARA, LA FECHA QUE OCURRIERON LOS HECHOS Y LA FECHA DE EMISIÓN DE LA SENTENCIA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

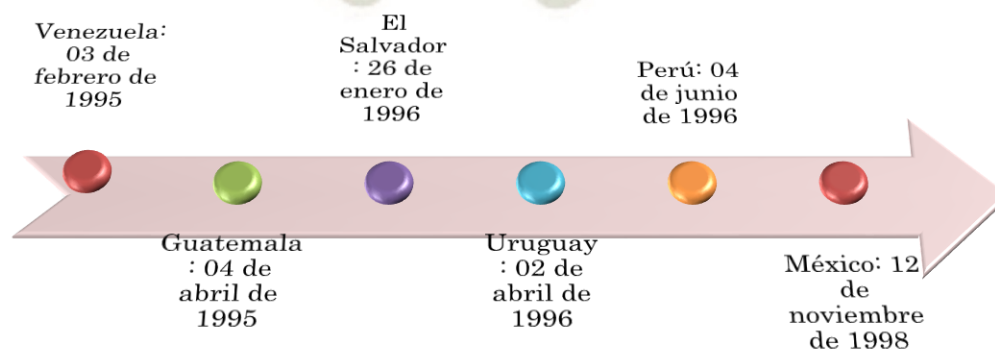
TABLA N° 04

FECHA QUE LOS PAISES DEMANDADOS RATIFICARON LA CONVENCIÓN DE
BELEM DO PARÁ

PAISES	FECHA DE RATIFICACION DE LA CONVENCIÓN DE BELEM DO PARÁ
Venezuela	3 DE FEBRERO DE 1995
Guatemala	4 DE ABRIL DE 1995
El Salvador	26 DE ENERO DE 1996
Uruguay	2 DE ABRIL DE 1996
Perú	4 DE JUNIO DE 1996
México	12 DE NOVIEMBRE DE 1998

Fuente: Elaboración personal

GRAFICO N°04: LINEA DE TIEMPO SOBRE RATIFICACION DE LA CONVENCIÓN BELEM DO PARA POR PAISES DEMANDADOS



Fuente: Elaboración personal

Es importante para la investigación identificar la fecha en que los países demandados ratificaron la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer considerando que la Convención fue firmada en la ciudad de Belem do Pará el 09 de junio de 1994, y entró en vigor el tres de mayo de 1995 conforme al artículo 21 de la convención al trigésimo día a partir de la fecha del depósito del segundo instrumento de ratificación⁹⁴²

Siendo que el primer país de los que ratificaron la Convención entre los países que han sido demandados entre las catorce sentencias en análisis es Venezuela en el año 1995, y el último de ellos es México en 1998, hecho que va a ser relevante para determinar la competencia temporal de la Corte para poder sentenciar en base a la Convención de Belem do Pará, dado que en muchos de los casos revisados en las sentencias los hechos denunciados son anteriores a la fecha de ratificación, pero debido que las consecuencias de los actos se mantienen en el tiempo la afectación a lo determinado en la Convención se evalúa desde la fecha de ratificación.

Como ejemplo de ello en la sentencia J vs. Perú se indica lo siguiente:

“El Estado depositó el documento de ratificación de la Convención de Belém do Pará ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos el 4 de junio de 1996. Con base en ello y en el principio de irretroactividad, codificado en el artículo 28 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969⁹⁴³, la Corte puede conocer de los actos o hechos que hayan tenido lugar con posterioridad a la fecha de dicha ratificación y que hayan generado violaciones de derechos humanos de ejecución instantánea y continuada o permanente”⁹⁴⁴.

⁹⁴² Artículo 21 de la Convención de Belém do Pará: “La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que se haya depositado el segundo instrumento de ratificación. Para cada Estado que ratifique o adhiera a la Convención después de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión”.

⁹⁴³ Artículo 28 de la Convención de Viena de 1969 Sobre el derecho de los Tratados: Irretroactividad de los tratados. “Las disposiciones de un tratado no obligaran a una parte respecto de ningún acto o hecho que había tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para esa parte ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo”.

⁹⁴⁴ Sentencia J vs. Perú párrafo 19.

Así también se aprecia la magnitud del principio de irretroactividad en la sentencia de Rio Negro vs. Guatemala donde se señala:

“Por otro lado, el Tribunal también tiene competencia para conocer de violaciones de derechos humanos de carácter continuado o permanente aunque el primer acto de ejecución haya tenido lugar antes de la fecha del reconocimiento de competencia contenciosa de la Corte, si dichas violaciones persisten con posterioridad a dicho reconocimiento, puesto que se continúan cometiendo, de manera que no se infringe el principio de irretroactividad”⁹⁴⁵.



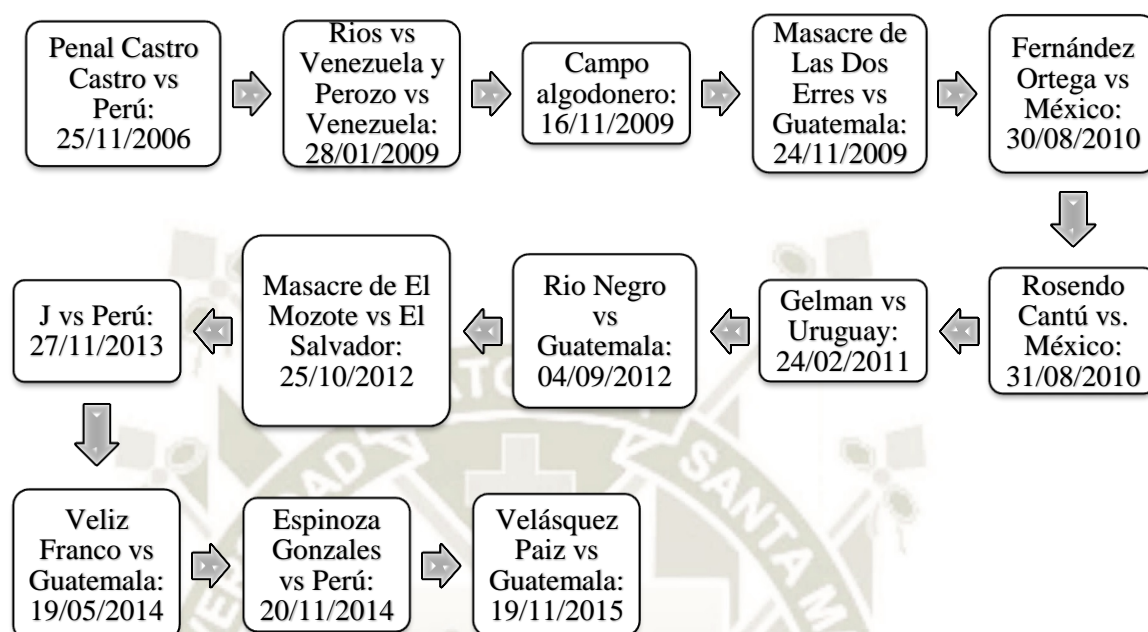
⁹⁴⁵ Sentencia Rio Negro vs. Guatemala párrafo 37, que a la vez cita al caso Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador del 23 de noviembre del 2014 párrafo 65 y 66 y al caso Gonzales Medina vs. República Dominicana párrafo 48.

TABLA N° 05

FECHAS DE LAS SENTENCIAS EN ANÁLISIS

SENTENCIA	FECHA DE SENTENCIA	AÑO
PENAL CASTRO CASTRO VS PERU	25 DE NOVIEMBRE	2006
RIOS VS. VENEZUELA	28 DE ENERO	2009
PEROZO VS. VENEZUELA	28 DE ENERO	2009
GONZALES VS MÉXICO (CAMPO ALGODONERO)	16 DE NOVIEMBRE	2009
MASACRE DE LAS DOS ERRES VS. GUATEMALA	24 DE NOVIEMBRE	2009
FERNÁNDEZ ORTEGA VS. MÉXICO	30 DE AGOSTO	2010
ROSENDO CANTÚ VS. MÉXICO	31 DE AGOSTO	2010
GELMAN VS. URUGUAY	24 DE FEBRERO	2011
RIO NEGRO VS. GUATEMALA	4 DE SETIEMBRE	2012
MASACRE DE EL MOZOTE VS. EL SALVADOR	25 DE OCTUBRE	2012
J. VS PERU	27 DE NOVIEMBRE	2013
VELIZ FRANCO VS. GUATEMALA	19 DE MAYO	2014
ESPINOZA GONZALES VS. PERU	20 DE NOVIEMBRE	2014
VELÁSQUEZ PAIZ VS. GUATEMALA	19 DE NOVIEMBRE	2015

Fuente: Elaboración personal

GRAFICO N°05
LINEA DE TIEMPO CONFORME A LA FECHA DE EMISIÓN DE LAS SENTENCIAS


Fuente: Elaboración personal

El presente cuadro busca establecer una línea de tiempo de las sentencias materia de análisis. Es así que se aprecia que el punto de partida de esta investigación nace con la sentencia Penal Castro Castro vs. Perú en el año 2006 y la última de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana donde se trata el tema de Violencia contra la Mujer se da en el año 2015 denominada Velásquez Paiz vs Guatemala.

Asimismo se aprecia del cuadro que la mayor cantidad de sentencias emitidas donde se ha tenido a consideración la Convención de Belem do Pará es en el año 2009 donde se emitieron cuatro sentencias, siendo resaltante que dos de ellas se emiten el mismo día, ello respecto a los casos de Ríos vs Venezuela y Perozo vs Venezuela, emitidas el 28 de enero del 2009, ello porque tienen circunstancias semejantes.

Así también se aprecia que en el año 2010 se emiten dos sentencias con diferencia de un día, entre ellas, 30 y 31 de agosto del 2010 respectivamente estas son: Fernández Ortega vs. México y Rosendo Cantú vs. México, de igual manera porque los hechos se realizaron en circunstancias y contextos semejantes.

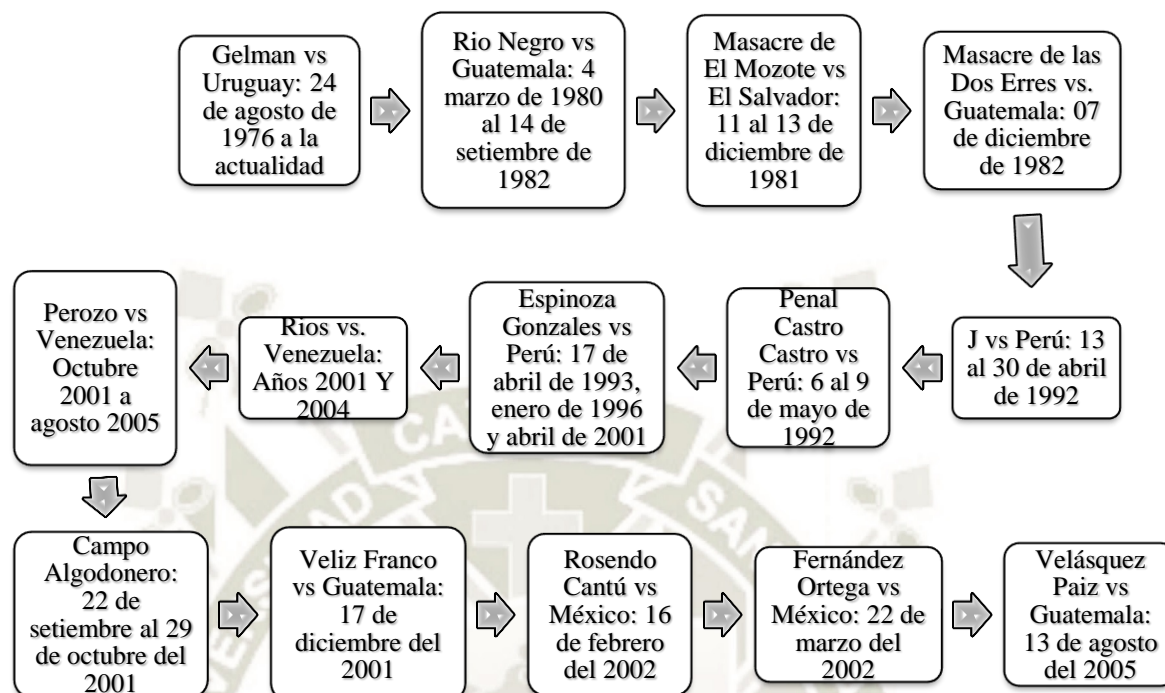
TABLA N° 06

FECHA DE LOS HECHOS DE ORIGEN

SENTENCIA	FECHA DE LOS HECHOS DE ORIGEN
GELMAN VS. URUGUAY	24 de agosto de 1976 a la actualidad
RIO NEGRO VS. GUATEMALA	4 marzo de 1980 al 14 de setiembre de 1982
MASACRE DE EL MOZOTE VS. EL SALVADOR	11 al 13 de diciembre de 1981
MASACRE DE LAS DOS ERRES VS. GUATEMALA	07 de diciembre de 1982
J. VS PERU	13 al 30 de abril de 1992
PENAL CASTRO CASTRO VS PERU	6 al 9 de mayo de 1992
ESPINOZA GONZALES VS. PERU	17 de abril de 1993, enero de 1996 y abril de 2001
RIOS VS. VENEZUELA	AÑOS 2001 Y 2004
PEROZO VS. VENEZUELA	Octubre 2001 a agosto 2005
GONZALES VS MÉXICO (CAMPO ALGODONERO)	22 de setiembre al 29 de octubre del 2001
VELIZ FRANCO VS. GUATEMALA	17 de diciembre del 2001
ROSENDO CANTÚ VS. MÉXICO	16 de febrero del 2002
FERNÁNDEZ ORTEGA VS. MÉXICO	22 de marzo del 2002
VELÁSQUEZ PAIZ VS. GUATEMALA	13 de agosto del 2005

Fuente: Elaboración personal

GRAFICO N° 06: LINEA DE TIEMPO SOBRE LOS HECHOS MATERIA DE LAS SENTENCIAS



Fuente: Elaboración personal

En las catorce sentencias materia de la investigación se aprecia que se investigan hechos que datan de diferentes momentos de la historia de Latinoamérica, es así que el más antiguo es del año 1976 en el caso de Gelman vs. Uruguay, donde es la fecha establecida Maria Claudia García y su esposo habrían sido secuestrados y retenidos contra su voluntad y posteriormente asesinados, y el más reciente el ocurrido respecto de Claudina Velásquez Paiz vs. Guatemala quien el 13 de agosto del 2005 fue denunciada su desaparición, y posteriormente fue encontrada muerta.

De esta forma damos cuenta que a pesar que hablamos de sentencias emitidas en diez años desde el 2006 hasta el 2015, los hechos entre ellas discurren en treinta años, siendo muchos de tales hechos ocurridos en muy pocos días, y otros a lo largo de varios años.

A pesar que este cuadro no refleja datos porcentuales de la investigación si permite tener una línea de tiempo para identificar correctamente los hechos denunciados sobre los que la Corte Interamericana llegó a sentenciar y lo más importante como en caso de los países demandados estos voluntariamente ratificaron la convención de Belem de Pará pero a pesar

de ello ocurriendo actos violentos en tales Estados Partes o se mantuvo la impunidad respecto de hechos antiguos por la falta de investigación de parte de las autoridades llamadas a hacerlo.



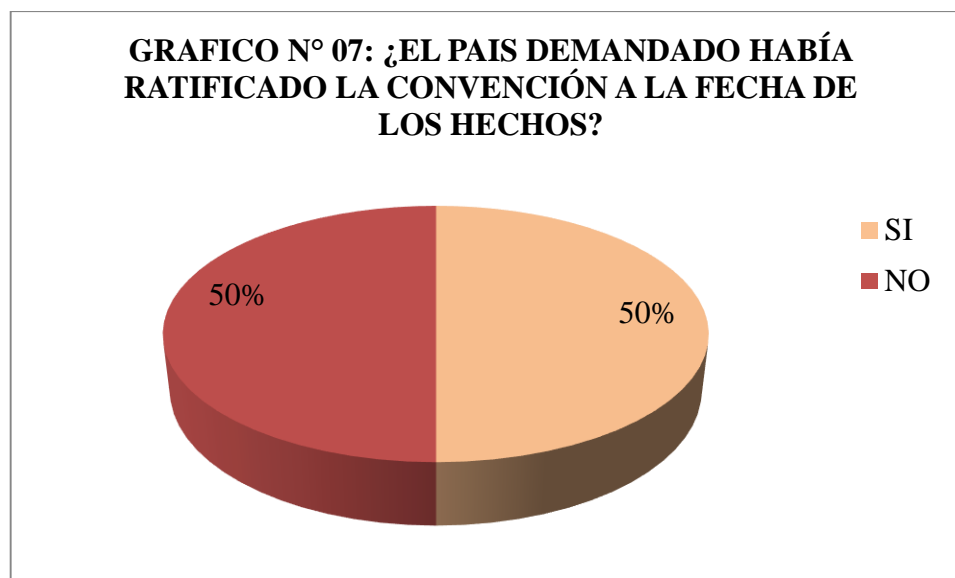
TABLA N° 07

¿EL PAÍS DEMANDADO HABÍA RATIFICADO LA CONVENCIÓN A LA FECHA
DE OCURRIDOS LOS HECHOS?

SENTENCIA	FECHA DE LOS HECHOS DE ORIGEN	FECHA DE RATIFICACION DE LA CONVENCIÓN DE BELEM DO PARA POR PAIS DEMANDADO	¿EL PAÍS DEMANDADO HABÍA RATIFICADO LA CONVENCIÓN A LA FECHA DE OCURRIDOS LOS HECHOS?
GELMAN VS. URUGUAY	24 de agosto de 1976 a la actualidad	2 DE ABRIL DE 1996	No
RIO NEGRO VS. GUATEMALA	4 marzo de 1980 al 14 de setiembre de 1982	4 DE ABRIL DE 1995	No
MASACRE DE EL MOZOTE VS. EL SALVADOR	11 al 13 de diciembre de 1981	26 DE ENERO DE 1996	No
MASACRE DE LAS DOS ERRES VS. GUATEMALA	07 de diciembre de 1982	4 DE ABRIL DE 1995	No
J. VS PERU	13 al 30 de abril de 1992	4 DE JUNIO DE 1996	No
PENAL CASTRO CASTRO VS PERU	6 al 9 de mayo de 1992	4 DE JUNIO DE 1996	No
ESPINOZA GONZALES VS. PERU	17 de abril de 1993, enero de 1996 y abril de 2001	4 DE JUNIO DE 1996	No
RIOS VS. VENEZUELA	AÑOS 2001 Y 2004	3 DE FEBRERO DE 1995	Si
PEROZO VS. VENEZUELA	Octubre 2001 a agosto 2005	3 DE FEBRERO DE 1995	Si
GONZALES VS MÉXICO (CAMPO ALGODONERO)	22 de setiembre al 29 de octubre del 2001	12 DE NOVIEMBRE DE 1998	Si
VELIZ FRANCO VS. GUATEMALA	17 de diciembre del 2001	4 DE ABRIL DE 1995	Si
ROSENDO CANTÚ VS. MÉXICO	16 de febrero del 2002	12 DE NOVIEMBRE DE 1998	Si
FERNÁNDEZ ORTEGA VS. MÉXICO	22 de marzo del 2002	12 DE NOVIEMBRE DE 1998	Si

VELÁSQUEZ PAIZ VS. GUATEMALA	13 de agosto del 2005	4 DE ABRIL DE 1995	Si
---------------------------------	--------------------------	--------------------	----

Fuente: Elaboración personal



Fuente: Elaboración personal

Con este cuadro nos damos cuenta que a pesar que los países ratificaron la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer se cometieron actos de violencia de este tipo dentro de tales países después de la fecha de ratificación, ello se percibe especialmente en el caso de Guatemala que ratificó la Convención el 4 de abril de 1995, siendo que antes de esta fecha ya se conocía de los hechos de Las Dos Erres y de Rio Negro, sin embargo a pesar de ello no existió la prevención necesaria ante actos de violencia contra la mujer, menos aún para investigar lo ocurrido y no se hizo nada ante la desaparición, muerte y posterior investigación de los homicidios violentos de los que fueron objeto María Veliz Franco y Claudina Velásquez Paiz.

Es importante explicar que en este cuadro se diferencia entre los hechos sentenciados que fueron resueltos respecto de países que a la fecha de los hechos habían y no habían ratificado la convención Belém do Pará, siendo que en el caso de las sentencias de los que no habían ratificado la convención al momento de los hechos se emite la sentencia tomando en cuenta la Convención Belem do Pará solo porque los hechos no han sido investigados y no se ha llegado a determinar un responsable sobre todo lo denunciado hasta la actualidad lo que demuestra la debida diligencia que no se obtuvo por las víctimas y las

familias de las víctimas de la que habla la Convención en el artículo 7, demostrando que la impunidad en estos casos se ha mantenido.

Es así que se aprecia que la mitad de las sentencias tienen que ver con hechos anteriores a la ratificación de la Convención Belem do Pará por los países denunciados y la otra mitad se da después de la ratificación, siendo por ello más reprochable para los países que ya habían ratificado el mismo como es el caso de México, debido que las tres resoluciones que tienen que ver con este país se dieron luego de la ratificación de la convención dado el 12 de noviembre de 1998.

De otro lado, cuando se evalúan los hechos de los casos que se dan después de la ratificación de los países, dos de ellos tienen que ver con los casos en contra de Venezuela, hechos por los que dicho país es absuelto ante la denuncia por actos de violencia contra la mujer.

Así también, de los hechos que se enmarcan después de la ratificación de los países demandados se aprecia que de los cinco donde a los países demandados se hacen responsables tenemos a México y Guatemala donde el acto de violencia principal es por la falta de diligencia ante la investigación de lo ocurrido: en el caso de Rosendo Cantú y Fernández Ortega por haber sido violentadas sexualmente por militares. Y en el caso de Campo Algodonero, Veliz Franco y Velazquez Paiz porque al ser objeto de estereotipos de género no se cumplió con atender sus casos con prontitud por los funcionarios a cargo de buscarlas, cuando se tenía la posibilidad de encontrarlas vivas, porque se supuso que no podían ser objeto de peligro, y cuando se encontró sus cadáveres se supuso que era mujeres que se dedicaban al meretrício, y por ello la investigación de sus muertes no era importantes; y aunque si hubieran ejercido tal oficio -que no era el caso- no se dio la debida dedicación a encontrar a los autores de los crímenes sufridos, lo que termina siendo un ejemplo del tratamiento de este tipo de casos por las autoridades tanto de México y Guatemala, en cómo no tratar a las víctimas y sus familiares.

Siendo incluso peor el hecho que en el caso de Guatemala se emite la sentencia de Veliz Franco, y pese a ello Guatemala no hizo nada por mejorar su sistema de justicia a todo nivel para proteger a las mujeres, lo que decantó en un segundo caso muy parecido como el de Velásquez Paiz que terminó con el mismo resultado, demostrando que no sirvió de nada

la demanda de Veliz Franco porque igual Claudina Velásquez sufrió la misma suerte sin la protección del Estado Guatemalteco para que viva libre de violencia solo por ocasión de ser mujer.



1.4. SOBRE LAS AFECTACIONES DENUNCIADAS EN LAS SENTENCIAS

MATERIA DE ANALISIS

TABLA N° 08

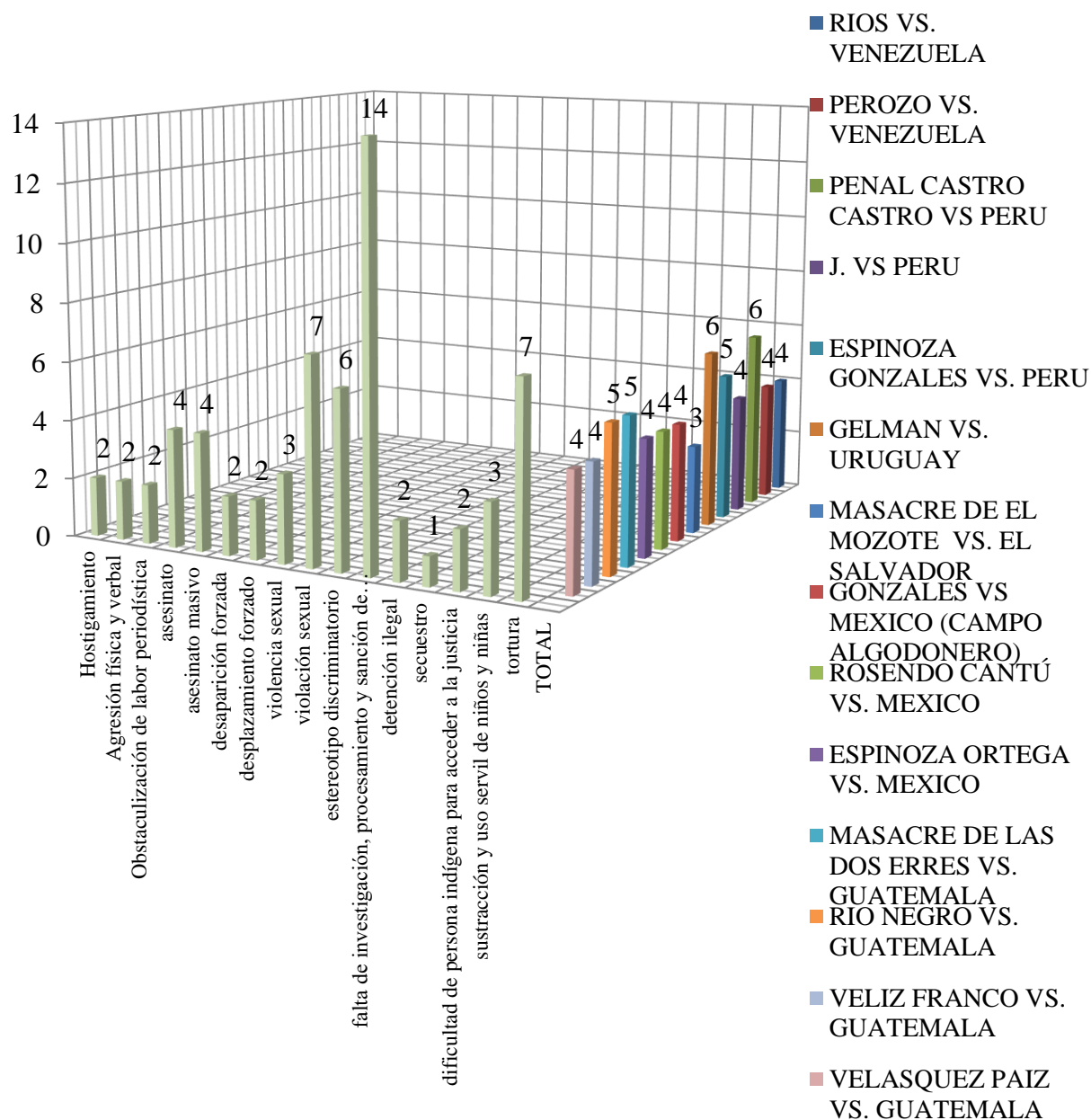
TIPO DE AFECTACION DENUNCIADA EN CADA SENTENCIA

	Total	Tortura	Dificultad de persona indígena para acceder a la justicia	Secuestro	Detención ilegal	Falta de investigación, procesamiento y sanción de responsables	Esterotipo discriminatorio	Violación sexual	Violencia sexual	Desplazamiento forzado	Desaparición forzada	Asesinato masivo	Asesinato	Obstaculización de labor periodística	Agresión física y verbal	Hostigamiento
RIOS VS. VENEZUELA	4					x								x	x	x
PEROZO VS. VENEZUELA	4					x								x	x	x
PENAL CASTRO CASTRO VS PERU	6								x	x	x					
J. VS PERU	4				x				x							
ESPINOZA GONZALE S VS. PERU	5				x				x							
GELMAN VS. URUGUAY	5				x						x		x			
MASACRE DE EL MOZOTE VS. EL SALVADOR	3											x				
GONZALE S VS MÉXICO (CAMPO	4								x				x			

ALGODON ERO)																		
ROSENDO CANTÚ VS. MÉXICO								X		X		X			X		X	5
FERNÁNDEZ ORTEGA VS. MÉXICO										X		X			X		X	4
MASACRE DE LAS DOS ERRES VS. GUATEMALA																	X	4
RIO NEGRO VS. GUATEMALA																	X	5
VELIZ FRANCO VS. GUATEMALA																		4
VELÁSQUEZ PAIZ VS. GUATEMALA																		4
TOTAL	2	2		2	4	4	2	2	3	7	6		14	2	1		2	7

Fuente: Elaboración personal

GRAFICO N° 08: TIPO DE AFECTACION DENUNCIADA EN CADA SENTENCIA



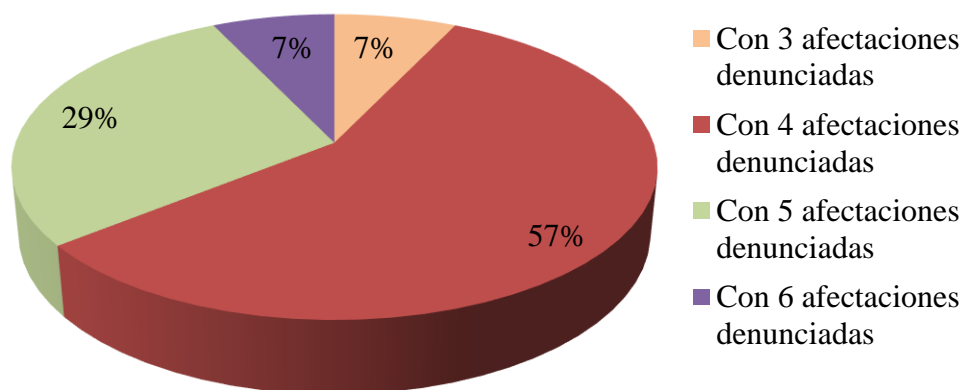
Fuente: Elaboración personal

Este cuadro es mucho más amplio y nos otorga muchas variables a considerar en el caso de cada sentencia, ello debido a que para cada sentencia se considera los tipos de afectaciones denunciadas por la Comisión ante la Corte para cada caso, siendo que estas afectaciones han sido determinadas conforme a la revisión de las diversas sentencias en análisis.

TABLA N° 09
CANTIDAD DE AFECTACIONES DENUNCIADAS EN CADA SENTENCIA

CANTIDAD DE AFECTACIONES DENUNCIADAS	F.	%
Con 3 afectaciones denunciadas	1	7
Con 4 afectaciones denunciadas	8	57
Con 5 afectaciones denunciadas	4	29
Con 6 afectaciones denunciadas	1	7
TOTAL	14	100

Fuente: Elaboración personal

**GRAFICO N° 09: CANTIDAD DE AFECTACIONES
DENUNCIADAS POR SENTENCIA**


Fuente: Elaboración personal

Este gráfico se desprende del anterior dado que se revisa cuantas afectaciones se han denunciado por la Comisión en cada una de las sentencias en análisis, siendo que en la mayoría de la sentencias en análisis son cuatro las afectaciones que son denunciadas.

Es así que en solo una se revisa tres afectaciones, siendo esta sentencia la Masacre de El Mozote vs. El Salvador donde se aprecia las afectaciones de: asesinato masivo, desplazamiento forzado y falta de investigación procesamiento y sanción, en cambio las sentencias con más afectaciones, en la cantidad de seis es Penal Castro Castro vs. Perú; siendo que se considera como afectaciones denunciadas: falta de investigación, procesamiento y sanción a los responsables, desaparición forzada, tortura, asesinato masivo y violencia sexual.

Este cuadro nos permite verificar nuestra hipótesis dado que nos demuestra que la violencia contra la mujer se da en un ámbito que traspasa a los conceptos de tipo de violencia que se han estudiado, sino que estos se muestran entrelazados conforme a la denuncia, con actos de tortura, hostigamiento, asesinatos, desplazamientos forzados, estereotipos discriminatorios, falta de investigación, procesamiento y sanción de responsables, violencia sexual y violación sexual, siendo que estos tipos de agravios se ven no solo considerados como afrentas a la convención de Belem do Pará sino que también tienen que ver con Convenciones Interamericanas que protegen a las personas contra la tortura y el desplazamiento forzado, sin dejar de lado la CEDAW.

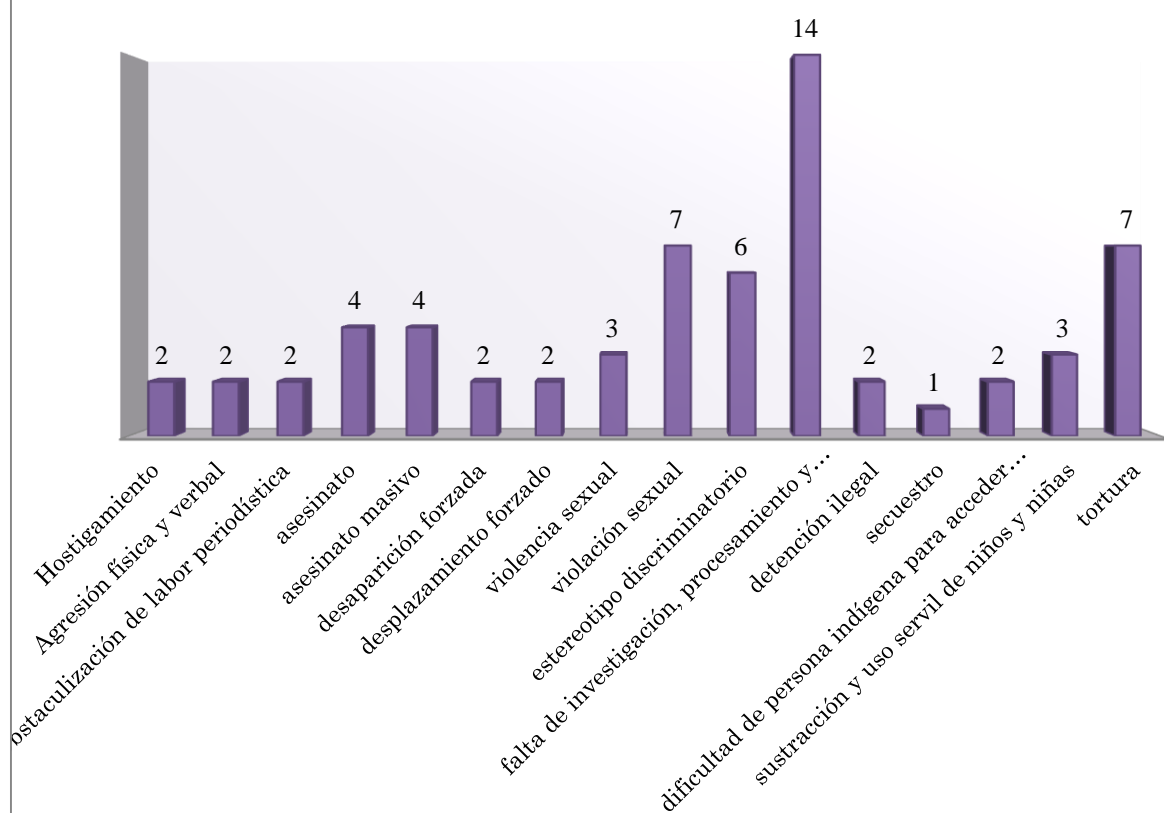
TABLA N°10

TIPOS DE AFECTACIONES DENUNCIADAS EN LAS SENTENCIAS

TIPO DE AFECTACION	CANTIDAD
Hostigamiento	2
Agresión física y verbal	2
Obstaculización de labor periodística	2
Asesinato	4
Asesinato masivo	4
Desaparición forzada	2
Desplazamiento forzado	2
Violencia sexual	3
Violación sexual	7
Estereotipo discriminatorio	6
Falta de investigación, procesamiento y sanción de responsables	14
Detención ilegal	2
Secuestro	1
Dificultad de persona indígena para acceder a la justicia	2
Sustracción y uso servil de niños y niñas	3
Tortura	7

Fuente: Elaboración personal

**GRAFICO N° 10: TIPOS DE AFECTACIONES ENCONTRADAS
EN LAS SENTENCIAS**



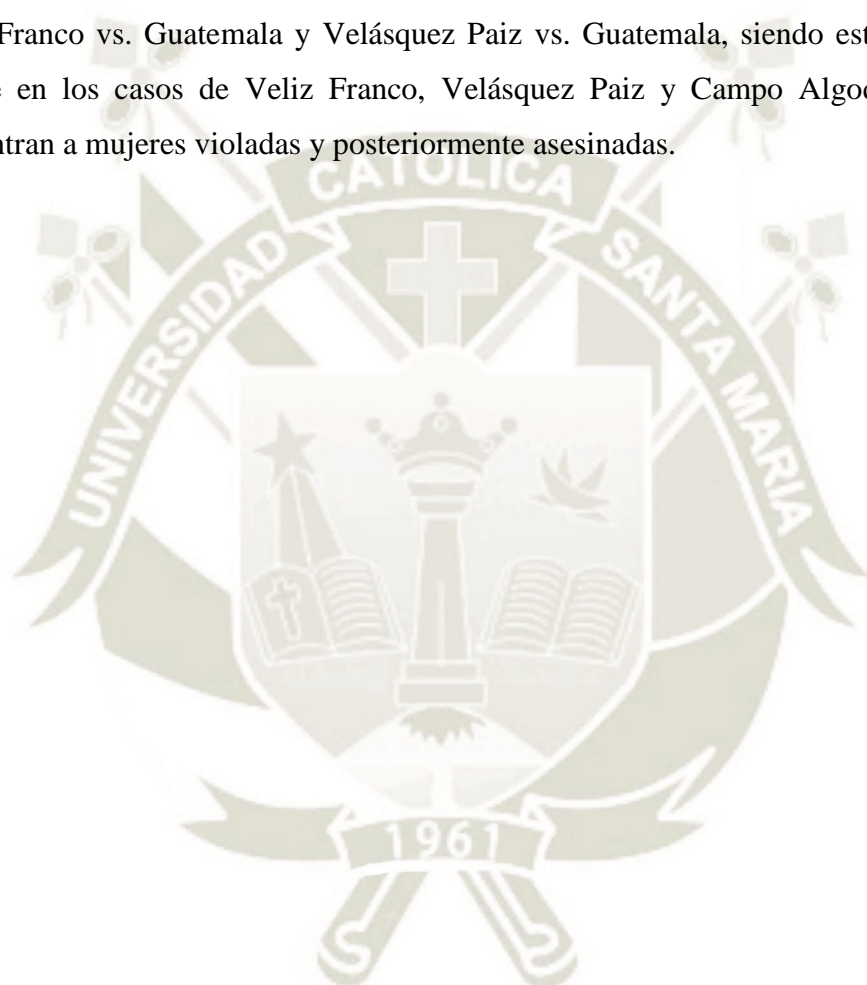
Fuente: Elaboración personal

De otro lado este gráfico también se desprende del cuadro número seis donde se busca establecer dentro de las sentencias en análisis cuantas veces se ha denunciado cierto tipo de afectaciones por la Comisión, siendo que la falta de investigación, procesamiento y sanción de los responsables es la que se encuentra en todas las sentencias, lo que nos hace recordar que en todas las sentencias el principal factor establecido es la falta de la debida diligencia para investigar los hechos ocurridos, al punto que hasta la fecha de emitida la sentencia no se había llegado a tener decisiones en ámbitos nacionales que otorgue justicia a las víctimas y sus familiares, lo que mantiene la atmósfera de impunidad en cada uno de los países demandados.

De otro lado, el siguiente grupo de afectaciones en importancia es la tortura y la violación sexual, siendo que en el primer caso se aprecia tal hecho en los casos que tienen que ver con el país demandado Perú, así como las dos masacres demandadas a Guatemala, y

Fernández Ortega y Rosendo Cantú ambas contra México, siendo que en todos estas resoluciones se hace referencia en los hechos a graves actos que buscaron dar sufrimiento a las víctimas, a ello se añade que la violación sexual es un acto de tortura.

Asi también se aprecia que la violación sexual es una afectación que aparece en siete sentencias siendo ellas: Rosendo Cantú vs. México, Fernández Ortega vs. México, Campo Algodonero, Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala, Masacre Rio Negro vs. Guatemala, Veliz Franco vs. Guatemala y Velásquez Paiz vs. Guatemala, siendo esta una afectación vértice en los casos de Veliz Franco, Velásquez Paiz y Campo Algodonero donde se encuentran a mujeres violadas y posteriormente asesinadas.

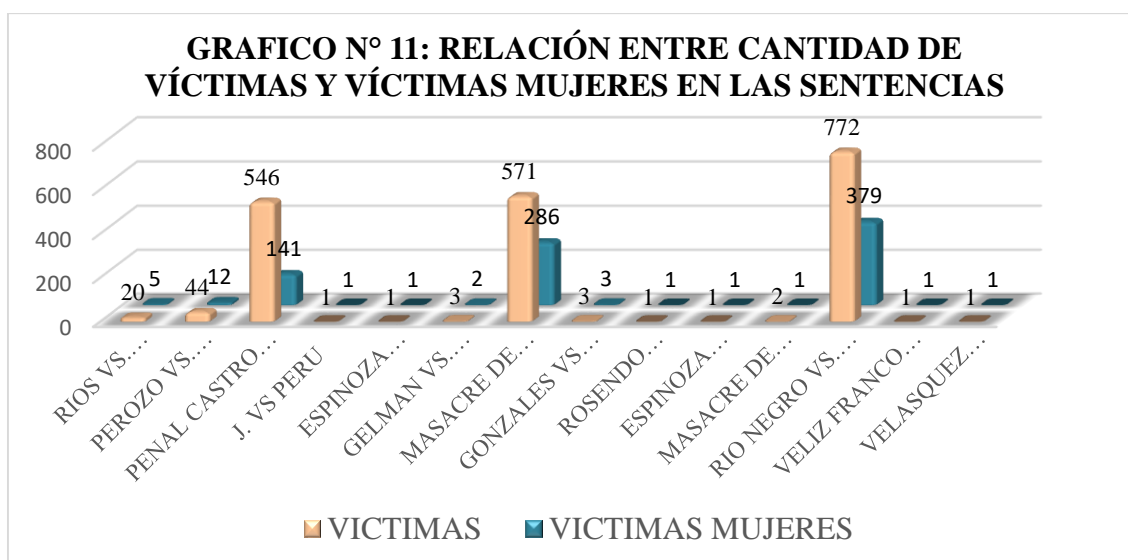


1.5. SOBRE LA RELACION ENTRE VÍCTIMAS Y VÍCTIMAS MUJERES EN LAS SENTENCIAS MATERIA DE INVESTIGACIÓN

TABLA N° 11
CANTIDAD DE VÍCTIMAS POR SENTENCIAS

SENTENCIA	VÍCTIMAS	VÍCTIMAS MUJERES	PORCENTAJE DE VÍCTIMAS MUJERES RESPECTO DEL TOTAL DE VÍCTIMAS (%)
RIOS VS. VENEZUELA	20	5	25.0
PEROZO VS. VENEZUELA	44	12	27.3
PENAL CASTRO CASTRO VS PERU	546	141	25.8
J. VS PERU	1	1	100.00
ESPINOZA GONZALES VS. PERU	1	1	100.00
GELMAN VS. URUGUAY	3	2	66.67
MASACRE DE EL MOZOTE VS. EL SALVADOR	571	286	50.09
GONZALES VS MÉXICO (CAMPO ALGODONERO)	3	3	100.00
ROSENDO CANTÚ VS. MÉXICO	1	1	100.00
FERNÁNDEZ ORTEGA VS. MÉXICO	1	1	100.00
MASACRE DE LAS DOS ERRES VS. GUATEMALA	2	1	50.00
RIO NEGRO VS. GUATEMALA	772	379	49.09
VELIZ FRANCO VS. GUATEMALA	1	1	100.00
VELÁSQUEZ PAIZ VS. GUATEMALA	1	1	100.00

Fuente: Elaboración personal



Fuente: Elaboración personal

En este cuadro y grafico revisamos la cantidad de víctimas que son parte de cada uno de las resoluciones, estas pasan entre ser una única víctima hasta la máxima de 772 víctimas.

Es así que en el caso de los procesos donde tenemos víctimas mujeres únicas son: J vs. Perú, Espinoza Gonzales vs. Perú, Rosendo Cantú vs. México, Fernández Ortega vs. México, Veliz Franco vs. Guatemala y Velásquez Páiz vs. Guatemala, siendo que en los cuatro últimos tienen que ver con denuncias por actos de violación sexual tanto cometidos directamente por efectivos estatales (casos de México) y cometidos por terceras personas (casos de Guatemala), pero donde no se realizaron investigaciones o procedimientos que permitan llegar a conocer a los responsables lo que contraviene el artículo 7.b. de la Convención de Belém do Pará. Además en estos dos últimos casos las víctimas fueron encontradas sin vida; en cambio en los casos de Perú y México las víctimas siguen vivas y personalmente realizaron las denuncias.

De otro lado los casos donde las cantidades de víctimas son mayores son aquellos que tienen como inicio de denominación “Masacre”, dado que en estos casos se investigan asesinatos masivos en zonas geográficas específicas dentro de Guatemala y El Salvador.

Asimismo se cuenta dentro de los que tienen gran cantidad de víctimas es en el caso Penal Castro Castro vs. Perú donde se cuenta 41 internos fallecidos, 185 heridos y 311 ilesos, dando el total de quinientos cuarenta y seis, ello porque se ha tenido en cuenta a todos los

que estuvieron dentro de los pabellones que fueron intervenidos por la policía el día de los hechos en el operativo “mudanza 1”, de las cuales 141 son mujeres, siendo que en este caso en especial los actos de violencia sexual hacia la mujer ocurren posterior al operativo en el hospital de la sanidad de la policía donde son transportadas las internas lesionadas quienes son objeto de actos tales como mantenerlas desnudas mientras se encontraban hospitalizadas, o con las ropas ensangrentadas del día del operativo, no permitirles accesorios de cuidado e higiene femenina, o que cada vez que iban a los servicios higiénicos era custodiadas por personal policial masculino, o lo tenían que hacer a puerta abierta, sin importar la dignidad de estas, asimismo se considera el hecho que algunas de las internas del penal se encontraban en estado de gestación, y a pesar de su estado tuvieron que dar a luz en estas situaciones, o estar en medio del operativo agachadas boca abajo sobre los vientres, todo lo cual significó violencia específica a la situación de mujer de las internas del penal Castro Castro, lo que trajo como consecuencia que algunas de las lesionadas murieran después de ser mantenidas sin atención o disminuido cuidado dentro del Hospital.

Tema aparte son las mujeres que son víctimas en estos procesos, especialmente donde las víctimas son más de una, en estos casos se aprecia que las mujeres no llegan a ser más de la mitad de las víctimas en total, sin perjuicio de ello, son las víctimas mujeres las protagonistas de esta tesis porque debido a la violencia que sufrieron es que se emiten las decisiones por parte de la Corte en base a la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

1.6. SOBRE LAS AFECTACIONES QUE SE RESOLVIERON EN LAS SENTENCIAS

TABLA N° 12

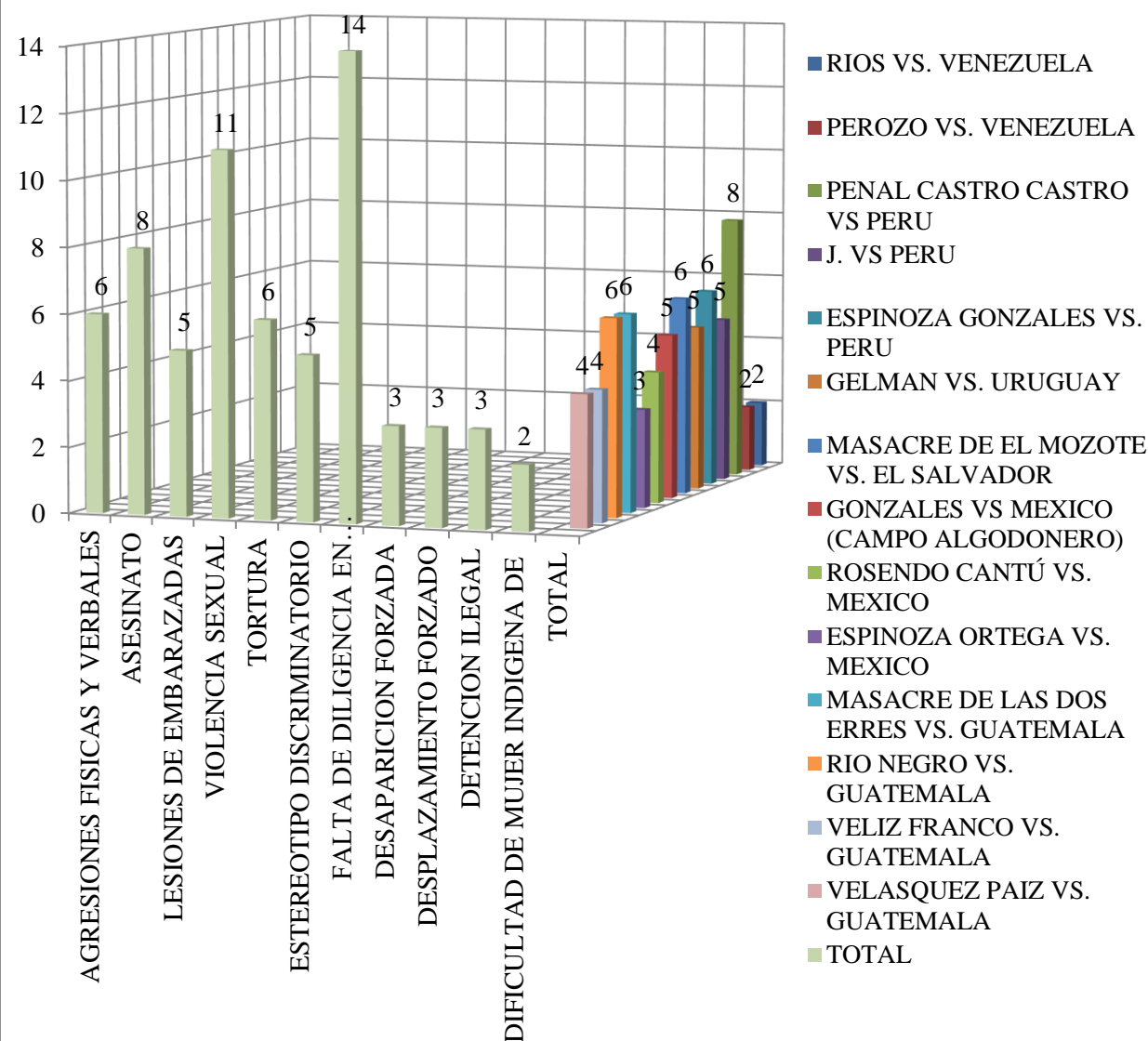
TIPOS DE AFECTACION CONTRA LA MUJER SENTENCIADAS

	VERBALES	AGRESIONES FÍSICAS Y VERBALES	ASESINATO	EMBARAZADAS	LESIONES DE	VIOLENCIA SEXUAL	TORTURA	ESTEREOTIPO DISCRIMINATORIO	ACTUACIONES ESTATALES	FALTA DE DILIGENCIA EN	DESAPARICION FORZADA	DESPLAZAMIENTO FORZADO	DETENCION ILEGAL	FALTA DE ACCESO A JUSTICIA POR MUJER INDIGENA	TOTAL
RIOS VS. VENEZUELA	x								x						2
PEROZO VS. VENEZUELA	x								x						2
PENAL CASTRO CASTRO VS PERU	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x				8
J. VS PERU	x				x	x			x				x		5
ESPINOZA GONZALES VS. PERU	x				x	x	x		x				x		6
GELMAN VS. URUGUAY		x	x						x		x		x		5
MASACRE DE EL MOZOTE VS. EL SALVADOR	x	x	x	x	x				x			x			6
GONZALES VS MÉXICO (CAMPO ALGODONER O)			x		x	x	x	x	x						5
ROSENDO CANTÚ VS. MÉXICO					x				x			x		x	4
FERNÁNDEZ ORTEGA VS. MÉXICO					x				x					x	3
MASACRE DE LAS DOS ERRES VS. GUATEMALA		x	x	x	x	x			x		x				6

RIO NEGRO VS. GUATEMALA		x	x	x	x		x		x			6
VELIZ FRANCO VS. GUATEMALA		x		x		x	x					4
VELÁSQUEZ PAIZ VS. GUATEMALA		x		x		x	x					4
TOTAL	6	8	5	11	6	5	14	3	3	3	2	

Fuente: Elaboración personal

**GRAFICO N° 12: TIPO DE AFECTACIONES
SENTENCIADAS**



Fuente: Elaboración personal

En este cuadro comparativo a diferencia del cuadro número seis se basa en las sentencias en análisis, las cuales una vez revisadas se desprende los hechos donde se agraviaron a mujeres, en cambio en el cuadro anterior se considera los hechos conforme a la denuncia que realiza la Comisión ante la Corte.

De tal forma que se consideran: agresiones físicas y verbales, asesinato, lesiones a embarazadas, violencia sexual, violación sexual, tortura, estereotipo discriminatorio, falta de diligencia en las actuaciones estatales, desaparición forzada, desplazamiento forzado, detención ilegal y falta de acceso a justicia por mujer indígena.

En cambio respecto al cuadro seis se aprecia que ya no se vuelve a considerar el Hostigamiento, la obstaculización periodística, el asesinato masivo y el secuestro, ello porque a pesar que fueron parte de las denuncias no se mantienen al momento de las decisiones, de un lado porque se absolvió a Venezuela por los casos de hostigamiento y obstaculización periodística, sino también porque el secuestro termina siendo un acto de tortura así como la violencia sexual en caso como J vs. Perú y Espinoza Gonzales vs. Perú.

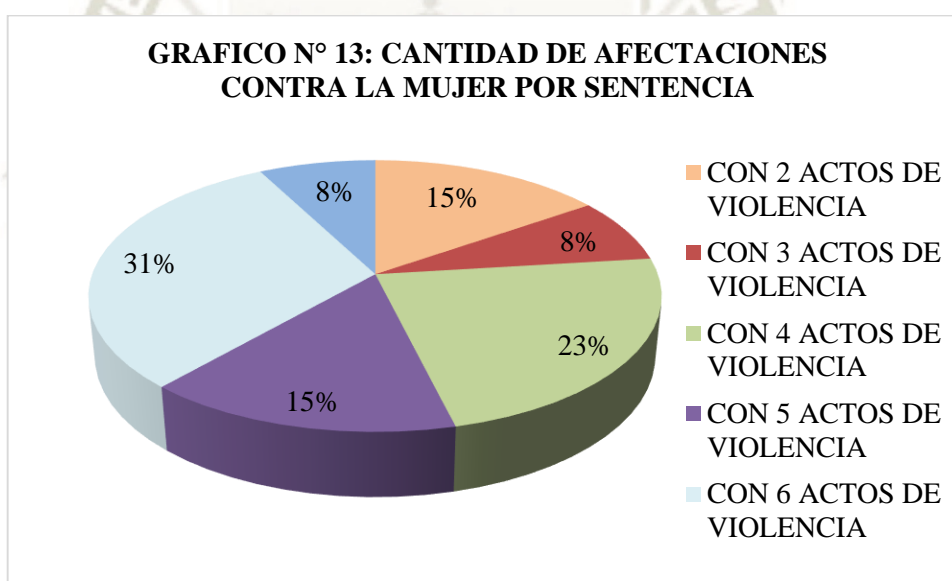
Es importante denotar que se hace la distinción entre violencia sexual de violación sexual, porque en ciertos casos es el hecho principal que viene a investigarse y de la que es materia las sentencias en análisis, ello principalmente en casos como Rosendo Cantú vs. México y Espinoza Gonzales vs. México donde el acto de violencia contra las víctimas fue específicamente la violación sexual que sufrieron las dos mujeres dentro de sus viviendas por agentes estatales.

TABLA N° 13

CANTIDAD DE AFECTACIONES CONTRA LA MUJER ENCONTRADOS EN CADA SENTENCIA

CANTIDAD DE ACTOS DE VIOLENCIA POR SENTENCIA	NUMERO
CON 2 ACTOS DE VIOLENCIA	2
CON 3 ACTOS DE VIOLENCIA	1
CON 4 ACTOS DE VIOLENCIA	3
CON 5 ACTOS DE VIOLENCIA	2
CON 6 ACTOS DE VIOLENCIA	4
CON 8 ACTOS DE VIOLENCIA	1

Fuente: Elaboración personal



Fuente: Elaboración personal

En este caso se hace la distinción en la cantidad de actos de violencia contra la mujer que se han advertido en cada una de las sentencias. Es así que se han encontrado en las sentencias desde dos actos violentos hasta ocho, siendo que los que tiene menor cantidad de afectaciones son las sentencias donde el país demandado es Venezuela, ya que solo se consideran agresiones físicas y verbales así como la falta de diligencia en la investigación de los hechos, ello sin dejar de lado que en el caso de estas dos sentencias Venezuela fue absuelta de los actos de violencia contra la mujer que se le imputaban.

De otro lado la sentencia con el mayor número de afectaciones a mujeres es la de Penal Castro Castro vs. Perú, donde se comprometen múltiples actos de violencia por cómo ocurrieron los hechos y la intención que tenía el Estado al momento de ingresar de manera abrupta al Penal Castro Castro, especialmente al pabellón 4A donde se encontraban principalmente mujeres tanto sentenciadas como denunciadas por actos de terrorismo, ello sin dejar de lado los actos posteriores a la toma del Penal ocurridos en el hospital donde fueron llevadas las heridas donde se ejercieron actos de violencia sexual, ya descritos previamente.

Nuevamente con este cuadro podemos demostrar la hipótesis tratada, dado que los actos de violencia contra la mujer se dieron en medio de actos cometidos por funcionarios públicos quienes en ciertos casos directamente cometieron los casos de violencia como en los casos sentenciados en contra del Estado Peruano, o que se dieron indirectamente ante la negligencia de los funcionarios que debían realizar las diligencias necesarias para evitar la violencia contra la mujer.

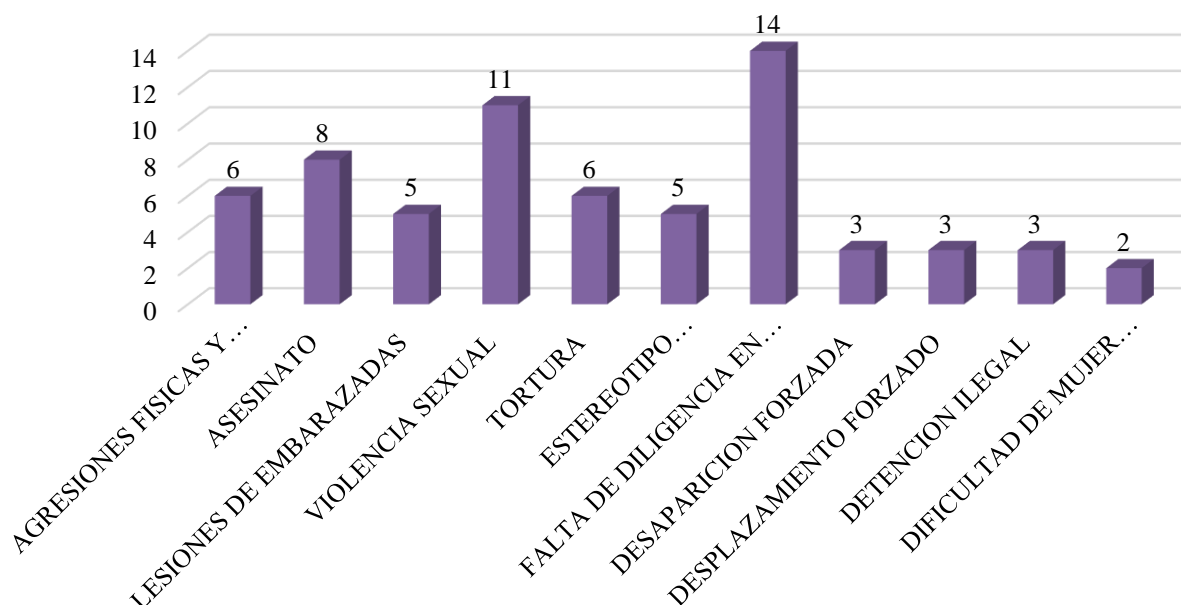
TABLA N° 14

TIPO DE AFECTACIONES POR LAS QUE FUERON SENTENCIADOS

TIPO DE AFECTACION SENTENCIADA	CANTIDAD
AGRESIONES FISICAS Y VERBALES	6
ASESINATO	8
LESIONES DE EMBARAZADAS	5
VIOLENCIA SEXUAL	11
TORTURA	6
ESTEREOTIPO DISCRIMINATORIO	5
FALTA DE DILIGENCIA EN ACTUACIONES ESTATALES	14
DESAPARICION FORZADA	3
DESPLAZAMIENTO FORZADO	3
DETENCION ILEGAL	3
DIFICULTAD DE MUJER INDIGENA DE ACCEDER A LA JUSTICIA	2

Fuente: Elaboración personal

GRAFICO N° 14: TIPOS DE AFECTACIONES POR LAS QUE SE SENTENCIARON



Fuente: Elaboración personal

En este cuadro se hace un análisis de la cantidad de afectaciones que en total se encontraron en las catorce sentencias en análisis, siendo que el acto de violencia contra la mujer que se encontró en todas ellas fueron las de la falta de diligencia en la investigación, procesamiento y sanción a los responsables, ello porque en todos los casos los funcionarios que debían ver por la investigación de lo denunciado no lo hicieron a pesar que conforme a la Convención debe realizarse este tipo de investigaciones de oficio.

De otro lado, se aprecia que en dos sentencias la afectación fue la dificultad de mujeres indígenas de acceder a la justicia, la cual tiene que ver con los casos Rosendo Cantú y Espinoza Gonzales ambas contra México, ello debido que las víctimas eran mujeres indígenas quienes tuvieron dificultades para poder denunciar los hechos porque las autoridades no hablaban su idioma natal, y ellas no sabían hablar español, lo que implicó no solo la violencia por su situación de mujer sino se ve agravada por su ascendencia.

Por ultimo mucho de las afectaciones específicas por su situación de mujer tiene que ver con las lesiones a las mujeres que estaban embarazadas y fueron víctimas de algunos de los casos materia de análisis, como es el caso de Penal Castro Castro, donde se hace énfasis de algunas mujeres que estaban embarazadas y tuvieron que sufrir estar echadas sobre el suelo durante algunos días después de ocurrida la operación Mudanza, así también en el caso de Gelman vs. Uruguay fue la víctima objeto de violencia en su estado de gravidez, dado que fue capturada en ese estado, se generó que terminara el embarazo, y luego a ello se le asesinó, otros casos son los de las masacres donde se describe que cuando pobladores fueron después de ocurridas las muertes hasta encontraron fetos en los caminos que eran producto de las golpizas que sufrieron las mujeres embarazadas que generó que estas terminaran teniendo abortos para luego ser asesinadas. Siendo estos casos especialmente execrables porque no solo se habla de violencia contra la mujer, sino se da en un momento en que la mujer se encuentra en un estado especialmente delicado como es el momento de un embarazo, donde su cuerpo está llevando a otro ser y por ello lo protege, lo que hace de estas mujeres en un estado de peligro adicional ante todos los actos de violencia que sufrieron.

1.7. SOBRE EL USO DE LAS NORMAS DE RANGO INTERNACIONAL

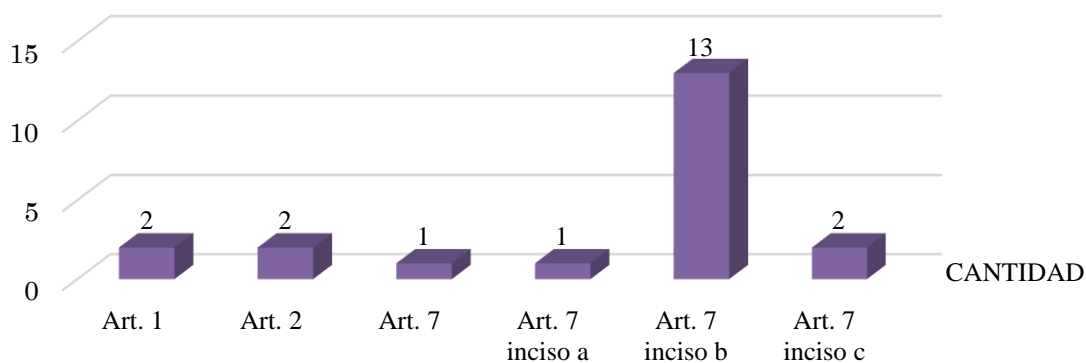
TABLA N° 15

ARTÍCULOS DE LA CONVENCIÓN DE BELEM DO PARÁ QUE FUERON
UTILIZADOS EN LAS SENTENCIAS

ARTICULOS DE LA CONVENCIÓN UTILIZADOS EN LAS SENTENCIAS	CANTIDAD
Art. 1	2
Art. 2	2
Art. 7	1
Art. 7 inciso a	1
Art. 7 inciso b	13
Art. 7 inciso c	2

Fuente: Elaboración personal

**GRAFICO N° 15: USO DE LOS ARTICULOS SEÑALADOS EN LAS
DIFERENTES SENTENCIAS**



Fuente: Elaboración personal

La base de esta investigación son las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se utilizó como herramienta jurídica la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, es por ello que se busca dentro de diez años de sentencias emitidas y es que se encuentran las catorce sentencias materia de estudio donde se analiza dentro de la denuncia que presenta la Comisión que

se ha contravenido tal Convención, y ello porque a pesar que se tratan en muchos casos de hechos anteriores a la ratificación de la sentencia, los hechos siguen afectando a las víctimas y sus familiares en la medida que no se han conseguido encontrar a los responsables de los hechos investigados.

Es así que en las sentencias en contra de Venezuela donde este país fue absuelto de los cargos respecto de la Convención en mención se hizo una revisión de lo que implicaba el artículo 1 y 2 de esta, por eso se considera que se utilizaron tales artículos para deslindar su agravio, ello porque para hacerlo necesitaban primero subsumir lo denunciado conforme a lo que se considera la violencia contra la mujer basada en género, la que se encuentra establecida en el artículo 1 de la Convención, y los tipos de violencia que se desarrollan en el artículo 2, que también solo se consideran en estas dos sentencias.

De otro lado, en todas las sentencias se utilizó el artículo 7 de la Convención para establecer la responsabilidad de los estados partes por los actos que se les imputaron, ello porque en este artículo se establece la condena de los estados en todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo ciertas acciones para hacerlo, siendo que dentro del artículo existen ocho literales

En este caso lo resaltante es que en trece de las catorce sentencias en análisis se emite las sentencias a la luz del artículo 7 literal b de la Convención de Belem do Pará que prescribe:

“Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.”

Y ello debido que la mayoría de los casos hasta el momento de la sentencia no se conocían los responsables de los hechos denunciados y ello debido a la falta de una investigación rápida y concreta, con la debida recolección de pruebas y levantamiento de cadáveres, sin la necesidad que los familiares o las propias víctimas tuvieran que llegar hasta la instancia máxima para poder obtener un poco de justicia contra el Estado que no se la proveyó.

1.8. SOBRE LAS CONVENCIONES INTERNACIONALES RELACIONADAS EN EL ANALISIS DE LAS SENTENCIAS

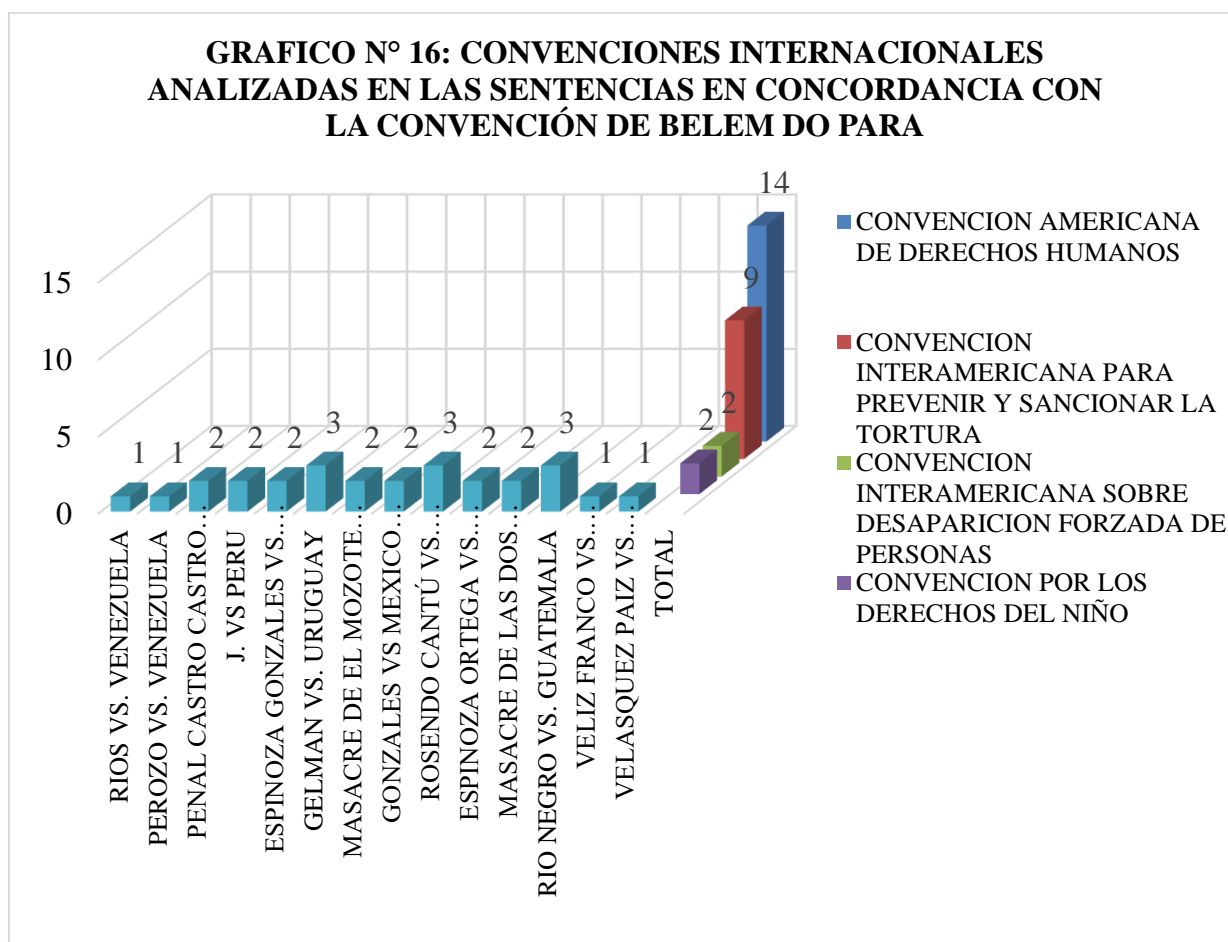
TABLA N° 16

CONVENCIONES INTERNACIONALES ANALIZADAS EN LAS SENTENCIAS EN
CONCORDANCIA CON LA CONVENCION DE BELEM DO PARA

SENTENCIAS	CONVEN CIÓN AMERIC ANA DE DERECH OS HUMANOS	CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA	CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS	CONVEN CIÓN POR LOS DERECH OS DEL NIÑO	TOTAL
RIOS VS. VENEZUELA	X				1
PEROZO VS. VENEZUELA	X				1
PENAL CASTRO CASTRO VS PERU	X	X			2
J. VS PERU	X	X			2
ESPINOZA GONZALES VS. PERU	X	X			2
GELMAN VS. URUGUAY	X	X	X		3
MASACRE DE EL MOZOTE VS. EL SALVADOR	X	X			2
GONZALES VS MÉXICO (CAMPO ALGODONERO)	X			X	2
ROSENDO CANTÚ VS. MÉXICO	X	X		X	3
FERNÁNDEZ ORTEGA VS. MÉXICO	X	X			2
MASACRE DE LAS DOS ERRES VS. GUATEMALA	X	X			2
RIO NEGRO VS. GUATEMALA	X	X	X		3
VELIZ FRANCO VS. GUATEMALA	X				1

VELÁSQUEZ PAIZ VS. GUATEMALA	X				1
TOTAL	14	9	2	2	

Fuente: Elaboración personal



Fuente: Elaboración personal

Es importante primero establecer que cuando se emite una sentencia ante la Corte Interamericana se realiza teniendo como marco legal las Convenciones aprobadas y que han sido ratificadas por los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), por ende la principal de estas Convenciones es la Convención Americana de Derechos Humanos de donde todas las otras Convenciones se derivan, ello porque a pesar que la Convención Americana engloba todos los derechos y principios que debe regir a los Estados de ella se han desmembrado las Convenciones que tienen que ver específicamente con poblaciones vulnerables, o respecto a acciones reprochables que necesitaban conceptualización y persecución específica como son la Convención por los Derechos del Niño, niña y adolescente, la Convención para prevenir y sancionar la Tortura, la

Convención sobre Desaparición Forzada de Personas, entre otras, siendo que en el caso de esta tesis la Convención que se ha analizado principalmente es aquella denominada Convención Belem do Pará que es la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer.

Como vemos del marco teórico la Convención Belem do Pará fue suscrita el nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro, sin embargo los hechos de muchos de los casos materia de investigación que fueron sentenciados en base a la Convención de Belém do Pará se dieron mucho antes de la existencia de esta Convención, sin embargo se emite decisión teniéndola como marco legal porque son hechos que hasta la fecha no han tenido un fin porque , entre otros no se ha encontrado responsables, los que hace que estas investigaciones sigan abiertas lo que permite que el enfoque que trae la Convención de Belem do Pará sea considerado para juzgar.

Sin embargo no podemos dejar de lado que así como existe la Convención de Belem do Pará también existen otras Convenciones que entre ellas consideran los actos perseguidos en estas sentencias de diferentes maneras, como el caso de la violencia sexual: De por si es un acto de violencia contra la mujer bajo la visión de la Convención Belem do Pará y un acto de tortura conforme a la convención para Sancionar la Tortura, lo que nos demuestra que todas estas Convenciones buscan la protección de las personas vulnerables y quieren sancionar los actos de lesa humanidad, y lo hacen dentro de diferentes ámbitos, que en los casos evaluados se entrelazan.

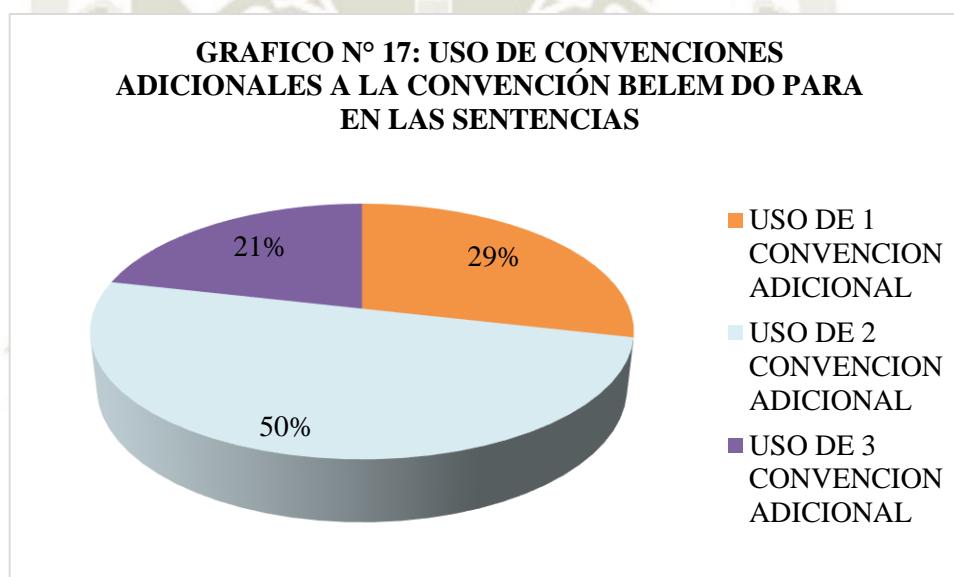
Ahora es importante destacar que cuando se inició la tesis solo entendía que la violencia contra la mujer se daba en el ámbito intrafamiliar, y solo luego de finalizar la búsqueda y revisión de los casos de la Corte es que nos damos cuenta que la violencia contrala mujer puede darse en muchos ámbitos más y el acto no solo afectar a la mujer por su género sino porque en algunos casos también son menores de edad, también puede darse en circunstancias como desaparición forzada, desplazamiento forzado o tortura, lo que demuestra que la violencia contra la mujer se puede desarrollar de manera entrelazada con otros actos que afectan a los derechos humanos.

TABLA N° 17

ANALISIS ADICIONAL DE LAS CONVENCIONES EN CADA SENTENCIA

USO DE CONVENCIONES ADICIONALES A LA CONVENCION DE BELEM DE PARA EN LAS SENTENCIAS	CANTIDAD
USO DE 1 CONVENCION ADICIONAL	4
USO DE 2 CONVENCION ADICIONAL	7
USO DE 3 CONVENCION ADICIONAL	3

Fuente: Elaboración personal



Fuente: Elaboración personal

En este caso se evalúa cuantas Convenciones adicionales fueron citadas para determinar las responsabilidades de los Países demandados, dado que los hechos no solo tenían que ver con actos de violencia contra la mujer sino sobre circunstancias adicionales en análisis por la Corte al momento de sentenciar, es por ello que se llega a considerar hasta 3 Convenciones, en la mayoría de los casos: la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura, y por último se considera la Convención de los derechos del niño o la convención interamericana sobre desaparición forzada de personas.

Se entiende que eso depende de los hechos planteados en cada una de las sentencias, por ejemplo en las sentencias que tienen que ver con asesinatos masivos se observa que es en estos casos donde son más las Convenciones consideradas para analizar los hechos denunciados.

No podemos dejar de lado que ante cualquier denuncia realizada por la Comisión Interamericana a la Corte se hace principalmente en base a la Convención Americana de Derechos Humanos que es el pilar de todas las Convenciones que han sido firmadas por los Estados Partes de la Organización de Estados Americanos que se considera de inmediata concordancia con la convención de Belem do Pará porque en los casos materia de análisis se busca como hecho base la violencia denunciada contra mujeres ocurrida en diversas situaciones

Este es el cuadro que permite valorar la hipótesis formulada, porque podemos observar que más allá de los conceptos de violencia contra la mujer considerados en la convención que se utilizan para el ámbito doméstico cuando se dan actos de violencia intrafamiliar, el tipo de violencia al que fueron puestas las mujeres víctimas en los casos revisados, son mucho más graves porque aunado a la violencia sufrida se aprecian actos de tortura, o que se utilizó la violencia sexual como tortura, o que posterior a los actos de violencia se vieron posteriormente retiradas de sus domicilios y sufrieron junto a sus familias de desplazamientos forzados lo que trae a acotación las Convenciones que tienen que ver con estas materias.

No podemos dejar de lado que en dos casos se aprecia no solo el acto de violencia a mujeres, sino que se dieron mientras ellas eran menores de edad, lo que trae a acotación la Convención por los derechos del niño, especialmente en el caso de Campo algodónero y Rosendo Cantu donde las víctimas directas fueron adolescentes.

A ello se agrega que estamos ante sentencias sobre hechos que han ocurrido a través del tiempo desde hace mas de cincuenta años hasta hace unos pocos años que demuestran que a pesar de la lucha incansable y la normativa jurídica surgida por la violencia contra la mujer todavía las mujeres somos vulnerables, y pertenecemos a una población vulnerable que día a día sufre agravios de diversos tipos y que incluso se mantienen en el tiempo en la medida que no existen responsables sancionados por los actos cometidos en contra de las

víctimas mujeres en todos estos casos. Es cierto el marco jurídico que existía antes solo era la Convención Americana, que aunque amplia no resultaba precisa para perseguir a los que cometían los actos de violencia contra la población vulnerable como la mujeres, sin embargo ahora cuando ya tenemos convenios internacionales es cuando se hacen mas tangibles los actos cometidos en agravio de mujeres que siguen sin tener la relevancia necesaria para que la población deje de cometerlos y para que los Estados partes despierten a investigarlos correctamente y encontrar a los culpables y de tal forma se logre sancionara para que poco a poco pueda lograrse la prevención de la violencia contra la mujer y sea eliminada completamente.

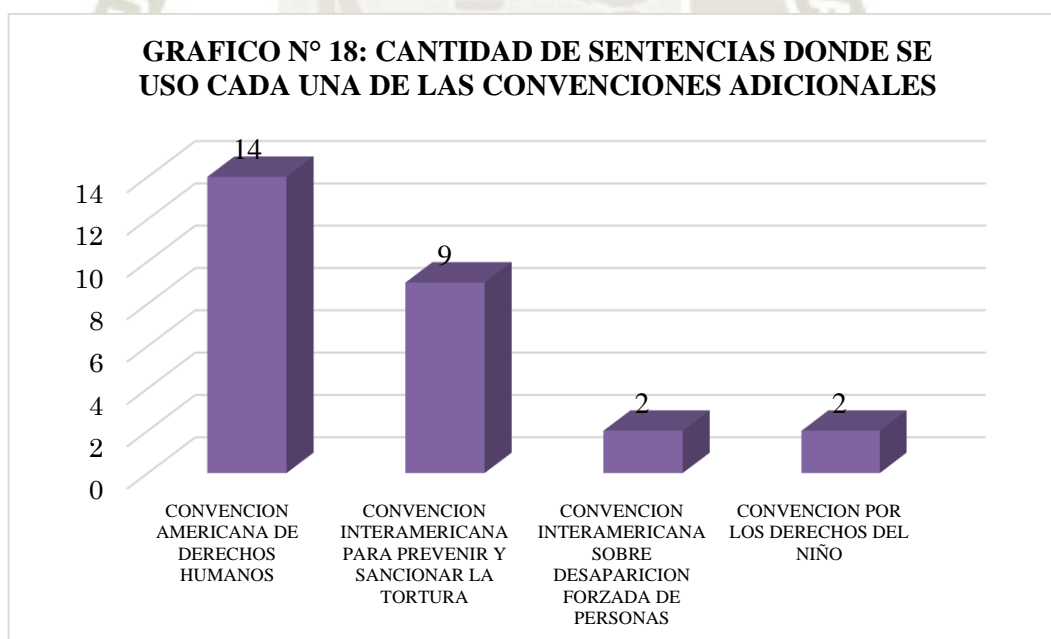


TABLA N° 18

CANTIDAD DE SENTENCIAS DONDE SE UTILIZÓ CADA UNA DE LAS
CONVENCIONES ADICIONALES

CONVENCIONES UTILIZADAS	CANTIDAD
CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS	14
CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA	9
CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS	2
CONVENCIÓN POR LOS DERECHOS DEL NIÑO	2

Fuente. Elaboración personal



Fuente: Elaboración personal

En este caso como es del análisis en todas las sentencias se utilizó la Convención Americana de Derechos Humanos para llegar a determinar a los países responsables de los hechos denunciados, ello porque obviamente es el instrumento legal fundamental que usa la Corte, y sobre el que ya describimos como pilar de todas las Convenciones que tienen

que ver con la protección de poblaciones vulnerables como es el caso de las mujeres y la violencia que sufren. Al respecto también se aprecia que se utilizó para dar cuenta de los actos contra la vida de las personas y respecto a desplazamientos forzados, de los que no hay una convención específica pero si se considera como un mal endémico producto de los actos de violencia que se vivía en la época de cada uno de los hechos, porque es tal violencia que genera el alejamiento de poblaciones enteras para evitar ser víctima de tales lo que los convierte en refugiados sin tierra, y alejándolos de su espacio cultural.

En segundo lugar tenemos la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, ello porque en la mayoría de casos los actos de violencia implicaron la tortura de las mujeres, como la violación sexual utilizada como medio para conseguir información o como acto de revancha ante actos anteriores, ello principalmente en los casos de procesadas por terrorismo o en los casos de masacres como Rio Negro o Dos Erres, a ello se agrega por ejemplo el caso de Rosendo Cantú donde cometieron el acto de violencia incluso en presencia de sus hijos, lo que trae consecuencias no solo en la mujer sino también en su prole.

En tercer lugar se considera la convención interamericana sobre desapariciones forzadas de personas y la Convención por los derechos del niño, ello porque en dos casos se verifica la desaparición de personas sin conocimiento actual de su paradero como es el caso de Gelman vs. Uruguay; y que en el segundo caso porque en algunas resoluciones se revisó que además de ser actos de violencia contra la mujer tales mujeres eran menores de edad como en el caso de Rosendo Cantú y en el de Campo Algodonero donde una de las mujeres que fue encontrada muerta era una adolescente de diecisiete años de edad a la que la Convención sobre los derechos del Niño aún la protegía.

1.9. SOBRE LA RESPONSABILIDAD A LOS QUE HACE REFERENCIA LAS SENTENCIAS

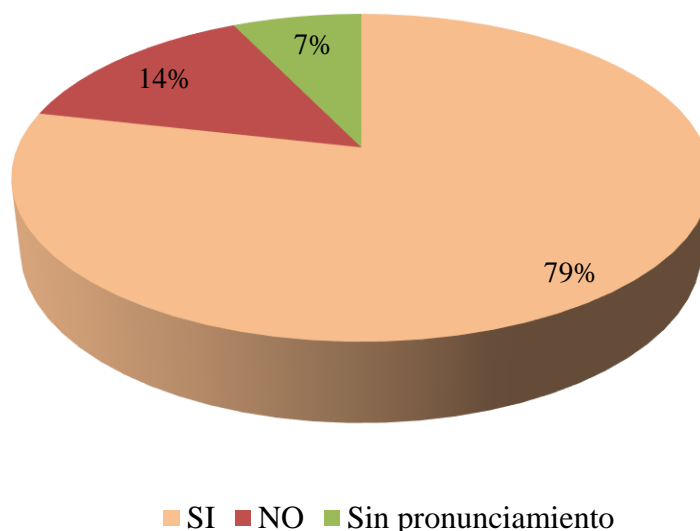
TABLA N° 19

¿LA CORTE ENCONTRO RESPONSABLE AL ESTADO ACUSADO EN TODOS LOS PROCESOS?

PARTE RESOLUTIVA	CANTIDAD DE SENTENCIAS
SI	11
NO	2
Sin pronunciamiento	1

Fuente: Elaboración personal

GRAFICO N° 19: ¿LA CORTE ENCONTRO RESPONSABLE AL ESTADO ACUSADO EN TODOS LOS PROCESOS?



Fuente: Elaboración personal

Esta pregunta se completa cuando en las partes Resolutivas se aprecia que solo en 11 de ellas se llega hallar responsable al estado demandado por su contravención a la convención de Belem do Pará, sin embargo en tres de ellas no se llega a esta decisión.

Se decide que no hay responsabilidad de parte del Estado en las dos sentencias donde la parte demandada es Venezuela, porque se denunció que se afectó a las mujeres por su calidad de tales, pero al momento de resolver la Corte entendió que las afectaciones que

sufrieron no fue por su género sino por su calidad de periodistas de un canal contrario al Estado de tal forma que los hechos de los que fueron víctimas lo pudieron sufrir tanto ellas como mujeres así como los varones que se encontraban junto a ellas cubriendo las noticias.

De otro lado respecto a Gelman vs. Uruguay donde no se llegó a tener un pronunciamiento se aprecia que se merituaron únicamente los hechos denunciados conforme a la Comisión de Derechos Humanos y no lo denunciado por las víctimas, es así que a pesar que se describe las afectaciones conforme a la Convención de Belem do Pará no se llega a resolver conforme a esta porque la Comisión no la integró como aquella en base a la cual debía emitirse decisión.



1.10. SOBRE EL HECHO QUE SE HAYA SENTENCIADO A LOS RESPONSABLES POR LOS HECHOS EN SUS PAISES DE ORIGEN

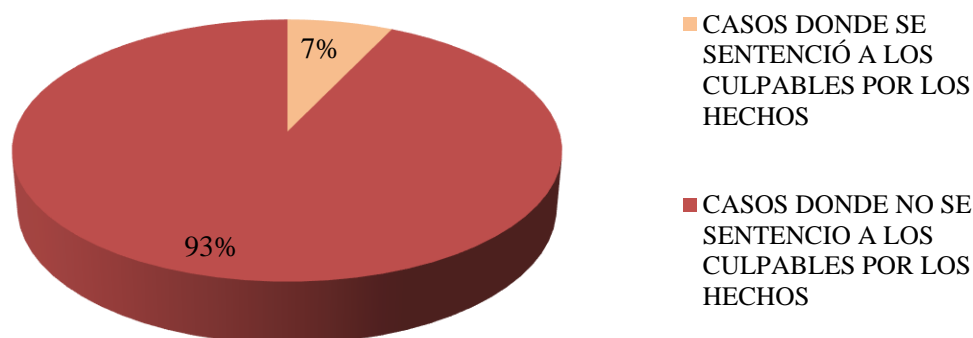
TABLA N° 20

¿ALGUNO DE LOS ESTADOS SENTENCIADOS HA SENTENCIADO A LOS RESPONSABLES DE LOS HECHOS?

SENTENCIAS	CASOS DONDE SE SENTENCIÓ A LOS CULPABLES POR LOS HECHOS	CASOS DONDE NO SE SENTENCIO A LOS CULPABLES POR LOS HECHOS
RIOS VS. VENEZUELA		X
PEROZO VS. VENEZUELA		X
PENAL CASTRO CASTRO VS PERU		X
J. VS PERU		X
ESPINOZA GONZALES VS. PERU		X
GELMAN VS. URUGUAY		X
MASACRE DE EL MOZOTE VS. EL SALVADOR		X
GONZALES VS MÉXICO (CAMPO ALGODONERO)		X
ROSENDO CANTÚ VS. MÉXICO		X
FERNÁNDEZ ORTEGA VS. MÉXICO		X
MASACRE DE LAS DOS ERRES VS. GUATEMALA		X
RIO NEGRO VS. GUATEMALA	X	
VELIZ FRANCO VS. GUATEMALA		X
VELÁSQUEZ PAIZ VS. GUATEMALA		X
TOTAL	1	13

Fuente: Elaboración personal

GRAFICO N°20: ¿ALGUNO DE LOS ESTADOS SENTENCIADOS HA SENTENCIADO A LOS RESPONSABLES DE LOS HECHOS?



Fuente: Elaboración personal

Mediante este último cuadro se puede medir el resultado que viene teniendo la Convención de Belem do Pará en cada uno de los Estados parte que terminaron siendo responsables en cada uno de las sentencias emitidas donde hasta la fecha que se emitieron no se llegó a encontrar a los culpables de los hechos denunciados.

Es importante destacar que se han incluido los dos casos en contra de Venezuela como parte del conteo a pesar que no se ha sentenciado sobre la base de la Convención de Belem do Pará, si se ha hecho sobre la Convención Americana, y nunca se encontró a los funcionarios posiblemente responsables.

En ese orden de ideas solo en el proceso de Rio Negro contra Guatemala se hace mención a que se ha llegado a sentenciar a responsables sobre la masacre ocurrida a treinta años por el asesinato de dos mujeres, sin embargo nos encontramos ante la sentencia de responsables de mando medio, pero en ningún momento se parecía en alguno de los casos que se ha llegado a encontrar acusaciones en contra de los autores intelectuales de los hechos lo que renueva la visión de injusticia en todos los casos donde se ha podido ver que son múltiples las afectaciones a los derechos contra la mujer que se ven violentados.

Es cierto que la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer trae parámetros para la lucha contra la violencia contra la mujer que especifica la protección de los derechos humanos que deben tener en especial las mujeres por la lucha que han tenido por su bienestar durante la historia , porque siempre se ha buscado protegerla como ser humano, sin embargo la necesidad de especificidad trae la publicación de la Convención que hace plausible la lucha contra la violencia contra la mujer y que a través del tiempo se sigue permitiendo que sufran de múltiples formas pero cuando tiene que ver con el Estado el problema viene no solo por el acto en sí de violencia sino por la penuria que significa para las víctimas y sus familias de poder encontrar apoyo en el Estado encontrando a los responsables en investigaciones bien llevadas que permitan tener resultados positivos lo que no se aprecia en ninguno de los procesos que se investigaron.

Por ello el hincapié que hace la Corte en procesos como los de Veliz Franco o Velásquez Paiz donde a pesar que las mujeres desaparecieron con conocimiento del estado sus funcionarios no hicieron mucho para encontrarlas lo que trae probablemente su muerte, y da cuenta de una falta de política de prevención de lucha contra la violencia contra la mujer y la falta de importancia que se daba y todavía se da a los casos que tienen que ver con mujeres como víctimas de sus atacantes solo por el hecho de serlo o aprovechando su género se desplegaron actos de tortura para mancillarlas más como ser humano como en los casos de Penal Castro Castro contra Perú, o Rosendo Cantú contra México.

1.11. APRECIACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

En esta tesis se ha leído completamente y comparado cada uno de los casos que han llegado a la vista de la corte interamericana de derechos humanos entre los años dos mil seis a dos mil quince donde se ha considerado de alguna manera como marco legal la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

Por ello se encontraron catorce sentencias las que se ha revisado a través de los cuadros de donde se desprende que los hechos se han desarrollado en seis países de la totalidad de los que se encuentran en la Organización Estados Americanos, ahora no todos los países han ratificado la convención en mención a la vez dado que lo hicieron entre febrero de 1995, hasta noviembre de 1998, y ahí es donde la primera parte de esta investigación se centra en el hecho que todos estos países han ratificado la convención pero muchos de los eventos materia de las sentencias son anteriores a la ratificación de la convención, específicamente en la mitad de ellos, sin embargo en la medida que muchas víctimas no han sido encontradas, o no se ha encontrado a los responsables, entonces de los primeros cuadros nos damos cuenta que la mitad de los casos son de hechos previos.

Después la investigación se centra en entender las afectaciones denunciadas y sentenciadas a fin de identificar el tipo de violencia ocurrido, el cual abre la visión de los tipos de violencia contra la mujer establecida por la Convención de Belém do Pará (violencia física, psicológica, económica y sexual), a aquellas que se determinan conforme a las circunstancias propias de los hechos de cada sentencia lo que hace necesario que se estudie los mismos a la luz de la convención americana y otras Convenciones suscritas y ratificadas por los países de la Organización de Estados Americanos y nos permite una subsunción completa de los hechos a todos los marcos legales internacionales.

Entonces al final de la investigación se hace la revisión de los artículos de la Convención Belem do Pará que fueron utilizados para considerar culpables los Estados Americanos y nos damos cuenta que son los artículos que tienen que ver con la falta de investigación de los estados sentenciados respecto de los hechos ocurridos, lo que permite entender porque

la mitad de los casos que son estudiados son anteriores a la ratificación de los estados de la Convención de Belem do Pará porque de una u otra forma los estados estaban en la obligación de perseguir estos actos de violencia conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos pero no lo hicieron lo que se demuestra con el uso adicional de la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y su necesidad de especificar la persecución de los actos contra la violencia contra la mujer porque las sociedades y estados no le daban la importancia debida a pesar de la existencia de muchos casos de este tipo, lo que se intensifica cuando se hace la revisión de la sentencia donde aparece que no solo se ha considerado la convención americana sino también otras Convenciones.

Siendo por último que se ha verificado que la falta de investigación y persecución de los responsables ha llevado a demostrar que hasta la fecha de las sentencias no se ha encontrado a responsables por los hechos ocurridos.

La conjunción de todos estos resultados nos permite demostrar la hipótesis formulada para esta tesis porque se ha determinado que en las sentencias se han utilizado más Convenciones que la de Belem do Pará ello porque muchas de las sentencias son sobre hechos anteriores a la ratificación de los estados de la Convención por eso se subsumieron no solo sobre la convención de Belem do Para, sino sobre otras como aquella como la que lucha contra la Tortura, o la Convención de los derechos del Niño ello porque a pesar de la existencia de Convenciones anteriores a la de Belem do Pará que implicaba evitar la violencia contra la mujer como es la Convención Americana no se hizo por los estados lo que hace ver que pueden existir muchos marcos legales que establezcan principios y derechos, pero siempre que los funcionarios estatales no cumpla con ellos en cada uno de sus actos y denuncias que les plantean todos caen en letra muerta y seguirá ocurriendo actos de violencia, ello en la medida que se concientice a todos los pobladores y en especial los trabajadores del gobierno en todos sus niveles que se debe permitir que exista un mundo libre de violencia para las mujeres como derecho fundamental.

CONCLUSIONES

PRIMERA: La violencia contra la mujer es juzgada duramente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos tal como aparece en las sentencias materia de análisis donde se ha apreciado que lo que más se sanciona es el hecho de la falta de debida diligencia en la investigación, procesamiento y sanción a responsables de los hechos denunciados teniendo en cuenta el artículo 7 de la Convención de Belem do Pará.

SEGUNDA: La violencia contra la mujer implica violación de derechos humanos, es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres, siendo que los tipos de violencia contra la mujer no solo se dan en un espacio doméstico, sino que conforme a los casos de las sentencias, pueden ocurrir mediante actos de tortura, desaparición forzada, desplazamiento forzado, asesinato, estereotipos discriminatorios, detenciones ilegales y trasciende a todos los sectores de la sociedad independiente de su clase, raza, etnia, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión.

TERCERA: Las sentencias en análisis nos demuestran que a través del tiempo Latinoamérica no ha sido ajena a actos de violencia contra la mujer que tienen como hecho común que una vez ocurridos no se investigó los mismos, no se actuó de oficio de parte del Estado y sus funcionarios, lo que mantiene la impunidad por cada uno de los casos materia de estudio, dado que en la mayoría de ellos ni siquiera se ha llegado a individualizar a personas que los cometieron demostrando la falta de diligencia del Estado ante lo ocurrido y la poca accesibilidad a la justicia de parte de las víctimas y sus familiares quienes en lugar de ser atendidos correctamente sufrieron del prejuicio de los servidores estatales quienes actuaron bajo estereotipos discriminatorios, lo que en varios casos supuso que no se recabara correctamente los medios de prueba.

CUARTA: La Convención Belem do Pará se ha convertido en un instrumento legal referente para lidiar en la violencia contra la mujer dado que ha sabido ser utilizada para denunciar actos de violencia ocurridos en diferentes ámbitos y situaciones, y por ello la Corte Interamericana en la mayoría de los casos revisados ha logrado encontrar responsables a los estados por contravenir dicha norma internacional, o de lo contrario para

casos de hechos anteriores a la Convención equiparó sus artículos con la Convención Americana que en sus artículos 8 y 25 hace ver el derecho de las personas a las Garantías Procesales y el Acceso a la Justicia, siendo que se considera la investigación en base a la convención de Belem do Pará porque estos hechos siguen con investigaciones abiertas hasta la fecha.

QUINTA: Se debe desterrar el revanchismo de políticas públicas que tienen que ver con la lucha contra personas delincuentes y grupos radicales, ello porque muchos de los casos evaluados nacen de la represalia contra grupos paramilitares o terroristas, por eso los Estados demandados terminaron siendo encontrados responsables, peor aún en el contexto de conflictos armados internos, siendo que su respuesta se dio a través de la violencia y el extremismo en lugar de lidiar con estas personas mediante canales procesales correctos sin la necesidad de violar derechos humanos, porque ello al final ha generado impunidad de los que abusaron de su posición de autoridad para maltratar y llegar a asesinar en algunos casos a las víctimas identificadas en las sentencias estudiadas.

SEXTA: Se ha demostrado que la Convención de Belem do Pará se ha utilizado como instrumento internacional que determina un marco para la subsunción de los hechos a la norma y que esta también ha sido concordada con la Convención Americana, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención sobre los Derechos del Niño.

SÉTIMA: Los casos de violencia que se evaluaron, van más allá de la violencia domestica contra la mujer, tienen que ver con casos de violencia sexual cometidos por funcionarios armados (Caso Rosendo Cantú vs. México, y Caso FERNÁNDEZ ORTEGA vs. México), los que se dieron asociados a tortura, sufrimiento y exposición de las mujeres a circunstancias de connotación sexual (Caso Penal Castro Castro vs. Perú, Caso J vs. Perú, Caso Espinoza Gonzales vs. Perú), también en espacios de muertes masivas, denominadas masacres (Masacre de Dos Erres vs. Guatemala, Masacre Rio Negro vs. Guatemala, Masacre El Mozote vs. El Salvador), y donde se percibe que los actos de violencia se cometieron por civiles, sin embargo por los estereotipos de género no se realizaron las investigaciones con debida diligencia, lo que permitió la impunidad y que las familias sufrieran de discriminación y malos tratos a pesar que las mujeres por las que abogaban

habían sufrido de muertes violentas (Veliz Franco vs. Guatemala, Velásquez Paiz vs. Guatemala, Campo Algodonero).

OCTAVA: Asimismo se resalta que la Corte en dos de sus sentencias (Perozo vs. Venezuela y Rios vs. Venezuela) supo hacer el deslinde entre lo que se considera violencia y discriminación contra la mujer, por ser mujer, y la que podría sufrir cualquier persona en ocasión de la labor que realiza, de tal forma que se tiene un concepto claro sobre cómo identificar la violencia por razón de género.

NOVENA: Se ha probado la hipótesis, porque se ha demostrado el tratamiento que se da a la violencia contra la mujer a través del uso de la Convención de Belém do Pará como instrumento legal para identificar la violencia contra la mujer en las sentencias materia de investigación, donde de manera concomitante se utilizó la Convención Americana y otras Convenciones como la Convención para prevenir y sancionar la Tortura, o la Convención por los derechos del niño para así evitar la impunidad en los casos estudiados, lo que hace ver que a pesar que existía el marco legal de la Convención Americana era necesario la Convención de Belém do Pará para que de manera específica los funcionarios estatales de todo nivel la utilicen para cumplir en la persecución de los actos de violencia contra la mujer y aunque exista el marco legal mientras, no se cumpla con los actos preventivos a los que se refiere la convención no se cambiará la concepción y conciencia de la población para así lograr vivir en un continente libre de violencia contra la mujer.

SUGERENCIAS

PRIMERA: Se debe potenciar y otorgar medios logísticos suficientes para que los agentes estatales y autoridades encargados de combatir la violencia contra la mujer logren de manera eficiente y eficaz prevenirla, sancionarla y erradicarla, coordinando, colaborando y actuando con objetivos comunes, conociendo las funciones de cada uno en la búsqueda de un ambiente libre de violencia contra la mujer.

SEGUNDA: Se debe capacitar a todos los agentes estatales y autoridades correspondientes en temas de violencia contra la mujer, acentuando la misma en lo referente a estereotipos discriminatorios, a fin que se erradique la impunidad y se logre solucionar acuciosamente los problemas de violencia.

TERCERA: Se debe educar a los niños y adolescentes en espacios libres de violencia, tanto entre sus familias, colegios y comunidad de tal forma que a largo plazo los actos de violencia contra la mujer puedan erradicarse ante el cambio de paradigma respecto de la mujer como objeto a un paradigma de igualdad entre hombres y mujeres en todos sus ámbitos.

CUARTA: Esta tesis deja a salvo que se investigue y analice sobre el cumplimiento de las sentencias analizadas por cada uno de los países demandados, de tal forma que con ello se haya logrado disminuir los actos de violencia contra la mujer.

QUINTA: Se deben hacer conocidos los hechos sentenciados y el desarrollo del razonamiento de la Corte en estas sentencias a los operadores de justicia para que se apliquen los fundamentos de las sentencias en sus resoluciones, de tal forma se debe propagar y estudiar la jurisprudencia internacional de manera más enérgica, para así no contravenir la misma al momento de emitir jurisprudencia nacional.

PROPUESTA DE INTERVENCION:

SILABO

CURSO ESPECIALIZADO:

**“EL TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS”**

I. DATOS GENERALES

- a. NOMBRE DEL CURSO: EL TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
- b. PROGRAMA ACADÉMICO: Sub – dirección de programas académicos.
- c. Docente coordinador: Mgter. Andrea Ponce Aguilar
- d. Fecha de evento: 01 – 02 de diciembre del 2019

II. PRESENTACIÓN

En ningún lugar se previene de manera efectiva o tan siquiera se responde a la gran variedad de daños que mujeres sufren en cuanto a su género, y sin embargo las amenazas de naturaleza física, psicológica y sexual contra mujeres y niñas están en los titulares informativos del mundo entero.

Por ello la comunidad internacional, ha emitido instrumentos legales para combatir la violencia contra la mujer, siendo uno de ellos, la Convención de Belém do Pará. Y, a pesar que los Estados cumplen con hacer suya la Convención, ratificándola y emitiendo normas acorde a tal, todavía la sociedad no las cumple, porque solo se lograra a través de los cambios generacionales y en la medida que se educen a los niños, niñas y adolescentes para que no cometan actos que impliquen violencia contra la mujer.

En el marco de la legislación internacional antes referida, La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió diversas sentencias donde utilizó la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y así analizar diferentes tipo de afectaciones hacia la mujer en los diversos hechos denunciados ante la Corte, teniendo

como objetivo el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, así como combatir la impunidad reinante entre los países demandados.

Es por ello que a través de la revisión de las sentencias emitidas por La Corte Interamericana de Derechos Humanos en los últimos diez años donde se ha llegado a resolver en base a la Convención de Belem do Pará se conocerá , analizará y comparará las mismas para identificar conceptos y lineamientos de la Corte, que permitan ser de uso en las resoluciones o alegaciones que deban hacer los dicentes en sus diferentes ámbitos de trabajo así como saber identificar la violencia contra la mujer en sus diferentes aspectos, más allá de la violencia doméstica que es la que día a día se puede constatar.

III. Objetivos

Para la presente asignatura se han formulado los siguientes objetivos:

a. **Objetivo general:**

Generar una reflexión respecto de la violencia contra la mujer y el tratamiento que se da desde la visión de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de tal manera que los operadores de justicia puedan entender tales sentencias y puedan utilizar las definiciones, criterios y lineamientos establecidos en ellas a fin de tener resoluciones uniformes conforme a lo establecido por el ente internacional.

b. **Objetivos específicos**

OE1: Analizar los conceptos primordiales para avanzar en el curso como son violencia contra la mujer, y los instrumentos internacionales que buscan eliminar la violencia contra la mujer.

OE2: Estudiar las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tienen que ver con la violencia contra la mujer para entender los conflictos que tuvieron las mujeres en Latinoamérica que las llevaron a denunciar ante la Corte y las contravenciones que se cometieron a la Convención Belem do Pará.

OE3: Favorecer a una reflexión sobre la violencia contra la mujer, que permita orientar la finalidad de la administración de justicia, de manera acorde con los planteamientos de la normativa internacional en derechos humanos.

IV. COMPETENCIAS A ALCANZAR

Para el presente curso se ha formulado la siguiente competencia:

☐ Conoce las nociones básicas referidas al análisis de violencia contra la mujer desde el ámbito internacional para así manejar los estándares internacionales establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de sus sentencias y desarrollar las capacidades de los y las participantes que permitan responder adecuadamente a esta problemática.

Capacidades Terminales:

☐ Conocer el significado de la violencia contra la mujer y los instrumentos internacionales que la combaten.

Conoce sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos referidas a violencia contra la mujer donde se resolvieron parte de las controversias en base a la Convención de Belem do Pará para poder aplicar sus criterios a los casos concretos a nivel interno.

Maneja los principales problemas de las víctimas de violencia familiar al acudir al sistema judicial, no solo en base a la legislación nacional sino considerando los instrumentos internacionales y jurisprudencia internacional al momento de analizar, litigar o resolver tales conflictos.

V. PARTICIPANTES

El curso se realizará especialmente para abogados que trabajen en el área de Familia o de Penal que estén involucrados con atender o litigar casos de violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar.

VI. ESTRUCTURA DE CONTENIDOS

- a. UNIDAD I: VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
 - i. ¿Qué es violencia?
 - ii. ¿Qué es la violencia contra la mujer y la violencia de género?
 - iii. Manifestaciones de la violencia contra la mujer

- b. UNIDAD II: CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
 - i. Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia – Convención Belem do Pará
 - ii. Otros instrumentos legales internacionales para combatir la violencia contra la mujer: CEDAW, Convención de Estambul, Protocolo de Maputo.

- c. UNIDAD III: SENTENCIAS SOBRE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
 - i. Penal Miguel Castro Castro vs. Perú
 - ii. Velásquez Paiz vs. Guatemala
 - iii. Gonzales y otras vs México (Campo Algodonero)
 - iv. Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala
 - v. Espinoza Gonzales vs. Perú
 - vi. J vs. Perú
 - vii. Gelmán vs. Uruguay
 - viii. Masacre de El Mozote vs. El Salvador
 - ix. Fernández Ortega vs. México
 - x. Perozo y otros vs. Venezuela
 - xi. Ríos y otros vs. Venezuela
 - xii. Rosendo Cantú vs. México
 - xiii. Veliz Franco y otros vs. Guatemala
 - xiv. Masacres de Rio Negro vs. Guatemala

VII. MEDIOS Y MATERIALES. •

- a. Material de lectura preparado por el docente ☐

- b. • Jurisprudencia seleccionada ☐
- c. • Lecturas recomendadas ☐

VIII. METODOLOGÍA Y SECUENCIA DE ESTUDIO.

La metodología del Curso es activa y participativa, basada en el método del caso, aprendiendo desde lo vivencial, a través de una práctica concreta de los casos planteados por el docente, promoviendo la conformación de grupos de estudios, análisis de textos y la resolución de los cuestionarios respectivos, todo esto para alcanzar las competencias esperadas en el curso.

IX. SISTEMA DE ACOMPAÑAMIENTO

Para el desarrollo de este curso, el discente cuenta con el acompañamiento del profesor especialista quien será el responsable de asesorarlo y orientarlo en los temas de estudio, a la vez que dinamizarán la construcción del aprendizaje.

X. BIBLIOGRAFÍA

- Marta Lamas, “El género es cultura”, 2007.
http://www.aieti.es/cultura/upload/documentos/CXQY_CULTURA_Y_GEN
- Begoña Zabala, El Feminismo frente al Derecho.http://www.vientosur.info/articulosabiertos/VS104_Zabala_feminismovsderecho.pdf ☐
- ONU Mujeres, El progreso de las mujeres en el mundo: En busca de la justicia, 2011, Resumen Ejecutivo <http://progress.unwomen.org/pdfs/SP-Report-Progress.pdf> ☐
- Informe de la Relatora Especial contra la Violencia contra la mujer, La norma de la debida diligencia como instrumento para la eliminación de la violencia contra la mujer, 2006, p.
- Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk, Intersecciones entre la cultura y la violencia contra la mujer, 2007.

- Comité CEDAW, Recomendación general No 19 (11o período de sesiones, 1992), La violencia contra la mujer.□
- IIDH, El Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Análisis de los casos del Comité de la CEDAW, <http://es.scribd.com/doc/80600744/IIDH-procolo-facultativo-de-la-CEDAW-analisis-de-los-casos-del-Comite>□
- CIDH (2011). Estándares jurídicos vinculados a la igualdad de género y a los derechos de las mujeres en el Sistema Interamericano de derechos humanos: desarrollo y aplicación. OEA/Ser.L/V/II.143, Doc. 60. Disponible en: <http://www.cidh.oas.org/pdf%20files/ESTANDARES%20JURIDICOS.pdf> CIDH (2010).□
- Discriminación y Violencia sexual: Caso Gonzáles y otras (“Campo Algodonero”) v. México http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf , Caso Rosendo Cantú v. México http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_216_esp.pdf□
- Violación sexual como tortura: Caso Raquel Martín de Mejía v. Perú <http://www1.umn.edu/humanrts/cases/1996/Speru5-96.htm>□
- Caso Penal Miguel Castro Castro v. Perú: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_esp.pdf
- <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2006/4169.pdf?view=1>: Corte IDH, Caso Espinoza González v. Perú,
- http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf: Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer. Informe del Secretario General, A/61/122/Add.1, Sec general.
- Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979. : <http://www2.ohchr.org/spanish/law/cedaw.htm>
- Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1999. [http://www2.ohchr.org/spanish/law/cedaw -one.htm](http://www2.ohchr.org/spanish/law/cedaw-one.htm)
- Convención Belem do Para. <http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html>

BIBLIOGRAFIA

LIBROS

- Amnistía Internacional, “Está en nuestras manos. No más violencia contra las mujeres”, Editorial Amnistía Internacional – EDAI, 2004.
- ARÓN, Ana María citada por Ayvar Roldán, Carolina: Violencia Familiar, Interés de todos. Editorial Adrus. Arequipa, 2007.
- ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, Resolución AG/RES 1128, “Protección de la Mujer contra la Violencia”, 1991.
- AYVAR ROLDÁN, Carolina. Violencia Familiar. Editorial Adrus. Arequipa, 2007, página 47, citando a Radda Barner.
- Blanco, Pilar. (2004). Consecuencias de la violencia sobre la salud de las mujeres. La detección precoz en consulta. En C. Ruíz-Jarabo y P. Blanco (Eds.), *La violencia contra las mujeres: prevención y detección* (pp. 103-120). Madrid: Díaz de Santos.
- BELLUCIO, Augusto César, DERECHO DE FAMILIA, I Edición reimpressa, Editorial Abeledoperrot, Buenos Aires, 2017
- BUOMPADRE Jorge Eduardo, VIOLENCIA DE GENERO EN LA ERA DIGITAL, I Edición, Editorial Astrea SRL, Buenos Aires, 2016
- CALDERONE, Mónica, Sobre Violencia Simbólica en Pierre Bourdieu, 2004, Artículo publicado en “La Trama de la Comunicación” Vol. 9, Anuario del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario. Rosario. Argentina. UNR Editora, 2004.
- CASTILLO APARICIO, Johnny E.; 2016, COMENTARIOS A LA NUEVA LEY DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, Editorial Ubilex Asesores, I Edición, Lima.
- CASTRO, Rodolfo J. y RIVERA, Renzo, Mapa de la violencia contra la mujer: La importancia de la familia, *Universidad Católica San Pablo, Arequipa, Perú*, Rev. Investig. (Arequipa. En línea) ISSN versión electrónica 2309-6691 Año 2015, Volumen 6, 101-125.
- CENTRO DE LA MUJER PERUANA FLORA TRISTÁN, MANUAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL, 2005, II Edición, Lima.

- CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DESAPARICION FORZADA: Cuadernillo de Jurisprudencia N°6, San Jose de Costa Rica.
- COMISIÓN DE LA VERDAD Y LA RECONCILIACIÓN, INFORME FINAL: 1.2.
- COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, ESTANDARES JURIDICOS VINCULADOS A LA IGUALDAD DE GENERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS: DESARROLLO Y APLICACIÓN, 2011, I Edición, OAS Cataloging-in-Publication Data, Canadá
- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Preámbulo.
- COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES, GUIA PARA LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, Documentos oficiales OEA, Washington, 2014
- Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), 2014, DECLARACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS, MUJERES, Y ADOLESCENTES Y SUS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, I Edición, Editorial de la Organización de los Estados Americanos, Costa Rica
- DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS POR AGENTES DEL ESTADO, 2003
- DI CORLETO, Julieta; JUSTICIA GENERO Y VIOLENCIA, 2010, Librería Ediciones, I Edición, Buenos Aires.
- ESPINAR RUIZ, EVA, TESIS DOCTORAL: VIOLENCIA DE GENERO Y PROCESOS DE EMPOBRECIMIENTO, 2003, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Alicante, Alicante.
- ESPINOZA CEBALLOS, Elena B. Marín., La violencia doméstica, Análisis Sociológico, Dogmático y de Derecho Comparado. Editorial Comares S.L. Buenos Aires.
- Fernández, C. (1990). El concepto de agresión en una sociedad sexista. En B. Maqueira y C. Sánchez (Eds.), *Violencia y sociedad patriarcal* (p.p.55-68). Madrid: Pablo Iglesias.

- FLORA TRISTAN, LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER: FEMINICIDIO EN EL PERÚ, 2005, I Edición, Amnistía Internacional – sección peruana, Lima.
- GARCÍA RAMÍREZ, Sergio; EL DEBIDO PROCESO EN LA JURISPRUDENCIA. DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, artículo virtual
- GRAHAM GORDON, Deykell, MECANISMOS INSTITUCIONALES APLICADOS POR EL ESTADO EN POLITICAS PUBLICAS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, DESDE LA OPTICA DEL NUEVO PARADIGMA DE LA SEGURIDAD HUMANA, Universidad para la Cooperación Internacional, San José de Costa Rica, 2008.
- GORJÓN BARRANCO, María Concepción 2010, LA RESPUESTA PENAL FRENTE AL GÉNERO. UNA REVISIÓN CRÍTICA DE LA VIOLENCIA HABITUAL Y DE GÉNERO, Tesis doctoral, Universidad de Salamanca, Salamanca.
- GOZAÍNI, OSVALDO ALFREDO, Procedimientos en la Comisión y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, I Edición, Ediciones Nueva Jurídica, Bogotá, 2017
- INSTITUTO PACIFICO, GENERO Y DERECHO PENAL, I Edición, Pacífico Editores SAC, Lima, 2017
- KAUFMAN HEVENER, .Derecho Internacional y el Estatus de la Mujer: Un Análisis de los Instrumentos Legales Internacionales relacionados con el Tratamiento de la Mujer, *Harvard Women.s Law Journal* (1978)
- LAFONT PIANETTA, Pedro, 2009, DERECHO DE Familia: Derecho de Menores, Juventud y Discapacitados, Ediciones del Profesional Ltda., I Edición, Bogotá, 2007
- MEDINA, Graciela y ROVEDA, Eduardo Guillermo, DERECHO DE FAMILIA, I Edición, 2da reimpresión, Editorial Abeledoperrot, Buenos Aires, 2019.
- Miller, Alice M, Sexualidad, violencia contra las mujeres y derechos humanos: Las mujeres exigen, a las damas se las protege, ensayo virtual,
- NACIONES UNIDAS, NI UNA MAS!, Secretariado general de las Naciones Unidas

- NACIONES UNIDAS, PONER FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER: DE LAS PALABRAS A LOS HECHOS, 2006, I Edición, Publicación de las Naciones Unidas, Washington.
- NOGUEIRAS, B. (2004). La violencia en la pareja. En C. Ruíz-Jarabo y P. Blanco (Eds.), *La violencia contra las mujeres: prevención y detección* (pp. 39-56). Díaz de Santos. Madrid.
- NUÑEZ MOLINA, Waldo Francisco y CASTILLO SOLTERO, María del Pilar; 2014, VIOLENCIA FAMILIAR: Comentarios a la ley N° 29282, Ediciones Legales, II Edición, Lima.
- OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, DESAPARICIONES FORZADAS O INVOLUNTARIAS, Folleto informativo N° 6 – revista 3, Nueva York, p. 1
- O.N.U., Comisión de Derechos Humanos, 54° período de sesiones. *Informe presentado por la Sra. Radhika Coomaraswamy, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, de conformidad con la resolución 1997/44 de la Comisión.* Doc. E/CN.4/1998/54 del 26 de enero de 1998
- O.N.U., Folleto Informativo No.26, El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.
- ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS, 2014 GUIA PARA LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, Documentos Oficiales de la OEA, Washington.
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2002, INFORME MUNDIAL SOBRE LA VIOLENCIA Y LA SALUD, I Edición, Organización Panamericana de la Salud, Washington, 2015.
- ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, 2007, ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN LAS AMERICAS – Comisión Interamericana de Derechos Humanos Editorial de la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos, I Edición, Washington.

- PEÑA COLLASOS, Wilmar, LA VIOLENCIA SIMBÓLICA COMO REPRODUCCIÓN BIOPOLÍTICA DE PODER, 2009, I Edición, Revista Latinoamericana de Bioética, Nueva Granada, p. 9
- PEREZ CONTRERAS, Monserrat, COMENTARIOS A LA CONVENCIÓN DE BELEM DO PARA, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 1999, p. 667
- PONCE AGUILAR, Andrea Carola, LA VIOLENCIA ECONOMICA Y PATRIMONIAL, en la revista Justitia Familiae, Revista de las comisiones nacionales PpR Familia y de Implementación de la ley N° 30364 de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Año 1, N° 1, 2016, Lima, p. 273
- RAMOS RIOS, Miguel Ángel; 2013, VIOLENCIA FAMILIAR: Protección de la víctima frente a las agresiones intrafamiliares, Grupo Editorial Lex & Iuris, II Edición, Lima.
- STEINER, Christian y URIBE, Patricia; 2014, CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, Editorial Konrad – Adenauer – Stiftung, I Edición.
- STORINI, Claudia; Efectos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los países miembros de la OEA, Revista de Derecho, No. 11, UASB-Ecuador / CEN, Quito, 2009
- Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Número 2333-2004-TC/HC, Fundamento Jurídico Número 2. La Constitución en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Sentencias Vinculadas con los artículos de la Constitución. Diálogo con la Jurisprudencia. Editorial Gaceta Jurídica. Primera Edición. Agosto, 2006.
- La Constitución en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Sentencias Vinculadas con los artículos de la Constitución. Diálogo con la Jurisprudencia. Editorial Gaceta Jurídica. Primera Edición. Agosto, 2006.
- Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, *Fiscalía Vs. Anto Furundzija*, Sentencia de 10 de diciembre de 1998, caso No. IT-95-17/1-T.
- VENTURA ROBLES; Manuel E., LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE ACCESO A LA JUSTICIA E IMPUNIDAD, artículo virtual
- VENTURA ROBLES, Manuel E, CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, texto digital.

- VIDAL FERNÁNDEZ, Fernando, 2008, Capítulo I: LOS NUEVOS ACELERADORES DE LA VIOLENCIA REMODERNIZADA, I Edición, en NUEVOS ESCENARIOS DE VIOLENCIA, coordinadora García – Mina Freire, Ana, Universidad Pontificia de Madrid, Madrid, p. 17.
- XIMENES LOPES C. BRASIL, Corte IDH (Serie C) N° 149, sentencia del 4 de julio de 2006, párrafo 127.

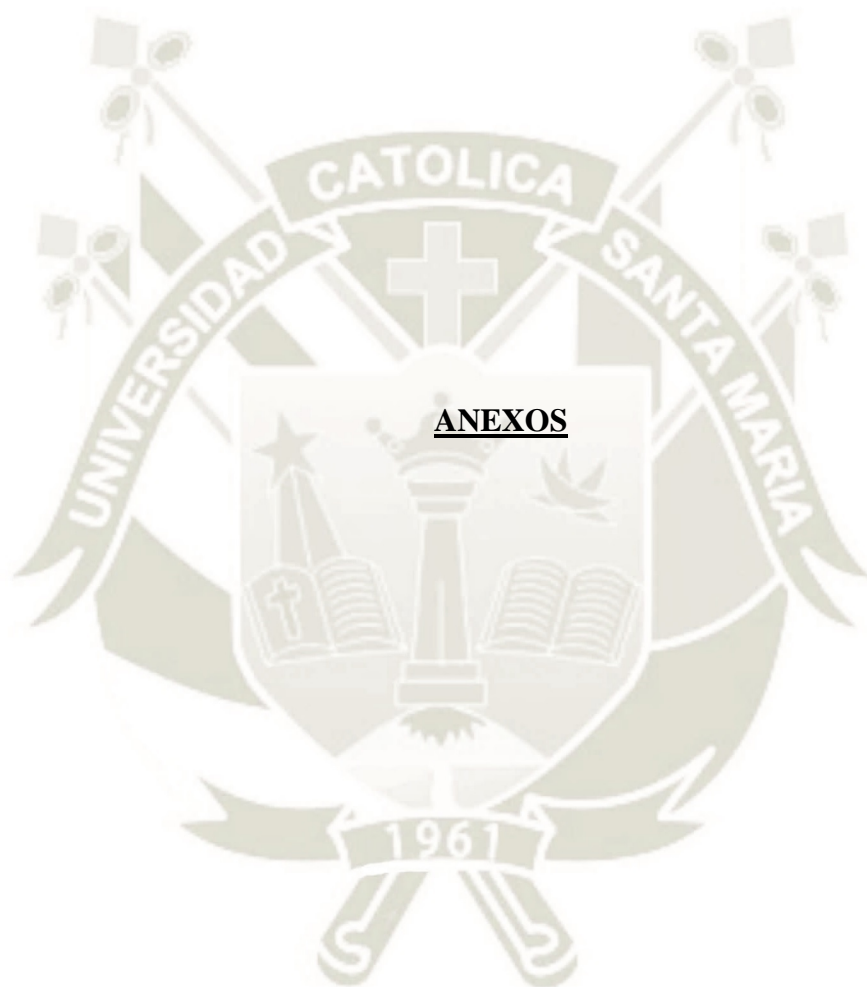


PAGINAS WEB

- Fernández- Alonso, M^a C. (Ed) (2003) Violencia Doméstica. Grupo de Salud Mental del PAPPS de la semiFYC. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo. [versión electrónica]; extraído de http://www.msc.es/ciudadanos/violencia/docs/VIOLENCIA_DOMESTICA.pdf, 2003, p. 11-12
- INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES DE URUGUAY, Articulado de la Convención de Belem do Para, extraído de http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/21718/1/1_articulado_belem_do_para.pdf
- MEJIA GUERRERO, Luz, La Comisión Interamericana de Mujeres y la Convención de Belém do Pará. Impacto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, artículo virtual, extraído de <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r30352.pdf>
- Organización Mundial de la Salud: extraído de <http://www.who.int/topics/violence/es/> 05 de diciembre del 2016 15.10
- Real Academia Española: definición de violencia y violentar: extraído de <http://dle.rae.es/?id=brhWhJl> 05 de diciembre del 2016 15.00
- Extraído de http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Violencia_Genero_Documentacion_Red_Ciudadana_folleto.pdf, 16/05/2017 23.16, p. 8
- Extraído de <http://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/3/27403/violenciadegenero.pdf>, CEPAL, VIOLENCIA DE GENERO: UN PROBLEMA DE DERECHOS HUMANOS, artículo virtual, p. 9
- Extraído de: <https://afrofeminas.com/2016/08/26/5-ejemplos-de-violencia-simbolica>, 20/05/2017, 21.00 horas
- Extraído de: <http://dle.rae.es/srv/fetch?id=OWHSjcM>
- Extraído de: <http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=tortura>
- Artículo 2 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura
- Extraído de <https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/tortura/> 20/05/2017 22.34
- Extraído de <http://igualdade.xunta.gal/es/actualidad/el-convenio-de-estambul-sobre-violencia-contra-la-mujer-entrara-en-vigor-el-1-de-agosto> 22/05/2017 22.00
- Extraído de <https://www.equaltimes.org/convenio-de-estambul-herramienta-y?lang=es> 22/05/2017 22.10
- Extraído de <http://www.africafundacion.org/spip.php?article24195> 22/05/2017 23.32

- Extraído de <https://www.awid.org/es/noticias-y-analisis/organizacion-de-las-mujeres-africanas-para-la-ratificacion-e-implementacion-del-22/05/2017> 23.35
- Extraído de <http://porfinenafrika.com/2016/05/derechos-humanos-mujeres-en-africa/> 22/05/2017 23.35





ANEXOS

Universidad Católica de Santa María

Escuela de Postgrado

Maestría en Derecho de Familia



Proyecto de Investigación:

**“TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL MARCO
DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS 2006-2015”**

Plan de Tesis presentado por:

Ponce Aguilar, Andrea Carola

Para optar el Grado de Maestra en Derecho de Familia

**Arequipa – Perú
2016**

PRESENTACIÓN

En ningún lugar se previene de manera efectiva o tan siquiera se responde a la gran variedad de daños que mujeres sufren en cuanto a su género, y sin embargo las amenazas de naturaleza física, psicológica y sexual contra mujeres y niñas están en los titulares informativos del mundo entero. Esa es la paradoja existente en el mundo que se ve plasmada en los múltiples procesos que probablemente en todos los entes de justicia tienen que ver sobre actos de violencia intrafamiliar contra mujeres y familia que terminan, en algunos casos, en delitos contra tales.

Es así que para revertir ello la comunidad internacional, ha emitido documentos para luchar por la eliminación de la Discriminación contra la mujer, siendo uno de ellos, la Convención de Belém do Pará. Y, a pesar que los Estados cumplen con hacer suya la Convención insertando normas en su legislación nacional, nos encontramos lejos que la sociedad cumpla con ellas, porque serán cambios que generacionalmente se darán siempre que eduquemos a nuestros hijos para que no cometan actos que impliquen violencia contra la mujer.

En el marco de la legislación internacional antes referida, La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió diversas sentencias haciendo prevalecer el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, donde estableció que este derecho está ligado a muchos otros más para poder conseguirlo.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido varias sentencias sobre temas de violencia contra la mujer y todas ellas necesitan ser conocidas, analizadas y comparadas para poder sistematizar su estudio y entender que la violencia contra la mujer es un común denominador en Latinoamérica, nos demuestra que la violencia tiene muchas caras y aristas, y que se intensifica ante la falta de interés de los llamados a actuar en contra de ella.

La Autora

Arequipa, Junio 2016

PLANTEAMIENTO TEORICO

1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA

“TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL MARCO DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 2006-2015”

2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA

2.1. ÁREA DE CONOCIMIENTO

2.1.1. El problema a investigarse se encuentra ubicado en:

CAMPO : Ciencias Jurídicas
AREA : Derecho de Familia
LINEA : Violencia contra la mujer

2.2. ANÁLISIS DE VARIABLES

2.2.1. *Violencia Contra la Mujer (variable asociada)*

2.2.1.1. Indicadores:

2.2.1.1.1. Tipos de Violencia contra la Mujer

Subindicador: Violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica, violencia simbólica, Circunstancias internacionales donde se cometen actos de violencia contra la mujer

2.2.1.1.2. Legislación Internacional sobre Violencia Contra la Mujer

Subindicador: Convención de Belem do Pará, Ratificación de la Convención por los países parte de la Organización de Estados Americanos, Otros Instrumentos Internacionales de prevención, sanción y erradicación de violencia contra la mujer, Legislación internacional de relevancia relacionada con la Violencia contra la Mujer

2.2.2. *Sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos*
(variable asociada)

2.2.2.1. **Indicadores:**

2.2.2.1.1. Casos sentenciados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre violencia contra la mujer entre los años 2006 al 2015:

- Penal Miguel Castro Castro vs. Perú
- Velásquez Paiz vs. Guatemala
- Gonzales y otras vs México (Campo Algodonero)
- Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala
- Espinoza Gonzales vs. Perú
- J vs. Perú
- Gelmán vs. Uruguay
- Masacre de El Mozote vs. El Salvador
- FERNÁNDEZ ORTEGA vs. México
- Perozo y otros vs. Venezuela
- Ríos y otros vs. Venezuela
- Rosendo Cantú vs. México
- Veliz Franco y otros vs. Guatemala
- Masacres de Rio Negro vs. Guatemala

Subindicadores: Países demandados, Demandantes, Las víctimas y sus familiares, Fecha de la sentencia, Fecha de los hechos de origen, Afectaciones denunciadas, Derechos involucrados, Contexto, Reconocimiento estatal de los hechos denunciados, Actos de violencia contra la mujer, Artículo de la Convención de Belem do Pará en discusión, Razonamiento, Convenciones internacionales relacionadas, Parte Resolutiva, Hecho Resaltante.

VARIABLE	INDICADOR	SUBINDICADOR
<i>Violencia Contra la Mujer</i>	Tipos de Violencia contra la Mujer	Violencia física Violencia psicológica Violencia sexual Violencia económica Violencia simbólica Circunstancias internacionales donde se cometen actos de violencia contra la mujer
	Legislación Internacional sobre	Convención de Belem do Pará, Ratificación de la Convención por los países

	Violencia Contra la Mujer	parte de la Organización de Estados Americanos, Otros Instrumentos Internacionales de prevención, sanción y erradicación de violencia contra la mujer, Legislación internacional de relevancia relacionada con la Violencia contra la Mujer
<i>Sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos</i>	Casos sentenciados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre violencia contra la mujer entre los años 2006 al 2015	Países demandados, Demandantes, Las víctimas y sus familiares, Fecha de la sentencia, Fecha de los hechos de origen, Afectaciones denunciadas, Derechos involucrados, Contexto, Reconocimiento estatal de los hechos denunciados, Actos de violencia contra la mujer, Artículo de la Convención de Belem do Pará en discusión, Razonamiento, Convenciones internacionales relacionadas, Parte Resolutiva, Hecho Resaltante

2.3. INTERROGANTES BASICAS

- 2.3.1. ¿Cómo es tratada la violencia contra la mujer en el marco de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2006 al 2015?
- 2.3.2. ¿Qué se considera como violencia contra la mujer a nivel internacional?
- 2.3.3. ¿Qué tipos de violencia contra la mujer existen y cuáles son los diversos contextos en los que pueden desarrollarse?
- 2.3.4. ¿Cómo se utiliza la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer como marco legal en las sentencias que refieren a

hechos de violencia contra la mujer en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cuáles son los aspectos jurídicos que se desprenden de tales sentencias?

- 2.3.5. ¿Cuáles son las diferencias entre las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre los años 2006 al 2015 respecto de violencia contra la mujer y cómo se resolvieron?
- 2.3.6. ¿Cuáles son las coincidencias o semejanzas entre las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre los años 2006 al 2015, respecto de violencia contra la mujer?.
- 2.3.7. ¿Cuáles son las circunstancias en las que se desarrolla la violencia contra la mujer en cada sentencia y los actores que la generaron?
- 2.3.8. ¿En las sentencias emitidas se ha logrado diferenciar entre lo que es violencia por razón de género y la violencia por razones diferentes a ello.
- 2.3.9. ¿Cómo se realiza la subsunción de los hechos de violencia contra la mujer al marco legal internacional que maneja la corte interamericana de derechos humanos

2.4. TIPO DE INVESTIGACION

La investigación será:

- a. Por su finalidad: Aplicada
- b. Por el tiempo: Longitudinal o Diacrónica
- c. Por el nivel de profundización: Descriptivo Correlacional.
- d. Tipo: Documentada, observacional y teórica

2.5. NIVEL DE INVESTIGACION: Descriptivo – Correlacional

- a. **TIPO:** Documentada Observacional y teórica
- b. **ALCANCE TEMPORAL:** 2006-2015
- c. **ENFOQUE:** Cualitativa
- d. **LUGAR** Corte Interamericana de Derechos Humanos
- e. **FUENTES:** Secundaria – Doctrina, Legislación Internacional, Jurisprudencia Internacional

3. JUSTIFICACION

3.1. Contemporaneidad: Esta investigación es contemporánea porque trata un problema humano, que tiene que ver con las mujeres y el abuso que sufren, reflejado en las diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que recibe procesos emblemáticos interpuestos por quienes se vieron privadas de justicia en sus propios países que las llevó a acudir a la Organización Interamericana de Derechos Humanos y su Corte Internacional. De tal forma que con las diversas sentencias que emite la Corte establece precedentes que en esta oportunidad serán analizados por la maestría para poder ser comparados y así identificar no solo los criterios de los Magistrados de la Corte, sino como los hechos que son materia de sentencia versan sobre circunstancias diferentes donde se atentó contra las mujeres, siendo estos de relevancia porque a través de su resolución se generan hitos jurídicos que permiten la protección de derechos, y en este caso de las mujeres en Latinoamérica.

3.2. Relevancia Académica: En este aspecto se busca realizar un análisis jurídico crítico sobre las diversas sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diez años y así establecer sus criterios, comparando los casos donde se resolvió hechos que fueron denunciados como violencia contra la mujer, siendo esta una investigación que permitirá conocer cada una de las sentencias y así entender más a fondo las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se resuelve circunstancias internacionales que permiten a futuro entender que actitudes estatales deben ser cambiadas a fin que no se repitan eventos que significaron en muchas oportunidades las muertes de mujeres. Sentencias que involucran actos de violencia contra la mujer y se encuentren en ellas, una posible modificatoria legislativa que beneficie a las mujeres peruanas.

3.3. Innovación: Asimismo, la investigación es viable porque existe la en las Américas.

3.4. Aporte Jurídico: Se va a determinar en la medida que se estudien todas las

3.5. información doctrinaria a fin de ser contrastada, se realizara la debida investigación documentaria respecto de cada una de las sentencias, al ser evaluadas en su integridad y demostrar que cada una de ellas implicó la respuesta a hechos emblemáticos ocurridos en diferentes países de Latinoamérica, además es original porque hasta ahora no se ha analizado la violencia contra la mujer desde la perspectiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos quienes tienen múltiples decisiones que necesitan ser analizadas concienzudamente para entender

que la violencia contra la mujer se da en diversos aspectos y acompañada de la contravención de otros derechos que tienen los ciudadanos latinoamericanos.

4. MARCO TEÓRICO: Conceptos Básicos

4.1. Violencia contra la Mujer: La violencia contra la mujer es un término aglutinante de todos los tipos de violencia ejercida contra este grupo de personas, siendo a menudo “consecuencia de la discriminación que sufre tanto en leyes como en la práctica, y la persistencia de desigualdades por razones de género” aunque no toda la violencia contra la mujer puede identificarse solamente por su condición de mujer, por lo que es habitual que exista cierta confusión al respecto. Esta violencia presenta numerosas facetas que van desde la discriminación y el menosprecio hasta la agresión física, sexual o psicológica y el asesinato, manifestándose en diversos ámbitos de la vida social y política. Esta manifestación del ejercicio de poder de una persona sobre otra, afecta la salud física, sexual y/o psicológica de las personas que la sufren, principalmente las mujeres y las niñas. Sin embargo, la violencia es un problema que generalmente se calla y se oculta principalmente por la propia víctima; se la instituye como práctica cotidiana, perpetuándose a través de generaciones en la crianza de las hijas e hijos; los que a su vez, la replican cuando son padres

4.2. El desarrollo de Los derechos humanos de las mujeres: Para que los derechos de las mujeres fueran .derechos humanos tuvo que producirse una transformación en muchos mundos de la ONU y del movimiento tradicional de derechos humanos: el mundo subvalorado y subfinanciado (y estructuralmente aparte) de los derechos de las mujeres /la condición de las mujeres y los derechos económicos tuvo que ser integrado y elevado; al mundo tradicional de los derechos humanos hubo que convencerlo para que adoptara un análisis desde la perspectiva de género y lo aplicara a la rendición de cuentas por parte de los estados; y el mundo del derecho humanitario, que era algo separado, tuvo que acercarse al de los derechos humanos. Y, lo más importante, hubo que desarrollar una práctica de la salud en relación a los derechos humanos y lograr que la misma fuera aceptada⁹⁴⁶.

La ONU había fracasado en cuanto a promover de manera efectiva los derechos de las mujeres, aun cuando la no discriminación por razones de sexo formó parte de la

⁹⁴⁶ Miller, Alice M, Sexualidad, violencia contra las mujeres y derechos humanos: Las mujeres exigen, a las damas se las protege, ensayo virtual,

Constitución de la ONU desde su misma creación⁹⁴⁷. Durante la Conferencia Mundial sobre la Mujeres en Nairobi, en 1985, la violencia contra las mujeres surgió como un tema importantísimo para las mujeres, pero aún así fue marginado como asunto de mujeres. A fines de los 80s confluyó el desarrollo de un discurso sobre la salud desde una perspectiva de derechos humanos que cuando se unió a los derechos de las mujeres en general y a la violencia contra la mujer en particular, fortaleció el llamado a los gobiernos para que se tomaran en serio la violencia contra la mujer. Las respuestas sanitarias se convirtieron en servicios centrales que había que brindar, como elementos de una solución a la violencia contra la mujer desde la perspectiva de los derechos.

También en los 90, la atención mundial se fijó sobre el rol que desempeñó la violación en conflictos armados de gran trascendencia (hubo otros conflictos armados que tuvieron lugar al mismo tiempo y fueron ignorados), primero en la ex Yugoslavia y luego en Ruanda, potenció las demandas de las mujeres durante la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena, en 1993, y luego también durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, en 1995, lo que llevó a victorias legales, estructurales y políticas en espacios internacionales.

Los enfoques de derechos humanos forzaron al sistema internacional de derecho humanitario a reformular la violación como forma de violencia (en lugar de considerarla un delito contra la comunidad o el honor) en el contexto de los conflictos armados. Como respuesta frente a estas compañías se generaron muchos mecanismos y normas nuevas, entre ellas la incorporación de los delitos de género en los estatutos y las prácticas de los por entonces ad hoc Tribunales para Crímenes de Guerra, la creación de una Relatoría Especial de la ONU sobre Violencia Contra las Mujeres, una Declaración de la ONU sobre la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, y la incorporación de la perspectiva de género en la definición de los delitos y en las calificaciones con que debían contar las juezas y jueces de la Corte Penal Internacional.

Tras varias décadas de movilizaciones promovidas por la sociedad civil y los movimientos de mujeres, se ha conseguido incluir la erradicación de la violencia de género en las agendas nacionales e internacionales. Nunca tantos países han contado con leyes contra la violencia doméstica, las agresiones sexuales y otras

⁹⁴⁷ Kaufman Hevener, .Derecho Internacional y el Estatus de la Mujer: Un Análisis de los Instrumentos Legales Internacionales relacionados con el Tratamiento de la Mujer,.*Harvard Women.s Law Journal* (1978)

formas de violencia. Sin embargo, continúan existiendo desafíos en la aplicación de estas leyes, resultando en una limitada protección y acceso a la justicia por parte de mujeres y niñas. Asimismo, no se hace lo suficiente para prevenir la violencia, y cuando ésta ocurre a menudo queda impune.⁹⁴⁸

4.3.El tratamiento desde los Organismos Internacionales: El 7mo Congreso de la ONU para la Prevención del Delito y el Trato a los Delincuentes estableció una relación importante entre la violencia contra la mujer y la legislación internacional de derechos humanos cuando afirmó que la violencia doméstica y la violación .ponen en riesgo el desarrollo personal y social de las mujeres y van en contra de los intereses de la sociedad. Pero hacía falta otro paso antes de que la violencia contra la mujer pudiera convertirse en un asunto de derechos humanos: hacer que el estado estuviera en posición de rendir cuentas por actos cometidos por actores no estatales. La doctrina de las obligaciones del estado (y el criterio de revisión que es la diligencia debida) que surgieron tanto en la Recomendación General 19 sobre Violencia Contra las Mujeres de la CEDAW (1992) como en la Declaración de la ONU sobre VCM (1994) se apoyaban en la noción de que es responsabilidad del estado proteger y cumplir con los derechos humanos y argumentaban que a un estado se le podía exigir que rindiera cuentas en casos de abusos cometidos por actores no estatales (como los maridos)²⁴. Aquí, una doctrina emergente en el trabajo tradicional en derechos humanos (la de la responsabilidad estatal) estaba siendo fortalecida en cuanto a su codificación, a la vez que se le agregaba una marca de género en el esfuerzo por hacer de la violencia contra las mujeres una reivindicación de derechos humanos. La voluntad política de construir una nueva doctrina de derechos humanos ya estaba presente, pero la demanda en torno a la VCM le agregó impulso a esta doctrina, aun cuando .como reclamo por los derechos de las mujeres- a la vez estaba desafiando a los marcos de referencia de los derechos a que respondieran a su demanda.

En 1993 las Naciones Unidas ratifican la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer en la que se afirma que esta violencia es un grave atentado contra los derechos humanos de la mujer y de la niña, reconociendo «la urgente necesidad de una aplicación universal a la mujer de los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres

⁹⁴⁸ ONU MUJERES: Poner fin a la violencia contra mujeres [http://www.unwomen.org/es/ what-we-do/ending-violence-against-women#sthash.Fib0UX9t.dpuf](http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women#sthash.Fib0UX9t.dpuf)

humanos»; también reconociendo el papel desempeñado por las organizaciones en pro de los derechos de la mujer, organizaciones que facilitaron dar visibilidad al problema.

Siendo la violencia contra la mujer un problema que afecta a los derechos humanos, que «constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre», ve la necesidad de definirla con claridad como primer paso para que, principalmente los Estados, asuman sus responsabilidades y exista «un compromiso de la comunidad internacional para eliminar la violencia contra la mujer».

La declaración incluye seis artículos en los que se define la violencia contra la mujer y las formas y ámbitos de esta violencia, al tiempo que enumera los derechos de las mujeres para alcanzar la igualdad y su pleno desarrollo e insta a los Estados y organizaciones internacionales a desarrollar estrategias y poner los medios para erradicarla.

En el mismo sentido, el 5 de marzo de 1995, se adoptó la «Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer: Convención de Belem do Pará ».

4.4.La Convención De Belem Do Para: La Convención de Belém do Pará desarrollada en Brasil, fue adoptada el 9 de junio de 1994 por 31 de los 34 estados que integran la Organización de Estados Americanos (OEA). En la OEA la llaman “la joya de la corona” debido a que es la única Convención que existe en el mundo sobre violencia contra la mujer. Ha significado por tanto un avance sustancial en relación a la protección de los derechos humanos de las mujeres ya que reconoce la violencia contra la mujer como un delito y una violación a los derechos humanos de las mujeres. Establece una serie de medidas jurídicas y pedagógicas dirigidas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. La Convención define como un derecho humano el “derecho a una vida libre de violencia tanto en el ámbito público como en el privado”. Su estructura es la siguiente: definiciones y marco general, listado de derechos (se reafirman derechos reconocidos en otros

tratados y se incorporan otros), mecanismos de seguimiento (Informes periódicos y comunicaciones individuales a la CIDH). Su aprobación fue fruto del esfuerzo sostenido del movimiento de mujeres a nivel mundial y regional que logró colocar en la agenda pública la temática de la violencia basada en género (VBG). Fue luego la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) quien impulsó su debate y aprobación en la OEA.⁹⁴⁹

La Convención de Belém do Pará rompe con un importante paradigma de derechos humanos, que ya había sido puesto en cuestión en el ámbito de la ONU por la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), y que reposaba en el criterio según el cual la garantía y respeto de los derechos humanos recaía principalmente en el Estado y en razón de ello, sólo el Estado hegemónica, se estaba frente a una violación de derechos humanos si y sólo si el Estado, sus agentes o particulares bajo su aquiescencia, eran los responsables directos de esta violación. En efecto, la Corte IDH había sostenido que: “de acuerdo con el artículo 1.1 de la Convención, los Estados están obligados a respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos en ella. La responsabilidad internacional del Estado se funda en actos u omisiones de cualquier poder u órgano de éste, independientemente de su jerarquía, que violen la Convención Americana”. En cuanto al deber de respeto, la Corte sostuvo de manera reiterada que: “la primera obligación asumida por los Estados Partes, en los términos del citado artículo, es la de ‘respetar los derechos y libertades’ reconocidos en la Convención. Así, en la protección de los derechos humanos, está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal”.

Como parte de estas estrategias, la Convención desarrolla un nuevo marco teórico de protección de las mujeres en la Región. Por ello, la Convención de Belén do Pará recoge el criterio sostenido por el Comité contra Todas las Formas de Discriminación de la Mujer (CEDAW), el cual desde 1992 estableció que “los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas”. En efecto, parte del diagnóstico del que surge la Convención de Belém do Pará evidenciaba que era en

⁹⁴⁹ INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES DE URUGUAY, Articulado de la Convención de Belem do Para, http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/21718/1/1_articulado_belem_do_para.pdf

la vida privada donde la gran parte de las mujeres sufría los mayores ataques a su dignidad, a través de distintas manifestaciones de violencia. De esta manera, gracias a la Convención, se trasciende el viejo concepto según el cual sólo el Estado o sus agentes violan derechos humanos y se cataloga la violencia contra las mujeres como una clara violación de derechos humanos. acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”⁹⁵⁰.

Igualmente reconoce la relación que existe entre violencia de género y discriminación, indicando que tal violencia es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, y que el derecho de la mujer a una vida libre de violencia incluye el derecho a ser libre de toda forma de discriminación y a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados

5. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS

Habiendo realizado la revisión de las tesis presentadas en la escuela de Postgrado de esta Universidad, así como en la universidad Nacional de San Agustín se aprecia que el tema es novedoso dado que no se ha tratado el tópico de la violencia contra la mujer desde la perspectiva de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sin embargo si se ha presentado diversas tesis respecto de violencia contra la mujer en varias maestrías dentro de la Escuela de Postgrado de la Universidad Católica de Santa María, siendo que en esta maestría derecho de familia se ha presentado las siguientes tesis:

- “CONSECUENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN EL MODULO BASICO DE JUSTICIA DE MARIANO MELGAR (AREQUIPA)EN EL 2004-2005”, de OVIEDO ZEVALLOS, MARIA LOURDES presentada en el año 2005
- “EJECUCION DE SENTENCIAS DE VIOLENCIA FAMILIAR EN LOS JUZGADOS DE FAMILIA DE LA CIUDAD DE JULIACA EN EL AÑO 2003

⁹⁵⁰ MEJIA GUERRERO, Luz, La Comisión Interamericana de Mujeres y la Convención de Belém do Pará. Impacto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, artículo virtual, <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r30352.pdf>

AL 2005”, de CONDORI HUISA, MARLENI ELIZABETH presentada en el año 2008

- “EL PROCESO JUDICIAL CONTRA EL MALTRATO FISICO, PSICOLOGICO Y SEXUAL DE LA MUJER EN EL PRIMER Y SEGUNGO JUZGADO MIXTO DE LA PROVINCIA DE ILO DE ENERO A JUNIO DEL 2006” de JENNY DEL CARMEN HERRERA MIRANDA, presentada en el año 2008
- “EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION FRENTE A LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LOS JUZGADOS DE FAMILIA DEL CERCADO DE AREQUIPA EN EL AÑO 2007”, de CORNEJO COA, ABEL CLETO, presentada en el año 2009

6. OBJETIVOS

6.1. OBJETIVO GENERAL : Establecer como es tratada la violencia contra la mujer en el marco de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre los años 2006 y 2015

6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- 6.2.1. Estudiar la violencia contra la mujer a nivel internacional
- 6.2.2. Analizar los tipos de violencia contra la mujer que existen y los diversos contextos en las que puede desarrollarse
- 6.2.3. Establecer el uso de la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer como marco legal en las sentencias que refieren a hechos de violencia contra la mujer en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los aspectos jurídicos que se desprenden de tales sentencias
- 6.2.4. Conocer cuáles son las diferencias entre las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre los años 2006 al 2015, respecto de violencia contra la mujer y cómo se resolvieron.
- 6.2.5. Conocer cuáles son las coincidencias o semejanzas entre las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre los años 2006 al 2015, respecto de violencia contra la mujer y cómo se resolvieron.
- 6.2.6. Identificar las circunstancias en las que se desarrolla la violencia contra la mujer en cada sentencia y los actores que la generaron
- 6.2.7. Determinar si entre las sentencias emitidas se ha logrado distinguir entre lo que es violencia por razón de género y la violencia por razones diferentes a ello.

6.2.8. Estudiar la forma de subsunción de los hechos de violencia contra la mujer al marco legal internacional que maneja la corte interamericana de derechos humanos

7. HIPOTESIS

DADO QUE en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han juzgado diversos casos en base a la Convención de Belem do Pará, e incluso existen pronunciamientos sobre hechos ocurridos antes de la Ratificación de la Convención por algunos de los Estados Denunciados;

ES PROBABLE QUE a efecto de evitar la impunidad la Corte Interamericana de Derechos Humanos se haya basado no solo en la Convención de Belem do Pará sino en otros instrumentos internacionales al tratar la violencia contra la mujer en las sentencias emitidas entre el 2006 y 2015.

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL

VARIABLE	INDICADOR	SUBINDICADOR	TECNICA	INSTRUMENTO
<i>Violencia Contra la Mujer</i>	Tipos de Violencia contra la Mujer	Violencia física Violencia psicológica Violencia sexual Violencia económica Violencia simbólica	Observación documental	Ficha bibliográfica y documental
	Legislación Internacional sobre Violencia Contra la Mujer	Convención de Belem do Pará para la Organización de los Estados Americanos Convención de Estambul para la Unión Europea Protocolo para el capítulo africano sobre derechos humanos para las mujeres africanas Declaración universal de derechos humanos sobre derechos para las mujeres	Observación documental	Ficha bibliográfica y documental
<i>Sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos</i>	Casos sentenciados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre violencia contra la mujer entre los años 2006 al 2015	Hechos Derechos involucrados Análisis de la sentencia Parte Resolutiva Comentario	Observación documental	Ficha bibliográfica y documental

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL

1. TECNICAS:

1.1. La observación Documental: La cual se utiliza para todas las variables planteadas, en la cual se considera la revisión de cada una de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre violencia contra la mujer.

2. INSTRUMENTOS

2.1. Documentales: Al revisar la bibliografía especializada en la materia de derecho de familia, legislación y jurisprudencia internacional se procederá a realizar Fichas de observación y fichas bibliográficas como las siguientes:

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE CADA SENTENCIA

Título: _____

Folios: _____

País: (Ratificación del país de la Convención Belém do Pará)

Partes:

Denunciantes: _____

Estado denunciado: _____

Fecha de la sentencia: _____

Fecha de origen de los hechos: _____

Afectaciones denunciadas: _____

Víctimas: _____

Sumilla: _____

Hechos: _____

Reconocimiento de responsabilidad internacional por el Estado:

Si: _____ No: _____ Parcial: _____

Análisis de fondo:

Derechos involucrados:

-
-

Revisión de fundamentos: Fundamentos Importantes:

Reparaciones:

Puntos resolutivos:

FICHA BIBLIOGRÁFICA

AUTOR:

1.- Apellidos:

2.- Nombres:

OBRA

1.- Título:

2.- Editorial:

3.- Año:

4.- Ciudad:

5.- Edición:

6.- Biblioteca donde se encuentra el libro:

CITA TEXTUAL

Página _____

3. CAMPO DE VERIFICACION

3.1. Ámbito: Corte Interamericana de Derechos Humanos

3.2. Temporalidad: 2006-2015

3.3. Unidad de Estudio: Las sentencias emitidas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se resolvió en base a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención Belem do Pará).

3.4. Universo: Todas las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos

4. ESTRATEGIA DE RECOPIACIÓN DE DATOS

Se empleará como técnica la observación documental, que se realizara en libros, revistas periódicos y publicaciones especializadas que se encuentran en diferentes bibliotecas locales y además se utilizara y filtrará la información contenida en Internet, a través de fichas bibliográficas, documentales y del ordenamiento sistematizado mediante carpetas en Word Microsoft Office.

Modo: La recopilación de información estará a cargo de la propia tesista.

Medios: Recurso Humano, recursos materiales (computadora, unidades de almacenamiento, etc) bienes y servicios

5. CRONOGRAMA DE TRABAJO – 2016

TIEMPO ACTIVIDADES	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre
	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
1. Elaboración y aprobación del proyecto	X X			
• Recolección de datos	X X			
• Estructuración y Análisis		X X X X		
2. Sistematización de datos			X X X X	
3. Presentación del Borrador de tesis				X X

6. GASTOS EN RECURSOS PARA LA TESIS

6.1. Impresión de sentencias para revisión y resumen: S/.120.00

6.2. Resaltadores, lápices y lapiceros: S/.10.00

6.3. Gasto de internet y energía eléctrica: S/. 50.00

6.4. Impresión y anillado de tesis para jurados: S/.150.00

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

LIBROS:

1. CASTILLO APARICIO, Johnny E.; 2016, COMENTARIOS A LA NUEVA LEY DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, Editorial Ubilex Asesores, I Edición, Lima.
2. CENTRO DE LA MUJER PERUANA FLORA TRISTÁN, MANUAL SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL, 2005, II Edición, Lima.
3. DI CORLETO, Julieta; JUSTICIA GENERO Y VIOLENCIA, 2010, Librería Ediciones, I Edición, Buenos Aires.
4. LAFONT PIANETTA, Pedro, 2009, DERECHO DE Familia: Derecho de Menores, Juventud y Discapacitados, Ediciones del Profesional Ltda., I Edición, Bogota, 2007
5. NACIONES UNIDAS, NI UNA MAS!, Secretariado general de las Naciones Unidas
6. NUÑEZ MOLINA, Waldo Francisco y CASTILLO SOLTERO, Maria del Pilar; 2014, VIOLENCIA FAMILIAR: Comentarios a la ley N° 29282, Ediciones Legales, II Edición, Lima.
7. ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, 2014, I Edición, Editorial de la Organización de los Estados Americanos, Costa Rica.
8. Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), 2014, DECLARACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS, MUJERES, Y ADOLESCENTES Y SUS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, I Edición, Editorial de la Organización de los Estados Americanos, Costa Rica
9. ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, 2007, ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN LAS AMERICAS – Comisión Interamericana de Derechos Humanos Editorial de la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos, I Edición, Washington.
10. RAMOS RIOS, Miguel Angel; 2013, VIOLENCIA FAMILIAR: Protección de la víctima frente a las agresiones intrafamiliares, Grupo Editoria Lex & Iuris, II Edición, Lima.
11. STEINER, Christian y URIBE, Patricia; 2014, CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, Editorial Konrad – Adenauer – Stiftung, I Edición.

ARTÍCULOS JURÍDICOS - HEMEROTECA:

1. Kaufman Hevener, .Derecho Internacional y el Estatus de la Mujer: Un Análisis de los Instrumentos Legales Internacionales relacionados con el Tratamiento de la Mujer, *Harvard Women.s Law Journal* (1978)
2. Miller, Alice M, Sexualidad, violencia contra las mujeres y derechos humanos: Las mujeres exigen, a las damas se las protege, ensayo virtual,
3. STORINI, Claudia; Efectos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los países miembros de la OEA, Revista de Derecho, No. 11, UASB-Ecuador / CEN, Quito, 2009
4. VENTURA ROBLES; Manuel E., LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE ACCESO A LA JUSTICIA E IMPUNIDAD, artículo virtual
5. GARCÍA RAMÍREZ, Sergio; EL DEBIDO PROCESO EN LA JURISPRUDENCIA. DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, artículo virtual

PAGINAS WEB:

1. COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, ESTÁNDARES JURÍDICOS VINCULADOS A LA IGUALDAD DE GÉNERO Y A LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS: DESARROLLO Y APLICACIÓN, Internet: www.cidh.org, 2011
2. COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, ESTANDARES JURIDICOS: IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS CONTRA LAS MUJERES, Internet: www.cidh.org, 2015
3. INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES DE URUGUAY, Articulado de la Convención de Belem do Para, http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/21718/1/1_articulado_belem_do_para.pdf
4. MEJIA GUERRERO, Luz, La Comisión Interamericana de Mujeres y la Convención de Belém do Pará. Impacto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, artículo virtual, <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r30352.pdf>

5. ONU MUJERES: Poner fin a la violencia contra mujeres <http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women#sthash.Fib0UX9t.dpuf>

